

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y
CONTABILIDAD I



TESIS DOCTORAL

**Caracterización de las prestaciones de muerte y supervivencia de la
Seguridad Social española. Reformas estructurales y paramétricas
bajo un enfoque económico-actuarial**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Daniel Hernández González

DIRECTOR

José Enrique Devesa Carpio

Madrid, 2017

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad I



**CARACTERIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE MUERTE Y
SUPERVIVENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA. REFORMAS
ESTRUCTURALES Y PARAMÉTRICAS BAJO UN ENFOQUE ECONÓMICO-
ACTUARIAL**

MEMORIA PRESENTADA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE DOCTOR

D. DANIEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

DIRIGIDA POR EL PROFESOR DOCTOR
D. JOSÉ ENRIQUE DEVESA CARPIO

Madrid, septiembre de 2015

DEDICATORIA

Mediante estas líneas quisiera dedicar este trabajo de investigación a mis seres queridos. Cada minuto empleado en este estudio ha sido un minuto menos dedicado a ellos, algo que nunca les podré compensar.

Tú, por tu parte, quisiera yo que, si no apruebas estas cosas que yo he sostenido, pienses que o bien he emprendido una obra mayor de la que se podía llevar a término, o bien que, por querer acceder a tus ruegos y por vergüenza a negarme, he cometido la imprudencia de ponerme a escribir.

El Orador. Marco Tulio Cicerón.

Recuerde el alma dormida,
abive el seso e despierte,
contemplando
cómo se *passa* la vida,
cómo se viene la muerte,
tan callando;

Coplas por la muerte de su padre. Jorge Manrique.

AGRADECIMIENTOS

También quiero dejar constancia de mi agradecimiento a todas aquellas personas que, de una forma u otra, activa o paciente, han contribuido a la realización de esta memoria; en particular a los miembros del Departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Facultad de Economía y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid por su siempre favorable disposición.

Finalmente, mi agradecimiento sincero al profesor D. José Enrique Devesa Carpio, sin cuyo apoyo continuado, orientación, crítica y amplia e intensa colaboración hubiera sido imposible que este trabajo de investigación hubiera llegado a término.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

Todas las referencias bibliográficas que tienen contenido relevante o esencial en cuanto a lo tratado en este trabajo de investigación se hallan consignadas al final del mismo, mientras que los enlaces a recursos de Internet han sido validados a fecha 1 de septiembre de 2015. Por su naturaleza y relación con los ejes principales de este estudio, otras referencias se han identificado y citado convenientemente en las notas a pie de página, separando así lo fundamental de aquello que tiene un carácter más accesorio.

A pesar de no ser un recurso eficiente de cara al estudio de las prestaciones de muerte y supervivencia, allí donde ha sido posible se han utilizado datos de la *Muestra Continua de Vidas Laborales de 2014* que facilita la Seguridad Social de España; algunos datos complementarios han sido proporcionados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a petición expresa del autor. La información estadística y económica de naturaleza histórica y presupuestaria de la Seguridad Social parte mayoritariamente del *Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2016* y, cuando procede, del Instituto Nacional de Estadística. Aunque en la aprobación presupuestaria definitiva pudieran cambiar algunos valores para los años sujetos a estimación, no se espera que los correspondientes a ejercicios pasados (hasta 2014) presenten diferencias con los aquí recogidos.

Normalmente las referencias legislativas se presentan completas en la primera ocasión en la que son mencionadas, si bien para racionalizar la exposición sus citas posteriores generalmente se realizan a través de su expresión abreviada; la mayoría de los recursos jurídicos utilizados han sido obtenidos del Boletín Oficial del Estado. En cuestión de información internacional, junto a los recursos públicos que los distintos países ponen a disposición de los investigadores, las fuentes básicas han sido la Organización Internacional de la Seguridad Social y la Comisión Europea.

El autor de este trabajo de investigación omite conscientemente algunas de las recomendaciones de la Real Academia Española por cuanto se amparan en criterios sujetos a discutidos.

En el tratamiento de datos se ha utilizado el programa *SAS® University Edition*, completado por el paquete *Microsoft Office®*.

ÍNDICE

Resumen / Abstract	Pág.	1
Introducción general	Pág.	5
Capítulo I. La Seguridad Social	Pág.	11
1. La Seguridad Social en España. Principios generales	Pág.	13
1.1. Características básicas de la Seguridad Social	Pág.	13
1.2. El modelo socioeconómico	Pág.	23
1.2.1. Financiación y sistema de protección	Pág.	23
1.2.2. La corriente de aportaciones	Pág.	35
1.2.3. La corriente de prestaciones	Pág.	40
1.2.4. El sistema en equilibrio	Pág.	49
1.2.5. La situación de la Seguridad Social en España	Pág.	51
2. Distintas aproximaciones a la Seguridad Social	Pág.	58
2.1. La Tasa de sustitución	Pág.	58
2.2. El Gasto social sobre el Producto Interior Bruto	Pág.	61
2.3. Modelos contables	Pág.	62
2.4. Las Tasas de dependencia	Pág.	64
2.5. La Productividad	Pág.	67
2.6. El Tanto interno de rendimiento	Pág.	71
2.7. La Deuda implícita	Pág.	73
2.8. El Balance actuarial	Pág.	76
2.9. El Coste por pensión unitaria y el Índice de generosidad	Pág.	78
3. Consideraciones al capítulo I	Pág.	79
Capítulo II. Las prestaciones de muerte y supervivencia en el escenario socioeconómico actual	Pág.	81
1. Las prestaciones por muerte y supervivencia en España	Pág.	84
1.1. Antecedentes	Pág.	84
1.1.1. Desde los albores hasta mediados del siglo XX	Pág.	86
1.1.2. Las bases de la Seguridad Social moderna	Pág.	91

1.1.3. Tras la Constitución Española	Pág.	98
1.1.4. El Siglo XXI	Pág.	102
1.2. Características generales. El diseño y la estructura contemporáneos	Pág.	114
1.2.1. El Régimen General de la Seguridad Social	Pág.	115
1.2.2. Otros regímenes de cobertura	Pág.	122
1.2.2.1. Régimen Especial de Autónomos	Pág.	123
1.2.2.2. Régimen Especial de los Trabajadores del Mar	Pág.	124
1.2.2.3. Régimen Especial de la Minería del Carbón	Pág.	126
1.2.2.4. Régimen Especial de los estudiantes	Pág.	127
1.2.2.5. Los empleados públicos	Pág.	128
1.2.2.6. Pensiones por actos de terrorismo	Pág.	135
1.2.2.7. El Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez	Pág.	137
1.3. Las prestaciones de muerte y supervivencia en términos socioeconómicos	Pág.	139
2. Las prestaciones por muerte y supervivencia. La experiencia en otras zonas geográficas	Pág.	151
2.1. Sistemas de protección en el entorno europeo	Pág.	151
2.2. Otros modelos de cobertura	Pág.	181
3. Las distribuciones compuestas en el marco de las pensiones de muerte y supervivencia. Aplicación de las técnicas actuariales	Pág.	202
3.1. El marco teórico	Pág.	202
3.2. Las distribuciones compuestas en la Seguridad Social	Pág.	204
4. Consideraciones al capítulo II	Pág.	210
Capítulo III. Las prestaciones de muerte y supervivencia como instrumentos de cobertura individual. Estudio y alternativas paramétricas para su reforma	Pág.	213
1. El auxilio por defunción	Pág.	216
1.1. Definición y antecedentes	Pág.	216
1.2. El auxilio por defunción en España	Pág.	217

1.2.1.	El régimen jurídico	Pág. 217
1.2.2.	Caracterización socioeconómica	Pág. 218
1.2.3.	El auxilio por defunción, ¿es una opción de futuro?	Pág. 221
2.	Las contingencias profesionales y la indemnización a tanto alzado	Pág. 228
2.1.	Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales	Pág. 228
2.2.	La indemnización a tanto alzado. Características principales	Pág. 234
3.	La pensión de viudedad	Pág. 239
3.1.	Características generales	Pág. 239
3.1.1.	Definición y ubicación en el sistema de protección	Pág. 239
3.1.2.	Los requisitos del sujeto causante	Pág. 244
3.1.3.	Los beneficiarios	Pág. 249
3.1.4.	Los requisitos del beneficiario	Pág. 254
3.2.	La cuantía de la pensión de viudedad	Pág. 258
3.2.1.	El porcentaje aplicable a la base reguladora	Pág. 259
3.2.2.	La base reguladora	Pág. 264
3.2.3.	Complementos a mínimos y límites de pensiones	Pág. 267
3.2.4.	Concurrencia de beneficiarios y compatibilidad	Pág. 269
3.3.	La reforma de la viudedad desde una perspectiva paramétrica	Pág. 275
4.	La pensión de orfandad	Pág. 280
4.1.	Características generales	Pág. 280
4.1.1.	Caracterización económica global	Pág. 280
4.1.2.	Los requisitos del sujeto causante	Pág. 284
4.1.3.	Los beneficiarios y los requisitos de acceso	Pág. 285
4.2.	La cuantía de la pensión de orfandad	Pág. 290
4.3.	La reforma de la orfandad desde una perspectiva paramétrica	Pág. 296
5.	Las prestaciones en favor de familiares	Pág. 301
5.1.	Características generales	Pág. 301
5.1.1.	Caracterización económica global	Pág. 301
5.1.2.	El sujeto causante y los beneficiarios	Pág. 305
5.2.	La cuantía de las prestaciones	Pág. 311
5.3.	La reforma del favor de familiares desde una perspectiva paramétrica	Pág. 314
6.	Consideraciones al capítulo III	Pág. 316

Capítulo IV. La reforma estructural de las prestaciones de muerte y supervivencia **Pág. 319**

1.	El factor de sostenibilidad	Pág. 322
1.1.	El factor de sostenibilidad en la Seguridad Social española	Pág. 322
1.2.	El factor de sostenibilidad y las prestaciones de muerte y supervivencia	Pág. 324
1.3.	Otros planteamientos basados en la equidad	Pág. 327
1.3.1.	Las rentas actuariales	Pág. 327
1.3.2.	Equidad en los años cotizados	Pág. 329
2.	Aportación definida: capitalización individual y cuentas nocionales	Pág. 330
2.1.	La capitalización individual de aportación definida	Pág. 330
2.2.	Las cuentas nocionales de aportación definida	Pág. 330
2.3.	Las prestaciones por muerte y supervivencia en un sistema de seguridad social de aportación definida	Pág. 336
3.	Rentas temporales y otras alternativas	Pág. 338
3.1.	Las prestaciones y las rentas actuariales temporales	Pág. 338
3.2.	Las prestaciones consumidas	Pág. 344
3.3.	Las prestaciones dentro de la unidad familiar	Pág. 347
4.	Las prestaciones no contributivas de muerte y supervivencia, ¿es posible un nuevo paradigma?	Pág. 350
4.1.	La cobertura no contributiva	Pág. 350
4.1.1.	Prestaciones no contributivas y seguridad social	Pág. 350
4.1.2.	El complemento a mínimos	Pág. 361
4.1.3.	Argumentos no contributivos financiados por la modalidad contributiva	Pág. 363
4.2.	Las prestaciones de muerte y supervivencia en el ámbito asistencial	Pág. 365
4.3.	Valoración e incidencia de la propuesta	Pág. 368
4.4.	La incertidumbre del modelo no contributivo	Pág. 380
5.	La transformación de los sistemas de financiación	Pág. 385
5.1.	Las prestaciones de muerte y supervivencia y los modelos de varios pilares	Pág. 385
5.2.	Una opción práctica dentro de un modelo de varios pilares	Pág. 394

6. Consideraciones al capítulo IV	Pág. 400
-----------------------------------	----------

Capítulo V. Conclusiones	Pág. 403
---------------------------------	-----------------

1. Conclusiones finales	Pág. 404
-------------------------	----------

2. Bibliografía	Pág. 412
-----------------	----------

Anexo I. Parámetros en el cálculo de la pensión inicial	Pág. 421
---	----------

Anexo II. La Muestra Continua de Vidas Laborales de la Seguridad Social. Tratamiento de las observaciones muestrales	Pág. 423
--	----------

Anexo III. Tipos de cambio	Pág. 443
----------------------------	----------

Anexo IV. Capitales coste para varios beneficiarios	Pág. 444
---	----------

Anexo V. Factor de sostenibilidad según la edad de entrada. Esperanza de vida	Pág. 447
---	----------

Anexo VI. Factor de sostenibilidad según la edad de entrada. Rentas actuariales	Pág. 448
---	----------

RESUMEN

Caracterización de las prestaciones de muerte y supervivencia de la Seguridad Social española. Reformas estructurales y paramétricas bajo un enfoque económico-actuarial.

Introducción

Las prestaciones públicas de muerte y supervivencia de la Seguridad Social son un instrumento de gran importancia en términos económicos y sociales. Junto a las consideraciones emocionales que implica un fallecimiento, estas coberturas hacen frente al menoscabo económico que en la unidad familiar se produce por ese hecho. Sin embargo, a pesar de su relevancia, en España no han sido convenientemente estudiadas desde una perspectiva económico-actuarial, dando lugar a un déficit en investigaciones en la materia.

El objetivo de este trabajo es múltiple: en primer lugar, caracterizar las prestaciones de muerte y supervivencia de la Seguridad Social española dotándolas de un significado socioeconómico, histórico y jurídico que se completa con una vertiente descriptiva que da cabida a nuevas posibilidades de estudio.

Frente a la tradicional orientación jurídica, se analizan las prestaciones desde una perspectiva económico-actuarial que incorpora la utilización de herramientas actuariales y el largo plazo como horizonte temporal. Estos enfoques no se establecen únicamente desde la sostenibilidad como prioridad, sino que pretenden construir una base conceptual con un diseño más coherente. Por último, se presentan propuestas de reforma paramétricas y estructurales.

En la Seguridad Social confluyen distintas fuentes de riesgo, no todas siempre reconocidas; desde un punto de vista crítico se revisan aquí aserciones generalmente aceptadas y se plantea la incorporación de herramientas actuariales como apoyo a la información para favorecer la transparencia y mejorar la toma de decisiones.

La muerte y supervivencia se muestra anacrónica e ineficiente y es necesaria su reforma para eliminar las interferencias que genera en el sistema de protección; se han evaluado sus presupuestos filosóficos y prácticos, encontrando que son causantes de distorsión y requieren una redefinición de objetivos.

Se ha valorado que la transformación de pensiones vitalicias en temporales supone un ahorro relevante: el 41,76% en valor actual actuarial para cada generación de viudedad y el 20,48% en orfandad. Igualmente se ha presentado el cambio de la estructura de financiación mediante la incorporación de un pilar solidario y se ha planteado una revisión crítica del paso de la protección hacia la modalidad no contributiva, pues aunque es importante en términos de sostenibilidad está sujeto a incertidumbre respecto a su filosofía.

Las prestaciones de muerte y supervivencia de la Seguridad Social en España requieren una adaptación a la realidad socioeconómica. Desde una perspectiva de racionalidad sus componentes asistenciales deben financiarse fuera de la modalidad contributiva y sus objetivos deben redefinirse de forma concreta e inequívoca.

El auxilio por defunción debe extinguirse pues no tiene cabida en el sistema, pudiendo ser sustituido mediante una política de intensificación de la cobertura en las cercanías del hecho causante y una indemnización a tanto alzado para contingencias comunes. La viudedad y la orfandad han de adecuar su diseño a las características de la protección, limitando sus privilegios en relación con otras prestaciones; según su naturaleza, el favor de familiares debería pasar al campo asistencial.

A pesar de su bondad en términos de sostenibilidad, no somos partidarios del traspaso total de estas prestaciones hacia la modalidad no contributiva, siendo preferible mantener su carácter contributivo y la reconversión de las prestaciones vitalicias a temporales o la modificación de la estructura de las fuentes de financiación mediante un nuevo pilar solidario.

ABSTRACT

Characterization of survivors' benefits of the Spanish social security. Structural and parametric reforms under an economic-actuarial approach.

Death and survivors' benefits of Social Security are really important in economic and social terms. Along with the emotional considerations involving a death, these coverages face the economic damage which is produced in the relatives by this fact. However, despite its importance, these benefits have not been properly studied from an economic-actuarial perspective, giving rise to a lack of research on the subject.

Different targets are sought: first, Spanish survivors' benefits are characterized and located under a socio-economic significance, a historical analysis and comparative law. Second, descriptive analysis is shown and new possibilities for study are also presented.

Although the subject has been studied under a legal point of view, we focus on economic-actuarial approaches which incorporate actuarial tools and the long-term perspective. Sustainability is not the only pursuit of the approaches, then more consistent principles and designs are looked for. With this in mind, parametric and structural reforms are presented.

Social Security is affected by different risks, not all of them really recognized. We review from a critical perspective some assertions generally accepted; actuarial tools are proposed to promote transparency and proper decision-making.

Meanwhile, it has been found that survivors' benefits are anachronistic and inefficient, so its reform is necessary in order to eliminate the interference generated in the system. Their philosophical and practical premises have been reviewed finding distortions that make new designs and alternatives especially needed.

Furthermore, transformation of annuities into temporal pensions has been evaluated and significant savings have been found: about 41.76% in actuarial present value for each new widowers group and 20.48% for the orphan's case. The most important characteristics of the transformation of the financing system structure through the incorporation of a solidarity pillar are exposed, as well. A critical review of the relocation of these benefits to the non-contributory system has been done. Although this measure is economically important and could support the Social Security sustainability, his philosophical principles are uncertain.

Spanish survivors' benefits require an adaptation to the current socioeconomic reality. Non-contributory components must be financed outside the contributory system and the targets should be redefined.

The death grant should be removed because of it is not useful. It can be replaced by a policy of intensifying coverage close to the time of person's death with a new lump sum (common contingencies). Pensions for widows and orphans have to adapt their design to the characteristics of protection, limiting the privileges they enjoy. Pension for the other relatives should be moved to non-contributory coverage.

Despite its good in terms of sustainability, we do not support the transfer of the survivors' benefits to non-contributory system. It would be preferably their maintenance in the contributory model and the conversion of lifetime benefits to temporary payments or the modification of the funding sources by introducing a solidarity pillar.

INTRODUCCIÓN GENERAL

Cuando se hace referencia a las prestaciones de muerte y supervivencia no solamente se está ante un instrumento de alta relevancia en materia económica, sino ante una herramienta que permite una redistribución de renta que se dirige a personas y familias que, independientemente del efecto en la vertiente emocional, han perdido una parte de su soporte de riqueza al desaparecer uno de los contribuyentes a la misma. Además, esto ocurre en un entorno en el que algunos de los destinatarios de la protección no tienen capacidad práctica de obtener recursos propios, unos por su corta edad y otros por su edad avanzada, por lo que el valor real de las prestaciones es realmente superior al derivado de su valoración monetaria.

Por otra parte, el modelo de protección en su conjunto está sujeto a muy diversas fuentes de incertidumbre, ya sean internas o externas, de naturaleza económica, demográfica, social o política, que no hacen sino aumentar la complejidad en la evolución de las coberturas y en su adaptación a la realidad socioeconómica del momento. Además, los riesgos que gravitan sobre la Seguridad Social presentan un amplio período de maduración a la vez que se manifiestan con desigual frecuencia e intensidad, afectando no solamente al gestor sino a los participantes en las corrientes de aportaciones y prestaciones, lo que dificulta sobremanera una gestión adecuada de los mismos; es indudable que los tiempos y las necesidades sociales evolucionan y se transforman, encontrándonos en un espacio de recursos limitado que se ve desbordado por las carencias e inclinaciones de los ciudadanos, lo que impone la revisión de los sistemas de protección en la búsqueda del equilibrio económico-financiero aunque, si es posible, con la menor incidencia negativa en los intereses individuales de las personas.

A pesar de todo ello, no es habitual que en España la comunidad científica centre sus investigaciones en las prestaciones de muerte y supervivencia de la Seguridad Social (primordialmente viudedad, orfandad y favor de familiares), estando las principales iniciativas vinculadas al campo jurídico y, dentro de éstas, especialmente dedicadas a la pensión de viudedad. Ello influye en la dificultad de disponer de un corpus bibliográfico extenso en la materia dentro las ciencias de corte económico, situación que adicionalmente se ve agravada por la ausencia de suficientes datos de carácter público que permitan dar un soporte satisfactorio a todas las cuestiones que en esta rama de conocimiento se pueden plantear.

Por otra parte, la sensibilidad que desde distintas disciplinas y corrientes de pensamiento se plantea respecto a la muerte y supervivencia se ha manifestado de forma continuada hacia el incremento de la cuantía de las prestaciones bajo el convencimiento de que los recursos son ilimitados y de que esta dinámica es muy favorable para los beneficiarios, al menos pensamos nosotros mientras ello no ejerza una presión en los precios de los bienes y servicios que los equipare con ese teórico componente positivo esperado.

Sobre este panorama general, el objetivo principal del presente trabajo de investigación es triple:

En primer lugar se pretende llenar un vacío en el campo de la investigación al centrar el estudio en las prestaciones de muerte y supervivencia de naturaleza pública dando especial cabida a aspectos y planteamientos sociales, económicos y actuariales. Se presenta un entorno descriptivo que, sistematizado y ampliado sobre la información básica más frecuente, ayuda a comprender la realidad de estas coberturas más allá de su diseño, definición jurídica y evolución histórica, presentando comportamientos y tendencias no muy tratados hasta el momento. La caracterización incluye la perspectiva básica en cuanto a la adecuación de los estudios sobre la Seguridad Social a distribuciones de probabilidad compuestas.

En segundo lugar se busca constatar la posibilidad de empleo de métodos y herramientas actuariales a la Seguridad Social española, sin que ello signifique necesariamente la transformación del sistema financiero-actuarial de financiación ni la adecuación a presupuestos de seguro privado ni la renuncia a la solidaridad, teniendo además en cuenta las limitaciones que las normas vigentes en cada momento imponen. Se defiende el uso de herramientas que parten de una filosofía actuarial y que debieran incorporarse a la metodología de trabajo y análisis por parte de las instituciones del sistema, pues sobrepasan la información que se obtiene de instrumentos de corte más clásico y son un puntal imprescindible de cara a la transparencia y la toma de decisiones. En cuanto a las prestaciones de muerte y supervivencia, se analizarán determinados problemas desde una perspectiva eminentemente actuarial, que debe ser entendida no sólo como aquella que utiliza herramientas actuariales para su desarrollo (en particular el binomio supervivencia-tiempo materializado en el riesgo), sino también la que parte de una racionalidad amparada por la equivalencia entre aportaciones y prestaciones y el reconocimiento del esfuerzo realizado por los ciudadanos. Un tercer pilar filosófico concierne a la resolución de la incertidumbre sobrepasando el concepto de liquidez y el corto plazo, esto es, incorporando dentro de la estrategia horizontes temporales superiores.

Por último, desde la confluencia de los dos pilares anteriores se presentan posibilidades de reforma de las actuales prestaciones de muerte y supervivencia en España, ya sea desde una perspectiva paramétrica (y/o eminentemente individual) o desde un enfoque estructural. Aun cuando ciertas alternativas de acción no se adecúan a nuestros planteamientos y reflexiones, también han sido incorporadas y valoradas desde distintos puntos de vista para dar así una visión más completa del escenario base de este estudio. Siendo numerosas y muy variadas las acciones que se pueden plantear (muchas menos desde las que se puede obtener una estimación económica razonable ante la ausencia de datos estadísticos suficientes y accesibles), se entiende que las reformas de las coberturas estudiadas deben partir de un planteamiento de corte deductivo, definiendo en primer lugar con exactitud y claridad el objetivo de la cobertura para, desde éste, dar cabida a las propuestas particulares que se adapten a la idiosincrasia escogida.

Junto a la definición del objetivo de las prestaciones de muerte y supervivencia como instrumento fundamental de acción, dentro del método de trabajo empleado se han seguido unos argumentos generales o filosóficos que se sintetizan en los siguientes apartados:

1. La correcta e inequívoca separación entre las posibles fuentes de financiación, con la necesidad de adscribir las coberturas a cada una de ellas según su naturaleza y función.
2. El reconocimiento de la cotización, no como un mero apunte contable a disposición o a conveniencia del legislador, sino como la representación del esfuerzo de quien realiza las aportaciones en función de un sacrificio personal que debe ser tenido en cuenta.
3. Siendo la sostenibilidad, estabilidad y suficiencia de la Seguridad Social objetivos fundamentales, los planteamientos de estudio no se han centrado únicamente en su persecución sino que, allí donde es posible, comparten la idea de la cobertura de las necesidades de los ciudadanos y el respeto al esfuerzo realizado por los mismos como funciones primordiales del sistema, buscando acciones que desde un diseño de conjunto más lógico se contrapongan a la falta de cohesión y de racionalidad actuales.
4. En el caso de la muerte y supervivencia se promueve que la protección sea más intensa en la proximidad temporal de la ocurrencia del hecho que origina el acceso a las prestaciones.

Se consideran como principales aportaciones de este trabajo de investigación, ya sea desde una perspectiva general o desde una particular:

- a) La sistematización y presentación de datos económicos y sociales acerca de las prestaciones de muerte y supervivencia que ayuden a comprender su realidad más allá de una perspectiva eminentemente jurídica, ampliando la caracterización de estas coberturas frente a las propuestas básicas más habituales.

Junto a la evolución histórica, al diseño actual y a la experiencia que se desprende de otros ámbitos geográficos, se ubican socioeconómicamente la prestación y sus beneficiarios y se aporta información sobre aspectos no abordados habitualmente, por ejemplo, la duración esperada de la cobertura, la estructura de la unidad familiar (o de apoyo) o la edad de entrada del beneficiario.

- b) La revisión de la problemática de la Seguridad Social, en general, y de la muerte y supervivencia de la Seguridad Social, en particular, desde un enfoque económico y actuarial en sentido amplio en el que interesa destacar:

- La posibilidad de interpretación de estas prestaciones en términos de distribuciones de probabilidad compuestas.
- La intensificación de la cobertura en la inmediación temporal del hecho causante, entre otras opciones, a través del uso de la equivalencia actuarial y el uso de rentas actuariales temporales. Se considera este argumento como una iniciativa que no se ha explorado con intensidad hasta el momento.

- c) La presentación de reformas paramétricas o individualizadas de las prestaciones junto a la valoración de sus efectos en términos socioeconómicos:

- La reforma íntegra del auxilio por defunción.
- La incidencia de una indemnización a tanto alzado por contingencias comunes.
- La adaptación de la pensión de viudedad a la esencia contributiva y a un entorno más cohesionado con otras prestaciones vitalicias.
- La redimensión de la pensión de orfandad.
- La revisión de los planteamientos filosóficos del favor de familiares.

- d) La presentación de reformas estructurales desde una perspectiva actuarial en sentido amplio y/o con estimaciones sobre sus efectos económicos, entre otras:
- La transformación de las coberturas vitalicias en prestaciones temporales.
 - El estudio del traspaso de la modalidad contributiva hacia la modalidad no contributiva.
 - La transformación de la estructura de financiación mediante la incorporación de un pilar solidario independiente.

El Capítulo I introduce las características más importantes de la Seguridad Social española a la vez que dota de dimensión formal a algunos procedimientos utilizados por el sistema y en su evaluación. Se presenta una perspectiva crítica sobre algunos argumentos habitualmente utilizados en el estudio del modelo de protección, defendiéndose en aras de la transparencia y la eficiencia en la toma de decisiones la incorporación de planteamientos y herramientas actuariales.

El Capítulo II revisa la situación y evolución de las prestaciones de muerte y supervivencia en España, apoyando el estudio con la realidad existente en otros países. Se estudia la situación socioeconómica vinculada a este espacio de protección, pues es conocido que la protección se incardina en un entorno cambiante de difícil evaluación. Por último, se realiza un acercamiento inicial a la Seguridad Social a partir de los presupuestos contenidos en las distribuciones de probabilidad compuestas.

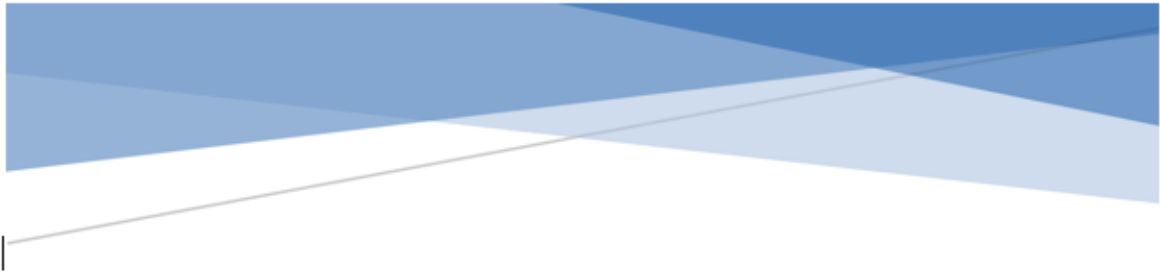
El Capítulo III incorpora el estudio crítico individual de cada una de las prestaciones (auxilio por defunción, indemnización a tanto alzado, pensión vitalicia de viudedad, pensión temporal de viudedad, pensión de orfandad, pensión a favor de familiares y subsidio a favor de familiares), presentando un escenario descriptivo que sirve para concretar propuestas de reforma de carácter paramétrico o individual que buscan una mayor lógica y cohesión de las prestaciones dentro del conjunto de la Seguridad Social.

El Capítulo IV aborda distintas propuestas de modificación de las prestaciones de muerte y supervivencia desde un enfoque estructural, haciendo especial hincapié en el papel del factor de sostenibilidad y en la redimensión de la estructura de prestaciones incorporando la equivalencia actuarial y las rentas actuariales temporales dentro de la sustitución de la estructura de pagos vitalicia por una de duración limitada. Desde un punto de vista crítico se analizan las consecuencias de una hipotética traslación de las nuevas altas hacia la modalidad no contributiva y se finaliza dando cuenta de un modelo

de actuación basado en diferentes etapas y fuentes de financiación a partir de un pilar básico de carácter solidario que presenta ciertas características de una renta básica aunque con las suficientes diferencias para que no se pueda considerar como tal.

El Capítulo V recoge las conclusiones generales y las propuestas principales de actuación. En último lugar se presentan la bibliografía y los anexos correspondientes.

Finalmente, algunas de las líneas de investigación abordadas en este trabajo de investigación se encuentran de momento limitadas por la ausencia de un soporte público y accesible de datos que permita desarrollar y contrastar con suficiente garantía los supuestos teóricos; en este escenario se encuentran, por ejemplo, la aplicación de los principios de la teoría del riesgo colectivo a la Seguridad Social o las propuestas de reforma o estudio basadas en información individual que requieran relacionar al sujeto causante con sus beneficiarios (y a éstos entre sí) como puedan ser: la adecuación del porcentaje que se aplica a la base reguladora a la intensidad de las contribuciones imputadas al trabajador o el cálculo de herramientas actuariales en muerte y supervivencia como el tanto interno de rendimiento, el coste por pensión unitaria o el índice de generosidad.



CAPÍTULO I

LA SEGURIDAD SOCIAL

-Pues como eso sea –respondió Sancho-, no hay sino encomendarnos a Dios y dejar correr la suerte por donde mejor lo encaminare.

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra.

CAPÍTULO I. LA SEGURIDAD SOCIAL

La Seguridad Social es un pilar indiscutible dentro del apoyo socioeconómico a los ciudadanos y la construcción y mantenimiento de un Estado de Bienestar. En España su acción parte de un pilar estatal, público y solidario de protección que, a pesar de su fortaleza, se ve sometido a diversos riesgos de carácter endógeno o exógeno que generan tensiones en su capacidad para cumplir con sus compromisos y obligaciones.

En este primer capítulo se presentan las características fundamentales de la Seguridad Social española y la filosofía de su funcionamiento. En general, la evolución demográfica y la situación del mercado de trabajo han sido percibidos como los riesgos más importantes que actúan directamente sobre el núcleo del modelo de protección; a su vez, una corriente ideológica parte de la base de que los problemas inherentes al sistema son de carácter coyuntural. Sin embargo, en nuestra opinión el riesgo político es el más intenso y problemático de cuantos afectan al sistema, mientras que la incertidumbre y la ineficiencia son de carácter netamente estructural, pues parten desde la misma esencia de un modelo que no ha sido capaz de adecuarse siempre con acierto a la evolución de la sociedad y que, en ocasiones, no tiene unos objetivos perfectamente definidos. La Seguridad Social debe ser sostenible en el tiempo, pero debe serlo cumpliendo con sus objetivos de protección de los ciudadanos y dentro de un escenario racional y cohesionado, pues en otro caso se promueve la manifestación de los riesgos, la elevación de su frecuencia e intensidad y se dificulta su correcta gestión.

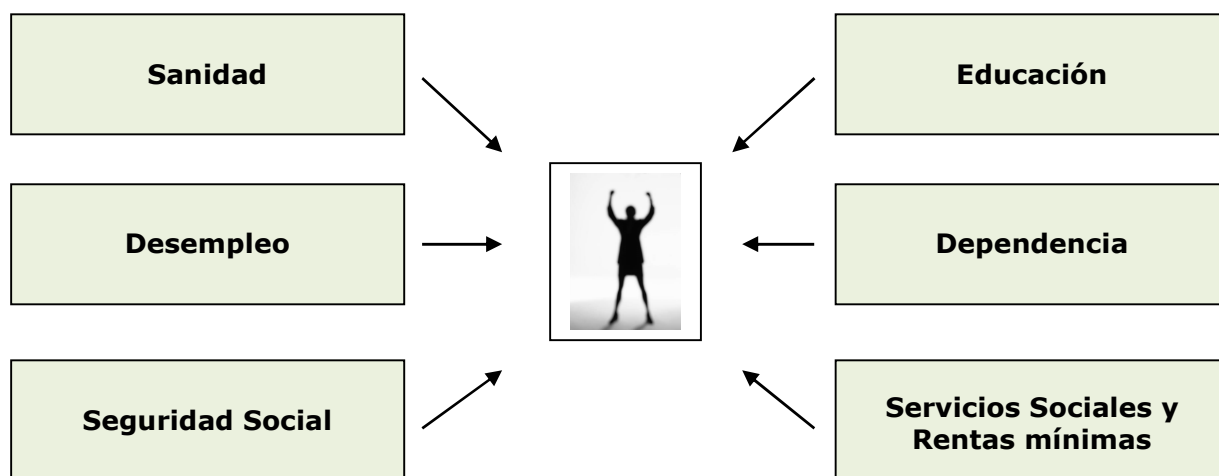
Este capítulo pretende ir más allá de su esencia introductoria y estudia algunos aspectos vinculados a los sistemas de seguridad social, revisando desde una perspectiva crítica determinados supuestos que generalmente se incorporan al debate en la materia. Por otra parte, se presentan distintas herramientas que parten de un enfoque eminentemente actuarial y que, complementando a las más habituales, son de gran relevancia para el estudio y el control de la Seguridad Social en España así como para el fomento de la transparencia y la información a los ciudadanos; por ello se considera que deben ser incorporadas a la planificación y agenda de los órganos de decisión.

1. La Seguridad Social en España. Principios generales

1.1. Características básicas de la Seguridad Social

El hombre, ya sea de forma individual o colectiva, ha buscado de manera incesante instrumentos que sean capaces de ofrecerle una protección frente a las consecuencias de la materialización de los diversos riesgos que le afectan. A grandes rasgos, definimos aquí la Seguridad Social como un sistema público de seguro articulado mediante medidas y técnicas basadas en argumentos actuariales, socioeconómicos y jurídicos que se encamina a la protección de las personas (individual, familiar o colectivamente) y que proporciona coberturas frente a los efectos de la concreción de determinados riesgos¹. Es generalmente aceptado que la Seguridad Social forma parte del concepto de *Estado del bienestar* que, con origen en el modelo de Vicente Merino, A. et. al. (2011), representamos mediante el siguiente cuadro:

Cuadro 1. El Estado del bienestar



Este esquema se define y desarrolla mediante políticas sociales de muy diversa naturaleza que ayudan a perfilar la estructura del Estado del Bienestar en cada país y a

¹ Martínez Aguado, J. (1992) definía así la Seguridad Social: "El conjunto de medidas arbitradas por el Estado con las que se trata de evitar que ésta situación, siempre presente de riesgo, llegue a convertirse en siniestro o remediar en su caso sus consecuencias, garantizando a las personas comprendidas en su campo de aplicación y a los familiares y asimilados a su cargo, la protección adecuada en las contingencias y situaciones que ampara, y procurando la progresiva elevación de su nivel de vida en los órdenes sanitarios, económico y cultural".

lograr la cohesión de sus miembros: políticas de ayuda y protección de la familia, de protección a la infancia, de atención a las personas con discapacidad, etc.²

Entre los objetivos de la Seguridad Social Barr, N. y P. Diamond (2010) citan los siguientes:

1. La creación de un sistema de ahorro mediante la redistribución del consumo a lo largo del ciclo vital y la transferencia de recursos desde el presente hacia un momento futuro.

Matizando lo expuesto por Stiglitz, J.E. (1986)³, consideramos que bajo este objetivo la Seguridad Social es un plan de ahorro obligatorio que busca que los individuos contribuyan a soportar las cargas que para el Estado tendrá la materialización de los riesgos cubiertos. Este aspecto es obviamente de gran relevancia por cuanto se ampara bajo una decisión acerca de la redistribución del consumo, decisión que no siempre recae en los propios individuos; por el contrario, les viene impuesta y no les permite decidir acerca de sus preferencias entre presente y futuro.

2. La redistribución de renta entre familias, individuos y/o generaciones

Mediante los mecanismos redistributivos del sistema se produce una transferencia de renta desde unos segmentos de población hacia otros, con el fomento del papel de la solidaridad como pilar indispensable, siendo así la Seguridad Social un mecanismo favorecedor de la cohesión social. Sin embargo, este mismo argumento, que puede parecer de indudable valor en una sociedad desarrollada, presenta a su vez rasgos comprometidos dentro del escenario en el que se mueve y en el que, según Daniels, N. (2013), se produce una "competencia por los recursos entre generaciones" y también, en nuestra opinión, entre los distintos grupos de presión que gravitan sobre el sistema. Por otra parte, la distribución de la riqueza normalmente se pretende llevar hasta el extremo del igualitarismo incondicional, sin tener en cuenta el esfuerzo realizado, dando lugar al debate entre cuál debe ser la política óptima: si la igualdad en el resultado o la igualdad de oportunidades. Por último, la redistribución de renta, si no es expuesta al

² Por ejemplo, Vicente Merino, A. (2002) cita como posibles argumentos adicionales: la protección frente a los abusos de la contratación en masa, la protección laboral, los servicios públicos básicos vinculados a la vivienda o, incluso, la protección del medioambiente.

³ "Es un plan de ahorro forzoso, que garantiza que los individuos ahorren lo suficiente para no ser una carga para el Estado en su vejez; es un plan de pensiones vitalicias indicadas (...) y es un programa redistributivo".

ciudadano con claridad y concreción y si no se explican de forma exhaustiva sus mecanismos y efectos, se convierte en un acicate para la ausencia de transparencia del sistema.

3. El aseguramiento frente a riesgos determinados

A través de este objetivo la Seguridad Social actúa como un seguro que ofrece cobertura contra las consecuencias derivadas de la materialización de los riesgos cubiertos y lo hace, principalmente, no como un sistema de previsión, sino de compensación; es decir, no hace frente directamente a los riesgos en sí, sino a sus resultados. La acción protectora es, por lo tanto, uno de los puntales fundamentales del sistema en su conjunto.

4. La mitigación de la pobreza

La Seguridad Social puede actuar como un instrumento que contribuya a reducir la pobreza de la población otorgando prestaciones a quienes se encuentran en situación de necesidad, bien entendido que en la práctica este objetivo no se circunscribe solamente a un segmento determinado de individuos y tampoco tiene en cuenta en todo momento la renta del individuo o de la unidad familiar.

5. El crecimiento económico, el fomento del ahorro y la mejora de otros sectores socioeconómicos

Es cada modelo de protección el que establece sus prioridades de entre el conjunto de objetivos posibles, si bien hay que tener en cuenta que, en la práctica y junto a los anteriormente citados, aparecen otros propósitos de carácter secundario de tal forma que, por ejemplo, se ha hecho referencia al nacimiento de la Seguridad Social no como al origen de un modelo de cobertura destinado a evitar situaciones desfavorables para el ciudadano, sino como un sistema de desactivación de conflictos sociales y revoluciones obreras⁴. Por otra parte, la finalidad de la Seguridad Social no es resolver los problemas de otros sectores socioeconómicos y así lo entienden Barr, N. y P. Diamond (2010) o Riester, W. (2011)⁵, argumento que compartimos. En estos términos, la Seguridad

⁴ Service, R. (2007). *Camaradas. Breve historia del Comunismo*. Págs. 65-66. Un ejemplo de esta dinámica en España se puede encontrar en lo acaecido durante la reconversión industrial de principios de los ochenta y las actuaciones en materia de seguridad social vinculadas; véase al efecto: Ojeda Avilés, A. (2005).

⁵ Para Barr, N. y P. Diamond (2010), pág. 112: "(...) la política de pensiones debería ser designada para proporcionar seguridad en la vejez, no para influir en las políticas que no afectan a pensiones". Para Riester, W.

Social, aun cuando pueda hacerlo, no es un instrumento directamente encaminado a la integración social de colectivos concretos, a la consecución de la igualdad entre sexos o a la mejora de la eficiencia del mercado de trabajo, pues ciertamente la prelación de estas materias es un acicate para comprometer sus principios elementales.

También se ha planteado como objetivo de la Seguridad Social el favorecer que el individuo que se encuentra en situación de pasivo (por ser perceptor de prestaciones) disponga de una renta que le permita mantener una calidad de vida equivalente a la situación que tenía durante su etapa de activo (por desempeñar una actividad profesional remunerada), opción que no compartimos, no ya por el espíritu que subyace en esta aserción, que entenderíamos positivo en líneas generales, sino por la idea de equiparar las etapas de activo y pasivo cuando, en realidad, se someten a diversas realidades y necesidades; no son, por tanto, etapas equivalentes y no hay ni necesidad ni obligación de asimilarlas.

En la Seguridad Social española es el artículo 2 del *Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social* (en lo sucesivo también *LGSS*), el que determina la finalidad de nuestro modelo de cobertura indicando que:

El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de ésta, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en esta Ley.

Este modelo contemporáneo de previsión social tiene su principal sustento teórico en el artículo 41 de la Constitución Española (CE):

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

que a su vez se completa con lo recogido en otros artículos de la Carta Magna; así, el artículo 39 CE asegura la protección de la familia, el artículo 43 CE reconoce el derecho a la protección de la salud, mientras que el artículo 49 CE contempla la existencia de

(2011): "(...) hay que solucionar los problemas ahí donde surgen, es decir, en el mercado de trabajo, y no a través de otro sistema".

políticas de atención a las personas con discapacidad. Por su parte, el artículo 50 CE dispone que:

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. (...)

Este marco constitucional deja perfectamente claro que el régimen de protección básica es de carácter público, pero simultáneamente que no tiene por qué ser único y, por ello, en la práctica y sin perjuicio del respaldo que se pueda otorgar en los niveles administrativos inferiores al estatal, la estructura del modelo español se articula mediante un primer pilar público de cobertura, la propia Seguridad Social, que se ve complementado por dos pilares de carácter privado: un pilar teóricamente voluntario de carácter profesional y un pilar realmente voluntario a través de la previsión social individual o colectiva (planes de pensiones, seguros, mutualidades de previsión social y otras formas de cobertura). Sin embargo, este mismo marco constitucional se muestra absolutamente incierto, cuando no contradictorio, en lo que se refiere a conceptos tales como: “prestaciones sociales suficientes”, “pensiones adecuadas” o “suficiencia económica”. Como ya se apuntó en Hernández González, D. *et al.* (2014a), esta falta de concreción en la Carta Magna se une a la imposibilidad de encontrar un espacio común aplicable a todo el colectivo afectado en lo que se refiere a estos términos y a su vinculación con la realidad.

Haciendo hincapié en esta cuestión, en primer lugar hay que indicar que, acorde a la literalidad de la Constitución Española, el concepto de “prestaciones suficientes” debiera tener mayor intensidad en lo que se refiere a las prestaciones por desempleo, pero también en lo que concierne a los ciudadanos que se encuentren en la “tercera edad”. Esto obliga a enfrentarse a la propia definición de *tercera edad*, de por sí un concepto claramente impreciso y cambiante con el tiempo; pero aún hay más, puesto que la redacción constitucional ya crea incertidumbre en un mismo argumento, la *suficiencia*, pues en el artículo 41 CE se orienta a todos los ciudadanos y en el artículo 50 CE lo hace únicamente respecto a esa pretendida “tercera edad”. Obviamente la redacción de este último artículo impediría plasmar una garantía para las pensiones cuyos titulares no se puedan delimitar bajo esta variable, algo difícilmente aceptable y no acorde a la práctica, por lo que lo más razonable es supeditar la misma al contenido del artículo 41 CE, resultando de ello directamente el vacío del contenido de una parte del artículo 50 CE.

Esta situación ha fomentado que la pretendida suficiencia se haya querido relacionar con la revalorización de las pensiones, tradicionalmente realizada a través del Índice de

Precios al Consumo⁶, no porque ésta sea una solución técnicamente adecuada, sino porque posiblemente haya sido la única capaz de dotar de cierto contenido conceptual a las exigencias constitucionales, aun cuando es claro que la revalorización de una pensión difiere de la definición que el ideario colectivo presenta para la suficiencia, entendida como la capacidad para hacer frente a las obligaciones existentes⁷, que no en todas las situaciones son las mismas. Como es conocido, en la práctica no todas las pensiones se causan ante situaciones de necesidad ni la revalorización garantiza la suficiencia de la prestación para hacer frente a los compromisos y necesidades del beneficiario, ni individual ni colectivamente, todo ello sin perjuicio de que cada individuo tiene una apreciación personal y marcadamente subjetiva de lo que es una situación de necesidad. Además, como expone el Tribunal Constitucional respecto a la protección y la atención a la tercera edad⁸: “*se trata de administrar medios económicos limitados para un gran número de necesidades sociales*” y “*los afiliados a la Seguridad Social no ostentan un derecho subjetivo a una cuantía determinada de las pensiones futuras, es decir, de las pensiones respecto a las cuales no se ha producido el hecho que causa*”, mientras que tampoco puede deducirse que: “*la Constitución obligue a que se mantengan todas y cada una de las pensiones iniciales en su cuantía prevista ni que todas y cada una de las ya causadas experimenten un incremento anual*”.

No hay que olvidar que es la propia realidad del sistema de seguridad social la que se evade de los criterios constitucionales, pues no se plantea las *situaciones de necesidad* como estandarte de la protección al no tenerlas en todo caso asumidas como criterio fundamental a la hora de valorar la concesión. Las prestaciones se pueden otorgar ante una situación de necesidad, pero ésta, ni es condición necesaria, ni es condición suficiente en la mayoría de las prestaciones contributivas. Con todo ello, aun cuando se pudiera hablar de prestaciones “bajas” respecto al nivel de vida existente en España y, sobre todo, respecto a los precios, son éstos los que han sufrido dentro de esta relación una intensa evolución al alza en los últimos quinquenios⁹. Si existe una degradación en la relación cuantitativa entre pensiones públicas y precios de los bienes y servicios a los que éstas hipotéticamente se dedican, más que pensar en incrementar paulatinamente el

⁶ Escenario modificado tras la aprobación de la *Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social*, mediante la introducción de este último índice en sustitución del Índice de Precios al Consumo como instrumento de revalorización de las pensiones de la Seguridad Social.

⁷ Según Monereo Pérez, J.L. (2013): “*El principio de suficiencia se mide por una mejor correspondencia entre la cuantía de la pensión y la cuantía promediada de las rentas durante el periodo de vida activa*” (pág. 384), tesis que, en nuestra opinión, no es acertada.

⁸ STC 134/1987, de 21 de julio.

⁹ Así ocurrió en los precios de los bienes y servicios tras la incorporación de España a la moneda única europea.

gasto en pensiones para reducir las distancias no habría que perder de vista la evolución de tales precios, ésta sí con tintes de irracionalidad por mucho que se quiera vincular a una dependencia de la oferta y la demanda, que a su vez se ha visto alimentada por la disponibilidad monetaria.

Respecto al concepto de pensión adecuada hay que destacar que no es una cuestión únicamente de cuantía, sino de duración, aunque la incertidumbre se mantiene en la definición de qué y cuánto se considera adecuado (y en quién determina estos conceptos), por cuanto la misma prestación puede ser “adecuada” o no dependiendo del escenario económico-social global e individual en el que se presente. Sobre esta cuestión Brimblecombe, S. (2013), además de recordar que el concepto de *adecuado* no debería definirse al margen de los bienes y servicios que se pueden conseguir a través de la prestación, pues también deberían ser *adecuados*, expone que:

Adequacy does not simply require higher benefits; at the same time, a more sustainable system does not imply that benefit amounts need to be reduced. This viewpoint is consistent with a move away from a focus on the “cost” of benefit provisions, to one where benefits are seen as an “investment” (supporting economic activity, strengthening family cohesion, and reducing inequalities and social conflict, amongst others).

Volviendo al estudio del pilar público de cobertura en España, también denominado *primer pilar* o *pilar básico*, la LGSS establece como principios generales los siguientes: *universalidad, unidad, igualdad y solidaridad*¹⁰, que a su vez actúan de forma coordinada entre ellos y que, de forma sucinta, pueden definirse de la siguiente forma:

El principio de universalidad se configura tal que todas las personas sujetas al campo de protección participan de los beneficios del sistema; esta voluntad de universalidad es palpable en la extensión del campo de cobertura establecida en el artículo 7 de la LGSS, pero no hay que perder de vista que se está ante un sistema de idiosincrasia marcadamente profesional pues la vinculación al entorno laboral es una característica de la mayor parte de quienes sustentan económicamente el modelo y de los requisitos que determinan la condición de los perceptores de prestaciones y la estructura de éstas. Respecto del principio de unidad, se suele hacer referencia a que el Estado es el titular de los recursos, obligaciones y prestaciones en un entorno coordinado que busca la eficiencia del conjunto y el cumplimiento del resto de principios fundamentales mediante un sistema de caja única, que recoge también las cuotas y los gastos del desempleo.

¹⁰ Artículo 2.1. de la LGSS.

Relacionado con este principio, corresponde al Estado, por aplicación del artículo 149.1.17 de la Constitución Española, la "legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social", mientras que los artículos segundo y cuarto de la LGSS orientan sobre la dimensión geopolítica del modelo de protección, pues la Seguridad Social española emana del Estado tanto en ordenación, jurisdicción como en inspección. El respaldo otorgado por Comunidades Autónomas o entes locales trasciende de la misma y, aun cuando pueda ser de marcado interés en la protección y cobertura de las necesidades de los ciudadanos, no es estrictamente seguridad social.

En cuanto al principio de igualdad, éste se concreta a través de la siguiente aserción: de situaciones idénticas deben dimanar idénticos derechos y prestaciones. Ahora bien, la concreción de este principio no es tarea fácil, ya que requiere delimitar en qué momento puede hablarse de igualdad y en qué momento no; partiendo de que el individuo presenta el máximo nivel de diferenciación (y no olvidemos que son individuos quienes forman parte del sistema, especialmente en su dimensión de obligaciones), la igualdad o desigualdad en términos de seguridad social no se alcanzaría más que por la pertenencia a un colectivo concreto y en relación con un aspecto determinado. Por ello, puede ocurrir que incluso las diferencias marcadas y contrastadas no se consideren como tales dentro de la Seguridad Social, por ejemplo como ocurre con la esperanza de vida entre diferentes sexos a la hora de otorgar prestaciones, mientras que esa misma variable sí se tiene como diferenciadora en la determinación de la edad de jubilación para ciertas discapacidades¹¹. Por lo tanto, la esperanza de vida sirve simultáneamente para delimitar situaciones idénticas y también circunstancias dispares.

Por su parte, ya el preámbulo de la *Ley 193/1963, de 28 de diciembre, de Bases de la Seguridad Social*, apuntaba de una forma concreta, concisa y muy acertada un principio esencial del modelo de seguridad social, la solidaridad:

Conscientes de que sin acudir a la solidaridad nacional ante las situaciones o contingencias protegidas la Seguridad Social no pasa de ser artificio técnico sin verdadera raíz comunitaria, la Ley concibe a ésta como una tarea nacional que impone sacrificios a los jóvenes respecto de los viejos; a los sanos respecto de los enfermos; a los ocupados respecto de los que se encuentran en situación de desempleo; a los vivos respecto de las familias de los fallecidos; a los de

¹¹ Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento y Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de minusvalía.

actividades económicas en auge y prosperidad, en fin, respecto de los sectores deprimidos.

que se manifiesta especialmente mediante la aplicación de la solidaridad entre generaciones, de la solidaridad dentro de cada generación y de la solidaridad territorial. Este principio, que es clave en la configuración del esquema de protección, ha sido interpretado en no pocas ocasiones a conveniencia, pues bajo una teórica sumisión al mismo se han amparado acciones de muy distinta naturaleza, intención y efectos¹².

En esencia, la solidaridad nace de una acción que el individuo promueve voluntariamente con el fin de compartir una parte de sus recursos con otras personas que carecen de ellos. Sin embargo, la solidaridad que emana de la Seguridad Social pierde esa característica de libertad para pasar a ser una imposición ejercida desde los poderes públicos y, por tanto, es un tercero ajeno a la relación solidaria quien decide cómo debe articularse la solidaridad que se ejerce entre los individuos, con qué intensidad y quiénes son sus destinatarios. Como veremos, no son siempre las personas con menos recursos las que se benefician de esta clase de "solidaridad" impuesta, llegando a situaciones en las que, sin ni siquiera ser distintas las necesidades, quienes han realizado el esfuerzo contributivo perciben finalmente del sistema menos que quienes no han hecho ningún esfuerzo en la materia. Desde la perspectiva contraria se aduce que con el actual sistema las personas con menos recursos financian a quienes más tienen, pues estos últimos tienen una mayor esperanza de vida y por tanto se beneficiarán de las correspondientes prestaciones durante un tiempo mayor, tesis a la que no somos especialmente sensibles puesto que se basa únicamente en una parte de la equivalencia que determina la relación entre aportaciones y prestaciones y no tiene en cuenta, entre otros aspectos, la garantía de las pensiones mínimas o la limitación derivada de la existencia de pensiones máximas.

Junto a estos preceptos, expresamente establecidos como fundamentales, hay también que destacar que la ordenación de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil¹³, mientras que, por otra parte, su sostenibilidad ha sido tradicionalmente desplazada hacia un segundo plano pues hasta la reforma sin plebiscito del artículo 135 de la Constitución Española¹⁴ no ha venido tal sostenibilidad a tener un lugar expreso y relevante en el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social moderna.

¹² Una muestra de la utilización de la Seguridad Social con sensibilidades diversas aparece en el *Real Decreto-ley 18/2011, de 18 de noviembre*, que exime de la denominada "cuota empresarial" a una determinada organización en el supuesto de los empleados con discapacidad.

¹³ Artículo 4.3. de la LGSS, idea ya recogida en el artículo 3.4. del *Decreto 907/1966, de 21 de abril aprobando el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social*.

¹⁴ *Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011*.

Sobre la cuestión del lucro mercantil interesa ver aquí la redacción del artículo 109 de la LGSS tras la modificación contenida en la disposición final tercera del *Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad* (sic.) *de los trabajadores*, ya que, con la entrada en vigor de esta última, la base de cotización mensual B_t^c en el instante t , uno de los argumentos que sirve para determinar el ingreso de cada individuo al sistema en ese momento, estará constituida por “la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado”, incluyéndose las aportaciones a planes de pensiones de la modalidad de empleo, algo que no se recogía expresamente en la legislación anterior. Con esta situación, que nace con un claro sentido recaudador, en la determinación de la cuantía de las pensiones públicas va a intervenir la aportación previa realizada a un sistema privado de protección. Además de la cobertura del riesgo, esta aportación habrá sustentado gastos y lucro mercantil del correspondiente fondo de pensiones, algo que en nuestra opinión no es totalmente compatible con lo indicado en el artículo 4.3. de la LGSS, con la particularidad de que la misma partida económica serviría hipotéticamente para generar derechos simultáneamente en dos sistemas que hasta ahora eran complementarios. Por otra parte, según el artículo 14.2) de la *Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades*:

Serán deducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones regulados en el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, así como las realizadas a planes de previsión social empresarial.

mientras que, por su no consideración expresa en los artículos 14 y 15 del mismo texto legal, serían deducibles de la base imponible del Impuesto de Sociedades las cotizaciones a la Seguridad Social que se imputan en origen al empleador. Por lo tanto, en el caso de la contribución realizada por el empleador a un plan de empleo, contribución que forma parte simultáneamente de la base de cotización del empleado y de los derechos de una herramienta privada de protección, se está otorgando al empleador la posibilidad de una doble deducción dentro del Impuesto de Sociedades¹⁵.

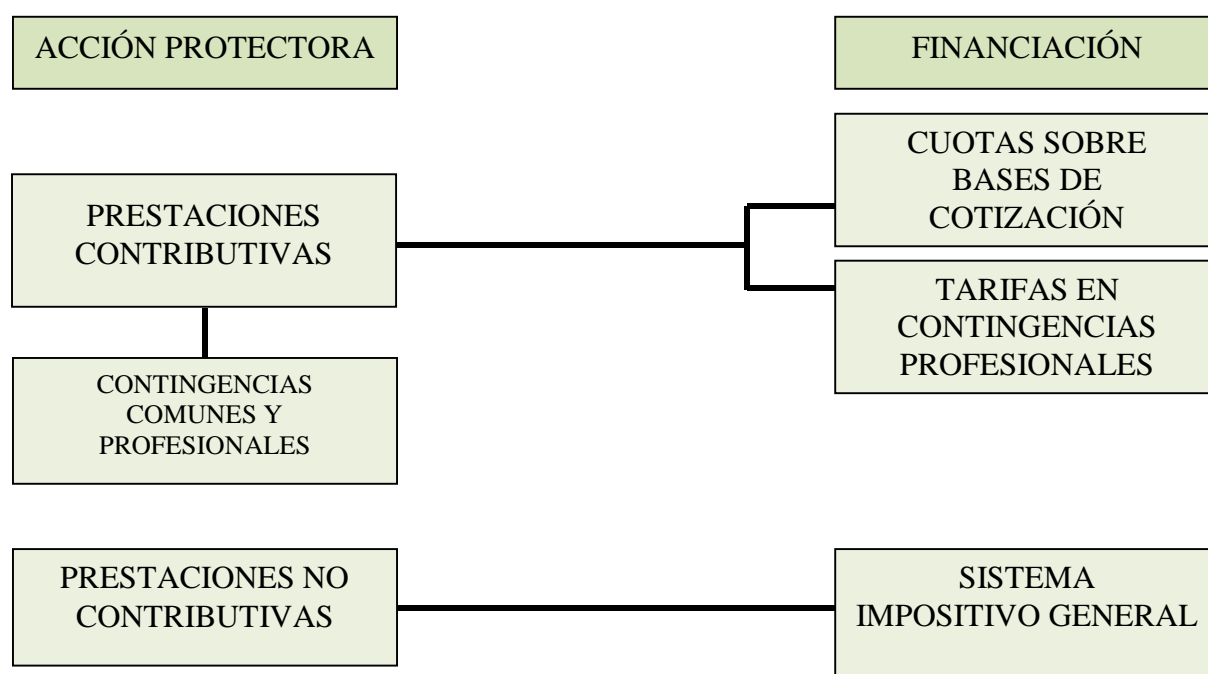
¹⁵ Sobre esta cuestión se ha solicitado información a la Administración Estatal de la Agencia Tributaria sin que se haya obtenido respuesta.

1.2. El modelo socioeconómico

1.2.1. Financiación y sistema de protección

La Seguridad Social establece una relación entre los ingresos realizados al sistema (corriente de aportaciones o financiación del sistema) y la estructura de gastos que emana del mismo (corriente de prestaciones o acción protectora del sistema). En cada instante $t \in [0, T]$ se encuentran definidos los capitales que intervienen en este modelo, estableciéndose las garantías a su cargo $\Omega(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_r)$ y los capitales financiero aleatorios $C(\omega, t)$ correspondientes a las corrientes de ingresos $I(\omega, t)$ y gastos $G(\omega, t)$.

Cuadro 2. Relación teórica general entre financiación y prestaciones



Fuente: elaboración propia.

La relación entre la acción protectora y el sistema de financiación de la Seguridad Social se concreta en dos modalidades teóricas: una contributiva, financiada principalmente a cargo de las cuotas imputadas en origen a empleadores y trabajadores, y otra no contributiva, financiada por impuestos. Sobre esta relación surge directamente una cuestión a estudio al ser necesario determinar qué se ha de entender por “contributivo” y “no contributivo” (también denominado *asistencial* o *universal*¹⁶), pues hay distintas corrientes de pensamiento para su definición y delimitación.

¹⁶ Aunque en teoría deberían ser significativas las diferencias entre el concepto de *asistencial*: “a quienes tienen necesidades que no pueden cubrir por sí mismos” y *universal*: “a toda la población”.

Una primera aproximación para definir el modelo contributivo es la defendida por Aparicio Tovar, J. (2013)¹⁷: “La contributividad (*sic.*) no quiere decir otra cosa que los sujetos obligados a hacerlo deben contribuir al sostenimiento del sistema. Las opciones son hacerlo mediante impuestos o mediante cuotas calculadas sobre los salarios”. Es decir, el modelo contributivo no sería más que la expresión de una obligación para el individuo; el individuo soporta deberes y ostenta derechos sin que tenga que existir relación directa entre ambos conceptos, primando con ello el carácter “contributivo general” en términos recaudatorios sobre un posible carácter “contributivo individual”.

Una segunda aproximación se fundamenta en la existencia de una relación entre la corriente de aportaciones y la corriente de prestaciones; tal relación puede establecerse, en lo que concierne a las pensiones iniciales P_0 derivadas de contingencias comunes, a través de la expresión general [1], desde la que se llega a los distintos casos particulares posibles.

$$P_0 = (F_1 + F_2) \cdot F_3 \cdot B_r \quad [1]$$

$$Si F_2 > 0 \rightarrow F_3 = 1$$

$$Si F_3 \neq 1 \rightarrow F_2 = 0$$

$$P_0 \in [P_{min}, P_{max}]$$

P_0 Pensión inicial por contingencias comunes

P_{min} Pensión mínima

P_{max} Pensión máxima

B_r Base reguladora obtenida a través de un número de bases de cotización B^c

F_1 Coeficiente dependiente del tiempo cotizado por el causante

F_2 Coeficiente solamente aplicable a la jubilación a una edad posterior a la edad general

F_3 Coeficiente solamente aplicable a la jubilación a una edad anterior a la edad general

Sobre los valores que toman los parámetros F_1 , F_2 y F_3 en el cálculo de la pensión inicial, véase el Anexo I; estos factores pueden agruparse en un único valor F , que permite reescribir [1] como:

$$P_0 = F \cdot B_r \quad , \quad F = (F_1 + F_2) \cdot F_3 \quad [2]$$

¹⁷ Aparicio Tovar, J. (2013): Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Sesión número 15, 1 de julio de 2013. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, número 366.

Definida la notación temporal correspondiente al mes *j*-ésimo del año *i*-ésimo, la base reguladora B_r se expresa mediante la relación entre la suma de un número de bases de cotización mensuales $B_{i,j}^c$ múltiplo de 12 (en el numerador) y un número múltiplo de 14 (en el denominador). Siendo $I_{i,j}$ el Índice General de Precios al Consumo mensual correspondiente al mes anterior al mes previo al del hecho causante (instante del que se toma la primera base de cotización que ha de ser incluida en la ecuación), la base reguladora se expresa mediante la siguiente expresión general¹⁸:

$$B_r = \left(\frac{\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{12} B_{i,j}^c}{n \cdot 14} + \frac{\sum_{i>2}^n \sum_{j=1}^{12} B_{i,j}^c \cdot \frac{I_{3,1}}{I_{i,j}}}{n \cdot 14} \right) \quad [3]$$

Año *i* , Mes *j*

Denominando F_4 a la parte de la base reguladora que no se revaloriza y F_5 a la parte que sí lo hace, puede reescribirse la ecuación [1] de forma que:

$$P_0 = (F_1 + F_2) \cdot F_3 \cdot (F_4 + F_5) \quad [4]$$

$$F_4 = \frac{\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{12} B_{i,j}^c}{n \cdot 14} \quad , \quad F_5 = \frac{\sum_{i>2}^n \sum_{j=1}^{12} B_{i,j}^c \cdot \frac{I_{3,1}}{I_{i,j}}}{n \cdot 14}$$

Respecto al parámetro F_1 existen posiciones críticas puesto que en ocasiones se indica que no recoge totalmente la esencia contributiva del modelo y no depende de las cotizaciones previas. Es cierto que F_1 no representa el montante total de cotizaciones realizadas, argumento que viene a ser recogido sólo parcialmente por la base reguladora, pero tampoco es veraz que no dependa de las cotizaciones previas pues sí lo hace de un número determinado de ellas, situación que en un mismo individuo contribuye a determinar en parte su aportación al sistema ya que, hasta los límites fijados legalmente, un mayor número de años deriva en un importe total mayor de pensión.

¹⁸ Con las particularidades correspondientes a revalorizaciones y/o mejoras en aquellas prestaciones donde así corresponda.

En cuanto a la variación de la pensión inicial según los parámetros que sirven para su cálculo en [4], las correspondientes derivadas no resultan en valores negativos, siguiendo el valor de aquélla el sentido de dichos parámetros.

$$\begin{aligned}\frac{\partial P_0}{\partial F_1} &= \frac{\partial P_0}{\partial F_2} = [F_3 \cdot (F_4 + F_5)] \geq 0 \\ \frac{\partial P_0}{\partial F_4} &= \frac{\partial P_0}{\partial F_5} = [F_3 \cdot (F_1 + F_2)] > 0 \\ \frac{\partial P_0}{\partial F_3} &= [(F_4 + F_5) \cdot (F_1 + F_2)] \geq 0\end{aligned}\tag{5}$$

Por su parte, la base reguladora es, en su expresión general [3], un promedio que actúa como estimador de la estructura de cotizaciones realizadas por los legalmente obligados al pago, si bien estamos ante un estimador sesgado puesto que únicamente recoge una parte de las bases de cotización utilizadas durante toda una vida laboral. Una particularidad de la base reguladora es que incorpora un número de mensualidades sin actualizar, sea cual sea el número total de años tomado como referencia en el cálculo, quizás porque el legislador entiende que estas bases de cotización no sufren depreciación en el plazo citado, algo que obviamente no es cierto y que introduce distorsiones innecesarias en la operación. Se produce así cierta pérdida del poder adquisitivo de los beneficiarios sin que hoy día se aprecie el sentido de esta acción, especialmente cuando los datos sobre índices de precios son ofrecidos con razonable celeridad por los organismos públicos competentes.

Pues bien, hecho este inciso necesario y retomando la cuestión inicial sobre la definición de la modalidad contributiva, ésta no es en nuestra opinión el equivalente a una mera obligación y se ha de entender indudablemente en el ámbito de la equidad y de la relación entre aportaciones y prestaciones¹⁹, relación que por otra parte no es total y se encuentra supeditada a la solidaridad que imponen los límites mínimos y máximos en las prestaciones²⁰. Y defendemos esta opción porque, en otro caso, se estaría aplicando un

¹⁹ Relación entendida desde un punto de vista filosófico. En la práctica la aportación parte de una base de cotización a la que se aplica un tipo de cotización que no aparece explícitamente en la expresión de cálculo de la pensión inicial [4].

²⁰ El Tribunal Constitucional (por ejemplo, STC 21 de mayo de 1987) ya mantuvo que las prestaciones de la Seguridad Social no se corresponden proporcionalmente a las contribuciones imputadas durante el período de cotización, "aun cuando en un sistema parcialmente de tipo contributivo no pueda excluirse una correlación entre contribuciones y prestaciones), pues es trascendental el principio constitucional de cobertura de la necesidad –que en la práctica, sin embargo, no siempre es predominante- pero teniendo en cuenta "el contexto

régimen de solidaridad que capacita que sea un tercero, el legislador, el que pueda establecer a conveniencia la transferencia de rentas entre individuos y la capacidad de participación por parte de éstos, fomentándose la intensificación del riesgo político y que quienes no han contribuido al sistema se encuentren en mejor posición que aquellos que han participado con su esfuerzo personal, incluso cuando los recursos de estos últimos son inferiores a los de aquéllos, algo que no parte de un concepto de verdadera solidaridad ni de la esencia de un sistema de seguridad social eficiente. En cualquier caso, en la práctica es bien cierto que la separación entre ambas modalidades, contributiva y no contributiva, no es siempre tan nítida como debiera pues, como veremos al adentrarnos en las prestaciones de muerte y supervivencia, existen coberturas de marcado carácter no contributivo que se amparan y desarrollan dentro de un modelo financiado con contribuciones de seguridad social.

Aunque la Carta Magna habla de la protección de situaciones de necesidad a través de la Seguridad Social, no obliga a que mediante su acción se otorgue protección únicamente a tales situaciones, habiendo sido necesario para desarrollar el vigente modelo de cobertura acudir al concepto un tanto ambiguo de “presunción de necesidad”, aun cuando tal presunción tampoco representa sin fisuras la verdadera situación de los beneficiarios. Esto no quiere decir que la modalidad contributiva no cubra situaciones de necesidad; lo hace, posiblemente en la mayoría de ocasiones de forma eficiente y, en general, con una igualdad de trato en todo el territorio nacional. Pero, de igual forma, también da cobertura a situaciones que no tienen que ver con dicha necesidad o su presunción, siendo la pensión de viudedad un buen exponente de ello merced, entre otras características, a un régimen favorable de compatibilidad de rentas.

Con todo lo expuesto con anterioridad, se quiere decir que el modelo contributivo requiere una relación entre las aportaciones realizadas al sistema y las posibles prestaciones del mismo (asumiendo equidad frente a un mero proceso de redistribución de rentas), valorando positivamente tal relación sobre otros elementos como la solidaridad que, por otra parte, es siempre tenida en cuenta en detrimento de la equidad absoluta. En definitiva, el modelo contributivo, por su propia naturaleza, no se basa en situaciones de necesidad ni en el artificio de presunción de las mismas, sino en la existencia de unas cotizaciones previas realizadas durante un tiempo determinado. Por otra parte, frente a la interpretación general en la que el artículo 41 CE es aplicable a la Seguridad Social en su conjunto, surge una alternativa más restrictiva en la que se da cumplida respuesta al requerimiento constitucional a través la modalidad no contributiva

general en que se produzcan, y en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos sociales. (...)”.

(régimen público de seguridad social que garantiza prestaciones “suficientes” para todos los ciudadanos), quedando la modalidad contributiva al margen de tales criterios.

Dentro de la corriente de aportaciones una nueva cuestión a examen versa sobre la naturaleza de las contribuciones ingresadas en el sistema pues, en teoría y mediante el sistema legal vigente, se definen separadamente en origen como *aportaciones del empleado y aportaciones del empleador*, siendo todas ellas imputadas en destino al empleado. Estas contribuciones constituyen un coste salarial para el empleador, quien soporta las mismas a cargo de su presupuesto, y son rentas brutas del trabajo pues forman parte de lo que está dispuesto a pagar el empleador a cambio de los servicios del empleado por lo que, en palabras de Argandoña, A. *et. al.* (2013): “en realidad, las pagan los trabajadores”. Desde esta perspectiva, a la que somos sensibles, las cotizaciones se imputan en origen a distintas personas –físicas y/o jurídicas- aun cuando son “pagadas” finalmente por una de ellas, el empleado, quien, sin embargo, no puede deducírselas totalmente en su impuesto personal pues la mayor parte es deducida por el empleador en su propio impuesto. Para observar mejor esta dinámica pueden compararse las partidas anteriores con la parte salarial que se retiene en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que al igual que las cuotas por seguridad social también supone un coste salarial, forma parte de la renta bruta del trabajo, no es percibida por el empleado y éste se la puede deducir en la correspondiente declaración del impuesto. Las preguntas son, entonces, inmediatas: ¿dónde se encuentra la diferencia práctica entre ambos conceptos, *aportación empresarial a la Seguridad Social y coste salarial por impuesto sobre la renta*? ¿Únicamente en la persona que se las puede deducir según la legislación o en el destino? No parece motivo suficiente para defender la heterogeneidad y sí un nuevo apoyo a las consideraciones realizadas sobre la naturaleza del pagador real de las comúnmente denominadas “aportaciones empresariales a la Seguridad Social”.

El modelo de financiación de la Seguridad Social española para todos los regímenes en la modalidad contributiva es el sistema financiero-actuarial de reparto²¹. Aunque no queda expresamente definido legalmente qué modelo de reparto es el aplicable, la dinámica tradicional articulada en la práctica permite interpretar que se está ante un sistema de reparto simple anual (o reparto puro)²² en el que los ingresos de cada ejercicio hacen

²¹ Artículo 87.1 de la LGSS.

²² La excepción a la regla general se recoge en el artículo 87.3 de la LGSS y corresponde a la *capitalización* de las pensiones causadas en materia de incapacidad permanente o muerte derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional que deban ser asumidas por las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social o las empresas declaradas responsables. Esta *capitalización* da lugar a la aplicación de la equivalencia actuarial y a un capital coste como valor actual actuarial de las prestaciones según las hipótesis técnicas actuariales

frente a los gastos del mismo, si bien en la realidad no se está exactamente ante un sistema de este estilo puesto que sobre él gravita un fondo de estabilización único para atender posibles desviaciones entre ingresos y gastos, el Fondo de reserva²³, y en teoría los sistemas de reparto puro anuales no dan lugar a la constitución de tales reservas. Es, pues, un sistema de reparto simple anual ciertamente impropio. Desde un punto de vista evolutivo, nótese las relaciones y diferencias de este modelo con el recogido en el artículo 52 del *Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobando el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social*:

1. Salvo las excepciones que puedan establecerse en las normas reguladoras del Régimen General y de los Especiales a que se refieren la presente Ley, el sistema financiero de la Seguridad Social será de reparto y su cuota revisable periódicamente. Se constituirán los correspondientes fondos de nivelación mediante la acumulación financiera de las diferencias anuales entre la cuota media y la natural prevista.
2. En los casos en que la naturaleza de las prestaciones así lo requiera, se constituirán, asimismo, fondos de garantía para suplir posibles déficits de cotización o excesos anormales de siniestralidad.
3. En materia de desempleo y accidente de trabajo se adoptarán los sistemas de financiación que sus características exijan. Por lo que se refiere a accidentes de trabajo, podrá establecerse, reglamentariamente y con carácter obligatorio, un régimen de reaseguro o cualquier otros sistema de compensación de resultados, así como el sistema financiero de capitalización de las pensiones causadas por invalidez permanente o muerte, con sujeción al cual las Entidades Gestoras o las Mutuas Patronales que colaboren en la gestión deberán constituir en el Servicio Común de la Seguridad Social que en su caso se determine, los correspondientes capitales.

así como también con lo expuesto en la *Orden de 2 de febrero de 1940, dictando normas para la aplicación de la Ley de 1 de septiembre de 1939, que establece un régimen de subsidio de vejez, en sustitución del régimen del retiro obrero*:

El sistema financiero del régimen obligatorio de subsidios de vejez será el de reparto, reforzado con reservas que aumenten su estabilidad y solvencia. Las reservas serán dos: una para atender a la fluctuación de valores, y otra para remediar el posible desequilibrio entre los ingresos y el coste de las obligaciones y

establecidas en el momento de cálculo, sin que por el contrario quede reconocida contablemente la existencia de las reservas matemáticas que teóricamente se originarían por la aplicación de este sistema financiero-actuarial de reparto de capitales de cobertura.

²³ Creado por la *Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social*.

facilitar el paso del sistema de reparto de pensiones al de cobertura de capitales o al de cobertura de derechos en curso de adquisición.

Por otra parte, frente a los *sistemas de aportación definida*, donde la esencia que rige el modelo parte del establecimiento del mecanismo de aportaciones quedando la incertidumbre definitoria en la corriente de prestaciones, el modelo de la Seguridad Social española es de *prestación definida*, de tal forma que su esencia surge del establecimiento del sistema de prestaciones, quedando la incertidumbre en la corriente de aportaciones necesarias para hacer frente a aquéllas.

Si se asume la actuación bajo un sistema financiero-actuarial de reparto simple anual, bajo la perspectiva de un horizonte temporal ilimitado los ingresos I_t realizados por el colectivo en cada ejercicio hacen frente a los gastos G_t acaecidos en el mismo, para lo cual en el modelo de prestación definida se fija anualmente un tipo de cotización θ_t , aplicable a los salarios o bases salariales (o de cotización) correspondientes tal que, de una manera intuitiva y obviando el efecto del tiempo sobre los capitales dentro de cada período, el equilibrio sería:

$$\theta_t = \frac{G_t}{I_t} \quad [6]$$

Thullen, P. (1974) expone sobre esta dinámica que: “cada una de las generaciones existentes debe, por así decirlo, satisfacer las cargas de las pensiones de las generaciones precedentes, esperando que algún día sus propias pensiones sean cubiertas por las generaciones futuras”. En palabras de Devesa Carpio, M.M. (2007): “una de las características más importantes de este sistema es que las prestaciones causadas no quedan financiadas totalmente en el momento en que se producen (...) existe un contrato intergeneracional implícito permanente, en virtud del cual, a cambio de las aportaciones que los trabajadores realicen durante su etapa activa, recibirán una pensión pagada por los que estén en activo en cada momento”. Para Argandoña, A. *et al.* (2013), los sistemas de reparto son “sistemas de ahorro no capitalizados cuyo funcionamiento se basa en el poder coercitivo y en la garantía del Estado” y uno de sus problemas sería que “están completamente invertidos en un territorio determinado y, por lo tanto, están expuestos a las circunstancias demográficas y económicas por las que atravesase ese territorio”.

Nieto de Alba, U. y J. Vegas Asensio (1993) parten de un colectivo con estructura demográfica según la edad ($x, x+1, \dots, x+r-1$) y una edad de jubilación ($x+r$), un número

de personas de cada edad al comienzo de la actividad $(l_x, l_{x+1}, \dots, l_{x+r-1})$ y unos salarios medios por edad $(W_x, W_{x+1}, \dots, W_{x+r-1})$ desde los que, mediante una fracción F aplicada al salario final W_F , puede definirse la correspondiente prestación. Asumiendo como hipótesis la estabilidad económica (principalmente que los salarios promedio se mantienen constantes en el tiempo) y la estabilidad demográfica (que el número de personas a cada edad x es constante en el tiempo), se establece la relación entre ingresos y gastos del ejercicio²⁴ mediante las siguientes equivalencias:

Primer año de funcionamiento del sistema:

$$\underbrace{\theta_1 \cdot \sum_x^{x+r-1} W_h \cdot l_h}_{\text{Aportaciones}} = \underbrace{(F \cdot W_F) \cdot l_{x+r}}_{\text{Prestaciones}}$$

$$\theta_1 = \frac{(F \cdot W_F) \cdot l_{x+r}}{\sum_x^{x+r-1} W_h \cdot l_h}$$

Segundo año de funcionamiento del sistema:

$$\theta_2 = \frac{(F \cdot W_F) \cdot l_{x+r} \cdot (1 + p_{x+r})}{\sum_x^{x+r-1} W_h \cdot l_h}$$

p_{x+r} Probabilidad de que una cabeza de edad $x+r$ viva 1 año más

N-ésimo año de funcionamiento del sistema:

$$\theta_n = \frac{(F \cdot W_F) \cdot l_{x+r} \cdot (1 + p_{x+r} + \dots + {}_{n-1}p_{x+r})}{\sum_x^{x+r-1} W_h \cdot l_h} =$$

$$= \frac{(F \cdot W_F) \cdot l_{x+r} \cdot (1 + e_{x+r})}{\sum_x^{x+r-1} W_h \cdot l_h} \quad [7]$$

e_{x+r} : Esperanza de vida a la edad $x+r$.

tal que $\theta_1 < \theta_2 < \dots < \theta_n$ y el tipo de cotización sería constante cuando ${}_n p_{x+r} = 0$.

²⁴ Nótese que, en la práctica, los ingresos imputables en destino al empleado surgen de las bases de cotización, no de los salarios, pudiendo establecerse una relación entre ambos conceptos tal que $B_t^c = \mu_t \cdot W_t$. Los gastos totales del sistema también presentan en realidad unas cuantías diferentes a las recogidas en esta equivalencia.

Bajo estas premisas, un tipo de cotización adecuado de cara al equilibrio financiero actuarial del sistema debería tener en cuenta el número de personas l_{x+r} con derecho a una pensión, la cuantía de dicha pensión (aquí expresada como un porcentaje del salario final $(F \cdot W_F)$), la estructura temporal de pagos esperados correspondientes a la pensión medida a través de la esperanza de vida e_{x+r} y la estructura de ingresos de los activos en el ejercicio. Sin embargo, y sin perjuicio de que las probabilidades de supervivencia para una misma edad x varíen con el tiempo, la realidad es que las hipótesis de estabilidad económica y demográfica en las que se basa el sistema de reparto simple anual se ven sometidas a diversas presiones que dificultan su cumplimiento.

En cuanto a la estabilidad económica, fijado un índice de variación de las prestaciones β y un índice γ de variación anual promedio de los salarios (o bases de cotización), se tendría un nuevo tipo de cotización θ_n^* tal que:

$$\theta_n^* = \theta_n \cdot \frac{(1 + \beta)}{(1 + \gamma)} \quad [8]$$

Cuadro 3. Magnitudes económicas en España

Año	Coste salarial total bruto	Salario Mínimo Interprofesional	Revalorización Pensiones	Pensión media Jubilación	Pensión Media Total
2008	29.609,80	600,00	4,10%	822,24	725,88
2009	30.670,05	624,00	2,40%	862,55	760,68
2010	30.819,53	633,30	1,00%	893,21	786,51
2011	31.170,06	641,40	1,30%	923,74	811,42
2012	30.905,55	641,40	1,00%	956,36	837,02
2013	30.844,49	645,30	2,00%	988,45	862,74
2014	30.653,05	645,30	0,25%	1.008,73	877,30

Variación %	Coste salarial total bruto	Salario Mínimo Interprofesional	Revalorización Pensiones	Pensión media Jubilación	Pensión Media Total
2009 - 2008	3,58%	4,00%	-41,46%	4,90%	4,79%
2010 - 2009	0,49%	1,49%	-58,33%	3,55%	3,40%
2011 - 2010	1,14%	1,28%	30,00%	3,42%	3,17%
2012 - 2011	-0,85%	0,00%	-23,08%	3,53%	3,15%
2013 - 2012	-0,20%	0,61%	100,00%	3,36%	3,07%
2014 - 2013	-0,62%	0,00%	-87,50%	2,05%	1,69%

Fuente: *Encuesta anual de Coste Salarial*. Instituto Nacional de Estadística. *Anexo al informe Económico-Financiero. Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 2016*. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Nótese que en diversos ejercicios la revalorización ha sido distinta según la clase de pensión o su cuantía. Importes en Euros.

Cuadro 4. Tipos de cotización en el Régimen General. Contingencias comunes

Año	Tipo imputado al empleado	Tipo imputado al empleador	Tipo total
1984 - 1992	4,80	24,00	28,80
1993 - 1994	4,90	24,40	29,30
1995 - 2015	4,70	23,60	28,30

Fuente: *Anexo al informe Económico-Financiero. Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 2016.* Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Porcentaje.

Cuadro 5. Bases de cotización y cuotas por aplicación del tipo general. Régimen general

Año	Base mínima	Var %	Cuota mínima	Base máxima	Var %	Cuota máxima
2005	598,50		169,38	2.813,40		796,19
2006	631,20	5,46%	178,63	2.897,70	3,00%	820,05
2007	665,70	5,47%	188,39	2.996,10	3,40%	847,90
2008	699,90	5,14%	198,07	3.074,10	2,60%	869,97
2009	728,10	4,03%	206,05	3.166,20	3,00%	896,03
2010	738,90	1,48%	209,11	3.198,00	1,00%	905,03
2011	748,20	1,26%	211,74	3.230,10	1,00%	914,12
2012	748,20	0,00%	211,74	3.262,50	1,00%	923,29
2013	753,00	0,64%	213,10	3.425,70	5,00%	969,47
2014	753,00	0,00%	213,10	3.597,00	5,00%	1.017,95
2015	756,70	0,49%	214,15	3.606,00	0,25%	1.020,50

Fuente: *Anexo al informe Económico-Financiero. Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 2016.* Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Euros.

Para poder obviar la hipótesis de estabilidad económica y mantener el tipo de cotización constante en el tiempo sería necesario que $(\beta - \gamma) \cong 0$. Sobre los datos anteriores surgen dudas para prescindir de la hipótesis de estabilidad económica si se trabaja con salarios (y entonces debiera ser tenida en cuenta la diferencia entre variaciones de prestaciones y salarios de cara a la modificación del tipo de cotización), si bien en la comparación de la variación del coste con la de las bases máximas y mínimas de cotización para el período 2009-2014 los datos son menos concluyentes.

En cuanto a la estabilidad demográfica, sobre la base de la expresión [7] la disminución de la relación entre personas activas y pasivas (sin una adaptación en las partidas económicas que tuviera el mismo efecto) requeriría la variación del tipo de cotización del sistema de reparto para compensar la desviación en la ecuación de equilibrio si bien, como se desprende de los datos contenidos en las tablas anteriores, θ ha sido prácticamente homogéneo en cada instante t y las variaciones han venido de las bases de cotización.

También sobre la filosofía contenida en [7] y bajo el cumplimiento de determinadas hipótesis, entre ellas que el crecimiento de los ingresos por cotizaciones es igual a la variación de los costes, Sáez de Jáuregui Sanz, L.M. (2013) llega a la conclusión de que el sistema de reparto puro es equivalente para el beneficiario al sistema de capitalización de prestación definida, dando lugar a la expresión:

$$\theta_n = \frac{(F \cdot W_{x+r-1})}{W_0} \cdot \frac{{}_r p_x \cdot (1 + e_{x+r})}{(1 + e_x^a)} \quad [9]$$

e_x^a Años esperados de cotización a la edad x

${}_r p_x$ Probabilidad de que una persona de edad x alcance con vida la edad $x+r$

En definitiva, el modelo actual de la Seguridad Social se basa en la solidaridad y la transferencia de recursos entre generaciones y, como se indica en Hernández González, D. (2011b):

Desde una perspectiva financiero-actuarial esta alternativa no establece garantías económicas para los pasivos por cuanto sus prestaciones en un periodo determinado dependen de la necesaria aportación de los activos en ese espacio temporal y no asegura la disponibilidad de las cuantías necesarias para afrontar el gasto de Seguridad Social. Puesto que una de sus hipótesis de partida es la existencia de una estructura demográfica estable, el sistema de reparto simple anual tiene una alta sensibilidad a la evolución demográfica del colectivo objeto de cobertura y a la relación existente entre sus activos y pasivos, dando lugar a la asunción de riesgos demográficos y económico-financieros por parte del Estado como gestor y responsable del pago de las prestaciones, presentándose también riesgos económicos y políticos que afectan a quienes financian el sistema o son beneficiarios del mismo.

Ahora bien, algo que normalmente no se tiene en cuenta es que, junto a las hipótesis e incertidumbres económica y/o demográfica, un teórico desequilibrio de la Seguridad Social también depende del parámetro F en la ecuación [7], reflejo de la estructura normativa que establece las características de las prestaciones, que se puede relacionar con el salario final pero que no presenta un valor obligado por el propio sistema de reparto, sino que depende de la acción, elección y arbitrariedad del legislador. Esto es, la adopción de un sistema de reparto puro simple no impone la estructura y la intensidad de la corriente de prestaciones, ni determina las características de la acción protectora, por lo que el desequilibrio en el diseño de la misma es tan importante como cualquiera de las hipótesis planteadas y su inadecuación a la realidad del sistema es una de las

causas del nacimiento de la incertidumbre. El modelo teórico desde el que parte un sistema de reparto simple anual no decide por sí mismo sobre el porcentaje de la base reguladora que se aplica en el cálculo de una pensión o la existencia de porcentajes especiales, ni sobre las bases de cotización que se proponen cada año, el modelo de revalorización, sobre las normas de compatibilidad ni, por ejemplo, sobre la existencia de pensiones máximas o mínimas. Tampoco propone que prestaciones de carácter asistencial sean financiadas con cargo a fondos obtenidos de una modalidad contributiva. Así, en teoría se supone la racionalidad implícita del sistema de cobertura, pero esto es algo que, como se verá en este estudio, dista de ser una realidad.

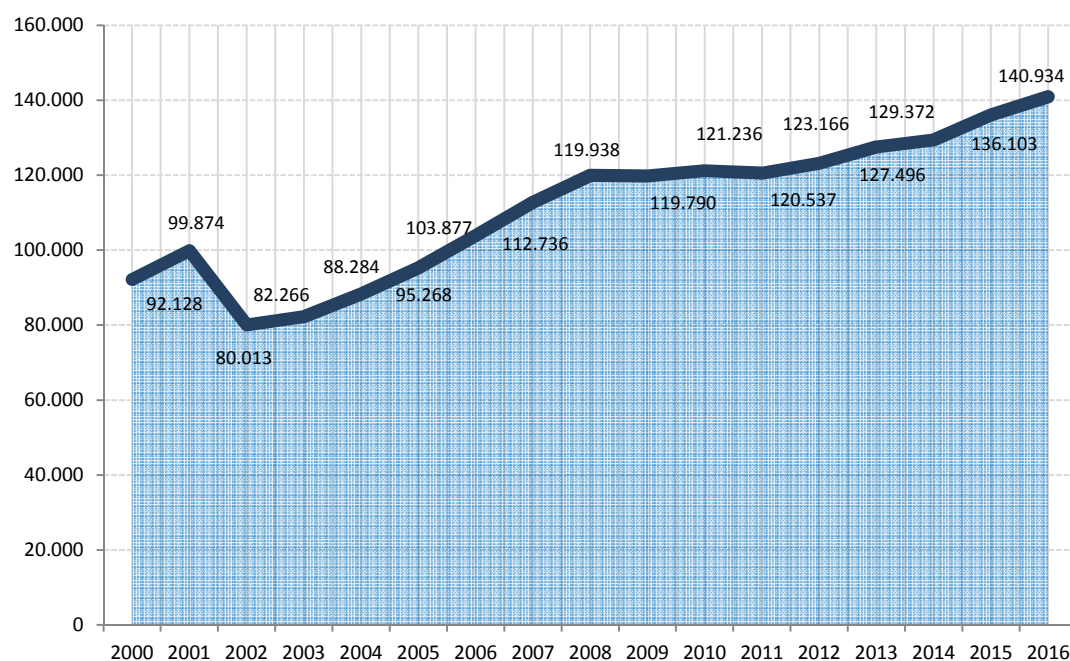
1.2.2. La corriente de aportaciones

La mayor parte de los ingresos de la Seguridad Social española procede de las cuotas o cotizaciones imputadas en origen al empleado y al empleador (76,68% sobre el total en 2014 y el 83,19% estimado para 2016 según los datos presupuestarios de la propia Seguridad Social)²⁵, siendo importante para la corriente de aportaciones el número de cotizantes, pero también su estructura, pues un número mayor de cotizaciones no siempre supone un mayor volumen de ingresos ya que existen distintos tramos de cotización, algo que no siempre es tenido en cuenta. Por ejemplo, con los datos vigentes para el año 2015 se necesitan más de cuatro cotizantes por una base de cotización mínima para superar lo que se ingresa por un único cotizante por bases máximas. Por ello, las manifestaciones sobre las variaciones de los datos de empleo deberían ser siempre tomadas con la necesaria cautela en relación con la financiación de la Seguridad Social, tanto desde el análisis de la liquidez como desde la perspectiva de la sostenibilidad.

La evolución de los ingresos de la Seguridad Social española en los últimos años es la que se muestra en los siguientes gráficos:

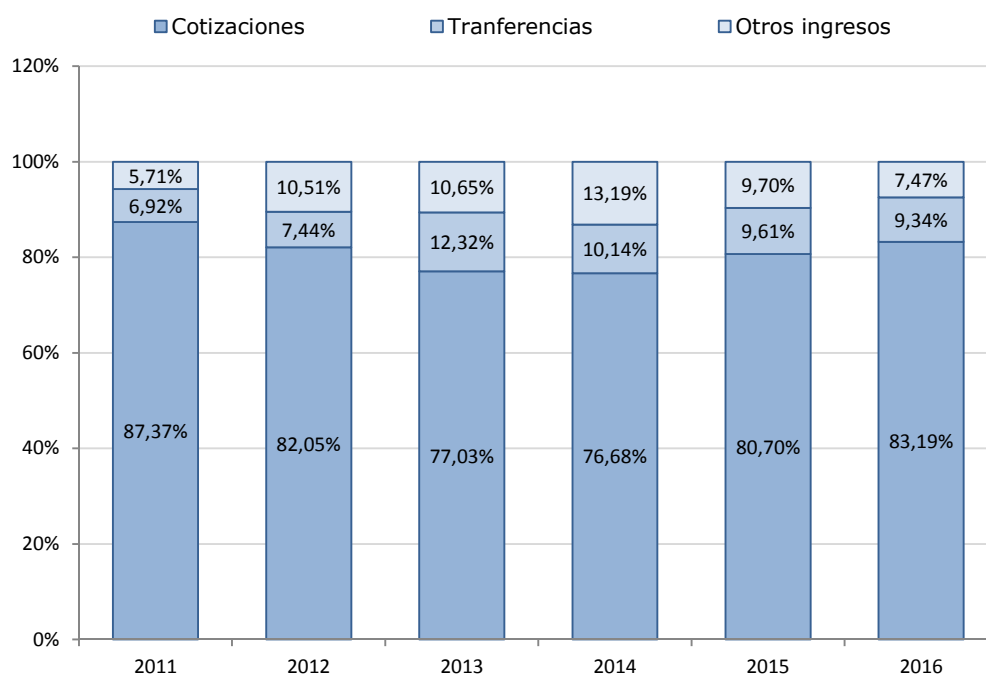
²⁵ Sin perjuicio de la existencia de otros ingresos: transferencias estatales, rendimientos financieros, enajenación de activos y utilización de activos afectos al Fondo de Reserva, intereses, etc. En cuanto a las aportaciones al Régimen General, y según la *Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015*, en 2015 se imputa en origen al trabajador por contingencias comunes el 4,70% de la base de cotización y a la empresa el 23,6% de la misma base, con una tarifa adicional para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales según grupos de riesgo; en contratación indefinida se imputa un 5,5% de la base de cotización al empleador y un 1,55% al empleado para desempleo; para formación profesional se imputa el 0,6% al empleador de la base de cotización y el 0,1% al empleado, mientras que para el Fondo de Garantía Salarial se imputa al empleador el 0,20% de la base de cotización.

Gráfico 1. Evolución de los ingresos de la Seguridad Social



Fuente: elaboración propia con datos de la Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Años 2015 y 2016, estimaciones. Millones de euros.

Gráfico 2. Distribución de los ingresos por fuente. Período 2011–2016



Fuente: elaboración propia con datos de la Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Años 2015 y 2016, estimaciones.

En la práctica, los ingresos por aportaciones se dividen en cotizaciones por contingencias comunes, resultantes de la aplicación en cada instante t de un tipo de cotización $\theta_{j,t}$ a una base de cotización $B_{j,t}^c$ según el grupo en el que está clasificado el j -ésimo trabajador, y primas para contingencias profesionales $I_{j,t}^{at}$ en los términos recogidos en la disposición adicional cuarta de la *Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007*, que son a cargo de la empresa²⁶. En esta estructura de aportaciones en el campo discreto también se pueden tener en cuenta otras partidas $I_{j,t}^o$, que incluirán aquella parte de ingresos comunes susceptibles de ser imputados a cada individuo en el período, tal que en cada instante, para cada individuo que haya cotizado alguna vez al sistema:

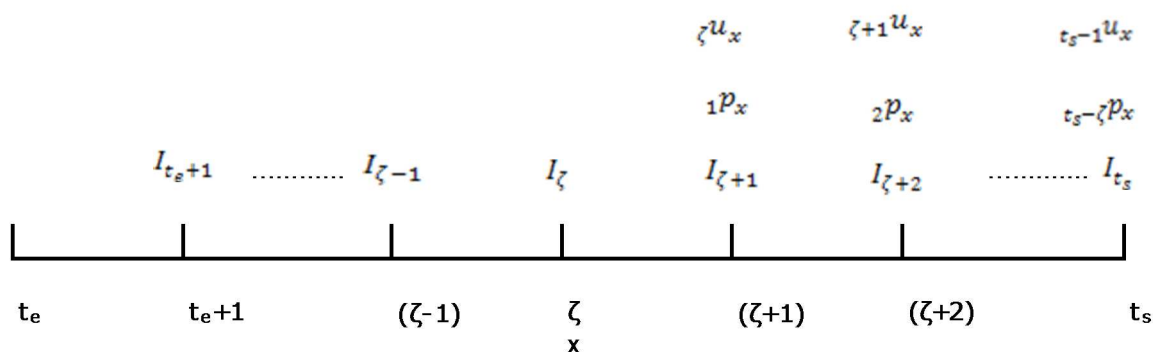
$$I_{j,t} = (\theta_{j,t} \cdot B_{j,t}^c) + I_{j,t}^{at} + I_{j,t}^o \quad [10]$$

$I_{j,t}$	Ingresos totales al sistema imputados al i -ésimo individuo en el instante t
$\theta_{j,t}$	Tipo de cotización vinculado al i -ésimo individuo en el instante t
$B_{j,t}^c$	Base de cotización por contingencias comunes vinculada al i -ésimo individuo en el instante t según su grupo de cotización
$I_{j,t}^{at}$	Ingresos para contingencias profesionales imputados al i -ésimo individuo en el instante t
$I_{j,t}^o$	Otros ingresos imputados al i -ésimo individuo en el instante t

Estos ingresos se realizarían desde que el trabajador entra en el mercado laboral t_e y hasta que sale definitivamente de él en t_s , con las excepciones correspondientes a los intervalos de tiempo en los que, por cualquier causa, no exista obligación de cotizar; dependiendo del momento de valoración ζ , la estructura de aportaciones estará formada por un conjunto de ingresos ciertos (los acaecidos hasta ζ) y otros ingresos probables (los que van desde ζ hasta la salida definitiva del conjunto poblacional). En t_e todos los capitales de la corriente de aportaciones son desconocidos pues son capitales futuros, mientras que a partir de t_s todos son conocidos pues son capitales pasados.

²⁶ La disposición adicional cuarta de la *Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social*, recoge que el Gobierno presentará en el plazo de un año una actualización de la regulación de la cotización por contingencias profesionales en relación con la actualización de la tarifa de cotización por contingencias profesionales en función de la peligrosidad y los riesgos para las distintas actividades, industrias y tareas, y también con la modificación del *Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral*.

Supóngase que los ingresos tienen naturaleza pospagable y se ingresan al final de cada período, que consideraremos anual aunque en la práctica la referencia es el mes, aun cuando en puridad esto ocurre a cuenta de una situación con obligación de cotizar en cualquier instante del período. Sean: K_x , número de años vividos hasta la muerte por una cabeza de edad x ; ${}_t p_x$ la probabilidad de que la persona j -ésima, de edad x , alcance la edad $(x+t)$, ${}_t q_x$ la probabilidad de que un individuo de edad x alcance la edad $(x+t)$ y fallezca antes de alcanzar la edad $(x+t+1)$; por otra parte, ${}_t u_x$ es la probabilidad de que un individuo de edad x se encuentre en situación de obligación de cotizar a la Seguridad Social al inicio de t (probabilidad dicotómica con valor 1 si el suceso es cierto y 0 en otro caso); i , tipo de interés técnico. Mientras que las probabilidades de supervivencia y fallecimiento dependen en cierto modo del valor alcanzado en el momento anterior, la probabilidad de cotizar es independiente de las anteriores en el tiempo.



Para valorar los ingresos en el instante ζ para un individuo j se acude de la siguiente estructura, si bien hay que tener en cuenta que se puede trabajar con un tipo de interés i' que incorpore la inflación g de tal forma que: $(1 + i') = (1 + i) \cdot (1 + g)$.

Ingresos ciertos: A_1

Instante	Aportación	Probabilidad	Factor de capitalización
t_e	0	1	$(1 + i)^{(\zeta - t_e)}$
t_e+1	I_{j,t_e+1}	1	$(1 + i)^{(\zeta - t_e+1)}$
...
$\zeta-1$	$I_{j,\zeta-1}$	1	$(1 + i)^1$
ζ	$I_{j,\zeta}$	1	$(1 + i)^0$

Ingresos probables: A_2

Instante	Aportación	Probabilidad	Factor de actualización
$\zeta+1$	$I_{j,\zeta+1}$	${}_1p_x \cdot {}_\zeta u_x$	$(1+i)^{-1}$
$\zeta+2$	$I_{j,\zeta+2}$	${}_2p_x \cdot {}_{\zeta+1}u_x$	$(1+i)^{-2}$
...
t_s-1	I_{j,t_s-1}	${}_{t_s-\zeta-1}p_x \cdot {}_{t_s-2}u_x$	$(1+i)^{-(t_s-\zeta-1)}$
t_s	I_{j,t_s}	${}_{t_s-\zeta}p_x \cdot {}_{t_s-1}u_x$	$(1+i)^{-(t_s-\zeta)}$

Puesto que el factor de actualización actuarial ${}_tE_x$ toma la expresión:

$${}_tE_x = {}_tp_x \cdot (1+i)^{-t} \quad [11]$$

cada uno de los capitales probables puede ser redefinido en función de este factor.

En cuanto a la corriente total de aportaciones, si el individuo j -ésimo vive en $(\zeta+1)$ se realiza una aportación a la Seguridad Social si ha tenido obligación de cotizar al inicio del período (en ζ), mientras que no se realizará ningún ingreso en otro supuesto (no existe obligación de cotizar o el individuo ha fallecido antes de alcanzar $(\zeta+1)$). El valor esperado $V_{j,\zeta}^A$ de la estructura de ingresos para cada individuo será:

$$V_{j,\zeta}^A = E(A_{j,1}) + E(A_{j,2}) = A_{j,1} + E(A_{j,2}) \quad [12]$$

donde, valoradas en ζ , las aportaciones pasadas son un suceso cierto no sujeto a probabilidad.

$$A_{j,1} = (0 \cdot (1+i)^{(\zeta-t_e)}) + (I_{j,t_e+1} \cdot (1+i)^{(\zeta-t_e+1)}) + \dots + (I_{j,\zeta-1} \cdot (1+i)) + I_{j,\zeta} \quad [13]$$

$$A_{j,1} = \sum_{s=1}^{\zeta-t_e} I_{j,s} \cdot (1+i)^{(\zeta-s)} = \sum_{s=t_e+1}^{\zeta} I_{j,s} \cdot (1+i)^{(\zeta-s)} \quad [14]$$

tenido en cuenta que las aportaciones pueden variar entre períodos por modificaciones en la situación laboral de individuo o por modificaciones normativas en los tipos y bases de cotización (normalmente al principio del período).

En cuanto a las aportaciones que se espera realizar con posterioridad al momento de valoración ζ :

$$\begin{aligned}
 E(A_{j,2}) = & [I_{j,\zeta+1} \cdot {}_{\zeta}u_x \cdot {}_1p_x] \cdot (1+i)^{-1} + \\
 & + [I_{j,\zeta+2} \cdot {}_{\zeta+1}u_x \cdot {}_2p_x] \cdot (1+i)^{-2} + \dots + \\
 & + [I_{j,t_s} \cdot {}_{t_s-1}u_x \cdot {}_{t_s-\zeta}p_x] \cdot (1+i)^{-(t_s-\zeta)}
 \end{aligned} \tag{15}$$

que, si se redefinen los capitales $I_{j,\zeta}^* = I_{j,\zeta} \cdot {}_{\zeta-1}u_x$, darían lugar a:

$$\begin{aligned}
 E(A_{j,2}) = & [I_{j,\zeta+1}^* \cdot {}_1p_x] \cdot (1+i)^{-1} + [I_{j,\zeta+2}^* \cdot {}_2p_x] \cdot (1+i)^{-2} + \dots \\
 E(A_{j,2}) = & \sum_{k=1}^{t_s-\zeta} I_{j,\zeta+k}^* \cdot \left(\frac{1}{1+i}\right)^k \cdot {}_kp_x = \sum_{k=1}^{t_s-\zeta} I_{j,\zeta+k}^* \cdot {}_kE_x \\
 = & \sum_{k=\zeta+1}^{t_s} I_{j,\zeta+k}^* \cdot {}_{(k-\zeta)}E_x
 \end{aligned} \tag{16}$$

En definitiva, la estructura de aportaciones a la Seguridad Social correspondiente a un individuo puede presentarse desde una perspectiva actuarial al ser valorada en el tiempo incorporando las probabilidades correspondientes (supervivencia y obligación de realizar la aportación); para el total de la población a estudio se obtendría el valor de la estructura de aportaciones en un instante mediante la suma de los valores individuales tal que:

$$V_{\zeta}^A = \sum_j V_{j,\zeta}^A = \sum_j (A_{j,1} + E(A_{j,2})) \tag{17}$$

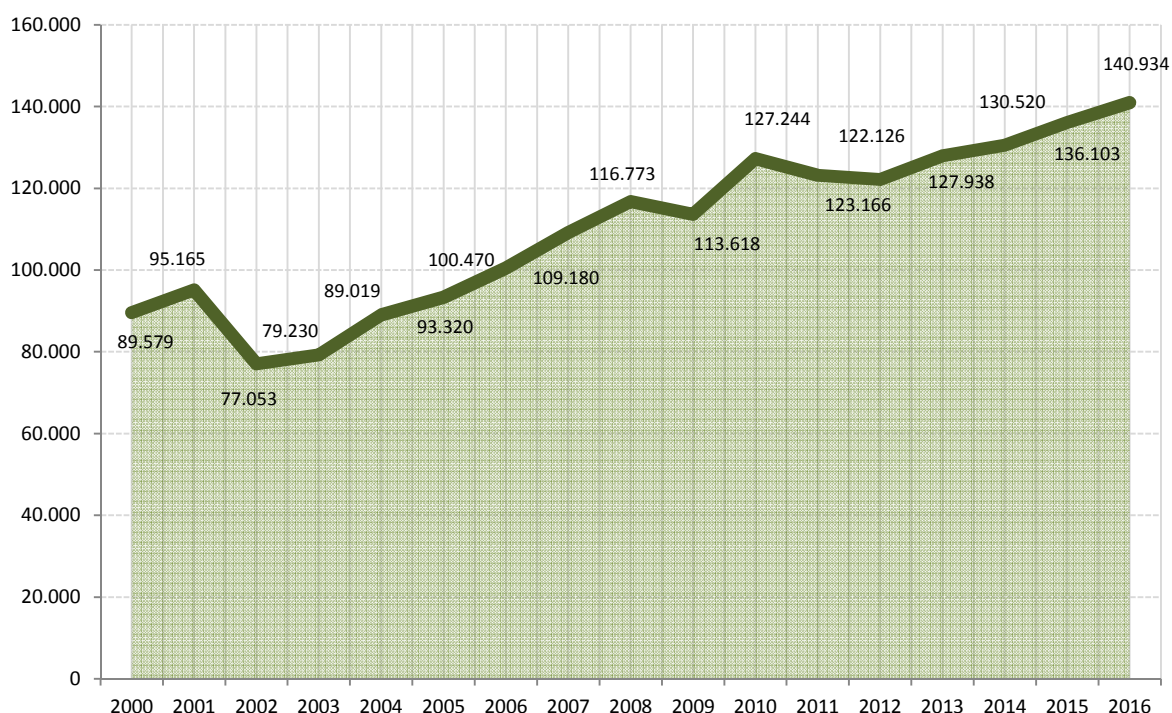
1.2.3. La corriente de prestaciones

Los gastos de la Seguridad Social en España se deben en su mayor parte al coste de las pensiones (87,66% en 2014), que a su vez forman parte de las prestaciones económicas²⁷. Por lo que se refiere a la acción protectora, ésta se concreta principalmente en la existencia de un Régimen General y unos Regímenes Especiales

²⁷ Otros gastos del sistema vienen derivados de asistencia sanitaria, gastos sociales, gastos financieros, etc.

(Cuenta propia o Autónomos, Trabajadores del Mar, Estudiantes y Funcionarios públicos, civiles y militares)²⁸ que se adaptan a la particularidad de cada colectivo. La evolución del gasto anual de la Seguridad Social española es la siguiente:

Gráfico 3. Evolución del gasto anual de la Seguridad Social

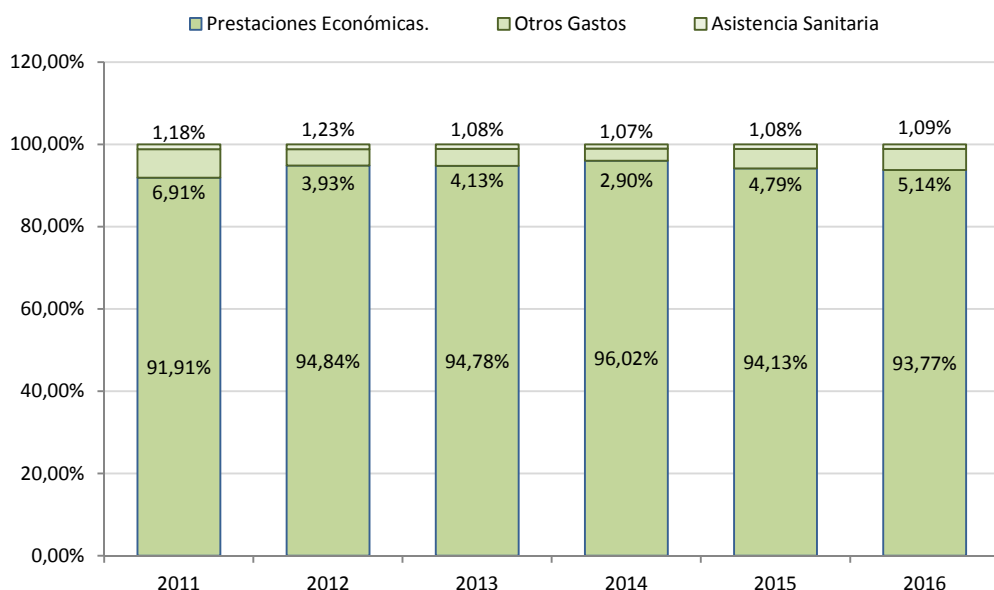


Fuente: elaboración propia con datos de la Seguridad Social. *Proyecto de Presupuestos 2016*. Años 2015 y 2016, estimaciones. Millones de euros.

En cuanto a la distribución del gasto en cada ejercicio, el porcentaje de gastos en asistencia sanitaria no es actualmente muy relevante dentro del total puesto que las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas, si bien en 1988 representaban el 30,17% del gasto, porcentaje con cierta estabilidad en el tiempo ya que en 2001 fue del 30,72%. Sin embargo, el peso fundamental es el de las prestaciones económicas (y dentro de ellas el más relevante corresponde a las pensiones), que en 2016 se estima que serán el 93,77% de los gastos de la Seguridad Social en España.

²⁸ A los indicados, que son los expresamente recogidos en el artículo 10 de la LGSS, se suma el Régimen Especial de la Minería del Carbón.

Gráfico 4. Distribución de los gastos por fuente. Período 2011–2016



Fuente: elaboración propia con datos de la Seguridad Social. *Proyecto de Presupuestos 2016*.

De cara a la estructura de costes por individuo (siendo el sujeto causante el punto de enlace entre aportaciones y prestaciones), el gasto se puede dividir en gasto por pensiones $G_{j,t}^p$, gasto por otras prestaciones económicas $G_{j,t}^{ec}$ y la imputación de otros gastos del período al individuo $G_{j,t}^o$; a su vez, dentro de las pensiones y prestaciones pueden darse gastos relacionados con el mismo epicentro en cuanto a la persona pero que provienen de distintas coberturas. Así, en cada período el gasto total desde la perspectiva del sujeto causante puede expresarse como:

$$G_{j,t} = (G_{j,t}^{p_1} + \dots + G_{j,t}^{p_n}) + (G_{j,t}^{ec_1} + \dots + G_{j,t}^{ec_n}) + G_{j,t}^o \quad [18]$$

Los gastos de cada prestación pueden tener carácter temporal o vitalicio y pueden acaecer en distintas edades de sujeto causante y del beneficiario. Como en el caso de las aportaciones, dependiendo del instante de valoración ζ la estructura de prestaciones estará formada por un conjunto de gastos ciertos (los acaecidos hasta ζ independientemente de su naturaleza) y otros gastos probables (los que van desde ζ hasta la salida definitiva del beneficiario del colectivo de referencia, aunque se imputen al propio sujeto causante). Si nos centramos únicamente las pensiones como única fuente de coste, el valor esperado $V_{j,\zeta}^p$ de la estructura de gastos para cada cotizante entendido como posible sujeto causante será:

$$V_{j,\zeta}^P = G_{j,1}^P + E(G_{j,2}^P) \quad [19]$$

En una estructura de prestaciones ciertas, los capitales en cada momento, que consideramos pospagables, son conocidos y se pueden adecuar a [13] y [14] sin más que tener en cuenta que los costes pueden tener distinto origen y final en el tiempo y también dependen de la cobertura r -ésima ($r=1\dots n$):

$$G_{j,1}^p = \sum_{s=1}^{\zeta} \sum_{r=1}^n G_{j,s}^{p_r} \cdot (1+i)^{(\zeta-s)} \quad [20]$$

Sin embargo, para los gastos futuros la situación se complica sobremanera, pues de tal naturaleza compleja son los distintos componentes que forman parte de [18], ya sea por su número o por sus múltiples características y diferencias: temporalidad, origen de la contingencia, número de pagos en cada anualidad, distintas bases reguladoras, etc., lo que establece ciertas diferencias con el planteamiento seguido en los seguros privados.

En la jubilación, una vez alcanzada con vida la edad teórica de jubilación X_g (edad que no es única para todos los individuos), el interesado puede percibir una pensión de jubilación contributiva de importe $G_t^{p_{11}}$, una pensión de jubilación no contributiva de cuantía $G_t^{p_{12}}$ o, por el contrario, no percibir pensión de jubilación, sucesos incompatibles y complementarios cuyas probabilidades dicotómicas de ocurrencia p^{11} , p^{12} , p^{13} presentan valores homogéneos en el tiempo y suman la unidad $p^{11} + p^{12} + p^{13} = 1$. Por otra parte, hasta alcanzar X_g el valor del capital por jubilación en cada instante es nulo.

Instante	Factor de actualización	Probabilidad primaria	Probabilidad secundaria	Prestación
$\zeta+r \leq X_g$	$(1+i)^{-r}$	$r p_x$		0
$\zeta+r > X_g$	$(1+i)^{-r}$	$r p_x$	p^{11}	$G_{j,\zeta+r}^{p_{11}}$
			p^{12}	$G_{j,\zeta+r}^{p_{12}}$
			p^{13}	0
...
$\omega-1$	$(1+i)^{-(\omega-x-1)}$	$\omega-x-1 p_x$	p^{11}	$G_{j,\omega-1}^{p_{11}}$
			p^{12}	$G_{j,\omega-1}^{p_{12}}$
			p^{13}	0

Por lo tanto, si el sujeto causante alcanza con vida el instante t y se han cumplido los requisitos legales marcados, percibirá el capital correspondiente a la pensión de jubilación, que es de carácter vitalicio. La dinámica es similar a la propuesta en [15] y [16], con la diferencia de los instantes iniciales y finales que definen la estructura de capitales: si en el caso de las aportaciones éstas tienen como referencia el período laboral, para la jubilación se comienza en el instante de la percepción de la pensión y se finaliza en la edad límite ω del colectivo.

$$E(G_{j,2}) = (p^{11} \cdot G_{j,\zeta+r}^{p_{11}} + p^{12} \cdot G_{j,\zeta+r}^{p_{11}} + p^{13} \cdot 0) \cdot {}_r p_x \cdot (1+i)^{-r} + \dots +$$

$$E(G_{j,2}) = \sum_{k=1}^{\omega-x-1} (p^{11} \cdot G_{j,k}^{p_{11}} + p^{12} \cdot G_{j,k}^{p_{12}}) \cdot \left(\frac{1}{1+i}\right)^k \cdot {}_k p_x \quad [21]$$

En la práctica, las prestaciones de jubilación se satisfacen a los beneficiarios en catorce pagas mensuales al año, dos de ellas al final de cada semestre, y su importe se puede revalorizar en cada ejercicio según el método vigente en cada momento. Dependiendo del objetivo del estudio puede trabajarse únicamente con las prestaciones en el campo contributivo o con cualquier coste generado por el mismo sujeto causante a cargo de sus aportaciones.

Este esquema inicial, que recogería la mayor parte del coste de la Seguridad Social actual, también pueden redirigirse hacia las cargas correspondientes a la incapacidad permanente, cobertura que a su vez tiene diferentes características en su origen (accidente de trabajo, enfermedad profesional o accidente común, por un lado, y enfermedad común por otro) y en su resultado (los distintos grados de incapacidad permanente, la incapacidad no contributiva o la inexistencia de derecho de percepción de cuantía alguna). En el instante t -ésimo el sujeto causante percibirá una prestación a cargo de la protección de la incapacidad si vive en ese momento y ostenta una incapacidad cubierta por el sistema que se devenga en el momento del hecho causante. La incapacidad para una cabeza de edad x entre x y $x+1$ puede ocurrir con una probabilidad ε_x , tal que la persona puede llegar con vida a la edad $(x+1)$ en situación de activo (con probabilidad ${}_1 p_x^{a,a}$) o de incapacidad (con probabilidad ${}_1 p_x^{a,i}$), pero puede morir antes de alcanzar esta edad, ya sea desde una situación de incapacidad (con probabilidad ${}_1 q_x^{a,i}$) o de otro caso (con probabilidad ${}_1 q_x^{a,a}$), por lo que:

$${}_1 p_x^{a,a} + {}_1 q_x^{a,a} + {}_1 p_x^{a,i} + {}_1 q_x^{a,i} = 1 \quad [22]$$

Para un mismo individuo existe incompatibilidad entre la generación de gastos por jubilación e incapacidad en el mismo momento temporal (no en momentos del tiempo distintos) y este último suceso ocurre únicamente desde la incorporación al entorno laboral y como máximo hasta la edad de jubilación X_g . Sin embargo, al suponer que la probabilidad de supervivencia es diferente para una persona con pensión de jubilación general y una persona con pensión de jubilación por transformación de una pensión de incapacidad, este hecho debiera tenerse en cuenta en las corrientes de capitales o, de otra forma, considerar la pensión de incapacidad con el límite temporal superior no en la edad de jubilación X_g sino en la edad límite ω del colectivo y utilizar en la corriente de pensiones de jubilación la correspondiente probabilidad de supervivencia.

Dejando fuera la incapacidad de carácter parcial y asumiendo que no existen cambios de estado ni reversiones, sean p^{2r} las probabilidades correspondientes a cada posible situación de incapacidad del individuo respecto a la Seguridad Social, que se entienden estables en el tiempo y se asocian a las correspondientes corrientes de gasto que suponemos independientes: incapacidad permanente total para la profesión habitual $G_{j,t}^{p_{21}}$, incapacidad permanente absoluta para todo trabajo $G_{j,t}^{p_{22}}$, gran invalidez $G_{j,t}^{p_{23}}$, invalidez no contributiva $G_{j,t}^{p_{24}}$ e inexistencia de pensión de incapacidad $G_{j,t}^{p_{25}}$. La supervivencia sin incapacidad no genera prestación alguna de esta naturaleza. Además, si la persona es ya incapacitada en el momento de la valoración tómesese en cuenta la probabilidad de supervivencia de inválidos, P_x^i frente a la probabilidad de transición entre estados $P_x^{a,i}$.

Instante	Factor de actualización	Probabilidad primaria	Probabilidad secundaria	Prestación
$\zeta+1$	$(1+i)^{-1}$	${}_1P_x^{a,i}$	p^{21}	$G_{j,\zeta+1}^{p_{21}}$
			p^{22}	$G_{j,\zeta+1}^{p_{22}}$
			p^{23}	$G_{j,\zeta+1}^{p_{23}}$
			p^{24}	$G_{j,\zeta+1}^{p_{24}}$
			p^{25}	0
$\zeta+2$	$(1+i)^{-2}$	${}_2P_x^{a,i}$	p^{21}	$G_{j,\zeta+2}^{p_{21}}$
			p^{22}	$G_{j,\zeta+2}^{p_{22}}$
			p^{23}	$G_{j,\zeta+2}^{p_{23}}$
			p^{24}	$G_{j,\zeta+2}^{p_{24}}$
			p^{25}	0
...

Instante	Factor de actualización	Probabilidad primaria	Probabilidad secundaria	Prestación
x_g	$(1+i)^{-(x_g-\zeta)}$	$(x_g-\zeta)p_x^{a,i}$	p^{21}	$G_{j,x_g}^{p_{21}}$
			p^{22}	$G_{j,x_g}^{p_{22}}$
			p^{23}	$G_{j,x_g}^{p_{23}}$
			p^{24}	$G_{j,x_g}^{p_{24}}$
			p^{25}	0

Bajos los mismos principios de [21]:

$$\begin{aligned}
 E(G_{i,2}) &= \left[(p^{21} \cdot G_{j,1}^{p_{21}} + p^{22} \cdot G_{j,1}^{p_{22}} + p^{23} \cdot G_{j,1}^{p_{23}} + p^{24} \cdot G_{j,1}^{p_{24}}) \right] \cdot (1+i)^{-1} \cdot \\
 &\quad \cdot {}_1p_x^{a,i} + \dots + \\
 E(G_{i,2}) &= \sum_{k=1}^{x_g-x} \left(p^{21} \cdot G_{j,k}^{p_{21}} + \dots + p^{24} \cdot G_{j,k}^{p_{24}} \right) \cdot \left(\frac{1}{1+i} \right)^k \cdot {}_kp_x^{a,i}
 \end{aligned}
 \tag{23}$$

En la práctica, las prestaciones derivadas de contingencias profesionales se pagan en doce mensualidades al año (con las particularidades temporales que puedan existir en el cálculo de las partidas que forman parte de la pensión), mientras que las derivadas de contingencias comunes se pagan en catorce mensualidades, dos de ellas a finales de cada semestre.

Por último, si el sujeto fallece antes de alcanzar una edad determinada, existe la posibilidad de obtención de una pensión de viudedad (temporal o vitalicia) para uno o varios beneficiarios y/o una pensión de orfandad (temporal o vitalicia) para uno o varios beneficiarios o de una pensión a favor de familiares para uno o varios beneficiarios o, finalmente, ninguna de ellas. Si el hecho causante es de naturaleza profesional, la cuantía tiene unos condicionantes particulares (y se concede además una indemnización a tanto alzado), mientras que en general es habitual la concesión de un auxilio por defunción adicional. La diferencia fundamental de esta corriente de gasto con las anteriores es que tiene en cuenta las características biométricas del beneficiario según su edad (y en la viudedad, z en la orfandad y w en el favor de familiares), dando lugar a la estructura de pagos correspondiente ante el fallecimiento del sujeto causante. Por otra parte, los derechos de un beneficiario, bajo ciertas condiciones, pueden ser dirigidos hacia otros beneficiarios, y todo ello da cuenta de un escenario sumamente complejo.

La idea principal es que, en un entorno dinámico, el sistema pagará al beneficiario el valor de una prestación en el instante t si vive en ese momento y el sujeto causante ha fallecido antes de alcanzar el mismo, pago que se realiza de forma vitalicia o temporal según las características de la prestación y del beneficiario. Es posible la concesión de una pensión de viudedad según una probabilidad adicional p^{31} que, a priori, debería tener en cuenta la existencia de los requisitos legales correspondientes (por ejemplo un número mínimo de meses de cotización imputados al del sujeto causante) y la existencia al inicio del período de un vínculo matrimonial o asimilado entre sujeto causante y beneficiario que permita la concesión del derecho, pero también los vínculos anteriores. Para la pensión de orfandad p^{32} debería tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos formales, la existencia de hijos con derecho a pensión y sus características y la posibilidad de múltiples beneficiarios. Para el favor de familiares p^{33} requeriría la valoración de los requisitos legales, la existencia o no de beneficiarios en otras prestaciones y la posibilidad de múltiples beneficiarios.

La determinación de estas probabilidades y rentas actuariales es una tarea ardua, quizás improductiva en cuestión de la relación coste/beneficio para su obtención, que requeriría sin lugar a dudas la utilización de simplificaciones, tenido en cuenta que no se está ante probabilidades complementarias y que es desconocida la probabilidad de una determinada estructura de beneficiarios; ni siquiera la consideración de grupos de varias cabezas puede ser una solución satisfactoria. La primera simplificación sería la consideración de la viudedad y el favor de familiares como pensiones vitalicias, así como la indistinción de la naturaleza del beneficiario en el favor familiar, lo que permite trabajar con una edad media \bar{w} y un número medio de beneficiarios por hecho causante. De igual forma, en la orfandad se podrían considerar pensiones temporales como máximo hasta una edad o vitalicias en función de una edad media (o separar grupos de beneficiarios), siendo la edad del beneficiario una media \bar{z} correspondiente, a su vez, a un número medio de beneficiarios por sujeto causante (nótese que, a pesar de la simplificación se mantiene la complejidad en el desarrollo teórico). Sin perjuicio de la posibilidad de traslado de derechos entre beneficiarios, la posibilidad de multiplicidad en ellos hace que se tenga que considerar la incorporación de un factor f^{3*} , ($f^{3*} > 0$) vinculado al tipo medio aplicable a la base reguladora en función del número medio de beneficiarios para un sujeto causante de edad x , con la particularidad de que, por ley, para un sujeto causante con j beneficiarios ($j=1\dots n$) opera una restricción del tipo:

$$\sum_j G^{p_{31}} + \sum_j G^{p_{32}} + \sum_j G^{p_{33}} \leq \alpha \cdot B_r \quad [24]$$

Instante	Factor de actualización	Probabilidad primaria	Probabilidad secundaria	Probabilidad terciaria	Prestación
$\zeta+1$	$(1+i)^{-1}$	${}_1q_x$	${}_1p_y$	p^{31}	$f^{31} \cdot G_{j,\zeta+1}^{p_{31}}$
			${}_1p_{\bar{z}}$	p^{32}	$f^{32} \cdot G_{j,\zeta+1}^{p_{32}}$
			${}_1p_{\bar{w}}$	p^{33}	$f^{33} \cdot G_{j,\zeta+1}^{p_{33}}$
$\zeta+2$	$(1+i)^{-2}$	${}_{1/1}q_x$	${}_2p_y$	p^{31}	$f^{31} \cdot G_{j,\zeta+2}^{p_{31}}$
			${}_2p_{\bar{z}}$	p^{32}	$f^{32} \cdot G_{j,\zeta+2}^{p_{32}}$
			${}_2p_{\bar{w}}$	p^{33}	$f^{33} \cdot G_{j,\zeta+2}^{p_{33}}$
X_g	$(1+i)^{-(X_g-\zeta)} \dots$	$(x_{g-\zeta-1})/q_x \dots$	$(x_{g-\zeta})p_y$	p^{31}	$f^{31} \cdot G_{j,x_g}^{p_{31}}$
			$(x_{g-\zeta})p_{\bar{z}}$	p^{32}	$f^{32} \cdot G_{j,x_g}^{p_{32}}$
			$(x_{g-\zeta})p_{\bar{w}}$	p^{33}	$f^{33} \cdot G_{j,x_g}^{p_{33}}$
$\omega-1$	$(1+i)^{-(\omega-y-1)}$	$\omega-y-2/q_x$	$\omega-y-1p_y$	p^{31}	$f^{31} \cdot G_{j,\omega-1}^{p_{31}}$
$\omega-1$	$(1+i)^{-(\omega-\bar{z}-1)}$		$\omega-\bar{z}-1p_{\bar{z}}$	p^{32}	$f^{32} \cdot G_{j,\omega-1}^{p_{32}}$
$\omega-1$	$(1+i)^{-(\omega-\bar{w}-1)}$		$\omega-\bar{w}-1p_{\bar{w}}$	p^{33}	$f^{33} \cdot G_{j,\omega-1}^{p_{33}}$

$$\begin{aligned}
E(G_{j,2}) = & \left[(p^{31} \cdot G_{j,t}^{p_{31}} \cdot f^{31} \cdot {}_1p_y + p^{32} \cdot f^{32} \cdot G_{j,t}^{p_{32}} \cdot {}_1p_{\bar{z}} + p^{33} \cdot f^{33} \cdot G_{j,t}^{p_{33}} \cdot {}_1p_{\bar{w}}) \right] \cdot (1+i)^{-1} \cdot {}_1q_x + \dots + \\
E(G_{j,2}) = & \sum_{k=1}^{\omega-y-1} \left(p^{31} \cdot G_{j,k}^{p_{31}} \cdot f^{31} \cdot {}_kp_y \right) \cdot \left(\frac{1}{1+i} \right)^k \cdot {}_{k-1}q_x + \\
& + \sum_{k=1}^{\omega-\bar{z}-1} \left(p^{32} \cdot G_{j,k}^{p_{32}} \cdot f^{32} \cdot {}_kp_{\bar{z}} \right) \cdot \left(\frac{1}{1+i} \right)^k \cdot {}_{k-1}q_x + \\
& + \sum_{k=1}^{\omega-\bar{w}-1} \left(p^{33} \cdot G_{j,k}^{p_{33}} \cdot f^{33} \cdot {}_kp_{\bar{w}} \right) \cdot \left(\frac{1}{1+i} \right)^k \cdot {}_{k-1}q_x
\end{aligned} \tag{25}$$

En la práctica, los importes de la corriente de prestaciones se revalorizarían según dicten las normas vigentes en ese instante.

Con lo visto hasta el momento la estructura de prestaciones de la Seguridad Social vinculada a un individuo concreto admite en teoría el estudio desde una perspectiva de valoración en el tiempo e incorporando probabilidades; como en el caso de las aportaciones, para el total de la población a estudio se obtendría el valor de la estructura de prestaciones en un instante mediante la suma de los valores individuales tal que:

$$V_{\zeta}^P = \sum_j V_{j,\zeta}^P = \sum_j G_{j,1} + E(G_{j,2}) \quad [26]$$

Sin embargo, también se ha dejado constancia de la dificultad que entraña este planteamiento y de lo complejo del cálculo al no poder recurrir a expresiones conocidas, al requerir diversas estimaciones complementarias y no tener ni siquiera identificados a los beneficiarios en el instante de la equivalencia (como sí ocurre en el seguro privado o en un capital coste), con un número determinado de hipótesis tan amplio que según la naturaleza del estudio a acometer puede ser más productivo acudir a valoraciones sobre información agregada en vez de sobre información individual.

1.2.4. El sistema en equilibrio

Tal y como aparecía en la expresión [6], el sistema de reparto puro establece un equilibrio teórico anual entre aportaciones y prestaciones. Sin modificar el sistema financiero-actuarial de financiación, la Seguridad Social puede –y debe- estudiarse desde una perspectiva que sobrepase el concepto de liquidez y sus limitaciones. Este enfoque de análisis se basa en el equilibrio entre prestaciones y aportaciones en un período de tiempo más amplio y su comparación en el mismo instante ζ :

$$V_{\zeta}^A = V_{\zeta}^P$$

$$\sum_j V_{j,\zeta}^A = \sum_j V_{j,\zeta}^P \quad [27]$$

Como se desprende de los desarrollos precedentes, la definición de un sistema financiero-actuarial completo para el estudio de la Seguridad Social es un proceso de amplia magnitud y complejidad. Sobre el método de trabajo seguido pueden plantearse determinadas acciones que, perdiendo precisión en el valor, ganen en agilidad y flexibilidad de cara al cálculo, con la particularidad de que pueden combinarse entre sí.

1. El instante de valoración ζ . La elección del instante de valoración es muy relevante desde distintos puntos de vista. Desde el que ahora interesa, la determinación de ζ lo más cerca de la salida del sujeto causante del colectivo de referencia (edad límite del colectivo) incrementará el número de capitales ciertos, lo que reduce la complejidad del modelo.

2. El número de hipótesis. En los procesos de valoración financiero-actuariales de la Seguridad Social será necesario establecer un determinado número de hipótesis básicas para su desarrollo (por ejemplo, tipo de interés o tabla de mortalidad, entre otros), y un número de hipótesis adicionales para completar el desarrollo teórico-práctico. Una alternativa es flexibilizar el número de hipótesis, favoreciendo modelos más sencillos aunque menos precisos. Por ejemplo, se puede suponer que la edad en el momento de la valoración coincide con la edad general de jubilación o también asumir que no existen vacíos en la estructura de aportaciones desde que se entra en el colectivo, etc.
3. La utilización de valores medios. La utilización de valores totales y promedios solventa en gran medida la complejidad encontrada y favorece la obtención de datos de fuentes públicas, obviando la necesidad de requerir información de más difícil obtención, si bien es una técnica no exenta de hipótesis cuestionables. Por ejemplo, Devesa Carpio, M.M. (2007) utiliza este enfoque para el cálculo del tanto interno de rendimiento para la Seguridad Social.
4. La determinación de las fronteras de interés. Esta alternativa se utiliza, por ejemplo, en Hernández González, D. (2011a y 2013) y se basa en la elección de escenarios de máximos ingresos y mínimos gastos como frontera de trabajo. El resultado sería el menos desfavorable en términos de sostenibilidad y de generosidad y toda hipótesis adicional alejaría los resultados de la frontera marcada. Si ya el escenario inicial fuese problemático, intuitivamente se acepta que incorporar más fuentes de gasto o prever menos ingresos va directamente en detrimento del sistema. Por ejemplo, si se plantea como hipótesis que la obligación de cotización se mantiene en el tiempo desde la entrada al mercado laboral y, por tanto, ${}_tu_x = 1$, $\forall x, \forall t$, entonces la estructura de aportaciones tendrá carácter de máximos para una revalorización de bases de cotización, una mortalidad y un tipo de interés dados, por lo que cualquier otra hipótesis sobre la obligación de cotización (de la que se esperarían menores ingresos) incidirá en una menor sostenibilidad y una mayor generosidad para una misma estructura de prestaciones. Como crítica puede plantearse que esta opción utiliza escenarios-tipo, que en general no tienen por qué ser representativos de la población, si bien su ubicación en la frontera aludida limita la incertidumbre derivada. Puesto que un enfoque actuarial individual es muy complejo si no se trabaja con capitales ciertos y sucesos conocidos (así se plasma en las expresiones [19] a [25]), una simplificación de este estilo puede aportar información bastante útil.

1.2.5. La situación de la Seguridad Social en España

En la Seguridad Social española confluyen el mercado de trabajo como principal sustento de la corriente de ingresos y la dinámica y estructura de las pensiones como principal argumento de la corriente de gastos. Tradicionalmente se ha hablado de la configuración demográfica, de la relación entre nacimientos y defunciones o del movimiento migratorio como elementos de relevancia en el devenir del sistema, si bien a este respecto consideramos necesario realizar algunas matizaciones importantes.

La primera se incardina dentro de la certeza de que, en general, “los cotizantes de hoy son los pensionistas del mañana”. Tanto el número de cotizantes en un período como el importe por el que cotizan durante ese plazo son definitorios del volumen total de ingresos en dicho espacio temporal y de la capacidad que el propio sistema tiene para hacer frente a las correspondientes obligaciones en ese plazo, esto es, ambos conceptos, *número de cotizantes* y *estructura de ingresos*, interesan en el ámbito de la liquidez. Pero, además, puesto que existe una determinada relación entre las aportaciones y las prestaciones, un mayor número de cotizantes en t_r supone un mayor número esperado de pensionistas en un futuro t_s , ($t_r < t_s$), así como mayores cotizaciones en t_r también favorecen un mayor gasto esperado en pensiones en t_s , siempre dentro de los límites que marque el modelo de protección. Por lo tanto, lo que en el presente es bueno en materia de liquidez no tiene por qué serlo en cuestión de sostenibilidad futura, especialmente si existe un desequilibrio entre lo que se aporta y lo que se recibe; por ello, fijarse únicamente en el número de efectivos que componen la estructura de los activos y los pasivos es garantía para adentrarse en senderos que inducen a error e incertidumbre.

Así, es habitual hacer hincapié especialmente en las bondades de incorporar más cotizantes al sistema, principalmente a través de la incidencia en un grupo poblacional determinado: mujeres, inmigrantes, personas con discapacidad, etc. o defender las mejoras en la natalidad como un elemento trascendental en la prosperidad económica de la Seguridad Social. Ninguno de estos argumentos escapa a las consideraciones anteriormente indicadas, ya que los ingresos que provienen de nuevos cotizantes lo que generan son mayores obligaciones esperadas para el sistema en el futuro, obligaciones que posiblemente no puedan ser compensadas con nuevas entradas porque las incorporaciones tienen un límite que está influido por, entre otros aspectos, la realidad del mercado laboral en cada momento, la relación entre la oferta y la demanda o la situación en una economía global.

La tesis que defiende el incremento de la tasa de natalidad como salvaguarda de la suficiencia financiera de la Seguridad Social es errónea. Definida la tasa de natalidad T^n como el cociente entre el *número de nacimientos* n_c y el *total de la población* N en un período:

$$T^n = \frac{n_c}{N} \cdot 1000 \quad [28]$$

el crecimiento de T^n entre dos momentos temporales depende de una mayor variación positiva en términos relativos del número nacimientos en el período frente a la evolución ocurrida en el total de la población en el mismo periodo o, por el contrario, de una menor variación negativa en términos relativos en el número de nacimientos frente a la acaecida en el total poblacional; en otros supuestos se producirá un descenso en la tasa de natalidad. Tal y como recoge el cuadro resumen que se presenta a continuación, la evolución positiva de la tasa puede venir tanto de variaciones positivas como de transiciones negativas en el numerador, así como de variaciones positivas o negativas en el denominador:

Cuadro 6. Variación de la tasa de natalidad en función de la variación relativa de las partes del cociente

$\Delta n_c \quad \Delta N$		$\Delta n_c \quad \nabla N$	$\nabla n_c \quad \Delta N$	$\nabla n_c \quad \nabla N$	
$\Delta n_c > \Delta N$	$\Delta n_c < \Delta N$			$\nabla n_c > \nabla N$	$\nabla n_c < \nabla N$
+	-	+	-	-	+

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, en un escenario de crecimiento del número de nacimientos la tesis que aquí se estudia requiere que al menos una buena parte de los nacidos, sino todos, se incorpore en un futuro al mercado laboral, algo de lo que, aun cuando fuera factible por la existencia de una oferta estable y adecuada en el tiempo, se desconoce su período de duración, su intensidad y la estructura de aportaciones que origina. Pero, además, también hay que destacar que para la cobertura de esa hipotética oferta laboral no se necesitan exclusivamente más nacimientos, cuya evolución está más desacompañada temporalmente con las necesidades del mercado de trabajo, sino que también se puede

recurrir a los flujos migratorios –no exentos de riesgos de otra naturaleza-. Además, puesto que en materia de sostenibilidad es fundamental la relación entre aportaciones y prestaciones, ya se ha dicho que aunque las personas que se incorporan al sistema y realizan aportaciones favorecen teóricamente la liquidez del mismo, esto se presenta como un problema en materia de sostenibilidad futura si hay un desequilibrio acusado en la relación de otras variables relevantes.

La segunda matización se centra en que la solvencia de la Seguridad Social no es imposible de conseguir; bastaría por multiplicar cada pensión inicial por una fracción suficientemente restrictiva para que el sistema que no tenga problemas para hacer frente a sus obligaciones. Sin embargo, la Seguridad Social no debe ser pensada exclusivamente en términos de solvencia financiera, puesto que es relevante que las prestaciones que ofrece sean capaces de cumplir de la mejor manera posible con los objetivos para las que están diseñadas. Es decir, se han de perseguir pensiones “adecuadas” (con la complejidad y subjetividad que podemos detectar en este término) dentro de un modelo sostenible. Esta adecuación de las pensiones tiene, según Brimblecombe, S. (2013), diversos aspectos positivos:

1. Una mayor apoyo a que la Seguridad Social cumpla con sus objetivos.
2. Una mayor confianza pública en el sistema.
3. Un efecto favorable en los incentivos de afiliación y contribución.
4. Sinergias con otras medidas de empleo y fiscales para reducir ineficiencias económicas.
5. Refuerzo a los objetivos de otras políticas como el apoyo a las familias y a la cohesión familiar o la reducción de conflictos sociales y de la desigualdad.

Ya hemos indicado que en el desarrollo moderno de la Seguridad Social su solvencia no ha sido siempre un argumento a tener en cuenta, centrándose el sistema en alcanzar el concepto de pensión adecuada pero, incluso, sublimando éste de tal forma que en ocasiones se ha sobrepasado su verdadero alcance y objetivo; es decir, el empeño ha sido la concesión de más pensiones, de mayor importe y destinadas a un mayor número de beneficiarios, sin importar el efecto que esto pudiese causar en los estados contables y financieros, en la obligaciones que asume el sistema o en la propia eficiencia de la cobertura. Dicho todo lo anterior, consideramos útil para el devenir de este trabajo de investigación observar de una forma sencilla la situación actual del sistema de protección en términos económicos. La Seguridad Social manejó un presupuesto de 136.103,73 millones de euros para 2015 y 131.820,54 millones de euros para 2014, representando

esta última cuantía aproximadamente el 12,45% del Producto Interior Bruto a precios de mercado en ese ejercicio²⁹. Este paradigma socioeconómico de referencia se mueve en un escenario de incrementos continuados de la esperanza de vida, con un mercado laboral en recesión y con unos flujos migratorios variables que han invertido la tendencia del final de la década pasada.

En cuanto a la esperanza de vida al nacer, su evolución para la población española ha sido creciente, de tal forma que España se habría situado como el cuarto país de la OCDE con la mayor esperanza de vida al nacer tras Suiza, Japón e Italia³⁰.

Cuadro 7. Esperanza de vida al nacer. Años

	1995	2000	2005	2010	2012	2014
Esperanza de vida	78,0942	79,3403	80,2817	82,0852	82,2884	82,9810

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Consulta: 22 de agosto de 2015.

Respecto a los indicadores del mercado de trabajo, existe cierta estabilidad en la tasa de actividad en el tiempo, si bien la evolución de la tasa de paro refleja un incremento significativo en el número de desempleados respecto a la población activa en los últimos años³¹.

Por último, en cuanto a los flujos migratorios, España ha pasado de ser un país receptor de emigrantes a tener un saldo migratorio negativo desde 2010, basado en tres elementos importantes: España tiende a recibir menos extranjeros, de los extranjeros que han recalado en España en períodos previos muchos están retornando a su país y, por último, también se está produciendo una emigración creciente de españoles hacia otros territorios.

²⁹ PIB a precios de mercado para 2014 (Base 2010): 1.058.469 millones de euros. Fuente: *Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2008*. Instituto Nacional de Estadística. Consulta: 15 de julio de 2015. Nótese que el PIB a precios de mercado para 2013 en Base 2008 fue de 1.022.988 millones de euros frente al PIB a precios de mercado para el mismo año en Base 2010: 1.049.181 millones de euros.

³⁰ OCDE (2013): *Health at a Glance. OECD indicators*. Pág. 25.

³¹ La *tasa de actividad* es el número de personas en activo dividido por la población total en el colectivo de referencia. La *tasa de paro (o de desempleo)* es el cociente entre el número de desempleados y el número de personas activas en el período. Para ver la metodología empleada en España en la consideración de personas desempleadas y en activo, véase la *Encuesta Laboral Población Activa* (www.ine.es).

Cuadro 8. Tasa de actividad, tasa de desempleo y coste total por trabajador

	Tasa de actividad	Tasa de paro	Coste total por trabajador
2006	58,64	8,45	2.230,11
2007	59,28	8,23	2.320,23
2008	60,08	11,25	2.431,92
2009	60,18	17,86	2.516,82
2010	60,28	19,86	2.526,97
2011	60,33	21,39	2.556,79
2012	60,40	24,79	2.540,26
2013	60,02	26,10	2.544,14
2014	59,60	24,44	2.535,99

Fuente: *Encuesta de Población Activa y Encuesta Trimestral de Coste Laboral*. Instituto Nacional de Estadística. Resultados según el promedio de los valores trimestrales. Consulta: 15 de julio de 2015.

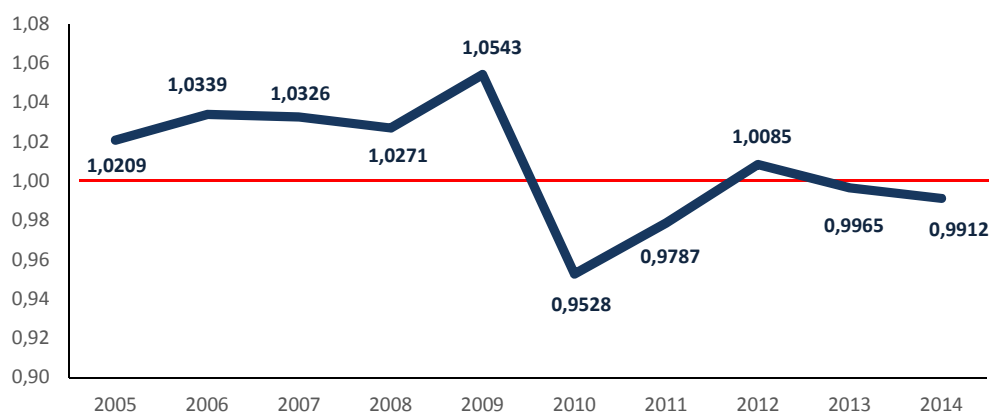
Cuadro 9. Fenómenos migratorios

	Inmigración	Emigración	Emigrantes Nac. Española	Saldo migratorio
2008	599.074	288.432	33.505	310.642
2009	392.963	380.118	35.990	12.845
2010	360.704	403.379	40.157	-42.675
2011	371.335	409.034	55.472	-37.699
2012	304.054	446.606	57.267	-142.552
2013	280.772	532.303	73.329	-251.531
2014	307.035	409.343	78.785	-102.308

Fuente: *Estadística de migraciones*. Instituto Nacional de Estadística. Año 2014, datos provisionales. Consulta: 15 de julio de 2015.

Véase ahora la evolución de la ratio entre ingresos y gastos totales del sistema:

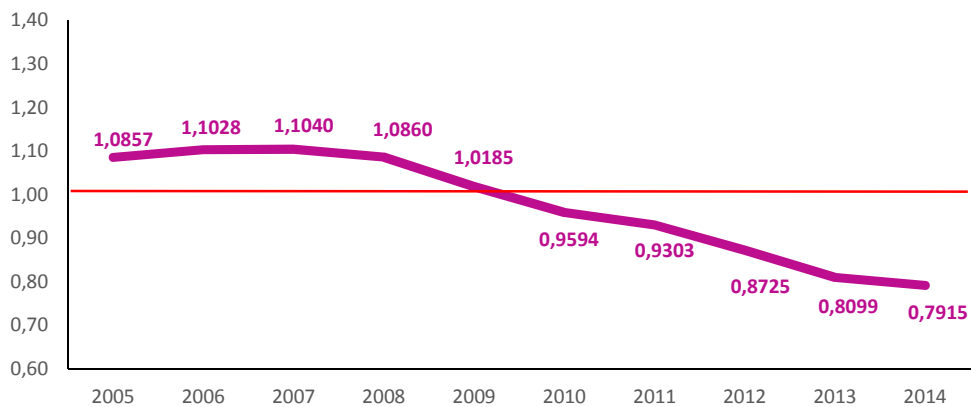
Gráfico 5. Ingresos totales *versus* gastos totales de la Seguridad Social



Fuente: elaboración propia con *Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 2016*.

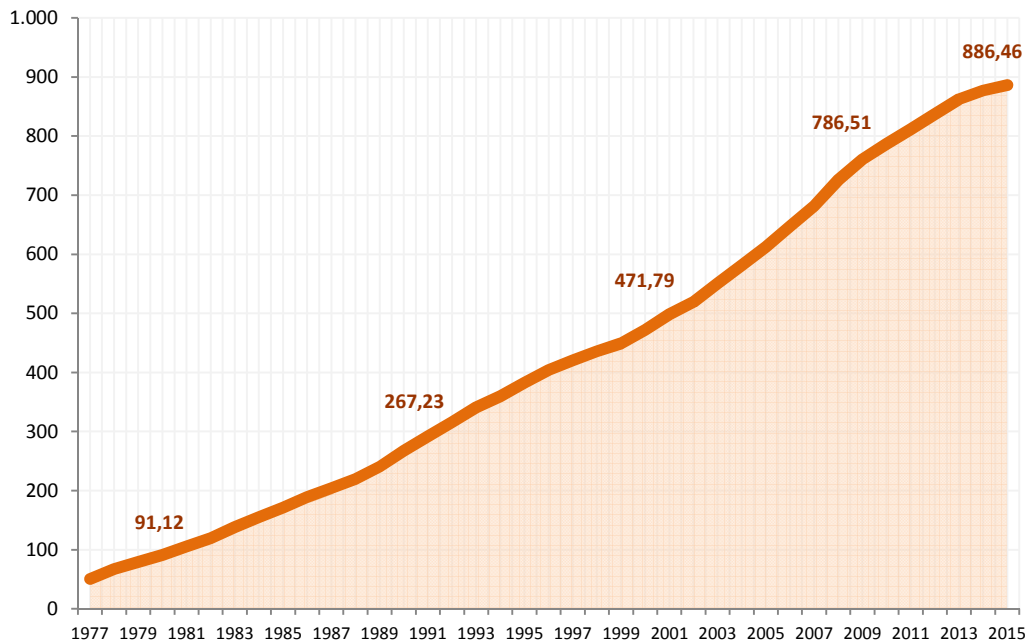
Como se aprecia, la Seguridad Social española no presenta unos resultados alentadores en la comparación entre ingresos y gastos totales, aunque el panorama es todavía más comprometido cuando se eliminan entre otras, partidas de carácter extraordinario, o se comparan únicamente ingresos por cotizaciones y prestaciones económicas. Por ejemplo, en 2014 las cotizaciones ingresadas únicamente habrían hecho frente al 79,15% de las prestaciones económicas otorgadas, siendo importante para el sistema el soporte que da el denominado fondo de reserva, cuya capacidad es, sin embargo, transitoria.

Gráfico 6. Relación entre cotizaciones y prestaciones económicas de la Seguridad Social



Fuente: elaboración propia con datos de la Seguridad Social. *Proyecto de Presupuestos 2016*.

Gráfico 7. Pensión media mensual de la Seguridad Social por año



Fuente: Seguridad Social. *Anexo al Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Año 2015 estimaciones.

Por último, la evolución de la pensión media mensual total es creciente con el tiempo, con una incidencia derivada de la propia revalorización pero también del hecho de que las nuevas incorporaciones al sistema presentan pensiones iniciales superiores a las correspondientes a las de las bajas del período, intensificándose así la tendencia al desequilibrio económico-financiero.

En todo caso, el escenario anterior se centra en la comparación dentro del ejercicio bajo un prisma de liquidez pero no en el concepto de sostenibilidad, para cuya valoración completa se requeriría la introducción de herramientas actuariales de análisis, por lo que no hay que descartar un déficit oculto que, aunque no se observe a primera vista, comprometa en mayor medida la fortaleza del sistema de protección.

2. Distintas aproximaciones a la Seguridad Social

Definidos en apartados anteriores el espíritu y las características básicas de la Seguridad Social española, revisaremos aquí distintas aproximaciones al modelo de cobertura que se realizan desde diferentes puntos de vista (estadísticos, económicos y/o actuariales), teniendo en cuenta que estas aproximaciones se presentan dentro de un espacio de complementariedad y pueden formar parte perfectamente de un todo a la hora de caracterizar o estudiar un sistema de protección o un subconjunto dentro del mismo.

2.1. La Tasa de sustitución

Sobre la *tasa de sustitución* T^s (o *tasa de reemplazo*)³², Barr, P. y N. Diamond (2010) exponen que: “es la ratio de los ingresos mensuales que un pensionista recibe sobre el salario que él o ella percibía mientras estaba trabajando (en ambos casos netos de impuestos y transferencias). Así definida, la tasa de sustitución es una medida de la efectividad de la distribución del consumo. Este término se usa también para indicar la ratio de la pensión media sobre el salario medio, siendo en este caso una medida de la capacidad que tiene el sistema de pensiones para mitigar la pobreza entre los mayores”. Para Vicente Merino, A. *et al.* (2011) la tasa de sustitución es un indicador “representativo de la calidad de vida de los pensionistas” y para Martínez Noval, L. (2005) es un indicador instantáneo que refleja mejor que ningún otro “el ciclo de vida del trabajador en la medida en la que da cuenta de los cambios registrados en el consumo en el tránsito de la vida laboral activa a la pasiva”. Según la OCDE³³, en España los valores para la tasa bruta y la tasa neta, respectivamente, han sido los siguientes: 73,9% y 80,1% para el año 2012, 81,2% y 84,9% para el año 2008 y 81,2% y 84,7% para el año 2006. Vicente Merino, A. *et al.* (2011), en base a los datos de la *Muestra Continua de Vidas Laborales* 2009, cifraron la tasa de sustitución en el 84,9% en los cálculos de la base reguladora con 15 años de bases de cotización y en el 79% si se utilizan 25 años de bases de cotización en el cálculo de la base reguladora³⁴.

La tasa de sustitución es una medida sencilla que, en la práctica y para el conjunto de la población, suele recurrir a la comparación entre la pensión de jubilación inicialmente

³² Se admite hablar de *tasa de sustitución* cuando se refiere a la base reguladora y de *tasa de reemplazo* cuando se hace referencia al último salario si bien, en nuestra opinión, tal diferenciación no es aquí relevante.

³³ OCDE (2013, 2008, 2006): *Pension at a Glance*.

³⁴ En los términos de la reforma introducida por la *Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social*.

percibida y el último salario, siendo utilizada como un indicador de la generosidad del sistema o de la eficiencia de su cobertura, así como una herramienta auxiliar para facilitar la toma de decisiones por parte del individuo respecto a los pilares privados de previsión. Por otra parte, se usa en la comparación entre distintos modelos de protección en aras a su claridad en el cálculo, comprobación e interpretación y ha sido presentada como referente del concepto de prestación monetaria *adecuada*³⁵. Sin embargo, tal y como se expone en Hernández González, D. (2013): "Esta tasa de sustitución no recoge la verdadera relación habida entre el cotizante y el sistema, pues utiliza un solo instante temporal en la comparación de aportaciones y prestaciones, prestaciones que además no se corresponden totalmente con la distribución de salarios y de bases de cotización acaecidas".

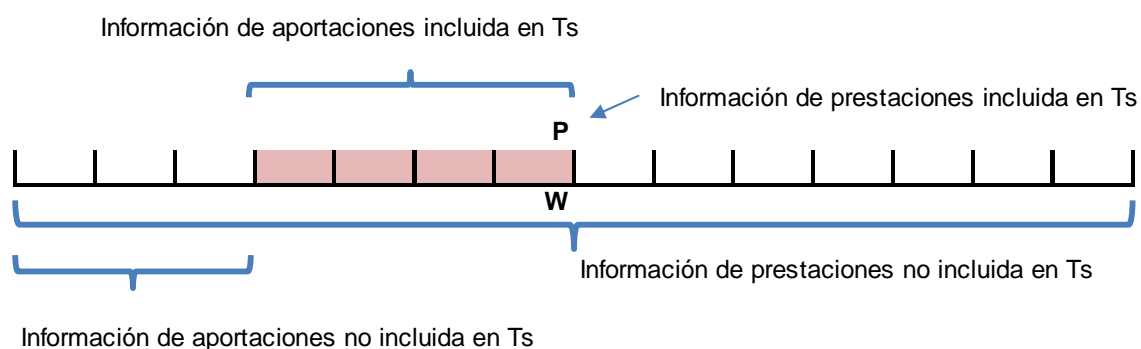
En otro orden de cosas, es dudosa su eficiencia como indicador para la toma individual de decisiones en un modelo dinámico en el que tales decisiones respecto a la combinación de pilares de protección se han de adoptar con una antelación suficiente. El individuo no siempre tiene capacidad para la planificación puesto que puede no estar habilitado legalmente para ello o no tener renta disponible, pero además no tiene por qué tener las mismas necesidades económicas durante sus etapas de activo y pasivo y, sin embargo, cuando recibe la información valoraría una tasa de sustitución que se proyecta a ese momento como si ambas situaciones fueran iguales. Hay que tener también en cuenta que, una vez alcanzada una etapa de pasivo, no todos los perfiles de la población tendrán como objetivo o necesidad el mantener o aumentar el nivel de vida que tenían en la etapa activa (y mucho menos durante toda la duración de la etapa pasiva). Igualmente, la tasa de sustitución parte de una relación entre bases de cotización y salarios que no tiene por qué ser realmente equitativa, por ejemplo en el caso de los trabajadores autónomos o con la aplicación de límites derivados de máximos y mínimos en ambas variables, lo que limita enormemente la validez para el valor del conjunto del modelo, más todavía si se tiene en cuenta el peso en el total del segmento de trabajadores por cuenta propia.

En otro orden de cosas, puesto que en España el cálculo de una pensión inicial P_0 no se basa en toda la vida laboral, nada impide que para tasas de sustitución y prestaciones iguales la estructura de aportaciones realizadas al sistema difiera entre dos individuos, lo que limita su capacidad informativa. La tasa de sustitución asume intrínsecamente estabilidad en la vida laboral y que en el cálculo de la pensión inicial se utilizan buenos estimadores de la misma pero, evidentemente, la realidad no se adapta a estas hipótesis. Asimismo, las prestaciones situadas en el numerador plasman una situación en un

³⁵ Según indica Brimblecombe, S. (2013). Pág. 171.

instante concreto que se refleja en una cuantía determinada, pero obvian un argumento de gran importancia en términos actuariales como es la duración temporal de la corriente de prestaciones. En definitiva, la tasa de sustitución en su versión más habitual parte de información incompleta, pues en la estructura de aportaciones solamente tiene en cuenta los datos referentes al período incluido en la determinación de la pensión mientras que, generalmente, en la estructura de prestaciones únicamente tiene en cuenta el valor en un único instante, el del acceso a la jubilación³⁶, tal y como se ve en el siguiente esquema:

Esquema 1. Corrientes de aportaciones y prestaciones en la tasa de sustitución



T^s tampoco recoge información sobre todas las prestaciones otorgadas al beneficiario y es realmente ineficaz allí donde la prestación de jubilación se alcanza desde una situación de pasivo, por ejemplo desde la incapacidad permanente en sus distintas formas. Por lo tanto, es una medida que obvia una parte de la realidad de la Seguridad Social al centrarse únicamente en una de sus contingencias. Finalmente, en su utilización como indicador dicha tasa debe enfrentarse al coste de los bienes y servicios que se sustentan con la pensión otorgada y a las verdaderas necesidades del individuo. Con todo ello, a pesar de su éxito y utilización, la tasa de sustitución es un indicador pobre de cara a la toma de decisiones, incluso en la comparación entre sistemas, siendo una herramienta muy sensible a su utilización en un entorno de alto riesgo político. Lo cierto es que, cualquier análisis que se quiera hacer respecto a un sistema de seguridad social debe completar la información de la tasa de sustitución con otras medidas que suplan sus carencias.

³⁶ La OCDE parte en sus cálculos de un denominador basado en un porcentaje medio de ingresos salariales, opción que corrige parcialmente la falta de información aludida pero que, por el contrario, añade incertidumbre al propio concepto de la tasa de sustitución puesto que se aleja de la idea de medida de la efectividad de la pensión como herramienta de reemplazo del salario.

2.2. El Gasto social sobre el Producto Interior Bruto

La ratio entre el gasto social G y el Producto Interior Bruto PIB es también una medida muy utilizada en el análisis de los sistemas de seguridad social, especialmente en su orientación a la comparación entre distintos países, siendo una herramienta intuitiva y relativamente fácil de calcular:

$$\eta_t = \frac{G_t}{PIB_t} \quad [29]$$

Cuadro 10. Porcentaje de Gastos de Protección Social sobre el Producto Interior Bruto

	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012
España	20,0	20,3	20,5	22,0	25,5	26,0	25,9
UE-15	27,2	27,5	27,2	27,5	30,2	29,9	30,4
UE-28				26,7	29,4	29,0	29,5

Fuente: Seguridad Social con base en EUROSTAT. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Incluye las funciones: *Enfermedad, Invalidez, Vejez, Supervivencia, Familia, Desempleo, Vivienda y Exclusión social*, así como *Gastos de funcionamiento y Otros gastos*.

Esta visión se completa con la elasticidad ε en función de las tasas de variación del gasto social real ψ y del Producto Interior Bruto φ .

$$\varepsilon = \frac{\psi}{\varphi} \quad [30]$$

Esta herramienta requiere transparencia y la homogeneidad de conceptos para la comparación entre diferentes sistemas, tanto en cuestión de gastos como en cuestión de PIB y, al ser un cociente, plantea la necesidad de evaluar qué parte del mismo es la que está determinando la variación, si el numerador o el denominador. Por ejemplo, en España se ha realizado en 2014 una nueva revisión del Producto Interior Bruto que ha incluido partidas hasta entonces omitidas y que son de difícil estimación, pero que pueden no ser contempladas en otros sistemas. Por otra parte, la noción de protección social es más amplia que la de seguridad social, por lo que tomar decisiones en este último campo desde lo que se pueda desprender del primero no siempre será una opción muy eficiente.

Desde una perspectiva más crítica hay que indicar que η no mide lo que puede o necesita sustentar el gasto social o su efectividad; su enfoque subyacente parte de la premisa de que un sistema de cobertura es mejor cuanto mayor es el valor de esta ratio,

algo que no es cierto puesto que, ante una igualdad en el Producto Interior Bruto, un sistema A puede destinar una mayor cuantía a gasto social G que un sistema B y, sin embargo, la protección efectiva a los ciudadanos puede ser mejor en B que en A. Por ejemplo, una eficiencia en costes por el control del fraude o por la reducción de costes de gestión supone un menor gasto en protección social, pero eso no significa un peor sistema de cara al ciudadano, muy al contrario; en definitiva, no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Además, el valor ha de ponerse en consonancia con las estructura de necesidades de cada país, pues los condicionantes geopolíticos y/o sociales pueden estar determinando el valor de η y llevar a conclusiones inadecuadas.

Sobre η , Ferrara, C. y G. Ferrara (2014) indican que: "It may be recognised that this indicator does not take into account two factors that may cause a different impact of the pension expenditure on the public finance, namely the pension taxation and the contribution income". Por ello, proponen trabajar con un indicador de sostenibilidad η^* , definido como el gasto en pensiones neto del efecto fiscal y minorado en las contribuciones efectuadas por las personas cubiertas:

$$\eta^* = \frac{G - T - I^c}{PIB} \quad [31]$$

G	Gasto bruto en pensiones
T	Impuestos relativos a pensiones
I	Contribuciones al sistema

Para España, según estos autores, de un valor de η en los ejercicios 2010 y 2030 de 10,1% y 10,6% respectivamente, se obtendría un valor para la ratio corregida η^* de (-1,4%) y de (-0,9%) respectivamente.

2.3. Modelos contables

Son numerosas las aproximaciones al modelo general de la Seguridad Social a través de grandes magnitudes contables. Si se parte de la inversa de la ecuación de equilibrio general [6], la desagregación en sus componentes daría lugar a una expresión:

$$K_t = \frac{I_t}{G_t} = \frac{N_t^c \cdot \bar{B}_t^c \cdot \bar{\theta}_t}{N_t^p \cdot \bar{B}_t^r \cdot \bar{F}_t}$$

$$K_t = \left(\frac{N_t^c}{N_t^p} \right) \cdot \left(\frac{\bar{B}_t^c \cdot \bar{\theta}_t}{\bar{B}_t^r \cdot \bar{F}_t} \right) \quad [32]$$

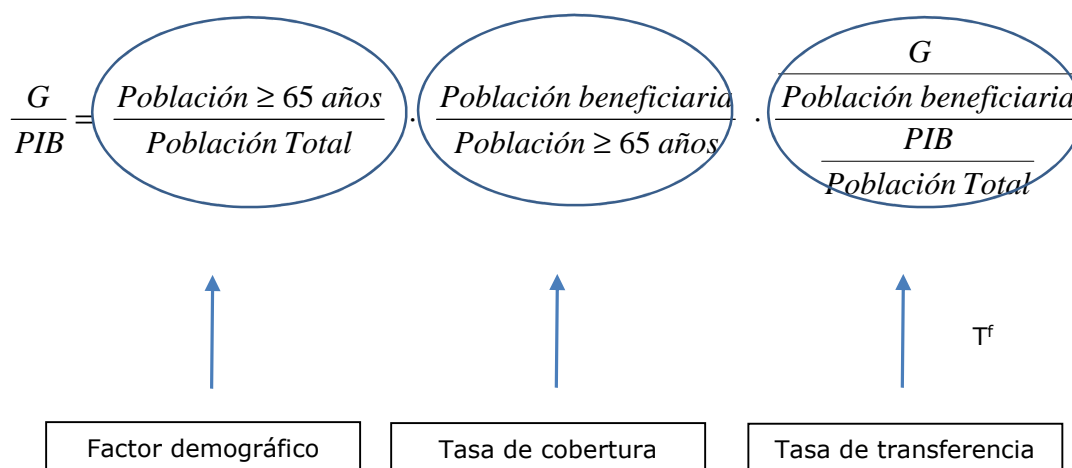
N_t^c	Número de cotizantes
N_t^p	Número de pensionistas
\bar{B}_t^c	Base media de cotización
\bar{B}_t^r	Base reguladora media
$\bar{\theta}_t$	Tipo de cotización medio
\bar{F}_t	Coeficiente medio aplicable a la base reguladora

Esta desagregación, que también admite promedios en el número de efectivos, permite una interpretación rápida de la situación del sistema; se espera que aumentando el valor de cualquiera de las variables en el numerador o disminuyendo el valor de cualquiera de las variables en el denominador el sistema se acercará más a la sostenibilidad. Sin embargo, esto puede ser cierto sólo ante homogeneidad en el resto de las variables [véase cuadro 6], teniendo en cuenta que los argumentos del numerador se relacionan con otras variables exógenas en el campo del empleo mientras que los del denominador lo hacen con variables exógenas en el campo de la protección y, por ello, presentan determinados límites en su variación. En la interpretación de [32] se basan las corrientes de pensamiento que dan una gran importancia a la relación entre el número de cotizantes y pensionistas en un instante t , si bien este valor toma interés únicamente en ese instante y en su relación con el resto de las variables que forman parte de la ecuación en ese momento. Un aumento del número de cotizantes no tiene por qué ser siempre beneficioso en términos de sostenibilidad, ni siquiera en términos de liquidez, pues si al mismo tiempo baja la base media de cotización, los recursos del sistema pueden ser inferiores a los existentes en un momento anterior.

Otros análisis sobre la Seguridad Social parten de la relación entre el gasto en pensiones G y el Producto Interior Bruto, que se puede descomponer en factores de la siguiente manera:

$$\frac{G}{PIB} = \frac{G}{PIB} \cdot \frac{Población \geq 65 \text{ años}}{Población \geq 65 \text{ años}} \cdot \frac{Población beneficiaria}{Población beneficiaria} \cdot \frac{Población total}{Población total} \quad [33]$$

donde, reagrupando:



Por su parte, la tasa de transferencia T^f puede transformarse teniendo en cuenta los deflatores (el Índice de Revalorización de las pensiones IRP como deflactor de las mismas y $DPIB$ como deflactor del Producto Interior Bruto), tal que vendría definido como producto de las prestaciones reales relativas y el efecto de la revalorización relativa:

$$T^f = \frac{\frac{\left(\frac{G^p}{IRP}\right)}{Población beneficiaria}}{\frac{\left(\frac{PIB}{DPIB}\right)}{Población total}} \cdot \frac{IRP}{DPIB} \quad [34]$$

No hay que perder de vista de cara a estos modelos que el número de pensiones no tiene por qué coincidir con el número de pensionistas, situándonos en modelos globales de corte principalmente teórico y que presentan cierta dificultad para reconducirse hacia la realidad de los cotizantes y pensionistas y el conocimiento de los desequilibrios.

2.4. Las Tasas de dependencia

Otras herramientas muy utilizadas en el análisis y delimitación de la Seguridad Social son las tasas de dependencia, que pueden dividirse principalmente en tres: la *tasa de dependencia de vejez*, la *tasa de dependencia demográfica* y la *tasa de dependencia económica*³⁷, cuyo principal valor es que son herramientas intuitivas y sencillas de calcular, aunque de alcance real muy limitado.

³⁷ Véase Martínez Noval, L. (2005).

La *tasa de dependencia de vejez* TD^v se define de la siguiente forma:

$$TD^v = \frac{\text{Población años } \geq 65}{\text{Población 15 – 64 años}} \quad [35]$$

y es empleada con la intención de relacionar teóricas fuentes de ingresos y gastos a través de las unidades que supuestamente podrían generarlos. Esta tasa tiene un buen número de partidarios a la hora de analizar las pensiones públicas, aunque su utilidad y su valor de cara a la toma de decisiones son discutibles al comparar unidades que no se relacionan siempre con la Seguridad Social: no todas las personas que forman parte del denominador han de tener la condición de generadores de ingresos, mientras que en el numerador se mezclan unidades representativas de gasto teórico que no son homogéneas (por ejemplo, beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas) y, sin embargo, no se recogen otras de importancia, por ejemplo, aquellas personas que se relacionan con el sistema como beneficiarios durante su etapa laboral.

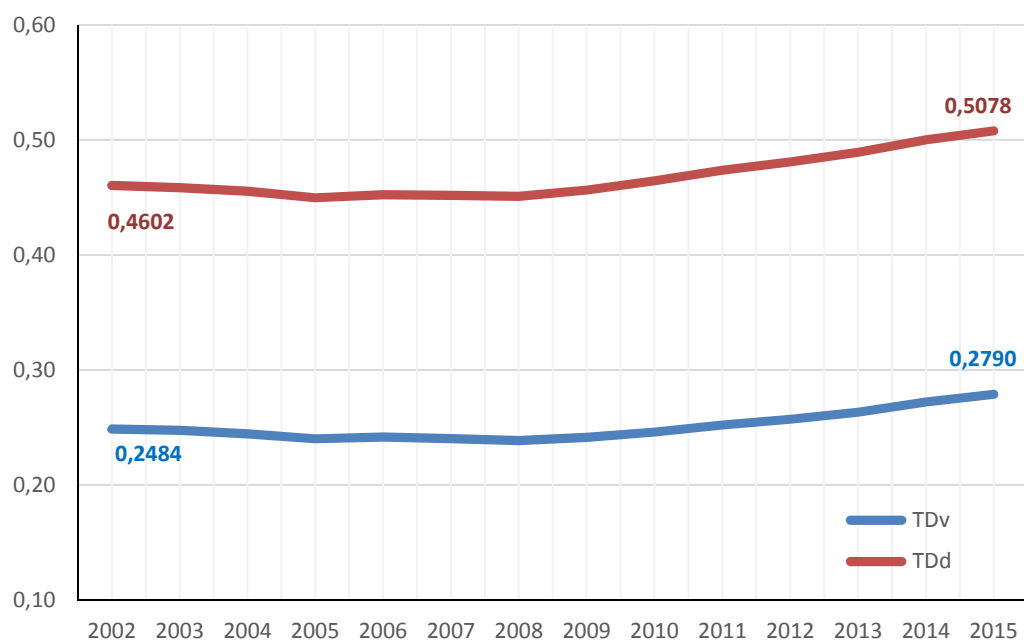
Conceptualmente la tasa de dependencia de vejez es incluso de escasa utilidad en la comparación entre distintos sistemas, puesto que las edades establecidas no están relacionadas en todos los casos a través de los mismos límites para un mismo hecho causante; así, por ejemplo, la edad de jubilación, que parece ser el punto de partida en la concepción de la tasa, es muy diferente según los países o pueden encontrarse en un mismo territorio distintas edades de acceso para esa contingencia, tal y como actualmente ocurre en España.

Por su parte, la *tasa de dependencia demográfica* TD^d trata de reflejar una relación entre población dependiente y población teóricamente productiva:

$$TD^d = \frac{\text{Población } < 15 \text{ años o } \geq 65 \text{ años}}{\text{Población 15 – 64 años}} = TD^v + \frac{\text{Población } < 15 \text{ años}}{\text{Población 15 – 64 años}} \quad [36]$$

pero, como es lógico y puesto que se puede expresar en función de TD^v , adolece de problemas similares a los ya indicados para ésta. En los últimos años estas tasas han tenido en España la siguiente evolución:

Gráfico 8. Tasas de dependencia de vejez y dependencia demográfica. España



Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. *Cifras de población*. Población residente a 1 de enero de cada año.

Sin perjuicio de todo lo anterior, se ha detectado correlación estadísticamente significativa entre los valores de las tasas en el período 2005-2013 y el cociente θ entre ingresos por cotizaciones y prestaciones económicas de la Seguridad Social (no así con el cociente entre los ingresos totales y los gastos totales):

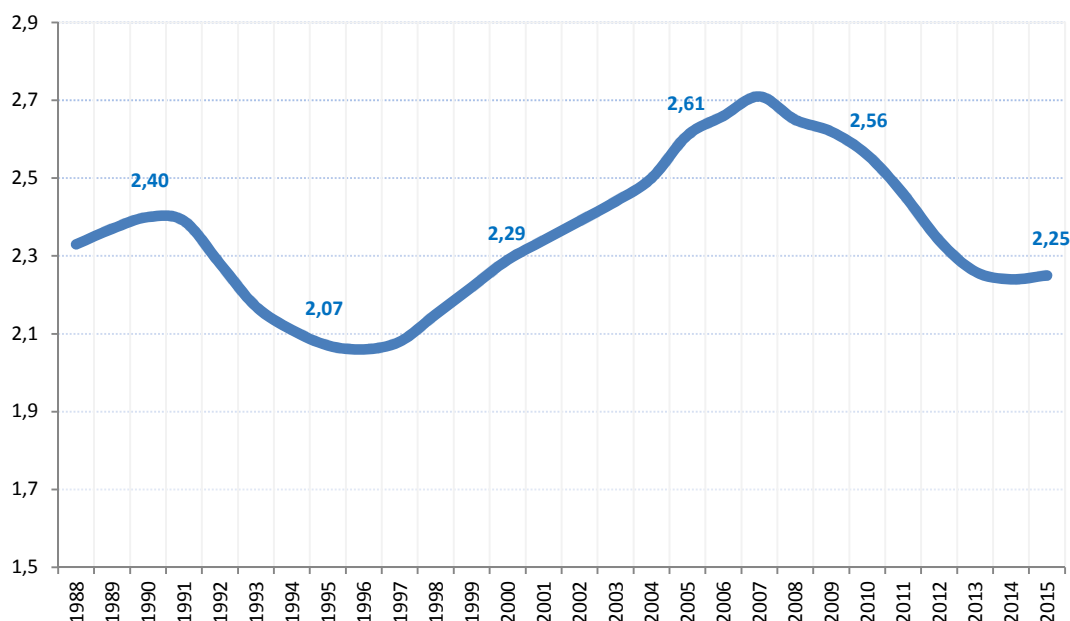
$$\begin{aligned} \rho(TD^v, \theta) &= -0.9616 & \rho(TD^d, \theta) &= -0.9847 \\ \rho(TD^v, \theta) &= -0.4947 & \rho(TD^d, \theta) &= -0.5290 \end{aligned}$$

Un paso más en el análisis es el que aporta la *tasa de dependencia económica* TD^e , que relaciona el número de personas inactivas (en lo que aquí interesa los perceptores de pensiones) y el número de personas que las financian, es decir, principalmente los ocupados, si bien hay que diferenciar el concepto de *perceptor de una prestación* del de *pensionista*, de carácter más reducido, así como resaltar el que los propios pensionistas pueden ser a su vez generadores de ingresos en entornos de compatibilidad de rentas.

$$TD^e = \frac{\text{Cotizantes}}{\text{Pensionistas}} \quad [37]$$

Variantes sobre esta posibilidad son la ratio de afiliados entre pensionistas o la ratio de cotizaciones entre pensiones.

Gráfico 9. Relación de afiliados y pensionistas



Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Año 2015, datos a junio.

Aunque esta tasa pueda ser más adecuada en el análisis de la Seguridad social que las dos tasas precedentes, también se basa en el número de efectivos y no recoge la verdadera distribución de gastos e ingresos ni la relación existente entre ambas variables. Por ejemplo, en España y desde la perspectiva de los ingresos, para igualar en el año 2015 lo que se ingresa por un solo cotizante con bases máximas del grupo 1 se necesitarían más de cuatro cotizantes por bases mínimas del grupo 4, lo que derivaría en un futuro también en mayores prestaciones esperadas por cada cotizante de bases máximas frente al que proviene de bases mínimas (sin perjuicio de los límites para pensiones establecidos en las normas).

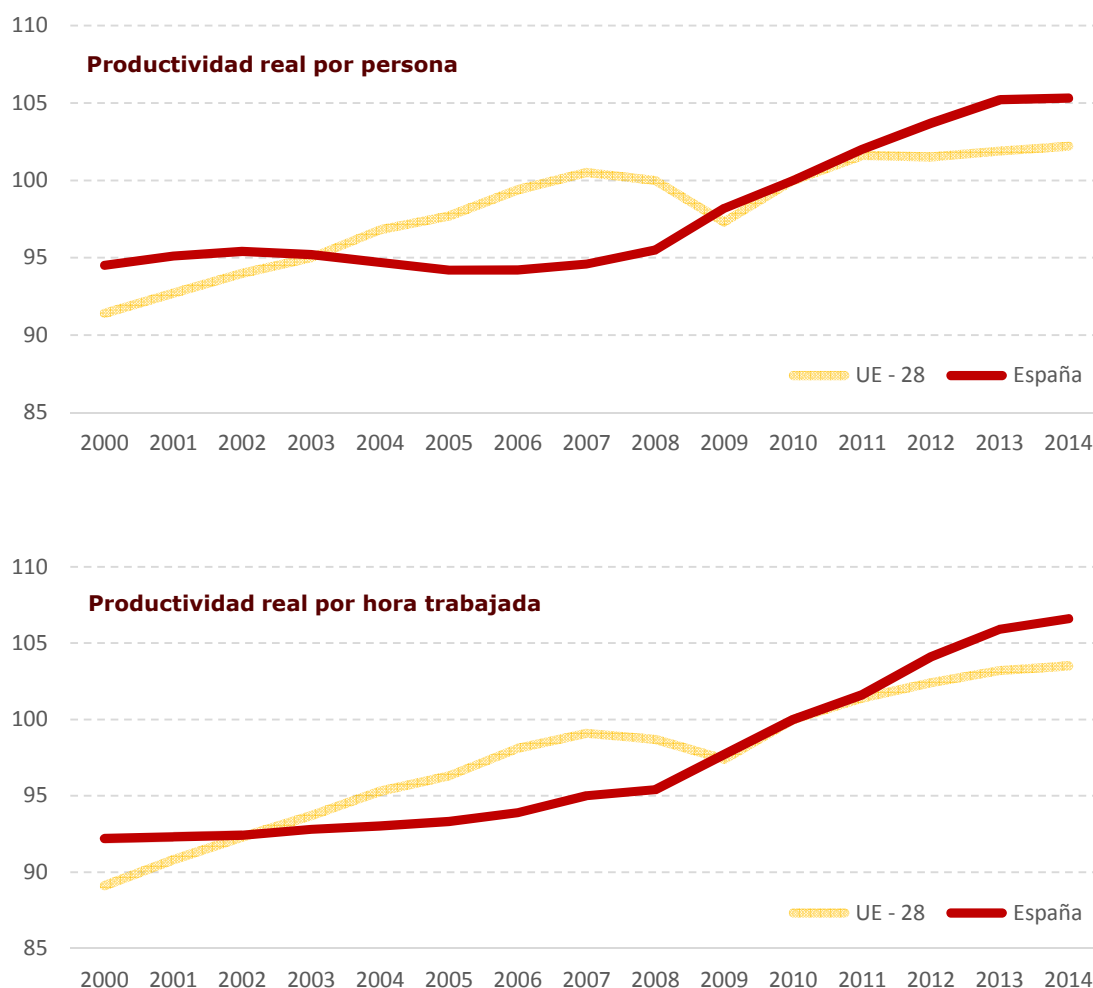
2.5. La Productividad

Genéricamente puede hablarse de la productividad λ como de la relación entre la producción P realizada por un sistema y los recursos R empleados para obtenerla:

$$\lambda = \frac{P}{R} \quad , \quad \frac{\partial \lambda}{\partial P} = \frac{1}{R} \quad , \quad \frac{\partial \lambda}{\partial R} = -\frac{P}{R^2} \quad [38]$$

Para España se presentan los siguientes datos de la evolución de la productividad:

Gráfico 10. Productividad por persona y por hora trabajada en España y la Unión Europea (UE-28)³⁸



Fuente: Eurostat. Base 2010=100. Los datos de España se presentan por la fuente como "provisionales". Consulta: 22 de julio de 2015.

Si se aceptan estas medidas de productividad, como se puede desprender de los gráficos anteriores en su comparación con la diferencia de ingresos y gastos de la Seguridad Social (también en base 2010), ambas series no siguen una tendencia similar. Es habitual pensar que el incremento de la productividad es beneficioso para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por lo tanto, bajo esta filosofía la situación de la Seguridad Social requeriría la variación al alza de esta variable para su mejora; una de las ideas que subyace en esta aserción es que el incremento de la productividad supone

³⁸ Nótese que la productividad por persona es aquí el PIB (ajustado por la paridad de compra) entre el número de empleados, por lo que un mayor desempleo, para un mismo Producto Interior Bruto, incrementa la productividad. Si sobre el PIB anual que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (por promedio de los datos trimestrales) se calcula la productividad por ocupado frente a la productividad por activo, los comportamientos en la última década son totalmente divergentes.

recursos adicionales disponibles que pueden ser revertidos hacia la fuerza laboral incrementando sus salarios o el número de unidades que la componen, algo que en ambas situaciones resultaría en una variación al alza de los ingresos vía incremento de las cotizaciones realizadas. El aumento de la productividad laboral aumentaría el Producto Interior Bruto y, a su vez, los salarios, permitiendo a cada cotizante financiar más gasto en pensiones. Dentro de esta línea de pensamiento podemos encontrar, por ejemplo, a Navarro López, V. (2013):

Uno de ellos, de especial importancia, es el del aumento de la productividad, es decir, que un trabajador dentro de 40 años producirá mucho más que un trabajador ahora (...) Un trabajador agrícola ahora produce más alimentos de los que antes producían nueve trabajadores, y ello como consecuencia del enorme crecimiento de la productividad (...).

Pues bien, sustituyan alimentos por pensiones y vean el posible error que significa alarmar a la ciudadanía argumentando que dentro de 40 años no habrá suficientes trabajadores para sostener las pensiones. Los datos supuestamente alarmantes aparecen cuando se indica que el número de cotizantes por beneficiario está disminuyendo, reduciéndose (según varias estimaciones) por ejemplo a la mitad en el año 2050. Ahora bien, es fácilmente demostrable que esta disminución que se considera tan preocupante, en realidad no lo es, ya que es más que probable que un trabajador producirá casi el doble en 2050 que ahora, con lo cual podría mantener casi al doble de pensionistas (...).

Si la productividad creciera un 1,5% por año, que es el promedio de crecimiento en los últimos 50 años, el PIB de España en 2060 sería 2,20 veces mayor que en 2007 (en monedas constantes, es decir, que la capacidad adquisitiva real habrá más que doblado la actual). En otras palabras, si en 2007 el PIB era, por ejemplo, 100, en 2060 sería 220. Pues bien, si en pensiones nos gastamos en 2007 un 8% del PIB, es decir, 8 puntos del PIB —dejando para los no pensionistas 92 puntos—, en 2060 nos gastaremos el 15% de 220, es decir, 33 puntos en pensiones, quedando para los no pensionistas 187 puntos, muchos más que los 92 de 2007. En realidad, hace 50 años nos gastábamos el 3% del PIB en pensiones, y en 2007 nos gastamos el 8%. Hemos casi triplicado el gasto en pensiones y, sin embargo, los recursos para los no pensionistas también han aumentado, pues el tamaño de la tarta es mucho mayor ahora que hace cinco décadas.

En nuestra opinión, estos planteamientos presentan diversas premisas ciertamente discutibles y no tienen en cuenta un hecho fundamental, tal es la transformación de la relación entre la generación de riqueza y el empleo. La productividad, tal y como es aquí definida, puede incrementarse si la variación positiva del numerador en [38] es mayor

que la variación acaecida en el denominador o, por el contrario, la variación negativa del denominador es menor que la acaecida en el numerador (recuérdese de nuevo el cuadro 6). Sin ninguna duda los sistemas de calidad, la mejora del conocimiento y la evolución tecnológica son capaces de incrementar la producción sin que lo hagan los niveles de ocupación de las personas e, incluso, pueden favorecer el descenso de estos últimos. Por otra parte, tampoco hay garantía de que esa mejor productividad repercuta en el salario (y en unas mayores cotizaciones e ingresos para la Seguridad Social), primero porque esa productividad depende cada vez más de la maquinaria y la tecnología y no de la aportación de la fuerza laboral y, en segundo lugar, porque una mayor productividad puede perfectamente dirigir sus beneficios hacia la remuneración del capital y retornos de carácter financiero y no hacia el salario o el número de efectivos empleados. Desde otra perspectiva habría incluso que analizar cómo se produciría esa distribución final del teórico incremento de la productividad que no es producido por la fuerza laboral: si por igual a todos los individuos, si a grupos específicos o si a generaciones específicas, fomentándose con ello la lucha por los recursos existentes.

Hacemos hincapié en el problema que subyace en la afirmación de que un trabajador del futuro producirá mucho más que un trabajador del presente. Ni la revolución industrial ni la evolución agrícola del pasado parecen comparables a la evolución tecnológica actual; en aquellas se substituyó progresivamente a la bestia por la máquina, aunque ésta todavía dependía del hombre, pero lo que se está produciendo en la actualidad es la substitución directa del hombre por la máquina, ésta cada vez más autosuficiente. Junto a lo improductivo de comparar aquí dos períodos con condicionantes socioeconómicos bien distintos, hay que matizar que en el futuro nada asegura que sea el trabajador como tal el que producirá para poder asegurar las pensiones, sino que debería hablarse de la producción por unidad con capacidad de ser empleada puesto que se podrá alcanzar la misma productividad con un número menor de trabajadores y un mayor número de personas desempleadas (en términos relativos y/o absolutos), no siendo cierto que los beneficios de esa mayor producción se dedicarán indiscutiblemente al sustento social de las personas. Obviamente, el panorama conceptual es ciertamente complejo. En la economía actual el incremento de la riqueza no se liga exclusivamente con el desempeño laboral o el factor trabajo –inciden con cada vez mayor importancia el predominio de la economía financiera sobre la economía real o la progresiva substitución del hombre por la máquina-, y ni siquiera la existencia de un trabajo puede ser suficiente para garantizar una vida con un cierto margen de suficiencia económica, mientras que se puede tener voluntariamente acceso a un trabajo –por ejemplo, no remunerado- que, sin embargo, sí contribuya de alguna manera a la variación de la productividad.

Otras reflexiones sobre este asunto parten de Argandoña, A. *et al.* (2013), quienes refieren que: "el crecimiento económico no resuelve los problemas que plantea la sostenibilidad de las pensiones porque no consigue mantener la tasa de reposición de las pensiones (...) el crecimiento económico, sea mucho o poco, es incapaz de mantener la tasa de reposición de las pensiones y, por lo tanto, no contribuye a resolver los problemas que plantea su sostenibilidad". Así, si en un período futuro determinado se incrementase la producción y ello conllevara incrementos salariales, ello permitiría tener más margen para pagar las pensiones del presente, pero también generaría mayores expectativas por parte del trabajador respecto a sus pensiones futuras (a las que se les pediría, al menos, la misma capacidad de satisfacción de bienes y servicios) y, como ya se ha apuntado, también daría lugar a mayores importes de coste futuro ante homogeneidad en las normas de cálculo.

Lo cierto es que, en el futuro, el ritmo de los avances tecnológicos hará que se necesiten cada vez menos personas en el proceso productivo, posiblemente se abaraten los costes y, por el contrario, aumente el desempleo, tal y como ya ocurrió a finales del siglo XIX con las grandes migraciones o posteriormente con el traslado de los excedentes laborales desde el campo a la ciudad, si bien no parece factible la resolución de esta situación nuevamente a través de la misma alternativa. Muy posiblemente en el futuro aumentarán los beneficios derivados de la productividad, pero no hay que perder de vista que se requiere que se mantenga la capacidad de compra pues, en otro caso, ¿de qué sirve mejorar tal productividad si no existe un número suficiente de compradores para adquirir los bienes resultantes aun cuando éstos puedan beneficiarse también de las mejoras tecnológicas?

Visto todo lo anterior, desde nuestra perspectiva la productividad como argumento de estudio y de sustento de la Seguridad Social no es tampoco un valor indiscutible que deba ser tenido en consideración de forma intensa.

2.6. El Tanto interno de rendimiento (r)

El tanto interno de rendimiento es una herramienta que relaciona las corrientes de ingresos y gastos, da una medida de la rentabilidad que se obtiene de las aportaciones y puede también utilizarse para el análisis en términos de sostenibilidad y equidad. Desde una perspectiva global en la que los gastos se pueden originar desde el momento de la entrada en el colectivo de referencia y con M y N los límites temporales en las corrientes de ingresos y gastos, se puede acudir a una expresión del tipo:

$$\sum_{k=0}^{M-1} \frac{I_k}{(1+r)^k} = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{G_k}{(1+r)^k} \quad [39]$$

que, bajo la nomenclatura que empleamos en este trabajo, quedaría³⁹:

$$\sum_{k=0}^{M-1} \frac{(\theta_k \cdot B_k^c) + I_k^{at} + I_k^o}{(1+r)^k} = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{G_k^p + G_k^{ec} + G_k^o}{(1+r)^k} \quad [40]$$

El tanto interno de rendimiento es una herramienta aplicable desde la perspectiva del conjunto de la población, de una cohorte demográfica o de un individuo, para el total del sistema o para una prestación concreta, si bien en este último caso es necesario realizar ajustes en la corriente de aportaciones para obtener una relación coherente entre los gastos y las aportaciones que los soportan, tal y como realizan Devesa Carpio, J.E. *et al.* (2002) para la pensión de jubilación contributiva, quienes sobre la base de [39] y la incorporación de probabilidades de supervivencia en las corrientes de aportaciones y prestaciones, obtienen un tanto interno de rendimiento para esta contingencia en el Régimen General de la Seguridad Social de entre el 3,17% y el 9,17%, según las características del beneficiario, con un r global del 4,16%. Devesa, J.E. y M.M. Devesa (2009) informan de un tanto interno del 3,32% para el total del sistema en 2006.

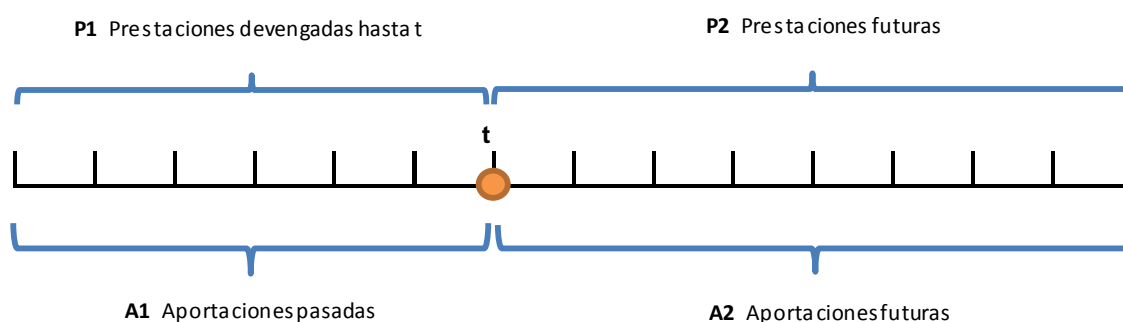
El cálculo del tanto interno de rendimiento es relativamente complejo y, en nuestra opinión, tiene un sentido más discreto si se fija su visión en un único instante, pero es muy interesante a la hora de comparar escenarios en distintos momentos del tiempo y estudiar los efectos de una medida concreta, así como para evaluar la sostenibilidad del sistema si se acepta la hipótesis de que el equilibrio ocurre si la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (como aproximación de la denominada *base fiscal* en el desarrollo original de Samuelson, P.A. (1958)) es igual al crecimiento de r . Si el tanto interno de rendimiento es mayor que un tipo de interés de referencia, el sistema concede una rentabilidad superior a la de su capacidad teórica, por lo que existe un desequilibrio; si ambos parámetros son iguales el sistema está en equilibrio, mientras que si r es superior al tipo de interés de referencia, el sistema se encuentra en situación de superávit. Es aquí donde se observa un problema adicional en el tanto interno de rendimiento, pues necesita relativizarse a través de su comparación con el tipo de interés de referencia fijado y, en general, aceptar la teoría de Samuelson al respecto.

³⁹ Es factible trabajar con un parámetro r^* tal que: $(1+r^*) = (1+r) \cdot (1+g)$, donde g es el tanto anual de crecimiento de la inflación. Por otra parte, es razonable pensar que los componentes de la estructura de ingresos y gastos, o al menos algunos de ellos, evolucionen conforme a una ley conocida.

2.7. La Deuda implícita

La deuda implícita en un instante t responde al valor de los compromisos presentes y futuros que en ese momento el sistema asume respecto a los participantes en el mismo independientemente de su situación (cotizantes o pensionistas). La deuda implícita parte de un enfoque eminentemente actuarial y es un instrumento útil de cara a la transparencia de la Seguridad Social, al estudio de su sostenibilidad y a la presentación de la imagen fiel de las cuentas públicas⁴⁰. Desde una perspectiva general y para un colectivo cerrado, sin nuevas incorporaciones, el esquema básico de partida es el siguiente⁴¹:

Esquema 2. Equivalencia de origen en la deuda implícita



Si el sistema está en equilibrio actuarial se cumple que:

$$A_1 + A_2 = P_1 + P_2 \quad [41]$$

A_1 Aportaciones realizadas al sistema hasta el instante t

A_2 Aportaciones realizadas al sistema desde el instante t

P_1 Prestaciones devengadas hasta el instante t

P_2 Prestaciones futuras y devengadas desde el instante t

⁴⁰ Para un estudio más profundo de la deuda implícita, véase Devesa Carpio, M.M. (2007).

⁴¹ Para una mayor adecuación a la realidad el sistema debería incluir ingresos y gastos de otra naturaleza más allá de prestaciones y aportaciones en forma de cuota, si bien a efectos prácticos se presenta aquí esta versión simplificada, que goza de la suficiente representatividad en función de la importancia de estas partidas en cada ejercicio.

de donde se obtiene una medida absoluta sobre el estado de la Seguridad Social, el desequilibrio financiero actuarial D^s :

$$D^s = P_1 + P_2 - A_1 - A_2 \quad [42]$$

de tal forma que si D^s es igual a cero el sistema estará en equilibrio, tendrá déficit si D^s es mayor que cero y superávit en otro caso. Conforme a la definición establecida, la deuda implícita sería:

$$D_t = P_{a,t} + P_{p,t} \quad [43]$$

$P_{a,t}$ Compromisos con los activos actuales valorados en el instante t

$P_{p,t}$ Compromisos con los pasivos actuales valorados en el instante t

En un modelo más completo, se incorporaría el valor de liquidación del patrimonio que en el futuro puede hacer frente a esas obligaciones minorando con ello la deuda, particularmente en España el valor del Fondo de Reserva, $F_{r,t}$, compuesto por cuotas ya pagadas y sus rendimientos asociados:

$$D_t = P_{a,t} + P_{p,t} - F_{r,t} \quad [44]$$

Para evitar la incertidumbre que se deriva de la estimación de $P_{a,t}$ se suele recurrir al valor de $A_{a,t}$, valor en t de las aportaciones realizadas a favor de los activos actuales, quedando [43] desarrollada en términos de valores medios, sobre la base propuesta por Devesa Carpio, M.M. (2007), como:

$$D_t = \sum_x \bar{P}_x \cdot N_{p,x} \cdot {}^\alpha a_x^{(12)} + \frac{1}{2} \cdot \sum_{k=0}^{x_s - x_e - 1} F^{(k)} \cdot \bar{B}_{x_e}^{c,(k)} \cdot N_{a,x_e}^{(k)} \cdot (1+i)^k + \sum_{h=x_e}^{x_s-2} \sum_{k=0}^{h-x_e} F^{(k)} \cdot \bar{B}_{x_h}^{c,(k)} \cdot N_{a,h}^{(k)} \cdot (1+i)^k \quad [45]$$

\bar{P}_x Cuantía media de la pensión anual que reciben los pasivos de edad x en el instante t

$N_{p,x}$	Número de pasivos de edad x en el instante t
${}^{\alpha}a_x^{(12)}$	Valor actual actuarial de una renta anual, fraccionada en m períodos, unitaria, pospagable, variable en progresión geométrica de razón $(1+\alpha)$ para una cabeza de edad x
$F^{(k)}$	Tipo de cotización aplicado hace k años
$\bar{B}_r^{c,(k)}$	Base de cotización media que hace k años tenían los activos de edad x en ese momento
$N_{a,x}^{(k)}$	Número de activos de edad x hace k años
x_e	Edad de entrada en el sistema
x_s	Edad de salida del sistema en términos de ingresos

El problema de esta alternativa, la aplicación de un método retrospectivo, es que parte de un equilibrio actuarial, tal que $P_{a,t} = A_{a,t}$, que no se tiene por qué cumplir en la práctica pues ya desde el inicio no es una de las hipótesis sobre las que se sustenta la Seguridad Social. Aun con ello, la deuda implícita puede ampararse en estos criterios y tomar una expresión más ajustada que dependa del valor concreto para todos y cada uno de los beneficiarios *i-ésimos* en vez de utilizar valores promedio por grupo de edad, siempre supuesto que el teórico sujeto causante sobrevive en el instante t :

$$D_t = \sum_i P_{i,t} \cdot {}^{\alpha}a_x^{(12)} + \sum_i F_i^{(k)} \cdot B_i^c \cdot (1+i)^k \quad [46]$$

Por su parte, el método prospectivo acudiría al valor de las prestaciones futuras que puedan generar los activos menos las cotizaciones futuras a cargo de esos activos. En la práctica, esta solución, más ajustada en cuanto al resultado final, es también más compleja de calcular puesto que la Seguridad Social no ofrece información pública suficiente para ello.

La deuda implícita es una apreciable herramienta por su valor añadido en términos de transparencia y conocimiento de la situación del sistema. Sin embargo, además de los problemas prácticos derivados de su cálculo, se orienta a la evaluación de la Seguridad Social desde una perspectiva de conjunto y no informa de dónde se encuentran los posibles desequilibrios, por lo que debe completarse con otras herramientas para una mayor eficiencia en el conocimiento del modelo de protección y en la toma de decisiones. Por último, sobre la deuda implícita, Devesa Carpio, J.E. y M.M. Devesa Carpio (2009) indican que:

El principal inconveniente es que tampoco queda clara su relación con la viabilidad del sistema, porque es difícil precisar cuál es el nivel máximo de deuda que podría asumir éste. Además, podría diferirse el pago de la deuda mediante la emisión de activos financieros. En este método, el cálculo se suele hacer para un sistema cerrado; es decir, un sistema donde no se contempla la incorporación de nuevos afiliados.

2.8. El Balance actuarial

El balance actuarial es un instrumento cuantitativo que parte del concepto de balance clásico compuesto por bienes, derechos y obligaciones, completado con planteamientos financiero-actuariales y orientado a la información y la transparencia en los sistemas de seguridad social. El balance actuarial en sí puede tener distintas concreciones a partir de variados supuestos metodológicos, aunque es común en todos los casos su elaboración periódica y el uso de argumentos actuariales, ya sea en las herramientas utilizadas o en la visión de largo plazo, bien distinta de la actual orientación hacia la liquidez que maneja la Seguridad Social española, siendo un instrumento ya implantado en Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón y Finlandia, pero no en España. Su cálculo Según Vidal Meliá, C. *et al.* (2011) se justifica en los siguientes puntos:

- La despolitización de la gestión de los sistemas de reparto.
- La transmisión de credibilidad hacia cotizantes y pensionistas.
- La existencia de una base objetiva sobre la que aplicar mecanismos automáticos de ajuste financiero en el sistema.
- La existencia de un instrumento cuantitativo para valorar el efecto previsto de las distintas propuestas de reforma que eventualmente se puedan proponer.
- Su ausencia puede producir un “efecto espejismo” al ocultar un déficit patrimonial.

El diseño del balance actuarial se puede desarrollar desde un sistema de proyecciones, donde generalmente el objetivo es valorar en un período suficientemente amplio de tiempo la capacidad financiera del modelo a través de la equivalencia actuarial entre ingresos y gastos futuros, que normalmente también contempla el patrimonio de referencia que puede contribuir al ajuste. Por ejemplo, para Estados Unidos, Vidal Meliá, C. *et al.* (2011) ofrecen la expresión basada en el valor actual:

$$BA_0 = \frac{AF_0 + \sum_{t=0}^n I_t \cdot \prod_{h=1}^t (1+r_h)^{-1}}{\sum_{t=0}^n BIA_t \cdot \prod_{h=1}^t (1+r_h)^{-1}} - \frac{\sum_{t=0}^n G_t \cdot \prod_{h=1}^t (1+r_h)^{-1} + AF_n \cdot \prod_{h=1}^n (1+r_h)^{-1}}{\sum_{t=0}^n BIA_t \cdot \prod_{h=1}^t (1+r_h)^{-1}} \quad [47]$$

AF ₀	Valor de los activos financieros
IT ₀	Valor de los ingresos por cotizaciones durante el año <i>t</i>
G _t	Valor de los gastos en pensiones en el año <i>t</i>
BIA	Base imponible agregada (bases de cotización) en el año <i>t</i>

Frente al sistema anterior, el balance actuarial en Suecia recurre a un esquema basado en los conceptos de activo y pasivo mediante la relación entre las obligaciones con los participantes (cotizantes y pensionistas) y los activos que respaldan esas obligaciones, sin que el modelo utilice proyecciones. El punto de partida sería la equivalencia:

$$AF + AC \geq PP + PC \quad [48]$$

$$AC_t = C_t \cdot (\bar{A}_p - \bar{A}_c) \quad [49]$$

AF	Activo financiero
AC	Activos por cotizaciones
PP	Pasivos u obligaciones con los pensionistas
PC	Pasivos u obligaciones con los cotizantes
C _t	Cuantía total de las cotizaciones en el ejercicio t-ésimo
\bar{A}_p	Edad media ponderada por las cotizaciones de los cotizantes al final del t-ésimo ejercicio
\bar{A}_c :	Edad media ponderada por las pensiones de los pensionistas al final del t-ésimo ejercicio

2.9. El Coste por pensión unitaria y el Índice de generosidad

Por otra parte, dentro del estudio de la Seguridad Social se puede utilizar el coste *CPU* de generar una unidad de pensión en términos actuariales (Devesa, J.E. y M.M. Devesa (2009)), partiendo de la ecuación global de equilibrio [41], de donde se obtiene:

$$CPU = \frac{P_1 + P_2}{A_1 + A_2} \quad [50]$$

Si el CPU es superior a la unidad, el sistema se encuentra en déficit, mientras que si es inferior a la unidad, el sistema se encuentra en superávit; si el CPU es igual a 1, el sistema se encuentra en equilibrio. Tanto el CPU como el tanto interno de rendimiento son medidas relativas y, en cuanto a la primera, Devesa, J.E. y M.M. Devesa (2009) estimaron su valor para 2006 para el total del sistema en 1,1, con los siguientes valores parciales por prestaciones: *jubilación* (1,282), *incapacidad* (0,919), *viudedad* (0,639), *orfandad y favor de familiares* (0,615).

Sobre la misma dinámica de comparación entre ingresos y gastos, Hernández González, D. (2011a) y (2013) plantea trabajar con un índice individual de generosidad I^G basado en la cuantificación de la generosidad (medida por la comparación entre el conjunto de ingresos y gastos) relativa a perfiles de riesgo determinados, priorizando el análisis individual -o grupal- dentro de fronteras de interés frente al análisis del conjunto del sistema por estimación de sus componentes. Aplicando este enfoque a las pensiones de jubilación contributivas se observaron los beneficios en términos de sostenibilidad de las medidas de reforma propuestas por la *Ley 27/2011, de 1 de agosto*, y su repercusión negativa para los pensionistas, así como la existencia de un sistema generoso para la mayoría de perfiles poblacionales, con excepción de quienes cotizan en el mismo grupo en el período tomado para el cálculo de la base reguladora, con una incidencia especial de este hecho en quienes han aportado sólo por bases máximas o mínimas en ese período. Este enfoque es más flexible y permite estudiar con detenimiento el origen de los desequilibrios, si bien, como en situaciones anteriores, requiere determinar un número de hipótesis que pueden ser cuestionadas y es susceptible de crítica el uso de un perfil determinado que no informa del estado del sistema en general (aunque intuitivamente puede ser supuesto a partir de los resultados obtenidos). El autor aboga por la comunicación del índice de generosidad a los ciudadanos para que, entre otras cuestiones, "la Seguridad Social ponga en conocimiento de los trabajadores el valor añadido que les aporta".

3. Consideraciones al capítulo I

Los ciudadanos lícitamente desean un sistema de protección con las mayores coberturas y prestaciones, tanto en duración como en importe o naturaleza, y con el mínimo esfuerzo contributivo por su parte. Sin embargo, la expansión de cualquier argumento protector conlleva un incremento de gasto que se somete a las restricciones en las fuentes de financiación, nunca ilimitadas. La existencia de un modelo generoso que contribuye al desequilibrio entre ingresos y prestaciones bajo el argumento de que existe estabilidad en el presupuesto anual y es ineludible la satisfacción de las necesidades actuales de la población, reales o presuntas, obvia las imprescindibles consideraciones sobre el plazo y compromete la fortaleza de cualquier diseño y propuesta de reforma, aun cuando ésta sea beneficiosa para determinados ciudadanos en el presente. Esta situación es un acicate para la falta de una consistencia suficiente en la relación entre las corrientes de aportaciones y prestaciones que, además, fomenta la competencia generacional y grupal por los recursos.

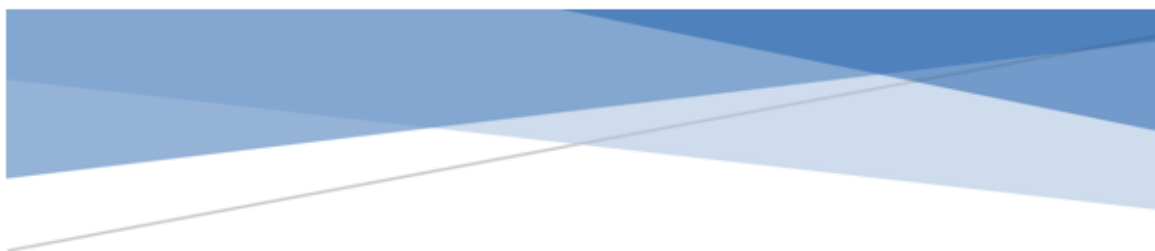
A ello se le une que se está ante un modelo de seguridad social que se basa principalmente en el empleo, cuando precisamente esta variable está perdiendo importancia en la generación de riqueza y no existe una relación inquebrantable entre ocupación y producción. Con todo ello, en unos escenarios de transición social continua como los que se viven en el presente, los ingresos no asumen la certeza de ser suficientes para compensar el gasto derivado de la cobertura de forma individualizada y gran parte de las propuestas de reforma nacen de un supuesto equívoco en la banalización de la realidad de los recursos. Por otra parte, impera la tesis de que la incorporación de afiliados al sistema es fundamental para su salud financiera, argumento que debe ser matizado puesto que esta incorporación es siempre deseable en términos de liquidez, aunque ello no asegure su bondad en términos de sostenibilidad si, tal y como ahora ocurre, indicadores como el tanto interno de rendimiento, el coste por pensión unitaria o los índices de generosidad ofrecen una información de inestabilidad e inequidad. Dicho de otra forma, el ingreso del presente genera en términos esperados un mayor coste futuro y lo que está ocurriendo, por tanto, es el traslado de los riesgos en el tiempo pero no la solución de las consecuencias de su materialización.

La sociedad se mueve en un entorno cambiante, ya lo hemos indicado, y ello requiere la transformación de la Seguridad Social para dar continuidad de forma racional a sus objetivos. Elementos fundamentales para ello son la verdadera implicación en la transparencia y la mayor tecnificación del sistema de protección, pues los métodos tradicionales de valoración y estudio tienen ciertas limitaciones. Aun cuando la valoración

desde una perspectiva individual es muy compleja, especialmente cuanto mayor es el peso de los flujos probables frente a los capitales ciertos, es necesario que en España se elaboren y publiquen desde los organismos públicos competentes herramientas de control basadas en la idiosincrasia actuarial, lo que no quiere decir que la Seguridad Social deba transformar obligatoriamente su modelo de financiación hacia la capitalización de aportación definida, pero sí que utilice una metodología de estudio actuarial y apoye sus decisiones en un enfoque de esta naturaleza que tenga en cuenta el largo plazo y la justa sensibilidad hacia la equidad como complemento a la solidaridad.

Algunas de estas medidas: el balance actuarial, el coste por pensión unitaria, la deuda implícita, el desequilibrio actuarial o los índices individuales de generosidad son herramientas de marcado interés y debieran calcularse en España sin dilación, aunque se acuda también a otros instrumentos complementarios para un mayor conocimiento del sistema y el fomento de la mayor eficiencia posible en la protección y su diseño.

El denominado *Estado del Bienestar* se ve sometido a las tensiones derivadas de distintos riesgos, endógenos y exógenos, por lo que la transparencia y la incorporación de distintas perspectivas de estudio que permitan la valoración de acciones teniendo en cuenta el plazo de desarrollo se han de entender como fundamentales.



CAPÍTULO II

LAS PRESTACIONES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN EL ESCENARIO SOCIOECONÓMICO ACTUAL

En cuanto a bienes, harto sabéis, queridos míos, que nada tengo que dejar sino el mundo en que he vivido, y ese bien sabe Dios que no le dejo yo, sino que me le hacen dejar, mal que me pese.

Muerte del pobrecito hablador. Mariano José de Larra.

CAPÍTULO II. LAS PRESTACIONES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN EL ESCENARIO SOCIECONÓMICO ACTUAL

Las prestaciones por muerte y supervivencia de naturaleza pública tienen como características comunes su origen en el fallecimiento del asegurado y la existencia de beneficiarios distintos de éste, delimitando así las que aquí podríamos denominar prestaciones derivadas, no en atención a la definición o la clasificación que puedan surgir del ordenamiento jurídico puesto que el derecho es propio, sino a la particularidad de que el asegurado es distinto del beneficiario y, por tanto, las prestaciones a las que pudiera tener derecho éste se derivan de los requisitos y del esfuerzo contributivo realizado por aquél. Tales prestaciones se vinculan a un riesgo considerado como un suceso cierto en cuanto a su acaecimiento, si bien la incertidumbre alcanza al momento de su ocurrencia, a la intensidad del coste asociado (que en la Seguridad Social, sin embargo, se encuentra dentro de unos límites ante la doble dimensión de importe y número esperado de pagos) y a la cifra de posibles beneficiarios, teniendo también presente que pudiera no existir ninguno.

En España las prestaciones de muerte y supervivencia se incardinan generalmente en el entorno familiar de la persona fallecida pues en él se sitúan los beneficiarios, quienes mantenían con el difunto un vínculo matrimonial, de parentesco, de dependencia económica y/o de convivencia, según proceda. Por otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico tales prestaciones se basan teóricamente en la compensación de la pérdida de los ingresos con los que participaba el asegurado en el desenvolvimiento del núcleo familiar que constituía con los beneficiarios, si bien en realidad no se omite la necesidad como condicionamiento, en ocasiones presunto y en otras cierto.

Este capítulo tiene como objetivos principales presentar los antecedentes de las prestaciones de muerte y supervivencia y su caracterización en el panorama socioeconómico español con el objetivo de sentar las bases teóricas necesarias para la profundización en la materia; sin embargo, no se presenta un análisis jurídico exhaustivo de tales prestaciones y de su evolución, sino un punto de apoyo orientado a conocer y entender la realidad de la relación entre la cobertura otorgada por el sistema y el colectivo amparado por el modelo de protección, realidad que ha ido cambiando de forma significativa en nuestra sociedad sin que la adaptación normativa haya evolucionado con igual intensidad o sentido.

Se sitúan las prestaciones de muerte y supervivencia en el escenario socioeconómico actual, pues tan relevante es el montante económico que anualmente se dedica por la

Seguridad Social a la cobertura de sus riesgos asociados como el papel que socialmente juega ésta. La transformación de nuestra sociedad es innegable y afectará sin lugar a dudas a prestaciones y beneficiarios del sistema de protección, aunque es muy complejo determinar la dirección que tomará en la muerte y supervivencia pues, aun con homogeneidad normativa, las fuentes de incertidumbre actúan con diferente fuerza y en distintas direcciones, especialmente cuando hay corrientes de opinión que se centran únicamente en la jubilación como pilar fundamental del sistema y dejan de lado otras sensibilidades o acciones. Para 2015 las estimaciones de gasto en prestaciones de muerte y supervivencia son de 22,83 millones de euros, con un número de pensiones estimadas de 2.741.459 unidades, a las que hay que sumar otros derechos de distinta naturaleza. Como se aprecia, un apoyo social de importancia que se plantea en un escenario en el que están cambiando el núcleo familiar y el mercado de trabajo, así como diversas variables biométricas y sociales añaden incertidumbre al mismo.

Por otra parte, aun cuando desde nuestra perspectiva cada modelo de protección debe ajustarse a las características socioeconómicas del colectivo al que se dirige, es de interés conocer, aunque sea de forma sucinta, las estrategias que en otros países se utilizan para abordar las cuestiones relativas a las coberturas objeto de este estudio y, por ello, se presenta de forma resumida la experiencia de otras zonas geográficas, dando así cuenta de la diferente sensibilidad que existe respecto a un mismo hecho causante dependiendo de la idiosincrasia de cada sistema de protección y de sus objetivos.

Como punto final en la caracterización inicial de estas prestaciones se presenta la posibilidad de su estudio desde un enfoque eminentemente estadístico y actuarial que parte de las distribuciones de probabilidad compuestas y la teoría del riesgo colectivo. Dejando constancia del corpus teórico necesario y de su aplicación, el punto de partida más accesible para el análisis práctico, la *Muestra Continua de Vidas Laborales*, no es en la actualidad una herramienta eficiente y/o suficiente de cara al estudio completo de la problemática de la muerte y supervivencia en esta línea de investigación, por lo que un análisis más exhaustivo de esta materia deberá acometerse en el futuro.

1. LAS PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN ESPAÑA

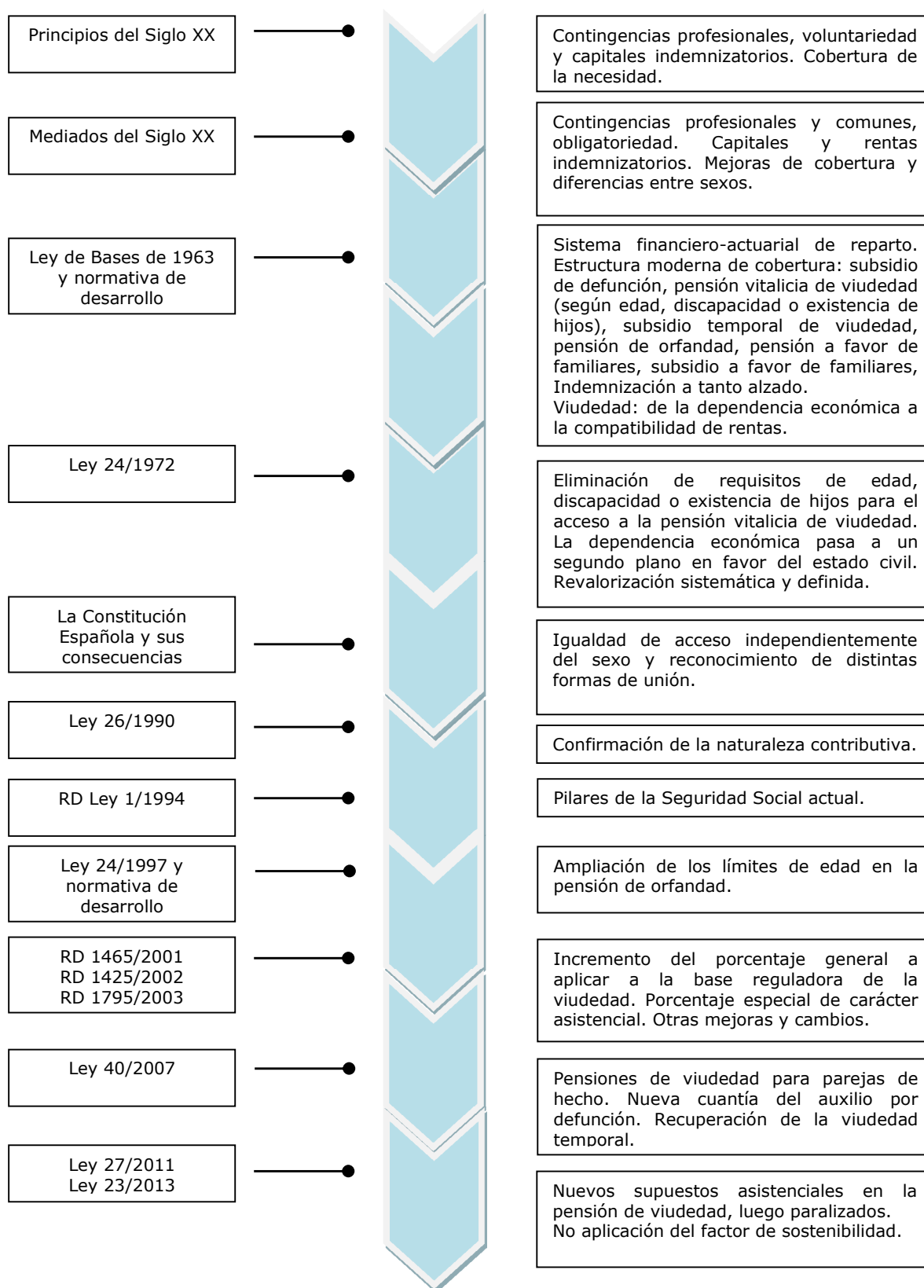
1.1. Antecedentes

El objetivo original de las prestaciones por muerte y supervivencia de naturaleza pública ha sido la cobertura de las teóricas necesidades que, tras el fallecimiento de un trabajador, surgen en las personas a él vinculadas, si bien nada impide la posible aplicación de un espectro de salvaguardia más amplio en el que la acción protectora se extienda hacia terceros de otra naturaleza, parta de un sujeto causante que no se encuentre activo laboralmente o prime los caracteres indemnizatorio, compensatorio del lucro cesante o sustitutivo de rentas perdidas.

En España el nacimiento y la evolución de las prestaciones por muerte y supervivencia tiene sus condicionantes generales en argumentos históricos y sociales que perfilaron un modelo social concreto; durante buena parte del siglo XX predominó una estructura familiar en la que sólo uno de los cónyuges trabajaba –generalmente el hombre-, mientras el otro se ocupaba de la familia y el hogar –generalmente la mujer-. Ante este modelo, el óbito de quien ejercía el desempeño profesional era una importante traba para el sostenimiento económico del núcleo familiar, aunque no hay que olvidar que antaño era normal que los hijos, una vez incorporados al mercado laboral de manera precoz a lo habitual en nuestro tiempo, contribuyesen al sostenimiento familiar con, al menos, una parte de sus ingresos. Por otro lado, los procesos económicos de industrialización y las migraciones interiores transformaron durante todo el siglo la estructura socioeconómica del país, dando lugar a nuevas demandas profesionales y a entornos de trabajo sujetos a riesgos que, al materializarse, favorecían la desprotección de aquellas personas vinculadas al trabajador, lo que requería el desarrollo de instrumentos de protección que, progresivamente amparados bajo el principio de solidaridad, mitigasen la misma.

En España las prestaciones por muerte y supervivencia tomaron forma al abrigo de las contingencias profesionales, si bien han ido paulatinamente ampliando su espectro de actuación, tanto en población cubierta como en intensidad de la protección, incrementando la cobertura hacia las contingencias comunes, ampliando el concepto de beneficiario y reforzando las cuantías económicas que a éste se le conceden. Un resumen de la evolución de estas prestaciones se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro 11. Evolución general de las pensiones de muerte y supervivencia. Resumen



Fuente: elaboración propia.

1.1.1. Desde los albores hasta mediados del siglo XX

Los antecedentes de la acción pública respecto a la cobertura de los riesgos derivados de muerte y supervivencia se encuentran en la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900⁴² y su reglamento de aplicación⁴³, que vienen a actuar en un escenario en el que ya funcionaban Hermandades, Cofradías, Sociedades de Socorros Mutuos⁴⁴, Mutualidades obreras, Cajas de Ahorro u otras iniciativas de protección⁴⁵. Según esta ley, que establece la responsabilidad objetiva del empresario en caso de accidente de trabajo de sus empleados, los obreros tendrían derecho a una indemnización por los accidentes de trabajo que produjesen una incapacidad absoluta o parcial, temporal o perpetua; si el accidente produjese la muerte del obrero:

El patrono queda obligado a sufragar los gastos de sepelio, no excediendo éstos de 100 pesetas⁴⁶, y además a indemnizar a la viuda, descendientes legítimos menores de diez y seis años y ascendientes, en la forma y cuantías que establecen las disposiciones siguientes:

1. Con una suma igual al salario medio diario de dos años que disfrutaba la víctima, cuando ésta deje viuda e hijos o nietos huérfanos que se hallasen a su cuidado.
2. Con una suma igual a diez y ocho meses de salario, si sólo dejase hijos o nietos.
3. Con un año de salario a la viuda sin hijos ni otros descendientes del difunto.
4. Con diez meses de salario a los padres o abuelos de la víctima, si no dejase viuda ni descendientes, y fueran aquéllos sexagenarios y careciesen de

⁴² *Gaceta de Madrid*. Año CCXXXIX. Nº 31. 31 de enero de 1900. Los riesgos pueden ser asegurados alternativamente a la cobertura pública por operaciones de seguro privado sin menoscabo económico; asimismo, el propietario de los establecimientos industriales puede sustituir las indemnizaciones por prestaciones vitalicias en los términos legalmente establecidos. Las indemnizaciones “se aumentarán en una mitad más de su cuantía cuando el accidente se produzca en un establecimiento u obras cuyas máquinas o artefactos carezcan de los aparatos de precaución” a los que se refiere la norma.

⁴³ *Gaceta de Madrid*. Año CCXXXIX. Nº 211. 30 de julio de 1900.

⁴⁴ Asociaciones de carácter voluntario, sin ánimo de lucro y basadas en el principio mutual, que podían incluir la protección de los familiares del asegurado y ayudas por sepelio.

⁴⁵ Por ejemplo, García Viña, J. y M.P. Rivas Vallejo (1996) citan el artículo décimo sexto del *Real Decreto de 11 de junio de 1886, Pliego de condiciones generales para la contratación de obras públicas*, que obliga al contratista a asegurar la vida de los operarios respecto a los accidentes que dependan del trabajo o estén relacionados con él, siendo la prestación a otorgar por el seguro en caso de defunción un importe de 500 jornales, cobertura limitada en cuanto a la población cubierta y a los casos en los que se debe realizar el aseguramiento: operarios de licitadores en contratos públicos y dentro de la actividad sujeta a licitación.

⁴⁶ En lo sucesivo, 1 euro = 166,386 pesetas.

recursos, siempre que sean dos o más estos ascendientes. En el caso de quedar uno solo, la indemnización será equivalente a siete meses de(l) jornal que percibía la víctima.

Las disposiciones de los números 2 y 4 serán aplicables al caso de que la víctima del accidente sea mujer. Las contenidas en el (número) 1 sólo beneficiarán a los descendientes de ésta, cuando se demuestre que se hallan abandonados por el padre o abuelo viudo, o procedan del matrimonio anterior de la víctima.

Queda así inicialmente configurado un sistema de cobertura con sensibilidad hacia los riesgos profesionales que expresamente recoge prestaciones por muerte y supervivencia basadas principalmente en un capital indemnizatorio y plantea una gradación en su importe según una supuesta intensidad en los vínculos familiares.

Un nuevo paso relevante aparece con *la Ley de 27 de febrero de 1908: Organización por el Estado de un Instituto Nacional de Previsión*⁴⁷, que viene a fomentar la cobertura pública tras el discreto éxito de la iniciativa privada. Junto a la articulación de la protección mediante la técnica aseguradora dentro de un régimen de libertad subsidiada, en lo que aquí interesa, el artículo 13 de esta ley indicaba que:

Las operaciones peculiares del Instituto serán las de renta vitalicia, diferida o temporal, constituida a favor de personas de las clases trabajadoras, mediante imposiciones únicas o periódicas, verificadas por quienes hayan de disfrutar dichas pensiones, o bien por otras personas o entidades a su nombre, bajo el pacto de cesión o de reserva del capital, en todo o en parte, para los derechohabientes.

Sobre las normas de reparto del capital correspondiente ante la existencia de diferentes beneficiarios, el artículo 30 recogía que:

En el caso de proceder la entrega de todo o parte del capital a los derechohabientes del asociado en el contrato de renta celebrado con dicha condición, el capital hereditario se pagará exclusivamente al cónyuge sobreviviente, a los hijos y, a falta de estos, a los ascendientes. La partición se verificará entregando la mitad a los hijos y la otra mitad al cónyuge sobreviviente. Si el asociado no dejase descendientes y sí ascendientes, la porción del cónyuge será la de tres quintas partes. Cuando un asociado dejase viuda e hijos de matrimonio con la misma e hijos de otro matrimonio anterior, corresponderá la mitad a la viuda y la otra mitad se distribuirá, por partes iguales, entre los hijos de

⁴⁷ *Gaceta de Madrid*. Nº 60. 29 de febrero de 1908, con rectificación de 1 de marzo. Este régimen fue apuntalado por el *Real Decreto de 11 de marzo de 1919: Régimen de intensificación del Retiro Obrero* (*Gaceta de Madrid*. Nº 71. 12 de marzo de 1919).

ambos matrimonios. A falta de alguno de los llamados por esta ley, su porción respectiva acrecerá a los restantes. La parte correspondiente a los hijos menores de edad se entregará a quien de hecho los tuviere a su cargo, sea la viuda u otra persona.

Partiendo del Instituto Nacional de Previsión nacerá el primer seguro social obligatorio, el Retiro Obrero Obligatorio, dentro de un escenario en el que las pensiones, según Elu Terán, A. (2006)⁴⁸: “no se planifican como mantenedoras de renta, sino más bien como seguro de mínimos contra la pobreza”, opción de cobertura que tuvo principalmente la oposición de la patronal y poco éxito de implantación en las zonas rurales.

La posterior *Ley reformada, relativa a los accidentes de trabajo, de 10 de enero de 1922*⁴⁹, partía de los principios de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, haciendo responsable al empresario, salvo causa de fuerza mayor extraña al trabajo, de los accidentes de sus operarios en el ejercicio de la profesión o trabajo realizado. Asimismo, se fija una edad para los descendientes beneficiarios en menos dieciocho años y se equipara la prestación de los hijos o nietos sin la existencia de viuda a la reconocida en el caso de viuda, hijos, o nietos huérfanos que se hallasen al cuidado de ésta. En lugar de las indemnizaciones por muerte y supervivencia el patrono podía otorgar, a satisfacción de los derechohabientes, rentas vitalicias por el 40% del salario anual de la víctima a viuda, hijos o nietos menores de dieciocho años, del 20% del salario anual a la viuda sin hijos ni descendientes de la víctima y del 10% para cada ascendiente pobre, sexagenario o incapacitado para el trabajo cuando no existiesen viuda ni descendientes, siempre que el total de las pensiones no excediese del 30% del salario.

Más tarde, de nuevo dentro del campo profesional, el *Decreto de 8 de octubre de 1932, de Texto refundido de la legislación de accidentes de trabajo en la industria*, exponía, en su artículo vigésimo octavo, que:

⁴⁸ Sobre los condicionantes, estructura y características económicas y actuariales de las alternativas de protección previas a la Guerra Civil Española véase el texto aquí citado. Si bien el Retiro Obrero se configuró inicialmente para los riesgos derivados de la vejez, sería la *Orden Ministerial de 10 de mayo de 1932* (*Gaceta de Madrid*. Nº 131. 10 de mayo de 1932) la que promovería su acción hacia la invalidez y la muerte, siendo paralizada esta iniciativa por la Guerra Civil.

⁴⁹ <http://fama2.us.es/fde/leyAccidentesDelTrabajo1922.pdf>. Fondo bibliográfico antiguo de la Universidad de Sevilla. Según el *Real Decreto Ley de 23 de agosto de 1926: Código de trabajo* (*Gaceta de Madrid*, nº 244, de 1 de septiembre de 1926), que asumiría la Ley de 1922 y su desarrollo reglamentario, el importe del auxilio por defunción dependía del tamaño de la población: 100 pesetas para poblaciones que no excediesen de 20.000 habitantes, 150 pesetas para poblaciones con más de 20.000 y hasta 100.000 habitantes y 200 pesetas para el resto de poblaciones.

Si el accidente produjese la muerte del obrero, el patrono queda obligado a sufragar los gastos de sepelio por la cantidad que se fije en el Reglamento⁵⁰, y además a indemnizar a la viuda, descendientes legítimos o naturales reconocidos, menores de dieciocho años o inútiles para el trabajo, hermanos huérfanos menores de dieciocho años que se hallasen a su cargo y ascendientes, en la forma y cuantía que establecen las disposiciones vigentes:

1. Con una renta igual al 50 por 100 del salario que disfrutara la víctima, cuando éste deje viuda e hijos o nietos inútiles para el trabajo o huérfanos menores de dieciocho años que se hallasen a su cuidado.
2. Con una renta igual a la anterior, si sólo dejase hijos o nietos inútiles para el trabajo, o huérfanos menores de dieciocho años o hermanos menores huérfanos, a su cargo.
3. Con una renta del 25 por 100 del salario a la viuda sin hijos ni otros descendientes del difunto.
4. Con una renta del 30 por 100 del salario, a los padres o abuelos de la víctima, pobre y sexagenarios o incapacitados para el trabajo, si no dejase viuda ni descendientes siempre que sean dos o más ascendientes. En el caso de quedar uno solo, la indemnización consistirá en una renta equivalente al 15 por 100 del salario que percibiera la víctima.

Dentro de esta estructura, basada en rentas vitalicias a diferencia de los capitales indemnizatorios derivados de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, quedaba recogido que los puntos primero, segundo y cuarto se aplicarían si la víctima del accidente era una mujer, pero los puntos primero y tercero sólo podían beneficiar al hombre cuando su subsistencia dependiese de la mujer víctima del accidente, manteniéndose así un modelo de protección basado en el concepto de *dependencia de un tercero* pero desequilibrado en función del *sexo* del cónyuge beneficiario. Además, con respecto a la viuda y los hijos del matrimonio o de otros matrimonios o naturales reconocidos, a la viuda le correspondería el 50% de la renta total y la otra mitad se repartiría entre los hijos habidos en todos los matrimonios y los naturales reconocidos, siendo la viuda quien recibiría la indemnización correspondiente a los hijos que se encontrasen bajo su patria potestad; la parte correspondiente a otros hijos se recibiría por quien los tuviere a su cargo. Por último, el derecho de la viuda por sí misma a ser indemnizada no podía

⁵⁰ El *Decreto de 8 de octubre de 1932* y su Reglamento, de fecha 31 de enero de 1933 (*Gaceta de Madrid*. Nº 33. 2 de febrero de 1933), mantienen el supuesto de que los gastos de sepelio se satisfacen según el tamaño de la población en la que se acomete el sepelio y por las cuantías recogidas en el *Real Decreto Ley de 23 de agosto de 1926*.

invalidarse por la circunstancia de tener hijos mayores de dieciocho años, debiendo aquí considerarse equiparada a la viuda sin hijos.

Más adelante, la *Ley de 1 de septiembre de 1939, sustituyendo el régimen de capitalización en el Retiro Obrero por el de pensión fija, aumentando la pensión actual y convirtiendo las cajas colaboradoras en delegaciones del Instituto Nacional de Previsión*⁵¹, fomentó la acción protectora del sistema en las contingencias comunes creando un sistema de pensiones fijas y un subsidio de vejez, del que se desprenden beneficios en cuestión de muerte y supervivencia⁵². A su vez, respecto a la indemnización por gastos funerarios, la *Ley de 14 de diciembre de 1942, por la que se implanta el seguro de enfermedad*, recogía que:

Quando fallezca un asegurado sin dejar derecho a una indemnización para gastos funerarios en virtud de otros seguros o de un contrato de trabajo, el Seguro concederá una indemnización cuya cuantía será de veinte veces la retribución de un día, con arreglo a la cual hubiera cotizado por última vez.

A continuación nacería el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, el SOVI, todavía activo de algún modo en nuestros días puesto que sus beneficiarios siguen generando costes al sistema. Su texto legal de partida⁵³ se centrará inicialmente en la cobertura de la jubilación y la invalidez y, con posterioridad⁵⁴, se establecieron pensiones de viudedad para viudas de perceptores del seguro de vejez o invalidez o de aquellos que hubieran tenido derecho a él, siempre que tuvieran al menos 65 años o estuviesen incapacitadas

⁵¹ *Boletín Oficial del Estado* de 9 de septiembre de 1939.

⁵² *Decreto de 18 de abril de 1947 por el que se crea la Caja Nacional del Seguro de Vejez e Invalidez y preparando un sistema de protección para este último riesgo*. En cuanto a su desarrollo son relevantes principalmente la *Orden de 6 de octubre de 1939, dictando normas para la implantación del subsidio de vejez establecido por la Ley de 1 de septiembre último, en sustitución del sistema de capitalización del retiro obrero* y posteriormente la *Orden de 2 de febrero de 1940, dictando normas para la aplicación de la Ley de 1 de septiembre de 1939, que establece un régimen de subsidio de vejez, en sustitución del régimen del Retiro Obrero*. En lo que aquí interesa, esta última norma recogía en su artículo undécimo que: "El subsidio devengado y no percibido por el titular a su fallecimiento, será entregado al cónyuge sobreviviente y, en su defecto, a los hijos". La *Orden de 14 de julio de 1942, sobre pago de la mensualidad total de Seguro de Vejez en caso de fallecimiento*, añadió lo siguiente: "A falta de unos y otros podrá hacerlos efectivos el familiar o persona extraña en cuya compañía hubiera vivido el anciano subsidiado durante el tiempo a que corresponda el subsidio pendiente".

⁵³ *Boletín Oficial del Estado* de 5 de mayo de 1947.

⁵⁴ *Decreto-ley de 2 septiembre de 1955, por el que se eleva la prestación del Seguro de Vejez e Invalidez*. *Boletín Oficial del Estado* de 23 de octubre de 1955. Artículos tercero a séptimo. La pensión de viudedad será del 50% del subsidio del sujeto causante y compatible con las prestaciones del Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares.

para todo trabajo, no tuviesen derecho a las prestaciones del Seguro de Vejez o Invalidez, hubieren contraído matrimonio al menos 10 años antes de la fecha del hecho causante y conviviesen con el sujeto causante (o que, en caso de separación, no fuese responsabilidad de la mujer). Si tuviera más de 50 años, la viuda conservaría el derecho a la solicitud una vez alcanzados los 65 años siempre cumpliendo el resto de requisitos.

Por último, el *Decreto de 22 de junio de 1956, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación de accidentes de trabajo y Reglamento para su aplicación*, incidió en el ámbito de las prestaciones por muerte y supervivencia. Así, ocurrido un deceso en el ámbito profesional, a la viuda sin hijos derechohabientes se le otorgaría una renta del 50% del salario del causante, a la que se uniría el 10% adicional por descendiente (o asimilado), si los hubiere, con el límite del 100%. Si no existe viuda, un único descendiente (o asimilado) obtendría una renta del 60% del salario, con un 10% adicional por cada menor o incapacitado y siempre con el límite anteriormente citado. Cuando no existiesen viuda o descendientes o asimilados, la renta para ascendientes se fijaba en el 40% (o del 30% si era uno sólo), cantidades que se elevarían hasta el 60% y el 50% respectivamente si los ascendientes convivían con el finado y a su costa durante el año anterior. En otras circunstancias los ascendientes podían obtener un subsidio de 1 año de salario del sujeto causante o de nueve mensualidades si sólo había un ascendiente. De no existir derechohabientes, el patrono o el asegurador constituirían en el Fondo de Garantía de la Caja Nacional de Seguros de Accidentes de Trabajo el equivalente a una renta del 30% del salario durante 25 años. En cuanto a la indemnización a pagar por sepelio, ésta se fijó en dos mensualidades del salario del causante, con un mínimo de 1.000 pesetas (6,01€).

1.1.2. Las bases de la Seguridad Social moderna

Un entorno unificador que buscó resolver la dispersión normativa existente hasta la fecha en materia de seguridad social, mitigar la insuficiencia y la desigualdad en la protección y trasladar la cobertura basada en los seguros sociales hacia un sistema de seguridad social unificado surgió con la *Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social*⁵⁵, aprobada por *Decreto 907/1966, de 21 de abril*⁵⁶, ley que en su artículo 18 recogía que la acción protectora de la Seguridad Social comprendía, entre otras coberturas: "las prestaciones económicas en los supuestos de incapacidad laboral

⁵⁵ *Boletín Oficial del Estado* de 30 de diciembre de 1963.

⁵⁶ Que, por su parte, delimitaba el alcance de la cobertura, pues derivaba hacia su legislación particular la correspondiente a funcionarios públicos, civiles y militares.

transitoria, invalidez, vejez, desempleo, muerte y supervivencia (...)”⁵⁷. En este entorno legislativo conjunto, ocurrida la muerte, independientemente de su causa, se otorgarían⁵⁸:

- a) Un subsidio de defunción para hacer frente a los gastos de sepelio a quien los hubiese soportado. Salvo prueba en contrario, se entendían satisfechos por viuda, hijos y parientes del fallecido que convivían con él habitualmente.
- b) Una pensión de viudedad consistente en la aplicación de un porcentaje sobre la base reguladora de prestaciones del causante o, en su caso, sobre la pensión de vejez o invalidez que éste percibiera en el momento de su muerte. Tendrían derecho a esta pensión vitalicia, salvo extinción, las viudas que al fallecimiento de su cónyuge, y habiendo convivido habitualmente con él o habiendo sido reconocidas como inocentes por sentencia firme en caso de separación judicial, se encontrasen en alguna de las siguientes situaciones:
 - b.1.) Haber cumplido cuarenta años.
 - b.2.) Estar incapacitadas para el trabajo.
 - b.3.) Tener a su cargo hijos habidos del sujeto causante que tuvieran derecho a pensión de orfandad.

De no cumplir alguna de estas exigencias la viuda sólo tendría derecho a un subsidio temporal de viudedad, si bien tanto la pensión como el subsidio eran compatibles con las rentas de trabajo de la viuda. El viudo tendría derecho a pensión únicamente si está incapacitado para el trabajo y ser sostenido por su

⁵⁷ El artículo 19 de la *Ley 193/1963, de 28 de diciembre*, definía como beneficiarios de las prestaciones económicas a las viudas de trabajadores por cuenta ajena, de pensionistas de la Seguridad Social y de quienes disfrutasen de prestaciones periódicas; a los huérfanos de padre y madre menores de dieciséis años o incapacitados para el trabajo; a los familiares consanguíneos de los trabajadores por cuenta ajena que reglamentariamente se determinasen. El *Decreto 907/1966, de 21 de abril*, incluía a las viudas de pensionistas de vejez o de invalidez, provisional o definitiva.

Por su parte, las prestaciones económicas específicas del régimen de protección a la familia, en el que quedaban integrados los Subsidios y *Plus Familiares*, consistían en una asignación mensual uniforme por cada hijo legítimo, legitimado, adoptivo o natural reconocido, menor de dieciséis años o incapacitado para el trabajo, y en una asignación mensual uniforme por esposa en las condiciones y con las limitaciones reglamentadas, ampliándose la cobertura en la redacción dada en el artículo 167 del *Decreto 907/1966, de 21 de abril*, a asignaciones por nacimiento de hijo y por matrimonio.

⁵⁸ Artículos 41 a 43 de la *Ley 193/1963, de 28 de diciembre*, y artículos 157 a 166 del *Decreto 907/1966, de 21 de abril*.

mujer en vida de ésta, pero no aparece expresamente designado como posible beneficiario del subsidio temporal.

En definitiva, independientemente de las características del sujeto causante y del cumplimiento de sus obligaciones, no todas las personas viudas tenían derecho a una pensión de esta naturaleza, partiéndose de una situación de supuesta necesidad articulada mediante la existencia de responsabilidades familiares, la convivencia y la presunción de imposibilidad de obtención de rentas personales por razón de edad o salud. Ahora bien, como indican Valenciano Sal, A. (2011) y González Ortega, S. *et al.* (2012), la posibilidad de la compatibilidad de pensión y rentas comienza aquí a erosionar el que había sido espíritu y objetivo fundamental de la prestación de viudedad: la cobertura de las situaciones de necesidad.

- c) Una pensión de orfandad, basada en la aplicación de un porcentaje sobre la base de cotización del causante⁵⁹. Se percibiría por cada hijo menor de dieciocho años o incapacitado para el trabajo y sería compatible con las rentas de trabajo del cónyuge superviviente, así como, en su caso, con su pensión de viudedad, aunque la suma de las pensiones de viudedad y orfandad no podría exceder de la base de cotización del causante⁶⁰.

Si la muerte es causada por una contingencia profesional, las viudas no estarían sometidas a la aplicación de un período de carencia y tendrían derecho, además, a percibir una indemnización a tanto alzado⁶¹. Las prestaciones para familiares quedarían vinculadas al desarrollo reglamentario, que tomó forma mediante el *Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas*, y planteaba lo siguiente:

1. El subsidio por defunción es una prestación por una sola vez, de 5.000 pesetas (30,05€) para los familiares con derecho a la misma y como máximo de esta cantidad para el resto según los gastos ocasionados por el sepelio.
2. La pensión vitalicia de viudedad se fijó en el 45% de la base reguladora o en el 60% de la pensión del causante fallecido o inválido (aquí con el límite de la

⁵⁹ Nótese que la *Ley 193/1963, de 28 de diciembre*, habla expresamente de “base de cotización” en la orfandad y de “base reguladora de prestaciones” para la viudedad.

⁶⁰ *Decreto 907/1966, de 21 de abril*: de la cuantía de las bases reguladoras correspondiente a cada prestación.

⁶¹ El *Decreto 907/1966, de 21 de abril*, extiende el derecho a esta prestación a “personas viudas y huérfanos”.

pensión que hubiera correspondido de no ser pensionista el causante). La cuantía del subsidio temporal de viudedad para las viudas se cuantificó en un máximo de 24 mensualidades de la pensión vitalicia de viudedad.

3. La pensión de orfandad fue establecida en un 20% de la base reguladora para cada huérfano, con un límite mínimo de 250 pesetas (1,50€); en caso de no existir cónyuge del causante o de fallecer durante la percepción de la pensión de viudedad, ésta se repartiría entre los huérfanos, si los hubiere, siendo compatible la percepción de pensiones de orfandad en las que el padre y la madre fuesen los causantes.
4. Se fijaron las prestaciones vitalicias en favor de familiares mediante el mismo tipo del 20% por beneficiario y similar procedimiento al de las pensiones de orfandad. De no existir cónyuge o fallecer éste siendo beneficiario de una pensión de viudedad, se acrecentaría la prestación de nietos y hermanos y, de no existir éstos ni tampoco hijos, se acrecentaría la correspondiente a los ascendientes⁶². El subsidio temporal en favor de familiares se planteó como un máximo de doce mensualidades de la pensión a favor de familiares, y se destinaba a hijas y hermanas mayores de 18 años, solteras o viudas, bajo los mismos requisitos de convivencia, prelación y necesidad de la pensión vitalicia.
5. La indemnización a tanto alzado para los beneficiarios de la pensión de viudedad era de seis mensualidades de la base reguladora, mientras que a cada huérfano con derecho a pensión de orfandad le correspondería una mensualidad de dicha base. Si no existiese cónyuge beneficiario, su parte se repartiría a partes iguales entre los huérfanos, si los hubiere.

Por otra parte, esta norma definía la base reguladora para el sujeto causante en activo como el cociente de la suma de veinticuatro bases de cotización consecutivas escogidas entre un período de 7 años inmediatamente anterior a la fecha en la que se causase derecho, dividida entre veintiocho; para el caso de sujetos causantes en situación de pasivo en el momento del fallecimiento, la base reguladora sería el importe de la pensión. En accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de invalidez

⁶² El artículo 40 del *Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre*, establecía una prelación en tres grupos: nietos y hermanos, madres y abuelas, padres y abuelos, recogiendo además requisitos personales, familiares o económicos para cada grupo. Por otra parte, nótese que no se hace una referencia expresa y concreta al fallecimiento del cónyuge con hijos supervivientes, pero ha de entenderse la prelación de los hijos sobre otros familiares en cuanto al reparto de la pensión de viudedad de un beneficiario de ésta que ha fallecido.

permanente absoluta para todo trabajo la base reguladora se calcularía sobre salarios reales.

Apuntalando la realidad de las prestaciones de muerte y supervivencia en este período surgió la *Orden de 13 de febrero de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen General de la Seguridad Social*, que vino a reforzar lo ya propuesto en cuanto a su esencia y características por las normas anteriores, definiendo sujetos causantes y situaciones asimiladas al alta, así como realizando nuevas aportaciones y matizaciones.

1. Respecto a la pensión de viudedad se concretaron los beneficiarios y la base reguladora, que para los accidentes de trabajo y enfermedad profesional dependía de las retribuciones realmente percibidas, siendo las prestaciones, temporal y vitalicia, compatibles con otras fuentes de renta.
2. Respecto a la pensión de orfandad, compatible con las rentas de trabajo o pensión del cónyuge supérstite, tendrían también derecho los hijos adoptivos del causante siempre que la adopción se hubiese realizado con dos años de antelación a la fecha de su fallecimiento, así como los hijos que hubiesen aportado al matrimonio los cónyuges supérstites cuando se diese:
 - 2.1.) Matrimonio celebrado con dos años de antelación a la fecha del fallecimiento del causante.
 - 2.2.) Que se probase que tales hijos convivían con el causante y a sus expensas.
 - 2.3.) Que no tuviesen derecho a otra pensión de la Seguridad Social, ni quedasen familiares con obligación y posibilidades de prestarles alimentos, según la legislación civil.
4. La pensión en favor de familiares quedaba reservada para familiares en grado de consanguineidad.

En esta Orden también se concretaban y sistematizaban los motivos de extinción de las prestaciones en los términos recogidos en la tabla siguiente. Si al extinguirse la pensión de orfandad por cualquiera de las causas C1, C4 o C7 recogidas en la Tabla 1, el beneficiario no hubiese devengado doce mensualidades de la misma, le sería entregada, de una sola vez, la cantidad precisa para completarlas. En el supuesto de que se hubiesen incrementado las pensiones de orfandad con el porcentaje de la de viudedad y

se extinguiera el derecho a la pensión de orfandad de cualquiera de los beneficiarios, la parte de porcentaje de la de viudedad que le hubiese correspondido al beneficiario saliente pasaría a incrementar la pensión de orfandad de los restantes beneficiarios.

Tabla 1. Causas de extinción de las prestaciones por muerte y supervivencia

Viudedad vitalicia	C1. Contraer nuevas nupcias o tomar estado religioso ⁶³ .
	C2. Pérdida o privación de la patria potestad o ausencia que implique el abandono de los hijos a su cargo.
	C3. Observar una conducta deshonesta o inmoral.
	C4. Cesar en la incapacidad que otorgó la pensión (salvo que la viuda hubiese cumplido 40 años o el viudo 60).
	C5. Sentencia firme de culpabilidad en la muerte del causante.
	C6. Fallecimiento.
Viudedad temporal	C7. Agotamiento del período de duración. C1, C3, C5 y C6.
Orfandad	C8. Cumplir los 18 años, excepto personas incapacitadas.
	C1, C3, C4 y C6 –sin consideraciones sobre viudedad–.
Favor de familiares	Por las causas de la pensión de orfandad. C1, C3, C6.
Nietos y hermanos	
Ascendientes	C1, C3, C6.
Subsidio familiares	C3, C6 y C7.

Fuente: elaboración propia.

Nótese especialmente la motivación basada en “una conducta deshonesto o inmoral”, que más allá de su ubicación en un ámbito social, cultural y temporal determinado es susceptible de una amplia arbitrariedad y subjetividad en su definición. La norma no recogía expresamente la terminación de la duración establecida como motivo de extinción del subsidio de orfandad y sí lo hacía en el caso correspondiente al favor de familiares.

En resumen, en esos momentos el sistema protector se articulaba mediante las siguientes características principales:

⁶³ En ambos casos, siempre que el cambio de estado tuviese lugar antes de cumplir la *beneficiaria* los sesenta años de edad, tendría derecho a percibir, por una sola vez, una cantidad igual al importe de veinticuatro mensualidades de la pensión que estuviese percibiendo. Este sistema se extiende a la viudedad temporal, donde se percibirían de una vez las cantidades pendientes de cobro hasta alcanzar las 24 mensualidades.

- A) La pensión vitalicia se calculaba principalmente como un porcentaje sobre una base reguladora (o una pensión, si procede), mientras que las prestaciones temporales se derivaban de este mismo cálculo variando en su duración. Se distinguían las bases reguladoras por clase de prestación y por situación del causante en el momento del fallecimiento. La pensión inicial P_0 se puede aquí expresar en los términos de la expresión [4] vista en el capítulo 1.

$$P_0 = F_1 \cdot F_4 = F_1 \cdot \frac{\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{12} B_{i,j}^c}{2 \cdot 14} = F_1 \cdot \frac{B_{1,1}^c + \dots + B_{2,12}^c}{28} \quad [51]$$

$B_{i,j}^c$ Base de cotización. Año i, mes j.

- B) Existen restricciones en el acceso a las prestaciones para los viudos frente a las viudas, configurándose un escenario protector más intenso para las mujeres, acorde a la concreción del modelo socioeconómico existente en ese momento y a la primacía del criterio de dependencia económica.
- C) Coexisten prestaciones vitalicias y subsidios temporales, así como hay particularidades para las contingencias profesionales frente a las comunes.

Estos planteamientos, aunque parten de la adecuación al modelo social vigente en la época y todavía se someten al objetivo principal de la dependencia económica, ya reflejan un salto cualitativo en la cobertura frente a patrones precedentes.

Un nuevo hito normativo significativo en esta etapa surgió con la aprobación de la *Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social*⁶⁴, en la que quedan descartados los requisitos de cotización previos para acceder a las prestaciones originadas por accidentes no laborales. En lo que se refiere a la pensión de viudedad, se eliminaron como requisitos para el acceso los existentes respecto a *edad, capacidad para el trabajo o existencia de*

⁶⁴ La *Ley 24/1972, de 21 de junio*, y el *Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social* contribuirán a dar cuerpo al *Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social*, que en nuestra opinión no supondrá un cambio especialmente significativo en el acervo existente en la materia que aquí se estudia. El cambio de denominación del *subsidio por defunción* a *auxilio por defunción* que ya aparecía en la *Ley 24/1972, de 21 de junio*, y que fue acogido por el *Decreto 2065/1974, de 30 de junio*, es una cuestión meramente formal sin incidencia alguna.

hijos a su cargo habidos del causante con derecho a pensión de orfandad, ampliándose el campo de protección, diluyéndose los criterios de dependencia económica en favor del *estado civil* y dejándose sin sentido el espíritu del subsidio temporal, cuya concesión dependía del incumplimiento de tales criterios. También se reconoció el derecho a pensión a las hijas o hermanas de pensionistas de jubilación o invalidez que hubiesen convivido con el causante y a su cargo, fuesen mayores de cuarenta y cinco años, solteras o viudas, se dedicasen prolongadamente al cuidado del causante y careciesen de medios propios de vida⁶⁵.

Las pensiones se revalorizarían periódicamente teniendo en cuenta, entre otros, el nivel medio de los salarios, el índice del coste de la vida, la evolución general de la economía y las posibilidades económicas de la Seguridad Social. Finalmente, de no existir otros familiares con derecho a pensión por muerte y supervivencia, el padre o la madre que vivieren a expensas de trabajador fallecido por causa profesional, siempre que no tuviesen derecho a las prestaciones a favor de familiares, percibirían una indemnización a tanto alzado en los términos establecidos para las contingencias profesionales. La prestación se cuantifica en nueve mensualidades de la base reguladora correspondiente a la pensión de viudedad o doce mensualidades si viviesen ambos beneficiarios.

1.1.3. Tras la Constitución Española

Desde la aprobación de la Constitución Española han sido múltiples las reformas y ajustes que se han realizado en las pensiones de muerte y supervivencia para, en teoría, adecuarlas a la realidad social del país, aunque realmente su esencia no ha sufrido una profunda transformación⁶⁶. Se han equiparado los beneficiarios para la pensión de viudedad independientemente de su sexo y, paulatinamente, se ha dado cobertura a formas de unión no tenidas en cuenta en épocas anteriores (parejas de hecho o parejas del mismo sexo) e incrementado el régimen protector, tanto en cuantías como en destinatarios.

⁶⁵ El artículo quinto del *Decreto 1646/1972, de 23 de junio*, exponía que la cuantía de esta prestación para cada beneficiaria sería igual a la correspondiente a los ascendientes con derecho a pensión. Por otra parte, el artículo séptimo establece que, cuando el sujeto causante de una pensión de muerte y supervivencia fuese pensionista de jubilación o invalidez, la base reguladora sería la misma que la que sirvió para calcular su pensión, revalorizada según lo hubieran sido las pensiones de igual naturaleza desde el momento del hecho causante.

⁶⁶ Dentro de un contexto de protección específico véase la *Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil*.

En primer lugar, desde el ámbito del Derecho Civil y con epicentro en la pensión de viudedad, la *Ley 30/81, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio*, equiparó situaciones de ruptura del vínculo matrimonial con el matrimonio y estableció su igualdad en el acceso a la pensión de viudedad⁶⁷, dando lugar a la posible multiplicidad de viudas y aportando mayor complejidad en la determinación del beneficiario de la pensión de orfandad.

En segundo lugar, uno de los aspectos más importantes en la configuración de las prestaciones de muerte y supervivencia, concretamente en la pensión de viudedad, no vino del ámbito normativo, sino del judicial, pues fue el Tribunal Constitucional, mediante *Sentencia 103/1983, de 22 de noviembre*, quien reconoció que el régimen jurídico existente hasta la fecha era contrario a la igualdad constitucional de todos los españoles ante la ley⁶⁸:

La vigente legislación de la Seguridad Social establece, pues, un sistema jurídico diferente en orden a las pensiones de las viudas y a las de los viudos, ya que para las primeras exige sólo la previa relación conyugal y la convivencia habitual con el consorte, en tanto que para los segundos exige además la incapacidad para el trabajo y la dependencia económica respecto del otro cónyuge. Son estas exigencias adicionales del derecho de pensión de los viudos del sexo masculino, las que, según se supone al proponer la cuestión, constituyen una discriminación por razón del sexo, que es contraria al mandato de igualdad ante la Ley establecido por el artículo 14 de la Constitución. Existe la discriminación toda vez que se da un trato diferente ante situaciones de carácter igual. La igualdad de las situaciones queda puesta de manifiesto toda vez que la cotización es igual para ambos sexos y el vacío económico que produce la mujer trabajadora es idéntico al que en iguales casos causa el marido.

Desde este momento se sientan las bases para que hombres y mujeres tengan iguales derechos respecto a la pensión de viudedad ante igualdad de aportaciones, aunque no

⁶⁷ La interpretación del Tribunal Central de Trabajo de la norma daría lugar a la *Resolución de 23 de junio de 1989, de la Secretaría General de la Seguridad Social*, mediante la que se eliminaba el requisito de convivencia para el reconocimiento de la pensión de viudedad.

⁶⁸ Con la existencia de dos votos particulares (y una adhesión a uno de ellos) contrarios a la decisión del Tribunal. En el ámbito constitucional, véase también la *Sentencia STC 184/1990*, donde de nuevo se confirma la doctrina previa del Tribunal sobre la diferencia entre el matrimonio y la convivencia extramatrimonial y se entiende no discriminatorio el distinto tratamiento de ambas realidades respecto a la concesión de una pensión de viudedad.

faltan en la materia otros pronunciamientos desde distintas perspectivas. Así, Valenciano Sal, A. (2011):

(...) El Tribunal no debió haber resuelto el conflicto con la respuesta más sencilla, sino utilizar los argumentos histórico-sociales para denegar la petición de igualdad para ambos sexos en materia de viudedad, o como alternativa, en mi opinión, más acertada, declarar la igualdad para el acceso a la pensión de viudedad para ambos sexos, exigiendo los requisitos que se le exigía al sexo masculino, (exceptuando como es lógico supuestos que debían mantenerse por el carácter de irretroactividad que a mi juicio debe aplicarse a este tipo de decisiones), pero en esta ocasión para todos los ciudadanos, sean hombres o mujeres.

Con posterioridad, de forma indirecta aunque con resultados directos, también hay que reseñar la *Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas*, cuyas referencias a las prestaciones de muerte y supervivencia se circunscribieron a la adopción del término *cónyuge* en detrimento del habitual *viudo/viuda*, lo que permite encuadrar a tales prestaciones en eminentemente contributivas, pues en teoría no se definen expresamente en la legislación posibilidades equivalentes de tipo asistencial.

De marcado interés es también la Sentencia del Tribunal Constitucional, *STC 3/1993, de 14 de enero*, que declaró inconstitucional el diferente trato que respecto a la pensión de familiares otorgaba la *LGSS*, en su redacción dada por el *Decreto 2065/1974, de 30 de mayo*, al considerar la norma a las hijas y hermanas del sujeto causante como beneficiarias de la prestación y no hacerlo con hermanos e hijos varones.

Otro paso relevante más en materia normativa fue la aparición de un nuevo Texto Refundido de la Seguridad Social a través del *Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio*, que sigue vigente más de veinte años después, en cuyo artículo 171 se definía el conjunto de prestaciones de muerte y supervivencia conforme al siguiente cuadro:

Cuadro 12. Las coberturas de muerte y supervivencia en el RDL 1/1994 (LGSS)

Auxilio por defunción	Indemnización a tanto alzado AT/EP
Pensión vitalicia de viudedad	Pensión de orfandad
Pensión vitalicia favor de familiares	Subsidio temporal favor de familiares

Con esta norma se determinaron con mayor claridad y concreción las bases sobre las que se asienta el modelo de protección a estudio en lo que corresponde a sujetos causantes, imprescriptibilidad o compatibilidad y límite de pensiones, dentro de un escenario de compatibilidad con las rentas de trabajo.

A renglón seguido, en 1995 y en el seno del denominado Pacto de Toledo⁶⁹, se plasmaron determinados principios generales para las prestaciones aquí estudiadas:

Reforzar el principio de solidaridad y de garantía de suficiencia, en la medida en que la situación financiera lo permita, adoptando medidas como pueden ser: la elevación de la edad máxima de permanencia en el percibo de las pensiones de orfandad; o la mejora de las pensiones de viudedad en el caso de menores ingresos.

Por su parte, *el Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social*, concretó algunos aspectos contenidos en esta última ley, equiparándose las cuantías mínimas de las pensiones de viudedad de beneficiarios menores de 60 años con cargas familiares y rentas que no excediesen del límite de ingresos anuales que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado, a los mayores importes correspondientes a beneficiarios entre 60 y 64 años. Respecto a la orfandad, fijado un grado mínimo de incapacidad permanente absoluta o una edad general menor de 18 años como condiciones de acceso para los beneficiarios, y siempre que no se realizase un trabajo lucrativo, los límites de edad de percepción se establecieron en menos de 21 años –si hay supervivencia de uno de los progenitores- y menos de 23 años –si no vivía ninguno de los padres-, límites que se obvian cuando el beneficiario tenga un porcentaje de incapacidad equivalente al de la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. Para que los hijos que el supérstite hubiese aportado al matrimonio fuesen beneficiarios de la pensión se exigía: que el matrimonio se hubiese celebrado con dos años de antelación al hecho causante, la convivencia con el causante y a sus expensas, que no se tuviese derecho a otra pensión de la Seguridad Social ni quedasen familiares con obligación de prestarles alimentos según la legislación civil.

⁶⁹ Aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados del *Texto aprobado por la Comisión de Presupuestos en relación con el Informe de la Ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse*. Boletín Oficial de las Cortes Generales de 12 de abril de 1995.

Como última iniciativa legal que citamos para este período tenemos la *Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social*, que en su disposición adicional decimotercera propone unas modificaciones normativas que vienen a favorecer la concesión de la pensión de viudedad (y orfandad) desde una situación en la que el sujeto causante no se encontrase en situación de alta o asimilada en el momento de su fallecimiento, pero siempre que hubiera cotizado al menos 22 meses. Además, de cara a los supuestos de percepción se recoge expresamente un supuesto no incluido en el *Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio*, como es el de la nulidad matrimonial, donde el derecho a la pensión de viudedad corresponderá, en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante, al superviviente del que no se apreció mala fe y no hubiera contraído nuevas nupcias, requisito de nuevas nupcias que también queda extendido a quien hubiera sido cónyuge legítimo.

1.1.4. El siglo XXI

Comenzado el presente siglo, el *Acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social*⁷⁰, de 9 de abril de 2001, promovió una mejora cuantitativa y cualitativa de la cobertura basada en el incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad, el establecimiento de una pensión de viudedad “especial”, la concreción del marco de compatibilidad de la pensión de viudedad, el incremento de la edad de acceso a la pensión de orfandad y de las cuantías mínimas de determinados segmentos de beneficiarios. Estas materias fueron recogidas posteriormente en el *Real Decreto 1465/2001, de 27 de diciembre, de modificación parcial del régimen jurídico de las prestaciones de muerte y supervivencia*.

Bajo estos criterios se planteó en esta última norma un sistema orientado a todos los regímenes de cobertura (exceptuando las Clases pasivas) y en la determinación de la pensión de viudedad se fijó el porcentaje a aplicar a la base reguladora en el 46% frente al 45% anterior, excepto cuando esta pensión constituyese la única o la principal fuente de ingresos del pensionista y éste tuviese cargas familiares, caso en el que el porcentaje sería del 70%⁷¹, aplicándose también estas medidas a las pensiones ya causadas que

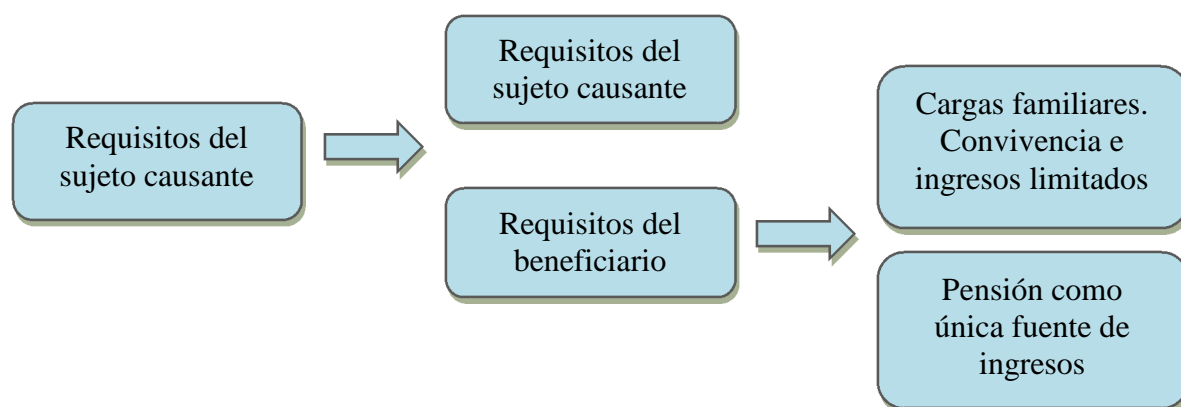
⁷⁰ Firmado por el Gobierno, la organización sindical Comisiones Obreras y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.

⁷¹ Se entiende por cargas familiares la convivencia del beneficiario con hijos menores de 26 años o mayores incapacitados, o menores acogidos, cuando los rendimientos del conjunto de la unidad familiar (incluido el pensionista) divididos entre el número de sus miembros, no superen, en cómputo anual, el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. En líneas generales se considerarán como rendimientos computables cualesquiera bienes y derechos, derivados tanto del trabajo como del capital, así como los de naturaleza *prestacional* (*sic.*).

hicieron uso de porcentaje inferiores, si bien en el supuesto de aplicación del 70% habría que acreditar que en su momento se cumplían los requisitos establecidos para ello. El porcentaje general volvería a subir hasta el 48% mediante el *Real Decreto 1425/2002, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2003*.

El planteamiento que subyace en la aplicación de un porcentaje especial es de marcado interés, pues las pensiones de viudedad, que habían quedado encuadradas claramente en la modalidad contributiva, recogen ahora características de espíritu asistencial o no contributivo al aceptar entre las condiciones de concesión criterios sobre la condición económica y las necesidades del beneficiario. Se produce así una nueva transformación de la idiosincrasia de la prestación, pues ya no son las características vinculadas al sujeto causante las que determinan su cuantía sino que se imponen las del beneficiario, dando lugar a un modelo multiforme, híbrido y de compleja justificación, que ya sólo en base a esta circunstancia es susceptible de ser reformado.

Cuadro 13. La transformación de la viudedad contributiva en asistencial



Para la aplicación del porcentaje especial es necesario que los rendimientos anuales del pensionista no superen la cuantía resultante de sumar al límite anual previsto para el reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, el importe anual que corresponda a la pensión mínima de viudedad en función de la edad del pensionista, entendiéndose que la pensión constituye su principal o única fuente de ingresos cuando su importe anual –incluido el complemento a mínimos– represente al menos el 50% del total de sus ingresos anuales. Como cuantía de la pensión también se tendrá en cuenta el importe del complemento a mínimo que pudiera corresponder.

Los requisitos de falta de ingresos, cargas familiares y de la pensión de viudedad como principal fuente de ingresos del pensionista deberán concurrir durante todo el período de percepción de la pensión. La pérdida de alguno de ellos motivará la aplicación del porcentaje general, con efectos desde el día 1 del mes siguiente a aquél en que deje de concurrir alguno estos requisitos.

Por otra parte, nuevamente se concretaron las causas de extinción de la pensión de viudedad, quedando como tales: el fallecimiento del beneficiario, la sentencia firme que establezca su culpabilidad en la muerte del causante y contraer un nuevo matrimonio, si bien para este último ejemplo se estableció como excepción la concurrencia de unos requisitos que incidían en el carácter asistencial:

- A) Edad: ser mayor de 61 o menor de dicha edad si se tiene reconocida una pensión de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez o se acredita una minusvalía en un grado igual o superior al 65%.
- B) Límite de ingresos personal: Constituir la pensión o pensiones de viudedad percibidas por el pensionista la principal o única fuente de ingresos (al menos el 75% del conjunto de sus ingresos en cómputo anual).
- C) Límite de ingresos del matrimonio: Tener el matrimonio unos ingresos anuales, incluida la pensión o pensiones de viudedad, que no superen dos veces el importe anual del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento. Si se respeta el límite personal pero no el matrimonial, se minorarán los importes de la pensión de viudedad hasta alcanzar el mismo. Cuando exista más de una pensión de viudedad, la minoración en cada una de ellas es proporcional al vínculo existente entre cada pensión y la suma total de todas ellas.

La nueva pensión de viudedad que pudiese generarse como consecuencia del fallecimiento del nuevo cónyuge será incompatible con la pensión o pensiones de viudedad que se venían percibiendo, debiendo el beneficiario optar por una de ellas.

En cuanto a la pensión de orfandad, se refuerza la compatibilidad entre orfandad y trabajo y, así, cuando el hijo del sujeto causante no efectuase un trabajo lucrativo u obtuviese ingresos laborales en cómputo anual inferiores al 75% de la cuantía del salario mínimo anual fijado en cada momento, podría ser beneficiario de la pensión de orfandad siempre que, al fallecer el causante, fuese menor de veintidós años de edad, o de veinticuatro años si no sobreviviera ninguno de los dos padres, creándose así un régimen más protector que el establecido como norma general^{72,73}. Además, la extinción de la

⁷² Para los distintos supuestos en los que la pensión puede quedar en suspenso, véase el artículo tercero del *Real Decreto 1465/2011, de 27 de diciembre*, para la orfandad, y el artículo cuarto para la pensión de determinados familiares.

⁷³ Véase igualmente el artículo 34 de la *Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social*.

pensión de orfandad acaece con el cumplimiento de la edad mínima fijada en cada caso (salvo reducción en la capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez), con el cese de la incapacidad que otorgaba el derecho a la pensión, el fallecimiento del beneficiario o su matrimonio.

Respecto a las pensiones en favor de familiares y en el caso de los menores de dieciocho años o personas con la capacidad de trabajo reducida en los términos ya indicados, si el nieto o hermano del sujeto causante no efectúa un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia o sus ingresos resultan inferiores al 75% de la cuantía del salario mínimo anual fijado, podrán ser beneficiarios de esta pensión siempre que, al fallecer el causante, sean menores de veintidós años. Para los nietos y hermanos se plantea el mismo régimen de extinción que el indicado para los huérfanos, quedando como causas para los ascendientes el fallecimiento o el matrimonio. En cuanto al subsidio temporal en favor de familiares y en consonancia con los planteamientos anteriores, se amplía el derecho de percepción a los hijos y hermanos que, cumpliendo el resto de requisitos establecidos, sean mayores de veintidós años de edad, frente a los dieciocho que recogía la *Orden de 13 de febrero de 1967*.

En un breve período de tiempo los parámetros de la pensión de viudedad fueron nuevamente favorecidos a través del *Real Decreto 1795/2003, de 26 de diciembre, de mejora de las pensiones de viudedad*, que elevó al 52% el porcentaje general aplicable a la base reguladora para determinar la pensión en todos los regímenes (excepto Clases Pasivas), en las nuevas pensiones y en las pensiones ya causadas que tuviesen un porcentaje inferior. Respecto a la base reguladora se indicaba que, en las contingencias comunes, sería "el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24 meses, elegidos por los beneficiarios dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión", mientras que si el sujeto causante se encontraba a su fallecimiento en una situación de pasivo, la base reguladora sería la misma que sirvió para determinar la pensión correspondiente con las variaciones derivadas de mejoras o revalorizaciones desde el acaecimiento del hecho causante que la originó. No hay que dejar de señalar la facultad del beneficiario de elegir las bases de cotización que configurarán el importe inicial de su pensión, argumento ya contenido en el *Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre*, y favorable en la configuración de esta tipología de prestaciones que, además, es una quimera tanto conceptual como práctica, pues es dudoso que fuese el beneficiario quien verdaderamente realizaba tal elección aunque sobre él haga recaer la norma el ejercicio de la misma.

También en 2003⁷⁴, de nuevo en el seno del Pacto de Toledo⁷⁵, se sentaron principios adicionales sobre el devenir de estas prestaciones, remarcándose sus aspectos asistenciales y la validez de éstos en el diseño de la protección:

Las prestaciones de supervivencia han tenido, en los últimos años, una evolución en la que se ha tratado de atender más a las situaciones reales de necesidad que a la estricta contributividad [sic.]. La Comisión entiende que éste es un camino adecuado pero que para que no se produzcan contradicciones en la regulación y situaciones de discriminación legal, es necesaria una reformulación integral de las prestaciones de supervivencia que atienda a un doble objetivo: por una parte, cubrir de forma efectiva las necesidades familiares que se producen como consecuencia del fallecimiento de una persona y, por otra, mejorar sustancialmente las actuales prestaciones de viudedad de las personas que no disponen de otros ingresos, especialmente en el caso de los mayores de 65 años. Se recomienda, asimismo, eliminar las contradicciones que se derivan de la aplicación de las normas reguladoras de la viudedad. En relación con las prestaciones de orfandad, la Comisión constata los avances registrados en términos de mejora de la regulación de dichas prestaciones desde la aplicación del Pacto de Toledo; no obstante, insta a continuar profundizando en mejoras en las pensiones de orfandad, especialmente en los casos en los que la cuantía de la prestación es muy reducida unidos a situaciones de falta de ingresos alternativos o ingresos relativamente bajos⁷⁶.

En el ejercicio siguiente la *Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género* estableció una nueva disposición que pretendía evitar que quien fuese condenado en firme por cometer un delito contra una víctima de esta tipología de violencia pudiera aprovecharse de una posible pensión de

⁷⁴ En este ejercicio la *Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social*, modificó la LGSS, entre otros aspectos, dando una nueva redacción al articulado general de la pensión de viudedad y redefiniendo su compatibilidad.

⁷⁵ *Informe de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados*, de 30 de septiembre de 2003.

⁷⁶ Nótese que posteriormente la *Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006*, plantearía en su disposición adicional quincuagésima cuarta que: "El Gobierno presentara ante el Congreso de los Diputados, previa su valoración y análisis con los agentes sociales en el marco del dialogo social, un proyecto de Ley que, dentro de un contexto de reformulación global de la pensión de viudedad, dirigido a que la misma recupere su objetivo de prestación sustitutiva de las rentas perdidas como consecuencia del fallecimiento del causante y posibilite, igualmente, el acceso a la cobertura a las personas que, sin la existencia de vínculo matrimonial, conformen un núcleo familiar en el que se produzca una situación de dependencia económica y/o existan hijos menores comunes, en el momento de fallecimiento del causante". A día de hoy, casi diez años después, el proyecto de ley mencionado, de más que probable contenido contradictorio, no ha visto la luz.

viudedad asociada, si bien la redacción original y literal de la norma era inaceptable por cuanto solamente trabajaba en una dirección, evitar que el varón fuese el beneficiario, algo que no se recogía respecto a la mujer y dio lugar a una reforma parcial posterior a través de la *Ley 40/2007, de 4 de diciembre*.

Por otra parte, frente a la situación existente hasta ese momento, la *Ley 9/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social*, fomentó un espacio protector para aquellos casos que, estando integrados en modelos de cobertura como el retiro obrero y el SOVI, no alcanzaron en su momento la integración en la Seguridad Social aunque tuvieran expectativas de ello, proponiéndose aquí la compatibilidad de las pensiones SOVI y de la viudedad de la Seguridad Social, si bien su suma tendría como límite “el doble del importe de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios con 65 o más años que esté establecido en cada momento”.

En materia civil interesa la *Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio*, a raíz de la cual las parejas del mismo sexo pasaron a igualarse en derechos y obligaciones a los matrimonios entre personas de diferente sexo, mientras que constitucionalmente se presentaron novedades al establecer el Tribunal Constitucional, mediante *Sentencia 154/2006, de 22 de mayo*, la igualdad respecto a la prestación a tanto alzado por contingencias profesionales de los hijos habidos dentro del matrimonio frente a los hijos reconocidos y habidos fuera del mismo⁷⁷.

Un nuevo *Acuerdo sobre medidas en materia de seguridad social*⁷⁸, de 13 de julio de 2006, puso una vez más las bases sobre el futuro de las prestaciones de muerte y supervivencia buscando “mejorar la situación de las familias que dependen de las rentas del fallecido y adecuar la acción protectora del sistema a las nuevas realidades sociales”,

⁷⁷ *Boletín Oficial del Estado de 22 de junio de 2006. Suplemento*. En este asunto, siendo indudable el carácter de huérfano del hijo legalmente reconocido, el Tribunal Constitucional centra su decisión en la característica de la unión del sujeto causante, si bien en nuestra opinión otorga irrelevancia a un elemento como es la supervivencia o no de un ascendiente en primer grado que se hace cargo del huérfano, la madre, independientemente de que ésta pueda ostentar o no la condición de viuda, pues a nuestro entender el sentido de que la indemnización de la viuda (seis mensualidades) pase al huérfano si no existe aquélla, no viene derivado de su propia condición, sino de la situación de mayor desprotección en que queda el huérfano si no existe nadie que se haga cargo de él.

⁷⁸ Firmado por el Gobierno de España, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.

esto es, la insistencia en las características asistenciales. Así, literalmente quedó recogido que:

- a) La pensión de viudedad debe recuperar su carácter de renta de sustitución y reservarse para aquellas situaciones en las que el causahabiente contribuía efectivamente al sostenimiento de los familiares supérstites: matrimonio; parejas de hecho, siempre que tuviesen hijos en común con derecho a pensión de orfandad y/o existiese dependencia económica del sobreviviente respecto del causante de la pensión; o personas divorciadas perceptoras de las pensiones previstas en el Código Civil.
- b) En caso de matrimonio, para acceder a la pensión de viudedad, en los supuestos de fallecimiento del causante por enfermedad común, se requerirá un período previo de vínculo conyugal de dos años o la existencia de hijos en común con derecho a pensión de orfandad. De no acreditarse ese período y ante la ausencia de hijos con derecho a pensión de orfandad, se concederá una pensión temporal con una duración equivalente al período acreditado de convivencia matrimonial.
- c) En los supuestos de parejas de hecho, para acceder a la pensión de viudedad se precisará la constatación de convivencia mutua, estable y notoria, durante un periodo amplio, a determinar en el desarrollo del Acuerdo. En caso de existencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad, se precisará, además, dependencia económica del conviviente sobreviviente, en más del 50% de sus ingresos, de los del causahabiente. En los supuestos de inexistencia de hijos comunes, se exigirá dependencia económica en más del 75% de los ingresos. Cuando no se acceda a la pensión de viudedad debido al período de convivencia o a la falta de dependencia económica, y existiesen hijos comunes con derecho a pensión de orfandad, el importe que hubiera correspondido a la pensión de viudedad acrecerá aquélla.
- d) En los supuestos de distribución de la pensión entre la persona viuda del fallecido con otra que hubiera sido cónyuge de este último, y del que en el momento del fallecimiento se encontraba divorciada, se establecerán las oportunas modificaciones normativas en orden a que exista una garantía del 50% de la pensión en favor del cónyuge sobreviviente, que cumpla los requisitos para acceder a la misma.
- e) Para los nacidos con posterioridad a 1 de enero de 1967 se establecerán, previa la realización de un estudio, en el marco de la Comisión no Permanente de valoración de los resultados del Pacto de Toledo, reglas para la reformulación de la pensión de viudedad que, a su vez, serán objeto de negociación en el marco del diálogo social.

En el ámbito de la pensión de orfandad, se acuerdan las siguientes propuestas:

- a) La atribución del porcentaje del 70 por 100 en la pensión de viudedad, en los supuestos de menores rentas, no irá en detrimento de la cuantía de las pensiones de orfandad.
- b) La mejora progresiva de la pensión mínima de orfandad, en el caso de beneficiarios, menores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 65%.
- c) El incremento de la cuantía de las pensiones de orfandad, en el caso de parejas de hecho, cuando el conviviente supérstite no tuviese derecho a la pensión de viudedad *[en los términos que se establecían para la pensión de viudedad de tales parejas de hecho]*.

Como venía siendo habitual, buena parte estos planteamientos tomaron forma legal en una ley posterior, aquí la *Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social*, que trajo cambios para las prestaciones por muerte y supervivencia⁷⁹ y a su vez recuperó como herramienta de cobertura la prestación temporal de viudedad. Sin embargo, la disposición adicional vigésima quinta de esta norma indicaba que “El Gobierno, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, elaborará un estudio que aborde la reforma integral de la pensión de viudedad”, sin que, de nuevo y hasta el momento, se haya constatado el cumplimiento de este mandato legal.

Para el auxilio por defunción la presunción de satisfacción de los gastos de sepelio se hace recaer, por este orden, en “el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho, hijos y parientes del fallecido que conviviesen con él habitualmente”. Por otra parte, la disposición adicional décima establece que “El auxilio por defunción se incrementará en un 50 por ciento en los próximos 5 años, a razón de un 10 por ciento anual. A partir de ese momento, en cada ejercicio, se actualizará el auxilio por defunción con arreglo al Índice de precios al consumo”.

En cuanto a la pensión vitalicia de viudedad, se planteó el régimen jurídico recogido en el siguiente cuadro, alcanzando la cobertura a los supervivientes de uniones no

⁷⁹ Según Fernández Domínguez, J.J. y M.R. Martínez Barroso (2011), en esta norma el escenario jurídico se plantea con “una intención más encaminada a proporcionar cobertura a nuevas realidades que a resolver antiguos problemas”.

matrimoniales (que también se encontrarían amparados en cuanto al auxilio por defunción y la indemnización a tanto alzado)⁸⁰.

Cuadro 14. La pensión de viudedad tras la Ley 40/2007. Exigencias de acceso

Sujeto Causante	<p>↔</p> <p>Sí está en alta -> 500 días de cotización en 5 años anteriores</p> <p>Si es accidente -> No se requiere período previo de cotización</p> <p>Si no está en alta -> 15 años de cotización</p>
Cónyuge superviviente	Fallecimiento por enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo conyugal: se exigen hijos comunes o matrimonio con un año de antelación o 2 años de convivencia.
Pareja de hecho	<p>En el año natural anterior los ingresos personales del sobreviviente deben ser < 50% ingresos comunes (o <25% si no hay hijos comunes con derecho a pensión de orfandad).</p> <p>O los ingresos del sobreviviente son < 1,5 del SMI, límite que se incrementa 0,5 por cada hijo común con pensión de orfandad que conviva con él.</p>
Separación o divorcio	<ul style="list-style-type: none"> - Derechos para el cónyuge legítimo que no haya contraído nuevo matrimonio o pareja de hecho. - Extinción de la pensión compensatoria del artículo 97 C. Civil - Concurrencia de beneficiarios: un 40% mínimo a favor del cónyuge o beneficiario con convivencia. - Nulidad matrimonial. El derecho corresponde a quien tuviere reconocido el derecho del artículo 98 C. Civil, en cuantía proporcional al tiempo vivido y con posible concurrencia.

Fuente: elaboración propia.

Se deja constancia de que el derecho a la pensión de viudedad se extinguirá cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho. Asimismo, cuando el cónyuge superviviente no pudiese acceder a la pensión de viudedad por no acreditar que

⁸⁰ En palabras de Fernández Domínguez, J.J. y M.R. Martínez Barroso (2011), con la inclusión de las uniones de hecho dentro de los beneficiarios de la muerte y supervivencia se produce "el desplazamiento del centro de gravedad desde el matrimonio hacia la familia".

su matrimonio con el causante hubiese tenido una duración de un año o, alternativamente, por la inexistencia de hijos comunes y reuniese el resto de requisitos exigidos para la concesión de la pensión de viudedad, tendrá derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la que le hubiera correspondido de forma vitalicia pero con una duración de dos años⁸¹.

En cuestión de orfandad se recogieron los límites temporales de percepción en función de los requisitos sobre edad e incapacidad para el acceso a la prestación⁸², mientras que para el límite general de concurrencia se indicaba que “podrá ser rebasado en caso de concurrencia de varias pensiones de orfandad con una pensión de viudedad cuando el porcentaje a aplicar a la correspondiente base reguladora para el cálculo de esta última sea del 70 por ciento, si bien, en ningún caso, la suma de las pensiones de orfandad podrá superar el 48 por ciento de la base reguladora que corresponda”. Se estableció una mayor facilidad en el acceso a la prestación al eliminar los requisitos de cotización previa por el sujeto causante que estuviese en situación de alta o asimilada en el momento del hecho causante.

Un hito final en esta primera década será el *Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación de las prestaciones por muerte y supervivencia*, que incide en la orfandad absoluta, cuyas prestaciones podrán incrementarse con la cuantía de la pensión de viudedad si no existe beneficiario o tras el fallecimiento de éste, incrementos que respetarán los límites de concurrencia establecidos si bien serán compatibles con la prestación temporal de viudedad; si existen múltiples beneficiarios, las cuantías se repartirán entre éstos. En caso de muerte por contingencias profesionales la indemnización que se reconozca a los huérfanos absolutos se incrementará con la que hubiera correspondido al cónyuge o asimilado. Si existen varios beneficiarios, el incremento se distribuirá a partes iguales entre todos ellos. En todos los supuestos, las prestaciones se reconocerán a cargo de un solo progenitor.

⁸¹ Con carácter excepcional se reconocía el derecho a la pensión de viudedad para hechos causados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley cuando concurriesen las siguientes circunstancias: que reuniendo los requisitos de alta y cotización no se hubiese podido causar derecho a aquélla, que existió convivencia ininterrumpida durante al menos los 6 años anteriores al óbito, que existían hijos comunes, que el beneficiario no tuviera derecho a otras pensiones de seguridad social y que la solicitud se realizó en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley.

⁸² “En los casos en que el hijo del causante no efectúe un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena o, cuando realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores en cómputo anual a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual, podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad, siempre que en la fecha del fallecimiento del causante, aquél fuera menor de 22 años, o de 24 si no sobreviviera ninguno de los dos padres o el huérfano presentara una discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento”.

Ya en el año 2011 encontraremos un nuevo *Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo*, que vuelve a proponer modificaciones en las prestaciones contributivas de muerte y supervivencia bajo un enfoque que prima las características asistenciales:

La Comisión propone la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia —en especial viudedad y orfandad— en línea con lo ya demandado por el Pacto de Toledo en 2003, y que no ha sido llevado a término en su totalidad. Dicha reforma deberá atender, en todo caso, a mejorar las actuales pensiones de viudedad (en particular las de las personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza) y orfandad. La Comisión defiende el mantenimiento del carácter contributivo de estas prestaciones, y entiende que la adopción de medidas que introduzcan criterios basados en condiciones específicas para el acceso a ellas (edad, renta, hijos, compatibilidades,...) no puede modificar dicha naturaleza básica.

Todo ello tiene por objeto acomodarse a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas, a fin de mejorar la protección de los pensionistas sin otros recursos, y de adecuar la protección de colectivos menos vulnerables.

En este sentido, la Comisión opina que, a efectos de una cobertura adecuada de las situaciones de necesidad, la intensidad protectora debe concentrarse en las personas beneficiarias de la pensión de viudedad, con 65 o más años, en las que la pensión constituye su principal fuente de ingresos, al objeto de garantizar una situación de renta equiparable a la existente antes del fallecimiento del cónyuge o conviviente. A tal efecto, la Comisión considera que el mecanismo más adecuado sería elevar el porcentaje de la base reguladora que se utiliza para calcular la pensión de viudedad; no obstante, la cuantía resultante nunca podría dar lugar a una pensión de viudedad superior a la pensión de la que ésta derive. La Comisión recomienda que el Gobierno lleve a cabo los estudios oportunos sobre los efectos que tendría que, para la determinación de la cuantía de la pensión de viudedad, se tengan en cuenta los periodos de cotización acreditados por el causante, con una fórmula similar a la que se utiliza para el cálculo de la pensión de jubilación. El resultado de dichos estudios se elevará a la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.

Con el objetivo de proseguir con la mejora de la protección, la Comisión considera que el percibo de la pensión de orfandad debería extenderse hasta que la persona huérfana cumpla 25 años o, como máxima extensión, hasta que concluya el año en que alcance esa edad, cuando estuviere cursando estudios.

La Comisión considera que es oportuno homogeneizar y ordenar los límites de edad para el acceso y el mantenimiento de los diferentes derechos ligados a la cobertura familiar dentro del sistema de protección social.

Como se aprecia, es como mínimo sorprendente que la comisión parlamentaria promueva la incorporación de criterios asistenciales y a la vez defienda el carácter contributivo de las prestaciones, que hable de mantener este carácter y a la vez pretenda centrarse en la vulnerabilidad, expresión claramente representativa del escenario contradictorio y del vacío conceptual en el que se mueven las prestaciones de muerte y supervivencia.

Concluiremos este breve recorrido normativo⁸³ con La *Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social*, que estableció en su disposición adicional trigésima que, para la pensión de viudedad, se aplicaría un porcentaje del 60% a la base reguladora para beneficiarios con, al menos, 65 años de edad, que no tuvieran derecho a otra pensión pública, no percibiesen ingresos por actividad laboral y cuyos rendimientos no superasen, en cómputo anual, el límite establecido para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad⁸⁴, nueva iniciativa de corte asistencial a financiar dentro de la modalidad contributiva. Por su parte, la disposición adicional primera reformó la edad máxima general de acceso a pensiones de orfandad, situándola en 21 años y dejando la edad ampliada ante la inexistencia de actividad laboral lucrativa o ingresos superiores al Salario Mínimo Interprofesional en 25 años, mientras que también se propuso la aplicación paulatina del límite de edad a efectos de las pensiones de orfandad en los supuestos de orfandad simple en los que el huérfano no trabaje.

En definitiva, desde sus comienzos el sistema ha sido acreedor de un sinfín de reformas bajo el prisma de la ampliación de la cobertura, tanto en número de individuos como en intensidad. Sin embargo, estas reformas han acabado centrándose en las particularidades de determinados colectivos y diluyendo conceptos, dando lugar a un

⁸³ Sin perjuicio de lo recogido en epígrafes y capítulos siguientes y de la existencia de otras normas relacionadas con la materia aquí tratada.

⁸⁴ Se preveía una adaptación progresiva en ocho años desde el 1 de enero de 2012. Sin embargo, la aplicación de este sistema se ha aplazado sucesivamente por la disposición adicional novena del *Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la corrección del déficit público*, por la disposición adicional octogésima tercera de la *Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013*, por la disposición adicional vigésima séptima de la *Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014*. y, finalmente, por disposición adicional vigésima novena de la *Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015*. Hay que indicar que la paralización de esta iniciativa se realiza por motivos económicos y de coste, no por la ineficiencia que añade al sistema en su conjunto.

sistema fragmentado y complejo, pues cada nuevo avance con pretensión de solucionar algún posible conflicto lo ha hecho sin garantía de no generar nueva incertidumbre, no sólo dentro de esta tipología de prestaciones sino en el sistema de protección en conjunto; esto es, cada paso que pudiera entenderse positivo ha introducido a su vez sesgos y argumentos cuestionables hasta llegar a un sistema paternalista y proteccionista, que no protector. Lo cierto es que en la actualidad no queda bien definido el objetivo real de las prestaciones por muerte y supervivencia, si bien sí puede decirse que, tras las múltiples reformas realizadas, no es el enunciado al principio de este capítulo: cubrir situaciones de necesidad, pues tal característica no es común requisito para su concesión o para la determinación de los importes que puedan corresponder.

1.2. Características generales. El diseño y la estructura contemporáneos

Una manera de aproximarse a las prestaciones de muerte y supervivencia es acudir a González Ortega, S. *et al.* (2012), quienes las delimitan aludiendo a que “el riesgo social seleccionado es, ciertamente la muerte, pero la contingencia tutelada es la consecuencia del fallecimiento”⁸⁵. En efecto, su caracterización parte de que el hecho causante de estas prestaciones es el fallecimiento de la persona asegurada o sujeto causante, independientemente del motivo que lo origina⁸⁶: accidente laboral, accidente no laboral, enfermedad profesional o enfermedad común, si bien es cierto que, en la práctica, este origen tiene su importancia al influir en las condiciones de acceso a una prestación o en las características de la propia acción protectora. Por tanto, el hecho causante surge inexcusablemente de un fallecimiento, que puede ser comprobable o ser presunto para los trabajadores que hayan desaparecido con ocasión de un accidente que haga presumible su muerte y de los que no se tenga noticias durante los noventa días naturales posteriores al acaecimiento del accidente⁸⁷. El fallecimiento, como acto de extinción de la personalidad, se somete a los preceptos contenidos en el Código Civil y es condición necesaria pero no suficiente para el nacimiento de un posible derecho, dando lugar a una de las características definitorias de estas prestaciones: el beneficiario es persona distinta del asegurado.

⁸⁵ Sobre su realidad actual, Fernández Domínguez, J.J. y M.R. Martínez Barroso (2011) plantean que bajo la muerte y supervivencia se “regula una rama de la acción protectora pública tan compleja en su estructura como obsoleta, normativa y socialmente (...)”.

⁸⁶ Sobre la distinta casuística respecto al fallecimiento, puede verse Rodríguez Iniesta, G. (2009).

⁸⁷ En este caso se podrán obtener todas las prestaciones por muerte y supervivencia a excepción del *auxilio por defunción* (Artículo 172.3. de la LGSS). Nótese que se hace referencia expresa a quienes tengan la condición de “trabajadores” y no a los perceptores de otra pensión que pudieran ser causantes de las prestaciones aquí estudiadas.

En el ámbito conceptual del presente trabajo de investigación tomaremos generalmente como punto de partida la casuística del Régimen General de la Seguridad Social por ser la base del sistema que extiende sus características hacia otros regímenes, para los que son perfectamente válidos buena parte de los conceptos y argumentos utilizados, siendo el esquema de las prestaciones el siguiente:

Cuadro 15. Esquema de las prestaciones de muerte y supervivencia

		P R E S T A C I O N E S <td colspan="2"></td>			
VITALICIAS		INDEMNIZACIÓN <th colspan="2"></th>			
VIUDEDAD FAVOR DE FAMILIARES ORFANDAD EN INCAPACIDAD		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		P A G O Ú N I C O	
VIUDEDAD ORFANDAD FAVOR DE FAMILIARES		AUXILIO POR DEFUNCIÓN			
TEMPORALES		COMPENSACIÓN DE GASTOS			

1.2.1. El Régimen General de la Seguridad Social

Las prestaciones por muerte y supervivencia en el Régimen General de la Seguridad Social, que actúa en la práctica como núcleo fundamental del sistema, vienen recogidas principalmente en el capítulo VIII del *Real Decreto legislativo 1/1994, de Texto refundido de la Seguridad Social*, que en su artículo 171.1 las separa en: auxilio por defunción, pensión vitalicia de viudedad, prestación temporal de viudedad, pensión de orfandad, pensión vitalicia a favor de familiares o subsidio temporal en favor de familiares. Si la muerte es causada por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional se concederá, además, una indemnización a tanto alzado⁸⁸. Sobre la naturaleza del hecho causante hay que decir que serán calificados como fallecidos por un accidente de trabajo o enfermedad profesional quienes, en el momento del óbito, tengan reconocida una

⁸⁸ Artículo 171.2 de la LGSS.

incapacidad permanente absoluta para todo trabajo o la condición de gran inválido; en otro caso deberá probarse que el fallecimiento se debe a tales contingencias, siempre que haya ocurrido dentro de los cinco años siguientes a la fecha del accidente, o cualquiera que sea el tiempo transcurrido en el supuesto de la enfermedad profesional. Así, se asimila la causa real de la incapacidad a una contingencia profesional, aun cuando aquélla no tenga relación con ésta.

En lo que respecta a los sujetos causantes, lo serán los fallecidos que en el momento del hecho causante estén afiliados y en alta o situación asimilada al alta en la Seguridad Social, o sean perceptores de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia natural que cumplan el período de cotización que, en su caso, corresponda, o sean pensionistas por incapacidad permanente y jubilación, ambos en la modalidad contributiva. Es decir, el sujeto causante puede encontrarse en el momento de ocurrir el hecho causante en situación laboral activa o en situación pasiva, siendo tal situación y su trayectoria como cotizante argumentos determinantes del importe de la prestación a favor de un tercero beneficiario. Puesto que el asegurado o sujeto causante no puede percibir las propias prestaciones que causa, es necesaria la existencia de al menos un beneficiario que, en términos generales, el legislador sitúa en el entorno familiar del finado, si bien existen distintas peculiaridades en la materia según la prestación de que se trate puesto que, por ejemplo, el auxilio por defunción parte de la presunción mientras que es la concreción la que dirige el resto de prestaciones.

En cuanto a la situación de alta, ésta puede ser ordinaria, de pleno derecho (por ejemplo, por incumplimiento del empresario)⁸⁹ o alta especial (por huelga o cierre patronal)⁹⁰, sin que deba omitirse la flexibilización que se produce en la práctica respecto a este requisito⁹¹. Por su parte, en el alta asimilada⁹² se encuadran supuestos como la situación legal de desempleo total durante la que el trabajador perciba prestación por dicha contingencia, la situación del trabajador durante el período correspondiente a vacaciones

⁸⁹ Artículo 125.3 de la LGSS.

⁹⁰ Artículo 125.6 de la LGSS.

⁹¹ Flexibilización sujeta generalmente al arbitrio de los tribunales, pero también de la Administración, en base a una "interpretación humana, flexible e individual". Véase Rodríguez Iniesta, G. (2009). Pág. 71: "En torno al acceso de las prestaciones económicas de incapacidad permanente y de supervivencia se ha construido o al menos se ha consolidado este criterio jurisprudencial". Este criterio generalmente giraría sobre los supuestos siguientes: a) el causante acredita larga vida laboral; b) se aprecia causa impeditiva ajena a la voluntad del causante; c) existe una desvinculación con el sistema por circunstancias extraordinarias.

⁹² Artículo 125 de la LGSS y artículo 36 del *Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social* (Real Decreto 84/1996, de 26 de enero).

anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas con anterioridad a la finalización del contrato, mientras que podrán asimilarse otros supuestos como la suspensión de contrato de trabajo con reserva de puesto (por ejemplo la excedencia por cuidado de hijo), convenios especiales, etc. Hablamos, por tanto, de un requisito de alta en sentido amplio y genérico, junto al cual, para tener derecho a una prestación se establece la obligación de cotización previa durante un período determinado, formalidad que, sin embargo, no se exige en todos los ámbitos: así, por ejemplo, no es necesaria para los accidentes ni para las enfermedades profesionales, pero tampoco para la concesión del auxilio por defunción⁹³.

Las prestaciones por muerte y supervivencia son teóricamente prestaciones de carácter contributivo, es decir, como expusimos en el capítulo I, por su propia naturaleza se han de enmarcar dentro de una relación entre las aportaciones imputadas al asegurado y las percepciones recibidas por el beneficiario, no siendo necesaria para su concesión la existencia de una necesidad real en dicho beneficiario ni siendo relevante tampoco su nivel de renta o patrimonio. Sin embargo, como también hemos indicado en el primer epígrafe de este capítulo segundo e insistiremos en capítulos posteriores, es más correcto indicar que, en la práctica, las prestaciones de muerte y supervivencia se financian mediante la modalidad contributiva aunque manifiestan en su diseño y estructura características de las pensiones no contributivas. Por otra parte, según dice Rodríguez Iniesta, G. (2009), las prestaciones por muerte y supervivencia: “No son prestaciones familiares, aunque indirectamente guarden relación con la familia por ser los sujetos beneficiarios familiares del causante (...) Su fin no es proteger a la familia”⁹⁴, aseveración reforzada porque incluso prestaciones como el auxilio por defunción pueden ser otorgadas a sujetos ajenos al núcleo familiar. Gorelli Hernández, J. (2005) se refiere a ellas denominándolas “prestaciones indirectas” en cuanto a la cobertura de las necesidades de la familia, que no es su objeto fundamental.

En el modelo español de protección se da una combinación de prestaciones de carácter indemnizatorio, orientadas a la cobertura del daño emergente –como el auxilio por defunción-, y prestaciones en forma de pensión cuya función es la protección de los supervivientes –por ejemplo el favor de familiares-; las prestaciones pueden sustentarse en un pago único –la indemnización a tanto alzado-, presentar carácter temporal –por ejemplo, el subsidio de viudedad- o ser de carácter vitalicio –por ejemplo, la pensión

⁹³ Artículo 124.4 de la LGSS: “No se exigirán períodos previos de cotización para el derecho a las prestaciones que se deriven de accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional, salvo disposición legal expresa en contrario”.

⁹⁴ Las prestaciones familiares se encuentran en la actualidad reguladas en el capítulo IX de la LGSS.

general de viudedad-. En cuanto a la prescripción, frente al supuesto general recogido en el artículo 43 de la *LGSS*, que indica que las prestaciones de seguridad social prescriben a los cinco años contados a partir del día siguiente del hecho causante, una nueva particularidad favorable para las prestaciones de muerte y supervivencia se plasma a través del artículo 178 de la *LGSS*, que indica que:

El derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia, con excepción del auxilio por defunción, será imprescriptible, sin perjuicio de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.

Como ya se ha indicado, la propia naturaleza del hecho causante caracteriza de distinta forma las relaciones de los beneficiarios con el sistema y las prestaciones o las condiciones de acceso a las mismas, con diferencias según la materialización del riesgo tenga o no origen profesional. El régimen de cobertura público de la Seguridad Social nació con una vocación de protección centrada en el ámbito laboral, vocación que se ha mantenido en el tiempo dando lugar a un escenario de especial amparo de las contingencias profesionales frente a las de origen común:

- Como norma general, sólo se requieren períodos de cotización previos para la enfermedad común.
- Se asimila la causa real de incapacidad a una contingencia profesional sin que tenga que existir realmente nexo entre las mismas.
- La contingencia profesional da derecho a una indemnización adicional a tanto alzado.
- El cálculo de la base reguladora es diferente dependiendo de la naturaleza de la contingencia.
- Puede darse un recargo en el accidente de trabajo y las enfermedades profesionales. Como recoge el artículo 123 de la *LGSS*, las prestaciones originadas por contingencias profesionales que surjan debido a ineficiencias en las condiciones de seguridad y salud laboral darán lugar a los correspondientes recargos, de los que será responsable el empresario infractor.

Otra particularidad de las prestaciones de muerte y supervivencia es su régimen de incompatibilidades, pues sobre la norma general del artículo 122 de la *LGSS*, que prevé que las pensiones del Régimen General son incompatibles cuando coincidan en un mismo beneficiario (salvo que normativamente se indique otra cosa), las pensiones de muerte y supervivencia presentan una beneficiosa sensibilidad hacia la compatibilidad total con las rentas de trabajo, tal y como recoge el artículo 179 de la *LGSS*.

Respecto al cálculo de las prestaciones, primeramente hay que observar que el artículo 179 *bis* de la LGSS indica que:

Para el cálculo de la base reguladora en los supuestos de prestaciones derivadas de contingencias comunes se computará la totalidad de las bases por las que se haya efectuado la cotización durante el periodo establecido reglamentariamente anterior al mes previo al del hecho causante.

Por aplicación de las expresiones [4] y [51] el cálculo general de la pensión inicial recurre a un porcentaje F_1 , que depende del número de años cotizados y se aplica a una base reguladora B_r , que a su vez depende de las bases mensuales de cotización $B_{i,j}^c$ computadas dentro de un período. Para la muerte y supervivencia en contingencias comunes, cuando el sujeto causante se encuentra en situación activa el parámetro n de la base reguladora toma el valor $n=2$; si en el momento del fallecimiento el sujeto causante fuese pensionista de incapacidad permanente o jubilación en la modalidad contributiva, la base reguladora dependerá de la correspondiente a esta prestación con las actualizaciones temporales pertinentes entre ambos instantes. Por el contrario, si se habla de contingencias profesionales la base reguladora se calcularía, en todos los casos, sobre las retribuciones efectivamente percibidas⁹⁵.

Según el artículo 179.4 de la LGSS, como norma general la suma de las cuantías iniciales de las pensiones por muerte y supervivencia no podrá exceder del importe de la base reguladora que corresponda (sin que ello afecte a las revalorizaciones), excepto allí donde concurra una pensión de viudedad cuyo porcentaje de aplicación sea del 70% y varias pensiones de orfandad, si bien en ningún supuesto la suma de estas últimas podrá superar el 48% de la base reguladora correspondiente. En cuanto a su revalorización, las prestaciones de muerte y supervivencia, exceptuando el auxilio de defunción (que en puridad no es una pensión), se someterán a la regla general del artículo 48 de la LGSS, es decir:

Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán incrementadas al comienzo de cada año, en función del índice de revalorización previsto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

⁹⁵ Artículo 9.d) de la Orden de 13 de febrero de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen General de la Seguridad Social, con referencias al capítulo V del Reglamento de Accidentes de Trabajo, aprobado por Decreto de 22 de junio de 1956.

El Índice de revalorización de las pensiones (*IRP*) tiene sus antecedentes en el *Informe del Comité de Expertos* (2013) y ha sido introducido por la *Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social*, mediante la siguiente expresión:

$$IRP_{t+1} = \bar{g}_{I,t+1} - \bar{g}_{P,t+1} - \bar{g}_{s,t+1} + \alpha \cdot \left(\frac{I_{t+1}^G - G_{t+1}^G}{G_{t+1}^G} \right) \quad [52]$$

$\bar{g}_{I,t+1}$	Tasa de variación de los ingresos calculada como media móvil aritmética
$\bar{g}_{P,t+1}$	Tasa de variación del número de pensiones calculada como media móvil aritmética
$\bar{g}_{s,t+1}$	Variación de la pensión media debida al efecto sustitución y calculada como media móvil aritmética
α	Velocidad de corrección de los desequilibrios presupuestarios del sistema
I_{t+1}^G	Ingresos del sistema calculados como media móvil geométrica
G_{t+1}^G	Gastos del sistema calculados como media móvil geométrica

índice cuyo valor se encontrará en el intervalo $[0,25\%, \nabla \Delta IPC + 0,5\%]$. Sobre el análisis y características del *IRP* pueden verse Hernández González, D. *et al.* (2014a) y (2014b) o Devesa Carpio, J.E. *et al.* (2015). Para los ejercicios 2014 y 2015 la revalorización de las pensiones conforme a este modelo ha dado lugar a un valor de 0,25% para cada año, sin que se haya hecho público por el Gobierno de España el valor real que alcanzó el *IRP* para cada ejercicio⁹⁶.

⁹⁶ Respecto a los procedimientos de revalorización, véase el *Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2015*. Según su artículo 4, la revalorización se aplica al importe mensual de la pensión a 31 de diciembre de 2014, excepto al complemento a mínimos, el recargo por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo y las percepciones de rentas temporales por cargas familiares y la indemnización suplementaria para la provisión y renovación de aparatos de prótesis y ortopedia, en el supuesto de pensiones del extinguido seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En cuanto a la cuantía, el Grupo de investigación, Pensiones y Protección Social, formado por investigadores de la Universidad de Extremadura y de Valencia, ha estimado el *IRP* de 2015 en el -1,28% (<http://www.uv.es/pensiones/Factor-de-sostenibilidad.html>, consulta 3 de enero de 2015). Respecto a la revalorización de 2016 el *Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social* mantiene la revalorización en el 0,25%. (http://www.seq-social.es/Internet_1/Estadistica/PresupuestosyEstudi47977/index.htm). Para la revalorización en 2015 de las pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales véase la disposición adicional primera del *Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre*, anteriormente citado.

Cuadro 16. Pensiones máximas y mínimas por muerte y supervivencia. 2011-2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PENSIÓN MÁXIMA MENSUAL	2.497,91 €	2.522,89 €	2.548,12 €	2.554,49 €	2.560,88 €	2.567,28 €
PENSIÓN MÍNIMA MENSUAL						
<u>Viudedad</u>						
Con cargas familiares	708,50 €	715,60 €	730,00 €	731,90 €	733,80 €	735,70 €
Con 65 años o discapacidad >= 65%	612,70 €	618,90 €	631,30 €	632,90 €	634,50 €	636,10 €
Entre 60 y 64 años	573,10 €	578,90 €	590,50 €	592,00 €	593,50 €	595,00 €
Menor de 60 años	463,80 €	468,50 €	477,90 €	479,10 €	480,29 €	481,60 €
<u>Orfandad</u>						
Por beneficiario	187,10 €	189,00 €	192,80 €	193,30 €	193,80 €	194,30 €
Absoluta un beneficiario	650,90 €	657,50 €	670,70 €	672,40 €	674,10 €	675,90 €
Menor de 18 años y discapacidad >=65 años	368,20 €	371,90 €	379,40 €	380,40 €	381,40 €	382,40 €
<u>Favor de familiares</u>						
Por beneficiario	187,10 €	189,00 €	192,80 €	193,30 €	193,80 €	194,30 €
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:						
Un sólo beneficiario con 65 años	452,30 €	456,90 €	466,10 €	467,30 €	468,50 €	469,70 €
Un solo beneficiario con menos de 65 años	426,00 €	430,30 €	439,00 €	440,10 €	441,30 €	442,50 €
<u>SOVI</u> Vejez, Invalidez y Viudedad	391,70 €	395,70 €	403,70 €	404,80 €	405,90 €	407,00 €
<u>SOVI</u> concurrentes	380,60 €	384,50 €	392,20 €	393,20 €	394,20 €	395,20 €

Fuente: Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2015. Proyecto de presupuestos de la Seguridad Social 2016. Informe Económico Financiero. Año 2016, valores estimados.

Por otra parte, el artículo 50 de la LGSS establece los complementos para pensiones contributivas inferiores a la mínima legalmente establecida que se otorgan a aquellos titulares cuya pensión no llega a ese límite⁹⁷, quedando en los últimos ejercicios las pensiones máximas y mínimas por muerte y supervivencia tal y como se expone en el cuadro anterior⁹⁸.

⁹⁷ Siempre que los beneficiarios “no perciban rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o que, percibiéndolos, no excedan de la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado”. Cuando la pensión de orfandad se incremente en la cuantía de la pensión de viudedad, el límite de la cuantía de los complementos a mínimos sólo quedará referido al de la pensión de viudedad que genera el incremento de la pensión de orfandad.

⁹⁸ En 2015 para la orfandad absoluta el mínimo se incrementa 6.724,20 euros/año a distribuir, en su caso, entre los beneficiarios (importe incluido en el cuadro para un beneficiario); en el favor de familiares con varios beneficiarios, el mínimo para cada uno se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.011,00 euros/año entre el número de beneficiarios. Según el artículo 40 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, el límite máximo de pensiones públicas no se aplica a las pensiones extraordinarias del sistema de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas del Estado originadas por actos terroristas, ni a las pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas reconocidas

Finalmente, otra singularidad de las prestaciones de muerte y supervivencia es la que se deriva de la no aplicación del *Factor de sostenibilidad, FS*, definido en la *Ley 23/2013, de 23 de diciembre*, pues la norma, en su artículo 2, establece que este factor se aplicará únicamente “por una sola vez para la determinación del importe inicial de las nuevas pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social”. Sobre el factor de sostenibilidad y las prestaciones de muerte y supervivencia, véase el capítulo IV.1.

1.2.2. Otros regímenes de cobertura

Respecto a la cobertura que sobrepasa el ámbito del Régimen General, tal y como apunta Rodríguez Iniesta, G. (2009)⁹⁹:

Hoy en día la[s] singularidad[es] que ofrecen los regímenes especiales en la acción protectora por muerte y supervivencia pueden considerarse mínimas ya que con carácter general la protección se otorga con igual extensión, forma, términos y condiciones que en el régimen general. Realmente las particularidades más sobresalientes afectan al cumplimiento de los requisitos de acceso a la protección.

El artículo 10 de la *LGSS* define los Regímenes Especiales de la Seguridad Social atendiendo a las actividades profesionales cuyas características así lo requieren para una adecuada aplicación de los beneficios de la protección, encuadrándose como tales¹⁰⁰:

1. Los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
2. Los trabajadores del mar.

al amparo del *Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio*, ni a las pensiones extraordinarias reconocidas al amparo de la disposición adicional cuadragésima tercera de la *Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social* (sobre damnificados por el incendio del Hotel Corona de Aragón en 1979).

⁹⁹ Y así lo refuerza la disposición adicional octava de la *LGSS* cuando indica que será de aplicación a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social lo dispuesto en los apartados 174; 174 bis; 175; 176, apartado 4; 177, apartado 1, segundo párrafo; y 179. de la propia *LGSS*.

¹⁰⁰ Los antiguos regímenes agrario y del hogar se consideran actualmente sistemas especiales. Sus particularidades no eran muy significativas en lo que corresponde a las prestaciones de muerte y supervivencia y para su conocimiento puede acudir a Rodríguez Iniesta, G. (2009). Así, mediante la *Ley 18/2007, de 4 de julio*, los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario quedaron incorporados al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y se creó dentro de este último régimen un sistema especial para ellos. Por su parte, La *Ley 27/2011, de 1 de agosto*, estableció en su disposición adicional trigésima novena la integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social con efectos de enero de 2012, dando lugar a un sistema especial de cobertura para los mismos.

3. Los funcionarios públicos, civiles y militares.
4. Los estudiantes.
5. Los demás grupos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por considerar necesario el establecimiento para ellos de un Régimen Especial (Así, por ejemplo, los trabajadores de la minería del carbón).

1.2.2.1. Régimen Especial de Autónomos

Si bien el *Decreto 1167/1960, de 23 de junio, por el que se aplican los beneficios del Mutualismo Laboral a los trabajadores independientes*, ya disponía en su artículo primero que, bajo determinadas condiciones, los beneficios del Mutualismo Laboral se extenderían “a los trabajadores independientes, autónomos y artesanos”, el Régimen de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se reconoce como régimen especial en el artículo 10 de la *Ley 193/1963, de 28 de diciembre*, así como en el artículo 10 del *Decreto 907/1966, de 21 de abril*, que aprueba su texto articulado. En el artículo 27.1.c) del *Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos*, se hacía referencia a prestaciones de muerte y supervivencia dentro de la acción protectora para este régimen¹⁰¹, que serían: subsidio(auxilio) por defunción, pensión vitalicia de viudedad, pensión de orfandad y pensión vitalicia o, en su caso, subsidio temporal a favor de familiares, quedando en el artículo 48 indicado que, en lo no establecido especialmente en la normativa del régimen especial, actuarían las normas del Régimen General.

Junto a las particularidades de este régimen especial como la capacidad de elección de las bases de cotización dentro de los límites legales o las características protectoras propias¹⁰², una especificidad en la materia aquí estudiada apareció en el artículo 28.2 del *Decreto 2530/1970, de 20 de agosto*: para tener derecho a la prestación, a excepción del subsidio por defunción, se consideraba necesario que las personas incluidas en el campo de aplicación se hallasen al corriente del pago de cuotas en el instante en que se causa la

¹⁰¹ Régimen apuntalado en los mismos términos por la *Orden de 24 de septiembre de 1970, por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos*. En cuestión de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales interesa el *Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia*

¹⁰² Por ejemplo, *Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos* y el *Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre*, que desarrolla la anterior.

prestación, si bien cubierto el período mínimo de cotización la Entidad Gestora “invitaría” al interesado para que en el plazo de treinta días ingresase las cuotas debidas para considerarse al corriente a efectos de la solicitud¹⁰³. A su vez, el artículo 29 indicaba que los trabajadores se mantendrían en alta asimilada durante los noventa días siguientes al último día del mes de su baja a efectos de obtener los beneficios de la acción protectora. De igual forma, para tener derecho a las prestaciones de muerte y supervivencia se requerirían sesenta meses de cotización dentro de los diez años inmediatamente anteriores a la fecha en que se causa la prestación, excepto para el subsidio por defunción o las prestaciones derivadas de una ya existente. En cuanto al carácter del beneficiario, la compatibilidad o los motivos de la extinción de la pensión de viudedad se asemejaban a los establecidos en el Régimen General, mientras que la cuantía se obtenía al aplicar el 50% a la base reguladora del causante o, si éste era pensionista de vejez o invalidez, el 60% a su pensión, sin que la cuantía pudiera ser superior a la que correspondiese de no ser pensionista.

Algunas de estas premisas fueron superadas por la disposición adicional décimo tercera del *Real Decreto 9/1991, de 11 de enero, por el que se establecen las normas de cotización a la Seguridad Social. Desempleo. Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional*, que en su punto tercero indicaba que:

Las prestaciones de muerte y supervivencia serán reconocidas en los mismos términos que en el Régimen General, en lo relativo a sujetos causantes, beneficiarios, períodos previos de cotización, cálculo de la base reguladora y porcentaje a aplicar sobre ésta para hallar la cuantía de la prestación.

Este entorno normativo se recogió en similares términos en la *Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo*.

1.2.2.2. Régimen Especial de los Trabajadores del Mar

Este Régimen Especial nació con la *Ley 116/1969, de 30 de diciembre, reguladora del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar*, con unas contingencias protegidas equiparables conceptualmente a las del Régimen General¹⁰⁴, reconociéndose expresamente para contingencias comunes que se otorgarían

¹⁰³ Si el ingreso se realizase fuera del plazo, los pagos únicos y los subsidios temporales tendrían un descuento del 20% y las pensiones se concederían con efectos a partir del primer día del mes siguiente al del ingreso de las cuotas adeudadas.

¹⁰⁴ Artículo 28.2 de la *Ley 116/1969, de 30 de diciembre*.

prestaciones económicas por muerte y supervivencia¹⁰⁵: subsidio de defunción, pensión de viudedad vitalicia o subsidio temporal de viudedad¹⁰⁶, pensión de orfandad¹⁰⁷ y pensión (o subsidio) a favor de familiares, mientras que para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se incluía una indemnización a tanto alzado¹⁰⁸. Este entorno normativo mantendrá sus mimbres en lo que respecta a las prestaciones de muerte y supervivencia con la aprobación del *Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes 116/1969, de 30 diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar*, si bien mediante esta última norma se modificó el régimen de requisitos establecidos para la percepción de la pensión de viudedad y se dio pie a la extinción de la prestación parcial de viudedad según la evolución normativa planteada en el Régimen General.

Junto a sus particularidades inherentes¹⁰⁹, por ejemplo la existencia de una entidad gestora propia: el Instituto Social de la Marina, el denominado trabajo remunerado “a la parte” o la posibilidad de que los armadores se consideren como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia bajo ciertas condiciones, lo cierto es que el nexo con el Régimen General en lo que aquí interesa es muy intenso. Señalaremos, si acaso, el artículo 38.5 del *Decreto 2864/1974, de 30 de agosto*, que, en cuanto al período de cotización necesario para el derecho a una prestación cuando el causante no sea pensionista, exponía que: “Por excepción, se considerará al corriente en el pago de sus cuotas al trabajador que al fallecer tuviera cotizaciones pendientes cuando sus

¹⁰⁵ Refrendado por el *Decreto 1867/1970, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de la ley 116/1969, de 30 de diciembre, por la que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar*.

¹⁰⁶ Que hayan cumplido al menos cuarenta años o estén incapacitadas para el trabajo o tengan a su cargo hijos habidos del causante con derecho a la pensión de viudedad. En otro caso se otorgará un subsidio temporal en los términos del Régimen General. El viudo tendrá derecho si está incapacitado para el trabajo y sostenido económicamente por su mujer en vida de ésta. En ambos supuestos se exigía convivencia habitual con el cónyuge o, en una separación judicial, que la sentencia le reconozca como inocente. La prestación se extingue con nuevas nupcias o estado religioso, y en este último supuesto se pagaría una prestación compensatoria por una sola vez, que el *Decreto 1867/1970, de 9 de julio*, cifra en 24 mensualidades del importe que se estuviera percibiendo. En definitiva, una recreación del contenido establecido para el Régimen General que también recoge que la suma de las pensiones de viudedad y orfandad no puede superar la base de cotización ni, cuando proceda, la pensión que percibía el causante.

¹⁰⁷ Para hijos de edad inferior a los 18 años o incapacitados para el trabajo.

¹⁰⁸ Artículo 41.2 de la *Ley 1161/1969, de 30 de diciembre*.

¹⁰⁹ Respecto a la edad de jubilación y coeficientes correctores, véase el *Real Decreto 1311/2007, de 5 de octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar*.

derechohabientes satisfagan su importe y siempre que el período de descubierto no fuese superior a seis meses”.

1.2.2.3. Régimen Especial de la Minería del Carbón

El Régimen Especial de la minería del carbón se constituyó mediante el *Decreto 384/1969, de 17 de marzo, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social para la minería del carbón*. Aunque este régimen también presenta diversas peculiaridades según su propia idiosincrasia (por ejemplo la normalización de las bases de cotización, la garantía establecida para los silicóticos de primer grado¹¹⁰ o los coeficientes de bonificación para la edad de acceso a la pensión de jubilación¹¹¹), su acción protectora se asimila en extensión, forma, términos y condiciones a la del Régimen General¹¹².

Una característica propia es la que hace referencia al concepto de *paro involuntario*¹¹³, situación asimilada al alta a efectos de poder causar las prestaciones por incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia, y que subsiste después de haberse agotado las prestaciones por desempleo o que también se produce sin que el interesado haya tenido derecho a estas prestaciones a pesar de haber perdido su ocupación sin causa a él imputable, siempre que al agotarse aquellas prestaciones en el primer caso, o al iniciarse la situación de paro, en el segundo, tuviera el trabajador cumplida la edad de cincuenta y cinco años (o la correspondiente en aplicación de las reducciones de edad contempladas legalmente) y cubierto un período de cotización de setecientos días, dentro de los siete años inmediatamente anteriores. El beneficiario deberá pagar las cuotas, imputadas en origen al empresario o al trabajador, correspondientes al periodo que medie entre la fecha de iniciación de la situación asimilada a la de alta y la del hecho

¹¹⁰ Orden de 30 de abril de 1973, por la que se actualiza en el Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón, la garantía establecida para los silicóticos de primer grado trasladados a puestos compatibles con su estado y Orden de 30 de abril de 1977, por la que se regula el complemento garantizado para los silicóticos de primer grado, trasladados a puestos de trabajo compatible con su estado, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón.

¹¹¹ Extendidos a determinadas categorías del personal de fabricación de aglomerados del carbón mineral por Resolución de 24 de febrero de 1975, de la Dirección General de la Seguridad Social.

¹¹² Real Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, de acuerdo con la Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfeccionamiento del Régimen General de la Seguridad Social, y Orden de 3 de abril de 1973, para la aplicación y desarrollo del Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.

¹¹³ Artículo 16 de la Orden de 3 de abril de 1973.

causante de la prestación de que se trate, cuotas que servirán a efectos del período mínimo de cotización y de la determinación de la base reguladora.

Otra especificidad es el cálculo de la base reguladora para causantes ya pensionistas de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de este régimen, quienes, cumplida la edad de 65 años o la que resulte de la aplicación de la bonificación establecida normativamente, tendrán derecho a que su pensión de incapacidad permanente pase a tener la cuantía equivalente a una pensión de jubilación siempre que esta última tenga un importe superior. Las prestaciones de muerte y supervivencia que se causen por pensionistas de incapacidad permanente cuyas pensiones hayan pasado a tener la nueva cuantía utilizarán la base reguladora que haya servido para el cálculo de ésta, incrementándose con las mejoras o revalorizaciones periódicas que, para las prestaciones de igual naturaleza por muerte y supervivencia, hayan tenido lugar desde la fecha en la que se hubieran producido los efectos de la nueva cuantía de la pensión del inválido causante, o desde la fecha en que se produjo el hecho causante de la pensión a que se renunció en caso de existencia de concurrencia de derechos, según proceda. Puesto que existe la posibilidad en este régimen de que el causante estuviera amortizando deudas por cuotas a satisfacer, la pensión de viudedad tendría en cuenta esta deuda en su importe.

1.2.2.4. Régimen Especial de los estudiantes

Respecto a la protección a los estudiantes, la cobertura por muerte y supervivencia sí presenta características particulares y es que, a diferencia de otros regímenes, aquí se plantea la cobertura mediante una operación de seguro, el seguro escolar, que actúa en un ámbito más limitado pues se circunscribe al accidente y a las siguientes prestaciones¹¹⁴:

- Ayuda a los familiares por gastos de sepelio derivados del fallecimiento por accidente del asegurado por una cuantía de 30,05€, que podrá llegar hasta los 120,20€ si el accidente se ha producido en un lugar distinto al de la residencia familiar.

¹¹⁴ Ley de 17 de julio de 1953 (Jefatura del Estado), sobre el establecimiento del Seguro Escolar en España, Orden de 11 de agosto de 1953 (Trabajo) por la que se aprueban los estatutos de la Mutualidad del Seguro Escolar, Real Decreto 1633/1985, de 28 de agosto (Presidencia), por el que se fija la cuantía de la cuota del Seguro Escolar, Real Decreto 270/1990, de 16 de febrero, por el que se incluyen en el Régimen del Seguro Escolar los alumnos que cursen el tercer ciclo de estudios universitarios conducentes al título de doctor y otra normativa accesoria.

- Capital por el fallecimiento del asegurado que se concede a familiares a su cargo que tengan la siguiente vinculación: esposa, hijos, ascendientes directos mayores de 65 años o incapacitados para todo trabajo, o menores de edad incapacitados para todo trabajo, existiendo por tanto una pluralidad de posibles beneficiarios. El importe es de 300,51€.

Una cobertura relacionada es la *prestación por infortunio familiar* a conceder al asegurado para la continuidad de sus estudios en caso de una situación económica sobrevenida en el hogar, aquí por el fallecimiento del cabeza de familia que aportaba ingresos a la economía familiar. Esta posibilidad presenta características peculiares puesto que, además de exigir requisitos al núcleo familiar para la concesión, existe un fallecimiento que origina derechos pero el beneficiario es el propio asegurado, quebrando así una de las características generales enunciadas para una prestación de muerte y supervivencia. Estamos ante el supuesto de ruina o quiebra familiar y de la insuficiencia permanente de recursos económicos para sufragar los estudios, siendo necesario que los ingresos familiares no superen 6.010,12€ por cada miembro de la unidad familiar. La prestación se abonará durante el número de años que falten para acabar la carrera universitaria, sin repetir curso, extinguiéndose al cumplir el beneficiario los 28 años de edad. Las cuantías anuales son de 86,55€, de 103,85€ para estudiantes pertenecientes a familias numerosas de categoría general y de 129,82€ para estudiantes pertenecientes a familias numerosas de categoría especial.

1.2.2.5. Los empleados públicos

El artículo 10 de la *Ley 193/1963, de 28 de diciembre*, así como el artículo 10 del *Decreto 907/1966, de 21 de abril*, que aprueba su texto articulado, recogían la existencia de regímenes especiales, por un lado, para funcionarios públicos, civiles y militares y, por otro, para funcionarios de Organismos autónomos estatales, con particularidades en lo referente a la condición profesional así como en el cálculo de las cuotas de derechos pasivos, si bien no todos los funcionarios se encuentran cubiertos por este modelo¹¹⁵. En realidad, como apunta Rodríguez Iniesta, G. (2009), la protección se articula mediante un sistema de pensiones (Clases Pasivas) y un sistema de prestaciones (Mutualismo Administrativo).

Mediante el *Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado*, se da cobertura a las prestaciones

¹¹⁵ Por ejemplo, cuerpos de la Administración de la Seguridad Social, cuya protección se efectúa por el Régimen General.

de muerte y supervivencia de los funcionarios¹¹⁶ y, en contraste con el espíritu recogido para el Régimen General, para la obtención de derechos “no será preciso que el causante de los mismos haya completado ningún periodo mínimo de prestación de servicios efectivos al Estado”.

La base reguladora de la pensión de viudedad estará constituida por la pensión de jubilación o retiro del sujeto causante, debidamente actualizada, o la que hubiera podido corresponder a éste en el momento de su jubilación o retiro forzoso¹¹⁷. Para obtener la pensión se le aplicaría a dicha base reguladora el porcentaje del 50% o un 25% si el causante de los derechos hubiera fallecido tras haber sido declarado inutilizado en acto de servicio o como consecuencia del mismo y de haberse señalado en su favor la correspondiente pensión extraordinaria.

¹¹⁶ Según el artículo 2 del *Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril*, y su modificación por la *Ley 66/1997, de 30 de diciembre*, se daría cobertura a:

- a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado.
- b) El personal militar de carrera, y el de las Escalas de complemento y reserva naval y el de tropa y marinería profesional que tuviera adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro.
- c) Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia.
- d) Los funcionarios de carrera de las Cortes Generales.
- e) Los funcionarios de carrera de otros órganos constitucionales o estatales, siempre que su legislación reguladora así lo prevea.
- f) El personal interino a que se refiere el artículo 1º del *Decreto-ley 10/1965, de 23 de septiembre*.
- g) El personal mencionado en las precedentes letras que preste servicio en las diferentes Comunidades Autónomas como consecuencia de haber sido transferido al servicio de las mismas.
- h) Los funcionarios en prácticas pendientes de incorporación definitiva a los distintos, Cuerpos, Escalas y Plazas, así como los alumnos de Academias y Escuelas Militares a partir de su promoción a Caballero Alférez-Cadete, Alférez alumno, Sargento-alumno o Guardiamarina.
- i) Los ex Presidentes, Vicepresidentes y Ministros del Gobierno de la Nación y otros cargos referidos en el artículo 51 del texto.
- j) El personal que cumpla el servicio militar en cualquiera de sus formas, los Caballeros Cadetes, Alumnos y Aspirantes de las Escuelas y Academias Militares y el personal civil que desempeñe una prestación social sustitutoria del servicio militar obligatorio.
- k) El personal militar de empleo, y el de las Escalas de complemento y reserva naval y el de tropa y marinería profesional que no tenga adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro.

¹¹⁷ Cuando el causante de los derechos al momento de su fallecimiento tuviera señalada una pensión extraordinaria de jubilación o retiro por inutilidad contraída en acto de servicio o como consecuencia del mismo por motivo de actos de terrorismo, la base reguladora de la pensión de viudedad estará constituida por el importe teórico de la pensión extraordinaria de jubilación o retiro, debidamente actualizada, que hubiera podido corresponder a aquél si la inutilidad producida en acto de servicio o como consecuencia del mismo no se hubiese originado por actos de terrorismo.

Tendrán derecho a pensión de orfandad los hijos del sujeto causante menores de veintiún años, así como los que estuvieran incapacitados para todo trabajo antes del cumplimiento de dicha edad o de la fecha del fallecimiento del causante, con las particularidades y exigencias para su duración hasta edades superiores ya indicadas en el Régimen General. Para la determinación de cada pensión de orfandad se aplicarían a la base reguladora los siguientes porcentajes:

- a) El 25% si existiera sólo un hijo con derecho a pensión.
- b) El 10% cuando existieran varios hijos con derecho a pensión; las pensiones resultantes se incrementarán en la suma que arroje el prorrateo por cabeza de un único 15% de la base reguladora.
- c) Los porcentajes serán, respectivamente, del 12,5%, del 5% y del 7,5% en el supuesto de que el funcionario hubiera fallecido tras haber sido declarado inutilizado en acto de servicio o como consecuencia de este último y ser beneficiario de la correspondiente pensión extraordinaria.

El importe conjunto de todas las pensiones de orfandad no podrá superar el 50% o el 100% de la base reguladora, según exista o no cónyuge supérstite del fallecido, límites que se reducirán a la mitad cuando la pensión de jubilación o de retiro hubiera sido extraordinaria por ser causada en acto de servicio o como consecuencia del mismo.

Por su parte, tendrán derecho a la pensión en favor de los padres los que dependieran económicamente del causante al momento de su fallecimiento cuando no existan cónyuge supérstite o hijos del fallecido con derecho a pensión. Si los hubiera, el padre y la madre del causante sólo tendrán derecho a la pensión a partir del momento del fallecimiento o pérdida de las condiciones para ser pensionista del último de dichos beneficiarios. Para determinar la cuantía, a la base reguladora se le aplicará el porcentaje fijo del 15% para cada una de las pensiones (o del 7,5% si el funcionario hubiera fallecido tras haber sido declarado inutilizado en acto de servicio o como consecuencia de este último y de haberse señalado en su favor la correspondiente pensión extraordinaria).

En cuanto a las pensiones extraordinarias, éstas serán de jubilación, de viudedad, orfandad o a favor de los padres, y su hecho causante será, según proceda, la jubilación o retiro del personal correspondiente o su fallecimiento¹¹⁸. El derecho a las pensiones

¹¹⁸ Dará origen a pensión extraordinaria de jubilación o retiro la incapacidad permanente para el servicio o inutilidad del personal correspondiente, siempre que se produzca en acto de servicio o como consecuencia del

extraordinarias en favor de familiares corresponderá al cónyuge viudo, los huérfanos o los padres del fallecido, siempre que reúnan los requisitos de aptitud exigidos legalmente y sin que se exija que el sujeto causante haya completado período mínimo de servicio alguno¹¹⁹. No se percibirá cantidad alguna en concepto de indemnización por el Régimen de Clases Pasivas del Estado ni ayuda o subsidio con cargo a su presupuesto junto con las pensiones extraordinarias causadas en su propio favor o en el de sus familiares por el funcionario incapacitado o fallecido en acto de servicio o como consecuencia del mismo. Las pensiones extraordinarias de Clases Pasivas serán incompatibles con las ordinarias que pudieran solicitar sus beneficiarios con base en los mismos hechos causantes, siendo las originadas en acto de terrorismo también incompatibles con las extraordinarias que por los mismos hechos, prescindiendo de su motivación, pudieran corresponder.

Dentro del denominado Mutualismo administrativo y en cuanto a la protección de la muerte y supervivencia, en el Régimen de la mutualidades de funcionarios de la administración civil del Estado (MUFACE) se concede una ayuda de sepelio¹²⁰ mediante el pago único de 450,76€ (año 2015) para cubrir los gastos de sepelio por fallecimiento de un beneficiario o asimilado. También se concede un subsidio por defunción¹²¹ en forma de pago único a los beneficiarios, familiares o asimilados que conviviesen con el finado o a sus expensas.

Respecto a los beneficiarios, los artículos 15 a 19 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo definen sus características, el reconocimiento y mantenimiento del derecho de éstos y las incompatibilidades¹²². Respecto a su cuantía, el Subsidio por

mismo. En la enfermedad causante de la inutilidad, ésta deberá constar como adquirida directamente en acto de servicio o como consecuencia directa de la naturaleza del servicio desempeñado. En todo caso, dicho personal, en cuanto se incapacite en acto de servicio o como consecuencia del mismo, será declarado jubilado o retirado. Se presumirá el acto de servicio, salvo prueba en contrario, cuando la incapacidad permanente o el fallecimiento del funcionario hayan acaecido en el lugar y tiempo de trabajo.

¹¹⁹ No obstante, cuando la pensión extraordinaria estuviera originada por un acto de terrorismo, tendrán derecho a pensión de orfandad los hijos del sujeto causante que fueran “menores de veintitrés años”, así como los que estuvieran incapacitados para todo trabajo antes del cumplimiento de dicha edad o de la fecha del fallecimiento del causante. Adicionalmente, para las pensiones extraordinarias causadas por actos terroristas, véase el epígrafe 1.2.2.6. dentro de este capítulo.

¹²⁰ Artículos 132 y 134 del *Reglamento General del Mutualismo Administrativo* (aprobado por el *Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo*).

¹²¹ Artículos 132 y 133 del *Reglamento General del Mutualismo Administrativo*.

¹²² La *Orden APU/95/2004, de 12 de enero, por la que se dictan normas para la aplicación del subsidio por defunción en el régimen especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado*, establece para esta prestación un régimen de prelación de beneficiarios (si bien el mutualista puede establecer el que considere oportuno). Como norma general, el requisito de convivencia con el causante se presume siempre de sus hijos no emancipados y de quienes convivían con el causante y figuraban en su documento de beneficiarios de

Defunción consistirá en la entrega de una prestación económica mediante un pago único calculado según la edad del mutualista en la fecha de su fallecimiento, de acuerdo con las siguientes reglas¹²³:

- a) El valor del módulo multiplicador se fija en 93,91€.
- b) Si el mutualista fallece con menos de 41 años de edad, la cuantía del subsidio se determinará multiplicando el importe del módulo por la edad del fallecido, lo que supone un máximo de 3.756,40€.
- c) Si el mutualista fallece con 41 años o más, el importe del módulo se multiplicará por el número de años que le faltarían al fallecido para alcanzar la edad de ochenta años, lo que supone un máximo de 3.662,50€.

La cuantía mínima del auxilio por defunción será de 751,28€ y será incompatible, al menos en el tramo de su cuantía que resulte coincidente, con cualquier otra prestación dispensada o financiada con fondos públicos, siempre que esté destinada a la misma finalidad y exista coincidencia en cuanto a sujeto y hecho causante.

En lo que se refiere al Régimen especial de las Fuerzas Armadas, se concede una ayuda por fallecimiento¹²⁴ destinada a compensar los gastos derivados del fallecimiento de

MUFACE y, de no figurar en él, su cónyuge, así como quienes figuren en el documento de beneficiarios de éste. De no existir cónyuge o de haberse producido divorcio, separación legal o declaración de nulidad del matrimonio, se considerará que convivía con el causante la persona asimilada al cónyuge que acredite tal condición mediante los medios legales aceptados y que ha existido convivencia ininterrumpida al menos durante el año anterior al fallecimiento del mutualista. El requisito de vivir a expensas del causante se presumirá siempre de sus hijos no emancipados, del cónyuge del causante o, en su defecto, de la persona asimilada al cónyuge y de los hijos no emancipados de uno o, en su defecto, del otro, en tanto se den las condiciones establecidas respecto a la convivencia y unos u otros vinieran conviviendo con el causante del subsidio. Para los restantes posibles beneficiarios, se considerará que cumplen dicho requisito si sus ingresos individuales anuales de todo tipo no superan el doble del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.

¹²³ Según el artículo tercero de la Orden HAP/2786/2012, de 19 de diciembre, por la que se modifican la Orden de 29 de julio de 1987, por la que se establece, con el carácter de prestación de asistencia social, una ayuda económica para la adquisición de viviendas por mutualistas de MUFACE, la Orden de 30 de diciembre de 1988, por la que se revisan las cuantías de determinadas prestaciones económicas de la Mutuality General de Funcionarios Civiles del Estado y la Orden APU/95/2004, de 12 de enero, por la que se dictan normas para la aplicación del subsidio por defunción en el régimen especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Con anterioridad a esta orden el módulo estaba fijado en 187,82€ y el límite mínimo de prestación en 751,28€, lo que otorgaba prestaciones máximas de 7.512.80€ para fallecimientos con menos de 41 años y 7.325€ para mayores de 40 años y hasta los 80 años.

¹²⁴ Ni en el Real Decreto 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ni en el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, se hace mención expresa a la

titulares y beneficiarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), cuya cuantía y límites se determinan anualmente por este organismo. Serán causantes del derecho:

- a) El titular del ISFAS por derecho propio o por derecho derivado.
- b) Los beneficiarios incluidos en el documento de beneficiarios de un titular.
- c) Podrá causar derecho a esta ayuda por fallecimiento el recién nacido que no cumpla las condiciones establecidas en el artículo 30 del Código Civil, así como el feto que hubiere permanecido, al menos, 180 días en el seno materno.

y beneficiarios, por este orden:

- a) Fallecimiento del titular por derecho propio: el cónyuge viudo no separado legalmente; en su defecto, los huérfanos del titular incluidos como hijos en su documento de beneficiarios a la fecha de su fallecimiento; en su defecto, la persona física o jurídica que acredite haber abonado los gastos del sepelio y afines antes mencionados, siempre que no tuviera obligación contractual de hacerlo.
- b) Ante el fallecimiento de un beneficiario con derecho a asistencia social, el auxilio económico lo percibirá el titular del ISFAS en cuyo documento de beneficiarios figurase.
- c) En otro caso, la persona física o jurídica que acredite haber abonado los gastos de sepelio y afines, siempre que igualmente no tuviera obligación contractual de hacerlo.

Para el titular por derecho propio la prestación es de 600€ (año 2015) cuando los beneficiarios sean el cónyuge viudo no separado legalmente o los huérfanos recogidos en el documento de afiliación, cuantía que se reducirá a la mitad cuando la perciba el titular por el fallecimiento de sus teóricos beneficiarios con derecho a asistencia social. En otros supuestos la ayuda se corresponde al reintegro de gastos de sepelio, enterramiento y los

cobertura de prestaciones por muerte y supervivencia, si bien el artículo 1 de esta última norma expone que los mecanismos de cobertura de este régimen especial se articulan mediante el propio reglamento y mediante el Régimen de Clases Pasivas del Estado, a tenor de sus normas específicas. Para la cobertura véase la *Instrucción 4B0/19065/2010, de 15 de diciembre, de la Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas Armadas*, por la que se regulan las prestaciones sociales del ISFAS, modificada por la *Instrucción 94/2012, de 28 de diciembre, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas*, por la que se suspenden determinadas ayudas sociales y se modifica la *Instrucción 4B0/19065/2010, de 15 de diciembre*, por la que se regulan las prestaciones sociales del ISFAS. En lo que respecta a la ayuda por fallecimiento, esta última instrucción reduce las cuantías de la misma, que anteriormente eran de 1.334€ y 668€ según correspondiese.

relacionados con el mismo conforme a las costumbres locales (quedando excluidos los que afectan a las personas concurrentes) hasta un máximo de las cuantías y casos indicados con anterioridad: 600€ para el titular por derecho propio y 300€ para el titular por derecho derivado o los beneficiarios reconocidos documentalmente. Perderá su derecho a percibir esta prestación quien fuera responsable de forma dolosa del fallecimiento del causante, pasando este derecho al resto de los beneficiarios, si los hubiere.

En cuanto al Régimen especial del personal al servicio de la Administración de Justicia, gestionado por la mutualidad MUGEJU, el *Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia*, reconoce en su artículo 12.1.e) la existencia de prestaciones sociales y asistencia social que, en lo que afecta a la ayuda por gastos de sepelio, se desarrollan en el artículo 104 del *Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Mutualismo Judicial*. Percibirán la prestación de Ayuda por gastos de sepelio:

- a) Ante el fallecimiento del titular por derecho propio, según un orden de preferencia excluyente: el cónyuge viudo no separado judicialmente; los hijos del mutualista fallecido incluidos como beneficiarios en su documento de afiliación; la persona que acredite haber abonado los gastos de sepelio.
- b) Si fallece un titular no mutualista: la persona que acredite haber abonado los gastos de sepelio.
- c) Fallecimiento de un beneficiario: el titular del documento de afiliación en el que aquél figure incluido.

Cuando corresponda la prestación a la persona que se haya hecho cargo de los gastos de sepelio, la ayuda consistirá en el reintegro de tales gastos con el límite previsto en cada caso. La cuantía y los requisitos exigidos para la concesión se fijarán por la Mutualidad General Judicial atendiendo a las disponibilidades presupuestarias del Estado. Para el año 2015 la cuantía en el supuesto del fallecimiento de un mutualista¹²⁵ es de 250€, mientras que para un titular no mutualista o beneficiario era de 150€.

¹²⁵ Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Mutualidad General Judicial, por la que se modifican las cuantías económicas de la ayuda de gastos de sepelio que se recogían en la Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial, donde se cifraban en 1.578€ y 947€, según corresponda.

Por otra parte, existe la posibilidad de obtener un auxilio por defunción a cargo del fondo especial de MUGEJU, siendo necesaria para ello la condición de mutualista del finado. El beneficiario será designado por el mutualista o, en su ausencia, lo serán de forma excluyente y por este orden: el cónyuge no separado judicialmente, los hijos, y sólo en concurrencia con ellos, los hijos de los hijos fallecidos según las normas del Código Civil, los padres que dependan económicamente del mutualista fallecido o los nietos y huérfanos desamparados. En ausencia de éstos se podrá asignar la mitad del importe a la persona que haya corrido con los gastos de sepelio. Para la Mutualidad de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia el auxilio está fijado en 6.010,12€; para la Mutualidad Benéfica de auxiliares de la Administración de Justicia en 4.207,08€; para la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de la Justicia Municipal en 3.005,06€. En las dos primeras situaciones se concede la posibilidad de rescate por el 75% de la cuantía indicada siempre que el mutualista fuera soltero o viudo sin hijos o descendientes que dependan de él económicamente, quedando extinguida la prestación, mientras que en el primer supuesto, concedido el rescate, podrá otorgarse el 25% restante a quien hubiera sufragado los gastos de sepelio.

Se conceden pensiones públicas por viudedad y orfandad cuyos importes dependen de la Mutualidad, el Cuerpo y la Escala en las en las Mutualidades de Previsión y Justicia Municipal y del Cuerpo y los años de cotización en la Mutualidad de Auxiliares. Los importes íntegros mensuales (14 pagas anuales) oscilan, en la Mutualidad de Previsión, entre los 122,35€ (cuantía inicial) y 57,10€ (cuantía final) para los Cuerpos Superiores, y los 81,56€ (cuantía inicial) y 30,05€ (cuantía final) para los de la categoría inferior. Los huérfanos tienen también distintas cuantías y duración según cada organismo.

En resumen, a pesar de ciertas similitudes de los regímenes de funcionarios respecto al Régimen General, la diferencia es sensible en lo que respecta al montante económico resultante sin que, por otra parte, haya homogeneidad en el mismo según las distintas mutualidades.

1.2.2.6. Pensiones por actos de terrorismo

Vinculado con los regímenes para personal funcionario se encuentra un modelo de cobertura que, partiendo de los principios generales y extendiendo su intensidad, se circunscribe a la materialización de riesgos por actos de terrorismo, que se suponen de carácter extraordinario pero que han tenido relevancia en la historia de España desde 1961 hasta finales de la primera década del Siglo XXI. Las bases de este modelo de

protección se sentaron a través de la disposición adicional cuarta de la *Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987*:

Toda persona que resulte incapacitada permanentemente para el trabajo o servicio, o fallezca como consecuencia de actos de terrorismo, causará pensión extraordinaria en el sistema de previsión que corresponda, en su propio favor o en el de sus familiares, en la cuantía y condiciones que reglamentariamente se determinen.

régimen apuntalado por los criterios indemnizatorios por parte del Estado contenidos en el artículo 64 de la *Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988*, en la redacción dada por la disposición adicional decimosexta de la *Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990*. Por su parte, el *Real Decreto 1576/1990, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión en el sistema de la Seguridad Social de pensiones extraordinarias motivadas por actos de terrorismo*, vino a concretar el régimen jurídico anterior para los afiliados a la Seguridad Social víctimas de un acto terrorista. En el orden práctico, este Real Decreto excluye para la obtención de prestaciones la necesidad de encontrarse en situación de alta a los afiliados a la Seguridad Social víctimas de un acto de terrorismo, mientras que las correspondientes pensiones se adscriben al Régimen General de la Seguridad Social para las pensiones de invalidez y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y utilizan sus reglas generales, con las siguientes características:

1. La base reguladora se determinará dividiendo por 14 el resultado de multiplicar por 12 la última base mensual de cotización y, de no encontrarse el causante en alta o situación asimilada, por la base mínima de cotización del Régimen General correspondiente a trabajadores mayores de dieciocho años. Si la persona víctima del acto terrorista tuviese la condición de pensionista de la seguridad social, se tomará como base reguladora la correspondiente a la pensión que viniera disfrutando, actualizada conforme a la evolución experimentada "por el Índice de Precios al Consumo" desde el mes de determinación de la base reguladora hasta el segundo mes anterior al que se produjera la comisión de aquél.
2. El importe de la pensión será igual al 200 por 100 de la cuantía de aplicar el porcentaje que corresponda a la base reguladora, Estas pensiones no estarán sujetas, en ningún caso, a los límites de señalamiento inicial y de revalorización de las pensiones previstos con carácter general. Además, son incompatibles con

las ordinarias u extraordinarias por los mismos hechos causantes o con la correspondiente a su condición de previo beneficiario¹²⁶.

Sobre el esquema existente, el *Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo*, concretó algunos aspectos referentes a las Clases Pasivas del Estado y a aquellos otros supuestos sin derecho a pensiones en cualquier régimen público de seguridad social. Finalmente, más allá de la Seguridad Social, la *Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo*, vino a ampliar el espectro de protección de las víctimas del terrorismo mediante un conjunto de Indemnizaciones por fallecimiento, secuestro, incapacidad y lesiones permanentes no invalidantes, que tendrían su desarrollo en el *Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo*¹²⁷.

1.2.2.7. El Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez

El *Decreto-ley de 2 de septiembre de 1955 por el que se eleva la prestación del Seguro de Vejez e Invalidez* indicaba que en el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez la cuantía de la prestación por viudedad sería del 50% del importe del subsidio correspondiente al causante¹²⁸, siendo compatible con las prestaciones que a las viudas otorgaba el Régimen Obligatorio de Subsidios familiares. El derecho de reclamación prescribía a los cinco años del fallecimiento del causante, con excepción de aquellas viudas con más de 50 años que no hubieran alcanzado los 65 años y cumpliesen el resto de requisitos legales, que conservarían el derecho hasta los 65 años. Sobre esta cobertura Rodríguez Iniesta, G. (2009) indica que: "sólo pueden causar pensión de viudedad SOVI si con arreglo a la legislación vigente a fecha de fallecimiento –la del hecho causante-, la

¹²⁶ No obstante, las pensiones extraordinarias serán compatibles con las pensiones ordinarias de igual naturaleza que, en razón de la *pluriactividad* del interesado, pudiera éste causar en otro régimen distinto del propio sistema de la Seguridad Social, a expensas de lo que, en cada momento y en relación con estas últimas pensiones, resulte de la aplicación de las normas sobre limitación de señalamiento inicial y revalorización de las pensiones públicas.

¹²⁷ A su vez, derogado por el *Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo*.

¹²⁸ Para trabajadores por cuenta ajena de la Rama General con derecho a pensión de Mutualidades o Montepíos y de la de pescadores y trabajadores autónomos de la Rama Agropecuaria: nuevos perceptores: 250 pesetas; antiguos perceptores: 225 pesetas. Para trabajadores por cuenta ajena de la Rama General sin derecho a pensión de Mutualidades o Montepíos de la Rama Agropecuaria: Nuevos perceptores: 400 pesetas; antiguos perceptores: 500 pesetas (en su redacción original, 300 pesetas).

normativa entonces en vigor incluía dentro de su ámbito de protección dicha prestación y en los presuntos beneficiarios concurrían los requisitos para su concesión”.

La disposición transitoria segunda del *Decreto 907/1966, de 21 de abril*¹²⁹, permitió la opción de escoger entre el régimen del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y el nuevo régimen de seguridad social a aquellos que, a fecha 1 de enero de 1967, cumpliesen los requisitos para acceder al SOVI, así como a quienes tuviesen cumplida la edad de jubilación exigida en su respectiva Mutualidad Laboral. A su vez, la disposición transitoria séptima de la *LGSS* indica que: “Quienes en 1 de enero de 1967, cualquiera que fuese su edad en dicha fecha, tuviesen cubierto el periodo de cotización exigido por el extinguido Seguro de Vejez e Invalidez o que, en su defecto, hubiesen figurado afiliados al extinguido Régimen de Retiro Obrero Obligatorio, conservarán el derecho a causar las prestaciones del primero de dichos Seguros, con arreglo a las condiciones exigidas por la legislación del mismo, y siempre que los interesados no tengan derecho a ninguna pensión a cargo de los Regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, con excepción de las pensiones de viudedad de las que puedan ser beneficiarios”. En caso de concurrencia¹³⁰ su suma no podrá ser superior al doble del importe de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios con 65 o más años que esté establecido en cada momento y, si se supera este límite, se procederá a la minoración de la cuantía de la pensión del SOVI en el importe necesario para evitar el exceso.

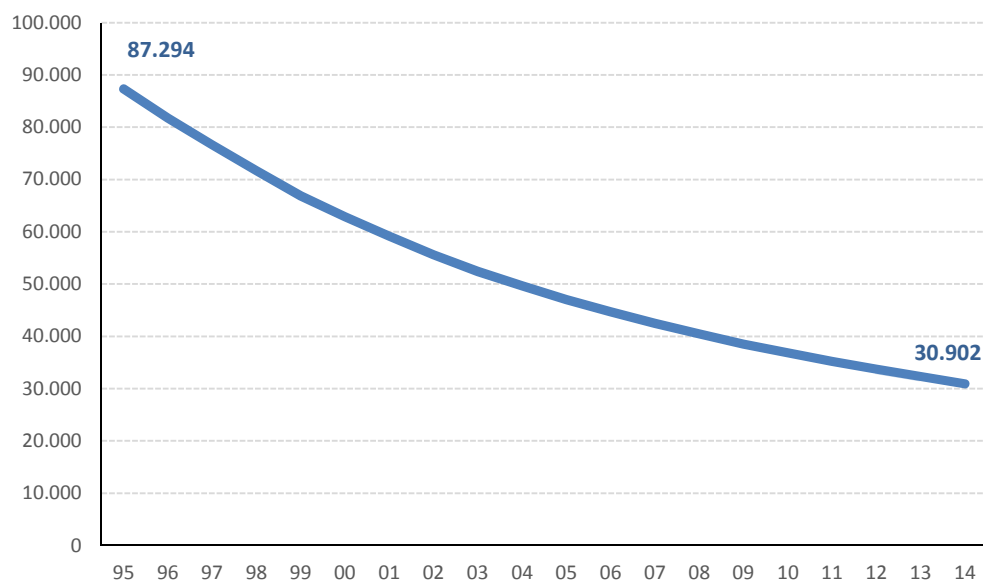
Por tanto, desde la aprobación de la *Ley de Bases de la Seguridad Social* se produce una dualidad de regímenes de cobertura en lo que se refiere a la viudedad, manteniéndose en el sistema prestaciones vinculadas al SOVI que van desapareciendo según fallecen los titulares de los derechos. Según la disposición adicional decimotercera de la *LGSS*, el importe de las pensiones SOVI, financiadas también con cotizaciones sociales, se fija anualmente en la Ley de Presupuestos del Estado, siendo para el ejercicio 2015 de 5.682,60€ anuales o de 5.518,80€ si concurren con otras pensiones. En la práctica y como es lógico puesto que es una prestación que evoluciona al amparo de un derecho transitorio, las pensiones de viudedad del SOVI están en franco retroceso, con una tendencia decreciente ininterrumpida, como mínimo, durante los últimos veinte años.

¹²⁹ Norma que deroga el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y que, en lo aquí indicado, es complementada por lo dispuesto en el *Decreto 1564/1967, de 6 de julio (Trabajo)*, por el que se regulan situaciones derivadas del extinguido Seguro de Vejez e Invalidez.

¹³⁰ El artículo 43 de la *Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1998*, indica que “no se considerará pensión concurrente la percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de la pasada Guerra Civil española, cualquiera que fuese la legislación reguladora”.

A cierre de 2014 las pensiones de viudedad SOVI representaron el 8,22% del total de las pensiones de este sistema, siendo la pensión media de 369,10€ al mes. Si en 1995 se produjeron 3.283 altas de viudedad SOVI por 9.788 bajas en el ejercicio, en el año 2014 estos valores fueron de 1.326 altas frente a 2.498 bajas.

Gráfico 11. Evolución de las pensiones de viudedad SOVI. 1995–2014



Fuente: *Anexo al Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 2016.*

1.3. Las prestaciones por muerte y supervivencia en términos socioeconómicos

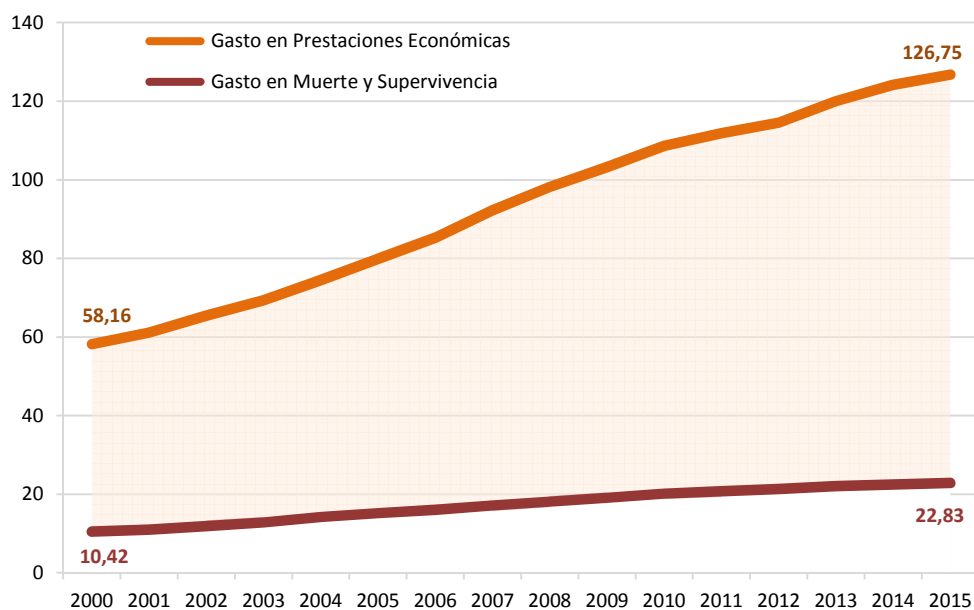
Las prestaciones de muerte y supervivencia han contribuido intensamente al diseño y desarrollo del escenario protector español, tanto en términos sociales como económicos. Por una parte, suponen un gasto estimado total¹³¹ de 23.152,46 millones de euros para el año 2016 (16,43% del coste total estimado para la Seguridad Social en el ejercicio), siendo la segunda partida de gasto más importante del sistema, únicamente por detrás de las pensiones de jubilación; en el año 2014 el gasto en pensiones de muerte y supervivencia supuso el 2,1211% del Producto Interior Bruto¹³². La evolución este gasto

¹³¹ Fuente: elaboración propia con *Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 2016*. En 2014 el importe habría sido de 22.451,31 millones de euros. La Seguridad Social española no ofrece datos lo suficientemente desagregados sobre los importes dedicados a la indemnización a tanto alzado, por lo que no se incorporan en los datos del conjunto.

¹³² Fuente: *Contabilidad Nacional Trimestral de España. Bases 2010 y 2008*. Instituto Nacional de Estadística. El PIB a precios de mercado en base 2010 para 2013 sería de 1.049.181 millones de euros, por lo que las prestaciones de ese año tendrían un peso sobre el PIB del 2,0970%. El PIB a precios de mercado 2013 en base 2008 sería de 1.022.988 millones de euros, por lo que el peso sobre el PIB sería aquí del 2,1507%.

en relación con el coste total de las prestaciones económicas de la Seguridad Social¹³³ se presenta en el gráfico siguiente, de tal forma que en 2012 aquéllas representaron el 18,55% de éstas, estimándose que para 2016 esta relación será del 17,70%. A pesar de la pérdida de su importancia relativa en el conjunto de los gastos del sistema en estos últimos años, la tendencia de la evolución de esta fuente de coste ha sido creciente en el tiempo.

Gráfico 12. Gasto anual en prestaciones de muerte y supervivencia

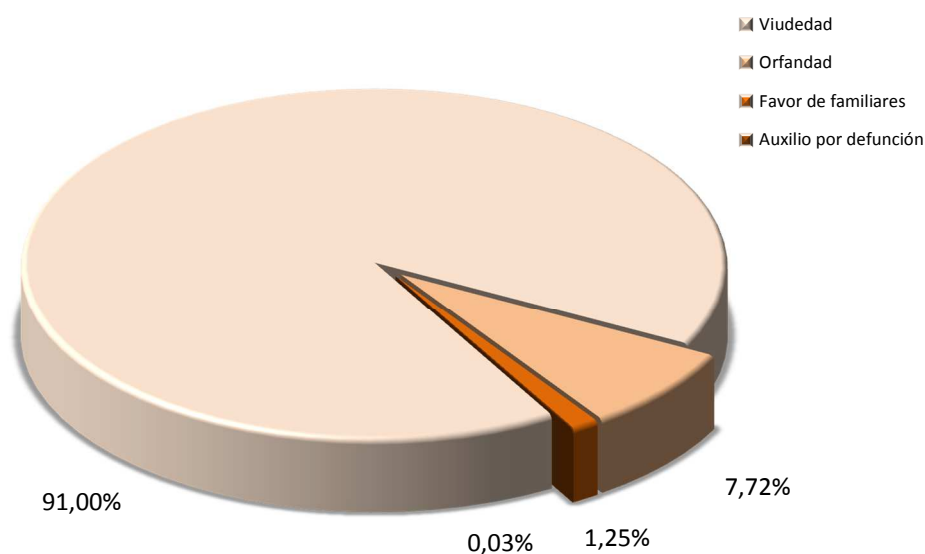


Fuente: elaboración propia con datos de la Seguridad Social. *Proyecto de Presupuestos 2016*. Año 2015, estimaciones.

En cuanto a su distribución en el mismo instante temporal, el gasto en muerte y supervivencia se concentra principalmente en las pensiones de viudedad, cuyos importes estimados para 2015 representarían cerca del 91,00% del coste global estimado de las prestaciones por muerte y supervivencia, seguidas por las pensiones de orfandad (7,72%), las pensiones de favor de familiares (1,25%) y el auxilio por defunción (0,03%), éste verdaderamente testimonial en términos económicos.

¹³³ Respecto a los importes de gasto por prestaciones económicas, la Seguridad Social proporciona diferentes valores en sus informes del *Proyecto de Presupuestos 2016: Informe Económico-Financiero* (Cuadro IV.3), *Cifras y Datos* (Cuadro 12) y *Anexo al Informe Económico-Financiero* (Cuadro II.1). En general se trabajará para cifras y cálculos con los datos de los dos primeros informes, si bien por la mayor amplitud de la serie en la presentación gráfica se utilizarán los correspondientes al último. Por otra parte, la Seguridad Social proporciona datos distintos para el número de pensiones de muerte y supervivencia en vigor al cierre de 2007 en el Informe Económico Financiero (Cuadros IV.10 y IV.29); por su mayor consistencia trabajaremos con los datos correspondientes al cuadro IV.10: 2.240.375 pensiones.

Gráfico 13. Distribución del gasto estimado por prestación en 2015



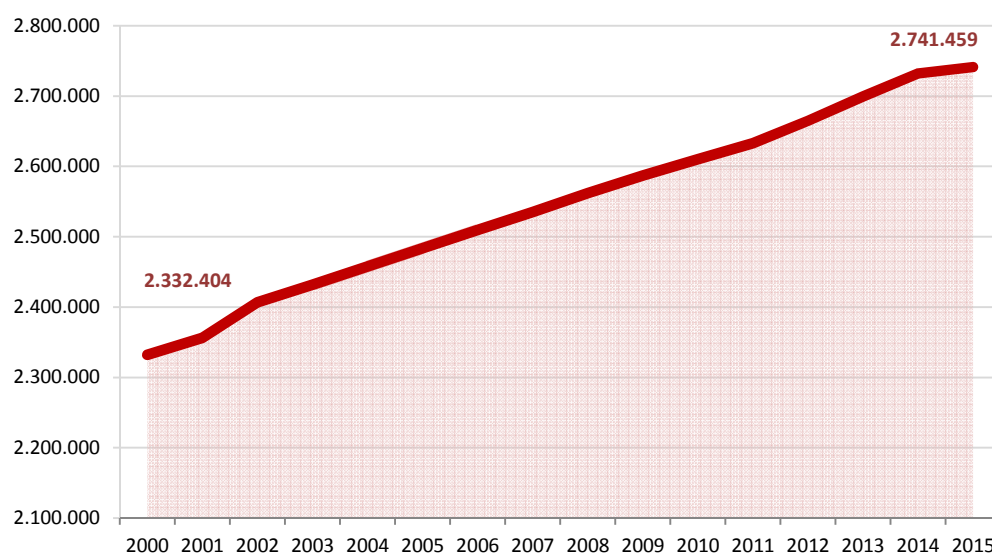
Fuente: elaboración propia con datos de la Seguridad Social. *Presupuestos 2016*.

Respecto al número de pensiones de muerte y supervivencia en vigor a cierre de ejercicio, éste muestra una tendencia claramente creciente en el tiempo¹³⁴, información que consolida la importancia de estas prestaciones en cuanto al número de efectivos que las perciben, apoyando con ello la suficiencia económica personal o familiar de un buen número de ciudadanos y favoreciendo las transacciones económicas entre diversos sectores.

No solamente se está ante un instrumento de alta importancia en materia económica, sino ante una herramienta que permite una redistribución de renta que se dirige a personas y familias que, independientemente del efecto en la vertiente emocional, han perdido una parte de su soporte de riqueza al desaparecer uno de los contribuyentes a la misma. Además, esto ocurre en un entorno en el que algunos de los destinatarios de la protección no tienen capacidad real de obtener rentas propias, unos por su corta edad y otros por su edad avanzada, por lo que el valor real de las prestaciones es realmente superior al derivado de su mera valoración monetaria.

¹³⁴ Número de pensiones al que se le sumaría un número estimado de prestaciones por auxilio de defunción: 153.333 en 2015. Acerca de esta estimación véase el capítulo III, epígrafe 3.1.

Gráfico 14. Número de pensiones de muerte y supervivencia a cierre de ejercicio



Fuente: elaboración propia con datos de la Seguridad Social. *Proyecto de Presupuestos 2016*. Año 2015, estimaciones.

A la hora de analizar las prestaciones de muerte y supervivencia en su conjunto es importante tener en cuenta la transformación que está teniendo lugar -y que igualmente continuará en el futuro- en el concepto de *núcleo familiar* (donde se ha ubicado el destinatario tradicional de la protección) y en las características de sus componentes. Un primer hecho relevante es la variación de la variable *esperanza de vida* (e_x), que históricamente ha mostrado una tendencia creciente en el tiempo.

Nada apunta, de momento, a la inmortalidad del hombre en el plano físico, aunque es posible que las variaciones anuales en e_x cambien en intensidad y no presenten necesariamente amplios crecimientos en el medio o largo plazo. Es razonable pensar que esta variable pueda continuar con un crecimiento sostenido, aunque muy lento; sin embargo, este incremento no es siempre un hito que debe entenderse como positivo, pues junto a un mayor número de años en buena salud también es razonable pensar que existirá un mayor número de años con salud deteriorada y, más allá del importante componente económico que de este escenario se puede derivar, también hay en ello unas implicaciones emocionales considerables.

Gráfico 15. Esperanza de vida al nacer sin distinción por sexo



Fuente: Instituto Nacional de Estadística. *Indicadores demográficos básicos. Mortalidad*. (Consulta: 22-08-15).

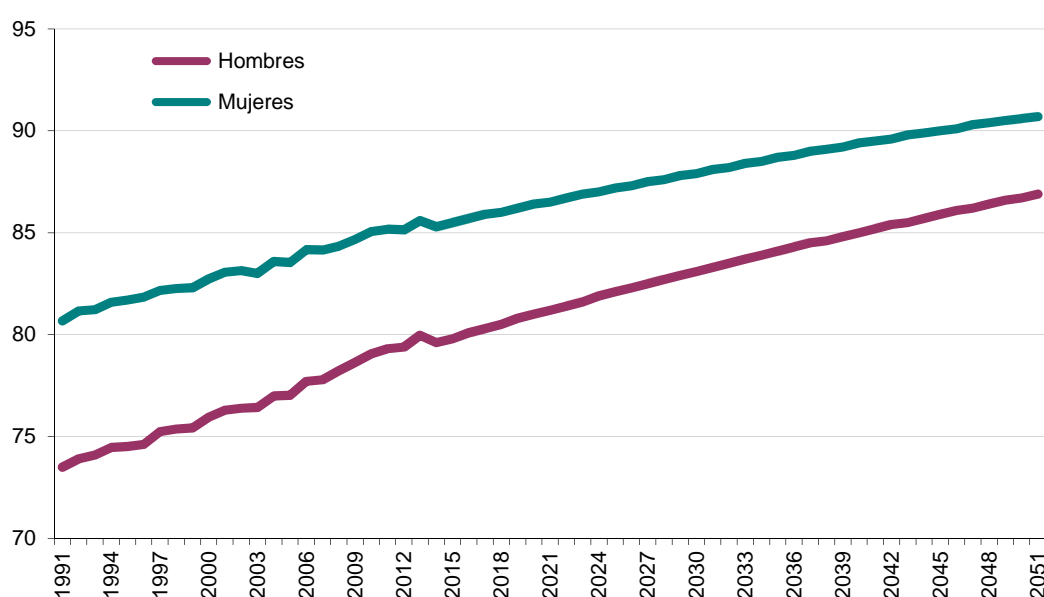
Si bien las actuales diferencias en e_x según la variable sexo podrían converger por el acercamiento de hábitos sociales entre los individuos pertenecientes a cada categoría, por prudencia pensamos que no por ello existirán abruptos cambios de tendencia ni será obligado que los valores de la esperanza de vida de hombres y mujeres deban ser en algún momento iguales. Como indican Hernández González, D. *et al.* (2011):

Las mismas tablas que sirven de punto de partida en la determinación de esa esperanza de vida trabajan con experiencia pasada, utilizan información alejada de las pautas actuales y no incorporan completamente toda la información de éstas, por lo que los valores de la esperanza matemática de la variable *Tiempo de vida hasta la muerte* podrían ser incluso mayores que los que recogen las estimaciones correspondientes (...) todavía no recogen completamente los efectos de la incorporación de la mujer a hábitos sociales más perniciosos para la salud, aunque tampoco la evolución de variables de signo contrario como una mayor incidencia en el control de los riesgos laborales o el avance médico en el control de las enfermedades específicas de cada sexo.

En definitiva, los movimientos de la esperanza de vida no tienen por qué seguir con total exactitud la misma trayectoria que plasma la información histórica, especialmente con la incidencia que fenómenos de carácter estacional como las epidemias, los brotes fuertes de enfermedades o la intensidad que fenómenos atmosféricos y temperaturas tienen en la población más vulnerable. No debería incluso descartarse descensos en e_x cuando se

hayan incorporado todos los argumentos que vayan a pesar en la mortalidad de generaciones actuales y futuras, por ejemplo la citada incorporación de la mujer a hábitos no saludables, las pandemias o los descensos en la calidad de vida derivados del aumento descontrolado del estrés por causas socio-laborales y de sus riesgos asociados. Según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, las diferencias en la esperanza de vida por sexo se mantendrán en el tiempo, si bien con un menor margen entre ellas; si en 1991 la diferencia en esta esperanza de vida al nacimiento era de 7,16 años a favor de las mujeres, en 2051 se estima que tal diferencia se reducirá cerca de un 47%, hasta alcanzar los 3,8 años.

Gráfico 16. Esperanza de vida al nacer por sexo. 1991-2051



Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Período 1991 – 2013: *Tablas de mortalidad de la población española 1991 – 2013*. Período 2014 – 2051: *Proyección a largo plazo de la esperanza de vida al nacimiento por periodo y sexo. Brecha de género. España*.

Con todo ello, en primer lugar es razonable pensar que un incremento en e_x derivaría en un incremento en el número esperado de pagos correspondientes a las prestaciones por muerte y supervivencia vitalicias, en un mayor coste esperado por beneficiario y, en definitiva, en un incremento de costes ante homogeneidad en otros parámetros. Ante este escenario, distintas generaciones de beneficiarios obtendrán montantes globales de prestación distintos a pesar de que los ingresos realizados para obtener dichas prestaciones hayan sido equivalentes, pues aunque el importe periódico a percibir pueda ser igual en términos reales, al existir variabilidad en el número esperado de importes percibidos el montante global será diferente. No existe, por tanto, equidad actuarial en el

modelo, aunque es cierto que la inequidad no parte únicamente de la relación entre aportación y prestación, sino también de la ubicación de esa relación en segmentos heterogéneos como son la situación del sujeto causante en el momento del óbito (activo, pasivo por jubilación, pasivo por incapacidad) o las características del propio hecho causante (contingencias profesionales, accidente o enfermedad común). Ahora bien, la aseveración de un mayor coste total de pensiones de muerte y supervivencia por el incremento de la esperanza de vida en sus beneficiarios debe ser necesariamente matizada, pues esa misma esperanza de vida hará que también los propios sujetos causantes de tales beneficios vivan más, la edad de obtención de una pensión de muerte y supervivencia sería más tardía y, con ello, ante homogeneidad en otras variables se reduciría la corriente de prestaciones. Por tanto, lo que es previsible que se produzca es una traslación del punto medio del intervalo de edades en las que se percibe una prestación de esta naturaleza, pero no está tan claro que la duración del propio intervalo se amplíe.

En cuanto a la estructura del colectivo de beneficiarios, va a ser importante la transformación del núcleo familiar y de los vínculos conyugales que se está dando en las sociedades actuales. Por un lado se han incorporado nuevos modelos para estos vínculos (uniones de parejas de hecho, uniones de parejas del mismo sexo, matrimonios por leyes religiosas de otras culturas, etc.), mientras que, por el otro, tras la aceptación social de la ruptura de los vínculos matrimoniales, es el concepto tradicional de familia el que ha ido variando hacia unidades con menos miembros, incluidas las familias monoparentales. Además, los núcleos familiares tradicionales se han resentido puesto que las exigencias sociales, laborales y personales han fomentado un mayor alejamiento de las distintas generaciones pertenecientes a una misma familia, lo que entre otros aspectos favorecerá la no concesión de pensiones bajo criterios de convivencia "con y a expensas" del sujeto causante. La sociedad se ha movido desde los entornos rurales a los urbanos, fomentando este alejamiento generacional, pero esas mismas exigencias también han incidido en la decisión relativa al número de hijos y el momento de su concepción, así como en la decisión sobre la relación entre generaciones, pues no siempre los hijos quieren o pueden hacerse cargo de sus progenitores cuando éstos lo necesitan.

Otro argumento relevante es el progresivo acceso a formación especializada por parte de la población y la incorporación al mercado de trabajo de la mujer, tradicional perceptora de las pensiones de viudedad a causa de su mayor esperanza de vida y de la existencia en el pasado de un modelo socioeconómico que favorecía esta situación, sin que olvidemos a este respecto los posibles efectos de la Guerra Civil Española sobre la población masculina que pudieran haber modificado la estructura de la población

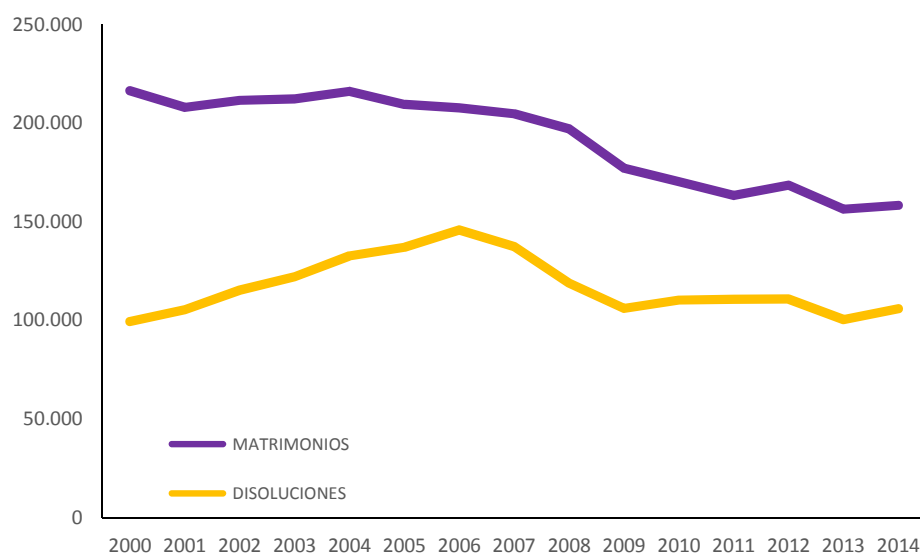
perceptora, ni las limitaciones legales de acceso a la prestación para los hombres hasta la *Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1983, de 22 de noviembre*. De los cambios habidos en materia laboral y formativa se esperaría un crecimiento en las pensiones de jubilación, tanto en número como en importe, cuyos beneficiarios sean mujeres merced al alcance de carreras laborales suficientes para ello, pensiones que serán compatibles con mayores prestaciones contributivas de viudedad si se mantiene el régimen de concurrencia actual; junto a ello, también encontraríamos un mayor equilibrio entre hombres y mujeres en cuanto a la estructura de perceptores, aunque no haya que descartar que se mantenga el mayor peso de éstas si no existen cambios significativos en la relación entre la esperanza de vida por sexo del beneficiario. También los causantes presentarán unas pautas de cotización diferentes, posiblemente más consolidadas respecto a las que han originado la estructura actual de la viudedad, lo que previsiblemente derivaría en una variación de la población cubierta a través de una pensión de viudedad contributiva contrapuesta a la correspondiente a pensiones no contributivas como la jubilación. El ámbito de las empleadas del hogar podría ser un ejemplo válido a referir en este apartado.

Así, aun con los matices necesarios que se derivan de los ciclos económicos o la temporalidad y/o la parcialidad en las jornadas¹³⁵, el cambio en las perspectivas de trabajo permite la presunción de una nueva estructura de los pensionistas de jubilación que, a su vez y ante uniformidad legislativa, puede derivar en variaciones al alza en el número y el coste promedio de las correspondientes pensiones de viudedad, especialmente las derivadas de pasivo. Por otro lado, pueden existir más situaciones de necesidad al retrasarse la edad de entrada al mercado laboral e incrementarse el tiempo dedicado a los estudios.

Otros factores de interés, especialmente en el futuro de las pensiones de viudedad, serán las transformaciones en los vínculos conyugales entre dos personas, donde el reconocimiento de las uniones de hecho y entre personas del mismo sexo hace que surjan nuevas posibilidades de percepción de la prestación que no han existido en tiempos pasados y, por ello, incrementos del gasto en la materia. Por el contrario, el cambio en el concepto de familia, la receptividad hacia las rupturas de vínculos matrimoniales o la aceptación social de la familia monoparental y su elección como estructura familiar también tendrán su influencia en el número de prestaciones a reconocer y en su cuantía, pero aquí, tal y como indican Hernández González *et al.* (2011): “con carácter corrector de las tendencias expansivas”.

¹³⁵ Véase, por ejemplo, Valverde Caramés, P. (2011). “La distribución personal de los salarios y su relación con el tiempo de trabajo”. *Economía Española y Protección Social*, nº III.

Gráfico 17. Matrimonios y disoluciones matrimoniales



Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. Incluye matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2005. *Movimiento natural de la población y Estadística de nulidades, separaciones y divorcios*. Consulta: 19 de septiembre de 2015.

Es coherente pensar que la variación positiva de las disoluciones matrimoniales incidirá en la sensibilidad hacia un mayor número de pensionistas dentro de un régimen de beneficiarios múltiples como el actual, pero no por ello en un mayor coste de la prestación. En otro orden de cosas, el retraso en la edad de matrimonio¹³⁶ es una realidad que limita la probabilidad de concesión de pensiones de viudedad a edades tempranas; por el contrario, la incorporación a nuestra sociedad de otras prácticas socioculturales en cuanto a dichas edades favorece, ante invariabilidad normativa, el incremento de prestaciones y una subida de los costes derivados de este segmento poblacional. Adicionalmente, tal y como está establecida actualmente la estructura de las prestaciones de muerte y supervivencia, las variaciones derivadas del concepto de viudedad tendrían su incidencia en las correspondientes a orfandad y favor de familiares.

Por último, hay que hacer mención del diferente escenario en el que la cobertura pública de la muerte y supervivencia se ha estado moviendo. Frente a la situación del pasado, donde la relación entre la esperanza de vida y las prestaciones de jubilación favorecía la sostenibilidad conjunta de la Seguridad Social y la disposición de fondos para otras coberturas, el presente y el futuro promueven unas prestaciones de jubilación mayores

¹³⁶ *Edad media al matrimonio*: 25,82 años en 1976, 33,62 años en 2009 y 35,39 años en 2014. *Edad media al primer matrimonio*: 25,38 años en 1976, 31,67 años en 2009 y 33,21 años en 2013. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. *Indicadores demográficos básicos. Nupcialidad*. Año 2014, datos provisionales. Consulta: 22 de agosto de 2015.

en número y cuantía global desembolsada, lo que limita la capacidad del propio sistema para orientar recursos hacia otras áreas de gasto.

Como se aprecia, cualquier previsión sobre el futuro de estas prestaciones estará muy influida por el escenario normativo y los requisitos de acceso establecidos en cada momento: dependencia económica, niveles de renta, etc., siendo estos factores un motivo añadido de la dificultad de realizar estimaciones estadística y/o actuarialmente aceptables para períodos de tiempo más allá del corto plazo puesto que confluyen en un mismo punto muchas y variadas fuentes de incertidumbre, si bien sí parece probable que, aun con estabilidad en las normas, existirá una estructura diferente en cuanto a los beneficiarios de las prestaciones y sus características. La modificación en la configuración futura de los beneficiarios dará lugar a cambios en la definición y acercamiento a la población pensionista, especialmente en el concepto actual de la viudedad: la pérdida afectiva no conlleva indefectiblemente ser una persona desvalida en términos económicos, *viudo* no tiene siempre que significar pensión de viudedad ni, claro está, indefensión o desamparo, aun cuando se ha convertido en dogma una imagen del viudo necesitado, particularmente a edades elevadas. Centrándonos en este perfil concreto de población (aunque muchas de las conclusiones inherentes son perfectamente extrapolables a otros segmentos de población como, por ejemplo, las personas con discapacidad) hay que destacar que la protección social en España no parte únicamente de la Seguridad Social, sino que se articula a través de Administraciones públicas e instituciones privadas y/o entidades sin ánimo de lucro mediante un tejido social que trata de llegar a las situaciones de mayor vulnerabilidad y necesidad, siendo el colectivo de personas mayores uno de los beneficiados de estas acciones. Además, este colectivo tiene generalmente muchas de sus necesidades básicas cubiertas (por ejemplo en vivienda) y, por ello, no requiere incrementar de forma relevante sus límites de gasto o endeudamiento.

Como elementos integradores y complementarios a la propia cuantía de la prestación que permiten una mejora en la calidad de vida se pueden definir, entre otros, los programas de atención a personas con discapacidad, contra la pobreza y la exclusión, a favor de la infancia, rentas mínimas, etc., mientras que para los perceptores con edades elevadas la cobertura sanitaria y el precio de los medicamentos, el fomento del ocio y la cultura o el acceso al transporte mediante precios reducidos son acciones que favorecen que estas personas puedan destinar una mayor parte de sus recursos a la cobertura de otras necesidades sin que se resienta su calidad de vida. Otros servicios como la ayuda a domicilio, la atención a la dependencia, los centros de día, la teleasistencia y el transporte adaptado, los programas de envejecimiento saludable y la participación del

voluntariado son acciones adicionales que facilitan la integración de los colectivos con posible riesgo de vulnerabilidad social, entre los que también se encuentran algunos beneficiarios de prestaciones de muerte y supervivencia, sin que ello signifique que no existan perfiles de riesgo dentro de este colectivo, por ejemplo en zonas rurales de pequeñas dimensiones, donde los servicios son escasos, intermitentes, inalcanzables o inexistentes; ahora bien, como indican Hernández González, D. *et al.* (2011): “Esto no es responsabilidad intrínseca del diseño de la prestación de viudedad en sí ni de la Seguridad Social en su conjunto, sino de un desarrollo incompleto o de una planificación inadecuada de los poderes públicos en la cobertura de las necesidades de la población mediante un sistema global de protección social”.

En cualquier caso, la protección y las prestaciones públicas en especie, que normalmente son obviadas en los análisis, favorecen la eliminación de focos de pobreza y desigualdad, siendo instrumentos adicionales a las pensiones de la Seguridad Social que, en un diseño eficiente, permitirían la redefinición de estas últimas para adaptarse mejor a la realidad socioeconómica española, algo ciertamente complejo dentro de un modelo desestructurado y descoordinado en el que la participación autonómica y local dista de sustentar planteamientos de esta naturaleza.

En definitiva, la evolución y la transformación del concepto de protección social han influido en las condiciones de vida y en los recursos disponibles para los beneficiarios de pensiones de muerte y supervivencia, por lo que el análisis de estas prestaciones, especialmente de cara al futuro, no podrá abstraerse de esta nueva realidad. Los tiempos cambian; las necesidades también. La normativa en materia de prestaciones de muerte y supervivencia de la Seguridad Social ha permanecido aletargada dentro de un modelo familiar y social que, sin embargo, se transforma continuamente, siendo la protección cada vez más una cuestión centrada en la esfera personal y menos dependiente de la familia como pilar indispensable. Es en este escenario donde primeramente surge una cuestión trascendental a la hora de abordar cualquier modificación del sistema de protección: *¿Cuál es (o cuál debe ser) el objetivo de las prestaciones de muerte y supervivencia?* Y es ésta la primera incertidumbre que, frente a los vaivenes de las normas en la materia, debe tener una respuesta concisa, clara e inequívoca a partir de la cual se puedan plantear y desarrollar los requerimientos y acciones que correspondan.

No hay una única respuesta a esta cuestión, pero sí debería haber una única dirección hacia la que el sistema se mueva, siendo conscientes de que ello puede significar la renuncia a privilegios, tal y como indica Ojeda Avilés, A. (2008): “ Si queremos mantener unas pensiones dignas para quienes realmente necesitan la ayuda del Estado, hemos de

renunciar a las numerosas prodigalidades, o quizá privilegios, que un Sistema tan poco racional como el nuestro, y el de los demás países europeos, cabría añadir, ha ido generando”.

Nuestra sensibilidad principal es que las prestaciones de muerte y supervivencia se orienten a compensar, de forma temporal, los recursos perdidos por la ausencia del sujeto causante, completando así la suficiencia económica de los beneficiarios durante ese período de tiempo y favoreciendo su integración social. Si hay situaciones que requieren una protección adicional, ésta debería ser otorgada desde otras iniciativas, pero en nuestra opinión su objetivo esencial no debería encaminarse a proteger situaciones de necesidad, aunque puedan contribuir a ello.

2. LAS PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA. LA EXPERIENCIA EN OTRAS ZONAS GEOGRÁFICAS

Cada sistema de seguridad social se adecúa a las distintas idiosincrasias del país en que se aplica, adaptándose al concepto que cada uno de ellos tiene de la protección social, a su estructura sociodemográfica, a sus recursos y condicionantes económicos y a sus sistemas de financiación. Aunque puedan partir de principios filosóficos homogéneos, no hay un sistema de protección uniforme, variando la definición y el tratamiento de los grupos protegidos, los principios de compatibilidad, las coberturas o las formas de cálculo y financiación de las prestaciones, por poner varios ejemplos. Por todo ello, aunque siempre es oportuno conocer otras perspectivas y diseños, no es consecuente aceptarlos dogmáticamente como posibilidades de cambio aplicables a cualquier modelo sin una profunda reflexión previa y/o una adaptación, ya sea total o parcial, a los principios del sistema que los pretende incorporar.

A continuación presentamos, de forma muy breve, las características principales de otros sistemas de protección en lo que respecta a las prestaciones por muerte y supervivencia¹³⁷, teniendo en cuenta que, junto a los beneficios estrictamente vinculados a este campo de acción, suelen existir prestaciones en el ámbito familiar o en el campo de protección contra la pobreza que complementan a aquéllos.

2.1. Sistemas de protección en el entorno europeo

En los sistemas de protección europeos hay una acción común generalizada de protección de la viudedad y la orfandad, no tan intensa para otros posibles beneficiarios. Se suelen diferenciar las contingencias comunes de las profesionales y el sistema de cálculo de una pensión de muerte y supervivencia más habitual es la aplicación de un porcentaje sobre una base reguladora. Hay una tendencia en la separación de la duración de la orfandad según sus características (general, estudios e incapacidad) y algunos países conceden la pensión de viudedad únicamente a partir de una edad, mientras en otros predomina una orientación familiar frente a la individual.

¹³⁷ Las fuentes fundamentales en la elaboración de este epígrafe son el *Directorio de la UE* (2015) elaborado por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea y el *Banco de información de los sistemas de seguridad social Iberoamericanos* (2014) de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Cuando ha sido necesario se ha completado la información con la proporcionada por los propios sistemas nacionales de seguridad social. Los tipos de cambio utilizados son los facilitados por el Banco Central Europeo (Europa) y por el Banco de España (Otros países). Para más detalle, véase el Anexo III.

Austria

Dentro de un sistema de pensiones de tres pilares, la contribución al sistema austriaco de reparto se realiza según un porcentaje del salario, con exigencias de cotización para ser beneficiario de una prestación por contingencias comunes: con ciertas particularidades, 60 meses de los últimos 120 y, si el sujeto causante alcanzó los 50 años, incrementos hasta un máximo de 180 meses de los últimos 360. Junto a ayudas familiares por hijo o por recursos mínimos, dentro de las prestaciones por muerte y supervivencia se concede una pensión de viudedad para el cónyuge (o ex-cónyuge dependiente) que ha alcanzado 35 años o tiene hijos en común con el sujeto causante: *Witwenpension* ('pensión para viudas') o *Witwerpension* ('pensión para viudos'). Dependiendo de los ingresos del beneficiario, el porcentaje F_1 aplicable gira entre el 0% y el 60% de la pensión del sujeto causante o de la que le hubiera correspondido¹³⁸, siendo B^b y B^f los ingresos brutos en los últimos 2 años (o 4 si hubo un descenso por desempleo o discapacidad) del beneficiario y del sujeto causante, respectivamente:

$$F_1 = \left[70 - \left(30 \cdot \frac{B^b}{B^f} \right) \right] \cdot \frac{1}{100} \quad [53]$$

La pensión de orfandad (*Waisenpension*) se concede hasta los 18 años o hasta los 27 si el hijo se encuentra inmerso en el proceso educativo, sin existir límite para los hijos con discapacidad. En orfandad simple se concede un porcentaje del 40% de la base reguladora y en orfandad absoluta del 60%, con importes complementarios para alcanzar las cuantías mínimas. Esporádicamente se puede otorgar una cuantía por gastos de funeral (*Zuschuss zu den Bestattungskosten*) en caso de necesidad y hasta un máximo de 436,04€; depende de las reglas de los fondos del seguro de enfermedad pero no siempre está contemplada en éstos.

En las contingencias profesionales la pensión de viudedad es el 40% de la base reguladora -diferente de la de contingencias comunes- si se ha alcanzado la edad de jubilación o se tiene una discapacidad de, al menos, el 50%; en otro caso, el porcentaje es del 20%. Para la orfandad el sistema es similar al de contingencias comunes, pero los porcentajes son del 20% (orfandad relativa) y del 30% (orfandad absoluta). Puede concederse una pensión a los progenitores en situación de necesidad y a los hermanos dependientes a cargo del sujeto causante. Finalmente, también se concede un auxilio por

¹³⁸ Se conceden cuantías compensatorias mensuales hasta alcanzar unos ingresos mínimos si los ingresos están por debajo de un límite básico (1.887,39€ al mes; año 2015).

funeral por muerte por contingencias profesionales con el objetivo de compensar una parte de los costes satisfechos, así como se cubren los costes de traslado según la capacidad financiera de los supervivientes.

Alemania

El sistema de seguridad social alemán parte del principio: "es preferible la rehabilitación que la pensión", existiendo en la orfandad y la viudedad límites de compatibilidad con los ingresos propios. Se concede una pensión de supervivencia al supérstite, a la pareja de hecho y bajo ciertas condiciones a la persona divorciada. Para la pensión de viudedad se requiere que el sujeto causante ya fuese pensionista o un período general de cotización de cinco años, excepto en contingencias profesionales, y debe existir el matrimonio al menos un año antes del óbito. Como alternativa a las disposiciones habituales para la pensión de viudedad, una particularidad de este modelo es la capacidad de compartir entre los cónyuges los derechos adquiridos durante la vida en común si han realizado contribuciones durante al menos 25 años, se han casado después del 31 de diciembre de 2001 y/o eran menores de 40 años en esa fecha. Se concede una pensión temporal de viudedad por dos años¹³⁹ del 25% de la pensión del fallecido, en lo que se denomina "pensión menor" de viudedad (*Kleine Witwen und Witwerrenten*). Esta cuantía será vitalicia y se incrementará hasta el 55% si el beneficiario tiene algún hijo a cargo menor de 18 años o discapacitado, o 45 años (47 años para defunciones posteriores a 31/12/2011) o si la capacidad de obtener ingresos se reduce al 55%, en lo que se denomina "pensión mayor" de viudedad (*Grosse Witwen und Witwerrenten*).

Asimismo, se concede una pensión de orfandad a los hijos¹⁴⁰ hasta la edad de 18 años o 27 años si el beneficiario estudia o está en el servicio militar o equivalente o es discapacitado. La pensión de orfandad (*Waisenrente*) para quienes han perdido un progenitor es de hasta el 10% de la pensión percibida por el sujeto causante más un suplemento por orfandad; si la orfandad es absoluta el porcentaje es del 20%. Por otra parte, la pensión de orfandad se reduce hasta un máximo del 10,8% si el sujeto causante fallece antes de alcanzar los 63 años.

¹³⁹ Si el matrimonio es anterior a 1 de enero de 2002 y uno de los cónyuges nació antes del 2 de enero de 1962, la pensión parcial se paga sin límite de tiempo. De darse un nuevo matrimonio, la pensión de supervivencia se extingue, pudiéndose solicitar una cuantía única de 24 veces la cuantía media de la pensión de los últimos 12 meses.

¹⁴⁰ También pueden ser incluidos los nietos o hermanos que conviviesen a expensas del sujeto causante. Por otra parte, puede existir una pensión por educación de hijos para personas divorciadas después del 30 de junio de 1977 y cónyuges fallecidos.

En contingencias profesionales se concede un porcentaje del 40% de los ingresos anuales del sujeto causante si el beneficiario cumple alguna de las características indicadas en contingencias comunes; en otro supuesto, el porcentaje es del 30%. El sistema para la orfandad es similar al indicado en contingencias comunes, mientras que se paga un auxilio por defunción por un séptimo de la suma de referencia: (*Old Länder*: 4.740€ - *New Länder*: 4.020€; año 2014).

Bélgica

En Bélgica, como norma general, para ser beneficiario de una pensión de viudedad se exigen 45 años de edad y haber estado casado con el finado al menos un año antes de la muerte, incluido el período de vida en común. Se consideran excepciones al requisito de edad: que el sujeto causante fuese minero durante al menos 20 años, tener un hijo dependiente o presentar una discapacidad de al menos el 66%; se consideran excepciones a la condición de matrimonio: tener un hijo del sujeto causante o que aquél haya nacido en los 300 días posteriores a la muerte de éste o que la muerte se deba a una contingencia profesional acaecida o agravada tras el matrimonio. Si el matrimonio no ha durado un año o no se alcanza el requisito de edad, salvo las excepciones citadas, se concede una prestación temporal de supervivencia de 12 meses. La cuantía de la pensión de viudedad es el 80% de la pensión del sujeto causante pensionista o de su pensión de jubilación estimada. La orfandad se cubre mediante una cuantía fija dentro de las prestaciones familiares.

Ante un fallecimiento por contingencias profesionales se puede tener derecho a una pensión vitalicia del 30% de la base de remuneración para el supérstite; a una pensión del 15% de la base de remuneración (orfandad relativa) o del 20% (orfandad absoluta) para cada beneficiario de orfandad, con el límite del 45% y el 60% respectivamente, siendo aquí una renta temporal hasta los 18 años, excepto ante una discapacidad; y a una pensión para los progenitores, que puede ser vitalicia si dependían económicamente del causante. La contingencia profesional puede dar lugar a una prestación a quien haya pagado los gastos funerarios: el pago completo de los gastos de traslado y el reembolso parcial del resto de costes hasta 30 veces el ingreso diario promedio del fallecido.

Bulgaria

Dentro de un sistema de tres pilares, ante el fallecimiento del asegurado o pensionista el sistema de seguridad social básico da lugar a prestaciones a los miembros de la familia (cónyuge, hijos y progenitores). Los hijos tienen derecho a la prestación si han nacido

dentro del matrimonio, hasta los 18 años o hasta los 26 si estudian, manteniéndose el derecho si adquirieron una discapacidad antes de las edades indicadas. Por otro lado, el cónyuge superviviente tiene derecho a una pensión de supervivencia en los cinco años anteriores a la edad de jubilación, aunque si se encuentra incapacitado para trabajar se concede la pensión independientemente de la edad. Los padres tienen el derecho a la pensión de supervivencia si han alcanzado la edad de jubilación.

Existe un beneficio por muerte que se determina anualmente por el presupuesto (año 2015: 540 levas búlgaras; 276,10€) a repartir por igual entre todos los beneficiarios. Por otra parte, la pensión de supervivencia es un porcentaje de la pensión del sujeto causante según el número de beneficiarios con derecho a esta pensión: (50% para 1 beneficiario; 75% si hay dos beneficiarios; 100% con tres o más beneficiarios). La pensión es una cuantía agregada que se distribuye entre los beneficiarios y en el caso de la orfandad absoluta se recibe una pensión de supervivencia como suma de las pensiones de los fallecidos. La base reguladora depende de la pensión que percibía el sujeto causante o la que le hubiera correspondido de haber tenido un 90% de discapacidad. Existe también un complemento para el supérstite superviviente, incompatible con la pensión de viudedad, del 26,5% de la pensión percibida por el fallecido.

Croacia

En Croacia son beneficiarios de las prestaciones de muerte y supervivencia los miembros de la familia del sujeto causante pensionista o que hubiese permanecido al menos cinco años asegurado o con diez años de cotización o que cumpliera el período para tener derecho a la pensión de invalidez; en las contingencias profesionales no se exigen períodos previos de cotización. Los supérstites y parejas de hecho supervivientes (con vida común de, al menos, tres años) recibirán una pensión de supervivencia si tienen un mínimo de 50 años en el momento del hecho causante o si están incapacitados para trabajar (incluida la incapacidad originada en el año posterior al fallecimiento). Si se tienen 45 años en el momento del hecho causante se podría causar la pensión al alcanzar los 50; también se tiene derecho si el teórico beneficiario se ocupa de los hijos, manteniéndose el mismo si sobre éstos acaece una discapacidad. A su vez, los hijos perciben una pensión de supervivencia hasta los 15 años, los 18 años si están en búsqueda de empleo o los 26 años si están estudiando; en cuanto a hijos con discapacidad, generalmente el derecho se mantiene mientras dure la misma. Los progenitores que viven a expensas del sujeto causante tienen derecho a una pensión de supervivencia si tienen 60 años o son discapacitados.

La pensión de supervivencia es un porcentaje de la base reguladora según el número de personas dependientes del sujeto causante (70% para un beneficiario; 80% si existen dos beneficiarios; 90% para tres beneficiarios; 100% con cuatro beneficiarios). En el régimen de contingencias profesionales se puede obtener el reembolso de los gastos funerarios por la persona que incurrió en dichos gastos.

Chipre

Se concede una pensión de viudedad a la cónyuge conviviente de un asegurado fallecido o a la dependiente de él si no existía convivencia, así como al viudo incapacitado y al cuidado de la asegurada difunta. En cuanto a la pensión de orfandad, se concede si: los padres han muerto y al menos uno de ellos era asegurado, o el fallecido mantenía al huérfano y no existía convivencia entre los progenitores, o si muere un progenitor y el superviviente no tiene derecho a la pensión de viudedad o si la madre con pensión de viudedad se vuelve a casar. Respecto a la ayuda por funeral, se paga a asegurados, pensionistas, personas dependientes del asegurado o trabajadores a causa de lesiones corporales como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Para la obtención de la pensión de viudedad, si el fallecido no era pensionista de jubilación debería tener acumuladas al menos 3 unidades de seguro y haber transcurrido 156 días desde su incorporación inicial al mismo, mientras que el número de unidades de seguro no debería ser menor del 25% de los años del período de referencia, requisitos no exigibles a los fallecidos que fuesen pensionistas de jubilación. Si la muerte es por accidente se requiere tener la mitad de una unidad de seguro, que hayan transcurrido 26 semanas desde el inicio del seguro y al menos el 39% de una unidad de seguro respecto a las contribuciones relativas al ejercicio. En la orfandad, sólo cuando el progenitor superviviente no sea elegible para la pensión de viudedad se exige que éste cumpla los requisitos de la pensión de viudedad. La ayuda por gastos funerarios requiere el cumplimiento de los requisitos de la viudedad sólo para el accidente común; si el causante era pensionista de jubilación o fallece un huérfano pensionista de orfandad no existen otros requisitos para la concesión.

La pensión de viudedad consta de una pensión básica y de una pensión complementaria. El importe de la pensión básica semanal es el 60% del valor semanal del promedio anual de las unidades de seguro acreditadas por el causante y se incrementa al 80%, 90% y 100% en caso de 1, 2 ó 3 personas a cargo¹⁴¹. La pensión complementaria semanal es el 60% de la pensión de jubilación complementaria o discapacidad pagada o de la pensión

¹⁴¹ Con particularidades en los porcentajes si el sujeto causante percibía una pensión reducida actuarialmente.

de invalidez que se pagaría a los difuntos (si se cumplen los requisitos para esta pensión el día de la muerte). La pensión de viudedad es vitalicia y se extingue ante un nuevo matrimonio, aunque dado este hecho se recibe un pago único equivalente a la pensión de un año, sin ningún aumento por personas a cargo.

La asignación por orfandad, que se paga hasta alcanzar la edad adulta o de forma vitalicia para discapacitados, consta generalmente de dos partes; la cantidad semanal básica, que es igual para todos los huérfanos: el 40% de la remuneración semanal y el importe complementario, que es el 50% de la pensión de viudedad complementaria que se pagaría ante la muerte del ascendiente de los huérfanos. Si hay más de dos huérfanos, la parte complementaria del beneficio total no puede exceder de la cuantía de la pensión de viudedad complementaria, aunque si estaban asegurados ambos padres la cantidad semanal del subsidio complementario se calcularía tomando la cuantía favorable para el menor. En el caso de progenitor no elegible para la pensión de viudedad o que se ha vuelto a casar, la cuantía de la prestación es del 20% de la cantidad semanal de la remuneración básica para cada huérfano (hasta tres huérfanos). El importe de la ayuda para gastos de funeral se paga una vez y corresponde al 5,6% de la remuneración anual de base vigente.

Dinamarca

Además de las pensiones constituidas a través del ahorro individual y las vinculadas al mercado de trabajo, en Dinamarca, dentro del sistema de pensiones estatales y si el difunto era pensionista, se puede recibir una pensión de supervivencia durante tres ejercicios; en otro supuesto, siempre que hubiese convivencia de al menos 3 años en la fecha del óbito se accede a un subsidio de supervivencia a tanto alzado hasta un máximo de 13.904 coronas danesas (2014; 1.865,91€). También se obtiene un pago único a cargo de la pensión de jubilación complementaria. Por otra parte, se puede también acceder a una participación en los gastos de funeral que depende de la edad y el "patrimonio legado", tal que para un fallecido soltero sin hijos mayores de 18 años su patrimonio legado sin contar el subsidio debe ser, en el año 2014, un máximo de 17.200 coronas (2.308,23€) para obtener el importe íntegro, anulándose el beneficio para un patrimonio de 27.450 coronas (3.683,77€). Si existen cónyuge o hijos de más 18 años el patrimonio debe ser de 34.300 coronas (4.603,04€) y 44.450 coronas (5.965,16€), respectivamente. El importe de la participación en gastos de funeral es de un máximo de 8.600 coronas (1.154,11€) si el finado tenía menos de 18 años y de 10.250 coronas (1.375,54€) si tenía más de 18 años, con un mínimo de 1.050 coronas (140,91€) si el fallecido nació antes del 1 de abril de 1957.

Eslovaquia

El régimen de protección eslovaco se organiza en tres pilares. En el nivel básico existe una subvención por funeral (*príspevok na Pohřeb*) para el residente organizador del funeral de fallecidos residentes en el país, con un importe para 2015 de 79,67€. Por su parte, un hijo dependiente del finado tiene derecho a una pensión de orfandad a la muerte de un progenitor pensionista de vejez o invalidez (o que pudiera tener derecho a una pensión de invalidez, o que disfrutaba de la jubilación anticipada o con un fallecimiento por contingencias profesionales). El derecho finaliza cuando el menor deja de ser dependiente o a los 26 años. La pensión es el 40% de la base reguladora (pensión percibida o con derecho a percibir por el sujeto causante). También se concede el derecho a la pensión de viudedad (*Vdovský / Vdovecký dôchodok*) por 1 año, aunque se extendería en el tiempo bajo alguna de estas condiciones: el supérstite ha llegado a la edad de jubilación, tiene al menos un hijo a cargo con derecho a pensión de orfandad como superviviente del difunto o fue criado en la familia de éste, es discapacitado al menos en el 70%, tiene tres o más hijos o ha cumplido 52 años y está al cuidado de dos hijos. La pensión es el 60% de la base reguladora. En contingencias profesionales se conceden prestaciones de supervivencia y un auxilio por defunción (*náhrada nákladov spojených s pohrebom*).

Eslovenia

Los miembros supervivientes de la familia tienen derecho a una pensión de supervivencia si el sujeto causante era pensionista de jubilación o invalidez o cumplía las condiciones para ello. Se destina una pensión de vejez al cónyuge sobreviviente, a la pareja de hecho o al cónyuge divorciado que tiene derecho a la pensión alimenticia, mientras que la pensión familiar se destina a hijos, nietos, otros menores y progenitores a cargo del sujeto causante. Los beneficiarios se someten a un requisito de convivencia y sus ingresos totales no deben superar el 29% del importe de la pensión básica. Como condiciones especiales los beneficiarios de viudedad deben tener una edad mínima (54 años en 2014, que se elevarán gradualmente hasta los 58 años en 2021), o una incapacidad para trabajar o tener a cargo uno o más hijos con derecho a pensión. Los menores tienen derecho a la pensión familiar hasta la edad de 15 o 18 años (aquí si están registrados como desempleados), o hasta el final de sus estudios pero como máximo hasta la edad de 26 años, o si tienen discapacidad. El derecho a la pensión familiar se garantiza también a los padres que son totalmente incapaces de trabajar o tienen una edad mínima a la muerte del sujeto causante (para el período 2014-2015 se

ha elevado gradualmente hasta los 60 años de edad; en 2014 el mínimo de la madre era de 58 años y de 60 años el del padre).

La pensión de viudedad es del 70% de la pensión a la que el fallecido tendría derecho en el momento de la muerte. En caso de ser, además, beneficiario de pensión de jubilación, la pensión familiar es compatible sólo en un 15%, aunque el importe máximo de las dos pensiones no debe exceder la cuantía de la pensión de un hombre calculada sobre la base de la pensión más alta para un período de afiliación de 40 años. En cuanto a la pensión familiar, si hay varios beneficiarios se otorga el 80% para dos beneficiarios, el 90% para tres beneficiarios y el 100% para más de tres beneficiarios. En la orfandad absoluta con dos sujetos causantes asegurados, la cuantía de la pensión familiar se calcula sobre la base más favorable. Si hay varios beneficiarios, las dos pensiones se dividirían en partes iguales de acuerdo con el número de hijos.

La cobertura de los costes de funeral se plantea dentro de la asistencia social de emergencia. Se concede una ayuda por fallecimiento (*Posmrtnina*) destinada a proporcionar asistencia financiera a los parientes del sujeto causante que tienen derecho a la asistencia social o prestaciones de esta índole, por una cuantía única de 269,20€ (año 2015) equivalente a un salario mínimo. El subsidio por funeral (*Pogrebnina*) es una ayuda para cubrir los gastos del funeral por un importe igual a dos salarios mínimos y asciende a 538,40 euros (año 2015). Los beneficiarios en ambas opciones deben ser residentes, familiares del sujeto causante y se someten a condiciones de recursos económicos (según el número de individuos del núcleo familiar en la ayuda por fallecimiento o según una cantidad de 606€ para una persona o 909€ para una familia para el subsidio por funeral).

Estonia

En Estonia coexisten dos clases de pensiones de supervivencia: las pensiones nacionales y las pensiones propiamente denominadas de supervivencia, que se pagan a familiares del sujeto causante que dependían de él siempre que éste hubiera generado derechos para una pensión de incapacidad o jubilación; de no ser así, se concede la pensión nacional siempre que el fallecido hubiese residido en Estonia al menos durante un año.

Las pensiones de supervivencia no se orientan a las personas que tienen un empleo remunerado, excepto para los menores de 18 años o de 24 años estudiantes a tiempo completo. Pueden ser beneficiarios el cónyuge, los hijos y, en determinadas circunstancias, otros familiares. El cálculo se basa en dos cuantías: la pensión de

jubilación estándar (o la de una persona que ha acumulado 30 años de empleo generador de pensión), aplicándose un porcentaje del 100% si existen tres o más personas a cargo, del 80% con dos personas a cargo y del 50% con un dependiente; en el caso de una pensión nacional estos porcentajes se aplican a la tasa nacional de pensiones. Además, se concede un auxilio por defunción al municipio local que ha organizado el funeral de una persona fallecida no identificada o sin familiares, hasta un importe máximo de 250€ (año 2015). Si ocurre una muerte por contingencias profesionales el empleador está obligado a hacer frente, entre otros, a los costes de funeral.

Finlandia

El cónyuge y los hijos menores de 18 años tienen derecho a una pensión familiar a cargo del sistema nacional de pensiones que garantiza unos ingresos mínimos, en particular a los cónyuges menores de 65 años, con exigencia de residencia en el país de tres años desde los dieciséis. Se parte de una pensión inicial durante seis meses y una pensión adicional basada, a su vez, en una cuantía básica y en un suplemento basado en ingresos. Es un modelo centrado en quienes no tienen derecho a pensiones del sistema basado en ingresos o si el importe de éstas se considera insuficiente.

En el sistema de pensiones basado en ingresos la cuantía está generalmente relacionada con la pensión del sujeto causante (o la pensión de incapacidad a la que éste hubiera tenido derecho), si bien los ingresos del cónyuge sin hijos menores de 18 años afectan a la cuantía final a percibir. La prestación del cónyuge se calcula mediante un porcentaje del 17% al 50% de la pensión correspondiente, siendo el porcentaje de orfandad del 33% al 38%, dependiendo en ambos supuestos del número de hijos con derecho a pensión de orfandad. La pensión de un cónyuge con ingresos suficientes decrece a partir del mes número 70, pero no antes de que el hijo más joven alcance los 18 años. La deducción es la mitad de la diferencia entre la pensión propia (o acumulada) y la base de reducción: 675€ (año 2014).

En líneas generales, en ambos modelos las pensiones para el cónyuge requieren que el matrimonio haya tenido lugar antes de los 65 años del sujeto causante y se haya tenido un hijo dentro del mismo; de no tener hijos, se requiere que el beneficiario tuviese al menos 50 años en la fecha del fallecimiento del asegurado (o haber estado recibiendo la pensión de incapacidad durante al menos 3 años en el sistema basado en ingresos); el matrimonio debe haber tenido una duración mínima de 5 años. La pensión de orfandad se paga a los hijos menores de 18 años o de 21 si se encuentran estudiando a tiempo

completo. Por otra parte, para las contingencias profesionales también rige un sistema de cobertura a través de pensiones familiares, además de un subsidio de funeral.

Francia

En Francia, ante el fallecimiento del sujeto causante, la prestación del cónyuge (o ex-cónyuge) incluye una pensión de supervivencia (*pension de réversion*) proporcional a la que el difunto hubiese percibido; para ello se exige matrimonio, al menos 55 años como norma general e ingresos anuales menores para el año 2015 a 19.988,80€ si se vive solo o de 31.982,08€ si se vive en pareja. La pensión es el 54% de la pensión básica; si el sujeto causante alcanzó 15 años de cotización (60 cuatrimestres) la cantidad mínima es de 3.403,07€ al año, que se reducirá si cotizó menos tiempo, mientras que la cuantía máxima es de 10.270,80€ al año. Por otra parte, se obtiene un 10% adicional si se tienen 3 hijos, un 11,1% si se ha alcanzado la edad para obtener una pensión plena y el importe mensual de la pensión propia no excede de 852,39€ y, finalmente, 96,21€ mensuales si se tiene al menos un hijo a cargo y no se percibe pensión de jubilación propia. La pensión de supervivencia se reparte proporcionalmente entre los diferentes cónyuges o asimilados y se puede revisar -al alza o a la baja- dependiendo de los ingresos del beneficiario.

Si no se tiene derecho a la pensión de supervivencia según estas condiciones, dependiendo de los ingresos del beneficiario (menores en los 3 meses anteriores a 2.257,95€ o 752,65€ al mes, año 2015) se concede un subsidio de viudedad (*allocation veuvage*) a quienes residan en Francia, no vivan en pareja y siempre que el sujeto causante haya contribuido al sistema al menos 3 meses durante el año anterior a su muerte. La cuantía neta mensual es 602,12€ (año 2015), que pueden ser reducidos según los ingresos, mientras que su duración es 2 años (o hasta cumplir 55 años si se tenía 50 años al fallecimiento).

Igualmente, hasta 2015 se otorgaba un auxilio de defunción (*capital décès*) para fallecimientos mediante el pago de una cantidad que representa 3 meses de ingresos del sujeto causante (con los límites de 380,40€ y 9.510€, año 2015), siempre que éste estuviera al menos 3 meses antes de su muerte en alguna de estas condiciones: empleado o perceptor de prestaciones de desempleo, beneficiario de una pensión de incapacidad, beneficiario de rentas por contingencias profesionales o empleado con cobertura de prestaciones de enfermedad; para fallecimientos durante 2015 la cuantía es fija: 3.400€. Por último, la cobertura de necesidades de los hijos se realiza a través de las prestaciones familiares, ajenas a las características de las de muerte y supervivencia,

con unos subsidios independientes de los ingresos familiares: 95,99€ mensuales para la orfandad relativa y 127,96€ mensuales para la orfandad absoluta.

Grecia

Sin perjuicio de las posibles reformas que en estos momentos se puedan estar planteando en Grecia, el requisito para la concesión de una pensión de supervivencia ha sido que el sujeto causante haya acumulado 1.500 días de seguro (300 en los 5 años anteriores a su muerte), mientras que el importe total de las pensiones recibidas por todos los miembros de la familia beneficiaria no puede superar el 100% de la base reguladora (importe de la pensión de vejez que recibió o hubiera recibido el fallecido).

En cuanto a la pensión de viudedad existe un régimen para fallecimientos anteriores a 15 de julio de 2010 y otro posterior, en el que es necesaria la existencia de tres años de matrimonio previo o de cinco si el fallecido era pensionista; los cónyuges divorciados tienen derecho a pensión si no se han vuelto a casar y tienen más de 65 años. El derecho se mantiene durante los primeros 3 años después de la muerte del sujeto causante; finalizados éstos, si se trabaja o recibe pensión se obtiene hasta los 65 años el 50% de la pensión de jubilación del sujeto causante (o de la que hubiera tenido derecho). Después, el porcentaje se eleva al 70%. La cuantía de la pensión no se ve reducida si el supérstite tiene una discapacidad de al menos el 67% y, si el sujeto causante deja huérfanos menores de edad, discapacitados o estudiantes hasta los 24 años, la cuantías que se reduzcan en la pensión de viudedad se destinan a la pensión de orfandad.

Se tiene derecho a una pensión de orfandad para los hijos solteros que no perciban otra pensión y hasta los 24 años si están estudiando. Los incapacitados cuya situación sea anterior a los 18 años tienen el derecho hasta que finalice la discapacidad, independientemente de la edad. Si el sujeto causante estaba asegurado antes del 1 de enero de 1993, el porcentaje en orfandad relativa es del 20% de la base reguladora, siendo del 60% en una orfandad absoluta. Si estaba asegurado después de esta fecha los porcentajes son del 25% y el 50% respectivamente.

Las personas aseguradas antes del 1 de enero de 1993 pueden causar pensiones para progenitores y nietos (hasta los 18 años o los 24 si son estudiantes) que dependiesen económicamente de él, aplicándose a la base reguladora el porcentaje del 20%. Existe una indemnización para gastos funerarios generalmente para el supérstite o para quien pagó el funeral, prestación que no se extiende al fallecimiento de una persona a cargo. Si el finado no era pensionista, para la concesión de la prestación se exigen 100 días de

aseguramiento en el último año antes del fallecimiento o en los 15 últimos meses, sin tener en cuenta los tres últimos. Se trata de una prestación de pago único igual a 8 veces el salario de referencia de la categoría de seguro más alta. Por su parte, las coberturas de pensiones de supervivencia y auxilio por defunción también se generan en el régimen de contingencias profesionales.

Hungría

En el régimen de protección húngaro, si el fallecido ha cotizado el tiempo suficiente para ser titular de una pensión de jubilación o invalidez pueden concederse prestaciones de supervivencia a cónyuge, hijos o progenitores. Así, se puede otorgar una prestación de viudedad (*Özvegyinyugdíj*) al cónyuge de un beneficiario de una pensión de jubilación o de quien hubiera cotizado un período de tiempo determinado según su edad¹⁴². Como norma general se concede un subsidio de viudedad temporal por un año (o, si hay un menor de 18 meses con derecho a pensión de orfandad, hasta que cumpla esta edad o hasta el tercer cumpleaños de un huérfano discapacitado o con enfermedad a largo plazo). Este subsidio se convierte en una pensión permanente si el beneficiario ha superado la edad de jubilación o tiene capacidad de trabajo reducida o está a cargo de dos hijos del sujeto causante menores de edad (o uno con discapacidad). El subsidio de orfandad tiene como beneficiarios a los hijos del sujeto causante que conviviesen con él, aunque también se destina a hermanos, nietos, bisnietos y tataranietos que vivían en la misma casa que el fallecido si ningún miembro de la familia puede cubrir sus necesidades. A los padres se les destina un subsidio si dependían del sujeto causante y eran discapacitados o tenían, al menos, 65 años.

La prestación de viudedad es el 60% de la cuantía de la pensión del fallecido o la mitad si el beneficiario cuenta con pensión propia. La pensión de los progenitores se calcula de la misma manera y bajo las mismas condiciones según los ingresos propios. En ambos supuestos si hay más de un beneficiario la pensión se divide a partes iguales entre ellos, sin pensión mínima. La prestación de orfandad se paga hasta los 16 años o hasta que se completen los estudios a tiempo completo, con los 25 años como máximo. La cuantía es el 30% de la pensión del fallecido o el 60% en la orfandad absoluta o si el sobreviviente

¹⁴² Fallecimiento antes de los 22 años con 180 días de cotización desde la fecha de finalización de sus estudios o al menos dos años; 4 años de cotización si fallece entre los 22 y los 25 años; 6 años de cotización si fallece entre los 25 y los 30 años; 8 años de cotización si fallece entre los 30 y los 35 años; 10 años de cotización si fallece entre los 35 y los 45 años; al menos 15 años de cotización si fallece después de los 45 años. Quienes no alcancen estos requisitos pueden causar las prestaciones si alcanzan los del tramo inferior siempre que desde esa fecha y hasta la del fallecimiento no haya habido un vacío laboral de más de 30 días.

no tiene capacidad para trabajar. Desde 2012 la cuantía mínima de la pensión de orfandad es 24.250 forintos húngaros (79,81€).

En Hungría tradicionalmente los subsidios de gastos funerarios y la asunción de estos costes por los poderes públicos se han situado en el ámbito local. En la asignación para gastos funerarios el gobierno local puede conceder subsidios de esta índole a la persona que organiza el sepelio del difunto sin que esté obligado a ello o porque, si bien se conoce al familiar superviviente del difunto, éste no puede asumir los gastos funerarios sin menoscabo de sus propios medios de subsistencia o los de su familia. La cuantía de la prestación no puede ser inferior a la cuantía mínima de la pensión de vejez mensual por familia y, en caso de personas que vivan solas, no puede ser inferior al 150% de la cuantía indicada. El importe de los subsidios de gastos funerarios no puede ser inferior al 10% del funeral más barato, pero puede cubrir la totalidad de los costes cuando los gastos puedan comprometer los medios de subsistencia del solicitante o de su familia. En cuanto a los funerales a cuenta de los poderes públicos, el alcalde del municipio territorialmente competente del lugar de defunción debe velar para que los funerales sean financiados por los fondos públicos si no hay nadie obligado a ello o si la persona obligada a asumir los gastos está ilocalizable o no puede hacerse cargo de los mismos. El ayuntamiento del municipio en el que el difunto tuvo su último domicilio reembolsaría los gastos funerarios al del lugar donde se ha producido el fallecimiento.

Islandia

Puesto que el sistema de protección se basa principalmente en fondos de pensiones, en el régimen público de Islandia no existe una pensión de viudedad estrictamente como tal, aunque sí diversos beneficios sociales para el superviviente. Si los progenitores fallecen, los hijos menores de 18 años pueden ser beneficiarios de una pensión de orfandad –doble en la orfandad absoluta- siempre que todos residieran en el país en los tres últimos años. Dentro de la cobertura por fondos de pensiones, el cónyuge, los hijos menores de 18 años y, en ocasiones, los cuidadores, pueden acceder a una compensación por fallecimiento. Si el superviviente tiene como máximo 67 años puede acceder a prestaciones por muerte de hasta 6 meses o de hasta 12 meses si existe un hijo menor de 18 años en el hogar, que pueden extenderse hasta los 36 meses ante una situación socioeconómica problemática. En las contingencias profesionales el cónyuge puede acceder a beneficios por fallecimiento por un máximo de 8 años y también se conceden prestaciones a los hijos menores de 18 años.

Irlanda

En el régimen de protección irlandés se concede una pensión de viudedad al cónyuge o equivalente (mientras no esté conviviendo con otra pareja). La pensión puede ser contributiva (*Widow's, Widower's or Surviving Civil Partner's –contributory- Pension*), que requiere haber realizado 260 contribuciones (antes de 2014 se exigían 156) o haber cumplido 66 años y una media de 39 contribuciones en los 3 ó 5 años anteriores a la muerte del sujeto causante o de que éste alcanzase los 66 años; o, para alcanzar una pensión mínima, una media anual de al menos 24 contribuciones desde el primer año en el seguro hasta el año del fallecimiento o de alcance de la pensión, que se elevarán a 48 contribuciones para una pensión completa. La pensión de viudedad contributiva es incompatible con la pensión estatal contributiva para mayores de 65 años, así como con determinadas prestaciones, pero no con otros ingresos, otorgándose las siguientes cuantías semanales (año 2015) dependiendo de la edad del beneficiario: 193,50€ con edad inferior a 66 años, 230,30€ con edad entre 66 y 79 años y 240,30€ para edades superiores. Se puede obtener una prestación por hijo a cargo de 29,80€ semanales y también por adulto a cargo, aquí con distintas cuantías. Se concede igualmente una cuantía única a supérstites con hijos dependientes (*Widowed or Surviving Civil Partner Grant*) de 6.000€, que también alcanza a beneficiarios de la pensión de jubilación estatal no contributiva.

Para la obtención de una pensión de viudedad no contributiva se requiere residencia, no tener hijos a cargo y carencia de medios personales; si existen hijos a cargo, se otorga una prestación por familia monoparental (*One parent Family Payment*) en términos similares a la pensión no contributiva incorporando los beneficios semanales por hijo a cargo. La pensión no contributiva es de 188€ por semana (año 2015) para personas con menos de 66 años (al cumplir esta edad se pasa a la pensión estatal de jubilación no contributiva), existiendo beneficios extraordinarios según las características del beneficiario.

Por su parte existen prestaciones (*Guardian's Payment*) para el cuidado de huérfanos. En el segmento contributivo se requieren 26 semanas de contribución al sistema (por el progenitor, padrastros o el propio huérfano) y el pago de la prestación es hasta los 18 años o los 22 si el beneficiario está estudiando. El importe es de 161€ (año 2015) por semana. Con respecto a una prestación no contributiva, su importe depende de los medios del huérfano.

En cuanto al auxilio por defunción (*Bereavement Grant*), basado en contribuciones (no en quién sufraga los costes) y orientado al fallecimiento del pensionista o asegurado y determinados familiares, ha finalizado su cobertura para fallecimientos posteriores a 1 de enero de 2014, aunque se mantiene una protección extraordinaria (*Funeral Costs under exceptional Needs Payments*) sujeta a comprobación de medios. En el régimen de contingencias profesionales, junto a un modelo de protección similar al indicado aunque con prestaciones más elevadas (218,50€, 234,70€ y 244,70€ para la viudedad según la edad), se añade un auxilio por defunción (*Funeral Grant*) de 850€ (2015) y una pensión por custodia u orfandad (*Guardian's/Orphan's pension*) por importe de 164,80€ semanales.

Italia

En este sistema de protección se encuentran distintas coberturas según el siguiente orden de prioridad:

- El cónyuge sobreviviente, incluso separado, siempre que reciba el pago de la pensión alimenticia en virtud de una orden judicial.
- El cónyuge divorciado si tiene derecho a una pensión de divorcio.
- Los hijos menores de edad, discapacitados o estudiantes, todos ellos en el momento de la muerte.
- Los nietos menores de edad a cargo de sus abuelos.
- O, en ausencia de cónyuge, hijos y nietos, los padres de al menos 65 años de edad que no tengan derecho a una pensión de jubilación y fuesen dependientes del fallecido, así como los hermanos solteros discapacitados sin derecho a ninguna pensión que estaban a cargo del trabajador o pensionista.

con las siguientes coberturas fundamentales:

- 1) La pensión de supervivencia, que ante unas nuevas nupcias se sustituye por una suma única.
- 2) La pensión indirecta a la que tiene derecho la familia superviviente si el trabajador fallecido ha completado los siguientes requisitos mínimos para la concesión de una invalidez ordinaria o pensión de invalidez: demostrar un periodo de cotización de al menos 15 años (780 semanas) durante su vida laboral; o demostrar un periodo de cotización de al menos 5 años (260 semanas), o por lo menos 3 años (156 semanas) durante los 5 años anteriores a la fecha del fallecimiento.

- 3) La renta del INAIL (*Istituto Nazionale per L'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro*), beneficio de carácter financiero ante un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. No se requiere ninguna condición para el cónyuge superviviente, que puede percibir dicha pensión hasta la muerte o un nuevo matrimonio (en el segundo supuesto, se otorga una cantidad equivalente a 3 años de derecho de pensión). Entran dentro de esta alternativa los hijos menores de 18 años o de 21 años si están estudiando en el grado de secundaria, son dependientes y no tienen ingresos; o hasta los 26 años si en el caso anterior la educación es de grado superior. No existen límites de edad para los adultos que no puedan trabajar ni para las personas con discapacidad.

La cantidad de la pensión de supervivencia y el beneficio indirecto se calculan en función del importe de la pensión a la que el fallecido hubiera tenido derecho (o la pensión que se le pagaba en la fecha de la muerte) de acuerdo con los siguientes porcentajes: 60% para un supérstite, 70% para un menor, 80% para el cónyuge y los hijos a cargo (o dos hijos sin un cónyuge), el 100% para el cónyuge y dos hijos o más personas dependientes (o tres o más hijos y sin cónyuge) y, finalmente, el 15% para cualquier otro miembro de la familia que tuviese derecho. La cuantía de la pensión para los supervivientes se reduce si se perciben otros ingresos. Desde el 1 de enero de 2012 las pensiones concedidas a los supérstites se sujetan a una reducción en los siguientes supuestos: si el matrimonio se contrajo con más de 70 años, si existe una diferencia de edad entre los cónyuges de más de 20 años o si la duración del matrimonio fue de menos de 10 años, excepto cuando haya hijos menores de edad, estudiantes o discapacitados.

La anualidad del INAIL se calcula sobre la base de los ingresos anuales, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 50% para el supérstite, sin ninguna condición, hasta la muerte o el nuevo matrimonio (ante este último suceso se concede una cantidad equivalente a 3 años de pensión); 20% para cada uno de los hijos y 40% para cada niño huérfano de ambos padres; si no existiese cónyuge o hijos y siempre que dependiesen del fallecido, se concedería el 20% para cada uno de los padres, hermanos que vivían bajo el mismo techo y otras personas a cargo.

Letonia

En Letonia se concede la pensión de supervivencia a la muerte de un progenitor o persona de la familia que era el sustento de la misma. La pensión se dirige a los miembros de la familia sin capacidad para trabajar: hijos –a cargo o no–, hermanos o nietos menores de 18 años o discapacitados con anterioridad a esta edad; en el caso de

hermanos o nietos es necesario que sus padres no tengan capacidad para el trabajo. La pensión se extiende hasta los 24 años si se estudia a tiempo completo y su importe depende del importe estimado de la pensión de jubilación del sujeto causante, al que se aplica el 50% si existe sólo un menor, el 75% para dos menores y el 90% en el caso de tres menores o más, con el límite inferior por cada menor del 65% de la pensión nacional de seguridad social: 41,62€ mensuales o 69,37€ para personas con discapacidad. El importe total de la pensión de supervivencia no puede ser inferior a 64,03€ por mes y 106,72€ mensuales para un beneficiario con discapacidad. Ante una orfandad absoluta la pensión de supervivencia tiene en cuenta el importe de las pensiones de jubilación de ambos padres. Si el sujeto causante no estaba asegurado los hijos reciben una cuantía de la seguridad social y, si el beneficio es para 3 o más hijos, la prestación para cada uno no puede ser inferior a la mitad de la prestación de la seguridad social nacional (32,02€ al mes). Dentro del sistema de protección también existe una asignación para el cónyuge de la persona fallecida, que se ofrece a personas jubiladas o cónyuges de jubilados (ambos pensionistas) mediante un pago único del doble de la pensión del fallecido.

A su vez, se puede solicitar un subsidio de gastos funerarios orientado a cubrir los gastos originados por el fallecimiento de un miembro de la familia que estaba a cargo del asegurado o por la muerte de éste. Ante la muerte del asegurado se paga el doble del promedio de sus cotizaciones mensuales de referencia; en caso de fallecimiento de un beneficiario de una pensión de jubilación o indemnización por la pérdida de la capacidad de trabajo se conceden dos meses de pensión o compensación; si ocurre la muerte de un familiar o dependiente se concede tres veces el beneficio de seguridad social nacional mensual (normalmente 192,09€; para las personas con discapacidad desde la infancia 320,16€); en caso de fallecimiento del beneficiario de una prestación de seguridad social nacional, se otorga el doble de ésta (en general 128,06€, para las personas con discapacidad desde la infancia 213,44€). Por último, en contingencias profesionales existe la figura de la prestación por la pérdida del sostén de la familia, que se basa en una indemnización según la contribución media realizada por el sujeto causante y el número de personas dependientes.

Liechtenstein

Los supérstites, cónyuges divorciados e hijos a cargo tienen derecho a una prestación dentro del primer pilar de protección siempre que el sujeto causante haya cotizado, al menos, un año completo; si muere antes de la edad de jubilación, las prestaciones se encuadran en el régimen del segundo pilar –protección empresarial-. El cónyuge supérstite puede obtener una pensión (bajo los dos pilares) si tiene hijos a cargo o es

mayor de 45 años, siempre que el matrimonio haya durado al menos 5 años; en otro caso se puede recibir un pago único equivalente a 3 años de pensión. Los hijos menores de 18 años, o de 25 años si están estudiando, tienen derecho a una pensión de orfandad. En el primer pilar las personas casadas que tengan pensión propia pueden ver aumentada la cantidad de ésta si fallece el cónyuge.

La pensión de viudedad es del 80% de la base reguladora (pensión hipotética del sujeto causante), aunque si la muerte sucede antes de los 45 años se tiene en cuenta una mejora. Los huérfanos tienen derecho a una pensión de orfandad del 40% de la base reguladora y, si la orfandad es absoluta, se reciben dos pensiones, una de cada progenitor. En el segundo pilar se concede una pensión de viudedad vitalicia anual equivalente al 18% del salario que contribuye a la pensión, mientras que la pensión anual de orfandad es igual al 6 % del salario. Si fallece el titular de una pensión de viudedad, de un pensionista de jubilación o discapacidad el porcentaje aplicable es del 60% y la pensión de orfandad alcanza hasta el 20% de la última pensión pagada al sujeto causante. En Liechtenstein el auxilio por defunción se vincula al seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cubriéndose los gastos de transporte del cadáver al lugar de inhumación y los gastos del acto.

Lituania

Las prestaciones de viudedad y orfandad se basan en un seguro social nacional, otorgándose siempre que el sujeto causante fuese beneficiario de una pensión de jubilación o invalidez o tuviese derecho a ellas, hubiese cotizado el tiempo mínimo y residiese en Lituania. Si el beneficiario es pensionista de jubilación o invalidez, se considerará la prestación de muerte y supervivencia como un montante adicional. Para ser beneficiario de viudedad se le exige al cónyuge haber alcanzado la edad de jubilación; incapacidad reconocida; o si no tuvo hijos en común con el difunto, que el matrimonio haya sido de, al menos, 1 año; un nuevo matrimonio es causa de extinción de la pensión. Por su parte, para ser beneficiario de orfandad se requiere ser menor de 18 años o tener hasta 24 años si se estudia a tiempo completo, o ser menor incapacitado antes de los 18 años.

La pensión de viudedad es una cuantía básica fijada por el gobierno (en 2015 no debe ser inferior a 70 litas lituanas, aproximadamente 20€ al mes). La pensión de orfandad se calcula aplicando el 50% a la base reguladora (la pensión por incapacidad laboral que el fallecido hubiera recibido reduciéndose su capacidad de trabajo en el intervalo [60%-70%] si no había alcanzado la edad de jubilación o la pensión de jubilación). Si se

produce la pérdida de ambos padres se concede una pensión de orfandad por cada progenitor fallecido. Si varios descendientes tienen derecho a pensión, ésta se distribuye a partes iguales sin que el conjunto sobrepase el 100% de la cuantía de la pensión del difunto. El auxilio por defunción es una cuantía única aproximada de 304€ (año 2015).

En cuanto a las contingencias profesionales, se paga una prestación por fallecimiento a los familiares del difunto por un importe de 100 veces la renta nacional para el año en curso. Las prestaciones periódicas se pagan a dichos familiares y se calculan sobre la base de una fórmula especial dependiendo de los ingresos asegurados y del importe nacional asegurado establecido por el gobierno. En el régimen de accidentes de trabajo la familia del asegurado fallecido obtiene una prestación igual al ingreso aplicable al mes del óbito, dividido entre el número de beneficiarios. También hay una prestación periódica para personas que no pueden trabajar y dependían del fallecido; aquí se cubre a progenitores, nietos, hermanas y hermanos hasta una edad determinada.

Luxemburgo

En Luxemburgo pueden ser beneficiarios de una pensión por muerte y supervivencia: el cónyuge superviviente, el cónyuge divorciado, la pareja de hecho, los huérfanos y las personas hasta segundo grado de consanguineidad que convivían con el sujeto causante. La pensión puede ser compatible con una actividad profesional, prestaciones personales, renta de sustitución o incluso con otra pensión, dentro de ciertos límites. No se exigen períodos de contribución si el sujeto causante es pensionista (en otro supuesto se requiere justificar al menos 12 meses continuos de seguro obligatorio durante los 3 años anteriores a su muerte) o en contingencias profesionales.

Como norma general, el cónyuge puede ser beneficiario si el matrimonio tenía una duración de 1 año antes del fallecimiento o en el momento del matrimonio el causante no era pensionista de invalidez o jubilación, excepto cuando la muerte se produjo como consecuencia de un accidente ocurrido después del matrimonio o cuando nace o se concibe un hijo durante éste¹⁴³. Para ser considerado en los mismos términos que el cónyuge superviviente el miembro de la familia debe haber convivido con el asegurado fallecido o beneficiario de la pensión durante al menos 5 años antes de su muerte, haber formado parte del hogar, tener ciertos requisitos de contribución en este período y ser mayor de 40 años de edad en el momento del fallecimiento. Los hijos legítimos tienen derecho a una pensión de orfandad tras la muerte del padre o de la madre, siempre y

¹⁴³ Al cónyuge divorciado se le exigen otros requisitos como la no existencia de nuevo matrimonio, distribuyéndose la pensión entre beneficiarios según la duración de cada matrimonio.

cuando no estén casados o no hayan formado una pareja de hecho (a menos que se sea estudiante). La pensión se concede hasta la edad de 18 años o, en el caso de que el beneficiario estudie, hasta los 27 años.

La pensión de supervivencia equivale a una parte de la pensión personal del difunto o de la de invalidez a la que tuviera derecho. Se calcula un importe mensual bruto actualizado que se divide en cuantías por conceptos sobre las que se aplica un factor. Se otorgan importes estándar según la duración del período de seguro (factor 1 para viudedad y $\frac{1}{3}$ para orfandad), aumentos proporcionales en base a los ingresos realizados durante el período de seguro ($\frac{3}{4}$ para viudedad y $\frac{1}{4}$ para orfandad), aumentos fijos o proporcionales especiales si se utiliza la pensión de incapacidad por fallecido en activo ($1\frac{3}{4}$ para viudedad y $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$ para orfandad) y un suplemento hasta la pensión mínima. Por ejemplo, según un trabajador que fallece en situación de activo, se calcula su teórica pensión de invalidez mensual –actualizada- y se divide en los cuatro grupos (estándar, mejora proporcional, mejora por invalidez, mejora por invalidez proporcional) y, si se genera una pensión de orfandad, ésta será la suma de aplicar a cada grupo los siguientes factores: $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$. Por orfandad absoluta, la pensión es el doble de la cantidad determinada. Si el importe de la pensión de viudedad y la renta del beneficiario están por encima de una cantidad determinada, se reduce la prestación percibida. De igual modo, el total de las pensiones de todos los supervivientes no puede superar el 100% de la pensión (o presunta pensión) del difunto y, además, la cuantía no debe ser mayor que el promedio de los 5 salarios más altos del fallecido durante el período de afiliación; las pensiones se reducen proporcionalmente si esto ocurre. La pensión de orfandad no podrá ser inferior a 467,12€ y la pensión del supérstite no puede ser inferior a 1.718,86€ si el asegurado tenía un registro de cotizaciones completo de 40 años.

En Luxemburgo se concede una cuantía como auxilio de defunción para cubrir los costes del funeral: 959,18€ (año 2015), pagándose los costes a quien los haya satisfecho a cargo de este importe y el posible excedente se dirigiría, por este orden, a cónyuge, hijos, padres o hermanos siempre que hayan convivido con el finado. El fallecimiento de menores de 6 años hace que la cuantía se reduzca a la mitad, concediéndose una quinta parte ante el suceso de menores que nacen muertos.

En las contingencias profesionales se conceden prestaciones periódicas de supervivencia. Si la muerte se produce después de los 55 años, la pensión de supervivencia sería el resultado de multiplicar 1,85% por los ingresos profesionales anuales por el número de años hasta alcanzar 65 años; si el fallecimiento se produce antes de los 55 años, el período de cálculo es 10 años. La pensión de viudedad es tres cuartas partes de esta

cantidad y la de orfandad el cuarto restante. Se asigna un subsidio por daños morales a cónyuges o parejas, hijos, progenitores o a quienes tuvieran una convivencia de al menos tres años con el finado, mediante un pago de hasta 4.400€ ajustados al nivel de vida (año 2015) por superviviente según los vínculos con el sujeto causante y la existencia de derecho a pensión.

Malta

Respecto a las prestaciones por muerte y supervivencia, en Malta la condición para obtener una prestación es que debe haber un mínimo de 156 contribuciones pagadas por el sujeto causante y un promedio de al menos 20 contribuciones anuales en el marco del régimen a tanto alzado (pensión de viudedad) o no menos de 15 contribuciones por año bajo el “modelo de 2/3” (de pensiones para supérstites). Si el promedio de 50 contribuciones pagadas o acreditadas es de 50, se otorga la cuantía más alta de la pensión (*Pension for Surviving Partners*): 190,63€ semanales que equivalen a 5/9 de los ingresos de jubilación del cónyuge fallecido. Las cuantías para los supérstites oscilan entre 94,71€ y 118,30€ por semana de acuerdo con el promedio de contribuciones pagadas y de si hay derecho a una prestación por servicios a cargo del empleador. Si el beneficiario vuelve a casarse se concede un importe a tanto alzado. En cuanto a las contingencias profesionales, la particularidad es que se entregan las mismas cuantías que si se hubiera pagado el máximo de contribuciones al sistema.

Noruega

En Noruega el cónyuge (o asimilado) menor de 67 años puede obtener una pensión si está asegurado y el sujeto causante lo estaba al menos tres años antes de su muerte (para el auxilio por defunción únicamente es necesario el aseguramiento en el momento del fallecimiento). Si el difunto estaba recibiendo una pensión complementaria o si el sujeto causante o el superviviente han sido residentes en Noruega durante al menos 20 años se obvia la condición de que este último deba estar asegurado. La pensión de supervivencia se otorga a un supérstite si el matrimonio duró al menos cinco años o el superviviente ha tenido previamente hijos con el fallecido o está cuidando a los hijos de éste, mientras que un cónyuge divorciado tiene derecho a prestaciones de acuerdo con las mismas normas siempre que el fallecimiento ocurra dentro de los cinco años después del divorcio y el matrimonio haya durado por lo menos 25 años (o 15 años si han nacido hijos de la unión); las prestaciones terminan cuando el beneficiario se vuelve a casar. Bajo similares requisitos para el sujeto causante, un menor de 18 años asegurado percibirá la pensión de orfandad (*barnepensjon*) y los menores de 20 años recibirían la

pensión si están estudiando y ambos padres han fallecido; en contingencias profesionales los beneficiarios son los menores de 21 años.

La pensión de supervivencia consiste en una pensión básica (según el número de años asegurado entre los 16 y los 66 años) y una pensión complementaria (según un sistema de puntos basado en ingresos y años laborales de cómputo de ingresos). La pensión complementaria es el 55% de los derechos del finado en cuanto a vejez o invalidez suplementaria. Si el fallecido, debido a la duración del período de seguro, ha tenido una pensión básica reducida, la pensión básica de supervivencia se reduce proporcionalmente. Si el supérstite tiene o puede esperarse que tenga un ingreso anual superior al 50% del importe de base, la pensión será igual a la diferencia entre la pensión completa y el 40% del exceso de ingresos. Se otorga una pensión transitoria al supérstite que no tenga derecho a la pensión de supervivientes y que sea temporalmente incapaz de sostenerse mediante el trabajo; el beneficio de transición se determina de acuerdo a las mismas reglas que la pensión de supervivencia. Por otra parte, un cónyuge superviviente también puede tener derecho a una prestación por cuidado de niños. Esta prestación, los beneficios educativos y las donaciones para cubrir los gastos de mudanza podrán concederse incluso si el fallecido no cumplió con el requisito de los 3 años de seguro inmediatamente anteriores a la contingencia, a condición de que el superviviente esté asegurado y tenga derecho a prestaciones.

Si ha fallecido uno de los padres la pensión de orfandad para el primer hijo es igual al 40% del importe de base y el 25% del importe de base para el resto de hijos. Si ambos padres han fallecido, el primer hijo recibe una pensión igual a la pensión de viudedad que se habría pagado al supérstite que tuviera derecho a la pensión más alta, la pensión para el segundo hijo es igual al 40% del importe de base y el 25% del importe de base para el resto. Cuando hay dos o más hijos, se suman las pensiones y se dividen en partes iguales entre los hijos. Por último, como auxilio por defunción se concede una suma máxima de 22.083 coronas noruegas (año 2014, 2.534,64€) para cubrir los gastos relacionados con los funerales; excepto si el fallecido era menor de 18 años de edad este beneficio requiere prueba de ingresos y la cuantía se adapta a los mismos.

Países Bajos

En el sistema básico de los Países Bajos se puede tener derecho a una prestación de supervivencia (o subsidio ANW) y los menores de edad también pueden recibir una indemnización por muerte de sus padres. Se tiene derecho a una prestación ANW si se tiene un hijo soltero menor de 18 años, una discapacidad superior al 45% o se ha nacido

antes del 1 de enero de 1950, aunque no se concede si el beneficiario se vuelve a casar o vive en pareja de hecho o ha alcanzado la edad para la pensión básica AOW (jubilación). Los supervivientes también reciben un bono de vacaciones por valor del 7% de la asignación, así como un subsidio por defunción (*Overlijdensuitkering*) consistente en una mensualidad bruta de la pensión AOW y que se abona a la pareja superviviente, en su defecto a los hijos menores de 18 años o, en su defecto, a la persona que vivía con el pensionista hasta el día en que falleció.

Existen diferentes beneficios ANW: una prestación de supervivencia para las parejas y ex-parejas que reciben la pensión alimenticia o una provisión para los huérfanos menores de 16 años cuyos padres han fallecido. El importe de la prestación de supervivencia depende de los ingresos del superviviente y equivale a un máximo del 90% del salario mínimo. El importe de la prestación de los huérfanos depende de su edad y también está vinculado al salario mínimo. Los huérfanos de entre 16 y 21 años pueden recibir, en algunos supuestos, una asignación adicional: por ejemplo, si están en la escuela a tiempo completo o por el cuidado de un hermano menor. Por otra parte, los trabajadores pueden constituir en su régimen de pensión complementaria una pensión adicional de supervivencia para su pareja.

Polonia

El régimen de protección polaco concede una pensión de supervivencia a los familiares del difunto que en el momento de la muerte tenía derecho a una pensión de jubilación o incapacidad o cumplía las condiciones para ello o percibía un subsidio o beneficios por jubilación anticipada. Bajo ciertas condiciones son posibles beneficiarios de una pensión por supervivencia: los hijos, sobrinas y sobrinos, hermanos y otros menores hasta que alcancen la mayoría de edad, la viuda o el viudo, los cónyuges divorciados si tuvieran el derecho a la pensión alimenticia de los fallecidos, los padres del difunto si cumplen las condiciones establecidas para las viudas (o dependían del fallecido). Los hijos no pierden el derecho si se vuelven a casar, pero sí los supérstites.

Al evaluar el derecho a las pensiones se acepta que la persona fallecida era completamente incapaz de trabajar y el cálculo se basa en los siguientes criterios: para un beneficiario, el 85% de los beneficios que el fallecido habría recibido; para dos personas, el 90%; para tres o más personas, el 95%. Se concede una pensión familiar conjunta que, de ser necesario, se divide en partes iguales entre los que tienen derecho. El importe base sobre el que se calcula la pensión de supervivencia no puede ser inferior a la pensión mínima: 844,45 zlotys polacos por mes (1 de marzo de 2014; 204,61€). Por

otra parte, se concede un pago único de 4.000 zlotys polacos (969,18€) a quien haya satisfecho los gastos funerarios en el entorno familiar y hasta esta cantidad en caso de satisfacción por otras entidades: hogar de bienestar social, municipio, distrito, etc., concediéndose ante la muerte del asegurado, de una persona que recibe una pensión o renta o un miembro de la familia.

Portugal

En Portugal la pensión de supervivencia (*pensão de sobrevivencia*) es una prestación económica mensual que se paga a los siguientes miembros de la familia del sujeto causante: cónyuge, ex-cónyuge y pareja de hecho; descendientes o parientes en línea ascendente cuando no hay otros miembros de la familia con derecho, aunque si no hay beneficiarios la prestación puede ser pagada a otros familiares, suegros o familiar asimilado hasta el tercer grado.

La pensión de supervivencia se otorga a condición de que se hayan realizado ingresos en el régimen general de la Seguridad Social por un período de, al menos, 36 meses (73 meses en el plan de seguridad social voluntaria) y se calcula según determinados porcentajes que se multiplican por la pensión de jubilación o invalidez que el beneficiario recibía o iba a recibir:

- Esposa y asimilados: El 60% para un beneficiario y el 70% si hay más de uno. El pago finaliza si acaece otra unión.
- Descendientes: el 20% para un beneficiario; el 30% si hay 2 beneficiarios; el 40% si hay tres o más (estos porcentajes se duplican si no hay beneficiario de viudedad). Se concede generalmente hasta la mayoría de edad o emancipación.
- Otros beneficiarios: 30% si hay un beneficiario; 50% si hay dos beneficiarios; 80% si hay al menos tres beneficiarios.

Las denominadas pensiones de viudedad y de orfandad son pensiones no contributivas. La pensión de viudedad (*pensão de viuvez*) se dirige a ciudadanos portugueses o equivalentes que residan en territorio portugués, no tengan derecho a otra pensión y no tengan ingresos mensuales brutos de más de 167,69€ (40% del Índice de Referencia de Apoyo Social '*Indexante dos Apoios Sociais, IAS*': año 2015, 419,22€). La pensión de viudedad es de 120,92€ (año 2015, el 60% de la pensión social: 201,53€). Se paga una prestación de orfandad (*pensão de orfandade*) hasta la mayoría de edad o la emancipación a los menores no emancipados que tengan nacionalidad portuguesa y

residan en su territorio, huérfanos de personas que no están cubiertas por un régimen de seguridad social, no estén en una profesión sujeta al seguro social obligatorio, no tengan los ingresos brutos citados para la viudedad y su ingreso familiar no sea superior a 628,83€ (1,5 veces el IAS); o los ingresos familiares por persona son de 125,77€ o menos (30% del IAS) y existe situación de vulnerabilidad o de problemática social. El número de huérfanos y el porcentaje de la pensión social, en euros (año 2015), es el siguiente:

<u>Existe cónyuge o ex cónyuge</u>		<u>No existe cónyuge o ex cónyuge</u>
1	40,31€ (20%)	80,61€ (40%)
2	60,46€ (30%)	120,92€ (60%)
3 o más	80,61€ (40%)	161,22€ (80%)

El subsidio de defunción (*subsídio por morte*) se paga a los miembros de la familia del sujeto causante residente sin períodos mínimos de ingresos en el régimen básico de seguridad social o con 36 meses de cotización en el régimen de seguridad social voluntaria. En 2015 se paga una cantidad a tanto alzado fijada en 1.257,66€ (correspondiente a 3 veces el IAS). Cuando no hay nadie con derecho a la ayuda por defunción, los gastos funerarios son reembolsados a la persona que incurre en los costes, hasta un máximo de la cantidad citada. El subsidio para gastos funerarios (*subsídio de funeral*) compensa los pagados por el demandante por el funeral de un miembro de su familia o de cualquier otra persona siempre que el solicitante resida en Portugal y bajo demostración de haber satisfecho los importes. El importe en el año 2015 es de 213,86€.

En cuanto a las contingencias profesionales, se concede una pensión mensual por fallecimiento a los familiares para compensar el lucro cesante, un subsidio de muerte o un auxilio por defunción (*Subsídio por Despesas de Funeral*). El subsidio anual de fallecimiento es el 110% del IAS: 5.533,68€ (año 2015); el auxilio mensual por defunción es de hasta cuatro veces el 110% del IAS: 1.844,56€ (año 2015). En el caso de la pensión de muerte el porcentaje aplicable depende de la naturaleza del beneficiario y de su situación: 30% para cónyuges y ex-cónyuges (el 40% si existe una discapacidad superior al 75%), el 20% de la remuneración de referencia para un hijo, el 40% para dos y el 50% para tres o más (con el 40%, 80% y 80% para la orfandad absoluta) y el 10% para el resto de beneficiarios, salvo que no hubiese de los anteriores y se concede entonces el 15% o el 20% si existe discapacidad.

Reino Unido

Las prestaciones de duelo (*Bereavement Payment*) se abonan tras la muerte de un cónyuge o pareja de hecho si aquélla ocurre antes de la edad de jubilación y se ha cumplido con los requisitos de pagos a la Seguridad Social, exigencia que desaparece si la muerte es por causa laboral. Estas prestaciones no se conceden a ex-cónyuges divorciados o personas que hayan disuelto la pareja de hecho y su importe es de 2.000 libras (año 2015, 2.758,62€). El subsidio por duelo (*Bereavement Allowance*, anteriormente conocido como *Widow's Pension*) puede concederse al cónyuge superviviente o pareja de edades comprendidas entre los 45 años y la edad de jubilación estatal. Junto a los requisitos del sujeto causante y del beneficiario es necesario que ninguno de ellos fuesen beneficiarios de una pensión estatal. La cuantía depende de las contribuciones al sistema realizadas y la edad a la que fallece el sujeto causante (por ejemplo: para 45 años, un máximo semanal de 33,36 libras (46,01€) y para 55 años un máximo de 111,20 libras semanales (153,38€)).

En el Reino Unido se puede conceder una prestación de supervivencia (*Widowed Parent's Allowance*) si se tiene un menor a su cargo en el hogar o si se está embarazada, continuándose la cobertura hasta que se deje de recibir la prestación por hijo. El sistema de cuantías es similar al del subsidio de duelo. En el entorno de las prestaciones familiares se puede percibir una prestación (*Child Benefit*) por hijo si se es responsable de un niño menor de 16 años o de 20 años si estudia, o se puede tener derecho a un subsidio de custodia si el niño que se está cuidando ha perdido a uno de sus padres o a ambos (*Guardian's Allowance*). El importe general en 2015 es de 16,55 libras (22,83€) semanales por menor.

República Checa

Las prestaciones de supervivencia se dirigen a los adultos cuyo cónyuge ha fallecido y a los hijos dependientes que han perdido a alguno de sus progenitores. Se otorga una pensión al supérstite si el sujeto causante era pensionista, falleció por accidente de trabajo o se encontraba en activo con el suficiente período de contribuciones dependiendo de su fecha de nacimiento. La cuantía base es de 2.340 coronas checas (85,16€) sobre la que se obtiene además un porcentaje del 50% de la pensión de jubilación o invalidez correspondiente al finado. La duración general es de 1 año, extensible si se tiene discapacidad en tercer grado, se cuida de un hijo dependiente o de un hijo discapacitado en segundo grado que requiera el cuidado de otra persona, se cuida de padres o progenitores del finado dependientes que necesitan el cuidado de una

tercera persona o se ha alcanzado la edad de jubilación o una edad cuatro años menor que la edad de jubilación de los hombres ante igual fecha de nacimiento. La pensión de orfandad se compone de la misma base y de un porcentaje del 40% de la pensión de jubilación o invalidez del sujeto causante, pagándose hasta los 26 años si los beneficiarios dependían del él. Se puede obtener pensión de ambos progenitores y los beneficiarios dejan de serlo cuando son adoptados o dejan de ser dependientes. En contingencias profesionales los beneficiarios pueden obtener una compensación por costes asociados a tratamientos, reembolsos de gastos, el pago de una cuantía única o una compensación de daños o de gastos de funeral en "cuantía razonable" (*sic.*).

Rumanía

En el primer pilar de protección (sistema público) se conceden pensiones de supervivencia (*pensie de urmas*) si el sujeto causante era un jubilado o tenía derecho a una pensión en ese sistema. Para la concesión el supérstite deberá haber alcanzado la edad de jubilación y haber estado casado con el fallecido durante al menos diez años (si estuvo casado menos de 15 años se aplican penalizaciones al importe), aunque se exige únicamente un año y no se tiene en cuenta la edad si el beneficiario se encuentra afectado por una invalidez de grado I o II. También se tiene derecho si el beneficiario tiene un límite de renta inferior al 35% de los ingresos brutos medios previstos (año 2014, 804 leus rumanos, 181,38€) y está criando a un hijo de hasta 7 años de edad. Si la muerte se debió a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el supérstite tiene derecho a una pensión de supervivencia si sus ingresos son inferiores a un 35% de los ingresos brutos medios previstos. Por su parte, el hijo del sujeto causante accede a una pensión de supervivencia hasta los 16 años de edad (o la edad máxima de graduación pero no después de 26 años de edad) o si está afectado por una discapacidad en las categorías citadas.

El importe de la pensión de supervivencia se calcula y se paga mensualmente como un porcentaje de la pensión de vejez percibida por el causante (o a percibir) o, según el caso, de la pensión de invalidez de grado I. El porcentaje varía según el número de derechohabientes: 50% para un superviviente, 75% para dos y el 100% para tres o más, si bien en la orfandad absoluta se calculan las pensiones de cada progenitor de forma independiente y luego se suman. Desde el 1 de enero de 2013 la pensión ajusta anualmente el valor del punto de pensión según el 100% de la tasa de inflación más el 50% del crecimiento real de los ingresos brutos promedio del año anterior. El 1 de julio de 2014 el valor del punto era de 790,7 leus (178,38€). En el segundo pilar, basado en fondos de pensiones de administración privada, también se conceden prestaciones y el

beneficiario puede acumularlas en su propia cuenta individual. En el supuesto de pensionistas o asegurados, quien haya pagado los gastos de sepelio tiene derecho a un subsidio por gastos funerarios en el primer pilar (*Ajutorul de deces*); en otro caso, se paga a un familiar asegurado o pensionista de entre los reconocidos por la ley. El asegurado tiene derecho a un subsidio de sepelio ante el fallecimiento de un familiar dependiente que no esté asegurado. La cuantía de la prestación se establece anualmente por el Parlamento de Rumanía; en 2014, 2.298 leus (518,42€) para sujetos causantes asegurados o pensionistas, 1.149 leus (259,21€) en otras situaciones.

Suecia

En el régimen sueco se puede reconocer una pensión de viudedad y una pensión de orfandad a los niños que han perdido a uno o a ambos padres. Los menores de 65 años pueden beneficiarse de una pensión compensatoria, mientras que las mujeres pueden obtener la pensión de viudedad si el matrimonio tuvo lugar antes de 1990. También se puede acceder a un beneficio bajo el plan complementario de pensiones de empresa o seguros privados de los fallecidos. Si la muerte fue causada por un accidente de trabajo, se puede tener derecho al pago de una pensión y a una participación en los gastos del funeral.

La pensión de orfandad se concede a los menores de 18 años (o de 20 años bajo ciertas condiciones). Si no se percibe esta pensión o su cuantía es insuficiente, se tiene derecho a una pensión de supervivencia para hijos. La pensión compensatoria para el supérstite requiere una vida en común de, al menos, 5 años y tener un hijo en custodia. Se puede percibir durante 12 meses y, si se tienen hijos a cargo mayores de 12 años y menores de 18 años, se puede extender por otros 12 meses. El pago se extinguirá cuando el más joven de los hijos llegue la edad de 12 años y el derecho expira cuando el beneficiario llegue a la edad de 65 años. La pensión de viudedad fue reemplazada el 1 de enero de 1990, pero si el beneficiario es una mujer casada antes de esta fecha puede concederse dependiendo de si el año de nacimiento es anterior o no a 1945; si es posterior puede pagarse una parte siguiendo la norma de que primero se paga la pensión compensatoria a menores de 65 años. Si la cuantía de la pensión de viudedad o de compensación es nula o muy baja, puede otorgarse una pensión garantizada hasta la edad de 65 años. La pensión de orfandad es una parte de la pensión del fallecido, que depende de la edad del huérfano y de la existencia de otros beneficiarios; existe una asignación por hijo superviviente de 1.480 coronas suecas (año 2014, 159,13€) por mes para el supuesto de cuantías pequeñas. La pensión de compensación es del 55% de la pensión del fallecido; la pensión garantizada es 7.881 coronas suecas (año 2014, 847,36€) por mes y se

concede si la cuantía anterior se considera baja. La pensión de viudedad es el 40% de la pensión complementaria del extinto sistema ATP si los hijos no perciben pensión de orfandad; en otro supuesto es el 35% y, si se percibe pensión de jubilación, el importe de la prestación de viudedad se reduce.

Por otra parte, si el fallecido estaba recibiendo una pensión profesional o privada se puede tener derecho a una indemnización como superviviente: orfandad, compensación o viudedad, así como un auxilio por defunción, según los ingresos profesionales del sujeto causante. La pensión de orfandad se sitúa entre un 20-40% de éstos, la pensión de compensación entre el 20-45%, la pensión de viudedad entre el 40-45% y la ayuda con los gastos funerarios es de un importe fijo de 13.320 coronas suecas (año 2014, 1.432,17€). La cuantía de la pensión tiene un tope de 333.000 coronas suecas (año 2014, 35.481,58€), esto es, 7,5 veces la cuantía base del ejercicio.

Suiza

En Suiza existen distintas clases de beneficios para los supervivientes vinculados a un sujeto causante:

- El pilar básico de vejez y supervivencia (AVS) (y, si fuera necesario, beneficios adicionales) cubre a todas las personas residentes o con empleo remunerado en Suiza. En este pilar el cónyuge o asimilado tiene derecho a la pensión de viudedad si tiene hijos y hasta que el más joven cumpla 18 años. De no tener hijos, el beneficiario tiene que tener más de 45 años en el momento de la muerte de su cónyuge y el matrimonio debe haber durado, al menos, cinco años. El derecho se extingue con un nuevo matrimonio o la muerte. Los hijos tienen derecho a una pensión de orfandad relativa o a dos pensiones en caso de orfandad absoluta, hasta los 18 años o hasta los 25 si son estudiantes. Pueden existir beneficios adicionales ante recursos insuficientes, que son satisfechos por los cantones suizos. La pensión de supervivencia es un porcentaje de la pensión de vejez del sujeto causante. En viudedad, el 80%; en orfandad, el 40%, si bien en la orfandad absoluta se reduce el porcentaje si se supera el 60% de la pensión máxima de jubilación. Hay pensiones máximas y mínimas mensuales (año 2015): viudedad: 940 francos suizos (890,83€) 1.880 francos suizos (1.781,65€); orfandad: 470 francos suizos (445,41€) y 940 francos suizos (890,26€), respectivamente.

- Seguro obligatorio para la mayoría de los empleados (segundo pilar). En este nivel se accede al derecho si se tiene uno o más hijos a cargo, o si se es menor de 45 años y el matrimonio duró al menos cinco años. La pensión de orfandad se paga hasta los 18 años o hasta los 25 años si se estudia o si el huérfano tiene una discapacidad mínima del 70%. La pensión de supervivencia es un porcentaje de la pensión de invalidez a la que hubiera tenido derecho el fallecido: viudedad (60%) y orfandad (20%).
- Los seguros individuales (tercer pilar).

La cobertura a otros familiares (nietos y hermanos) aparece específicamente diseñada para el ámbito agrícola. Para una muerte por contingencias profesionales las prestaciones se basan en la cuantía asegurada para el sujeto causante (el último salario con un límite anual de 126.000 francos suizos; 119.408,64€), a la que se aplica un porcentaje: 40% para la viudedad (20% en caso de una persona divorciada del sujeto causante), 15% para la orfandad relativa y 25% para la absoluta, concediéndose cuantías más elevadas si existen varios beneficiarios, situación en la que la cuantía total no puede superar el 70% de la base reguladora (el 90% si hay pensión para un ex-cónyuge). Dentro de este campo se cubren los costes de traslado y de funeral.

2.2. Otros modelos de cobertura

De nuevo la tónica encontrada es el amplio abanico de soluciones para la cobertura del mismo riesgo, aun cuando se mantienen argumentos comunes como la aplicación de porcentajes a bases reguladoras; existen diversos modelos en los que prestaciones y requisitos se diferencian según el sexo del beneficiario.

Argentina

El Sistema Integrado Previsional Argentino es de carácter público y reparto. El fallecimiento del sujeto causante¹⁴⁴ da derecho a una pensión de muerte y supervivencia para supérstites y asimilados; para hijos solteros e hijas viudas siempre que no gocen de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo elección, todos ellos como máximo hasta los 18 años; también para los hijos incapacitados para el trabajo –sin límite de edad– a la fecha del fallecimiento o los que se encuentren en este estado cuando cumplan 18 años.

¹⁴⁴ Afiliados generadores de derechos, jubilados o beneficiarios de un retiro de invalidez.

La cuantía de las pensiones de muerte y supervivencia en Argentina se basa principalmente en la aplicación de un porcentaje a una base reguladora. Para personas en activo la base reguladora es *la prestación de referencia*: el 70% del promedio de las remuneraciones –trabajadores por cuenta ajena– o de los ingresos presuntos –trabajadores por cuenta propia–, percibidos durante los 60 meses anteriores al fallecimiento en los que hubo obligación de cotizar, mientras que para sujetos causantes en situación de pasivo la base reguladora es la propia pensión. Los trabajadores que no reúnen los requisitos para ser calificados como regulares o irregulares con derecho y que optaron en su momento por el régimen de capitalización, no generan derecho a pensión por fallecimiento, si bien sus derechohabientes (o en su defecto los herederos) tienen acceso al montante acumulado en la cuenta de capitalización individual del trabajador fallecido. La pensión de viudedad es el 70% de la base reguladora si no existen hijos con derecho a pensión o el 50% en otro caso, disminuyendo el porcentaje cuando el número de hijos con derecho a pensión sea al menos de 3; si existen cónyuge y conviviente con derecho a pensión los porcentajes se reparten en partes iguales entre ambos. El porcentaje de la pensión de orfandad es del 20% de la base reguladora y, de no existir beneficiario de la pensión de viudedad, el porcentaje de la pensión de orfandad se incrementa hasta alcanzar, como suma, el 70%.

El régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se plantea en términos similares, si bien se le añade un servicio por defunción mediante el que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo se hacen cargo del coste derivado del servicio, así como de una indemnización a los derechohabientes del trabajador fallecido, cuyo cálculo para contingencias posteriores a 26 de octubre de 2012 sería:

$$53 \cdot VMIB \cdot \frac{65}{Ed} \quad [54]$$

VMIB Valor mensual del ingreso base

Ed Edad a la fecha de la primera manifestación invalidante

con un importe mínimo. Si el daño se produce en el lugar de trabajo o cuando se esté a disposición del empleador, se incrementa la indemnización en un 20%.

Bolivia

El Sistema Integral de Pensiones boliviano se estructura en un régimen no contributivo (rentas de dignidad), un régimen parcialmente contributivo (pensiones solidarias) y un régimen contributivo en el que se encuadran, a su vez, un sistema de reparto junto a un

régimen de capitalización individual. En materia de muerte y supervivencia este esquema da lugar a pensiones por riesgos (a cargo de seguros) y a pensiones derivadas de vejez (a cargo del saldo de la cuenta personal previsional, la compensación de cotizaciones y, si procede, la fracción solidaria). El sujeto causante debe ser afiliado al sistema y haber cotizado, al menos, 60 meses o ser pensionista, mientras que son considerados beneficiarios de primer grado el cónyuge o asimilado, los hijos menores de 16 años (o hasta los 25 años si son estudiantes) o los declarados inválidos antes de cumplir los 18 años, con preferencia de cónyuge y asimilados. Son beneficiarios en segundo grado, que podrían ser excluidos voluntariamente por el asegurado, en orden de prelación: progenitores y hermanos menores de 18 años; sólo pueden percibir la pensión si no existen beneficiarios de primer grado. En el tercer grado estarían quienes no pertenecen a los grados anteriores y han sido declarados beneficiarios libremente por el asegurado.

Los derechohabientes recibirán una pensión por muerte equivalente al 70% de la percibida por el asegurado¹⁴⁵, comparándose la *Pensión por Muerte Derivada de Riesgos* y la *Pensión por Muerte Derivada de Vejez*, pues para obtener la pensión de muerte es necesario haber cumplido unos requisitos sobre el promedio de los últimos veinticuatro ingresos cotizables o totales realizados.

En cuanto a los riesgos profesionales, los derechohabientes de primer grado recibirán una pensión por muerte equivalente al 100% de la pensión percibida por el asegurado o del 60% si se trata de cónyuge o asimilado con un hijo con derecho a pensión, correspondiéndole al hijo el 20%. Se concede el 100% si la viuda tiene 2 hijos (60% a la viuda y a cada hijo un 20%); cuando el número de hijos es mayor a 2, la pensión de la viuda es equivalente al 50% y el otro 50% se distribuye proporcionalmente entre los hijos. Los derechohabientes de segundo grado percibirían un 25% cada uno de los padres y un 19% cada uno de los hermanos con derecho a pensión; la suma de las pensiones de este grado no puede exceder del 100% de la pensión del fallecido. Se reconoce una prestación por funeral mediante un pago único de 1.100 bolivianos (2014, 127,50€) a quienes acrediten haber soportado los gastos funerarios. Por último, dentro del seguro de salud se concedería un subsidio por sepelio con el asegurado como beneficiario y se pagarían 55.000 bolivianos (2014, 7.012,62€) por cada hijo fallecido que otorgase derecho al subsidio de lactancia y 80.000 bolivianos (2014, 10.200,18€) por cada hijo fallecido que otorgase derecho al subsidio familiar.

¹⁴⁵ Parte del beneficio incluido es el pago de las cuotas a la cuenta previsional, equivalentes al 10% del montante actualizado del *Referente Salarial de Riesgos* del asegurado.

Brasil

El régimen brasileño se basa en el sistema financiero-actuarial de reparto y reconoce una *pensión por muerte* al conjunto de personas dependientes del asegurado fallecido según los siguientes grupos:

1. Cónyuge o asimilado, hijo no emancipado menor de 21 años e hijo con invalidez independientemente de su edad.
2. Progenitores.
3. Hermanos no emancipados menores de 21 años o inválidos independientemente de su edad.

Sólo se conceden pensiones a los beneficiarios del grupo 2 si no existen del grupo 1, y sólo a los beneficiarios del grupo 3 si no existen de los dos grupos anteriores. Al sujeto causante, que debe ser asegurado o pensionista, no se le exigen períodos de carencia. La pensión para las viudas o viudos inválidos equivale a un porcentaje del 50% de la pensión que percibiría el sujeto causante, si bien para las viudas menores de 45 años y sin hijos a su cargo la pensión es temporal por dos años. En el régimen de accidentes de trabajo las condiciones de los beneficiarios son similares, aunque el porcentaje aplicable sobre la base reguladora es del 100%.

Chile

El sistema de pensiones en Chile se basa en un régimen financiero de capitalización individual complementado por un régimen de pensiones y aportaciones solidarias junto a uno de reparto simple (en extinción). En el régimen capitalizado se destina una parte de la cotización a un seguro contratado por las Administradoras de Fondos de Pensiones cuando la cuenta individual no permita financiar las pensiones de invalidez y/o muerte y supervivencia. En general, el afiliado pensionista puede generar pensiones de supervivencia en favor de las personas respecto de las que le causan asignaciones familiares; así, el beneficiario debe pertenecer al grupo familiar del sujeto causante (cónyuge sobreviviente, hijos y el otro progenitor de los hijos no matrimoniales del causante), aunque el régimen solidario no genera prestaciones por muerte y supervivencia. En el sistema de reparto (en extinción) cada colectivo tiene unas reglas propias; en el régimen basado en la capitalización el supérstite tiene derecho a una pensión equivalente al 60% de la correspondiente al sujeto causante o del 50% mientras existan hijos comunes con derecho a pensión. El porcentaje es del 30% para el

progenitor de hijos no matrimoniales reconocidos por el causante, con hijos comunes con derecho a pensión, porcentaje que se eleva al 36% cuando no existen éstos.

En cuanto a la orfandad, en el sistema público de reparto se concede un 15% de la pensión del causante a cada hijo, hasta un máximo del 100%, con particularidades según situaciones y regímenes. En el sistema de capitalización la dinámica es similar, si bien para los hijos inválidos parciales que alcancen los 24 años de edad, el beneficio “se reduce al 11%”. En ambos modelos se establece un favor de familiares del 50% para los padres si no hay otros derechohabientes y siempre que sean causantes de una asignación familiar en el momento del fallecimiento del asegurado.

En el sistema de pensiones capitalizado se concede una “cuota mortuoria” de 15 U.F. (2014, aproximadamente 679,25\$, 631,57€) que, con cargo a los recursos de la cuenta individual, debe abonarse a la persona que se ha hecho cargo de los funerales del causante. En los sistemas de reparto y de pensiones solidarias existe una “cuota mortuoria” por importe equivalente a 3 ingresos mínimos mensuales para fines no retributivos (2014, aproximadamente 792,9\$, 737,24€).

Las contingencias profesionales se cubren por un seguro social en régimen de reparto. En este modelo son beneficiarios de una pensión el cónyuge sobreviviente mayor de 45 años, o la mujer inválida de cualquier edad o la madre de los hijos no matrimoniales mayor de 45 años, soltera o viuda, que haya vivido a expensas del causante; el viudo tiene derecho en la medida en que sea inválido. La viuda y la madre de los hijos no matrimoniales menor de 45 años tienen derecho al beneficio por un año; de existir hijos del causante a su cargo, el beneficio se mantiene mientras dure esta situación y, si se llega a cumplir los 45 años con hijos a cargo, el beneficio se transforma en vitalicio. La cuantía se basa en la aplicación de un porcentaje a la pensión que correspondía o hubiera correspondido al sujeto causante: el 50% como normal general, excepto para la madre de hijos no matrimoniales del causante, donde el porcentaje es del 30%. Los huérfanos serán beneficiarios hasta que cumplan 18 años o 24 si son estudiantes, aunque si son inválidos la pensión es vitalicia. El porcentaje general aplicable es del 20% por cada huérfano y se incrementa en un 50% en la orfandad absoluta.

Colombia

El modelo de protección colombiano está compuesto por dos regímenes solidarios y excluyentes entre sí que pueden ser escogidos por los afiliados: el *Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida* y el *Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad*

(basado en fondos privados de pensiones). Son beneficiarios los miembros de la familia del pensionista por jubilación o invalidez por riesgo común o del afiliado fallecido, en este caso siempre que hubiere cotizado 50 semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:

- Si la muerte es causada por enfermedad, los mayores de 20 años deben haber cotizado el 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió esa edad y la fecha del fallecimiento.
- Que el afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos.

Se concede una pensión de viudedad vitalicia al supérstite siempre que a la fecha del hecho causante tenga como mínimo 30 años. En la viudedad de pasivo el supérstite ha de acreditar una convivencia marital con el causante hasta su muerte y con un mínimo de 5 años. Se concede una prestación temporal, con una duración máxima de 20 años, cuando el supérstite tenga menos de 30 años de edad y no tenga hijos del difunto. La pensión de orfandad se concede por un porcentaje del 50% para los hijos menores de 18 años; para los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, estudiantes y dependientes económicamente del causante al momento de su muerte, siempre que acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas exigidas; y para los hijos inválidos si dependían económicamente del causante. A falta de beneficiarios con derecho, lo serán los padres del causante si dependían económicamente de éste. Si los posibles beneficiarios no reúnen los requisitos para acceder a la pensión de supervivencia pueden acceder a una indemnización sustitutiva. Se reconoce un auxilio funerario a quien pruebe haber abonado los gastos de entierro, por un importe equivalente al último salario base de cotización o al valor de la última mensualidad de pensión recibida, sin que el auxilio pueda ser inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales, ni superior a 10 veces éste. En el régimen de contingencias profesionales se concede un 75% del *salario base de liquidación* por la muerte del afiliado, porcentaje del 100% de la pensión si ocurre la muerte del pensionista por invalidez. De la cuantía se descuenta, si procede, el 15% que percibía el sujeto causante por ayuda de una tercera persona. Se otorga igualmente un auxilio funerario.

Costa Rica

Junto al seguro de riesgos en el trabajo, respecto a las contingencias de jubilación, invalidez y muerte el régimen costarricense presenta cuatro pilares de protección:

1. Solidario y universal, orientado a la población vulnerable.
2. Básico y de reparto, con una pensión mínima garantizada a quienes cumplen los requisitos establecidos.
3. Complementario, de cuenta individual en régimen de capitalización.
4. Voluntario, de cuenta individual y con incentivos fiscales.

La pensión de muerte y supervivencia se dirige al conjunto de personas que dependían del asegurado fallecido. Para la concesión de la pensión derivada de causantes en activo, a éstos se les requiere un mínimo de 180 cotizaciones. Son beneficiarios de la prestación:

- El cónyuge o asimilado que haya convivido con el asegurado fallecido al menos el último año y a sus expensas. El derecho se pierde por nuevo matrimonio o unión permanente.
- Los hijos dependientes económicamente del fallecido, menores de 18 años, los hijos menores de 25 años estudiantes y los hijos inválidos, independientemente de su estado civil.
- En ausencia del cónyuge del sujeto causante, los [hijos mayores de 55 años](#), solteros y que vivían con el fallecido, siempre que no gocen de pensión alimentaria, no sean asalariados y no tengan otros medios de subsistencia, en razón de limitaciones físicas, mentales o sociales. En ausencia de beneficiarios por viudedad u orfandad, los padres que dependiesen económicamente del fallecido, en razón de limitaciones físicas, mentales o sociales. En ausencia de padres con derecho, las personas que hubiesen prodigado cuidados al asegurado fallecido y con igual condición de dependencia económica, o los hermanos dependientes con los mismos requisitos señalados para los hijos.

La cuantía de la pensión para los supervivientes es una fracción de la pensión de jubilación o invalidez que recibía o tenía derecho a recibir el sujeto causante. En las pensiones de viudedad, el importe sobre la base señalada es el 70% si el supérstite es mayor de 60 años o se encuentra inválido, el 60% si el supérstite tiene una edad entre 50 y 60 años, y el 50% si el supérstite es menor de 50 años. La pensión por viudedad se incrementa en el porcentaje correspondiente conforme aumenta la edad del beneficiario. En orfandad se concede un porcentaje del 30% para cada pensión, siempre que la suma total de las pensiones de viudedad y orfandad no exceda del 100% de la base de cálculo; en caso contrario, se reducen proporcionalmente. Para los huérfanos absolutos el porcentaje de la pensión será del 60% y si ambos padres fueran asegurados y fallecieran

generando derechos, la pensión será del 60% de la mejor de ellas. El porcentaje para ascendientes es del 20%, que podrá otorgarse si la suma de las pensiones por viudedad y orfandad no alcanza el 100% de la base de cálculo de las respectivas prestaciones. Por su parte, el seguro de salud otorga, entre otras, una prestación económica para hacer frente a los gastos de funeral.

Por último, para las contingencias profesionales, además de pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares, se destina una suma global para cubrir los gastos de entierro, incluyendo los de traslado si procede. Respecto a las prestaciones, el cónyuge recibe una renta anual en doce meses y 10 años de duración equivalente al 30% del salario establecido. Para los huérfanos el porcentaje es del 20% si solo existe un hijo, del 30% cuando son 2 y del 40% si hay 3 o más. Las pensiones a los huérfanos se reconocen en los mismos términos de edad y discapacidad señalados con anterioridad. Si no existe cónyuge, al primer hijo le corresponde el 35% del salario y a cada hijo adicional el 20%, con el límite global del 70%. Se concede un 20% para la madre y 10% para el padre u otro dependiente con 60 o más años de edad o incapacitado para el trabajo.

Cuba

El sistema de seguridad social en Cuba se basa en el reparto anual, siendo los servicios funerarios prestaciones que se ofrecen gratuitamente a toda la población. La pensión de muerte y supervivencia se causa por las personas activas, pensionistas de jubilación e invalidez y aquellos desvinculados del trabajo cuyo fallecimiento sea antes de seis meses desde el cese y hayan trabajado al menos el 75% de su vida laboral desde los 17 años. Es beneficiaria la viuda o asimilada siempre que el enlace tenga más de un año de antigüedad o, en otro supuesto, que existan hijos comunes o la muerte ocurra por accidente. El viudo ha de tener al menos 60 años o ser incapacitado, carecer de medios de subsistencia, integrar el núcleo familiar y depender económicamente de la difunta, con los mismos requisitos adicionales que para la viuda. Son igualmente beneficiarios los hijos solteros, menores de 17 años de edad o mayores de esa edad si se encuentran incapacitados para el trabajo al momento del fallecimiento del causante o al llegar a los 17 años de edad y hubieran dependido del fallecido.

Las pensiones se calculan como un porcentaje de la correspondiente al causante, en función de su cuantía y el número de beneficiarios: 70% para un beneficiario, 85% para dos beneficiarios y el 100% para 3 o más beneficiarios para la pensión de más de 60 pesos cubanos (55,14€); los porcentajes serán del 80%, 90% y 100% respectivamente para pensiones de hasta 60 pesos cubanos. En caso de ser viuda trabajadora, es un

máximo del 25% compatible con su salario. Si la viuda es menor de 40 años de edad y no tiene la condición de trabajadora habitual, conserva su capacidad para el trabajo y no tiene hijos que atender o padres que requieran su cuidado permanente, tiene derecho a la pensión durante dos años.

Ecuador

En Ecuador funciona un régimen de prestación definida en base a la solidaridad intergeneracional, el *Seguro General Obligatorio*, si bien con anterioridad existía un régimen de aportación definida basado en la capitalización individual. En las prestaciones por muerte y supervivencia son sujetos causantes los pensionistas de invalidez o jubilación o el asegurado en activo que, en el momento de su fallecimiento, tuviere acreditadas al menos sesenta imposiciones mensuales.

La pensión de viudedad se destina al cónyuge del sujeto causante o a la persona que tuviera hijos comunes con éste o hubiere convivido con él (ambos libres de matrimonio) más de 2 años inmediatamente antes del fallecimiento. Se concede una pensión de orfandad a cada hijo del causante hasta alcanzar los 18 años de edad o al hijo de cualquier edad incapacitado para el trabajo y que haya vivido a cargo del difunto. A falta de viudos -o asimilados- e hijos, tendrán derecho a una prestación los padres del sujeto causante que hayan vivido a cargo de éste. Los beneficiarios recibirán una renta mensual total igual al 65% de la base de cálculo, que se distribuirá entre todos ellos según las normas legales. El subsidio para funeral es una prestación monetaria de reembolso de gastos, que se entrega a los deudos del fallecido siempre que éste tuviere acreditadas al menos seis imposiciones mensuales dentro de los 12 meses anteriores a su fallecimiento, en la cuantía reglamentada. Los principales beneficiarios son los de viudedad y orfandad, aunque podrá solicitar el subsidio quien, a falta de éstos, haya satisfecho los gastos correspondientes.

El Salvador

Junto al sistema de pensiones público SPP (en extinción), en El Salvador funcionan un pilar de capitalización individual, un pilar de ahorro voluntario y una aportación estatal solidaria como recurso para aquellos que no han logrado obtener una pensión mínima. En muerte y supervivencia se consideran beneficiarios los hijos inválidos, los hijos hasta la edad de 18 años, o hasta los 24 si realizan estudios técnicos o universitarios; la viuda, si el matrimonio se hubiese efectuado 6 meses antes del fallecimiento, o la conviviente si existieran 3 años de vida en común; el viudo o conviviente, si es inválido; los padres del

causante, si no existen otros beneficiarios, siempre que tengan cumplida la edad del retiro (60 años para los hombres, y 55 para las mujeres) y dependencia del causante.

En el sistema capitalizado los supérstites tienen derecho a una pensión del 60% de la correspondiente al causante (43 % para el viudo inválido) si no existen hijos con derecho a la pensión y del 50% si existen éstos; en el sistema público el porcentaje es del 50%. Para los progenitores, en el sistema público, si no existieran otros beneficiarios, se otorgaría el 40% para uno solo de ellos y el 30% para cada uno si sobreviven los dos; en el sistema privado los porcentajes son del 20% y del 30% respectivamente. Tanto en el sistema común como en contingencias profesionales se concede un auxilio por sepelio que equivale al doble del salario cotizante al Régimen de Salud del año anterior al fallecimiento (año 2014; 4.743 colones; 504€). En cuanto a las contingencias profesionales los porcentajes son del 60% para la viudedad, el 30% para la orfandad -sin que la suma de las diferentes pensiones de orfandad puedan superar el 100% de la que hubiese correspondido al causante- o del 60% ante la supervivencia de ambos progenitores como beneficiarios (el 40% si sobrevive uno sólo).

Guatemala

En el *Programa de protección de Invalidez, Vejez y Supervivencia* de Guatemala se otorgan pensiones a los supervivientes cuando el sujeto causante disfrutase de una pensión de vejez o invalidez, hubiese tenido derecho a la pensión de vejez por haber cumplido los 60 años o, encontrándose en activo, hubiera acreditado al menos 36 meses de cotizaciones en los seis años anteriores. Son beneficiarios la viuda o asimilada, siempre que haya convivido con el sujeto causante hasta la fecha de su fallecimiento o éste le proporcionase ayuda indispensable para la satisfacción de las necesidades vitales; en su defecto, la compañera que hubiese convivido con el sujeto causante al menos un período de 2 años antes del fallecimiento; el viudo o asimilado en situación de invalidez; en su caso, los hijos menores de 18 años solteros y sin pensión por derecho propio, así como los hijos mayores de 18 años, incapacitados, solteros y sin pensión por derecho propio. Finalmente, los progenitores que no tengan pensión. El porcentaje aplicable a la base reguladora en la pensión de viudedad es del 50%. A cada hijo se le asigna un porcentaje del 25%, si bien en orfandad absoluta se eleva hasta el 50%. Para cada progenitor el porcentaje es del 25%. Se concede una ayuda para gastos de entierro del asegurado equivalente a 412,50 quetzales (2014; 51,89€).

En las contingencias profesionales se otorgan también las prestaciones dinerarias cuando a la fecha del suceso el afiliado trabaja y acredita, al menos, 3 meses de contribución

dentro de los 6 meses inmediatamente anteriores al mes en que sucede el accidente. Se concede una ayuda para gastos de entierro y tiene derecho a una pensión de orfandad cada hijo menor de 15 años o los inválidos de cualquier edad por un importe equivalente al 25% de la pensión que percibía el causante (o de la que éste percibiría por invalidez total si hubiera cumplido el requisito de cotizaciones para tener derecho a ella). A falta de viuda y huérfanos la pensión se otorga a los ascendientes y otros dependientes, mayores de 60 años o inválidos de cualquier edad, que demuestren dependencia económica del asegurado.

Honduras

En el régimen de protección social de Honduras se otorgan prestaciones a los supervivientes cuando el asegurado, a su fallecimiento, fuese pensionista de vejez o invalidez, o tuviese acreditados al menos 36 meses de cotizaciones en los 6 años anteriores o hubiese tenido derecho a una pensión de vejez por haber cumplido los 65 años (hombres) y 60 años (mujeres) acreditando, además, 180 cotizaciones mensuales.

La viuda o asimilada tiene derecho a una pensión vitalicia igual al 40% de la que recibía el causante o de la que éste tendría derecho. Si contrae nuevo matrimonio tendrá derecho a percibir, por una sola vez, una suma igual a 12 mensualidades de la pensión que estuviese recibiendo. Cada uno de los hijos menores de 14 años, o inválidos de cualquier edad e incapaces y que dependiesen del sujeto causante, perciben un porcentaje del 20% de la base reguladora. La pensión por orfandad se prorroga hasta los 18 años cuando el beneficiario demuestre que realiza estudios formales en instituciones de educación reconocidas por la autoridad competente. Si no existe conyugue o asimilado ni huérfano, se otorgaría la pensión (20% de base reguladora) a los progenitores mayores de 65 años o inválidos. El fallecimiento de un cotizante activo o pensionista por cualquier riesgo da derecho a una ayuda de funeral al familiar o persona natural que se hubiere hecho cargo de los gastos de sepelio, por un importe equivalente a dos salarios mensuales mínimos vigentes en la categoría más baja.

Japón

En Japón el auxilio por defunción es cubierto por el seguro de salud. La cantidad es de aproximadamente 50.000 yenes (año 2014; 383,85€), por lo que no compensa totalmente los costes de funeral, aunque es una cuantía no despreciable; es usual que se suscriban operaciones con mutualidades privadas para compensar el resto de costes.

Para las personas con bajos recursos incluidos en beneficios asistenciales, la totalidad de los gastos de funeral se cubre por las entidades municipales.

México

El sistema actual de protección en México se basa en un sistema de cuentas individuales. Es requisito para obtener las pensiones de viudedad que la contingencia no sea profesional y que el asegurado, al fallecer, hubiese satisfecho un mínimo de 150 cotizaciones semanales o se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez. Son beneficiarias de la pensión de viudedad la esposa del asegurado o pensionista por invalidez y, en su ausencia, la mujer con quien el sujeto causante convivió durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante su unión. Si existiesen varias uniones de hecho, ninguna dará derecho a recibir la pensión. Se otorga la pensión de orfandad a cada uno de los hijos menores de 16 años del sujeto causante. La pensión de viudedad es igual al 90% de la que hubiera correspondido al asegurado en una invalidez o de la que venía disfrutando por este supuesto, siendo el porcentaje del 20% para el huérfano o del 30% para la orfandad absoluta. Dentro del régimen de contingencias profesionales se satisfacen los gastos del funeral, si bien el Instituto Mexicano de la Seguridad Social ofrece planes de previsión funeraria (seguros de decesos).

Nicaragua

Nicaragua cambió teóricamente su sistema de seguridad social en el año 2000, pasando de un modelo de primas escalonadas a un régimen de capitalización individual financiera que, en realidad, no está operativo. El Régimen Integral cubre los riesgos de invalidez, vejez y muerte y los riesgos profesionales, mientras que el Régimen Facultativo cubre la invalidez, muerte y vejez de los grupos no asalariados. Para ser beneficiario de la pensiones de muerte y supervivencia se exige ser la esposa o compañera del sujeto causante, ser hijo menor de 21 años que se encuentre estudiando, progenitor o compañero inválido del causante de la pensión.

La viudedad supone una pensión equivalente al 50% de la que percibiría el causante. A las viudas menores de 45 años se les concedería una pensión temporal de 2 años (salvo que tengan hijos menores a su cargo, supuesto en el que se extenderá hasta que se extingan todas las pensiones por orfandad) o vitalicia si a esta fecha ha cumplido 60 años. La viuda con pensión temporal que no haya contraído nuevo matrimonio ni pareja

de hecho, no trabaje ni tenga derecho a otra pensión, reanudará su derecho a la pensión de viudedad vitalicia al cumplir 60 años. Los hijos menores de 15 años o inválidos de cualquier edad perciben el 25% de la base reguladora; los hijos menores de 21 años no cotizantes que se encuentren estudiando reciben la prestación siempre que los estudios se realicen con aprovechamiento. En una orfandad absoluta la pensión equivale al doble; si ambos progenitores fuesen asegurados, se otorgará a los beneficiarios, si les resulta favorable, ambas pensiones sencillas incrementadas en un 50%. Las pensiones de viudedad y orfandad no podrán exceder de la que sirvió de base para el cálculo, reduciéndose proporcionalmente en otro caso. A falta de viuda y huérfanos tendrán derecho a una pensión, de importe equivalente a la de orfandad, los padres u otros dependientes, mayores de 60 años o inválidos de cualquier edad que demuestren dependencia económica del sujeto causante. Si existen viuda y huérfanos, tendrán derecho a la pensión el resto de beneficiarios siempre que no se menoscabe el derecho de aquéllos. Si solo existiere la madre y/o abuela del asegurado con derecho a recibir pensión se le otorgará ésta en la proporción equivalente a la de viudedad.

El propio sistema otorga un “servicio funerario adecuado” y, si éste no se hubiese prestado, se otorga un subsidio equivalente al 50% del salario promedio mensual que correspondiese a las 4 últimas semanas cotizadas o subsidiadas, dentro de las últimas 26 semanas, sin que su importe pueda ser inferior al promedio mensual de la categoría en que esté incluido el salario mínimo general de los trabajadores; tampoco podrá ser superior al 50% del límite máximo señalado para las prestaciones económicas. Para los pensionistas se toma el salario mensual que sirvió de base para el cálculo de la pensión. Las contingencias profesionales no están sometidas a periodos de cotización previos y se concede un subsidio para cubrir los gastos de funeral, una pensión de viudedad del 50% de la base reguladora a la viuda, viudo o viudo inválido, una pensión a los hijos menores de 15 años de edad, prorrogable en las situaciones que se establezcan en el reglamento respectivo, mientras que los hijos inválidos gozan de pensión mientras dure su invalidez. También se concede una pensión a otras personas que vivan a cargo.

Panamá

El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte está integrado por dos subsistemas: un modelo de prestación definida mediante reparto de capitales de cobertura y un subsistema mixto, que se administra de igual forma y en el que se participa con las cuotas pagadas sobre los ingresos de hasta 500 balboas mensuales (464,90€), y un régimen financiero de cuenta individual en el que se participa con las cuotas pagadas sobre los ingresos que excedan de la cifra anterior. Para causar la pensión de supervivencia se exige del difunto

ser pensionista por vejez e invalidez de origen no profesional, o ser activo con un mínimo de 36 cotizaciones mensuales. Se exige también una "densidad" de cotizaciones no inferior a 0,5 en los 3 años anteriores al fallecimiento, aunque si el asegurado fallecido contaba con 180 cotizaciones mensuales o más, se prescinde de este requisito. El derecho a pensión se pierde: por contraer matrimonio o constituir pareja de hecho para la viudedad; por cumplir 18 años los hijos o 14 años los hermanos; por desaparecer la incapacidad en los hijos incapacitados. Al completarse 5 años de pensión de viudedad y no haber alcanzado la edad de acceso a la de vejez.

En el *subsistema de beneficio definido* son beneficiarios con derecho a pensión: la viuda o asimilada –siempre que para ésta no existiese impedimento para contraer matrimonio y haya existido convivencia mínima de 5 años- y los hijos hasta los 18 años o mayores inválidos. De no existir viudas ni huérfanos, tiene derecho la madre y, de no existir ésta, el padre sexagenario o inválido. Para los padres y hermanos se requiere haber vivido a cargo del causante y tener dependencia económica del mismo. En el *subsistema mixto* tendrán derecho a recibir la suma total acumulada y capitalizada en su cuenta de ahorro personal a la fecha del fallecimiento: el supérstite de la persona fallecida y, en su ausencia, la pareja de hecho que convivía con el causante a condición de que no hubiera existido impedimento legal para contraer matrimonio y de que la vida en común se hubiera iniciado, por lo menos, 5 años antes del fallecimiento; los hijos supervivientes del finado menores de 18 años o inválidos.

En términos generales, la pensión de viudedad es el 50% de la pensión de vejez e invalidez que percibía el fallecido o de la que le hubiese correspondido a un activo, excluidas las asignaciones familiares, mientras que a cada hijo con derecho se le asigna un 20% de la base reguladora; para los progenitores con derecho a prestación, el 30% de la pensión del causante de forma vitalicia, mientras que el porcentaje para los hermanos es del 20%. Para ayudar a los gastos que origine la muerte del sujeto causante que no sea originada por riesgo profesional, se reconoce un auxilio de funeral a quien demuestre haber sufragado los gastos de entierro, siempre que el causante tuviera satisfechas seis o más cuotas mensuales en los 12 meses anteriores al fallecimiento.

En cuanto a las contingencias profesionales, se concede una pensión vitalicia de viudedad en favor de la viuda o de la compañera que haya tenido con el difunto hijos en común o haya convivido con él al menos 5 años. La pensión de orfandad es para los hijos menores de 18 años o mayores incapacitados, la pensión para progenitores se concede por un periodo máximo de 10 años y la pensión a hermanos que hubiesen dependido económicamente del finado se otorga en iguales condiciones que a los hijos. Se puede

acceder a una pensión para ascendientes y colaterales hasta el tercer grado, por un periodo máximo de 6 años. El conjunto de las pensiones no puede superar el 75% del salario del causante. Por viudedad se concede un 25% del salario de forma vitalicia, pero si se es única beneficiaria el porcentaje se eleva al 30%. El viudo inválido o con al menos 60 años mantiene igual derecho que la viuda. Para los huérfanos los porcentajes son: 15% si es uno, 25%, si son dos, 35%, si son tres, 40% si son 4 o más y se abonan las prestaciones hasta los 18 años o de forma vitalicia si se trata de inválidos. A la madre se le concede un 20% por 10 años, que se eleva al 30% si es la única beneficiaria. Los hermanos coinciden en derechos con los hijos y al padre inválido o con al menos 60 años le correspondería una pensión equivalente al 10% del salario. Si las pensiones calculadas fuesen inferiores a la mínima establecida para la incapacidad permanente absoluta se tiene derecho a una indemnización equivalente a 3 anualidades de la pensión que hubiese correspondido. Se concede también un auxilio de funeral por 300 Balboas (año 2014; 278,94€) para la muerte por contingencias profesionales o de un pensionista por incapacidad permanente absoluta.

Paraguay

El régimen general de prestaciones por invalidez, muerte y supervivencia está definido como un régimen de reparto caracterizado como un “modelo público profesional” que tiene en cuenta los últimos salarios recibidos en un periodo de tiempo determinado. Para la concesión de las prestaciones se requiere que el sujeto causante fuera jubilado o hubiese adquirido el derecho a jubilación o acreditase un mínimo de 750 semanas de cotizaciones sin tener la edad mínima para la jubilación o que fallezca a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Serán beneficiarios de muerte y supervivencia las viudas, los viudos y las parejas de hecho (que tuviesen hijos con el sujeto causante y hayan vivido 2 años con éste o 5 años si no tienen hijos comunes), los hijos solteros menores de 18 años y los mayores de dicha edad que estén incapacitados para todo trabajo y los padres que hayan vivido bajo la protección del causante fallecido y con dependencia económica de éste.

Se tendrá derecho a la pensión de viudedad siempre que el beneficiario sea mayor de 40 años; en caso contrario, se recibe una indemnización. El derecho a la pensión se pierde por contraer matrimonio o constituir una pareja de hecho desde una situación de viudedad, por cumplir 18 años en el supuesto de los hijos menores, por desaparecer la incapacidad en los hijos que estuvieron incapacitados, por estar la beneficiaria inválida o no tener hijos con derecho a la pensión de orfandad. Para el auxilio por funeral se exige haber sufragado los gastos de sepelio, que el asegurado contase con 6 o más

cotizaciones mensuales en los 12 meses anteriores al fallecimiento o que el fallecido fuese un pensionista por vejez o de invalidez.

El importe básico de la pensión es el 60% del *Salario Básico de Pensión*. Los perceptores de viudedad en concurrencia con los hijos solteros hasta la mayoría de edad y los incapacitados recibirán la mitad de la pensión y la otra mitad se concederá a los hijos, por partes iguales, si bien a los beneficiarios de viudedad menores de 40 años se les reconoce una indemnización equivalente a 3 anualidades de la pensión que les hubiere correspondido. Si se contrae matrimonio o pareja de hecho se recibirá una suma, por una única vez, equivalente a 2 anualidades de pensión. A los padres, a los huérfanos hasta la mayoría de edad (18 años) y a los incapacitados por partes iguales, se les concede la totalidad de la pensión. Si el asegurado acredita menos de 750 semanas de cotizaciones, los herederos o sus beneficiarios reciben un subsidio en metálico, por una sola vez, equivalente a un mes de salario por cada año de antigüedad, tomando como base el salario mínimo nacional. Si no existen herederos o beneficiarios, se abonará un subsidio a quien justifique haber realizado los gastos funerarios, hasta una cuantía equivalente 75 salarios mínimos diarios. En contingencias profesionales el modelo es similar.

Perú

En materia de pensiones existe un régimen contributivo de reparto (*Sistema Nacional de Pensiones, SNP*) y un régimen de capitalización individual (*Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, SPP*); en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales el régimen es de naturaleza contributiva. De cara a las prestaciones de muerte y supervivencia, en el Sistema Nacional de Pensiones se otorga una pensión de supervivencia por el fallecimiento del sujeto causante¹⁴⁶; En el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones el derecho es para los beneficiarios del afiliado que no estuviese gozando de pensión de jubilación bajo el régimen de pensiones del SPP a su muerte, siempre que ésta no resulte consecuencia de alguna de las exclusiones establecidas, pero sí tienen derecho a pensión de supervivencia los beneficiarios del afiliado que hubiere contratado una pensión, sea cual fuere la modalidad.

La cuantía máxima de la pensión de supervivencia es del 50% de la pensión de invalidez o jubilación que percibía o hubiera tenido derecho a percibir el causante (base reguladora

¹⁴⁶ El pensionista de jubilación o invalidez, el asegurado con derecho a pensión de jubilación o que de haberse invalidado hubiere tenido derecho a pensión de invalidez, el asegurado a consecuencia de accidente común en periodo de aportaciones o el asegurado a consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional si los riesgos no se encuentran cubiertos por el régimen de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

en el Sistema Nacional de Pensiones) y la pensión de orfandad de cada hijo es igual al 20% de la base reguladora (el 40% en la orfandad absoluta); existe una pensión para ascendientes cuya cuantía máxima será, para cada uno, igual al 20% de la base reguladora. En el sistema privado se considera el 42% de la remuneración mensual para el cónyuge o asimilado, sin hijos, y el 35% si tiene hijos, así como el 14% de la remuneración mensual para los hijos menores de 18 años o mayores de 18 años mientras continúen con estudios hasta el grado universitario, así como incapacitados permanentes para el trabajo; también se concede el 14% de la remuneración mensual para cada progenitor, siempre que cumplan con alguno de los requisitos siguientes: que sean inválidos total y parcialmente o que tengan más de 60 años y que hayan dependido económicamente del sujeto causante. El sistema de contingencias profesionales es similar al régimen de capitalización y los gastos de sepelio se reembolsan hasta el límite establecido por la Superintendencia de Bancos, Seguros y Pensiones.

República Dominicana

En la República Dominicana el sistema previsional se basa en tres pilares: un régimen contributivo de capitalización de aportación definida, un régimen subsidiado financiado por el Estado y un régimen contributivo subsidiado. Son beneficiarios de prestaciones por muerte y supervivencia: el cónyuge superviviente, los hijos solteros de 18 años, los hijos solteros mayores de 18 años y menores de 21 años que demuestren haber realizado estudios regulares durante los 6 meses anteriores al fallecimiento del afiliado y los hijos discapacitados de cualquier edad. La pensión de supervivencia será financiada con la cuantía acumulada de la cuenta personal del afiliado y el montante correspondiente al seguro de supervivencia. Si fallece un afiliado en activo los beneficiarios recibirán una pensión de supervivencia no menor al 60% del salario cotizante de los últimos 3 años o fracción. El cónyuge superviviente menor de 50 años recibirá una pensión durante sesenta meses o, en su defecto, será beneficiario el hijo menor hasta los 18 años. El cónyuge superviviente mayor de 50 años y menor de 55 tendrá derecho a setenta y dos meses de pensión y los supervivientes mayores de 55 años a una pensión vitalicia. En el régimen subsidiado continuarán recibiendo la pensión solidaria el cónyuge sobreviviente o asimilado, siempre que éste no tuviese impedimento jurídico para contraer matrimonio, así como los hijos.

El porcentaje asignado a la pensión de viudedad es del 50% para el cónyuge o asimilado. La pensión se pierde por contraer matrimonio o por nueva unión de hecho o cuando se disfrute de una pensión mínima que haya sido complementada por el Fondo de Solidaridad Social; en este supuesto, la pérdida se limitará a la porción complementaria.

Se concede un porcentaje del 50% a los hijos menores de 18 años, o menores de 21 si fuesen estudiantes, o mayores de edad cuando estuviesen afectados por una incapacidad absoluta y permanente. La pensión se extingue por el cumplimiento de 18 años si son hijos solteros no estudiantes y por cumplir 21 años los estudiantes. A falta de beneficiarios de estos grupos el saldo de la cuenta se entregará en su totalidad a los herederos legales del afiliado. Se conceden gastos de sepelio en función del salario promedio de las 8 últimas cotizaciones semanales en el semestre anterior al fallecimiento. Para las prestaciones vinculadas al Seguro de Riesgos Laborales el salario base será el promedio de las remuneraciones sujetas a cotización de los últimos seis meses anteriores al hecho causante. La pensión de supervivencia es el 50% de la percibida al momento de la muerte; se concede una pensión a los hijos menores de 18 años, menores de 21 si son estudiantes, o sin límite de edad en caso de discapacidad total: un 20% para cada uno y hasta el 100% de la pensión por discapacidad total.

Uruguay

El régimen general de prestaciones por invalidez, vejez y supervivencia es un régimen mixto de dos niveles: un pilar de solidaridad intergeneracional de reparto puro y prestación definida, complementado por un modelo instrumental con un objetivo redistributivo de pensión de jubilación e invalidez que, a su vez, se completan, en ciertas situaciones, con un pilar de ahorro individual obligatorio de capitalización individual de aportación definida al que puede sumársele el ahorro voluntario adicional. El régimen de capitalización es obligatorio para los afiliados que, a la fecha de entrada en vigencia del mismo (1 de abril de 1996), fueran menores de 40 años de edad y para todos los que desde entonces ingresen al mercado de trabajo y ámbito de afiliación.

Son beneficiarios con derecho a pensión derivada de pensionistas o afiliados al sistema: las personas viudas, los hijos solteros, menores de 21 años o mayores de 21 años incapacitados totales para todo trabajo, los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo y las personas divorciadas; el viudo, los padres y las personas divorciadas deberán acreditar dependencia económica del causante o carencia de ingresos suficientes. Las viudas tendrán derecho al beneficio siempre que sus ingresos mensuales no superen los 15.000 pesos uruguayos (537,81€) a valores de mayo de 1995 y los hijos adoptivos y los padres adoptantes deberán probar que convivieron con el causante, por lo menos, durante 5 años. Las personas viudas y divorciadas que tengan 40 o más años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, o que cumplan esa edad mientras reciben la pensión, la recibirán durante toda su vida. Si tienen entre 30 y 39 años recibirán la pensión durante 5 años, y durante 2 años cuando sean menores de 30 años.

Son excepciones: que el beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para todo trabajo o que integren el núcleo familiar menores de 21 años –abonándose la pensión hasta su mayoría de edad– o hijos solteros o mayores de 21 años incapacitados para todo trabajo. A su vez, el derecho a pensión se pierde por contraer matrimonio el viudo y personas divorciadas; por cumplir 21 años de edad los hijos solteros; por situaciones de desheredación o “indignidad” previstas en el Código Civil o por “mejorar la fortuna” de los beneficiarios.

El sueldo básico de la pensión es el equivalente a la jubilación que le hubiere correspondido al sujeto causante a la fecha de su fallecimiento (con un mínimo basado en la asignación de la jubilación por incapacidad total) o, en su caso, la última asignación por jubilación o incapacidad parcial. Para las viudas y divorciadas, si existe núcleo familiar o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del causante, se concede el 75% del sueldo básico; el 65% para las personas viudas solas o los hijos del causante y el 66% para hijos en concurrencia con los padres del causante. Para personas divorciadas o padres del difunto, el 50%. Para personas viudas en concurrencia con divorciada o divorciado (y sin núcleo familiar), el 66% del sueldo básico. Si solo una de las 2 categorías tuviera núcleo familiar, el 9% de diferencia se asigna a esa parte.

A la persona viuda con núcleo familiar en concurrencia con otros beneficiarios, se le concederá el 70% de la asignación de la pensión. Cuando concurren con un grupo familiar, la distribución se hará por partes iguales entre ambas categorías. Si una sola de ellas integra el núcleo familiar, su cuota será superior en un 14% y el remanente se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes. Las personas viudas, divorciadas sin núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, percibirían el 60% de la asignación de pensión. La distribución se hará por partes iguales entre ambas categorías y el remanente entre los restantes copartícipes. En los demás supuestos la distribución será por partes iguales, salvo ante concurrencia de divorciadas o divorciados, donde por no poder exceder su cuota parte el montante de la pensión alimenticia el remanente se distribuirá en la proporción que corresponda a los restantes beneficiarios. El fallecimiento o la pérdida de derecho de un beneficiario ocasionarán la redistribución respectiva. Los familiares distintos de la viuda o asimilada recibirán, en ausencia de éstos, una indemnización equivalente al 10% de la suma de los salarios de cotización que tengan acreditados. Se concede un subsidio por expensas funerarias de 2.300 pesos uruguayos (82,46€) a valores de mayo de 1995. En contingencias profesionales la cuantía de la prestación se ubica entre un 20% y las 2/3 partes de la remuneración anual, según quienes concurren, con un máximo del 100% del salario anual. Se pagan los gastos del sepelio, que no pueden exceder 6 salarios mínimos nacionales.

Venezuela

El sistema de financiación en Venezuela es el de reparto, efectuándose una distinción entre las contingencias a corto plazo (enfermedad, maternidad, indemnizaciones diarias) y a largo plazo (vejez, invalidez, viudedad, orfandad y nupcialidad). Este último bloque se basa en un sistema de prima escalonada con capitalización parcial, revisable cada 5 años. Cuando el asegurado fallece sin causar derecho a una pensión de supervivencia los beneficiarios (viuda, asimilada e hijos menores) reciben una indemnización única siempre que el causante tenga acreditadas al menos 100 cotizaciones semanales en los últimos 4 años anteriores a su muerte. Si el asegurado no deja familiares o asimilados, tendrían derecho a percibir una indemnización única, a partes iguales y en orden excluyente: los hermanos menores de 14 años y los progenitores, siempre que hayan vivido con el fallecido y a sus expensas. Tienen derecho a la pensión de supervivencia, por partes iguales, los hijos y el cónyuge o pareja de hecho del causante que, a la fecha del fallecimiento, cumplan las siguientes condiciones:

- Los hijos menores de 14 años o de 18 años si están estudiando, o de cualquier edad si están incapacitados.
- La viuda de cualquier edad, con hijos a cargo menores de 14 años o de 18 si están estudiando.
- La viuda o pareja de hecho mayores de 45 años.
- El esposo de 60 años o inválido de cualquier edad, siempre que dependiera de la fallecida.

La pensión del cónyuge o pareja de hecho es vitalicia, pero se extingue ante un nuevo matrimonio o unión, sin perjuicio de la prestación por nupcias que pudiera corresponder. La pensión de los hijos se abona hasta que se cumplan los 14 años de edad o los 18 años si se está estudiando o, de ser totalmente incapacitados, mientras subsista este estado. La pensión de viudedad general es equivalente al 40% de la pensión que le hubiese correspondido a un pensionista de vejez o invalidez. A la viuda o asimilada menor de 45 años se le otorga una suma igual a 2 anualidades de la pensión que le hubiera correspondido. Igualmente, se concede un porcentaje del 20% de la pensión de vejez e invalidez por cada descendiente, con el máximo del 100%, computando la de viudedad; si existen más de 3 hijos, el porcentaje es el 100% y la pensión se reparte por partes iguales para los descendientes. Si ambos padres fallecen y ambos son asegurados, las pensiones son concurrentes y la pensión de supervivencia es del 30%, 50% u 80% de la

pensión de invalidez o de vejez para los ascendientes, según concurren 1, 2, 3 o más beneficiarios. El fallecimiento del asegurado o pensionista da derecho a una asignación funeraria de 5.000 Bolívares (año 2014; 701,04€), que se paga a la persona que demuestre haber efectuado los gastos del entierro.

En el régimen de contingencias profesionales se conceden pensiones de orfandad si el fallecido era inválido pues en otra situación no se genera el derecho, salvo que el difunto cumpliera los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez. El fallecimiento de un interesado también da derecho a una prestación funeraria de 5.000 Bolívares.

3. LAS DISTRIBUCIONES COMPUESTAS EN EL MARCO DE LAS PENSIONES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS ACTUARIALES

3.1. El marco teórico

El objetivo de este epígrafe es la valoración de la aplicación de técnicas estadísticas y actuariales específicas en el estudio de la Seguridad Social, en particular y para la caracterización de la tipología de pensiones estudiadas en este trabajo, el uso de distribuciones de probabilidad compuestas dentro del ajuste del gasto anual. Esta perspectiva de estudio parte de una amplia base teórica y un extenso desarrollo científico cuyas principales bases pueden verse, por ejemplo, en Panjer, H.H. y G.E. Willmot (1992), con aplicaciones prácticas específicas dirigidas al campo de los seguros no vida en España, por ejemplo, en Vilar Zanón, J.L. y J. Vegas Asensio (1998), si bien su filosofía y metodologías asociadas pueden adecuarse a diversos campos de actuación.

En este escenario, si N_t es el número de sucesos que ocurren en el intervalo $(0, t]$ y X_i la cuantía económica asociada al suceso i -ésimo, S_t es el importe económico total asociado al período $(0, t]$, tal que:

$$S_t = \sum_{i=1}^{N_t} X_i \quad [55]$$

$$X_i \geq 0$$

X_i v. a. i. d distribuidas según una función $V(x) = P(X_i \leq x)$

La función de distribución de la variable aleatoria compuesta S_t viene a expresarse a través de la distribución de la variable discreta N_t y la distribución de la variable secundaria continua X_i :

$$F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} P(N = n) \cdot P(X_1 + \dots + X_n \leq s) = \sum_{n=0}^{\infty} P(N = n) \cdot V_{(s)}^{*n} \quad [56]$$

$V_{(s)}^{*n}$ Función de distribución de la suma de n variables aleatorias o convolución n -ésima

con la esperanza matemática $E(S)$, varianza $VAR(S)$ y momento de orden 3 respecto del origen $m_3(S)$ que se indican a continuación:

$$E(X) = E(N) \cdot E(X) \quad [57]$$

$$VAR(S) = [E(N) \cdot VAR(X)] + [E^2(X) \cdot VAR(N)] \quad [58]$$

$$m_3(S) = E(X^3) \cdot E(N) + 3 \cdot (E(X^2) \cdot E(X) \cdot [E(N^2) - E(N)]) + \\ + E(X)^3 \cdot [E(N^3) - 3 \cdot E(N^2) + 2 \cdot E(N)] \quad [59]$$

A su vez, el número de sucesos puede caracterizarse mediante una variable aleatoria compuesta tal que K es el número de sucesos primarios en un período y M es el número de sucesos secundarios que, en cada instante, se relacionan con el k -ésimo suceso primario, tal que:

$$N = M_1 + M_2 + \dots + M_K \quad [60]$$

Tradicionalmente estos modelos se han utilizado en la tarificación y la solvencia de los seguros privados no vida, donde la distribución primaria se deriva del número de siniestros N en un intervalo mientras que la distribución secundaria se vincula con las cuantías X asociadas a cada siniestro. Por otra parte, K representaría el número de accidentes ocurridos en el período y M sería el número de siniestros vinculados con cada accidente. En la práctica, de cara al ajuste del número de sucesos y atendiendo a su sencillez y a la bondad en dicho ajuste, una elección de trabajo razonable parte de la utilización de una distribución discreta de Poisson de parámetro λ , con la siguiente función de probabilidad o cuantía:

$$P_\lambda(x) = P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}, \quad (\lambda > 0), \quad x = 0, 1, 2, \dots \quad [61]$$

En esta distribución teórica la media es igual a la varianza ($\mu = \sigma^2 = \lambda$) aunque, sin embargo, de los datos reales observados pueda desprenderse que ($\mu \neq \sigma^2$), lo que permitiría cuestionar esta primera elección. De igual forma, la asimetría de la distribución real puede no ser coherente con el modelo teórico basado en la distribución de Poisson de un parámetro, mientras que se han citado otros elementos problemáticos en el estudio tales como el "contagio" o el "exceso de ceros" (véase Álvarez Jareño, J.A. y P. Muñiz Rodríguez, 2010). Todos estos argumentos favorecen la búsqueda de alternativas a la hora de caracterizar funciones de distribución. Por ello, de nuevo por su bondad en el ajuste y la aplicabilidad práctica, es también habitual el uso de la distribución de Poisson compuesta, que utiliza una $Poisson(\lambda)$ como distribución primaria. El coeficiente de

asimetría γ , en función de la media μ y la varianza σ^2 , por aplicación de las características de la distribución de Poisson a [57], [58] y [59], resultaría:

$$\gamma = (\sigma^2)^{-3/2} \cdot \left(3 \cdot \sigma^2 - 2 \cdot \mu + \phi \cdot \frac{(\sigma^2 - \mu)^2}{\mu} \right) \quad [62]$$

de donde se despeja ϕ :

$$\phi = \frac{\gamma - a \cdot b}{a \cdot c} \quad [63]$$

$$a = (\sigma^2)^{-3/2} \quad , \quad b = 3 \cdot \sigma^2 - 2 \cdot \mu \quad , \quad c = \frac{(\sigma^2 - \mu)^2}{\mu}$$

3.2. Las distribuciones compuestas en la Seguridad Social

Con el objetivo de un mayor conocimiento de la realidad de la Seguridad Social, de la caracterización de sus prestaciones y de la modelización del riesgo es de interés analizar si el soporte teórico relacionado con las distribuciones compuestas y ponderadas puede utilizarse teniendo en cuenta las similitudes entre espacios económicos. Si trasladamos el planteamiento expuesto a la Seguridad Social, se ha de tener en cuenta que cada cotizante del sistema que cumpla los requisitos legales establecidos puede generar prestaciones de diversa índole en un mismo período, ya sean en beneficio propio o en el de terceros. Por ejemplo, un cotizante puede no generar ningún beneficio económico como sujeto causante u ocasionar, entre otras alternativas, una pensión por incapacidad y/o una prestación por jubilación, de las que él mismo sería el beneficiario, pero también diversas prestaciones relacionadas como la viudedad, la orfandad o el favor de familiares; a su vez, estas prestaciones pueden originarse simultáneamente dentro del mismo período o pueden acaecer en períodos diferentes (primero la jubilación y luego, por ejemplo, la viudedad).

Aquí plantearemos el análisis estrictamente desde la perspectiva de las pensiones de muerte y supervivencia, sin perjuicio de su posible extensión hacia otras contingencias. Si el cotizante vive en el período considerado (el ejercicio económico) no ha lugar a una prestación de esta naturaleza, mientras que si fallece en algún momento del ejercicio pueden concederse pensiones de viudedad, de orfandad o, si procede en el cumplimiento de los requisitos legales para su concesión, pensiones en favor de familiares, teniendo en

cuenta que pueden existir distintos beneficiarios dentro de una misma prestación y que, salvo en los supuestos recogidos en las normas, la concesión de una modalidad no tiene por qué excluir la concesión de pensiones en otra modalidad diferente (pueden considerarse excluyentes, por ejemplo, la incapacidad y la jubilación).

Ahora bien, la Seguridad Social plantea aspectos propios y particularidades respecto al modelo general que se aplica en el seguro privado. En cada ejercicio la cartera de afiliados en el sistema público de protección varía de tal forma que aquellos que hayan sido sujetos causantes de una prestación por muerte y supervivencia son personas fallecidas que no volverán a formar parte del colectivo cubierto (de la cartera de asegurados) en el ejercicio posterior, aunque igualmente ocurre en el seguro privado en los procedimientos de selección y ajuste que ocasionan rescisiones por parte del asegurador por una determinada causa, generalmente alta siniestralidad, o en la anulación de la póliza por decisión propia del cliente. Por otra parte, el coste en cada ejercicio se encuentra más limitado en la Seguridad Social; si en el seguro privado cada siniestro puede originar unas cantidades variables y de importes muy dispares, el traslado de esta dinámica a las pensiones públicas de muerte y supervivencia nos hace advertir que éstas tienen un límite anual marcado por su relación con el número de beneficiarios, el tipo aplicado y la cuantía de la base reguladora, así como por las cuantías máximas y mínimas de pensiones que cada año establecen las leyes. Además, en la cartera vinculada a la Seguridad Social la probabilidad de supervivencia tiene cierta incidencia en el acaecimiento del siniestro, aunque no siempre el hecho causante se produce en edades altas, siendo otras variables las que tienen un mayor peso definitorio en los seguros no vida.

En este punto hay que detenerse en la hipótesis asumida en el modelo sobre la independencia de las cuantías individuales respecto del tiempo –o inexistencia de inflación–, susceptible de vulnerarse en la Seguridad Social por cuanto las cuantías de las pensiones se revalorizan con un índice. Ahora bien, en el seguro privado el coste del siniestro en un ejercicio se compone de partidas conocidas y satisfechas y costes estimados por cuanto se sabe acerca de la cobertura afectada pero no su importe definitivo, estimaciones que varían en el tiempo y no están exentas de verse afectadas por la evolución de los precios según la duración de la contingencia afectada. Así, en la Seguridad Social existe la posibilidad de contemplar la cuantía de la prestación valorada en un único ejercicio a través de su valor actual actuarial, incorporando más variabilidad al modelo puesto que la edad del beneficiario y la naturaleza de la prestación, temporal o vitalicia, darían lugar a diferentes casuísticas para un mismo importe.

Por otra parte, aunque muchos de los extremos que aquí se abordan no son de fácil comprobación por la ausencia de información pública y/o consistente (véase el Anexo II al respecto), es razonable pensar que el valor “cero” (el sujeto causante no ha generado ninguna prestación a su cargo) para el número de pensiones en un ejercicio sería el de mayor frecuencia, al igual que ocurre en los seguros generales, aunque en la distribución de costes de la Seguridad Social, por las propias reglas de cálculo, no habría una especial sensibilidad hacia una distribución de las denominadas de “cola larga” -por la derecha- (o al menos de cola muy larga), esto es con un número muy pequeño de sucesos de alta cuantía en relación los acaecidos en otros percentiles de coste, al contrario de lo que sí puede suceder en los seguros no vida; es cierto que en los importes altos de pensiones el número de individuos es pequeño (véase el capítulo III), aunque la existencia de pensiones máximas y la distancia de este valor con el de los distintos percentiles de coste determinan las características de la cola derecha de la distribución. En el seguro privado no vida el “inflado de ceros” ha sido explicado en parte por la existencia de siniestros no comunicados para no perder bonificaciones por ausencia de siniestralidad, algo que en la Seguridad Social en relación con las pensiones de muerte y supervivencia esto no parece asumible, pues si acaso lo que se produciría es el suceso contrario: la comunicación de sucesos que den lugar a una prestación sin que realmente corresponda, en un ejercicio fraudulento de la actividad.

Sobre el “contagio”, entendido éste como la situación en la que el acaecimiento de un suceso incrementa la probabilidad de ocurrencia de otro suceso (generalmente de la misma naturaleza), no parece que en las pensiones de muerte y supervivencia en sí mismas exista una sensibilidad hacia su aparición, pues al basarse en el fallecimiento del sujeto causante no es posible pensar en un nuevo suceso asociado al mismo. En cuanto a la naturaleza de una posible “sobre-dispersión”, es decir, que la varianza de la muestra sea superior a la media de la misma, esto es algo que podría ser factible en la Seguridad Social atendiendo a los gráficos de las distribuciones de coste que se exponen en el capítulo III, lo que advertiría de la presencia de parámetros a concebir como variables aleatorias y no como valores constantes.

Por último, otra diferencia entre sectores es el objetivo filosófico de la aplicación de las distribuciones compuestas, pues si en los seguros generales pueden ser de utilidad en la tarificación –a priori o a posteriori junto con los sistemas *bonus-malus*-, en las pensiones públicas, por sus características, la primera orientación se dirige a la caracterización y conocimiento de los fenómenos relacionados con su campo de actuación a través de distribuciones que ajusten mejor la variabilidad de las observaciones muestrales y permitan una mejor modelización del riesgo. Teniendo en cuenta todos estos aspectos,

dentro del desarrollo práctico de esta opción de estudio se acudiría a una muestra de la cartera de la Seguridad Social en la que se recogiese el número de afiliados que en el ejercicio considerado han generado un número de pensiones determinado según la siguiente base:

Tabla 2. Frecuencias absolutas observadas

Pensiones Muerte y supervivencia	Número de afiliados. (F°)
0	N ₀
1	N ₁
...	...
≥n	N _n
Total	$N = \sum_{i=1}^n N_i$

F° Frecuencias observadas

Siguiendo la metodología recogida en Vilar Zanón, J.L. y J. Vegas Asensio (1998), desde [62] se obtiene información previa sobre la distribución buscada y se favorece la elección de distribuciones en base a los datos obtenidos a través de la muestra. Así, sean μ_k el *momento de orden k respecto a la media* y m_k el *momento de orden k respecto al origen de la distribución*, sus resultados muestrales serían los siguientes:

Tabla 3. Momentos de orden k respecto al origen y respecto a la media¹⁴⁷

k	\hat{m}_k	$\hat{\mu}_k$
1	E(N)=μ	E [(N-μ)] = 0
2	E(N ²)	E [(N-μ) ²] = m ₂ - (m ₁) ²
3	E(N ³)	E [(N-μ) ³] = m ₃ - (3·m ₂ · m ₁) + 2·(m ₁) ³
4	E(N ⁴)	E [(N-μ) ⁴] = m ₄ - (4·m ₃ · m ₁) + (6·m ₂ m ₁ ²)-3·(m ₁) ⁴

de donde se obtienen el coeficiente de asimetría muestral $\hat{\gamma}$ y el coeficiente de curtosis muestral $\hat{\kappa}$ a través de los momentos respecto al origen:

$$\hat{\gamma} = \hat{\mu}_3 \cdot (\hat{\mu}_2)^{-\frac{3}{2}} \quad [64]$$

¹⁴⁷ Sobre la relación entre los momentos factoriales, los momentos respecto al origen y los momentos respecto a la media véase Panjer, H.H. y G.E. Willmot (1992), págs. 28 a 30. En esta misma obra se recoge la ecuación [65] eliminando la constante por cuanto ésta es el valor que alcanzaría la curtosis en la distribución Normal.

$$\hat{\kappa} = \hat{\mu}_4 \cdot (\hat{\mu}_2)^{-2} - 3 \quad [65]$$

Sustituyendo en [63] el valor de los parámetros obtenidos según los correspondientes momentos, se obtiene el resultado para ϕ , desde el cual se obtendría una primera aproximación a la función de distribución buscada gracias a su comparación con las características de las distribuciones teóricas. Desde el valor de ϕ se obtendrían los parámetros correspondientes a la distribución secundaria y el estimador λ de la distribución de Poisson primaria.

La distribución de Poisson compuesta según estas características daría lugar a unas frecuencias teóricas que se utilizarán para la aplicación de métodos para el ajuste de distribuciones univariantes, por ejemplo el estadístico χ^2 de Chi-cuadrado basado en la comparación de las frecuencias observadas y las frecuencias teóricas para un nivel de significación α^{148} , un número de categorías n y un número de k parámetros estimados.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(F_i^o - F_i^e)^2}{F_i^e} \sim \chi_{\alpha, n-k-1}^2 \quad [66]$$

F_i^o Frecuencias observadas en la clase i -ésima, $i=1\dots n$

F_i^e Frecuencias esperadas en la clase i -ésima, $i=1\dots n$

Establecidas la hipótesis nula H_0 y alternativa H_1 :

H_0 : Los datos muestrales se ajustan a una distribución determinada

H_1 : Los datos muestrales no se ajustan a una distribución determinada

Si $\chi^2 < \chi_{\alpha, n-k-1}^2$ no se rechazará la hipótesis nula y los datos muestrales se ajustan a la distribución correspondiente, mientras que si $\chi^2 \geq \chi_{\alpha, n-k-1}^2$ entonces no se acepta la hipótesis nula y sí la hipótesis alternativa H_1 .

Desde la distribución del número de sucesos, gracias a que las distribuciones de Poisson compuestas son cerradas por convolución, se obtendría el número de ellos para todo el colectivo en el ejercicio. En cuanto a la distribución de la variable aleatoria *cuantía individual de los sucesos* (siniestros en el caso del seguro privado, que presentan diferencias respecto a las pensiones como instrumento, por ejemplo en la distribución

¹⁴⁸ Normalmente para la aplicación de χ^2 se requiere un tamaño muestral ($n > 30$) y frecuencias esperadas con un valor al menos de 5.

temporal dentro del ejercicio) se parte de la situación que se muestra en la siguiente tabla, desde la que igualmente se pueden calcular los correspondientes momentos y los parámetros fundamentales de la distribución.

Tabla 4. Estructura de costes por suceso

Intervalo de coste	Número de sucesos	Coste Medio intervalo
$[0, s_1)$	n_1	$\frac{s_1}{2}$
$[s_1, s_2)$	n_2	$s_1 + \frac{(s_2 - s_1)}{2}$
...
$\geq s_n$	n_n	$s_n + \frac{(s_{\text{máximo}} - s_n)}{2}$
Total	N	

Finalmente, de los pasos dados hasta el momento se debería valorar si la distribución de la variable *coste total* para un ejercicio, S_t , según los datos muestrales obtenidos es una distribución compuesta cuya distribución primaria es una distribución compuesta Poisson, y una secundaria que es la distribución de coste de las pensiones. Para el cálculo de sus expresiones el acercamiento se realiza a través de algoritmos recursivos o, por ejemplo, mediante una aproximación a una distribución conocida. A través del desarrollo práctico se observaría si las distribuciones compuestas aportan más información que las distribuciones de un parámetro de cara a las prestaciones de la Seguridad Social pues, como bien dicen, Álvarez Jareño, J.A. y P. Muñiz Rodríguez (2010), "distribuciones más complejas (con mayor número de parámetros) no tienen *por qué* aportar mejoras significativas en las características requeridas a un sistema (...)".

Desafortunadamente, pese a que del corpus teórico se desprende que las técnicas actuariales de gestión del riesgo colectivo podrían ser aplicadas al estudio de la Seguridad Social, el propio sistema público de protección no ofrece información accesible suficiente, inequívoca y completa que permita por el momento trasladar el modelo teórico hacia unos resultados prácticos (véase el Anexo II). Sin embargo, al menos se constata la posibilidad de la aplicación de herramientas estadísticas y actuariales a la Seguridad Social y a su estudio sin que ello requiera una transformación de su paradigma y su financiación, por lo que esta línea de investigación queda abierta a futuros desarrollos dentro de la dinámica abordada.

4. Consideraciones al capítulo II

Desde su concepción inicial a principios del siglo XX, las prestaciones públicas por muerte y supervivencia han ido transformándose para adaptarse a la incertidumbre y las características socioeconómicas de la población cubierta. Sin embargo, a pesar de una mayor cobertura en importes y beneficiarios, el sistema presenta ineficiencias derivadas principalmente de la indeterminación de su objetivo fundamental, dando lugar a una mezcla de elementos contributivos y no contributivos que rompen la lógica de su propio marco protector y la de su vínculo con otras dinámicas de cobertura. Las sucesivas modificaciones han ido ampliando el espacio de protección, pero lo han hecho de forma dispar y, en ocasiones, sin apuntalar el poso filosófico que debiera dirigir su actividad, dando lugar a un espacio jurídico contradictorio que dificulta cualquier iniciativa de actuación.

Las prestaciones por muerte y supervivencia tienen una gran importancia en la protección de los ciudadanos, aunque en su configuración actual se centren en la compensación del daño económico frente a la satisfacción de supuestos de necesidad. Extienden la protección más allá del espectro laboral, pues aunque los derechos se generan directa o indirectamente gracias al mercado de trabajo su cobertura también alcanza a personas que no se relacionan con el mismo. Además, su acción se ve completada con otros beneficios monetarios y en especie, además del propio patrimonio del perceptor, que hacen difícil mantener la tradicional imagen del beneficiario desamparado, actuando mediante unos regímenes prácticamente homogéneos y ciertas particularidades para el seguro escolar, los empleados públicos, el régimen del SOVI o los hechos causantes derivados de actos de terrorismo. Todo ello lleva a unas estimaciones cercanas a los 22,83 millones de euros anuales de coste para 2015, el 91% aproximadamente centrado en las pensiones de viudedad, y un total estimado de 2.741.459 pensiones para este año, cifras nada desdeñables para un Estado que pretende mantener un decidido compromiso social con sus ciudadanos.

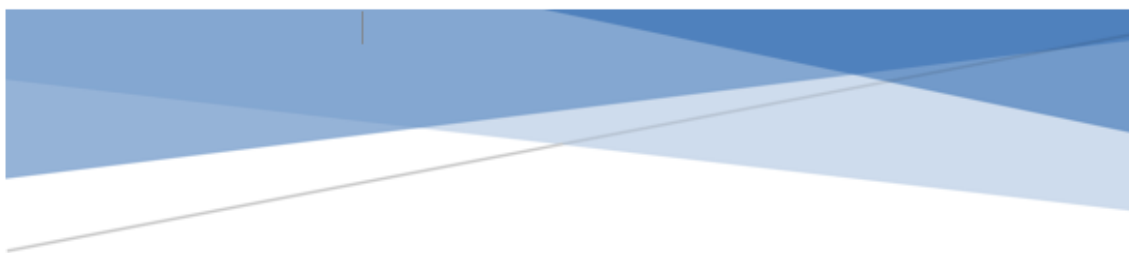
Ahora bien, es difícil observar cuál va a ser el futuro de estas prestaciones ante homogeneidad normativa, pues se ven afectadas por diversas fuentes de incertidumbre, muchas de ellas de signo contrario: la variación al alza de la esperanza de vida alcanza a los beneficiarios pero también a los sujetos causantes que son generadores del derecho; es indudable la transformación del núcleo familiar y de su papel como colaborador en la protección de las personas debido en parte al alejamiento entre generaciones y el éxodo del mundo rural; las mujeres, tradicionales perceptoras a raíz de la existencia de un modelo socioeconómico concreto, afortunadamente van generando derechos para sus

propias prestaciones sin la dependencia de un tercero; los vínculos conyugales y la introducción de otros hábitos culturales crean nuevas realidades y necesidades que afectan al sistema, etc.

Por otra parte, en el plano internacional no existe una dinámica común y orientadora respecto a su diseño, pues lógicamente cada país adecúa sus sistemas a sus recursos y filosofía de protección, si bien no debe olvidarse que el apoyo social a las personas se articula en España mediante un entramado que trasciende a la Seguridad Social, lo que favorece la eliminación de posibles barreras causadas por situaciones de necesidad o exclusión. A pesar de todo, conocido que la Seguridad Social parte de una situación de inequidad actuarial, se ha observado que dentro de su estudio y caracterización total o parcial es posible incorporar herramientas estadísticas y actuariales vinculadas a la teoría del riesgo colectivo que ayuden a comprender su presente y futuro, por ejemplo, mediante la función de distribución de la variable compuesta S_t , importe de coste económico en el período, tal que:

$$F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} P(N = n) \cdot V_{(s)}^{*n}$$

La especial naturaleza de la cobertura y la amplísima heterogeneidad en las características de los beneficiarios, algunos de los cuales no pueden obtener rentas propias por impedimento legal, nos hacen dar por supuesto que cualquier posibilidad de reforma que conlleve una mínima restricción ocasione una amplia resistencia al cambio. Aun así, dentro de un análisis conjunto es prioritario concretar rigurosamente el objetivo de estas prestaciones, algo que no está correctamente planteado en la actualidad. En nuestra opinión, las prestaciones de muerte y supervivencia deben orientarse a compensar, de forma temporal, los recursos perdidos por la ausencia del sujeto causante, completando así la suficiencia económica de los beneficiarios y favoreciendo su integración social. Aquellas situaciones que se encuentren más allá de este núcleo fundamental deberían ser cubiertas a partir de otras posibilidades de acción, muchas de las cuales se encuentran plenamente vigentes, por lo que corresponderá a los poderes públicos articular un espectro de protección completo acorde a las verdaderas necesidades de los ciudadanos.



CAPÍTULO III

LAS PRESTACIONES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA COMO INSTRUMENTOS DE COBERTURA INDIVIDUAL. ESTUDIO Y ALTERNATIVAS PARAMÉTRICAS PARA SU REFORMA

Díselo tú una vez, que no faltará quien se lo acuerde ciento.

Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Miguel de Cervantes Saavedra.

CAPÍTULO III. LAS PRESTACIONES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA COMO INSTRUMENTOS DE COBERTURA INDIVIDUAL. ESTUDIO Y ALTERNATIVAS PARAMÉTRICAS PARA SU REFORMA

El sistema español de protección por muerte y supervivencia en la Seguridad Social se articula mediante una combinación de prestaciones de distinta naturaleza y ambiguo objetivo teórico, si bien difieren de las correspondientes al ámbito familiar, que generalmente se otorgan mientras el sujeto causante vive y se requieren apoyos económicos adicionales ante el incremento de las necesidades familiares. Desde una perspectiva general, la protección de las personas parte de un escenario más amplio que el que surge de la Seguridad Social, puesto que la iniciativa individual o los convenios colectivos y contratos laborales pueden recoger otros instrumentos análogos con finalidad semejante: indemnizaciones por fallecimiento, ayudas por sepelio, seguros de vida individuales y/o colectivos, etc. Finalmente, la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos también se completa con otros instrumentos que proceden de la iniciativa local, autonómica o estatal.

Ahora bien, la falta de un objetivo común claro e inequívoco en el conjunto de prestaciones públicas de carácter estatal origina un escenario confuso para ciudadanos, profesionales e investigadores en la materia que ha dado lugar a criterios difusos en la jurisprudencia y a planteamientos muy discutibles en el ámbito legislativo o científico. La flexibilidad indiscriminada, la solidaridad desacertadamente entendida y la acción –mal-denominada como **humanizadora* han socavado las raíces filosóficas y conceptuales de las prestaciones y añadido una amplia incertidumbre en el diseño y en su aplicación práctica. A su vez, en el ámbito de la transferencia de renta esto ha dado lugar a un hecho realmente paradójico en la comparación de coberturas que responden a una diferente definición legal pero no siempre a una realidad social distinta: ante igualdad de base reguladora se puede percibir más pensión de quien “no ha cotizado” o ha cotizado menos que la establecida para la persona haya cotizado un período de tiempo determinado. Este supuesto es demoledor en términos de justicia social, de equidad y de eficiencia en un sistema de seguridad social que dice ejecutar una parte de su acción mediante una modalidad contributiva.

La definición del objetivo es el punto de partida para ubicar las prestaciones en el modelo de protección y en la modalidad correspondiente, pues en estos momentos existe una financiación contributiva que, sin embargo, da soporte a protección asistencial sin que quede bien definido cuál es la naturaleza de los beneficios y que genera situaciones de marcada ineficiencia. La clarificación y corrección de este desacertado diseño es un

elemento trascendental a la hora de plantear posibles reformas posteriores de carácter paramétrico. Dada la naturaleza de las prestaciones y la relación entre ellas las alternativas de acción sobre sus parámetros no son independientes unas de otras y, por ello, ciertas propuestas extienden su aplicación hacia otras prestaciones o, en ocasiones, requieren una iniciativa previa en otras coberturas.

En este capítulo se estudiarán individualmente y de una forma más detallada las prestaciones de muerte y supervivencia en España, planteándose una revisión crítica de cada clase y distintas propuestas de reforma para cada una de ellas desde una perspectiva principalmente paramétrica que se centre en sus especificidades, es decir, manteniendo la esencia y la estructura actual de la prestación pero modificando alguno de los parámetros que dan cuerpo a su definición, bien entendido que la estrecha vinculación entre parámetros y estructura permitirá a su vez plantear reformas de raigambre más estructural aunque eminentemente individual.

Las líneas directrices de las modificaciones aquí tratadas parten, en términos generales, de una perspectiva de mantenimiento de la idiosincrasia actual pero se orientan hacia una mayor lógica y eficiencia de la protección en su ubicación dentro del sistema; la reducción de costes, aunque cuando puede alcanzarse a través de algunas de las reformas paramétricas aquí planteadas, no es siempre el objetivo primordial con el que se trabaja en este apartado.

1. EL AUXILIO POR DEFUNCIÓN

1.1. Definición y antecedentes

Desde una perspectiva teórica el *auxilio por defunción* se ubica entre las prestaciones por muerte y supervivencia, si bien su concreción práctica cambia según el modelo de cobertura en el que se aplique. Puede considerarse como un *auxilio por defunción* genérico a la prestación encargada de la cobertura de los riesgos inherentes al fallecimiento de una persona, lo que desde esta óptica incluiría un amplio número de acciones con diversos fines y diseños si bien, habitualmente, las distintas legislaciones han segregado de este elenco coberturas específicas como la *viudedad*, la *orfandad* o las *prestaciones a familiares*, quedando concretamente a cargo del propio auxilio por defunción aquella protección relacionada con los gastos relativos al tratamiento de los restos mortales tras un fallecimiento¹⁴⁹.

Tal y como se recoge en Hernández González, D. y J.E. Devesa Carpio (2015), un auxilio por defunción puede presentar como objetivo principal la cobertura del lucro cesante o la compensación parcial o total de gastos ya satisfechos, principalmente los citados sobre el tratamiento de los restos mortales tras el óbito. Puede asociarse a un hecho causante de naturaleza global, común o profesional, y concederse considerando o no las características de los beneficiarios, por ejemplo la existencia de una necesidad socioeconómica. También puede ser otorgado como reembolso de gastos –generalmente hasta una cuantía determinada-, como prestación de servicios o en forma de capital, renta temporal o vitalicia, y no es extraño establecer requisitos adicionales para su concesión: períodos de cotización o afiliación, años de residencia, etc. Por último, el causante puede ser el propio asegurado pero también alguien de su entorno según un determinado grado de relación o parentesco recogido en la legislación.

En el capítulo II se ha dado cuenta de la evolución del auxilio por defunción en España desde las sociedades de socorros mutuos hasta la concreción del modelo contemporáneo en la *Ley 193/1963, de 28 de diciembre*, y sus desarrollos normativos, donde se fijó el importe del subsidio en 5.000 pesetas (30,05€), cuantía que no habría de cambiar hasta más de 40 años después a través de la disposición adicional décima de la *Ley 40/2007, de 4 de diciembre*.

¹⁴⁹ Es habitual encontrar en la legislación referencias ligadas estrictamente al procedimiento de inhumación (sepelio, funeral, etc.), si bien deben considerarse generalmente extendidas al procedimiento de cremación.

1.2. El auxilio por defunción en España

1.2.1. El régimen jurídico

En el Régimen General de la Seguridad Social es el artículo 173 de la *LGSS* el que define el auxilio por defunción, quedando los sujetos causantes recogidos en el artículo 172 de la misma norma, quienes deberán cumplir los requisitos generales establecidos para el derecho a las prestaciones: afiliación y la situación de alta o asimilada al alta¹⁵⁰. Junto a la existencia de un fallecimiento y de los requisitos anteriormente citados, para la concesión del auxilio por defunción es además necesaria la existencia de un tratamiento de los restos mortales que haya originado gastos, lo que excluye aquellas muertes presuntas a causa de accidente en las que no existe un cadáver, tal y como expone el artículo 172.3 de la *LGSS*:

Los trabajadores que hubieran desaparecido con ocasión de un accidente, sea o no de trabajo, en circunstancias que hagan presumible su muerte y sin que se hayan tenido noticias suyas durante los noventa días naturales siguientes al del accidente, podrán causar las prestaciones por muerte y supervivencia, excepción hecha del auxilio por defunción. (...)

Respecto al beneficiario, en puridad quien ha satisfecho los gastos relacionados con el tratamiento de los restos mortales del finado, la ley establece una presunción legal de tal resarcimiento dentro de la familia del difunto: cónyuge o sobreviviente de una pareja de hecho legalmente reconocida en los términos marcados por la *LGSS*, hijos y otros parientes, no exigiéndose expresamente convivencia para los dos primeros supuestos¹⁵¹ y sí para descendientes y otros allegados.

Por tanto, estamos ante una prestación que se paga ante un fallecimiento, independientemente del carácter de éste, y si el sujeto causante estuviese afiliado a la Seguridad Social y en alta (o situación asimilada). En España, su cuantía se satisface en forma de capital mediante un único pago y se dedica a la compensación de gastos, con un carácter universal en lo que se respecta a las características del beneficiario siempre que éste sea quien haya satisfecho los gastos del sepelio. Para el acceso a esta prestación no se exigen expresamente períodos previos de cotización y es la única de entre las correspondientes a muerte y supervivencia que está sujeta a prescripción. Como queda dicho, el sistema asume la prelación de beneficiarios basándose en la

¹⁵⁰ Artículo 124 de la *LGSS*.

¹⁵¹ Por lo que Rodríguez Iniesta, G. (2006) y (2009) concluye que "de la presunción se puede beneficiar el cónyuge separado".

presunción, si bien sólo se reconoce expresamente tal condición a los familiares del fallecido, salvo prueba en contrario. Pero también se promueve una situación de exclusión directa, la del propio sujeto causante, quien pudiera haber satisfecho de forma anticipada los gastos del sepelio mediante un seguro privado de decesos. Así, quien habría satisfecho tales gastos –el fallecido- es persona diferente de quien presume la ley –sus familiares- sin que el primero pueda acudir al ejercicio de la prueba. Si los familiares perciben “de forma inmediata” el auxilio por defunción se podría pensar en una situación equívoca, pues debería valorarse si el importe satisfecho debiera formar parte del caudal de la herencia.

Conforme a la *Ley 40/2007, de 4 de diciembre*, la cuantía del auxilio por defunción se ha ido actualizando en el tiempo desde ese ejercicio: un 10% anual en los cinco ejercicios siguientes y a partir de ese momento con la variación del Índice de precios al consumo – esto es, uniformidad durante más de cuatro décadas-, quedando el importe para 2015 en 46,50€. Al no ser el auxilio por defunción una pensión propiamente dicha, en teoría se mantendría en la actualidad el proceso de su revalorización mediante el Índice de precios al consumo, no siéndole de obligatoria aplicación la modificación introducida en el artículo 48 de la *LGSS* a través de la *Ley 23/2013, de 23 de diciembre*; es decir, esta prestación se mantendría al margen del Índice de revalorización de las pensiones (*IRP*), algo que no deja de ser, a nuestro juicio, una curiosa particularidad en un modelo de protección que mantiene distintos sistemas de revalorización.

Las características del modelo del Régimen General aquí citadas se trasladan directamente a los siguientes regímenes especiales: trabajadores por cuenta propia, trabajadores del mar y trabajadores de la minería del carbón, quedando las especificidades para el Régimen de funcionarios y el Seguro escolar (véase epígrafes 1.2.2.4. y 1.2.2.5. del capítulo II).

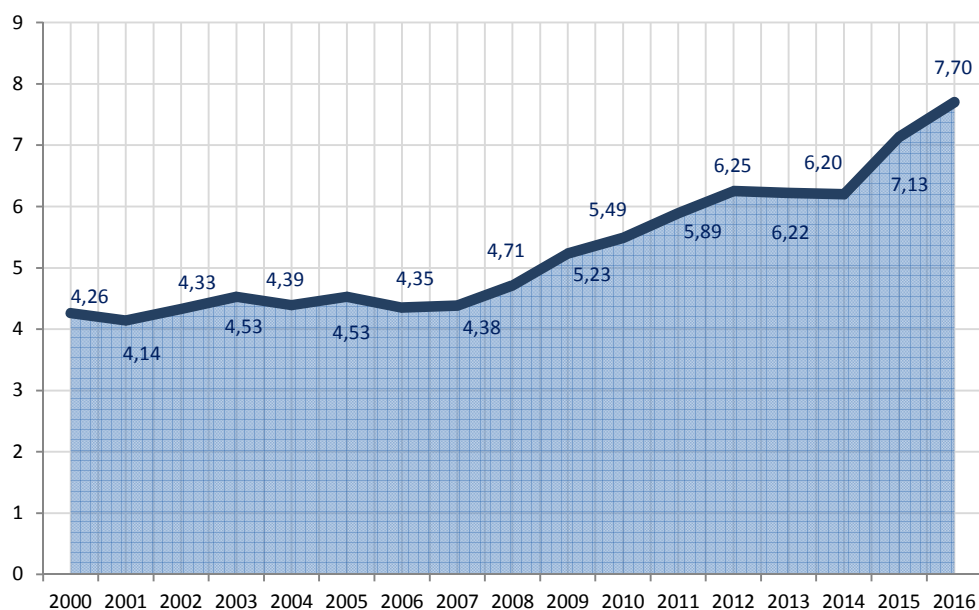
1.2.2. Caracterización socioeconómica

Sea N_t el número de prestaciones de auxilio por defunción otorgadas en cada ejercicio, puede realizarse una estimación de su valor partiendo del coste total anual S_t de la prestación y relacionándolo con el importe individual C_t , constante dentro de cada ejercicio, de tal forma que se tienen las siguientes expresiones y resultados:

$$S_t = N_t \cdot C_t \quad \rightarrow \quad N_t = \frac{S_t}{C_t} \quad [67]$$

$$C_t = C_{t-1} \cdot (1 + \alpha_t)$$

Gráfico 18. Gasto anual en auxilio por defunción



Fuente: elaboración propia con datos del *Informe Económico-Financiero del Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 2016*. Años 2015 y 2016, datos estimados. Millones de euros.

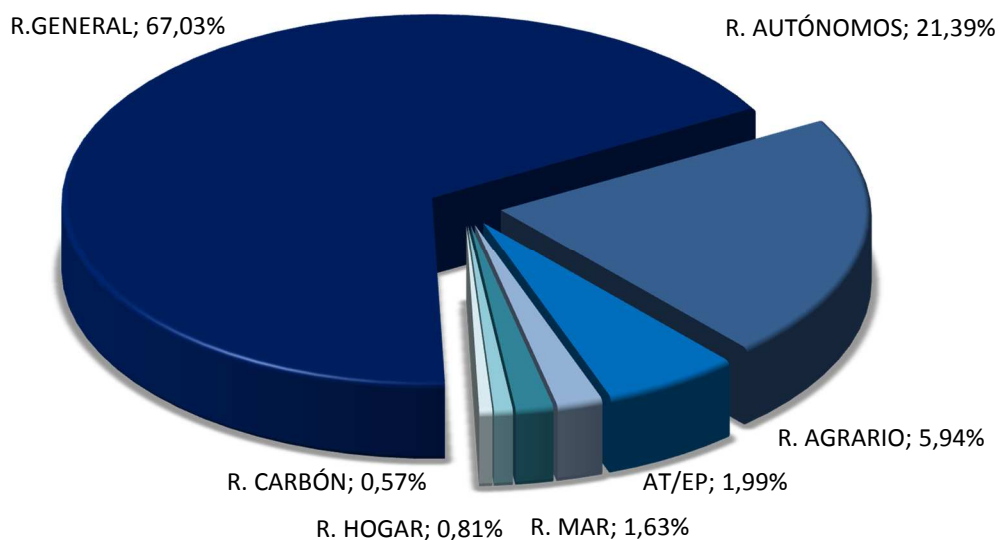
Cuadro 17. Auxilio por defunción. Cuantía y número estimado de beneficiarios

Año	C _t	N _t
1967	30,05 €	
....	30,05 €	
2007	30,05 €	145.757
2008	33,06 €	142.468
2009	36,37 €	143.800
2010	39,08 €	140.481
2011	42,09 €	139.938
2012	45,10 €	138.581
2013	46,41 €	134.023
2014	46,50 €	133.333
2015	46,50 €	153.333
2016	46,50 €	165.591

Fuente: elaboración propia con datos de la Seguridad Social. *Informe Económico-Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Años 2015 y 2016, datos estimados para el coste total anual.

En cuanto a los datos económicos por regímenes, una aproximación a la distribución de los gastos presupuestados para la cobertura del auxilio por defunción por regímenes de la Seguridad Social es la que se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 19. Porcentaje de gastos presupuestados por regímenes para el auxilio por defunción según el promedio del período 2008-2016



Fuente: elaboración propia con datos presupuestarios de la Seguridad Social. Años 2015 y 2016, estimaciones.

A raíz de estos valores no hay duda de la irrelevancia económica del auxilio por defunción dentro del conjunto del gasto en seguridad social¹⁵², pues en el período 2000-2016 ha supuesto, en promedio, el 0,0048% del coste total, explicación de la escasa preocupación académica e institucional por esta cobertura.

Igualmente, el auxilio por defunción es una prestación eminentemente simbólica en el ámbito social. Un fallecimiento conlleva normalmente unos gastos de sepelio de gran variabilidad dependiendo del lugar geográfico, el tamaño y las características del municipio en que aquél tiene lugar, así como de los servicios inherentes al acto. Por las características del hecho causante -el fallecimiento de una persona-, a priori la demanda es inelástica y el precio no debería inicialmente influir en la misma aunque, debido a la composición y características del servicio prestado, es razonable pensar en tal incidencia a partir de un mínimo; se está ante una necesidad ineludible de primer orden y no existe una capacidad de decisión acerca de la realización o no del servicio, aunque sí sobre sus componentes y costes (incineración frente a inhumación, calidad del féretro y elección de servicios adicionales, etc.), con una incidencia adicional por la subida en 2012 del Impuesto sobre el Valor Añadido (del 8% al 21%) a pesar de que se está ante un acto de primera necesidad en materia de salud pública, lo que fomentará la tendencia a la

¹⁵² A pesar de la importancia que haya podido tener la prestación en tiempos pretéritos según Rodríguez Iniesta, G. (2006). Págs. 172-173.

reducción de costes por parte del pagador. Dentro de esta alta variabilidad del coste, Díaz Pedraza, V.L (2013)¹⁵³ cita un coste medio nacional de entre 2.500 y 3.000 euros por servicio. Respecto al auxilio por defunción hay que decir que, sea cual sea el coste económico real asociado a una defunción en España, la cuantía general de la cobertura pública de la Seguridad Social es muy inferior a aquél, por lo que la prestación no es capaz, ni siquiera mínimamente, de hacer frente a los desembolsos necesarios en un fallecimiento¹⁵⁴, independientemente de la posible existencia de un seguro de decesos cuya cobertura ha ocasionado previamente unos gastos derivados del pago de las primas correspondientes.

1.3. El auxilio por defunción, ¿es una opción de futuro?

El auxilio por defunción en la Seguridad Social española es ciertamente una prestación alejada de un criterio de protección. Su escasa cuantía, insuficiente de cara a una cobertura eficaz desde perspectivas económicas o sociales, hace que sea imprescindible replantearse su papel dentro del conjunto del sistema, ya que incluso se aleja de la tónica general de acción en la mayoría de los países europeos.

La primera alternativa, claro está, es no realizar ninguna modificación en el diseño actual, dando una falsa impresión de seguridad y de acción pública eficiente. Esta situación de inmovilidad no es solamente una equivocación dentro de un planteamiento social, sino que el escaso importe de la cuantía concedida en la actualidad dificulta incluso tomar en consideración propuestas de reforma que no graviten sobre la misma. Entre estas propuestas podría encontrarse el establecer requisitos para la concesión según un número mínimo de cotizaciones realizadas o la imputación del coste del auxilio por defunción al empleador ante un accidente de trabajo y enfermedad profesional cuando haya existido incumplimiento por su parte en materia de prevención y salud laboral.

Obviamente esta situación de parálisis en la reforma no debería siquiera tenerse en cuenta, por lo que aquí consideraremos como una primera alternativa mantener la prestación en la modalidad contributiva y elevar su cuantía hasta un nivel mínimo que

¹⁵³ Díaz Pedraza, V.L. (2012): "Decesos al rescate". *Revista Funeraria*, nº 110. Dic 2012–Ene 2013. Págs. 62-63.

<http://www.revistafuneraria.com/Portals/0/FlippingBook/Numeros/RF%20n%20110/HTML/files/assets/basic-html/page62.html>

¹⁵⁴ Lo que hace decir a García Viña, J. y M.P Rivas Vallejo (1996) que "su escasa cuantía motiva que sea inútil para la función concebida".

permita un acercamiento a un límite de cobertura que favorezca la adecuación a sus teóricos objetivos con un mínimo de garantía. Desde una perspectiva práctica, con los datos estimados para el ejercicio 2016, la elevación de la cuantía por acto a 300, 500 ó 950 euros para un número de prestaciones de 165.591 daría lugar a los incrementos de coste estimados que se presentan en el cuadro siguiente para ese ejercicio:

Cuadro 18. Incremento de coste total anual ante variaciones del coste por prestación

	C* ₂₀₁₆	C ₂₀₁₆	Δ C ₂₀₁₆	% Δ C ₂₀₁₆ / Gasto Total
300 €	49.677.300 €	7.700.000 €	41.977.300 €	0,0298%
500 €	82.795.500 €	7.700.000 €	75.095.500 €	0,0533%
950 €	157.311.450 €	7.700.000 €	149.611.450 €	0,1062%

Fuente: elaboración propia y *Proyecto de presupuestos de la Seguridad Social 2016*.

C*₂₀₁₆: Coste global de las nuevas cuantías estimadas para el ejercicio 2016.

Otra opción en esta línea es la concesión de una cuantía única por el importe de una base reguladora del sujeto causante. Si, simplificando, se parte de la base reguladora media de las altas en pensiones de muerte y supervivencia de 2014 según la muestra MCVL-2014 (861,19€), cuando se aplican los datos promedio obtenidos al número estimado de percepciones por auxilio de defunción en ese ejercicio (133.333)¹⁵⁵ resulta que, en vez de un gasto realizado de 6,20 millones de euros, la percepción de una base reguladora habría supuesto un importe máximo de 114,83 millones de euros.

Frente a un mayor valor añadido de la prestación se puede oponer el incremento de coste para el sistema que se deriva de la aplicación de estas opciones, si bien es obvio que los posibles problemas acerca de su sostenibilidad no vendrían derivados de esta contingencia; como se aprecia, aun en el supuesto de incrementar la prestación a 950€ por acto la variación de su coste no supone un porcentaje relevante sobre el coste total estimado para 2016.

Dentro del campo contributivo también se puede incidir en la naturaleza contributiva de la prestación, con una cuantía individual acorde a la carrera de cotizaciones realizada por el sujeto causante. Independientemente de su influencia económica y social, esta opción no resolvería los problemas que actualmente se detectan en el diseño si no se combinase con otra alternativa, pues se mantiene la irrelevancia del importe mínimo concedido por el sistema. La configuración de esta posibilidad tiene en la práctica múltiples

¹⁵⁵ En base a los datos del *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 2016*.

posibilidades. Por ejemplo, para determinar la cuantía única del auxilio por defunción C^{AUX} se puede acudir a una función lineal, con los resultados mostrados en la Tabla 3:

$$C^{AUX} = C_{min} + \alpha \cdot (C_{max} - C_{min}) \quad [68]$$

C_{min} Límite mínimo de cálculo

C_{max} Cuantía máxima del auxilio por defunción

α Relación entre la base reguladora del sujeto causante y la base reguladora máxima

Tabla 5. Valoración alternativa del coste del auxilio por defunción

Pensión media	C_{2014}	Nuevo auxilio	C^*_{2014}
150,00 €	132.897,00 €	73,13 €	209.004,05 €
200,01 €	246.729,00 €	82,01 €	435.133,10 €
275,01 €	539.167,50 €	95,32 €	1.105.264,20 €
325,01 €	493.272,00 €	104,20 €	1.105.342,74 €
375,01 €	298.344,00 €	113,08 €	725.492,21 €
425,01 €	325.453,50 €	121,95 €	853.541,78 €
475,01 €	280.162,50 €	130,83 €	788.241,43 €
550,01 €	499.317,00 €	144,14 €	1.547.809,60 €
650,01 €	2.433.019,50 €	161,90 €	8.470.893,69 €
750,01 €	523.822,50 €	179,65 €	2.023.747,81 €
850,01 €	417.988,50 €	197,40 €	1.774.447,90 €
950,01 €	256.029,00 €	215,16 €	1.184.644,16 €
1.050,01 €	184.605,00 €	232,91 €	924.645,22 €
1.150,01 €	123.411,00 €	250,66 €	665.254,56 €
1.250,01 €	95.604,00 €	268,41 €	551.859,36 €
1.350,01 €	103.881,00 €	286,17 €	639.297,24 €
1.450,01 €	158.983,50 €	303,92 €	1.039.102,67 €
1.550,01 €	29.806,50 €	321,67 €	206.192,42 €
1.650,01 €	3.813,00 €	339,43 €	27.832,93 €
1.750,01 €	1.116,00 €	357,18 €	8.572,30 €
1.850,01 €	883,50 €	374,93 €	7.123,71 €
1.950,01 €	790,50 €	392,68 €	6.675,64 €
2.277,26 €	1.906,50 €	450,78 €	18.482,05 €
2.554,50 €	186,00 €	500,00 €	2.000,00 €
Total	7.151.188,50 €		24.320.600,77 €

Fuente: elaboración propia con datos del *Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 2016*.

De acuerdo con la tabla anterior, para ver la implicación económica del modelo ante la falta de información pública oficial, nos situamos en el ejercicio 2014 y establecemos los siguientes valores: $C_{min}=46,50€$ y $C_{max}=700€$ mientras que para determinar el parámetro α nos basaremos en la estructura de la cuantía por segmentos de coste de la pensión de

viudedad para 2015 que proporciona el *Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social de 2016*.

Para cada segmento de coste obtendremos una “base reguladora” ficticia mediante el cociente entre la pensión media del intervalo y el coeficiente $F_1=0,52$, si bien en los dos segmentos exteriores se utilizan los valores mínimo y máximo. En cada segmento hay un número de pensiones a las que se aplicará el valor del auxilio por defunción en el ejercicio 2015 para obtener el coste por cada segmento C_{2015} , mientras que con la aplicación de la expresión [68] se obtiene la estimación del coste por segmento C_{2015}^* dentro de un modelo contributivo en el que la nueva cuantía del auxilio por defunción dependería de la base reguladora del sujeto causante. Como en la situación anterior, esta alternativa tampoco supone un incremento de coste inasumible por el sistema.

Una posibilidad diferente es trasladar el auxilio por defunción hacia la modalidad no contributiva de la Seguridad. Sobre este particular Ramírez Bendala, M.D. (2013) expone que:

En este sentido, quizás sea más adecuado, hacer depender el derecho al auxilio por defunción de la carencia de rentas o ingresos por parte de los beneficiarios, de forma que, partiendo del presupuesto de seguridad social destinado a esta prestación, su distribución sea más justa y su cuantía más elevada. De esta forma, acotando el número de beneficiarios en función de niveles de rentas o situaciones de necesidad acreditadas, podría aumentar la cuantía de la prestación, satisfaciendo así, al menos de manera algo más efectiva, la finalidad para la que fue creada.

También dentro de un modelo de corte no contributivo García Viña, J. y M.P. Rivas Vallejo (1996) propusieron una restricción de los beneficiarios a quienes careciesen de ingresos superiores al Salario Mínimo Interprofesional¹⁵⁶.

Estas medidas permiten un ahorro para el modelo contributivo, con un incremento menor de las partidas de carácter asistencial que se financian por impuestos ya que se espera que sean menos los beneficiarios de la prestación al depender ésta de la carencia de recursos. Por su parte, se requiere determinar cuál es la cuantía que se considera adecuada y la justificación de ésta pues, frente a otras alternativas vitalicias, su

¹⁵⁶ Igualmente, estos autores plantearon una posible remisión de la regulación en esta materia hacia la negociación colectiva, sin aclarar cuál sería la posición respecto a trabajadores no sujetos a tal negociación, como por ejemplo los trabajadores autónomos.

concesión no se encamina a evitar una situación de necesidad, sino a remediar un agravamiento temporal de la misma, teniendo en cuenta que filosóficamente no tiene sentido su concesión ante la existencia de un seguro privado de decesos. Ahora bien, la necesidad económica inmediata que pueda surgir de un óbito no se circunscribe sólo a las personas sin recursos sino, con distinta intensidad, a todos aquellos que sufragan los gastos ante la ausencia de otros sistemas de protección, lo que fomenta las dudas en la promoción de la transición al modelo no contributivo.

Otra posibilidad, de carácter estructural individual, es la supresión del auxilio por defunción de la Seguridad Social española. Esta alternativa no se fundamenta en criterios económicos o actuariales ni en la contribución a la sostenibilidad del sistema, pues ya se ha constatado su irrelevancia en estos términos, sino en esa misma falta de importancia desde la óptica protectora y social. Con sus características actuales el auxilio por defunción no cumple realmente ninguna función dentro del modelo de protección, no supone una herramienta favorable hacia los ciudadanos e incluso, en términos psicológicos y especialmente en momentos de complejidad afectiva, puede ser considerada más gravosa para el beneficiario que su no concesión. La eliminación propuesta puede reorientar la cobertura hacia un modelo global o familiar de prestaciones, incluyéndose la protección actual dentro de otras coberturas a través de una revisión de la estructura de pagos. Así, siguiendo la dinámica recogida en Hernández González, D. *et al.* (2011), es posible diseñar las pensiones de muerte y supervivencia mediante una estructura de pagos en cuyo período inicial se tengan unas cuantías superiores para compensar así el lucro cesante o, en otro caso, el incremento de gastos que supone el fallecimiento de una persona –aquí los vinculados al tratamiento de los restos mortales–.

El modelo, bajo la hipótesis de linealidad de la función $D_x = v^x \cdot l_x$ y tal que ${}_tE_x$ es el factor de actualización actuarial, l_x el número de vivos de un colectivo a la edad x , m la fracción m -ésima de un ejercicio, n la temporalidad y ω la edad límite del colectivo, puede expresarse mediante la ecuación genérica para el caso pospagable:

$$P \cdot \left(\left(\sum_{k=1}^{\omega-x-1} {}_kE_x \right) + \frac{m-1}{2 \cdot m} \right) =$$

$$P' \cdot \left(\left(\sum_{k=1}^n {}_kE_x \right) + \frac{m-1}{2 \cdot m} \cdot (1 - {}_nE_x) \right) + P'' \cdot \left(\left(\sum_{k=1}^{\omega-x-1} {}_kE_x \right) + \frac{m-1}{2 \cdot m} \right) \quad [69]$$

$${}_tE_x = v^t \cdot \frac{l_{x+t}}{l_x}$$

$$v^t = \frac{1}{(1+i)^t}$$

es decir:

$$P \cdot a_x^{(m)} = P' \cdot a_{x:n}^{(m)} + P'' \cdot a_x^{(m)} \quad [70]$$

P	Pensión inicial de muerte y supervivencia bajo el modelo actual
P'	Importe de la pensión que se paga desde el fallecimiento durante n años
P''	Importe de la pensión que se paga desde el fallecimiento y con carácter vitalicio
$a_x^{(m)}$	Renta actuarial inmediata, vitalicia, constante, unitaria, pospagable y fraccionada de período (m)
$a_{x:n}^{(m)}$	Renta actuarial inmediata, temporal n períodos, constante, unitaria, pospagable y fraccionada de período (m)

Esta opción, al entenderse dentro de un núcleo de relación principalmente familiar, a priori no se dirige a terceros que no pertenezcan al mismo aunque pudieran haber satisfecho los gastos correspondientes.

Como complemento a alguna de las opciones aquí expuestas es posible incorporar un auxilio por defunción especial cuya cuantía única se establezca, por ejemplo, en un importe medio de los gastos funerarios en España y se satisfaga por el empresario ante la muerte de un trabajador cuando aquél no haya respetado las normas relativas a la seguridad y salud laboral. Junto a una mayor presión para que el empresario respete la normativa de riesgos laborales, pues se incide en los costes a su cargo, es razonable imputar al responsable de un fallecimiento los gastos que ha originado. En cualquier caso, sobre todo ante modificaciones sensibles de su régimen jurídico, no es desacertado pensar que el auxilio por defunción debería ser incompatible con la existencia de un seguro de decesos por cuanto ambas posibilidades se encaminan a satisfacer los mismos gastos, aunque aumentos muy significativos de las prestaciones públicas pueden incidir en la demanda de productos privados; desde otro punto de vista, la existencia de una mayor cobertura de los instrumentos privados dirige a los públicos hacia la irrelevancia, aunque esa propia incompatibilidad con diferencia sensible de coberturas supone aquí un ahorro para la Seguridad Social.

Cualquiera que sea la opción de reforma que se quiera plantear, lo que es obvio es que el auxilio por defunción no puede seguir actuando como una prestación simbólica y sin ningún valor añadido para los beneficiarios del sistema español de seguridad social. Puesto que esta cobertura se puede obtener a precios razonables y asumibles dentro de un sistema privado de protección para quien voluntariamente así lo desee y, además, se ofrece una protección total de la incertidumbre y unos servicios de valor añadido en momentos de especial sensibilidad afectiva, en nuestra opinión, la eliminación del auxilio de defunción es el camino más adecuado en cuanto a su posible “reforma”, siendo en otro caso muy positiva su adecuación al coste medio de los gastos funerarios en España.

2. LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y LA INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO

2.1. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales

El nacimiento de la Seguridad Social trajo consigo un escenario de protección en una época con carencias en el adecuado control sobre los riesgos profesionales y los medios para mitigar las consecuencias de su manifestación. Desde entonces, el sistema ha promovido paulatinamente un especial amparo de las situaciones derivadas de los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales, diferenciándolas desde distintas perspectivas de las originadas por contingencias de naturaleza común¹⁵⁷.

En líneas generales, el que aquí denominaremos régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales¹⁵⁸ ha presentado tradicionalmente una dinámica protectora más intensa que la ofrecida a las contingencias comunes: menores exigencias en las obligaciones para los sujetos causantes y mayores cuantías de los derechos para los beneficiarios, algo que no es propio únicamente de las prestaciones de muerte y supervivencia, si bien las distancias se atenúan al no plantearse exigencias de cotización para el acceso a ciertas prestaciones ante un accidente no laboral. Así, frente a los requisitos generales de afiliación, alta o situación asimilada al alta, el artículo 124.4. de la LGSS establece que: "No se exigirán períodos previos de cotización para el derecho a las prestaciones que se deriven de accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional, salvo disposición legal expresa en contrario"¹⁵⁹. Por otra parte, de cara a la cuantía de la prestación, si el fallecimiento del sujeto causante es debido a una contingencia profesional, junto a otras características particulares, la base reguladora se determinaría, en todos los casos, sobre las retribuciones efectivamente percibidas¹⁶⁰, superiores en términos generales a la base reguladora para contingencias comunes calculada mediante la fórmula general. Además, en lo que respecta a una prestación con origen en una contingencia profesional hay que citar que el incumplimiento de las

¹⁵⁷ Sin perjuicio de la interpretación realizada por los tribunales sobre la calificación de la naturaleza del fallecimiento: adicciones, suicidio, etc. Véase al respecto: Rodríguez Iniesta, G. (2009).

¹⁵⁸ Hablaremos aquí de un régimen diferenciado para los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales puesto que así aparece en la información estadística que ofrece la Seguridad Social en sus presupuestos. Sin embargo, sus normas generales son comunes a distintos regímenes y la diferencia se establece entre contingencias comunes y profesionales, aunque no para todas las variables de interés, por ejemplo, los períodos de carencia para la obtención de una pensión.

¹⁵⁹ Argumento que se refuerza para la pensión de viudedad a través del artículo 174.1. de la LGSS.

¹⁶⁰ Artículo 9.d) de la Orden de 13 de febrero de 1967.

medidas de salubridad, seguridad e higiene necesarias en el lugar de trabajo dará lugar a un recargo a satisfacer por el empresario infractor y que se cuantifica por un importe de entre el 30 y el 50% de la prestación¹⁶¹.

Centrados en las prestaciones por muerte y supervivencia, la LGSS considera fallecidos por accidente de trabajo y enfermedad profesional a quienes tuviesen reconocida en el momento del óbito una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo o la condición de gran inválido derivada de tales contingencias, asimilándose la causa real de la muerte a una contingencia profesional¹⁶². De igual forma, ante un fallecimiento derivado de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el artículo 171.2 de la LGSS indica que se concederá, junto a la pensión ordinaria, una indemnización a tanto alzado.

En otro orden de cosas, en cuanto al régimen de contingencias profesionales y desde el punto de vista de los ingresos, en 2014 las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales supusieron 6.047,88 millones de euros y representaron en ese ejercicio el 4,67% de la totalidad de los ingresos de la Seguridad Social y aproximadamente el 6,10% de las cuotas, porcentajes en línea con los acaecidos en los últimos años. Teniendo en cuenta la serie 2000-2014, dentro de aquellos importes las cuotas pagadas por invalidez, muerte y supervivencia representarían en promedio el 45,9944% del total de cuotas de este régimen¹⁶³. Por su parte, el importe en 2014 de las pensiones de accidente de trabajo y enfermedades profesionales fue de 3.024,69 millones de euros, de los cuales 848,86 millones (28,06%) correspondían a pensiones de muerte y supervivencia¹⁶⁴.

Desde la perspectiva de la gestión y relacionado con las contingencias profesionales, surge en la práctica un modelo particular que se basa en tres elementos característicos: la participación de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social¹⁶⁵, el reaseguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y los capitales coste de pensiones y otras prestaciones económicas de carácter periódico del sistema de la Seguridad Social. Respecto a la cuestión del reaseguro, es el artículo 87.3 de la LGSS el que recoge que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social:

¹⁶¹ Artículo 123 de la LGSS.

¹⁶² Artículo 172.2 de la LGSS.

¹⁶³ Con datos del *Informe Económico Financiero del Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 2016*.

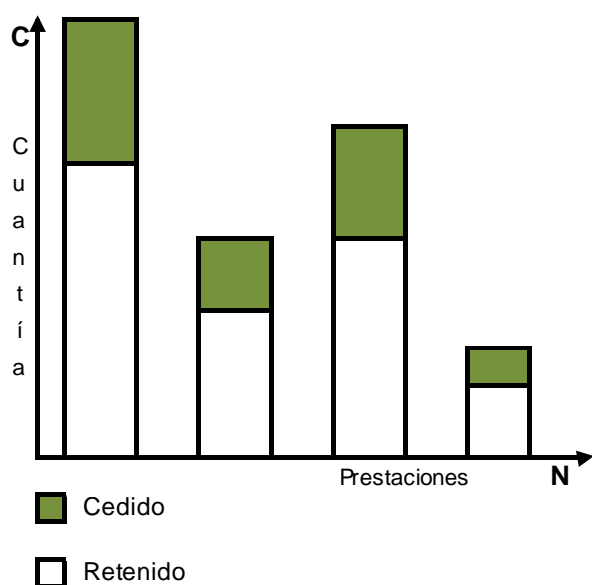
¹⁶⁴ *Anexo al Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 2016*.

¹⁶⁵ Asociaciones privadas de empresarios, sin ánimo de lucro. Hasta la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, se denominaban *Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales*.

Podrá establecer la obligación de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social de reasegurar los riesgos asumidos que se determinen, a través de un régimen de reaseguro proporcional obligatorio y no proporcional facultativo o mediante cualquier otro sistema de compensación de resultados.

Esta posibilidad se articula mediante un reaseguro proporcional obligatorio y otro facultativo de exceso de pérdidas. Respecto al reaseguro obligatorio, las Mutuas están obligadas a ingresar en la Seguridad Social el 30% de las cuotas satisfechas por los empresarios asociados a la entidad¹⁶⁶, quedando la cobertura establecida respecto de las prestaciones periódicas que se causen como consecuencia de la actualización de los riesgos de incapacidad permanente y de muerte y supervivencia. Mediante este sistema, en cada evento la Mutua se hace cargo del 70% del importe de las prestaciones, quedando para la Seguridad Social, en contrapartida de las cuotas cedidas, el 30% de aquéllas, con un funcionamiento acorde al siguiente gráfico.

Gráfico 20. Reaseguro proporcional en la Seguridad Social



¹⁶⁶ El artículo 201.2 de la LGSS, en redacción dada por la disposición final tercera, apartado 5, de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, establece que respecto a los riesgos cedidos en el reaseguro obligatorio el porcentaje no debe ser inferior al 10 por 100 ni superior al 30 por 100. El Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, estableció en su momento la cesión del 30% de las prestaciones (artículo 63.2) y como compensación para la Seguridad Social el 28% de las cuotas (disposición adicional décima). Véanse también los artículos 72 y 73 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de recaudación de la Seguridad Social, Como norma histórica véase la Orden de 11 de junio de 1942 por la que se aprueban las normas reglamentarias a las que ha de ajustarse el Servicio de Reaseguro de accidentes del trabajo.

El reaseguro de exceso de pérdidas haría frente a las cantidades que superen el límite máximo de responsabilidad fijado por las partes¹⁶⁷, una vez deducidos los importes correspondientes al reaseguro obligatorio a cargo de la Seguridad Social.

En cuanto al capital coste, también denominado capital de cobertura, es el valor actual actuarial de una renta que, para la incapacidad o muerte, se calcula mediante una equivalencia actuarial. En consonancia con el artículo 201.1 de la LGSS, el artículo 69.1 del *Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio*, establecía que:

La Tesorería General de la Seguridad Social recaudará de las *Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales* y de los empresarios declarados responsables de prestaciones por resolución de la Entidad Gestora, y hasta el límite de su respectiva responsabilidad, los siguientes conceptos:

- a) El importe del valor actual del capital coste de las pensiones de las que hayan sido declaradas responsables, haya mediado o no anticipo por parte de la Seguridad Social.
- b) Los intereses de capitalización.
- c) El importe correspondiente a las prestaciones de cuantía fija o periódica no vitalicia y de tanto alzado, incluidas aquellas que hayan de ser satisfechas directamente a los beneficiarios por la entidad colaboradora o el empleador, en caso de impago de aquéllas, haya mediado o no anticipo por parte de la Seguridad Social.
- d) El recargo del 5 por ciento por falta de aseguramiento que proceda.

Adicionalmente, sobre esta materia el artículo 201.3 de la LGSS indica que:

Las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social o, en su caso, las empresas responsables de las prestaciones deberán ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social los capitales en la cuantía necesaria para constituir una renta cierta temporal durante veinticinco años, del 30 por 100 del salario de los trabajadores que mueran por consecuencia mediata o inmediata de accidente de trabajo o enfermedad profesional sin dejar ningún familiar con derecho a pensión.

Los criterios técnicos básicos aplicables en esta materia se encuentran en la *Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social* y en la *Orden TIN/2124/2010, de 28 de julio*, por la que se modifica la

¹⁶⁷ Normalmente quedan excluidos los pagos únicos y los subsidios temporales, si bien las indemnizaciones a tanto alzado se computarían en unión del importe a ingresar en la Seguridad Social.

anterior¹⁶⁸. Para un único beneficiario de edad x , el cálculo del capital coste C^c relativo a una pensión de importe periódico P mediante la equivalencia con el valor actual actuarial de una renta unitaria, pospagable, creciente en progresión geométrica q y pagadera en m subperíodos, se basa en la siguiente expresión¹⁶⁹:

$$C^c = P \cdot {}^q a_x^{(m)} \quad [71]$$

Si la prestación da lugar a una renta actuarial temporal hasta la edad límite de percepción de w años que marca la ley (orfandad relativa y absoluta), la equivalencia sería:

$$C^c = P \cdot {}^q a_{x:w-x}^{(m)} \quad [72]$$

Véase el Anexo IV para otros supuestos en los que existen distintos beneficiarios.

Reconocida la mayor sensibilidad protectora hacia las contingencias profesionales, la situación socioeconómica y laboral hace cada vez más dudosa su aceptación sin reservas dentro de un modelo que dice basarse en los principios de solidaridad e igualdad pero en el que, sin embargo, priman las causas que originan la prestación, especialmente cuando para la enfermedad común se requiere un período mínimo de cotización que no es otra cosa que una expresión fidedigna de que el asegurado ha desempeñado una labor profesional durante un período determinado. Desde una perspectiva de estricta equidad no se asimila bien que se acceda a una prestación vitalicia derivada de un accidente de trabajo sin otorgar relevancia a la cotización realmente efectuada por el causante cuando, a su vez, no se permite el acceso a otras prestaciones vitalicias por contingencias comunes habiendo cotizado un número de años amplio y muy cercano al mínimo exigido, por ejemplo en la jubilación.

¹⁶⁸ La Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, fijaba como criterios: la utilización de las *Tablas de Mortalidad de Pensionistas de la Seguridad Social 2000*, una tasa de revalorización anual acumulativa del 2% y un tipo de interés técnico nominal del 4%, que bajó al 3% mediante la Orden TIN/2124/2010, de 28 de julio. La Orden de 23 de septiembre de 1985, por la que se fija el tipo de interés aplicable para fijar el valor actual del capital coste de pensiones derivadas de accidentes de trabajo (BOE 30-09-1985) estableció el interés técnico en el 5%. Interesa destacar la diferencia entre la tasa de revalorización anual utilizada en la equivalencia actuarial, superior a la actual a través del IRP, lo que supone un desajuste de criterios y un perjuicio para las Mutuas que ingresan el valor actual actuarial en la Seguridad Social.

¹⁶⁹ Nótese la utilización en la práctica como edad del beneficiario de la diferencia entre la fecha de efectos económicos y la fecha de nacimiento, diferencia dividida entre 365,25. El período sería $m=12$ ante la existencia de una contingencia profesional. Las probabilidades a utilizar en la equivalencia actuarial son las que corresponden a la condición de cada beneficiario: inválido o no inválido, mientras que cada pensión inicial se calculará por la aplicación de un porcentaje a la base reguladora según las características del beneficiario.

Puede argumentarse que se está ante prestaciones y situaciones protegidas distintas (algo que ni siquiera es susceptible de ser afirmado sin reservas en un buen número de ocasiones más que desde una perspectiva jurídica realmente alejada de la realidad), y también que sólo el desempeño de una actividad laboral favorece la aparición y la intensidad de una serie de riesgos concretos, pero también es claro que la manifestación se puede asociar a una contingencia común cuando el origen –y no el síntoma– se encuentran en el campo profesional: los desórdenes mentales, la depresión y las adicciones son un claro ejemplo de ello, quedando estas situaciones en una nebulosa muy cómoda para la Administración de la Seguridad Social en cuanto a la ausencia de acciones o imposición de criterios por su parte, pero en detrimento de los ciudadanos. Es cierto que es difícil determinar en qué momento empieza realmente una enfermedad común y esto tiene su importancia en relación con el cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación y la delimitación de un posible fraude y situaciones sobrevenidas, significativo argumento a favor de la diferenciación ya que la lucha contra el fraude se ha de configurar como un soporte de acción del sistema, pero esa dificultad también puede aparecer en una enfermedad profesional, todo ello sin perjuicio de lo ya indicado en cuanto a la correcta imputación del origen de la misma, por lo que esta justificación también es acreedora de objeciones e incertidumbre.

En todo caso, la cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional – imputada en origen íntegramente al empresario– tiene la naturaleza de cuota de seguridad social, existiendo una vinculación entre su ingreso mediante una cuantía adaptada a la intensidad del riesgo y la cobertura y manifestación de una contingencia profesional¹⁷⁰. Es éste un argumento para defender un modelo de protección que otorgue unas prestaciones adicionales sobre las básicas correspondientes a contingencias comunes, pues en realidad se cobra una prima suplementaria para la cobertura de tales riesgos. Pero ello no debe entenderse como un obstáculo para buscar alternativas que delimiten la incidencia en la equidad en un régimen contributivo global, con excepción hecha de los recargos por incumplimientos en materia de riesgos laborales, que se derivan de la responsabilidad de terceros vinculados al sujeto causante en el acaecimiento del hecho que causa el fallecimiento y sí son plenamente justificables, pues es a tales responsables a los que se les debe imputar el coste que ocasionan.

¹⁷⁰ Disposición adicional cuarta. Tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la *Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007*, modificada por la disposición adicional décima novena de la *Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014*.

Nuestra perspectiva crítica es todavía más intensa de cara a las prestaciones de muerte y supervivencia, ya que no protegen directamente al trabajador ni le resarcan de los riesgos manifestados directamente en su actividad y no es él quien va a percibir la prestación correspondiente; no somos capaces por ello de obtener suficientes argumentos técnicos para mantener que sujetos causantes con idénticas carreras de cotización se asocien a condiciones que se diferencian, no ya por las características del sujeto causante, ni siquiera por las del beneficiario, sino por la propia naturaleza del hecho causante. Es pues factible plantear desde nuestro punto de vista una modernización de la cobertura que pase por el replanteamiento del régimen de privilegio del que gozan las contingencias laborales respecto a las comunes en aras a lo ya indicado en este capítulo, especialmente sobre la enfermedad, situación actual que no favorece realmente al trabajador pues éste también lo es aunque el origen de la adversidad que le afecta no sea profesional. No es la nuestra una sensibilidad novedosa, pues ya fue planteada, creemos que acertadamente, en el caso del accidente no laboral.

2.2. La indemnización a tanto alzado. Características principales

La indemnización a tanto alzado, que viene definida en el artículo 177 de la LGSS, es una prestación de muerte y supervivencia que otorga el pago de un capital únicamente ante el fallecimiento del sujeto causante por causas profesionales. Su importe P^{ITA} está principalmente en función del estimador del esfuerzo contributivo del sujeto causante y de la naturaleza del beneficiario, pues ésta determinará el número de mensualidades n que se otorgan y la base reguladora B_r sobre la que se aplica dicho número.

$$P^{ITA} = n \cdot B_r \quad [73]$$

En la práctica, tal y como indican García Viña, J. y M.P. Rivas Vallejo (1996) y Rodríguez Iniesta, G. (2009), la prestación da lugar a dos supuestos prácticos diferenciados:

1. Cuando la prestación actúa como indemnización complementaria y compatible con otras rentas, tal es el caso de beneficiarios huérfanos y cónyuges supervivientes o sobrevivientes de una pareja de hecho¹⁷¹. Si el beneficiario es el cónyuge o equivalente la indemnización tendrá un importe de 6 mensualidades de la base

¹⁷¹ Sobrevivientes de parejas de hecho que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 174.3 de la LGSS. Por otra parte, en los supuestos de separación, divorcio o nulidad será de aplicación lo previsto en el artículo 174.2 de la LGSS.

reguladora de la correspondiente pensión¹⁷², estableciéndose, ante concurrencia de beneficiarios, las mismas reglas de reparto que para la pensión de viudedad. Para los huérfanos la indemnización tendrá un importe para cada beneficiario de esta clase de 1 mensualidad de la base reguladora de la correspondiente pensión¹⁷³, que se aumentaría con el importe correspondiente a cónyuges y asimilados ante la inexistencia de éstos¹⁷⁴.

2. Cuando actúa como indemnización sustitutoria, tal es el hecho de los progenitores beneficiarios que, ante la ausencia de otros familiares beneficiarios con derecho a pensión de muerte y supervivencia, vivieren a expensas del sujeto causante y no tuvieren derecho a pensión en favor de familiares¹⁷⁵. Los requisitos en este caso son más restrictivos y se vinculan con una situación de necesidad, pues es imperativo que los posibles beneficiarios dependan económicamente del sujeto causante, dando entrada a criterios asistenciales dentro de un modelo contributivo pues son las características del beneficiario y no las del sujeto causante las que determinan el acceso a la prestación. Para los progenitores, si existe un único ascendiente la indemnización es de 9 meses de la base reguladora calculada de conformidad con las normas aplicables a la pensión de viudedad y de 12 mensualidades si existen dos ascendientes¹⁷⁶.

¹⁷² Artículo 35 del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas y artículo 29 de la Orden de 13 de febrero de 1967.

¹⁷³ Artículo 37 del Decreto 3158/1996, de 23 de diciembre. El Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo, modificó el artículo 38 de la norma anteriormente citada e indica que "en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional la indemnización que se reconozca a los huérfanos absolutos se incrementará con la que hubiera correspondido al cónyuge o a quien hubiera sido cónyuge o pareja de hecho del fallecido", distribuyéndose a partes iguales si concurren varios beneficiarios.

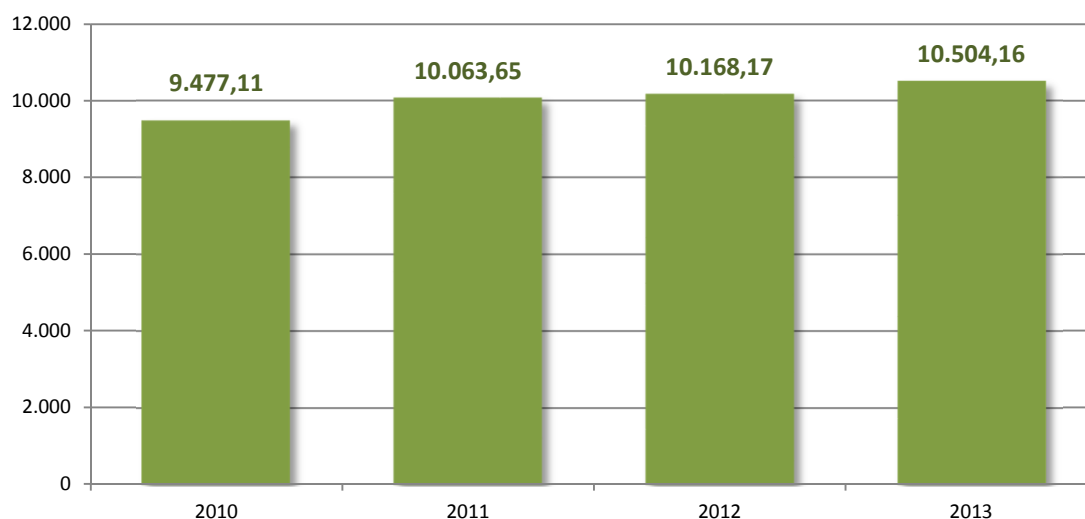
¹⁷⁴ Con motivo de la Sentencia del Tribunal Constitucional 154/2006, de 22 de mayo de 2006, la Resolución de 28 de julio de 2006, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, sobre incremento de la indemnización especial a tanto alzado a percibir por los huérfanos en caso de muerte derivada de contingencias profesionales, garantiza la equiparación en estos supuestos de hijos matrimoniales e hijos habidos fuera del matrimonio.

¹⁷⁵ Artículo 12.1 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social, que desarrolla el artículo 6.1 de la Ley 24/1972, de 21 de junio.

¹⁷⁶ Respecto de la cuantía de la indemnización a tanto alzado en todas sus modalidades derivadas de un sujeto causante pensionista, la Resolución de 18 de enero de 1992, de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social. Determinación de la cuantía de la indemnización especial a tanto alzado causada por pensionista fallecido por causa profesional, establece que la indemnización debería calcularse sobre la cuantía de la pensión que el causante estuviera percibiendo en el momento de su fallecimiento.

En definitiva, se está ante una prestación que se deriva del acaecimiento de una contingencia profesional con resultado de muerte y tiene carácter indemnizatorio, siendo su finalidad principal una mayor compensación del daño que generan los menores ingresos de los que participaban determinados familiares antes del fallecimiento del sujeto causante o, si procede, el apoyo a la mitigación de situaciones de necesidad. Se cobra en un único pago y facilita un importe de carácter adicional y secundario para una parte de los beneficiarios: viudos y huérfanos que ya tienen su correspondiente pensión, si bien se considera un importe principal para los progenitores pues éstos no deben ser beneficiarios a su vez de una pensión en favor de familiares. La cobertura no alcanza a otros posibles beneficiarios de prestaciones por muerte y supervivencia tales como hermanos o nietos. No es fácil obtener información cuantitativa desagregada sobre las indemnizaciones a tanto alzado por muerte y supervivencia, pues en el ámbito estadístico y presupuestario público se incluyen de forma agregada a otras partidas. De datos facilitados específicamente por la Seguridad Social encontramos que el número de expedientes tramitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social habría sido para los años 2010 a 2013: 732, 683, 651 y 667, con un importe de coste total en euros de: 6.937.244,13€, 6.873.472,95€, 6.619.476,21€ y 7.006.272,71€ respectivamente, dando lugar a los siguientes importes medios por ejercicio:

Gráfico 21. Importe medio por expediente de indemnización a tanto alzado vinculada a muerte y supervivencia



Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Datos específicos a petición expresa del autor.

En nuestra opinión, no hay obstáculo para mantener una prestación adicional ante un fallecimiento debido a una contingencia profesional, tal es el caso de la indemnización aquí referida, mientras se mantenga un sistema de cuotas destinado a tales

contingencias. Además, a pesar de su teórica escasa relevancia económica, esta indemnización viene a desempeñar el papel de cobertura intensificada para las prestaciones de muerte y supervivencia que nosotros apoyamos para los períodos más cercanos al momento del fallecimiento del sujeto causante; incluso, desde esta perspectiva y como ya hemos planteado en el epígrafe anterior, puede valorarse su concesión dentro de las contingencias comunes (por ejemplo, por el importe de una base reguladora por beneficiario) sustituyendo al actual auxilio por defunción, favoreciendo así el acercamiento entre contingencias profesionales y comunes, la reforma de otras clases de prestaciones de muerte y supervivencia para hacerlas más equilibradas, así como la satisfacción de costes en la intermediación temporal del hecho causante.

Sobre las altas de pensiones del ejercicio 2014 que informa la Seguridad Social¹⁷⁷ (pensiones por contingencias comunes y excluido el SOVI): 127.219 pensiones de viudedad, 27.331 pensiones de orfandad y 4.711 pensiones en favor de familiares), una primera aproximación al coste de esta medida sería de 135,85 millones de euros si, tal y como se planteó para el auxilio por defunción, se trabaja con la estimación muestral de la base reguladora media de las altas de muerte y supervivencia de 2014 según la MCVL-2014, (853,57€), aquí excluidas las contingencias profesionales. Si se utiliza la base reguladora media obtenida para cada una de las clases de pensión en el mismo ejercicio (817,90€ en viudedad, 1.083,40€ en orfandad y 577,57€ en favor de familiares), el resultado sería de 136,38 millones de euros. Por la naturaleza de esta prestación, estos importes deberían ser minorados en el coste del auxilio por defunción en 2014 que se deja de percibir: 6,2 millones de euros.

En la actualidad existen diferencias en el importe indemnizatorio designado para cónyuges e hijos, siendo favorable el tratamiento hacia los primeros. Nada nos hace ser sensibles a tal diferencia pues no quedan fehacientemente acreditados los argumentos que puedan sustentarla, especialmente cuando los beneficiarios de orfandad ya pueden sustraerse de la dependencia familiar al alcanzar la mayoría de edad, aunque al menos es positivo que la no existencia de cónyuge permita el trasvase de sus teóricos derechos hacia los huérfanos. Una posible reformulación basada en la concesión de un importe de 3 bases reguladoras por beneficiario sería, incluso, más valiosa para familias con más unidades y, por tanto, susceptibles de una mayor necesidad económica ante homogeneidad en otras variables.

Somos todavía más críticos con la introducción de criterios de dependencia económica para la concesión de una prestación que se enmarca en la modalidad contributiva, aun

¹⁷⁷ Anexo al Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 2016.

cuando tales criterios hilvanan con criterio la prestación actual, por lo que apoyamos la revisión del sistema establecido para los progenitores, para quienes se presume una mayor necesidad que, de ser cierta, no debería ser compensada mediante esta opción. La pérdida del requisito sobre necesidad o dependencia económica hace imperativo redefinir la percepción por parte de un progenitor, percepción que mantendría como requisito la inexistencia de otros beneficiarios e incluso podría pensarse en la convivencia pues tal pérdida hace incluso cuestionable la percepción para padres y madres. En todo caso, el importe por beneficiario debería limitarse como máximo al que se concede a cónyuges e hijos. Por coherencia, la insistencia en mantener criterios de necesidad debiera plantear que todos aquellos importes por encima de los concedidos a cónyuges e hijos debieran situarse en el campo no contributivo y a cargo de las prestaciones que sean oportunas, lo que no incide en el coste global para el Estado en su conjunto pero recoge un diseño más racional.

Ante la ausencia de datos públicos suficientes, supondremos un escenario en el que cada alta estimada de pensiones de muerte y supervivencia por contingencias profesionales en 2014 (2.486 de viudedad, 599 de orfandad y 28 de favor de familiares) percibe una indemnización a tanto alzado según el importe medio de la base reguladora de riesgos profesionales de la MCVL-2014 para cada clase: 6 bases reguladoras en la viudedad, 1 base reguladora para la orfandad y, por prudencia, 9 bases reguladoras en el favor por familiares. Puesto que de la muestra no se obtienen los datos consistentes necesarios para el favor de familiares, su base reguladora se calculará aplicando, a la base correspondiente a contingencias comunes, la variación media habida entre contingencias profesionales y comunes en viudedad y orfandad, quedando así las siguientes bases reguladoras mensuales medias estimadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 1.497,19€ en viudedad, 1.576,51€ en orfandad y 948,86€ en favor de familiares. Con estos datos, un importe total estimado resultante en la indemnización a tanto alzado en el ejercicio de referencia sería de 23,52 millones de euros. Si se plantea una modificación basada en la obtención máxima de 3 bases reguladoras por beneficiario, el importe sería de 14,08 millones de euros, es decir, un ahorro estimado del 40,13% sobre el criterio de seis, una y nueve bases reguladoras según las características del beneficiario. En definitiva, en términos de coste y de soporte social la indemnización a tanto alzado tiene un papel discreto en el conjunto del sistema, siendo un instrumento complementario pero no plenamente definitorio de la bondad de la protección establecida que aceptaría modificaciones y, desde una perspectiva estratégica, actuar de soporte y contrapeso de modificaciones de mayor calado.

3. LA PENSIÓN DE VIUDEDAD

3.1. Características generales

3.1.1. Definición y ubicación en el sistema de protección

Las prestaciones de viudedad a cargo de la Seguridad Social española se orientan a la concesión de un montante dinerario al cónyuge o asimilado de la persona fallecida. En teoría, esta prestación se enmarca dentro del modelo contributivo, no se concede en situaciones de necesidad y requiere que el sujeto causante tenga cumplidos unos requisitos en el momento de su fallecimiento. Ahora bien, en la práctica y gracias a las sucesivas reformas normativas acaecidas, la pensión de viudedad se ha ido deslizando paulatinamente hacia el campo no contributivo al incorporar como argumentos relevantes para su concesión y cuantificación las características del beneficiario, lo que hace que se desenvuelva en un entorno híbrido de financiación contributiva y prestación difusa. La incertidumbre sobre la naturaleza de esta prestación parte directamente del artículo 41 de la Constitución Española, que a su vez dirigió las orientaciones del Tribunal Supremo cuando expuso que: "La pensión de viudedad es una prestación de seguridad social. Por tanto, atiende *ex Constitutione*, un estado de necesidad"¹⁷⁸, argumento totalmente ajeno a la realidad de la pensión y contrario al que recogió previamente el Tribunal Constitucional cuando indicó que "en su configuración actual, la pensión de viudedad no tiene por estricta finalidad atender a una situación de necesidad o de dependencia económica"¹⁷⁹.

Este escenario confuso y contradictorio también se ha visto cuestionado y/o reforzado por muy diversos estudios y análisis, si bien, como ya indicara muy oportunamente Rodríguez Iniesta, G. (2011):

La crítica de un sector importante de la doctrina hacia la protección –principalmente- a la viudedad, por no atender a situaciones de real necesidad, es rechazable ya que parte de una base o principio erróneo, que es la *asistencialización (sic.)* de esta protección.

Para Kahale Carrillo, T.D. (2011) la viudedad ya no es una institución pensada para la subsistencia, mientras que De la Flor Fernández, M.L. (2008) entiende que, en la

¹⁷⁸ STS 5909/2000, de 17 de julio.

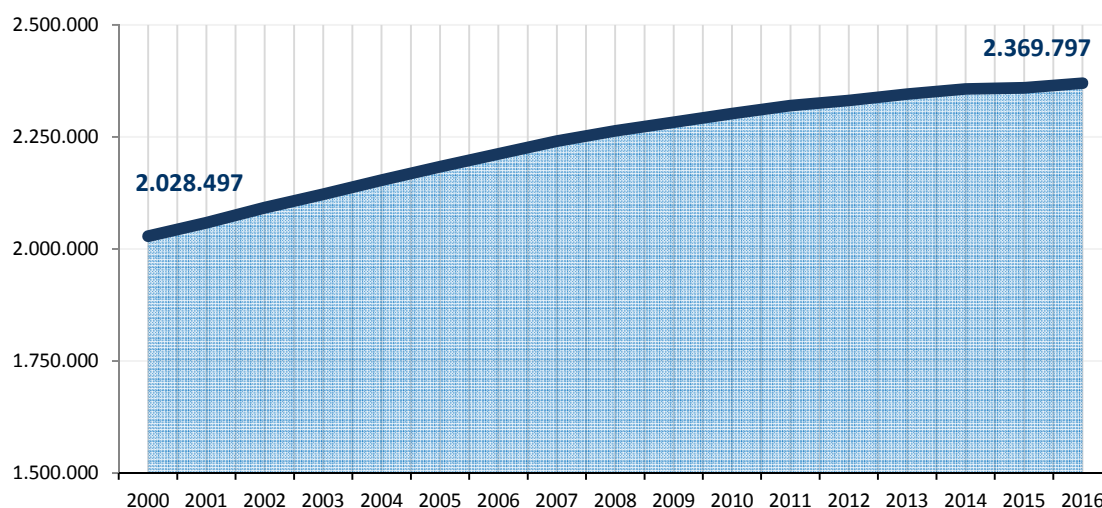
¹⁷⁹ STC 184/1990, de 15 de noviembre.

actualidad: “No se rompe, pues, con la idea de desprotección del supérstite matrimonial, sino que sobre la base del modelo familiar más clásico sigue operando la presunción de dependencia del supérstite respecto del causante”. Ojeda Avilés, A. (2008) caracteriza la pensión de viudedad ubicándola dentro de un entorno de dispersión normativa y numerosos argumentos jurisprudenciales en el que “se quieren mantener en un mismo régimen jurídico lo que parece tener varias naturalezas” (viuda joven con hijos, viuda mayor o viuda con capacidad económica).

Estamos, pues, ante una prestación de carácter teóricamente compensatorio basado en la pérdida de aquellos ingresos de los que participaba el superviviente de una unión entre dos personas y que no se vincula a la cobertura de necesidades (de hecho no todos sus perceptores se encontrarían en situación de necesidad real sin la pensión), aunque tampoco es posible aceptar que una prestación cuya modalidad vitalicia puede ser superior a los sesenta años esté realizando verdaderamente una función compensatoria de un lucro cesante familiar.

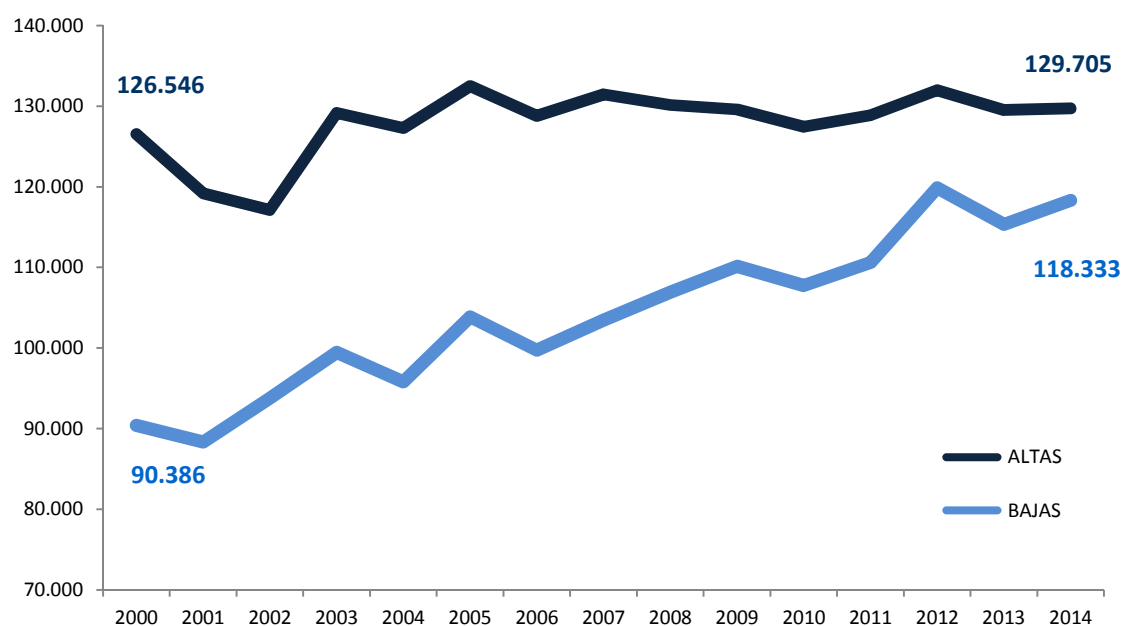
A cierre del ejercicio 2014 había en vigor 2.356.966 pensiones de viudedad, estimándose para 2016 un número de 2.369.797. La variación anual en el número de estas pensiones se encuentra por debajo del 1% desde el ejercicio 2009, estrechándose en el último quinquenio las diferencias entre el número de nuevas altas en un ejercicio y el de las bajas en el mismo, tal y como se aprecia en el Gráfico 23.

Gráfico 22. Número de pensiones contributivas de viudedad a 31 de diciembre



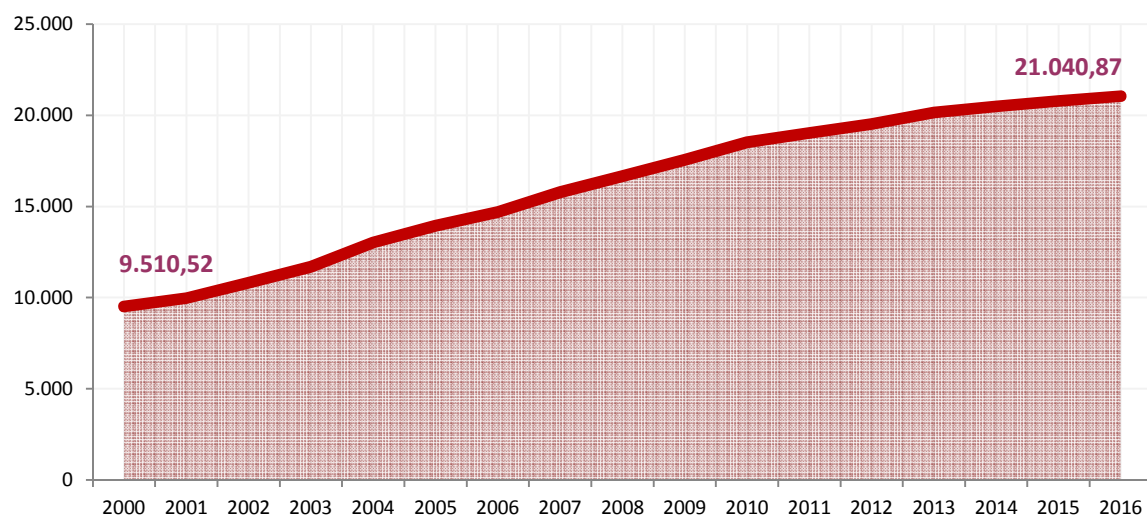
Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2015*. Años 2015 y 2016, estimaciones.

Gráfico 23. Número de altas y bajas anuales en las pensiones de viudedad



Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*.

Gráfico 24. Gasto anual en pensiones contributivas de viudedad

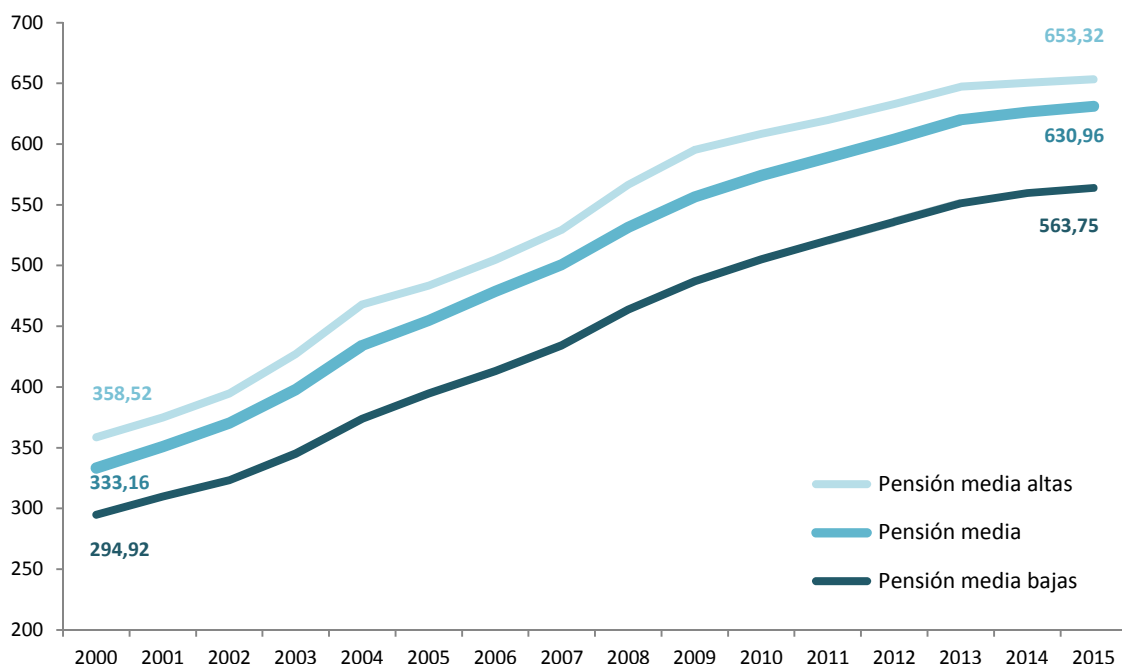


Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Millones de euros. Años 2015 y 2016, estimaciones.

Por otra parte, el importe de gasto estimado en pensiones de viudedad para el ejercicio 2016 es de 21.040,87 millones de euros, un 14,93% del gasto total de seguridad social presupuestado en el ejercicio, un 16,09% del gasto estimado en prestaciones económicas y un 17,69% del gasto estimado en pensiones contributivas en el mismo período. La pensión de viudedad es así la segunda fuente de gasto del sistema, sólo por

detrás de la pensión de jubilación, si bien la evolución de su importe total se ha ralentizado en los últimos ejercicios. La pensión media mensual se situó a cierre de ejercicio 2014 en 626,24€, mientras que la pensión media de las altas de ese ejercicio fue de 650,37€, en contraposición con la pensión media de las bajas: 559,75€. La evolución de las pensiones medias se expone en el gráfico siguiente:

Gráfico 25. Evolución de la pensión media mensual en las pensiones de viudedad

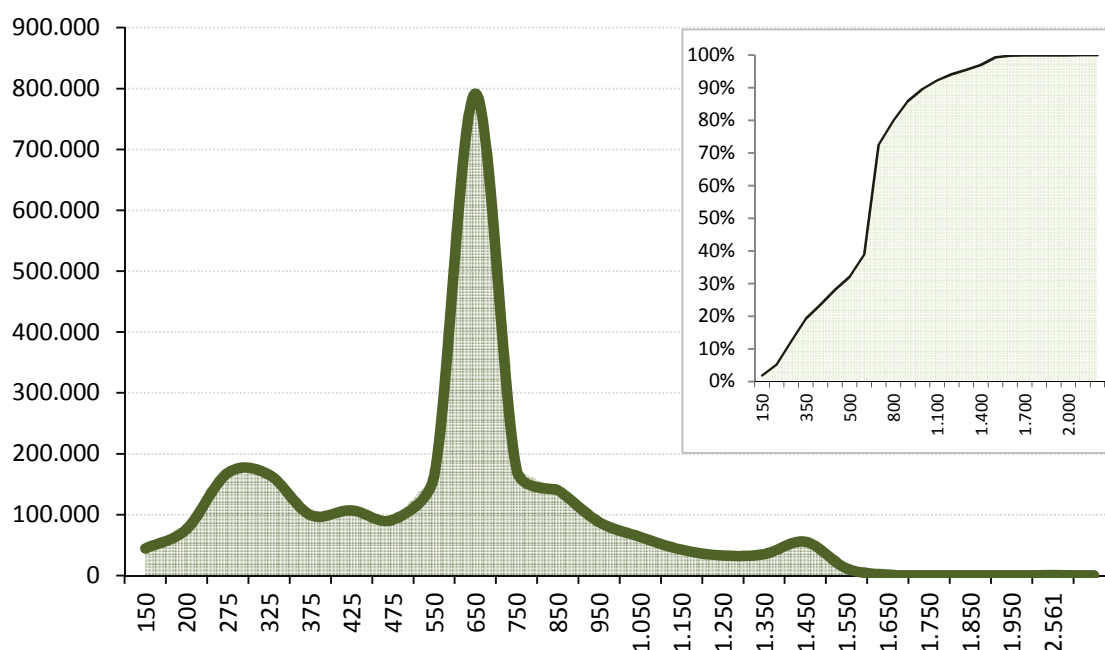


Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Pensiones en vigor, altas y bajas en el ejercicio. Para 2015, datos a julio.

Respecto a la distribución del número de pensiones por tramos de cuantía contributiva se observa en el Gráfico 26 que no se está ante una distribución uniforme, con una concentración de pensiones en el tramo entre 600€ y 700€, donde en julio de 2015 se encontraban el 33,64% de las mismas. En cuanto a la estructura de la pensión en vigor, en junio de 2015 la composición fue la siguiente: *cuantía inicial* (49,04%), *revalorización* (38,16%) y *complemento a mínimo* (12,80%), frente a la estructura del ejercicio 2001 que fue: *cuantía inicial* (37,98%), *revalorización* (44,00%) y *complemento a mínimo* (18,02%).

Según los datos contenidos en la MCVL-2014, a su entrada en el sistema el 67,8359% de las prestaciones de viudedad se derivan de sujetos causantes que son pensionistas de jubilación o invalidez (sujeto causante en situación de pasivo), quedando el 32,1641% para otros supuestos.

Gráfico 26. Estructura del número de pensiones de viudedad por tramo de cuantía y función de distribución



Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Datos a julio de 2015. Eje de abscisas en función del punto medio del intervalo.

Sobre la prestación de viudedad temporal no existe una desagregación mínima y/o suficiente de información pública. Sus valores a través del número de expedientes que se incorpora por primera vez a la nómina de pensiones de un ejercicio son los siguientes:

Cuadro 19. Altas iniciales de la viudedad temporal por ejercicio

Año	Número	Pensión media mensual
2011	183	668,80
2012	192	701,38
2013	217	734,33
2014	182	741,94
2015	65	662,75

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Datos específicos. Euros. Datos a abril de 2015.

Si atendemos a los datos muestrales que proporciona la MCVL-2014, en el momento de su nacimiento el 99,9505% de las pensiones corresponde a pensiones de carácter vitalicio, mientras que el 0,0495% corresponde a prestaciones de carácter temporal. Para las prestaciones que ya no están en vigor a 31 de diciembre 2014, su duración media ha sido de 14,99 años.

3.1.2. Los requisitos del sujeto causante

Los requisitos que la ley exige al sujeto causante en el momento de su fallecimiento para la concesión de una pensión de viudedad vitalicia se acomodan al siguiente esquema:

- a) Situación de alta o asimilada. Se exige un período de cotización de quinientos días, dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante¹⁸⁰.
- b) Ante una muerte por accidente o por una contingencia profesional, no se exige período previo de cotización.
- c) Si no existe situación de alta o asimilada, el período mínimo de cotización será de 15 años.
- d) En los supuestos excepcionales en los que el fallecimiento del causante derivara de enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requerirá, además, el cumplimiento de alguno de estos requisitos:
 - Que el matrimonio se hubiera celebrado al menos con un año de antelación a la fecha del fallecimiento.
 - La existencia de hijos comunes.
 - Un período superior a los dos años sumando la duración del matrimonio y el período de convivencia acreditado a la fecha del vínculo matrimonial.

Cuando el cónyuge superviviente reúna los requisitos establecidos respecto al alta y cotización pero no pueda acceder al derecho a pensión de viudedad vitalicia por no acreditar que su matrimonio con el causante ha tenido una duración de un año o, alternativamente, por la inexistencia de hijos comunes, tendrá derecho a una prestación temporal de viudedad.

Frente a la homogeneidad que el acervo legal propone para todo el espacio de cobertura de la Seguridad Social en los accidentes y las contingencias profesionales, he aquí una primera y gran diferencia de la pensión de viudedad respecto a otras prestaciones contributivas vitalicias del sistema: el requisito para el acceso a pensiones causadas por

¹⁸⁰ En los supuestos en que se cause la pensión desde una situación de alta o de asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el período de cotización de quinientos días deberá estar comprendido dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

enfermedad común de un período fijo de cotización que, además, es inferior a dos años, de tal forma que, incluso, se requieren para el acceso menos días de cotización de los que finalmente van a formar parte de la base reguladora que determinará la cuantía de la pensión. Esto hace que ya de entrada nos encontremos ante un escenario favorable para el acceso a una pensión de viudedad, en la que, además, como en todas las prestaciones de fallecimiento, el asegurado es distinto del beneficiario. Así, la pensión de jubilación requiere al menos 15 años de cotización para el acceso a la prestación¹⁸¹, siendo variable el requisito para la incapacidad permanente que deriva de una enfermedad común¹⁸². Por otra parte, tal y como ya advirtiera Rodríguez Iniesta, G. (2011), el período mínimo de cotización de 500 días se vincula a una prestación de viudedad que, en puridad, podría llegar a durar más de 70 años, cuando una prestación contributiva por desempleo para una cotización análoga otorga una prestación temporal de 120 días de duración¹⁸³. Este hecho tiene también su relevancia en una menor variabilidad esperada en las cuantías dentro del propio período de cotización, además muy cercano en este caso al establecido para que se pueda considerar tiempo suficiente en un vínculo de unión (por ejemplo, en la enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo conyugal). Adicionalmente, en aquellas situaciones en las que se establece una exigencia de quince años, nada se dice en la viudedad del período en el que deben encuadrarse estos años, algo que sí se exige en otras prestaciones.

Un argumento a favor de la amplia diferenciación existente es que cada una de las actuales prestaciones vitalicias cubre contingencias diferentes y tiene distinta finalidad, y por tanto no hay nada extraño en establecer un régimen beneficioso para unas prestaciones frente a otras; indudablemente, el ejercicio de la acción legislativa puede ampararse sin más en este hecho, pero es algo que nosotros consideramos francamente equivocado. En primer lugar, la finalidad de las coberturas vigentes no es siempre diferente aun cuando se denominen de distinta forma, pues incluso los destinatarios de distintas prestaciones forman parte de un mismo grupo característico (por ejemplo, mayores de 65 años sin cónyuge, sin recursos y sin hijos a cargo). En segundo lugar, la propia diferencia de las contingencias cubiertas no sustenta por sí misma el privilegio hacia una de ellas, la viudedad; en la incapacidad permanente nos encontramos ante una limitación física, psíquica o sensorial que constriñe el desarrollo personal y profesional del beneficiario; por su parte, la jubilación se encuentra sometida a un criterio de edad que delimita el acceso a una fuente de rentas mediante el ejercicio de la actividad laboral. Nada de ello es propio en todo el espectro de la viudedad; es más, ante un escenario no

¹⁸¹ Artículo 161.1 de la LGSS.

¹⁸² Artículo 138.2 de la LGSS.

¹⁸³ Artículo 210.1 de la LGSS.

necesariamente más comprometido para el ciudadano nos encontramos con un régimen de protección más favorable. En tercer lugar, el modelo actual mantiene características privilegiadas para beneficiarios cuyos sujetos causantes vinculados no han necesitado realizar un mayor número de ingresos al sistema vía cotizaciones ante homogeneidad de importes, reforzándose la idea de un sistema poco equitativo. Así, poniendo el foco en el beneficiario, puede serle más productiva una carrera de cotización realizada por el sujeto causante durante 500 días por una base de cotización determinada, que una carrera de duración superior en la que se haya cotizado por bases inferiores. Si se aplica la expresión [51] a dos carreras de cotización con las siguientes características:

- a) Cotización por la base máxima correspondiente al Grupo I durante veinticuatro meses, desde enero de 2013 hasta diciembre de 2014. A propósito de la fecha del hecho causante, tomamos éstas como las bases computables.
- b) Cotización por la base mínima de cotización correspondiente al Grupo IV desde enero de 2002 a diciembre de 2014.

utilizando estas bases de cotización para calcular la pensión de viudedad causada en el mismo instante por dos personas con las mismas características y que cumplen el resto de requisitos legales exigibles, en el primer caso tendríamos una base reguladora de 3.009,43€, que da lugar a la pensión mensual por contingencias comunes de 1.564,90€ mientras en el segundo supuesto la base reguladora sería de 645,11€, un importe notablemente inferior y generador de una pensión susceptible de ser complementada hasta el importe mínimo del ejercicio (entre 481,60€ y 735,80€ mensuales).

Por el contrario, por aplicación de [74], al acudir el valor financiero final de las aportaciones pospagables mensuales por contingencias comunes $A_j^{(m)}$, en capitalización compuesta a un interés anual i del 1%, al final del período de cotización –diciembre de 2014- tendríamos un importe de 24.072,66€ en el primer caso y de 25.057,75€ en el segundo.

$$V_F = \sum_{s=1}^k A_s^{(m)} \cdot \prod_{h=s+1}^k (1+i_h^{(m)}) \quad [74]$$

$$i^{(m)} = (1+i)^{(1/m)} - 1 \quad , \quad m=12 \quad , \quad k=24$$

Por todo ello, la equidad, el acercamiento a la realidad y justicia social y el respeto a la idiosincrasia de todos los cotizantes de la Seguridad Social (independientemente de las prestaciones que generen) son motivos suficientes para proponer la modificación de los requisitos de cotización de acceso a esta pensión. Esto no debe entenderse como una limitación ni un perjuicio sino, como dicen Hernández González *et al.* (2011), como una medida “más justa, equilibrada y respetuosa con el conjunto de beneficiarios de prestaciones contributivas y con su esfuerzo”. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en las prestaciones de muerte y supervivencia, al igual que en las de incapacidad permanente y al contrario que en la jubilación, la exigencia de amplios períodos de cotización puede limitar la protección en edades tempranas, donde es la propia legislación la que no le permite al cotizante la obtención de una carrera suficiente de cotizaciones al imponer una edad mínima de acceso al mercado de trabajo.

Desde la perspectiva del tiempo cotizado, una primera alternativa de trabajo es el mantenimiento de un valor único y concreto de la cotización necesaria para el acceso a la prestación, pero ampliado respecto del vigente actualmente. Por ejemplo, Vicente Palacio, M. A. (2010), proponía la elevación del período de carencia desde la situación o alta (o asimilada) “de tres a cuatro o cinco años”.

Otra propuesta es establecer una regla que tenga en cuenta la edad del causante en el momento del fallecimiento, de acuerdo a lo que ocurre en otras prestaciones, y presuponer que una mayor edad generalmente se vincula a una mayor carrera de cotización esperada. Supóngase como edad de partida la del posible inicio de la actividad laboral X_0 y ω como edad límite del colectivo, así como una función discreta que establezca el número de años de cotización exigidos para la concesión de una pensión mediante una transformación lineal para cada tramo de edad:

$$F(x) = \begin{cases} x_0 \leq X < x_1 & a_1 \cdot X + b_1 \\ x_1 \leq X < x_2 & a_2 \cdot X + b_2 \\ \dots & \dots \\ \omega > X \geq x_n & a_n \cdot X + b_n \end{cases}, \quad X \in \mathbb{N}^+ \quad [75]$$

Este sistema es el actualmente utilizado para las pensiones de incapacidad permanente, derivadas de enfermedad común, donde, para cada edad X del causante en el momento de su fallecimiento se tiene que:

$$F^{IP}(x) = \begin{cases} 16 \leq X < 31 & \frac{1}{3} \cdot X - 5,333\hat{3} \\ 31 \leq X < \omega & \text{Máximo} \left(5, \frac{1}{4} \cdot X - 5 \right) \end{cases} \quad [76]$$

Bajo este esquema y para la cuestión concreta de la pensión de viudedad, Hernández González, D. *et al.* (2011) utilizaron una función:

$$F(x) = \frac{1}{3} \cdot \frac{X^2}{(\omega - X_0)} , \quad (\omega = 116, X_0 = 16) \quad [77]$$

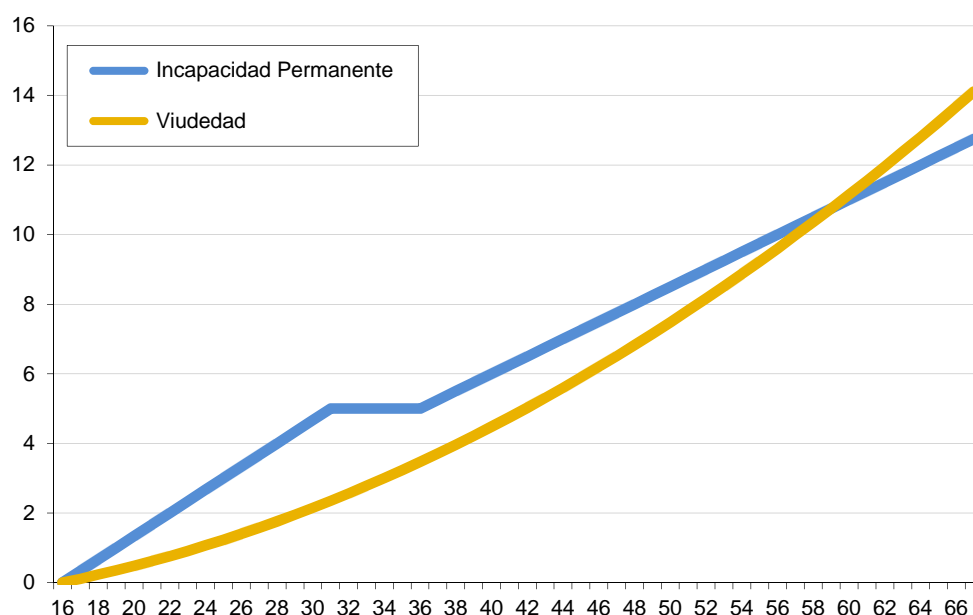
o, si se prefiere, una expresión alternativa complementaria que mitiga las exigencias impuestas para X_0 :

$$F(x) = \frac{1}{3} \cdot \frac{X^2}{(\omega - X_0)} - 0,853\hat{3} , \quad (\omega = 116, X_0 = 16) \quad [78]$$

En ambos supuestos es razonable establecer un límite superior de exigencia para evitar un efecto perjudicial en las edades altas, teniendo en cuenta que existe una edad de salida del mercado laboral; por ejemplo, para edades superiores a 67 años se establecen las exigencias correspondientes a esta edad. Con todo lo indicado, para 20 años de edad del beneficiario se exigirían 487 y 175 días de cotización aproximadamente según se aplique [77] o [78]; para 30 años de edad se exigirían 3 años o 785 días de cotización; para 40 años 5,33 y 4,48 años de cotización y para 67 años 14,96 y 14,11 años de cotización, respectivamente.

Gráficamente, en cuanto a los requisitos de cotización por contingencias comunes, la comparación del modelo vigente para la incapacidad permanente con el aplicable a la viudedad basado en los parámetros aquí utilizados sería la siguiente:

Gráfico 27. Años de cotización para el acceso a la pensión según la edad del causante



Fuente: elaboración propia. Abscisas (*Edad*). Ordenadas (*Años de cotización*). Incapacidad permanente con la situación actual y viudedad con nuevos requisitos.

Obviamente, se puede implantar para la viudedad la misma función [76] que actúa sobre la incapacidad permanente o seleccionar una edad límite de actuación menor, así como trasladar este planteamiento al resto de pensiones de muerte y supervivencia. Como argumento contrario a esta dinámica podría ser indicado que algunos beneficiarios bajo el sistema actual dejarían de serlo con este nuevo diseño, pero ésta es una situación que ya se da en la incapacidad permanente. Lo que es ilógico es que existan mayores restricciones en el acceso para la incapacidad permanente por contingencias comunes, contingencia que en líneas generales genera obstáculos –mayores o menores– para la consecución de ingresos propios, frente a una viudedad en la que no hay motivo para suponer esta situación por parte del beneficiario (incluso a partir de la edad de jubilación de 65 años ambos segmentos tienen una cobertura mínima a través de las pensiones no contributivas).

3.1.3. Los beneficiarios

El beneficiario de la pensión de viudedad por antonomasia es el cónyuge superviviente, si bien en caso de separación o divorcio también puede ser beneficiario quien haya sido cónyuge legítimo siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o no hubiera

constituido una pareja de hecho¹⁸⁴. Para ser beneficiarias, las personas divorciadas o separadas judicialmente deben ser también acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil¹⁸⁵, que se extinguirá a la muerte del causante, o mujeres que pudieran acreditar que eran víctimas de violencia dentro de la unión en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento¹⁸⁶. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última. Ante una nulidad matrimonial el derecho a la pensión de viudedad corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho. En definitiva, nos encontramos con la posibilidad de una pluralidad de beneficiarios de la pensión pues lo pueden ser simultáneamente el cónyuge en el momento del óbito y otros que lo fueron en un momento anterior

Tendrá también derecho a la pensión de viudedad el superviviente de una pareja de hecho que acredite que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50% de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25% si no existen hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. No obstante, también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos

¹⁸⁴ Artículo 174.3 de la LGSS: "Se considera pareja de hecho a la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja de hecho requiere que esté inscrita en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. La inscripción y la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante".

¹⁸⁵ Pensión que busca compensar el desequilibrio que pudiera producirse en una de las partes por la ruptura de la unión y que surge al amparo de un modelo socioeconómico en el que se constata la dedicación de la mujer a las tareas del hogar, lo que no fomentaría el desarrollo de sus alternativas profesionales propias en busca de una fuente de renta, si bien el carácter de la pensión acepta la temporalidad o la prestación única. Si ha existido convivencia conyugal el artículo 98 del Código Civil extiende esta pensión al cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo.

¹⁸⁶ También el artículo 174.2. de la LGSS establece que "en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género (*sic.*), así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho". Nótese el régimen protector de una de las partes de la pareja pues se entiende en esta ley que la violencia se ejerce solamente en una dirección; por más que sea mayoritariamente así, lo reproable es el ejercicio de la violencia sobre otra persona, independientemente de la condición de ésta. La dinámica en su conjunto es un claro ejemplo del uso de herramientas de la Seguridad Social para la articulación de otras políticas fuera de las propias de su esencia.

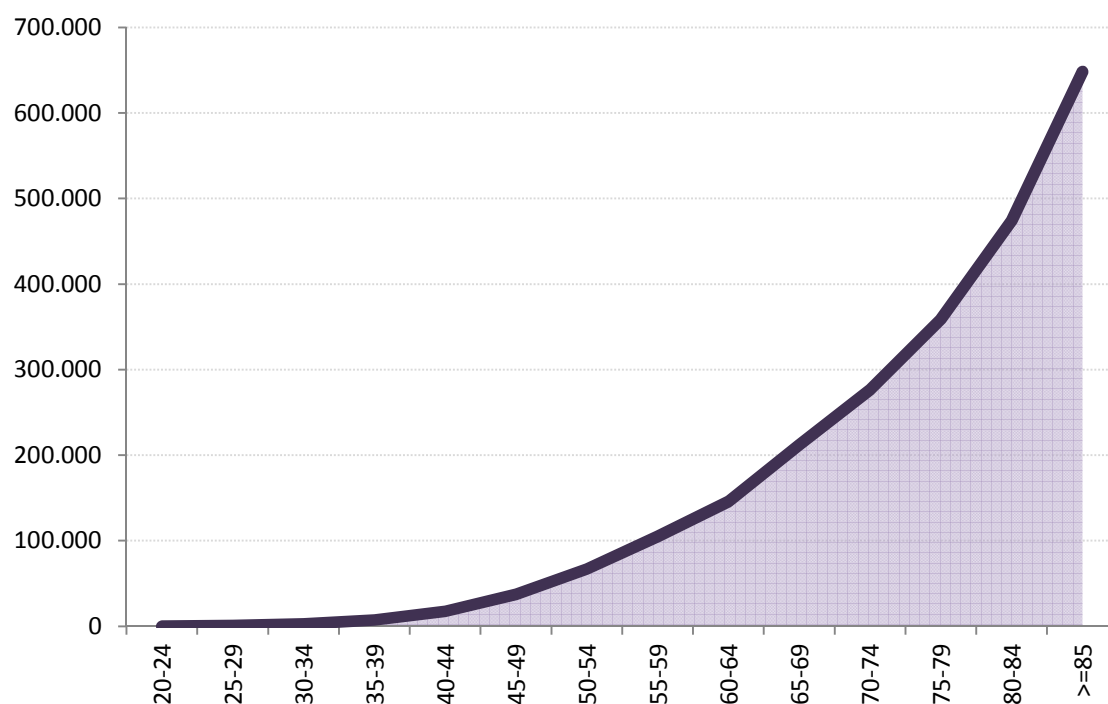
del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del óbito, requisito que se mantendrá durante toda la percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente por cada hijo común, con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente¹⁸⁷. Finalmente, en todo caso el derecho a pensión de viudedad se extinguirá cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, sin perjuicio de las excepciones establecidas reglamentariamente.

Véase que en este diseño de la pensión de viudedad se encuentran ya marcados argumentos asistenciales. Constatado que jurídicamente no se puede equiparar totalmente el matrimonio con la pareja de hecho, a los pertenecientes a este último segmento de población se les exigen requisitos que constaten dependencia económica del finado. De igual forma, se impone como requisito de extinción de la pensión el realizar una nueva unión, dando por hecho que sin ella se presenta una situación de necesidad que viene a desaparecer una vez constituido el nuevo vínculo.

Desde una perspectiva socioeconómica ligada al beneficiario, la mayoría de las pensiones de viudedad en vigor a 1 de julio de 2015 tenían como beneficiarias a mujeres (92,59%), mientras que los hombres eran el 7,41%. Por grupos de edad, en el mismo punto temporal la pensión de viudedad era eminentemente creciente con la edad, concentrándose el 83,69% de las pensiones en personas al menos 65 años, algo lógico teniendo en cuenta la relación entre la evolución de la probabilidad de fallecimiento con la existente a su vez entre las edades de las personas vinculadas. Por otra parte, un 0,4311% de los beneficiarios tenían una edad inferior a los 40 años. La evolución del número de pensiones por edad y la cuantía media de las mismas se presenta en los gráficos siguientes:

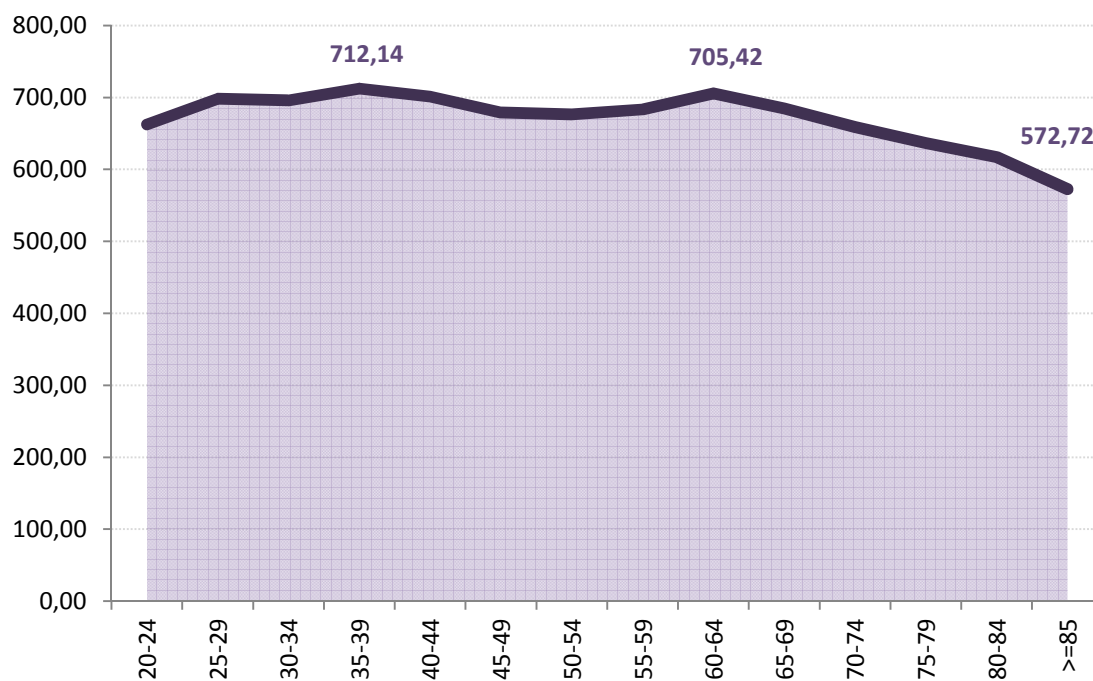
¹⁸⁷ Son ingresos: los rendimientos de trabajo y de capital así como los de carácter patrimonial, en los términos utilizados en el reconocimiento de los complementos para mínimos de pensiones. Se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

Gráfico 28. Número de pensiones de viudedad en vigor por edad del beneficiario



Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Datos a 1 de julio.

Gráfico 29. Cuantía media mensual de las pensiones en vigor por edad del beneficiario

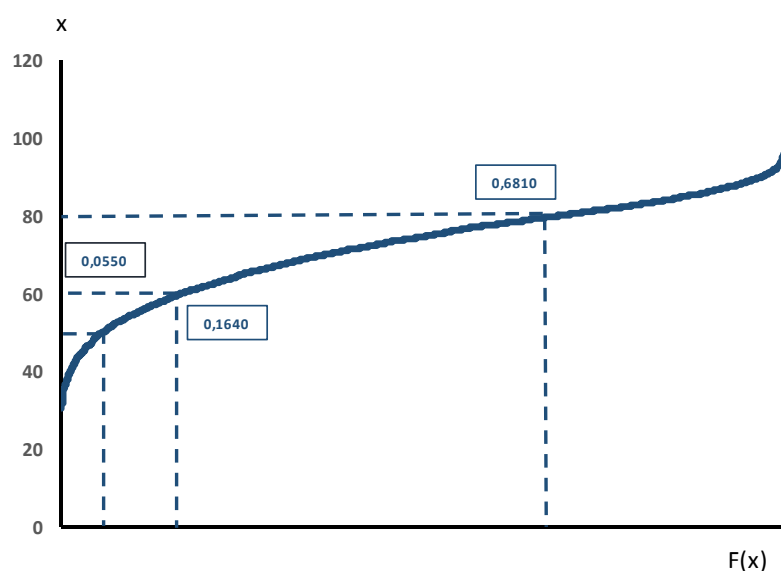


Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Datos a 1 de julio.

Según Meil Landwerlin, G. (2003), la edad del beneficiario es importante en este caso pues “está estrechamente relacionada con la presencia de cargas familiares a las que es preciso hacer frente, pero también porque está igualmente relacionada de una forma estrecha con la capacidad para obtener recursos económicos a través del trabajo (...)”, aunque este autor constata también que conforme avanza la edad las personas tienen más tendencia a vivir solas –o sin personas a cargo-, por lo que los ingresos de una pensión sería suficientes y no se debería aceptar sin más la suposición de un riesgo de pobreza sustancial. Sobre este particular tampoco debe pasarse por alto la tendencia a la institucionalización de personas mayores por diversos motivos: sociales, económicos y de salud, que da un soporte adicional a la heterogeneidad de los beneficiarios pero en una parte de las situaciones evita la idea de su total desamparo.

Respecto a la cuantía media de las pensiones en vigor a 1 de julio de 2015, existe una notable diferencia entre la correspondiente a los hombres (477,99€) frente a la correspondiente a las mujeres (643,19€), diferencia derivada, entre otras causas, de la estructura esperada de cotizaciones, inferior en las mujeres, y del sexo esperado de los causantes fallecidos por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en general hombres. A cierre del ejercicio 2014 las pensiones en vigor con complemento a mínimo eran el 32,83% (porcentaje estable en el tiempo y del cual el 89,96% corresponde a titulares con al menos 65 años o al menos el 65% de discapacidad), siendo la cuantía media pagada por complemento de 248,77€.

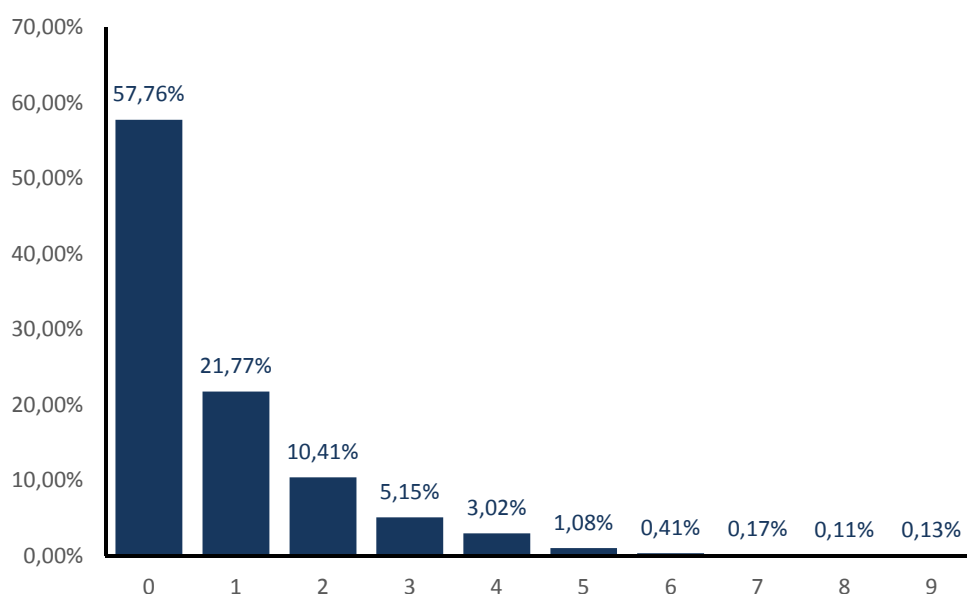
Gráfico 30. Edad estimada del beneficiario a la obtención de la prestación de viudedad



Fuente: elaboración propia con datos de la MCVL-2014. Percentiles para las edades de 50, 60 y 80 años.

La edad media muestral (MCVL-2014) del beneficiario en el momento de acceso a la prestación es de 72,53 años, con una desviación típica de 12,28 años y los siguientes cuartiles: $Q_1 = 65$ años, $Q_2 = 74,67$ años y $Q_3 = 81,67$; el rango muestral de edades por beneficiario aparece en el gráfico anterior. Por último, según los datos de la MCVL-2014, en cuanto a la estructura familiar o de apoyo de los beneficiarios de la prestación de viudedad, la mayoría (57,76%) no tendría convivencia declarada con otra persona, mientras que un 21,77% convive con una única persona declarada; además, de forma coherente con las características de los beneficiarios vistas hasta el momento, el 5,79% de quienes conviven con él tienen una edad superior. La estructura de la unidad familiar o de apoyo es, lógicamente, muy heterogénea. En el caso de beneficiarios que conviven con una única persona, el 93,28% de los convivientes es de una edad inferior y, por ejemplo, entre aquellos que conviven con otras cinco personas el 82,95% presentan la mayor edad en el grupo, mientras que dentro de éste aquellos que conviven con una persona de mayor edad y cuatro de menor edad son el 10,47%. La estructura familiar muestral para los beneficiarios de viudedad sería la siguiente:

Gráfico 31. Estructura familiar de los beneficiarios de viudedad. Número de convivientes adicionales declarados en la unidad familiar o de apoyo.



Fuente: elaboración propia con datos de la MCVL-2014. Eje de abscisas: número de convivientes adicionales.

3.1.4. Los requisitos del beneficiario

Junto a los requisitos ya vistos sobre alta y cotización, y con las particularidades existentes en la concurrencia de beneficiarios, por aplicación directa del artículo 174.1 de la LGSS una exigencia para el acceso general a la pensión vitalicia de viudedad es la

existencia de un vínculo de unión en el momento del fallecimiento del causante, exigencia con el doble objetivo de evitar situaciones fraudulentas y apoyar el acceso a una prestación conforme a la naturaleza de la misma¹⁸⁸. Este vínculo, como ya hemos visto en el punto anterior, es principalmente conyugal, pero también se cumple en separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales o parejas de hecho que observen los requisitos legalmente establecidos. También se ha indicado que existe un régimen de acceso a la pensión de viudedad más exigente para una pareja de hecho que para una pareja establecida mediante vínculos matrimoniales, y no son pocas las voces que promueven un tratamiento igualitario para ambas opciones¹⁸⁹, si bien la inexistencia de idénticas obligaciones entre las dos figuras legales ya es motivo suficiente para condicionar tal opción. Es opinión nuestra que con un sistema agravado el legislador quiere impedir accesos fraudulentos a prestaciones y eliminar cualquier ambigüedad en la constatación de un vínculo suficiente que sea acreedor de la compensación de un daño y, por ello, establece una exigencia en el tiempo de matrimonio¹⁹⁰.

Por otra parte, las sentencias del Tribunal Supremo STS 5205/1992 y STS 20622/1992, ambas de 29 de junio de 1992, aportan argumentos adicionales en la materia, argumentos que, sin embargo, inciden en el concepto de protección a la familia:

La finalidad de esta norma es la protección jurídica de la familia, institución social de cuidado de hijos y ayuda mutua, que se cimienta o se refuerza con la asunción de los deberes conyugales. Es la protección de la familia la que ha aconsejado al legislador fomentar el matrimonio, cimiento o refuerzo de la familia, mediante la limitación de la prestación de viudedad a quienes lo hayan contraído.

La prestación de viudedad deriva de una unión matrimonial, en la que se han contraído derechos y deberes conyugales jurídicamente exigibles. Quienes han elegido libremente no asumir los deberes conyugales, procurando excluir la vinculación jurídica de ayuda mutua a que tales deberes están orientados, no tienen el mismo derecho a la protección social pública en caso de fallecimiento de un miembro de la pareja que quienes han constituido mediante el matrimonio una agrupación familiar reforzada para la atención de las necesidades económicas y no económicas de sus miembros.

¹⁸⁸ A pesar de las críticas de Valenciano Sal, A. (2011) sobre la sustitución del criterio de necesidad por el del estado civil, a su juicio trato discriminatorio para quienes necesitan protección frente a otros que perciben la misma sin encontrarse en ese criterio de necesidad.

¹⁸⁹ Véase, por todos, Vicente Palacio, M.A. (2010).

¹⁹⁰ Recuérdese, un año para validar la unión a efectos de la Seguridad Social cuando se está ante una enfermedad común no sobrevenida, o al menos dos de convivencia acreditada –tiempo marital incluido–, mientras se exigen dos años de la inscripción en el registro correspondiente en el caso de parejas de hecho.

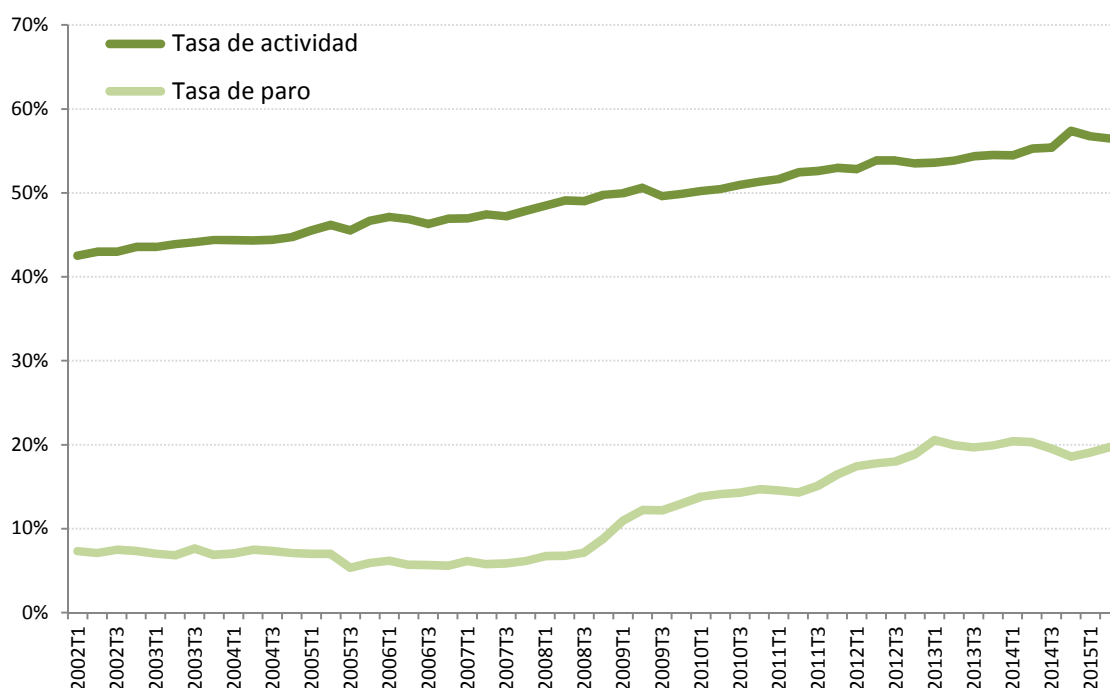
Con todo lo anterior, tenida en cuenta la levedad de los requisitos exigidos para la constitución de la pareja de hecho, que no tienen que ser realmente expresión fidedigna de una realidad, así como la existencia de situaciones real y jurídicamente distintas, es razonable la existencia de distintos requisitos para las parejas de hecho en cuanto al acceso a la pensión de viudedad, siendo coherentes los mínimos contemplados en la legislación vigente: al menos cinco años de convivencia y dos de “formalización” de la unión. Lo que bajo nuestra filosofía ya no parece tan razonable es la imposición a las parejas de hecho de criterios de dependencia económica para el acceso a una prestación contributiva que, además, se dedica a compensar un daño; he aquí nuevos criterios asistenciales que no hacen otra cosa que intensificar la desnaturalización de esta pensión. Conforme a la evolución habida en las uniones entre dos personas, es prudente pensar que las parejas de hecho van a tener una importancia creciente en la sociedad española y es criterio del legislador, que compartimos, el amparo de esta realidad social dentro del ámbito de muerte y supervivencia, pues nada impide que sea más (o menos) estable su vínculo que el acaecido en el matrimonio. Ahora bien, también es claro que la situación de una pareja de hecho no es equivalente a la de un matrimonio y que lo que debe evitarse aquí son las uniones de interés; ambos argumentos refuerza la existencia de un régimen diferenciado aunque no apreciemos el criterio de dependencia económica.

Tenido en cuenta todo lo anterior, podría plantearse la siguiente cuestión: ¿serían aplicables otros requisitos al beneficiario para el acceso a la pensión de viudedad? Efectivamente, surgen otros criterios de actuación para constatar objetivamente la existencia de un vínculo entre dos personas y de entre ellos cabe citar la existencia de hijos comunes o los períodos de convivencia explícita, ya recogidos en el fallecimiento por enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo conyugal, si bien en el caso de las parejas de hecho los hijos comunes no cuentan más que para mitigar los límites de dependencia económica.

Sobre la existencia de hijos como requisito general de acceso a una prestación de viudedad, Vicente Palacio, M.A. *et al.* (2009) y Vicente Palacio, M.A. (2010) han entendido que no es aceptable “la penalización a aquellas parejas que, bien en uso de su legítima libertad bien por cualquiera otra razón incluso de carácter médico o biológico, no han tenido hijos”. Ahora bien, nosotros entendemos que no se trata de penalizar la inexistencia de hijos, sino a través de éstos apuntalar la existencia del vínculo que favorece el acceso a la prestación, criterio de la existencia de hijos que es más razonable para las parejas de hecho que el de dependencia económica, aun cuando de su aplicación pudieran derivarse mayores costes para el sistema.

Por otra parte, otro planteamiento es la inclusión de la variable *edad del beneficiario* como argumento para el acceso a la pensión o la determinación de sus cuantías, algo que ya aparecía en el extinto régimen establecido mediante el *Decreto 907/1966, de 21 de abril*. Este criterio tendría su sustento en la relación esperada entre la edad biológica del individuo y su supuesta capacidad para obtener rentas, existiendo una edad a partir de la cual la realidad socioeconómica y laboral impondría progresivamente limitaciones a dicha capacidad. No es infundado pensar que a edades tempranas el teórico beneficiario no habrá tenido la oportunidad de acreditar una carrera de cotización propia suficiente, aunque a tales edades también existen, en general, mayores perspectivas de adaptación que las que tendrían otros beneficiarios de tramos de edad superior, para quienes un cambio de condiciones personales y laborales es cada vez más difícil. En este apartado recurriremos a las tasas específicas de actividad y paro para el segmento de población entre 55 y 64 años.

Gráfico 32. Tasas de actividad y paro. Segmento [55-64] años



Fuente: elaboración propia con datos de la *Encuesta de Población Activa* del Instituto Nacional de Estadística.
Consulta: 27 de agosto de 2015.

En este segmento de edad son minoría las personas en paro respecto a las personas ocupadas, con buena parte de la población en condición de *inactivo* aunque en niveles descendientes en el tiempo. El cobro de una prestación pública o la existencia de una situación personal pueden no favorecer el acercamiento a un puesto de trabajo, ni desde la perspectiva del empleador ni desde la perspectiva del posible empleado.

Si aceptásemos la hipótesis de que la edad biológica es relevante en relación con la situación laboral más allá del segmento de edad inferior a 25 años, no parece que la edad de referencia sea la que recogía el *Real Decreto 907/1966, de 21 de abril*, fijada entonces en los 40 años principalmente pensando en las mujeres, sino que esta edad debería ser sensiblemente superior, tal y como se desprende de la tabla siguiente:

Tabla 6. Tasa de ocupación y actividad por trimestre promedio según segmentos de edad. Segundo trimestre de 2002 – segundo trimestre de 2015

Segmento	Tasa de ocupación	Tasa de actividad
De 20 a 24 años	51,36%	23,35%
De 25 a 29 años	69,16%	63,91%
De 30 a 34 años	80,11%	86,19%
De 35 a 39 años	84,41%	88,20%
De 40 a 44 años	85,87%	86,53%
De 45 a 49 años	86,38%	84,44%
De 50 a 54 años	86,94%	81,22%
De 55 a 59 años	87,74%	74,36%
De 60 a 64 años	87,80%	61,28%
De 65 a 69 años	89,52%	35,98%
De 70 y más años	96,60%	5,03%

Fuente: elaboración propia con datos de la *Encuesta de Población Activa* del Instituto Nacional de Estadística. Consulta: 27 de agosto de 2015.

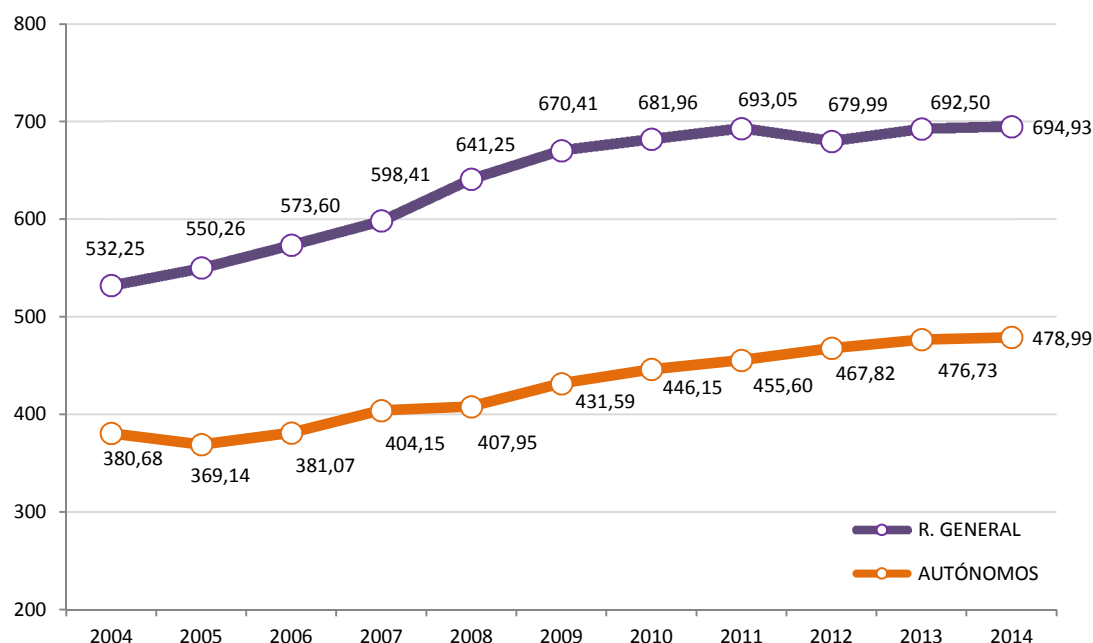
Ahora bien, la crítica a las hipótesis de partida empleadas es inmediata. La teórica incidencia del mercado laboral en la situación de un trabajador según su edad no es privativa de los beneficiarios de una prestación de viudedad. Por otra parte, el mercado laboral no es la única fuente de rentas y la incorporación de esta opción de trabajo tiene mayor sentido en un escenario que tenga en cuenta las características socioeconómicas del beneficiario, algo que no ocurre en la realidad actual y, por ello, la incorporación de la edad del beneficiario como argumento clave en la configuración de la pensión de viudedad requeriría, por coherencia, la transformación de la naturaleza de la prestación.

3.2. La cuantía de la pensión de viudedad

En este apartado se revisará el modelo vigente de cálculo de la pensión de viudedad, cuyas principales características se han expuesto en el capítulo II, y que se basa en la aplicación de un porcentaje a una base reguladora. La pensión media del ejercicio 2014 es de 626,24€ mensuales, con sensibles diferencias por régimen de cobertura.

En cuanto a las pensiones en vigor a cierre de 2014, la cuantía media mensual se situó en 665,99€ y 468,90€ en el Régimen General y el Régimen de Autónomos, respectivamente, mientras que en el Régimen de la Minería del Carbón el importe fue de 828,90€ y en el Régimen de trabajadores del mar, de 619,99€. En accidentes de trabajo el importe se situó en 778,41€, 904,79€ para las enfermedades profesionales y 369,10€ para el SOVI.

Gráfico 33. Pensión media mensual de las altas en la pensión de viudedad



Fuente: Seguridad Social. *Anexo al Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016.*

Frente al caso más habitual en el que la pensión es vitalicia, para la prestación temporal de viudedad el importe será igual al de la pensión de viudedad vitalicia que le hubiera correspondido al beneficiario, pero con una duración de dos años.

3.2.1. El porcentaje aplicable a la base reguladora

La cuantía de la pensión inicial de viudedad P_0^v se calcula, de forma general para la situación de activo, mediante la aplicación de un porcentaje a una base reguladora según la expresión [4], con la particularidad de que $F_2=0$, $F_3=1$ y $n=2$, dando lugar a la expresión [51], esto es:

$$P_0^v = F_1 \cdot \frac{\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{12} B_{i,j}^c}{28}$$

Tal y como se expuso en el capítulo II, la evolución del porcentaje F_1 aplicable a la base reguladora en la pensión de viudedad ha concluido, hasta el momento, con su situación en el 52% para el caso general, algo sobre lo que Sanabria Borrego, M. y D. Hernández González (2010) indicaron que, ante homogeneidad en otras variables, en su comparación con el porcentaje mínimo asignado a la pensión de jubilación: "Una pensión de viudedad, que pretende compensar rentas perdidas, sería superior a aquella que genera tales rentas". Por encima de este porcentaje general existen porcentajes especiales destinados a atender las situaciones en las que el legislador presume la concreción del concepto *necesidad*. Ya la *Ley 27/2011, de 1 de agosto*, planteó un porcentaje del 60% para beneficiarios con, al menos 65 años, que no tuvieran derecho a otra pensión pública, no percibiesen ingresos por trabajo y, por último, el resto de rentas o rendimientos no superasen anualmente el límite de ingresos establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad. Esta acción recurre a las características del beneficiario y a criterios de edad y renta, así pues, se basa en una sensibilidad hacia el carácter inequívocamente asistencial. Por otra parte, el *Real Decreto 1465/2001, de 27 de diciembre*, aprobó un porcentaje especial (no consolidable) del 70% aplicable bajo criterios de ingresos y cargas familiares. Sobre esta porcentaje especial, Alonso Olea, M. (2002) y Ojeda Avilés, A. (2008), entre otros, no han dudado en corroborar su carácter asistencial mientras que, por su parte, Vicente Palacio, M.A. *et al.* (2007) indicaron que:

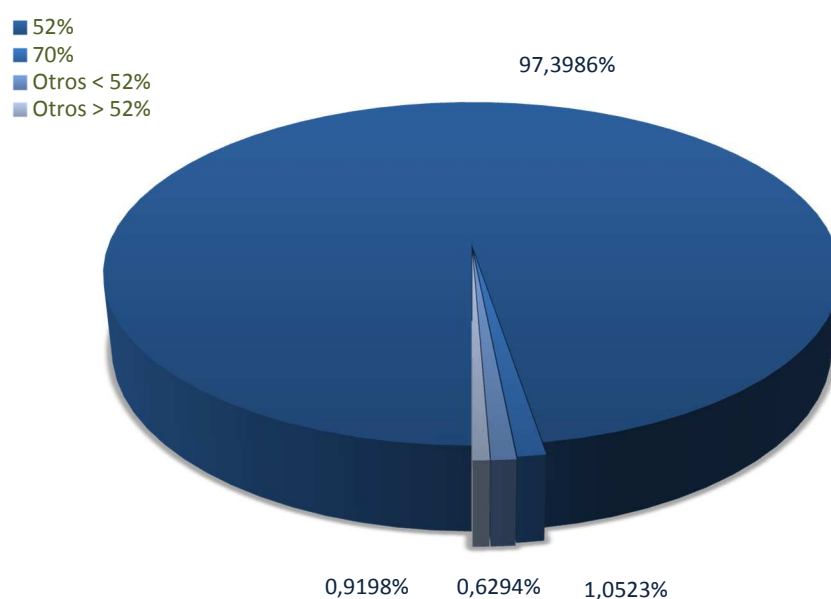
El incremento de la pensión hasta el 70% únicamente supone el cambio de denominación de lo percibido que antes de esa reforma se tenía asegurado por la vía de los complementos a mínimos. El sistema ha hecho simplemente un trasvase de fondos. (...) el régimen jurídico para el incremento del 70% ha enturbiado la naturaleza jurídica de la prestación y ha aportado poco, o nada, a la efectiva mejora económica de las pensiones de viudedad.

La aplicación de estos porcentajes especiales teóricamente pretende la mejora de los recursos de unos perfiles de población, pero lo hace a costa de la equidad del sistema y gracias a una mayor ineficiencia en el conjunto. No hay un argumento lo suficientemente sólido, ético o razonable para defender que hay más necesidad en un pensionista de viudedad contributiva que en un pensionista de jubilación contributiva y, sin embargo, al primero se le puede aplicar un porcentaje superior que al segundo y se le proponen, además, porcentajes especiales, incluso cuando el propio pensionista de jubilación podría cumplir los requisitos que se imponen para beneficiarios acreedores de porcentajes especiales de viudedad. Tampoco hay menor necesidad en aquél a quien no se le concede una pensión de jubilación habiendo cotizado más que lo establecido para una pensión de viudedad y, desde luego, no hay mayor necesidad que la de un perceptor de

pensiones no contributivas, quienes sí se vinculan al concepto de *necesidad*. Pero, además, la aplicación de un porcentaje especial carece incluso del sentido que se le pretende, pues dos beneficiarios pueden cumplir todos los requisitos establecidos para ser acreedores del mismo porcentaje mientras que la base reguladora puede ser diferente, dando lugar a diferentes pensiones, quizás alguna de ellas alejada de un entorno de necesidad ya que únicamente se actúa sobre uno de los parámetros.

Si se parte de los datos muestrales de la MCVL-2014, la mayoría de las pensiones se encuentran en el modelo general que aplica un tipo del 52% por beneficiario (97,3986%), quedando para el 70% un tipo del (1,0523%) y siendo residuales otros casos. En las prestaciones con alta en el ejercicio 2014 el tipo del 52% representa el 97,6829%, mientras que las correspondientes al 70% son el 2,3171% restante.

Gráfico 34. Tipo aplicado a la base reguladora en la prestación de viudedad



Fuente: elaboración propia con datos de la MCVL 2014. Total muestral.

Junto a lo ya apuntado a lo largo de este trabajo sobre el porcentaje F_1 aplicable a la base reguladora, en la viudedad una de las críticas habituales es que contribuye a una baja cuantía de la pensión inicial y, por ello, debería ser inexcusablemente elevado con el objetivo de la obtención de pensiones “suficientes”¹⁹¹. A favor de la elevación del porcentaje general se encuentra, por ejemplo, Vicente Palacio, M.A. (2010), para quien el porcentaje general debería situarse “entre el 65% y el 70%”. Pues bien, sobre esta

¹⁹¹ Varios autores (2009): “Mesa Redonda. Retos del Pacto de Toledo”. *Economía Española y Protección Social*, nº I.

cuestión, indudablemente positiva para el beneficiario de la pensión, hay que hacer las siguientes consideraciones:

1. En el importe de la pensión inicial no solamente influye F_1 , sino también la cuantía de la base reguladora (B_r en la terminología aquí usada). Además, las diferencias en la cuantía de la pensión son relevantes según el régimen de procedencia de cada pensión, argumento indispensable para dejar constancia de que en su cuantía hay otros factores relevantes más allá de F_1 , por lo que una variación al alza de este factor lo que hace generalmente es favorecer a beneficiarios de quien menos ha cotizado de forma voluntaria y consciente.
2. Cuando se hace referencia a las pensiones de baja cuantía se suele trabajar con la pensión media de un periodo, obviando la variabilidad y los elementos que contribuyen a construir ese valor medio, pues en el mismo se encuentran recogidas pensiones con importes bajos, pero que lo son por las siguientes razones: no ser susceptibles de ser complementados por mínimos al disponer el beneficiario de rentas, corresponder a pensiones al amparo de convenios internacionales o venir la pensión de una concurrencia de beneficiarios, casos que no tienen por qué vincularse a una extrema necesidad del perceptor pero sí de gran influencia en los cálculos de un valor promedio.

Con todo lo indicado hasta el momento, de cara a una teórica modificación del porcentaje F_1 aplicable surgen distintas alternativas de acción:

A) Variación del porcentaje general de aplicación

Un mayor porcentaje aplicable a la base reguladora supone mayores prestaciones individuales iniciales, algo siempre aceptable desde la perspectiva social del individuo, pero también da lugar a una mayor cuantía de gasto global, lo que repercute en la sostenibilidad del modelo pero sobre todo en una mayor ineficiencia con respecto a los beneficiarios de otras prestaciones contributivas. El efecto del incremento del porcentaje estaría a su vez limitado según la cuantía establecida para el complemento a mínimos, pues es éste el punto a partir del cual tendría plenos efectos esta acción, facilitándose en algunos casos el trasvase de responsabilidades a cargo del sistema no contributivo hacia el contributivo. Los porcentajes pretéritos partían de un planteamiento sencillo: puesto que una pensión completa de jubilación era fuente de sustento de una pareja, la pérdida de uno de sus miembros supone una reducción de ingresos, pero también de gastos, eliminándose algunos de naturaleza común. Es verdad que la realidad social actual es algo más compleja y puede flexibilizar esta situación, pero no hay suficientes argumentos

para que en una modalidad contributiva se incrementen los porcentajes vinculados a la pensión de viudedad. En nuestra opinión, por coherencia interna del modelo el porcentaje F_1 para la viudedad en el modelo contributivo nunca debería ser superior al mínimo aplicable a la pensión de jubilación, por lo que cualquier variación que se pueda plantear debería ser a la baja. Todo ello nos lleva a considerar establecer el porcentaje actual en el 50% como máximo.

Esta situación implica que a los nuevos pensionistas a los que se aplica el complemento a mínimos ya sin la reforma se mantendrían sin cambios (aproximadamente la mitad según los datos muestrales de la MCVL-2014), algunos beneficiarios verían activado el complemento a mínimos porque son acreedores del mismo tras la reforma (y no lo necesitarían sin ella) mientras que otros podrían dejar de percibir la pensión máxima del sistema y pasar a una pensión inferior.

B) Modificación o supresión de los porcentajes especiales

Desde nuestra perspectiva, los porcentajes especiales establecidos en la norma y que se amparan en un espíritu asistencial deben ser reconducidos y, de seguir estimándose como necesarios, deben ser financiados íntegramente por impuestos. A pesar de que el coste para el conjunto del Estado no varía, como indican Hernández González, D. *et. al.* (2011): “esta alternativa no resuelve en absoluto los problemas derivados de la concepción de estos porcentajes adicionales y mantiene un régimen gravoso para una parte de los integrantes del sistema pero, al menos, no supondría una carga para el sistema contributivo de la Seguridad Social”.

Como en el caso anterior, en aquellas prestaciones en las que se dan los complementos a mínimos tras la aplicación del tipo a la base reguladora esta medida no surtiría efecto.

C) Incorporación de criterios de equidad contributiva

Hay distintos instrumentos para incorporar al porcentaje F_1 herramientas que busquen introducir un mayor peso a la equidad contributiva mediante distintos grados de sensibilidad hacia las cotizaciones realizadas por el sujeto causante, por ejemplo, la incorporación de un sistema como el existente en la pensión de jubilación (Vicente Palacio, M.A., 2010). En esta línea de acción se plantearía sustituir el factor F_1 , actualmente de carácter fijo, por una función lineal basada en el *porcentaje mínimo aplicable* f , el *número de meses cotizados* x , el *período mínimo en meses de cotización* m para acreditar el derecho a la prestación, el *período máximo exigido* M y la *pendiente*

ρ , que recoge la evolución de los incrementos por cada mensualidad cotizada por encima del mínimo, tal que, de una forma similar a la de la expresión [76]:

$$\begin{aligned} F(x) &= f + \rho \cdot (x - m) = \rho \cdot x + \eta \\ \eta &= f - \rho \cdot m, \quad x \leq M \end{aligned} \quad [79]$$

Para un período mínimo en meses de $m=24$, un período máximo de $M=96$ meses, un porcentaje mínimo garantizado $f=41\%$ y una pendiente $\rho=0,125\%$ (por cada mes cotizado a partir del vigésimo cuarto el porcentaje se incrementa $0,125\%$), el porcentaje aplicable se encontraría entre el 41% (24 meses de cotización) y el 50% por ciento (96 meses de cotización).

3.2.2. La base reguladora

El segundo elemento clave en el cálculo de la pensión inicial es la base reguladora F_4 , estimador de la estructura de cotizaciones imputadas al sujeto causante. Para su cálculo en los supuestos de prestaciones derivadas de contingencias comunes se computarán las bases por las que se haya cotizado durante el periodo establecido reglamentariamente anterior al mes previo al del hecho causante¹⁹², con el planteamiento básico recogido en la expresión [51]. Por su parte, el artículo 7.3 del *Real Decreto 1646/1972, de 23 de junio*, indicaba sobre la base reguladora para pensiones derivadas de pasivo que:

La base reguladora de las pensiones por muerte y supervivencia, cuando el causante, al tiempo de su fallecimiento, fuese pensionista de jubilación o incapacidad permanente, será la misma que sirvió para determinar su pensión. En estos casos, la cuantía de la pensión se incrementará mediante la aplicación de las mejoras o revalorizaciones que, para las prestaciones de igual naturaleza por muerte y supervivencia, hayan tenido lugar desde la fecha del hecho causante de la pensión de la que deriven.

Como se aprecia, la ineficiencia de este modelo es relevante puesto que solamente son veinticuatro las mensualidades que forman parte de la base reguladora, que en la amplia mayoría de los casos difícilmente puede ser representativa de la estructura de cotizaciones realizada por el sujeto causante. Además, en la pensión de viudedad el beneficiario puede escoger las bases de cotización que le sean más beneficiosas¹⁹³, frente

¹⁹² Artículo 179 bis de la LGSS.

¹⁹³ En origen, 24 meses a escoger entre los siete años inmediatamente anteriores a la fecha en que se cause derecho a la pensión según el artículo 49.1 del *Decreto 3158/1996, de 23 de diciembre*, plazo ampliado a 15

a lo que ocurre con perceptores de otras prestaciones sin que existan argumentos suficientemente razonables para ello desde una perspectiva técnica.

Para la determinación de la base reguladora en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, junto al corpus normativo básico sobre cotizaciones y bases de cotización¹⁹⁴ se acude al artículo 9.d) de la *Orden de 13 de febrero de 1967* en cuanto a la base reguladora calculada sobre retribuciones efectivamente percibidas ; respecto a la determinación del salario base al capítulo V del Reglamento de Accidentes de Trabajo aprobado por Decreto de 22 de junio de 1956 y a la disposición adicional undécima del *Real Decreto 4/1998, de 9 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social para 1998*. La base reguladora se determinará sobre retribuciones efectivamente percibidas en el ejercicio¹⁹⁵ y se dividirá entre 12, con la casuística y adaptaciones correspondientes para contratos temporales y salarios percibidos por unidad de obra.

Finalmente, respecto a la existencia de lagunas de cotización los artículos 140 y 162 de la *LGSS* recogen la norma de actuación para las bases reguladoras de incapacidad permanente y jubilación¹⁹⁶, pero nada se dice en cuanto a la base reguladora que no sea derivada de alguna de estas prestaciones, muy posiblemente porque las condiciones de cálculo vistas hacen altamente improbable la existencia de tales lagunas.

Una vez determinada la pensión inicial de viudedad por aplicación de un porcentaje a una base reguladora, el régimen de seguridad social establece que la pensión contributiva se revaloriza anualmente al comienzo de cada año. Hasta la aprobación de la *Ley 23/2013, de 23 de diciembre*, esta revalorización se realizaba en función del Índice de Precios al Consumo previsto para el ejercicio correspondiente, si bien esta norma aprobó un nuevo sistema basado en el *IRP*, aplicado ya desde la revalorización correspondiente al año 2014. Nótese que la cuantía de la pensión inicial se revaloriza conforme a la evolución de una variable, el *IRP*, mientras que la base reguladora utiliza, para revalorizar las bases de cotización que de ella forman parte, el Índice de Precios al Consumo.

años mediante el artículo 7.2 del *Decreto 1646/1972, de 23 de junio*, según redacción dada por el *Real Decreto 1795/2003, de 26 de diciembre*, a contar desde el mes previo al del hecho causante según la disposición final tercera.12 de la *Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010*.

¹⁹⁴ Artículos 108 y 109 de la *LGSS*.

¹⁹⁵ Incluyen gratificaciones extraordinarias, pluses y retribuciones complementarias computables así como otros conceptos en lo que resulta de aplicación.

¹⁹⁶ "Las primeras cuarenta y ocho mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento, y el resto de mensualidades con el 50 por 100 de dicha base mínima.

Respecto a la base reguladora, las principales alternativas de trabajo pasan por una modificación del cálculo de la propia base de cotización o por la revisión del número de bases de cotización que se incluyen en el cálculo de la base reguladora, opción que afectaría al sistema en su conjunto y de la que puede esperarse para la mayoría de los casos –pero no para todos- un menor importe. Señalamos también otra posibilidad que incide, no en el concepto de la base reguladora, sino en su utilización para la determinación de la cuantía de una pensión a través de una *densidad de la cotización*, opción señalada por Hernández González, D. *et al.* (2011) y basada en trabajar con “la relación en cada instante entre las bases de cotización imputadas y las bases de cotización máximas, todas ellas actualizadas según el conjunto de las variaciones de precios I_i acaecidas”, sumándose a un porcentaje mínimo que se integraría en el porcentaje general α a aplicar a la base reguladora:

$$\alpha = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot \frac{\sum_{i=1}^n B_i^c \cdot I_i}{\sum_{i=1}^n B_i^{max} \cdot I_i} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot \gamma \quad , \quad \gamma < 1 \quad [80]$$

$$\sum_{i=1}^n B_i^{max} \cdot I_i \approx n \cdot B_n^{max} \text{ si } I_i \rightarrow 1$$

B_i^{max}	Base de cotización máxima en el período considerado
B_i^c	Base de cotización imputada en el instante i-ésimo
I_i	Factor de actualización de cada base de cotización en un punto determinado
α	Porcentaje aplicable a la base reguladora, tal que $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1$, donde α_0 se consideraría un porcentaje fijo igual para todos los casos y α_1 un porcentaje variable según el historial de bases de cotización del sujeto causante

El porcentaje finalmente aplicable a la base reguladora crecerá cuanto mayores hayan sido los ingresos realmente imputados al causante (contando tanto el número como el importe), esto es, dependiendo de las bases de cotización actualizadas al momento de cálculo. A mayores bases de cotización ante un tipo de cotización constante, mayor porcentaje adicional α_1 se concede y, por ello, mayor importe final de pensión. El porcentaje final requiere aplicarse a una “base reguladora” y por la dinámica seguida es coherente pensar en un importe fijo y sujeto a revalorización cada año, por ejemplo, la pensión máxima que concede el sistema. Los beneficios para las contingencias profesionales quedarían separados y concedidos mediante otras alternativas adicionales en los términos recogidos en la indemnización a tanto alzado.

Las posibilidades citadas en este epígrafe afectarían a todo el conjunto de pensiones de la Seguridad Social y deben verse desde una perspectiva de reforma conjunta, no siendo posible la evaluación económica al no existir en la MCVL-2014 y/o en otra información estadística pública los recursos mínimos necesarios.

3.2.3. Complementos a mínimos y límites de pensiones

La Seguridad Social española garantiza un importe mínimo de pensión, de tal forma que aquellas pensiones contributivas cuya cuantía no llegue hasta el límite garantizado se elevarán hasta alcanzar éste siempre que el beneficiario sea residente en territorio español y no perciba rendimientos del trabajo, del capital o actividades económicas y ganancias patrimoniales que excedan de la cuantía establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado¹⁹⁷, complemento a mínimos de carácter absorbible y no consolidable. En la pensión de viudedad la cuantía mínima se encuentra diferenciada para cuatro grupos, cuyos valores estimados para 2016 son los siguientes: *titular con cargas familiares* (735,70€ en 14 pagas), *titular con al menos 65 años o discapacidad mínima del 65%* (636,10€ en 14 pagas), *titular con edad entre 60 y 64 años* (595,00€ en 14 pagas) y *titular con menos de 60 años* (480,29€ en 14 pagas). Los complementos a mínimos no pueden superar el importe de las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva y son incompatibles con la percepción de determinados rendimientos más allá del límite establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, para 2015: 7.098,43€.

El complemento a mínimos es un elemento de gran importancia para garantizar una cuantía básica de pensión que impida situaciones que se consideran de “extrema pobreza”, con un marcado carácter asistencial que favorece su financiación mediante impuestos generales. Este carácter se refuerza con el establecimiento de importes diferentes según la edad, las cargas familiares y la discapacidad, aunque esto representa una nueva tendencia a la presuposición de la necesidad agravada. López Zafra, J.M. *et al.* (2010) y Vicente Palacio, M.A. *et al.* (2007) indican que los complementos a mínimos constituyen “un mecanismo corrector de la *contributividad* (sic.)”, pues lo que hacen es reconocer un importe de cotizaciones ficticio que no se ha dado en la práctica pero que sí tiene su consecuencia en la cuantía de la pensión; el sistema no elimina el componente contributivo, pero atenúa la intensidad de su aplicación y/o importancia. Por su parte, Sampedro Corral, M. (2008) afirma que es la pensión contributiva la que ocasiona la cobertura por mínimos y no cada una de las fracciones en que pueda dividirse en

¹⁹⁷ Artículo 50 de la LGSS.

aplicación de la legislación¹⁹⁸. En caso de concurrencia de pensiones en un beneficiario¹⁹⁹ se reconocerá el complemento por mínimo si la suma de las pensiones concurrentes es inferior al mínimo “que corresponda a aquella de las del sistema de la Seguridad Social que lo tenga señalado en mayor cuantía, en cómputo anual”.

Por otra parte, en cuanto al complemento por mínimos en las pensiones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional²⁰⁰, el importe anual de la pensión se dividirá por 14 y el cociente resultante se considerará como importe mensual a efectos de la revalorización. Si ese cociente es inferior a la cuantía mínima establecida para las pensiones de su clase, la diferencia se considerará el complemento por mínimo. El aumento que resulte de la aplicación de ambas acciones (revalorización y mínimo) se incrementará al importe de cada mensualidad de la pensión, salvo las correspondientes a junio y noviembre, donde el incremento será doble. El complemento a mínimos es un elemento que obviamente rompe la equidad en la contribución pero, sin embargo, tiene un amplio valor en el plano social, por lo que dentro del diseño actual es una partida valorable positivamente siempre que su financiación corra a cargo íntegramente de los impuestos generales

Igualmente, el importe inicial de las pensiones contributivas de la Seguridad Social, entre ellas la de viudedad, tienen un límite máximo anual²⁰¹, que en el ejercicio 2016 se estima en 35.941,92€ (14 pagas de 2.560,88€), frontera de carácter solidario ya que, en consonancia con los límites de las bases de cotización del ejercicio, hace que una parte de los ingresos al sistema imputados a los trabajadores se sometan íntegramente al principio de solidaridad puesto que no contribuyen a generar importes superiores de la prestación. La pensión máxima respecto a la base de cotización máxima es del 71,02% en 2015 (en 2011 era del 77,33%), mientras que la pensión mínima para el colectivo con más beneficiarios con mínimos, el de titulares con al menos 65 años o al menos el 65% con discapacidad, representa el 83,86% de la pensión mínima del sistema (en 2011 era el 81,89%). Para los titulares con cargas familiares el porcentaje en 2015 es del 96,99%.

¹⁹⁸ Doctrina aplicable a cónyuge separado legalmente o divorciado, aunque sea el beneficiario único de la pensión. En Sampedro Corral, M. (2008) se citan: Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1994, Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2005, Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 1994 y Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2002.

¹⁹⁹ *Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre.*

²⁰⁰ Disposición adicional segunda del *Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre.*

²⁰¹ Artículo 47 de la LGSS y *Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre*, con las particularidades para las pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo según el artículo 51 de la LGSS.

3.2.4. Concurrencia de beneficiarios y compatibilidad

Una de las características de la pensión de viudedad es la existencia y coexistencia de distintos beneficiarios. Respecto a la cuantía, si constando un divorcio se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, ésta se reconocerá en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante por cada uno de ellos, garantizándose el 40% a favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del sobreviviente de una pareja de hecho. Constatada aquí la relevancia de la variable *tiempo de convivencia con el sujeto causante*, se requiere tener en cuenta dos aspectos:

- a) El “verdadero viudo”, es decir, el cónyuge o asimilado en el momento del hecho causante, a quien se le presume que participa principalmente de la pérdida de rentas ante el óbito del sujeto causante, encuentra diluida su importancia dentro del sistema de protección.
- b) El tiempo de convivencia no siempre es un buen estimador de la intensidad del vínculo que merece protección pública.

Los argumentos que defienden este régimen de concurrencia se centran en que cada cónyuge habría aportado “algo” al matrimonio en términos económicos, por lo que cada uno de ellos debería participar en el salario diferido que resultase de la pensión. Ahora bien, desde nuestro punto de vista existen argumentos suficientes en contra de la concurrencia general de beneficiarios.

Con Rodríguez Iniesta, G. (2011), el primero es que esta situación no es únicamente privativa de la pensión de viudedad y entonces puede extenderse hacia otras coberturas; el segundo es que se basa en el propio concepto de *salario diferido*, teóricamente construido desde la relación en común pero que sólo actúa en una dirección, desde el causante hacia el antiguo cónyuge o asimilado, pero no a la inversa. Además, es un “salario diferido” que recurre en su constitución a bases reguladoras que a buen seguro se han generado en un período en el que no ha existido relación con el antiguo cónyuge. Por último, es un concepto que rompe las barreras de la ruptura consentida (o acordada) y las distancias de los proyectos afectivos y vitales concebidos en común, siendo ilógica la pretensión de aplicar una función compensatoria en base a algo que hace tiempo que no existe: el vínculo matrimonial o asimilado. Es cierto que el criterio del beneficiario único se presta a la incertidumbre en las uniones realizadas en la cercanía del fallecimiento del causante, pero, salvo prueba en contrario, no hay más aquí que la constancia de la voluntad de éste y ya disciplinas como el Derecho Civil y el Derecho de sucesiones actúan desde distintos planos para proteger a terceros. No es menos cierto

que, en buena lógica, quien es el principal perceptor del daño económico y moral derivado del óbito del causante es quien mantiene el vínculo en el momento del fallecimiento y, no siendo la pensión de viudedad una prestación destinada a la cobertura de la necesidad, no vemos motivos razonables en *pro* del régimen vigente, en el que, además, los teóricos beneficiarios parten de situaciones plenamente diferenciadas.

Así, pues, si bien el Tribunal Constitucional²⁰² ya apreció que: “la pensión de viudedad queda concebida como única pensión repartida entre todos los cónyuges supervivientes”, nuestra opinión es ciertamente contraria al régimen general de compatibilidad de beneficiarios en la pensión de viudedad, como así también ha quedado manifestado en, por ejemplo, Rodríguez Iniesta, G. (2001) y Hernández González, D. *et al.* (2011). Como alternativa a una eliminación total del régimen de concurrencia, puede pensarse en un régimen de concurrencia para uniones dentro de un plazo cercano al momento del óbito, por ejemplo entre 2 y 4 años, cuyo soporte técnico mitiga los condicionantes citados y cuyo soporte constitucional se puede defender atendiendo estos mismos condicionantes y a los planteamientos en que se basan los requerimientos de matrimonio en la situación de enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo conyugal. Otra alternativa puede ser incrementar el porcentaje mínimo a favor del cónyuge o asimilado desde el actual 40%, lo que no haría desaparecer el problema de fondo pero al menos sería una situación menos injusta e ilógica que la vigente. Sin que tampoco el problema se resuelva, una nueva posibilidad sería una compensación temporal o una indemnización a tanto alzado para los beneficiarios que han mantenido en el pasado un vínculo de unión, opción a la que ya mostró sensibilidad positiva Rodríguez Iniesta, G. (2011) y que es compatible con los argumentos que hemos expuesto en este capítulo.

Respecto a la pluralidad de beneficiarios, otro punto de interés es el de la poligamia, donde incluso la totalidad de los vínculos matrimoniales o de unión pueden no haber desaparecido con el fallecimiento de un sujeto causante. Se está aquí ante una alternativa entre la aplicación de la ley de residencia o la ley personal bajo la que se ampara esa unión en aplicación de convenios internacionales²⁰³ (con la consiguiente posibilidad de comisión de un delito según las normas española). En nuestra opinión, no debería haber duda de la primacía de la legislación española y de la cuestión de orden público (si es que esta situación se entiende como tal), teniendo además en cuenta, insistimos, que no se está ante una pensión destinada a proteger situaciones de necesidad. Es razonable evitar que una misma cotización genere varias pensiones de la

²⁰² STC 125/2003, de 19 de junio.

²⁰³ Por ejemplo: *Convenio bilateral con la República de Túnez*. Artículo 24: “En caso de que exista más de una viuda con derecho, la pensión de supervivencia se repartirá entre ellas a partes iguales”.

misma clase cuando varias cotizaciones distintas y realizadas correctamente por diferentes causantes no generan normalmente una prestación sobre el mismo beneficiario. Como indican Hernández González, D. *et al.* (2011):

Tal cuestión no es banal, porque aceptar tácitamente la poligamia por la aplicación de la Ley personal conlleva admitir también la figura del repudio o de matrimonios con menores de edad si es legal en terceros países aun cuando nuestra legislación no lo acepte, aspectos que no contribuyen precisamente a la defensa de los derechos de la infancia, la igualdad de sexos, etc. Además, reconoce primacía a una ley extranjera sobre una nacional, siendo cuando menos sorprendente que España haya firmado convenios internacionales contrarios a su derecho y costumbre y la pretensión de que estos convenios tengan un mayor valor aun cuando refuercen instituciones contrarias a la igualdad.

Por último, la poligamia puede dar lugar a que sobre la misma persona recaiga la condición de teórico viudo mientras mantiene vínculos matrimoniales con otra persona, aspecto que tampoco es defendible al abrigo de que ese vínculo es motivo de extinción en el resto de los casos.

En cuanto a la cuestión de la compatibilidad entre rentas y prestaciones, que tendría que depender del verdadero objetivo de la prestación, la legislación reconoce un régimen favorable para la pensión de viudedad. En primer lugar, es compatible con cualesquiera rentas de trabajo e incompatible con el reconocimiento de otra pensión de viudedad en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, salvo que las cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante 15 años²⁰⁴; Como norma general no se puede ser pensionista de distintos cónyuges independientemente del cumplimiento de los requisitos exigibles a cada sujeto causante. Además, la suma de las cuantías de las pensiones por muerte y supervivencia no podrá exceder del importe de la base reguladora que corresponda, limitación que se aplica a la determinación inicial de los importes pero no a sus revalorizaciones periódicas; sin embargo, se establece una excepción en la concurrencia de varias pensiones de orfandad con una pensión de viudedad cuyo porcentaje a aplicar a la correspondiente base reguladora sea del 70%, si bien, en ningún caso, la suma de las pensiones de orfandad podrá superar el 48% de la base reguladora, de tal forma que la suma de este 48% y el 52% del caso general es igual al 100% y al 118% si se aplicase el 70% a la viudedad.

²⁰⁴ Artículo 179.1 de la LGSS. Sorprende el plazo establecido por su adecuación a criterios comunes frente al camino propio diseñado para la pensión de viudedad en otras materias como las exigencias de cotización al sujeto causante

Hay que tener en cuenta también que las pensiones del Régimen General de la Seguridad Social son incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario, legal o reglamentariamente²⁰⁵ debiendo optarse, cuando así es requerido, por una de ellas. Pues bien, para la pensión de viudedad la excepción a esta incompatibilidad se encuentra en el artículo 10 de la *Orden de 13 de febrero de 1967*²⁰⁶, así como en la *Ley 9/2005, de 6 de junio*. Como se ha podido apreciar, se está ante un controvertido régimen de privilegio también en cuanto a la compatibilidad, como reconoció Gete Castrillo, P. (2001) cuando habló del “dislocado régimen de absoluta compatibilidad” del que ha gozado la pensión de viudedad. Por otra parte, como propuesta de reforma respecto a la compatibilidad de rentas, Gorelli Hernández, J. (2005) planteaba “la limitación de la cuantía de la pensión de viudedad en caso de que el supérstite tenga rentas económicas, situación que incluso podría suponer la fijación de un tope máximo de renta a partir de la cual no se generaría derecho a la pensión de viudedad”, argumentos que acercan la pensión a la esencia no contributiva.

Una cuestión adicional de interés en este campo es si la existencia de una pensión influye en la incorporación al mercado de trabajo, algo que dependerá de la relación entre los importes monetarios a conseguir de ambas opciones, las características personales e interés del beneficiario, las particularidades del propio puesto de trabajo y la situación del mercado laboral, pues es éste el que determina la demanda. Es razonable pensar que una persona que obtenga una pensión vitalicia por un importe relevante no muestre ninguna sensibilidad por incorporarse al mercado laboral, pero desde una perspectiva contributiva no hay obstáculo para que esto ocurra, pues la equivalencia entre prestaciones y aportaciones, si está correctamente calculada, es un soporte para tal decisión: es el esfuerzo del sujeto causante el que origina una prestación y nada interesan las rentas de que dispone el beneficiario. Dicho esto, hay que tener en cuenta también el propio objetivo de la prestación, pues es el que en primer lugar debería delimitar la capacidad de la compatibilidad. Así, por ejemplo, conocida la variabilidad en la definición de la incapacidad y puesto que en su grado “permanente” tiene como objetivo primigenio teórico la satisfacción de rentas ante la imposibilidad esperada de trabajar (imposibilidad que puede no ser tal), la compatibilidad de pensión y trabajo no tiene aquí pleno sentido (salvo reforma esencial que no meramente jurídica de la incapacidad), aun cuando en los momentos actuales el ansia recaudadora y el apremio de los grupos de presión pasen por encima de planteamientos de coherencia o de los principios filosóficos y la naturaleza de las prestaciones de la Seguridad Social. En

²⁰⁵ Artículo 122.1 de la LGSS.

²⁰⁶ Con las particularidades de límites de dependencia económica para parejas de hecho (artículo 174.3 de la LGSS) y las modificaciones habidas para equiparación de derechos según el sexo del beneficiario.

cualquier caso, la compatibilidad entre trabajo y pensión no es garantía de un saldo positivo respecto a las cuentas de la Seguridad Social, pues lo que puede originar, por ejemplo en la incapacidad permanente, es la concesión de pensiones a quienes se pueden incorporar al mercado laboral sin necesidad de tal pensión o la sensibilidad encubierta hacia menores salarios por parte del empleador.

Dentro de un sistema realmente contributivo nuestra posición respecto a la compatibilidad de rentas en la pensión de viudedad no sería restrictiva, eso sí, mientras se restrinja la situación de privilegio existente, aunque tiende a ser una opinión desfavorable en la jubilación y la incapacidad permanente debido a la naturaleza de cada una de estas prestaciones, aun sabiendo que no es coherente desde una perspectiva de equidad ; esto es, puesto que no se deslinda claramente la naturaleza y objetivo de las prestaciones y la situación de compatibilidad es difusa en sus objetivos y aplicación, nos cuestionamos el valor de la compatibilidad total mientras la modalidad contributiva no sea realmente contributiva y mientras no haya una reforma esencial en las prestaciones de incapacidad. En otro caso (y sólo en otro caso), en lo que respecta a la compatibilidad de rentas en la pensión de viudedad no sería extraño limitar la misma fomentando la elección por parte del beneficiario o articular un modelo de coexistencia que tenga en cuenta otras variables socioeconómicas, en definitiva, incorporar argumentos asistenciales a los ya conocidos. Otra forma de dar solución a la cuestión a estudio es la proposición de una compatibilidad parcial que sea restringida en la aceptación de otras pensiones públicas y más laxa para otro tipo de rentas -o viceversa-. De nuevo, la esencia del modelo contributivo favorece desechar esta opción, aunque no hay que olvidar el interés desde el punto de vista de la sostenibilidad.

En consonancia con todo lo anterior señalamos como posibilidad de trabajo la indicada por González Ortega *et al.* (2012), quienes apuntan a la incompatibilidad de la pensión de viudedad con un determinado límite de rentas o ingresos, aunque esta opción adolece de incertidumbre y arbitrariedad en la determinación de dicho límite, así como quiebra la equidad en el modelo contributivo que parte, una vez más, de la consideración de la preminencia de las características del beneficiario frente al esfuerzo contributivo realizado por el sujeto causante. Sobre el mismo tema una variante es la aplicación de un coeficiente $\beta \in (0,1)$ a la pensión inicial según el nivel de patrimonio que se tiene en la compatibilidad, medida que recoge la incertidumbre anterior y añade la derivada de la existencia de una cuantía mínima que limita su acción.

Para concluir este apartado abordaremos el mantenimiento y la extinción de la pensión de viudedad, vinculados necesariamente a los criterios que se establecen para el acceso.

Con la situación vigente las causas de la extinción de la pensión vitalicia serían: el fallecimiento del beneficiario; la culpabilidad en la muerte declarada en sentencia firme²⁰⁷; la reaparición del causante que fue dado por desaparecido o el establecimiento por el beneficiario de una nueva vinculación afectiva (matrimonio o pareja de hecho) por la que pierde la condición de viudo, con las consiguientes excepciones reglamentarias²⁰⁸:

- Pensionistas mayores de 61 años o de edad inferior con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez o discapacidad igual o superior al 65%.
- Cuando la pensión –incluido el complemento a mínimos- constituye la principal o única fuente de rendimientos, es decir, al menos el 75% de los ingresos anuales del pensionista.
- Criterios económicos de la unión afectiva. Ingresos anuales de la unión inferiores a dos veces y medio el salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, si bien, si las cuantías individuales de pensiones no superan los criterios económicos propios pero la cuantía conjunta sí sobrepasa los matrimoniales, se minorarán la pensión o pensiones de viudedad hasta este límite mediante criterios de proporcionalidad en la relación entre cada pensión y la suma total de ellas.

Estas excepciones no son otra cosa que nuevos argumentos asistenciales dentro de una pensión contributiva que priman criterios sociales sobre los conceptos y favorecen una nueva desigualdad dentro del conjunto de los beneficiarios de la prestación y de éstos con los de otras prestaciones. De cualquier modo, para no desnaturalizar la prestación²⁰⁹, la exigencia impuesta sobre la no iniciación de un nuevo vínculo afectivo regulado es tan necesaria formalmente como inefectiva en la práctica, pues nada impide la convivencia sin unión.

Un motivo que podría ser estudiado de cara a la extinción de la pensión de viudedad viene de la posibilidad de que ésta se convierta en pensión de jubilación contributiva atendiendo a un hipotético trasvase de carrera del seguro –o de prestaciones- desde el causante al beneficiario cuando éste llegue a la edad de jubilación correspondiente. De este trasvase podría esperarse un incremento del importe del gasto del sistema por incremento de algunas pensiones individuales (por ejemplo por las cuantías mínimas que

²⁰⁷ Por derivación del artículo 127 de la *Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal* (vigente hasta 28-10-2015), donde se recoge que todo delito doloso conlleva la pérdida de los efectos y ganancias que provengan de él.

²⁰⁸ Artículo 11 de la *Orden de 13 de febrero de 1967*, con las modificaciones realizadas por el *Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo*, y el *Real Decreto 1465/2001, de 27 de diciembre*.

²⁰⁹ Rodríguez Iniesta, G. (2011).

ofrece el sistema) que sería favorable para el beneficiario, pero también incluiría una nueva asimetría entre los beneficiarios de la Seguridad Social e, incluso, una preeminencia sobre quienes han ostentado la segura condición de legalmente obligados al pago de cotizaciones, dando lugar a pensiones iguales para distintas cotizaciones. El único argumento técnico que justifica de forma suficiente que en el sistema actual una carrera de cotización genere una prestación de viudedad derivada a favor de un tercero es la pertenencia a una modalidad contributiva, pero esto es así siempre que la equivalencia planteada sea razonable en términos económicos puesto que una cotización no debería soportar fuentes ilimitadas de gasto. Aunque el trasvase se pretendiese promover como un mero cambio del nombre jurídico de la prestación, lo cierto es que el causante a través de su cotización genera una prestación de jubilación también para un tercero, sin que se considere importante el origen de la misma. Por la aplicación del mismo principio, una nueva incógnita es saber si esta "nueva" pensión de jubilación tiene a su vez capacidad para generar pensiones derivadas de las nuevas uniones, cuestión merecedora a nuestro juicio de una respuesta negativa desde una perspectiva de coherencia de cobertura y de equilibrio económico. No parece, por tanto, que sea esta una opción de futuro de cara a la reforma del modelo vigente, pues no es más que un incremento encubierto de la cuantía media de las pensiones de viudedad en detrimento de la racionalidad y de la equidad contributiva del sistema y de sus cotizantes.

3.3. La reforma de la viudedad desde una perspectiva paramétrica

La pensión de viudedad goza de un régimen de absoluto privilegio que origina una amplia ineficiencia conceptual en el modelo de protección. Esta situación no se origina más que por la voluntad del legislador, que hace gala de una tendencia paternalista basada en principios obsoletos de los que se deriva, en nuestra opinión, un entorno proteccionista, que no protector. La cuestión es si este sistema debe mantenerse inalterable con vistas a un futuro inmediato, cuestión a la que respondemos negativamente no ya desde la perspectiva de la sostenibilidad, sino desde la de la coherencia conjunta de la Seguridad Social. Si la pensión de viudedad se mantiene en su esfera contributiva debería abandonar todos los criterios asistenciales que sobre la misma gravitan, adecuando el resto de características a esta realidad y, por ello, ésta es la primera cuestión que debe ser abordada de forma inequívoca: el objetivo de la pensión. Desde nuestra perspectiva es una prestación contributiva que se dedica a compensar una pérdida de ingresos, por lo que no ha lugar al régimen de privilegio establecido ni a la consideración de criterios asistenciales en su conceptualización.

Las posibilidades de reforma de la pensión de viudedad atendiendo a sus parámetros son muy variadas, pero todas dependen de su objetivo en el modelo de protección social, que debería ser concreto y explícito. Por ejemplo, Ojeda Avilés, A. (2008) presenta distintas alternativas: suprimir la pensión e incluir la cobertura en otras contingencias; una pensión superior en caso de situaciones agravadas por edad, incapacidad, hijos a cargo, dejando una cuantía de importe bajo para el resto de los supuestos; recuperar el tratamiento que la pensión tenía en 1966: al menos 45 años en el beneficiario, incapacidad permanente o hijos a cargo, dejando para el resto una temporalidad de 24 meses; o, finalmente, no perder de vista la función transaccional alemana que se orienta a la adaptación a la vida activa y la recuperación sociológica y social. Según lo que hemos expuesto hasta el momento, manteniendo el modelo actual planteamos diversas propuestas de modificación desde una perspectiva eminentemente paramétrica, entre otras:

1. La modificación al alza de los requisitos de cotización establecidos para pensiones derivadas de enfermedad común.
2. La modificación de las reglas de concurrencia de beneficiarios, incluida su eliminación.
3. La consideración de que el porcentaje aplicable a la pensión de viudedad no puede ser superior al mínimo aplicable correspondiente a una pensión de jubilación.
4. El respeto a las características contributivas de la pensión. Los porcentajes especiales aplicables a la base reguladora deben financiarse sin excepción mediante impuestos generales.
5. El ajuste de las cuantías a la temporalidad de la intensidad del daño.

Respecto a este último punto, al estar ante una pensión cuyo objetivo es la cobertura de los teóricos efectos derivados del fallecimiento del causante, es razonable diseñar una estructura de cobro alternativa a la actual y proponer el cobro de un importe superior en los períodos más cercanos al fallecimiento en detrimento de una parte de los cobros futuros con el objetivo de facilitar la transición económica de estados familiares, eludiendo riesgos para la Seguridad Social mediante el establecimiento de cuantías no excesivamente diferenciadas y sin que se produzca un aumento del gasto. Como ya hemos planteado en el epígrafe segundo de este capítulo, esta alternativa es susceptible de plantearse a través de una indemnización a tanto alzado para contingencias comunes. Las cuantías futuras que fuesen más bajas que las iniciales no serían acreedoras de complementos a mínimos por el sólo hecho de aplicación de esta equivalencia puesto que

el importe de la prestación ya se ha cobrado por anticipado en los primeros importes periódicos y los complementos a mínimos se valoran respecto de la cuantía general, cuando aquí lo que se establece es una nueva distribución temporal de los importes.

A modo de ejemplo intuitivo, para una pensión inicial anual P_0^v calculada con los criterios actuales, una cuantía anual C a satisfacer de forma pospagable durante n períodos tras el fallecimiento del causante, quedando una cuantía $\alpha \cdot C$ desde la finalización de este período y hasta la extinción de la pensión, podemos utilizar criterios muy similares a los expuestos en [69] y [70]:

$$\begin{aligned}
 P_0^v \cdot a_x &= C \cdot a_{x:n} + \alpha \cdot C \cdot {}_n/a_x \\
 P_0^v \cdot \frac{N_{x+1}}{D_x} &= C \cdot \frac{N_{x+1} + \alpha \cdot N_{x+n+1} - N_{x+n+1}}{D_x} \\
 P_0^v &= C \cdot \frac{N_{x+1} - [(1 - \alpha) \cdot N_{x+n+1}]}{N_{x+1}}
 \end{aligned}
 \tag{81}$$

a_x	Valor actual actuarial de una renta anual, inmediata, pospagable y vitalicia para una edad x del beneficiario
$a_{x:n}$	Valor actual actuarial de una renta anual, inmediata, pospagable y temporal n períodos para el beneficiario de edad x .
${}_n/a_x$	Valor actual actuarial de una renta anual, pospagable, vitalicia y diferida n períodos para el beneficiario de edad x .
N_x y D_x	Símbolos de conmutación para un tipo de interés técnico y unas probabilidades de supervivencia dados.

Un ejemplo de esta dinámica para la pensión C anual es el que se presenta en la Tabla 7, una vez escogido el valor para el período inicial $n = 2$. Esto es, un beneficiario de 20 años que con el régimen actual recibiese un importe de 8.400 euros anuales, con este modelo recibiría los dos primeros años 9.288,82€ y, posteriormente, 8.359,94€ anuales ($\alpha = 90\%$) hasta su fallecimiento; o también, 10.387,99€ anuales durante el primer bienio y posteriormente una prestación vitalicia anual de 8.310,39€ ($\alpha = 80\%$).

Tabla 7. Estructura de pagos para una pensión inicial P_0^v

P_0^v	8.400		11.200		16.800		25.200	
$x \backslash \alpha$	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8
20	9.288,82	10.387,99	12.385,09	13.850,65	18.577,64	20.775,98	27.866,46	31.163,97
30	9.282,69	10.372,68	12.376,92	13.830,23	18.565,38	20.745,35	27.848,07	31.118,03
40	9.273,76	10.350,40	12.365,02	13.800,54	18.547,52	20.700,81	27.821,29	31.051,21
50	9.260,27	10.316,85	12.347,03	13.755,80	18.520,54	20.633,70	27.780,81	30.950,55
60	9.238,31	10.262,49	12.317,74	13.683,32	18.476,61	20.524,97	27.714,92	30.787,46
70	9.196,68	10.160,31	12.262,24	13.547,08	18.393,36	20.320,62	27.590,04	30.480,93
80	9.107,71	9.945,65	12.143,62	13.260,86	18.215,42	19.891,29	27.323,13	29.836,94

Fuente: elaboración propia con tablas de mortalidad del INE 2012-2051, ejercicio 2014, y tipo de interés técnico del 1%. Probabilidad de fallecimiento total por interpolación lineal de la correspondiente a cada sexo.

Otra reforma de corte paramétrico es establecer la concesión únicamente a partir de una edad determinada o, al menos, considerar restricciones para los beneficiarios que ostenten en el momento del hecho causante una edad inferior a la establecida como límite (opción que ya se encontraba en los orígenes de la Seguridad Social contemporánea, véase el epígrafe 1.1.2. del capítulo II, y de la que ya hemos hablado en el epígrafe 3.1.4. del presente capítulo). Esta alternativa se basaría en la hipótesis de que a partir de una determinada edad aumenta la probabilidad de la incapacidad para obtener rentas propias y, por ello, los beneficiarios en esta situación son acreedores de una protección que, en términos generales, no sería necesaria para el resto. Puede considerarse que aquí se incorpora a la muerte y supervivencia la filosofía que se encuentra en la pensión de jubilación.

Esta opción supone un ahorro en su comparación con la dinámica actual. Si partimos de la población base de entradas en el ejercicio 2014 a través de la información muestral de la MCVL-2014 para las pensiones de muerte y supervivencia, compararemos la suma de la pensión inicial mensual efectiva percibida P_x^v en la muestra con el subconjunto de aquellas observaciones en las que el beneficiario supera un límite de edad L determinado, cuantificando con ello el ahorro A (en porcentaje sobre el coste efectivo mensual inicial) que surge de establecer para cada pensión percibida el límite de edad citado como punto de corte.

$$A = \frac{\sum_{x=0}^L P_x^v}{\sum_{x=0}^{\omega} P_x^v} \quad [82]$$

Los resultados serían los que se muestran en la siguiente tabla para cada límite L :

Tabla 8. Efecto en la pensión mensual inicial muestral con la incorporación de un límite de edad *L*. Viudedad

	L=35	L=45	L=55	L=65
A	0,4460%	4,1385%	14,8200%	32,4468%

Fuente: elaboración propia con datos de la MCVL-2014.

Sin embargo, esta opción no es sino una nueva quiebra del componente contributivo puesto que son las características del beneficiario y no la estructura de aportaciones las que determinan la concesión de la prestación y los distintivos y cuantía de ésta. Además, es necesario plantear una edad sobre la que establecer el límite, edad que tendrá un grado amplio de arbitrariedad o que, en otro caso, pudiera tener alguna explicación o justificación en un instante determinado que no tiene por qué ser mantenida en un momento posterior. Inmediatamente surge una nueva cuestión cuando se interpreta esta medida en términos de constitucionalidad puesto que, si para un estrato ideológico existen problemas en la consideración de la desagregación por sexo aun cuando el riesgo es bien diferente, nada hace suponer que cualquier otra segmentación, aquí por la variable *edad*, debiera ser aceptada bajo esas mismas premisas.

4. LA PENSIÓN DE ORFANDAD

4.1. Características generales

4.1.1. Caracterización económica global

El teórico objetivo de la pensión de orfandad es la concesión de una prestación a cada uno de los hijos del sujeto causante que cumpla unos determinados criterios respecto a la edad y, si procede, a los ingresos y la situación personal. Para Rico Letosa, S. y F.J. Magaña Balanza (2000) "se concibe para sofocar el real o presunto estado de necesidad económica que ocasiona en unos sujetos, en este caso los hijos, el fallecimiento de uno o dos de sus progenitores". La pensión de orfandad tiene una vocación temporal (excepto para los beneficiarios sujetos a una incapacidad de cierta intensidad) y se satisface mediante una renta periódica que se abonará a quien tenga a su cargo a los beneficiarios de la prestación, bien entendido que la mayoría de edad permitiría el abono directamente al beneficiario.

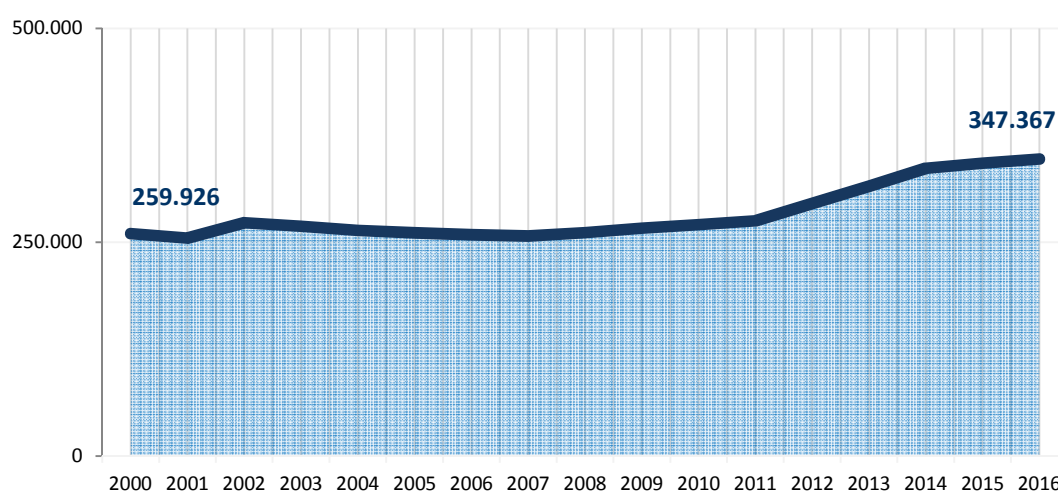
Aunque de nuevo nos situamos en una prestación de carácter compensatorio basado en la pérdida de los ingresos de los que se beneficiaba el ahora huérfano, la pensión de orfandad parte de una necesidad presunta, pues el legislador entiende que el fallecimiento del progenitor conlleva inexcusablemente una merma en la capacidad económica del hijo superviviente, de quien, al contrario que en la pensión de viudedad, sí puede decirse de forma razonable que presenta una mayor sensibilidad hacia una situación en la que no siempre le es permitido ejercer su propia capacidad para evitar la necesidad; en primer lugar, porque la propia legislación laboral impide el ejercicio de una actividad profesional por debajo de un límite de edad; en segundo lugar, porque por encima de esa edad se constata una dificultad real para el acceso al mercado laboral o el acceso no se hace siempre con unas condiciones favorables, si bien este extremo pasa a un segundo plano pues no ha de ser la prioridad de la Seguridad Social la corrección de las ineficiencias de otros sectores económicos. Bajo este enfoque pueden identificarse al menos tres tipologías generales de huérfanos:

- a) Aquellos de quienes no es necesario establecer una presunción de necesidad.
- b) Aquellos a quienes la legislación impide su emancipación económica por sus propios medios, es decir, los menores que en el momento del óbito del sujeto causante tienen una edad inferior a la legalmente establecida para trabajar.

- c) Aquellos que legalmente pueden trabajar pero a los que otros factores dificultan su emancipación.

A cierre del ejercicio 2014 había 336.331 pensiones de orfandad en vigor, número que para 2016 se estima en 347.367. La variación interanual en el número de estas pensiones en los últimos ejercicios se mueve en parámetros positivos, por ejemplo el 6,59% entre 2014 y 2013 frente al 1,52% de variación entre 2010 y 2009. En cuanto a la relación entre altas y bajas, en el período 2010-2014 el número medio de altas anuales se ha situado en 25.345 pensiones, mientras que en el número de bajas se ha producido un descenso cuantitativo llamativo y muy relevante desde el año 2012. Si para los años 2010 y 2011 las bajas anuales fueron 18.602 y 19.403, en los años 2012 y 2014 los valores han sido de 4.305 y 5.073 pensiones respectivamente.

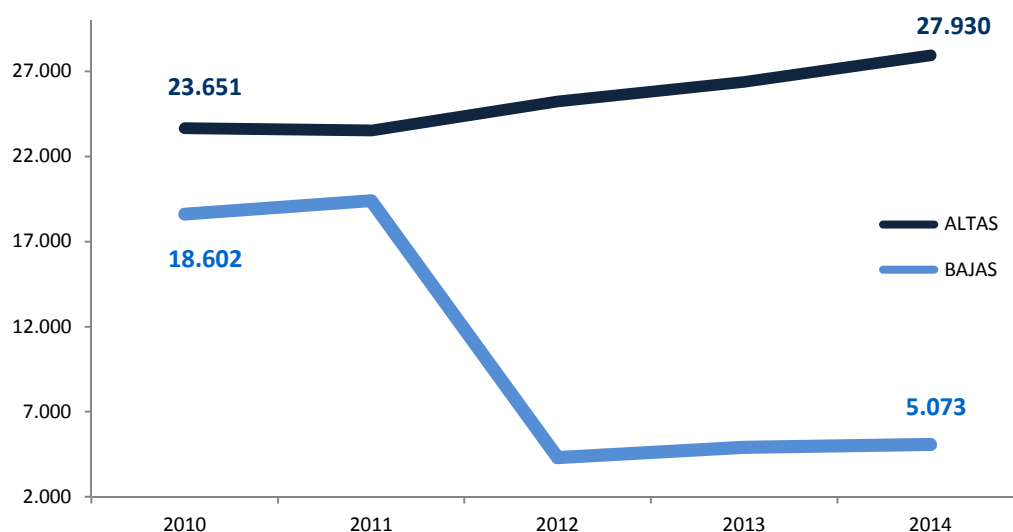
Gráfico 35. Número de pensiones contributivas de orfandad a 31 de diciembre



Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Años 2015 y 2016, estimaciones.

El gasto estimado en pensiones de orfandad para el ejercicio 2016 es de 1.810,73 millones de euros, que representan un 1,28% del gasto total de seguridad social presupuestado para ese ejercicio, un 1,38% del gasto estimado en prestaciones económicas y un 1,49% del gasto estimado en pensiones en el mismo período (el 1,52% si se habla únicamente de pensiones contributivas). Como se aprecia, la participación en cuestión de coste no se acerca a los valores alcanzados por la pensión de viudedad, aunque no por ello se está ante una prestación irrelevante desde una perspectiva socioeconómica.

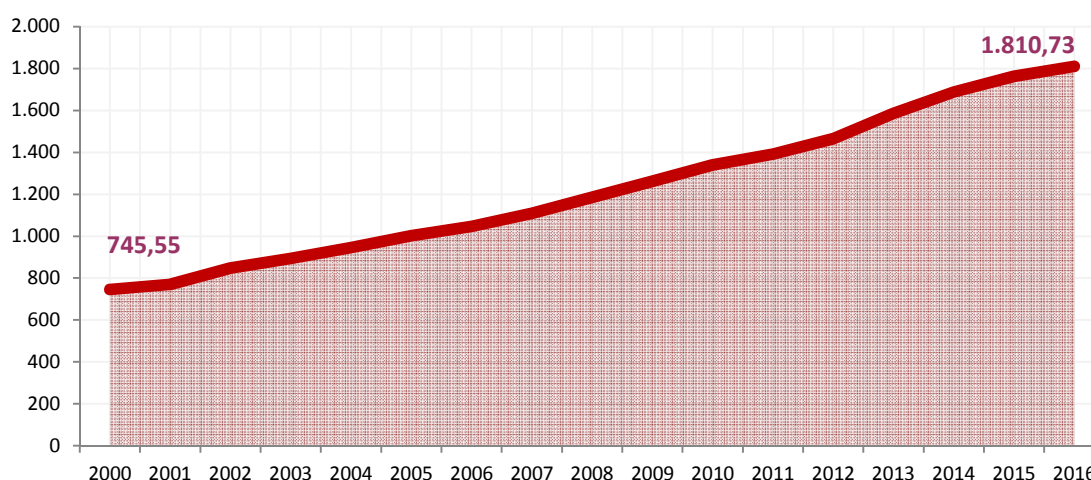
Gráfico 36. Número de altas y bajas anuales en las pensiones de orfandad



Fuente: Seguridad Social. *Estadísticas, presupuestos y estudios*. www.seg-social.es. (Consulta: 30 de agosto de 2015).

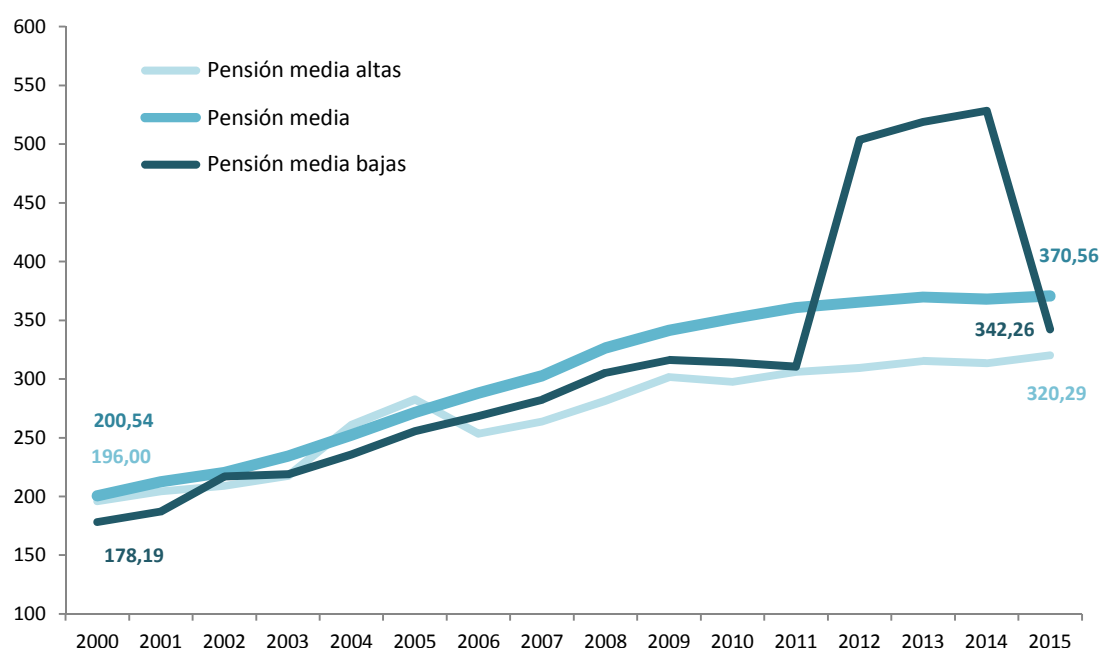
El montante total de gasto correspondiente a la orfandad ha sido creciente en el tiempo, con una pensión media mensual estimada en 2014 de 367,95€, mientras que la pensión media de las altas de ese ejercicio sería de 313,42€, en contraposición con la pensión media de las bajas en 2014: 528,30€. Al igual que ocurre con el número de pensiones, la pensión media de las bajas ha sufrido un cambio relevante desde el ejercicio 2012, pues para tales bajas en 2011 la pensión media fue de 310,41€, mientras que en 2012 el importe se situó en 503,57€.

Gráfico 37. Gasto anual en pensiones contributivas de orfandad



Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Millones de euros. Años 2015 y 2016, estimaciones.

Gráfico 38. Evolución de la pensión media en las pensiones de orfandad en vigor

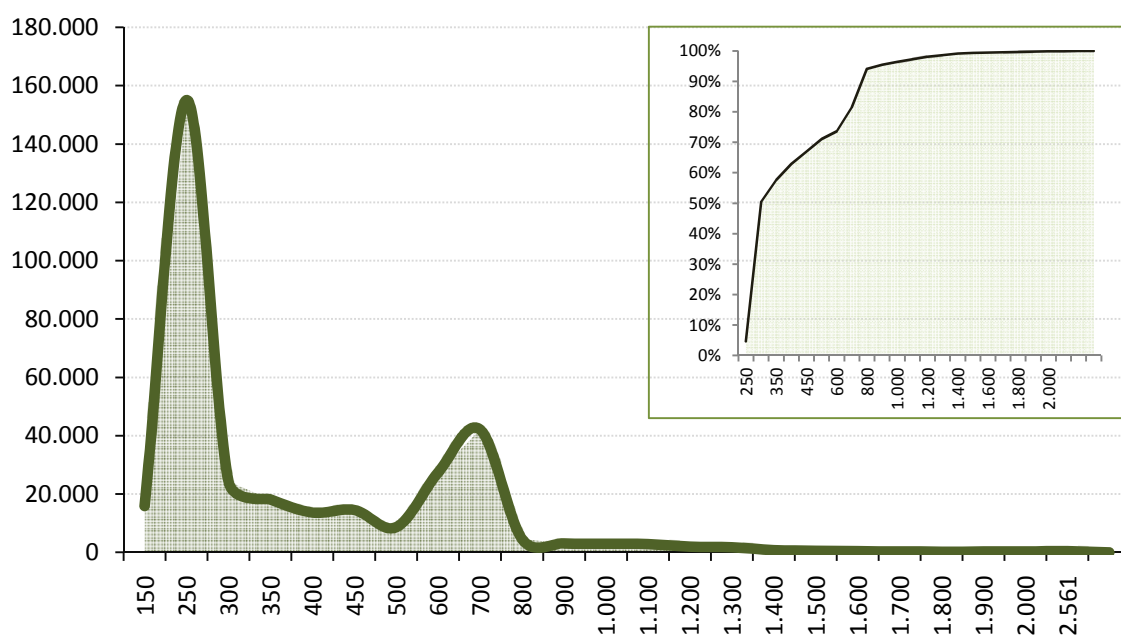


Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Pensiones en vigor, altas y bajas en el ejercicio. Para 2015, datos hasta 1a junio.

Sobre la particularidad de la pensión media de las bajas, que se puede apreciar en el gráfico anterior, no encontramos explicación más allá de la salida del sistema de un colectivo particular.

Respecto a la estructura de la pensión en vigor en julio de 2015, la composición fue la siguiente: *cuantía inicial* (54,06%), *revalorización* (30,82%) y *complemento a mínimo* (15,12%), frente a la estructura del ejercicio 2001 que fue: *cuantía inicial* (52,36%), *revalorización* (36,65%) y *complemento a mínimo* (10,99%). Las pensiones en vigor con complemento a mínimo a cierre de 2014 representan el 47,49% del total, algo lógico teniendo en cuenta el porcentaje que se aplica a la base reguladora en el cálculo, con un importe medio por complemento a mínimo de 118,61€. En cuanto a la distribución del número de pensiones por tramos de cuantía, tal distribución no es uniforme y presenta una concentración de pensiones en el tramo entre 150€ y 250€, donde en julio de 2015 se encontraban el 45,60% de las mismas, y un repunte en el tramo entre 600 y 700 euros, intervalo en el que se situaban el 12,38% de las pensiones.

Gráfico 39. Estructura del número de pensiones de orfandad por tramo de cuantía y función de distribución



Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016.*

Según la MCVL-2014 y de acuerdo con su situación en origen, el 39,1518% de las prestaciones de orfandad se derivan de sujetos causantes que son pensionistas de jubilación o invalidez (sujeto causante en situación de pasivo) y el 60,8482% es para otros casos. El 26,5663% de las situaciones se corresponden con prestaciones de carácter vitalicio, mientras que el 73,4154% serían prestaciones de carácter temporal. La duración muestral estimada de las prestaciones en base a las que ya no están en vigor a 31 de diciembre de 2014 es de 8,83 años.

4.1.2. Los requisitos del sujeto causante

De cara a los requisitos del sujeto causante de una pensión de orfandad la ley establece los mismos que para el resto de pensiones de muerte y supervivencia, por lo que en esta materia nos remitimos a lo ya expuesto hasta este momento; en lo que respecta a las características del origen de la contingencia y las exigencias de cotización el esquema es el siguiente:

- a) Situación de alta o asimilada. No se exigen períodos previos de cotización.
- b) Si sucede una muerte por accidente o por una contingencia profesional. No se exige un período previo de cotización.

- c) No existe situación de alta o asimilada. El período mínimo de cotización será de 15 años.

Se propone así un sistema de protección más intenso hacia al huérfano puesto que en el caso general al sujeto causante fallecido por una contingencia común no se le exige un volumen de cotizaciones determinado para el acceso a la pensión de orfandad por parte del beneficiario.

Dentro de una visión de conjunto hay que indicar que la misma cotización realizada por el sujeto causante permite el otorgamiento de pensiones diferentes, ya que se pueden causar simultáneamente pensiones de viudedad y orfandad para diferentes personas, pues ambas no pueden obtenerse a la vez por un mismo beneficiario al no estar contemplada la compatibilidad entre ellas.

4.1.3. Los beneficiarios y los requisitos de acceso

Tres son los criterios fundamentales para el acceso a la pensión de orfandad desde la perspectiva del beneficiario: filiación, edad y características personales. Sobre el primero de ellos hay que indicar que el beneficiario de la pensión de orfandad es el hijo del sujeto causante, independientemente de su filiación, lo que da lugar a la pluralidad de beneficiarios pues cada uno de aquéllos puede considerarse como protegido por la Seguridad Social dentro de una relación de igualdad. Son amparados bajo este marco los hijos matrimoniales o no matrimoniales y los hijos adoptados, si bien no tienen idéntica naturaleza los menores acogidos puesto que su régimen jurídico es diferente del de los anteriores²¹⁰. También son susceptibles de protección los hijos aportados a la unión por el cónyuge o asimilado superviviente, aunque bajo las siguientes condiciones:

- a) El matrimonio con el supérstite se ha celebrado con, al menos, dos años de antelación al hecho causante.
- b) El posible beneficiario convivía con el sujeto causante, a sus expensas y no tiene derecho a otra pensión de seguridad social.
- c) No existen otros familiares con obligación y posibilidad de prestarle alimentos en los términos del Derecho Civil.

²¹⁰ Siguiendo a Rodríguez Iniesta, G. (2009), no se considera equiparable a la adopción otras instituciones derivadas de diferentes culturas como la *kafala* del mundo musulmán pues no mantienen para el menor los mismos derechos que la legislación española otorga a los menores adoptados.

Se presentan aquí nuevos criterios de naturaleza asistencial en la necesidad de dependencia económica del causante, si bien en la práctica es compleja la posibilidad de que esta tipología de huérfano perciba finalmente la pensión pues los requisitos son restrictivos, suponemos que en el ánimo de no comprometer derechos de los huérfanos “propios” del difunto.

Acerca de la edad del beneficiario la legislación establece como requisito general un criterio de acceso basado en un límite máximo, criterio que ha cambiado sucesivamente en los últimos tiempos y se concreta a través del artículo 175 de la LGSS cuando establece como condición para que los hijos sean beneficiarios de la pensión de orfandad el que sean menores de 21 años en el momento del hecho causante o que estén incapacitados para el trabajo, esto es, una edad superior a la de posible acceso al mercado laboral y a la generalmente establecida en la inmensa mayoría de sistemas de protección. Cuando el beneficiario no efectúe un trabajo lucrativo o, si lo realiza, los ingresos obtenidos sean inferiores en cómputo anual a la cuantía vigente para el Salario Mínimo Interprofesional, su edad para la concesión debe ser inferior a los 25 años²¹¹. Como se aprecia, la legislación parte de una situación presunta de necesidad que da por hecho que el hijo menor de una determinada edad se encuentra en peor posición para la obtención de su propio sustento que el hijo con una edad superior, algo razonable y normalmente acorde a la realidad. Pero, además, incluye un criterio de ingresos para alargar el período en el que es posible la concesión de la pensión, nuevamente una característica de corte asistencial dentro de prestaciones de naturaleza contributiva que da lugar a lo que Rico Letosa, S. y F.J. Magaña Balanza (2000) ya denominaron la conversión de la pensión “en un ser mutante”.

El último criterio definitorio de las condiciones de acceso también se vincula a las características del teórico beneficiario, que permiten modificar los requisitos generales respecto a la concesión de la prestación y de su duración, tales son la existencia de una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez o la ausencia/existencia de ingresos laborales, sin que la norma haga referencia a posibles rentas de otra naturaleza, lo que favorece sin lugar a dudas al diseño de un entorno ineficiente derivado de posible interrelación entre rentas de distinta categoría.

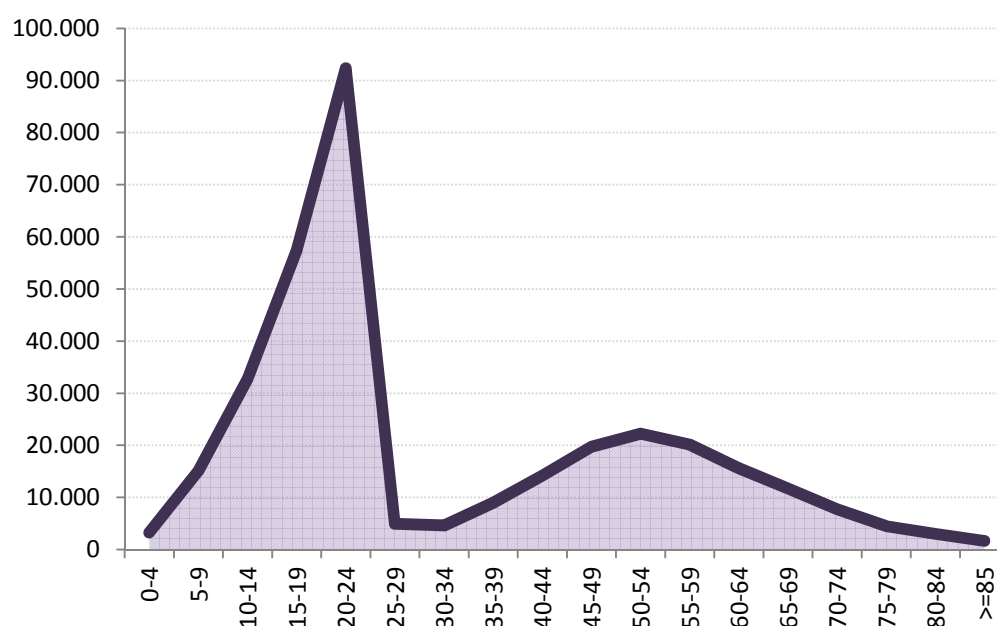
Por otra parte, junto a la adopción, la pérdida de la incapacidad correspondiente, el alcance de la edad límite o el fallecimiento del huérfano (e incluso la aparición de quien

²¹¹ Según el artículo 175 de la LGSS: “si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera 25 años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso académico”.

presumiblemente hubiera fallecido), la pensión se extinguirá por matrimonio del beneficiario (en su caso consecuentemente debería hablarse de la unión de hecho formalizada)²¹². Se entendería así que, si el beneficiario forma su propio núcleo familiar, deja de pertenecer al núcleo familiar en el que se formalizó la relación con el progenitor fallecido y dentro del cual nació su derecho a pensión (recuérdese que no se está ante una cobertura familiar en términos jurídicos, siendo más dudoso que la práctica no muestre sensibilidad hacia esta fórmula). Sin embargo, nosotros no detectamos que haya una diferencia sensible entre este nuevo vínculo familiar y el que se mantiene con el progenitor que sobrevive al fallecido en caso de una orfandad relativa.

En cuanto a la caracterización socioeconómica, la mayoría de las pensiones de orfandad en vigor a 1 de julio de 2015 tenían como beneficiarios a varones (52,13%), mientras que las mujeres eran el 47,87%. Por grupos de edad, en el mismo punto temporal el número de pensiones de orfandad se concentra en los tramos con edades inferiores al límite máximo general de 25 años (aproximadamente el 59,08% del total), especialmente en el tramo entre 20 y 24 años, donde se sitúan el 27,18% del total.

Gráfico 40. Número de pensiones de orfandad en vigor por edad del beneficiario

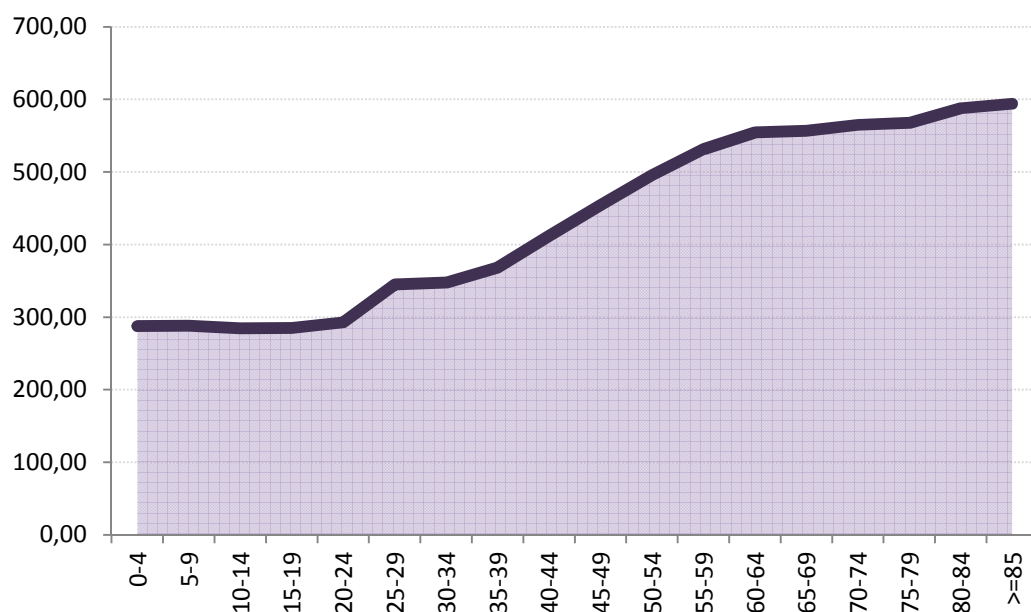


Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Datos a 1 de julio.

²¹² Artículo 21 de la *Orden de 13 de febrero de 1967*, en la redacción dada por la disposición final primera del *Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social*, situación respecto al matrimonio con excepción de que el beneficiario se encuentre en situación de incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez.

Hay un número relevante de pensiones cuyo beneficiario tiene edades superiores a los 25 años, que son teóricamente las que corresponden a personas con incapacidad, con lo que queda constancia de que la pensión de orfandad se utiliza como una pensión de discapacidad para la protección de situaciones que en líneas generales corresponderían a otra tipología de cobertura.

Gráfico 41. Pensión media de las pensiones en vigor por edad del beneficiario



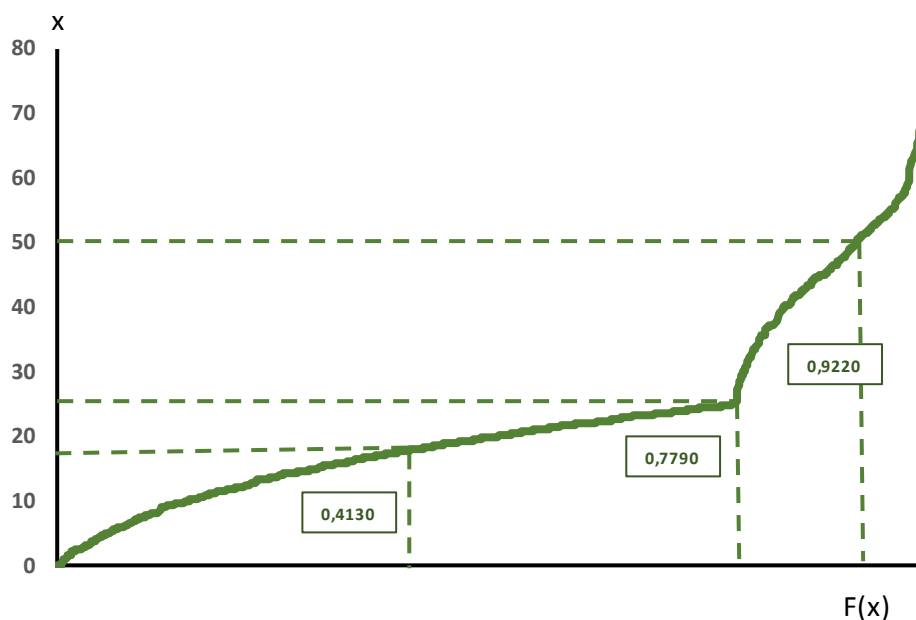
Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Datos a 1 de julio.

Según se aprecia en el gráfico anterior, respecto a la pensión media de las pensiones en vigor a 1 de julio de 2015 por grupos de edad, el efecto de la revalorización se muestra nítidamente por medio de una función que es creciente con la edad.

Según los datos de la MCVL-2014, la edad media estimada del beneficiario en el momento de acceso a la prestación es de 22,70 años, con una desviación típica de 14,42 años y los siguientes cuartiles: $Q_1 = 13,60$ años, $Q_2 = 19,83$ años y $Q_3 = 24,58$ años. En cuanto a la estructura familiar de los beneficiarios de una pensión de viudedad, un 29,12% convive con otra persona declarada, mientras que un 26,13% lo hace con dos personas declaradas; sorprendentemente, un 21,53% parece no convivir con otra persona. En el conjunto muestral el 58,33% de las personas con las que conviven los beneficiarios son de edad superior, mientras que un 41,67% de los convivientes tienen una edad inferior a la del beneficiario. Allí donde el beneficiario convive con una persona, el 70,50% lo hace con una persona de mayor edad. Según la MCVL-2014, en el origen el 39,1518% de las prestaciones de orfandad se derivan de sujetos causantes que son

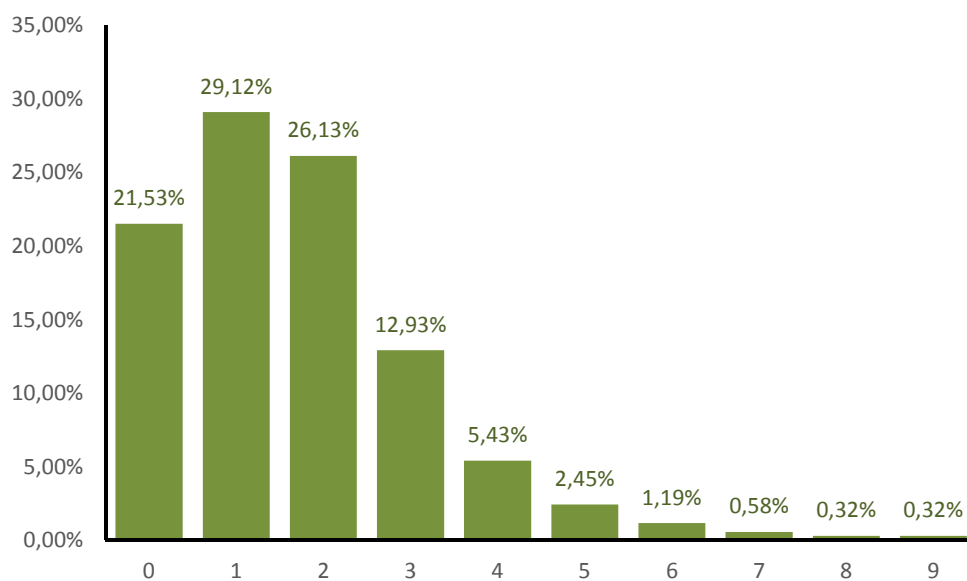
pensionistas de jubilación o invalidez (sujeto causante en situación de pasivo) y el 60,8482% queda para otras posibilidades.

Gráfico 42. Edad del beneficiario a la obtención de la pensión de orfandad



Fuente: elaboración propia con datos de la MCVL 2014. Percentiles para las edades de 18, 25 y 50 años.

Gráfico 43. Estructura familiar o de apoyo de los beneficiarios de orfandad. Número de convivientes adicionales declarados en la unidad familiar



Fuente: elaboración propia con datos de la MCVL-2014. Eje de abscisas: número de convivientes adicionales.

En resumen, la pensión de orfandad estaría también realizando en la actualidad la función de una prestación de discapacidad y la de una prestación de compensación del desempleo laboral en edades bajas.

4.2. La cuantía de la pensión de orfandad

Como en la pensión de viudedad, la cuantía de la pensión inicial de orfandad P_0^o se calcula mediante la aplicación de un porcentaje a una base reguladora en los términos ya recogidos en las expresiones [4] y [51], por lo que son susceptibles de ser tenidos en cuenta aquí gran parte de los planteamientos ya vistos en la materia.

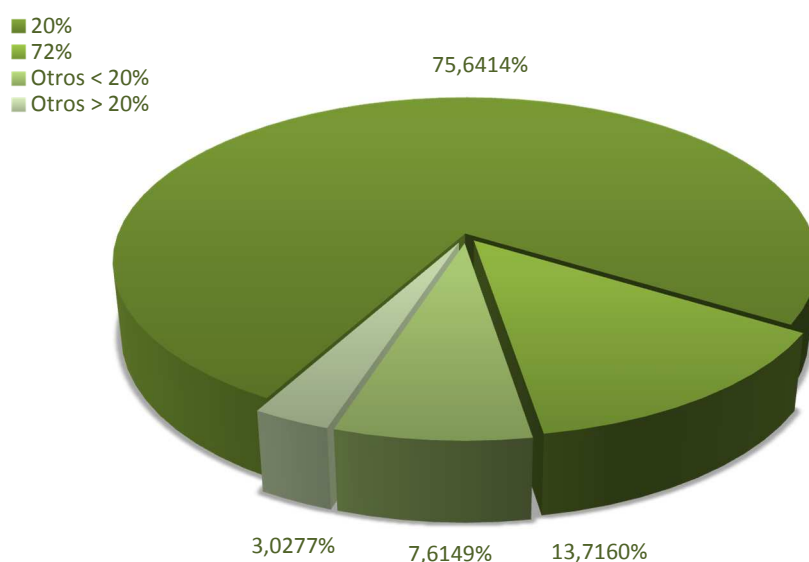
El porcentaje F_1 aplicable a la base reguladora es el 20% para cada beneficiario de la pensión, siendo el límite conjunto general el 100% de dicha base reguladora, límite conjunto que se mantiene en el caso de que exista también una pensión de viudedad causada por el fallecido, solo que en el cómputo conjunto habría que incluir el porcentaje correspondiente a esta pensión (en la actualidad el 52%), quedando a cargo de los huérfanos el 48% restante. Como ya se ha dicho, este 48% se mantendría aunque el correspondiente a la pensión de viudedad fuese un porcentaje especial (en la actualidad el 70%), lo que permite que en este supuesto se concedan cuantías globales en un importe superior al 100% de la base reguladora, en concreto el 118% (desequilibrio económico que quiere evitar la discriminación de los huérfanos respecto del beneficiario de viudedad con porcentaje especial). Cuando proceda el reparto de alguna cuantía (por extinción de alguna de las pensiones concedidas, ya sea de orfandad o de viudedad), éste se realizará a partes iguales entre los beneficiarios de orfandad restantes. Con este sistema la legislación considera a los beneficiarios de viudedad y orfandad dentro de un mismo conjunto (llámese *familia* o *entorno familiar* o *de apoyo*), idiosincrasia que se enmarca en una especie de protección familiar, pues toma al conjunto de beneficiarios como un todo vinculado. La posibilidad de existencia de varios beneficiarios de la pensión de orfandad y, a su vez, de distintos beneficiarios de la pensión de viudedad lleva a un escenario complejo en la determinación de las cuantías que corresponden a cada uno de ellos, si bien el principio orientador es que, para el caso de inexistencia de porcentajes especiales en la pensión de viudedad, el límite de cuantías conjunto es del 100% de la base reguladora.

Tal y como recoge el artículo 21.2 de la *Orden de 13 de febrero de 1967*, excepto para el fallecimiento del beneficiario, si la pensión se extingue antes de la percepción de 12 mensualidades o el beneficiario, cumpliendo los requisitos en el momento del hecho

causante, no devenga cantidad alguna por haber alcanzado la edad límite en el momento de la solicitud, se hará una entrega única hasta alcanzar aquella cantidad, configurándose así un doble sistema de pensión mínima: en cuantía periódica y en duración.

Desde otra perspectiva de estudio, centrada en el tipo aplicable a la base reguladora, si se acude a los datos globales de la MCVL-2014 se puede estimar que el porcentaje de pensiones que tienen un tipo $F_1=20\%$ es el más significativo (75,6414%), frente a quienes ostentan un tipo del 72%, quedando para el resto de casos otros resultados (aproximadamente el 10,64% de la muestra seleccionada y hasta 112 valores diferentes).

Gráfico 44. Tipo aplicado en origen a la base reguladora en la prestación de orfandad



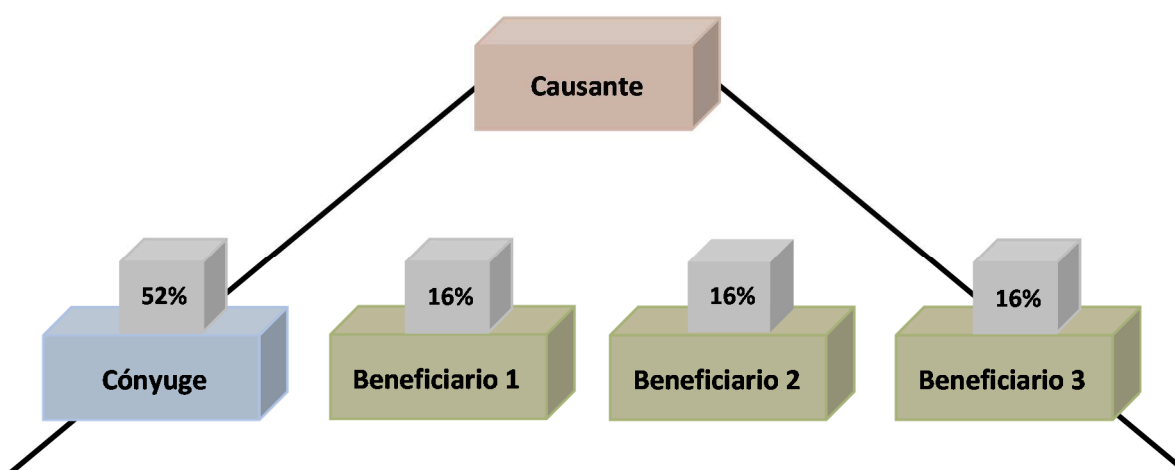
Fuente: elaboración propia con datos de la MCVL-2014. Total muestral.

Si se restringen las observaciones muestrales a las altas ocurridas en el ejercicio 2014 el tipo del 20% se da en el 81,7084% de los casos, mientras que el tipo del 72% se aplica en el 8,4494%; el rango de valores del tipo aplicado se reduce, incluidos los dos anteriores, a 9 posibilidades.

En cuanto a la base reguladora F_4 para la pensión de orfandad, ésta se calcula de idéntica forma que para la pensión de viudedad, siendo su particularidad que cualquier mejora que con origen en una situación de pasivo se realice sobre la misma para su valoración en un momento actual debe entenderse a realizar con las correspondientes variaciones acaecidas en la orfandad, según recoge Rodríguez Iniesta, G. (2009).

Como se ha ido viendo a lo largo de este trabajo, el actual diseño de la pensión de orfandad plantea un escenario de diversos beneficiarios. En primer lugar se parte de un núcleo familiar en el que el fallecimiento del sujeto causante da lugar a una pensión de viudedad para el cónyuge y al reparto de la pensión de orfandad, por ejemplo, entre tres hijos beneficiarios de la misma.

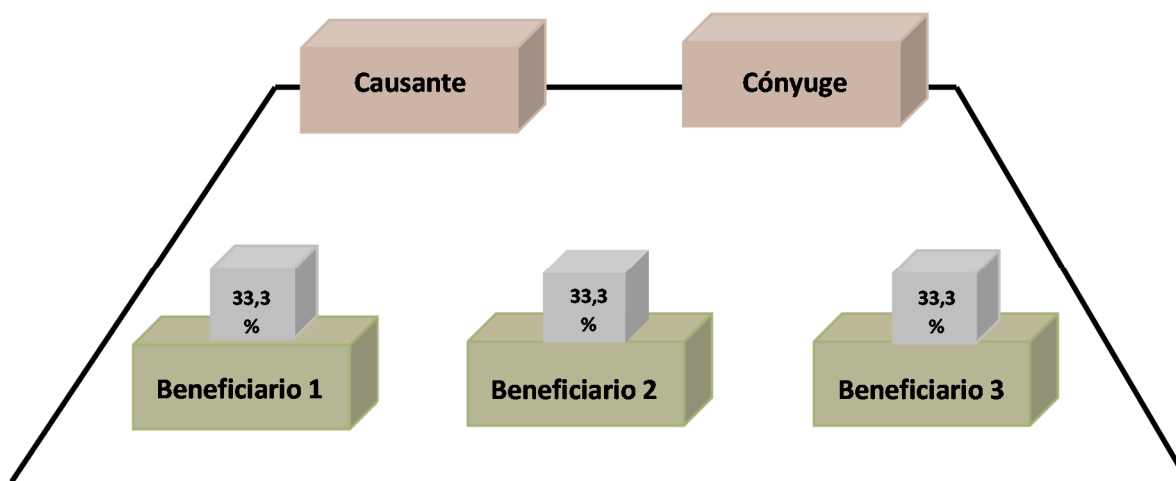
Cuadro 20. La pensión de orfandad y el porcentaje aplicable. Caso I



Fuente: elaboración propia.

No se ha encontrado una referencia jurídica mediante la que se plantee la distribución del porcentaje entre los huérfanos para este supuesto, por lo que se supone que cada beneficiario percibe una cuantía homogénea (el 48% entre los tres beneficiarios) si bien, ante una indeterminación legal, podría surgir una interpretación administrativa o judicial basada en que los dos primeros beneficiarios perciban su 20% y el tercero un 8%; la interpretación de la distribución no equitativa entre beneficiarios se defendería pensando en el concepto de *núcleo familiar* (el perceptor real es el encargado legal de los huérfanos mientras éstos no tengan capacidad legal y la familia es, en la práctica, una unidad en la que a quien se asigne una menor cuantía, normalmente el beneficiario de menor edad, estaría amparado teóricamente por el supérstite), si bien tal interpretación pierde fuerza al existir la cobertura más allá de la mayoría de edad, ante la orfandad absoluta o al tener en cuenta que ni viudedad u orfandad son prestaciones familiares, sino de muerte y supervivencia; además, se aleja de otros planteamientos que sí son explícitos, por ejemplo, los correspondientes a la indemnización a tanto alzado o el reparto de la pensión de viudedad cuando se distribuye por fallecer el perceptor de la misma.

Cuadro 21. La pensión de orfandad y el porcentaje aplicable. Caso II



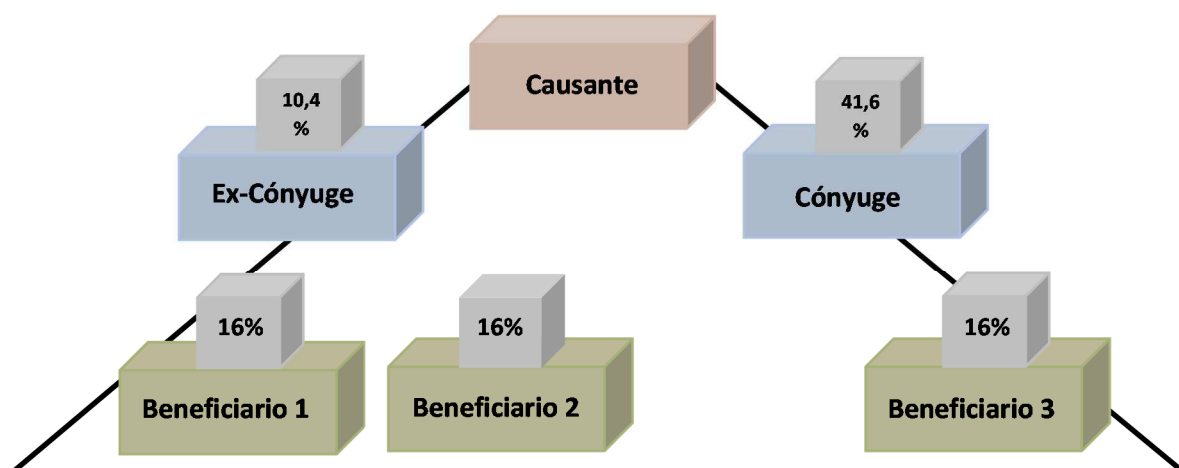
Fuente: elaboración propia.

Una variante de esta situación (Caso II) se produce con el fallecimiento del cónyuge superviviente con posterioridad al del sujeto causante, dando lugar a una orfandad absoluta que, siguiendo los términos del artículo 1 del *Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo*, permite que las cuantías de los beneficiarios se puedan incrementar mediante la distribución a partes iguales de la parte que correspondía inicialmente al cónyuge viudo. Este artículo también indica que, de no haber beneficiario de la viudedad (por ejemplo, por el fallecimiento simultáneo de ambos progenitores), el procedimiento es el mismo. Los incrementos aquí citados serían compatibles con la prestación temporal de viudedad y pueden ser reconocidos mientras se percibe ésta. En el ejemplo, a cada porcentaje aplicable al beneficiario de orfandad se le aplica un porcentaje adicional que resulta del reparto del 52% correspondiente a la viudedad entre el número de beneficiarios de la orfandad, resultando aquí un porcentaje adicional para cada individuo del 17,33%.

Otro supuesto (Caso III) aparece ante la concurrencia de pensiones de viudedad (cónyuge y ex-cónyuge), con diversas posibilidades en cuanto al reparto de las cuantías correspondientes a los hijos del sujeto causante, que lo son en igualdad de condiciones frente a la diferencia que se encuentra entre los cónyuges o asimilados. El límite conjunto se mantiene en el 100% de la base reguladora y el incremento de las prestaciones sólo podrá ser reconocido respecto a uno solo de los progenitores²¹³.

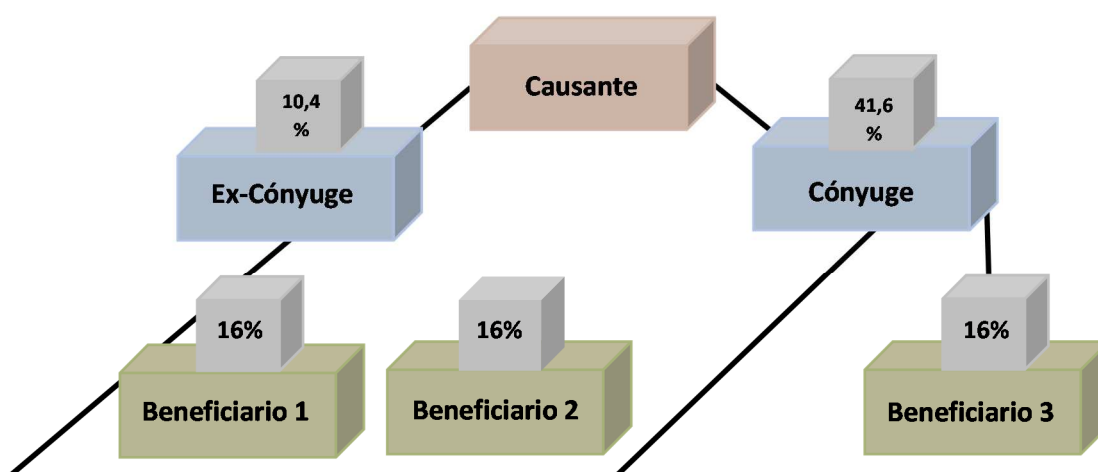
²¹³ Artículo 1.7. del *Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo*.

Cuadro 22. La pensión de orfandad y el porcentaje aplicable. Caso III



Fuente: elaboración propia.

Cuadro 23. La pensión de orfandad y el porcentaje aplicable. Caso IV

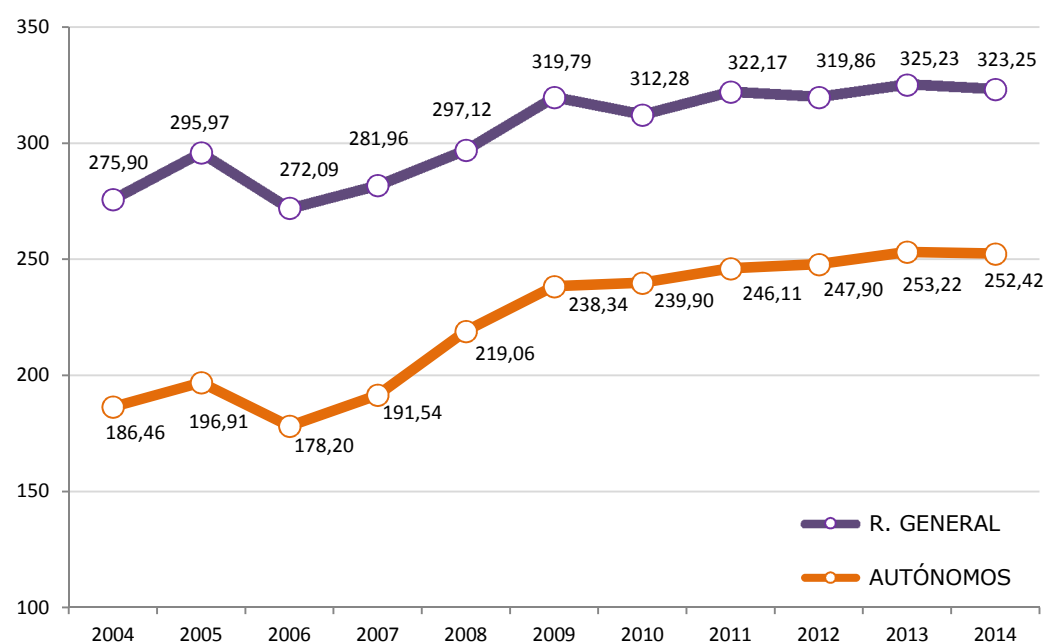


Fuente: elaboración propia.

Finalmente, otro ejemplo (Caso IV) surge de la variante del ejemplo anterior y la existencia de hijos del cónyuge que no lo son del sujeto causante, donde se deben cumplir otros requisitos para la concesión de una posible pensión, lo que no siempre será un suceso cierto y su no concesión (aquí al beneficiario 3, que es teórico beneficiario) permitirá acrecentar la pensión del resto de huérfanos con derecho a pensión (los beneficiarios 1 y 2, que lo son en todo caso).

El porcentaje aplicable a la base reguladora no es muy elevado si se compara con otras prestaciones, pero de nuevo es necesario dejar constancia del resto de elementos claves en la determinación de la cuantía, principalmente la base reguladora y el régimen de cobertura. La pensión media general para las nuevas altas no ha sido superior a 316€ mensuales (en catorce pagas) en los últimos 10 ejercicios, lo que en la práctica haría depender la situación económica del beneficiario de otras rentas o protección, aunque es de nuevo constatable la existencia de diferencias sensibles por régimen que, en un sistema como el actual, beneficia a los que menos han cotizado por influencia de las pensiones mínimas. Por lo que respecta a la pensión media mensual de pensiones en vigor a cierre de 2014, en el Régimen General el importe es de 323,25€ y en el Régimen de Autónomos 252,42€. Para la Minería del Carbón, Trabajadores del mar, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales las cuantías medias mensuales son: 591,45€, 418,63€, 387,80€ y 609,68€ respectivamente.

Gráfico 45. Pensión media mensual de las altas en la pensión de orfandad



Fuente: Seguridad Social. Anexo al Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016.

La cuantía de la pensión de orfandad se revaloriza cada año de acuerdo con el *Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social (IRP)* y, como en todas las pensiones, se garantiza una cuantía mínima cumpliendo los requisitos adicionales establecidos para ello. La cuantía mínima anual estimada para 2016 se encuentra diferenciada para tres grupos: beneficiario general (194,30€ en 14 pagas), beneficiario de orfandad absoluta (675,90€ en 14 pagas), beneficiario menor de 18 años y discapacidad en, al menos, un 65% (382,40 en 14 pagas), mientras que también se

someten al límite de la cuantía máxima: 14 pagas estimadas de 2.567,28€ en 2016 y de 2.560,88€ en 2015. Cuando se esté ante diferentes pensiones de orfandad causadas por el padre y la madre, la cuantía mínima de la pensión sólo podrá aplicarse a una de ellas, si bien cada una podrá alcanzar el 100% de su base reguladora²¹⁴, siendo ambas pensiones compatibles entre sí.

El régimen de compatibilidad de la pensión de orfandad hace que la pensión también sea compatible con la pensión de viudedad que pudiera corresponder al beneficiario de esta última, así como con las rentas de trabajo del supérstite, con la consideración de hijo a cargo respecto a prestaciones familiares, con las rentas de trabajo del huérfano que no ha alcanzado la edad general de percepción de la pensión de orfandad y con aquellas inferiores en término anual al SMI si es mayor de esta edad. La concesión y cuantías de las pensiones de orfandad tienen preferencia sobre las pensiones a favor de familiares y otras particularidades inherentes a las mismas son las siguientes:

- a) Cuando el progenitor superviviente hubiera perdido la condición de beneficiario de la pensión de viudedad a tenor de lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional primera de la *Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género*, el huérfano tendrá derecho a los incrementos previstos para la orfandad absoluta.
- b) A efectos de lo previsto en el *Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo*, se asimila a huérfano absoluto el huérfano de un solo progenitor conocido.

4.3. La reforma de la orfandad desde una perspectiva paramétrica

La actual pensión de orfandad de la Seguridad Social mantiene argumentos contradictorios en su concepción y materialización; por una parte considera una situación de presunta necesidad, que es asumida al ser impuesta por la manifestación de criterios biológicos, legales y sociales y, al mismo tiempo, recurre a un régimen paternalista que plantea la incapacidad al margen de este escenario y permite la percepción de una pensión de estas características en edades avanzadas o con carácter vitalicio. En realidad, actúa en no pocas ocasiones como una pensión de discapacidad y como instrumento para compensar la dificultad de acceso al mercado laboral en edades tempranas.

²¹⁴ Artículo 17.3 de la *Orden de 13 de febrero de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen General de la Seguridad Social*.

Desde una perspectiva basada estrictamente en la protección del beneficiario la evolución de las características legales de la pensión se ha mostrado coherente a través de la ampliación de la edad general de percepción, pues desde un inicio en 18 años se ha pasado a los actuales 21 años, fomentando así la posibilidad de que el beneficiario pueda realizar unos estudios que faciliten su incorporación al mercado laboral y la obtención de rentas propias; ahora bien, bajo este mismo principio esta edad seguiría siendo insuficiente puesto que, sin entrar ya en el debate sobre la posibilidad de un puesto de trabajo tras la obtención de tales estudios o sobre la calidad de las oportunidades laborales, los estudios universitarios de grado superior obtenidos, aun con buen rendimiento, sobrepasan el límite actualmente fijado. Bajo este paradigma la pensión de orfandad aceptaría la extensión del período de percepción, pero el criterio que se impondría es de naturaleza netamente asistencial, lo que no hace más que incorporar argumentos ineficientes al sistema global desde una perspectiva conceptual.

En buena lógica la protección debería centrarse en el segmento de posibles beneficiarios a los que no les es realmente posible o se les impide la obtención de rentas propias, que en España son con toda seguridad aquellos menores de dieciséis años (o dieciocho en su concepción general). En un segundo plano ha de quedar la protección por encima de esa edad, pues los problemas que pueden existir en el mercado de trabajo o la preferencia de una persona por estudiar en vez de trabajar, anteponiendo posibles mejoras futuras en detrimento de las actuales, son argumentos relevantes que, sin embargo, tienen poca fuerza dentro de un modelo contributivo que no requiere acudir a estos aspectos para su definición. Esto hace que haya margen para proponer una modificación de las edades de cobertura sin necesidad de acudir a criterios de necesidad, pero también requiere que se haga con equidad para todos los beneficiarios y con respeto a las contribuciones realizadas por el sujeto causante, proponiendo un límite razonable independientemente de los condicionantes que imponga el mercado de trabajo. Este límite se justifica al encontrarnos aquí ante una materia que no acepta el cambio de estado laboral con la rapidez de transición que establece el cambio legal sobre la capacidad para ejercer una profesión; es decir, alcanzar los dieciséis años permite legalmente la incorporación al trabajo bajo determinadas circunstancias, pero la entrada real hacia un trabajo con mínimas garantías puede requerir un proceso de maduración más amplio. Por ello, una de las posibles actuaciones respecto a la pensión de orfandad sería racionalizar el período de percepción y establecer una edad fija que elimine la justificación de rentas; pero es precisamente esta justificación de rentas la que favorece que la edad se amplíe más allá de los 18 años.

De igual forma, las personas incapacitadas en términos de seguridad social se deberían incorporar al criterio general, puesto que sus necesidades, de existir y estar más allá de sus recursos, deberían ser cubiertas inexcusablemente por otros planteamientos (jubilación en la modalidad que corresponda, desempeño de una labor profesional, otra protección social y de ayuda real a la dependencia y a las denominadas *enfermedades raras*, etc.). No estamos hablando, por tanto, del fomento de desprotección alguna, sino de la adaptación de la cobertura a unos principios delimitados con claridad. Si el modelo favorece la indefensión para quienes dejan de tener una prestación vitalicia se estaría ante un problema de diseño y estructura dentro del modelo global de protección social en España, cuyas deficiencias no deben imponer incertidumbre en la Seguridad Social. Además, en el imaginario colectivo impera la percepción de la persona con discapacidad como la del individuo carente totalmente de capacidad o recursos, afortunadamente algo no siempre próximo a la realidad. Las personas con discapacidad forman un segmento de población muy heterogéneo y sujeto a dificultades en el desarrollo de ciertas actividades, pero ello no significa que se encuentren imposibilitadas para la obtención de rentas o que no posean recursos económicos. Es más, la heterogeneidad y el modelo social existentes hacen que las oportunidades de distintos beneficiarios no sean las mismas aun cuando legalmente tengan concedidos los mismos grados de incapacidad, por lo que, en puridad, no debería existir el mismo tratamiento para todos ellos (por ejemplo, discapacidad auditiva, discapacidad visual, tetraplejia incompleta, etc.). En nuestra opinión el vigente paradigma de protección en su conjunto favorece a las discapacidades con mayor posibilidad de integración en detrimento de las que presentan unas mayores necesidades y/o son menos comunes.

Frente a la acción reformista que se ejercería directamente sobre la edad de la percepción, otra de las posibles actuaciones respecto a los parámetros de la pensión de orfandad pasa por la modificación del porcentaje F_1 a aplicar a la base reguladora. Un mayor porcentaje hace suponer que a priori habrá una mejora del componente social del sistema al permitir mayores prestaciones iniciales (siempre partiendo de la relación de la cuantía con el complemento a mínimos), si bien con una repercusión negativa en el mayor coste en el modelo. Además, frente al caso de la viudedad, no existen aquí otros beneficiarios de prestaciones que pudieran ser asimilados como equivalentes –excepto en la incapacidad–, por lo que la ineficiencia de conjunto se ve contenida. Así, se podrían plantear herramientas que buscasen introducir un mayor peso a la equidad mediante distintos grados de sensibilidad hacia las cotizaciones realizadas por el causante. Con la aplicación de la expresión [79], para un período mínimo en meses de $m=24$, un período máximo computable de $M=96$ meses, un porcentaje mínimo garantizado $f=20\%$ y una pendiente $p=0,125\%$ (por cada mes cotizado a partir del vigésimo cuarto el

porcentaje se incrementa un 0,125%), el porcentaje aplicable se encontraría en el intervalo el 20% y el 29% por ciento.

Obviamente, el aumento del porcentaje a aplicar a la base reguladora supone una acción directa de mejora para el beneficiario de orfandad pero, sin embargo, va en detrimento de los beneficiarios de viudedad al existir un límite de cuantía general en el 100% de la base reguladora (y el 48% en el importe destinado a los huérfanos), por lo que las acciones individuales sobre el porcentaje de la orfandad generarían resistencia en los posibles beneficiarios de viudedad y, posiblemente, requerirían el incremento del límite conjunto, opción no deseable desde la perspectiva de coherencia global de la Seguridad Social y del coste global; en todo caso, el ajuste del porcentaje de viudedad al mínimo correspondiente a otras prestaciones repercutiría en una mejora, aunque mínima, del correspondiente a la orfandad. Ante homogeneidad en otras variables, el incremento del factor F_1 individual por encima del valor actual es una medida compleja, pues además de incrementar el coste global es una acción más tendente a la incorporación de incertidumbre que a solventar la que se pretenda corregir.

Otra alternativa de trabajo es mantener el régimen de porcentajes actuales y, como ya hemos indicado al hablar de la indemnización a tanto alzado o de la pensión de viudedad, conceder una cuantía en pago único a cada beneficiario, fija o calculada en función de la base reguladora, bajo la premisa de que la mayor cercanía al hecho causante es la que genera una mayor necesidad. Este importe no entraría en consideración dentro del cómputo del límite global para los huérfanos y se concedería a cada uno de los beneficiarios. También, tal y como se planteó para las pensiones de viudedad y su reforma paramétrica en base a la edad del beneficiario, la aplicación a las pensiones de orfandad de una medida de este estilo únicamente tiene sentido para las prestaciones de carácter vitalicio, que son aquellas en las que el beneficiario es persona con el grado de incapacidad establecido en las leyes, puesto que las pensiones de orfandad general tienen un límite de duración temporal que entra en conflicto con esta medida ya que una buena parte de los beneficiarios no pueden acudir a obtener sus propios recursos porque así se lo impiden las normas laborales. En la discapacidad lo que se produciría es una alternativa de elección sobre la preeminencia entre criterios, pero si en el resto de los casos se impone la edad, nada nos lleva a pensar aquí en otra posibilidad. Por lo tanto, para personas menores a 26 años (incluimos esta edad por conveniencia, no por adecuación a la realidad actual) las prestaciones se mantendrían bajo la dinámica actual y en el caso de las personas con discapacidad la particularidad es conceder la prestación para aquellos que tienen una edad en el momento del hecho causante superior al límite establecido, quedando la cobertura de necesidades para quienes no obtienen la pensión a

cargo de la modalidad no contributiva, si procede. Sólo a efectos ilustrativos y para homogeneizar el estudio con el de otras clases de prestaciones presentamos aquí el ahorro que surge de esta propuesta. Sin embargo, según la lógica de la orfandad lo que se plantea aquí es la limitación por edad comenzando por los estratos superiores, por lo que se redefine [82] y el límite se establece en función de los beneficiarios de edades superiores, dando lugar a los resultados de la Tabla 7.

$$A = \frac{\sum_{x=L}^{\omega} P_x^o}{\sum_{x=0}^{\omega} P_x^o} \quad [83]$$

Tabla 9. Efecto en la pensión mensual inicial con la incorporación de un límite de edad. Sólo orfandad con discapacidad

	L=65	L=55	L=45	L=35
A	1,7948%	15,2825%	56,0905%	85,2320%

Se entiende aquí que las observaciones en las que la edad en el momento del hecho causante es al menos 26 años corresponden a personas con discapacidad.

Teniendo en cuenta el espacio de protección que ocupa la pensión de orfandad y su relación con la pensión de viudedad no hay un amplio espacio para la reforma de sus parámetros, con un escenario aceptable en sus principales argumentos definitorios en términos sociales. Sin embargo, somos sensibles a la separación de los argumentos asistenciales de una prestación contributiva, aun cuando la presunción de necesidad es aquí más clara que en otras situaciones. Manteniendo el modelo actual, diversas propuestas de modificación serían las siguientes:

- a. Equiparación de la edad límite de percepción de la pensión para todos los beneficiarios y ajuste a la edad legal general de incorporación al mercado laboral.
- b. Traslado de las características asistenciales del modelo fuera de la modalidad contributiva. Equiparación de los beneficiarios independientemente de su relación con una situación de incapacidad; la protección de la discapacidad debería otorgarse mediante sus correspondientes instrumentos cuando así sea necesario, pues ya hemos indicado que no es siempre sinónimo de necesidad y ésta queda fuera del espectro puramente contributivo.
- c. El ajuste temporal de las cuantías a la intensidad supuesta del daño, otorgando una cantidad adicional en las cercanías temporales del hecho causante.

5. LAS PRESTACIONES EN FAVOR DE FAMILIARES

5.1. Características generales

5.1.1. Caracterización económica global

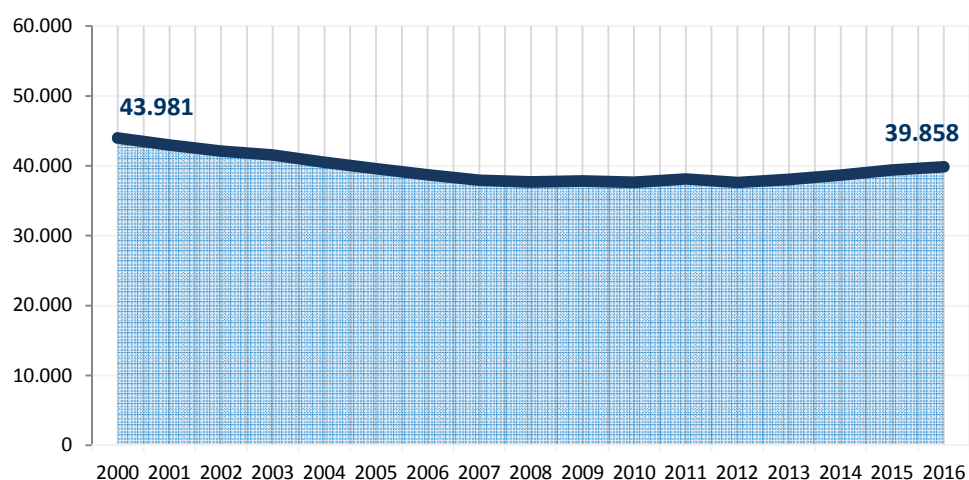
Las prestaciones en favor de familiares persiguen la atención a determinados beneficiarios situados en el entorno familiar del sujeto causante y se ubican normativamente dentro de la modalidad contributiva de la Seguridad Social española, aun cuando, como ya indicó Rodríguez Iniesta, G. (2009): “tienen marcado carácter asistencial”. Así, una de las exigencias para su concesión, recogida en el artículo 176 de la LGSS, es la dependencia económica del beneficiario respecto del sujeto causante, argumento suficiente para remarcar la existencia y aplicación de criterios no contributivos dentro de una modalidad contributiva. Por otra parte, la propia naturaleza de las prestaciones en favor de familiares hace que éstas se relacionen y dependan de las prestaciones de viudedad y orfandad, a las que siguen en orden de prelación y de las que toman algunas de sus características. Sobre su situación actual, Rodríguez Iniesta, G. (2009) ha dejado constancia del alejamiento del favor de familiares de un ambiente de protección eficiente en el escenario socioeconómico por los siguientes motivos:

- a) La transformación de los núcleos familiares, cuya estructura es cada vez menos adecuada para esta prestación (tal y como hemos indicado en el capítulo II).
- b) La existencia de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez que cubren a un segmento de los posibles beneficiarios del favor de familiares.
- c) La implantación en las Comunidades Autónomas de salarios o ingresos mínimos de inserción.
- d) Las reformas jurídicas habidas, que cada vez dificultarían más la concesión.

Aun así, a cierre del ejercicio 2014 había 38.687 pensiones en favor de familiares en vigor²¹⁵, estimándose para 2016 un número de 38.858. La variación interanual del número de pensiones en los últimos ejercicios no tiene un sentido claramente definido, si bien ya desde el año 2007 se sitúa en una variación, ya sea positiva o negativa, inferior al 2%.

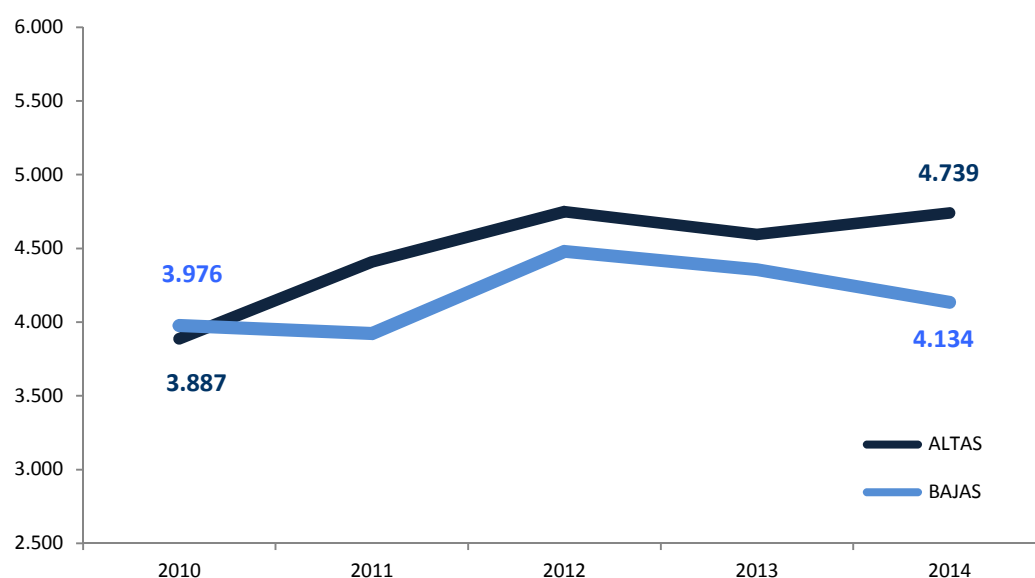
²¹⁵ Nótese que en sus informes estadísticos y presupuestarios la Seguridad Social no desagrega la información correspondiente a pensiones vitalicias en favor de familiares de la de subsidios de carácter temporal.

Gráfico 46. Número de pensiones contributivas en favor de familiares a 31 de diciembre del ejercicio



Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2015*. Años 2015 y 2016, estimaciones.

Gráfico 47. Número de altas y bajas anuales en las pensiones en favor de familiares

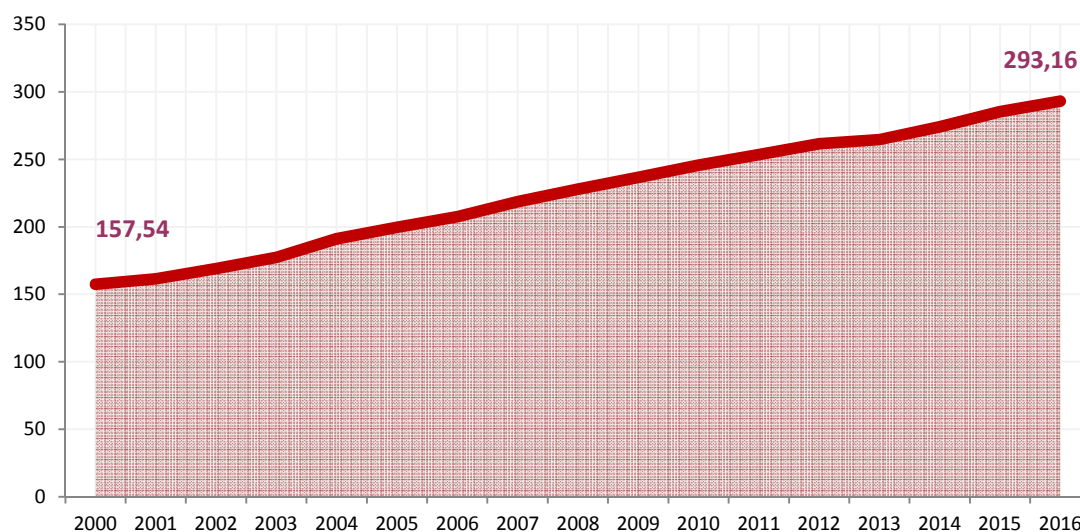


Fuente: Seguridad Social. *Anexo al Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*.

En cuanto a la relación entre altas y bajas, en los últimos cinco ejercicios cerrados (2010-2014) el número medio de altas anuales se ha situado en 4.475 pensiones, mientras que el número medio de bajas anuales en el mismo período se ha situado en 4.173 pensiones.

Respecto al volumen de coste anual que genera esta prestación, el gasto estimado por la Seguridad Social española en pensiones en favor de familiares para el ejercicio 2016 es de 293,16 millones de euros, que representan un 0,2080% del gasto total presupuestado para este ejercicio, un 0,2242% del gasto estimado en prestaciones económicas y un 0,2418% del gasto estimado en pensiones en el mismo período (un 0,2465% sobre las pensiones contributivas).

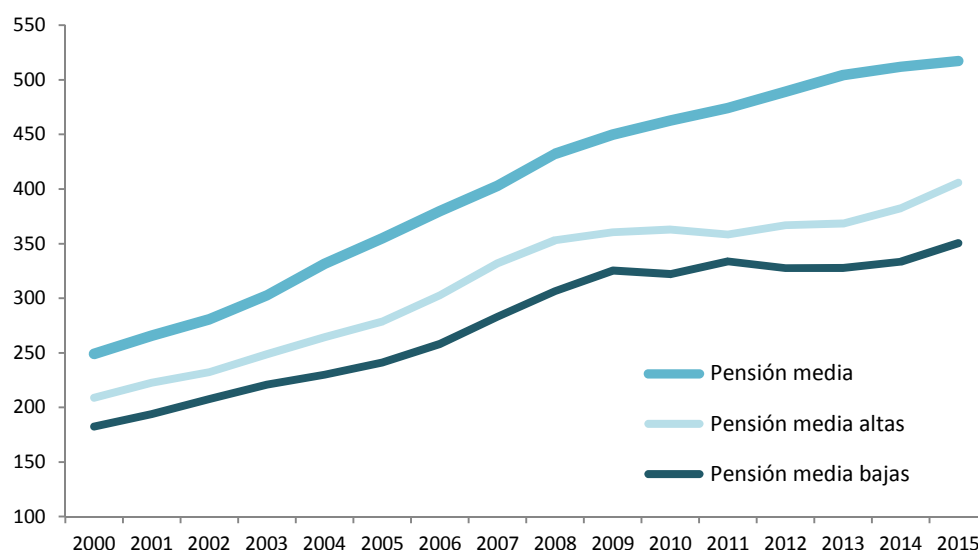
Gráfico 48. Gasto anual en pensiones contributivas en favor de familiares



Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Millones de euros. Años 2015 y 2016, estimaciones.

El montante total de gasto correspondiente a la pensión en favor de familiares ha sido monótonamente creciente en el tiempo al menos desde 1988, con una pensión mensual media estimada en el ejercicio 2015 de 517,23€, mientras que la pensión mensual media de las altas de este ejercicio sería de 405,81€, en contraposición con la pensión mensual media de las bajas en el ejercicio: 350,46€, dando lugar a una sorprendente estructura temporal en la que en el pasado reciente la pensión media general se sitúa por encima de la correspondiente a la de las altas y la de las bajas, tal y como se aprecia en el Gráfico 49. En líneas generales esta prestación no es de gran relevancia ni en términos económicos ni en número de beneficiarios, si bien presenta una mínima cobertura para nichos de población muy concretos. Respecto a sus perspectivas de futuro, sus propias características, la evolución del entorno normativo y la desmembración del concepto tradicional de familia no favorecerían, en principio, unas expectativas de crecimiento importantes.

Gráfico 49. Evolución de la pensión media en las pensiones en favor de familiares

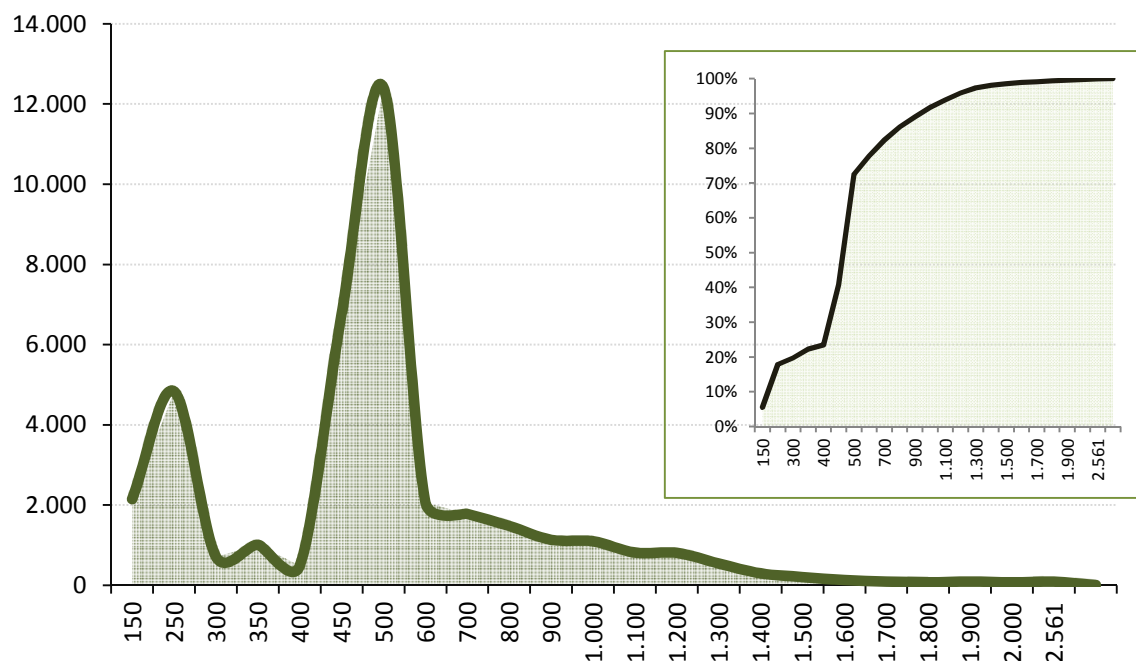


Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Pensiones en vigor, altas y bajas en el ejercicio. Para 2015, datos a julio.

Sobre la estructura de la pensión en vigor en agosto de 2014, la composición fue la siguiente: *cuantía inicial* (34,14%), *revalorización* (54,84%) y *complemento a mínimo* (11,02%), similar a la estructura del ejercicio 2001: *cuantía inicial* (35,55%), *revalorización* (53,07%) y *complemento a mínimo* (11,38%), pero sin embargo diferente a la que se ha producido en las altas de los últimos ejercicios; por ejemplo, para 2015: *cuantía inicial* (53,91%), *revalorización* (38,26%) y *complemento a mínimo* (7,83%). En 2014 el 55,53% de las prestaciones en vigor a cierre de ejercicio tenía complemento a mínimos (en el año 2000 el porcentaje era el 44,20%, lo que unido al constatado crecimiento de la cuantía media de altas, bajas y pensiones en vigor hace pensar en el mayor incremento de la cuantía mínima en cada ejercicio). La cuantía media pagada por complemento a mínimos se situó en 2014 en 104,91€.

En cuanto a la distribución del número de pensiones por tramos de cuantía, al igual que ocurría con el resto de prestaciones de esta modalidad, la distribución no es uniforme, con una concentración de pensiones en el tramo entre 400 y 500€, donde en julio de 2015 se encontraban el 49,27% de las mismas. Teniendo en cuenta el valor de F_1 y las cuantías teóricas de las bases reguladoras, son significativos los datos expuestos, de los que se extrae para esa fecha un porcentaje de pensiones con importe superior a 1.000€ del 8,19% y donde una explicación sobre su origen podría ser la reversión de la pensión de viudedad hacia el favor de familiares.

Gráfico 50. Estructura del número de pensiones por tramo de cuantía y Función de distribución.



Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Datos julio 2015.

Según la MCVL-2014, en el origen el 64,8557% de las prestaciones en favor de familiares se derivan de sujetos causantes que son pensionistas de jubilación o invalidez (sujeto causante en situación de pasivo), y el 35,1443% de otros casos. Aunque los resultados deberían comprobarse con bases de datos más amplias, con la misma fuente y en base a las pensiones que no están en vigor, la duración media del favor de familiares sería de 2,59 años, plazo que, según los importes medios y las cuantías mínimas establecidas, puede ser un indicador de que buena parte de los beneficiarios obtienen cuantías más elevadas en una pensión de la modalidad no contributiva y prefieren ésta cuando cumplen las condiciones para su obtención.

5.1.2. El sujeto causante y los beneficiarios

En lo que se refiere a los sujetos causantes los requisitos generales para las pensiones de muerte y supervivencia son también los utilizados en el caso de la pensión en favor de familiares, por lo que de nuevo en esta materia nos hemos de remitir a lo ya expuesto en epígrafes y capítulos anteriores, siendo el resumen de la situación en lo que respecta a la cotización exigida al sujeto causante para la concesión de la prestación el siguiente:

- a) Situación de alta o asimilada. Fallecimiento por contingencias comunes. Exigencia de 500 días de cotización.
- b) Si acaece una muerte por accidente (independientemente de su carácter) o por una contingencia profesional. No se exige período previo de cotización.
- c) No existe situación de alta o asimilada. El período mínimo de cotización será de 15 años.

En cuanto a los beneficiarios, las prestaciones en favor de familiares gravitan sobre el entorno familiar del sujeto causante, pues todos ellos se encuentran dentro del segundo grado de parentesco respecto de aquél, posibilitando un modelo de pluralidad de beneficiarios. Según la *Orden de 13 de febrero de 1967*, para la concesión de las prestaciones los beneficiarios deberían convivir con el causante²¹⁶ y a sus expensas al menos con dos años de antelación a su fallecimiento –con la excepción entendida de la imposibilidad de cumplimiento por motivos biológicos–, no tener derecho a pensión pública, carecer de medios de subsistencia y que no existan familiares con obligación y posibilidad de prestar alimentos según la legislación civil. Cumpliendo estos requisitos, podrán ser beneficiarios:

- a) Los nietos o hermanos que sean huérfanos absolutos, menores de dieciocho años o que tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en el grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Si no efectúan un trabajo lucrativo o, de realizarlo, los ingresos anuales sean inferiores al 75% de la cuantía del salario mínimo interprofesional anual, se podrá ser beneficiario de la pensión en favor de familiares siempre que, al fallecer el causante, se sea menor de veintidós años de edad²¹⁷.
- b) Madre y abuelas, viudas, casadas cuyo marido esté incapacitado para el trabajo en los términos indicados, o solteras.
- c) Padre y abuelos, que tengan cumplidos los 60 años de edad o se hallen incapacitados para el trabajo en los términos indicados.

²¹⁶ En la práctica el concepto de *convivencia* se entiende en un sentido amplio, si bien no recoge aquellas situaciones de carácter circunstancial o que se basan en visitas esporádicas.

²¹⁷ Para las consideraciones adicionales relativas a criterios económicos, edad y suspensión y recuperación de la pensión, véase el artículo 22 de la *Orden de 13 de febrero de 1967* en la redacción dada por el artículo 4 del *Real Decreto 1465/2001, de 27 de diciembre*, y la disposición adicional novena del *Real Decreto 4/1998, de 9 de enero*.

- d) Hijos y hermanos de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente en la modalidad contributiva, mayores de 45 años, solteros, divorciados o viudos que acrediten prolongado cuidado del causante²¹⁸.

Es llamativa la diferencia que se establece normativamente en progenitores y abuelos según el sexo, que a nuestro entender presenta reminiscencias de una estructura social que no está ya vigente y que contrasta con los argumentos que el Tribunal Constitucional impuso en Sentencia STC 3/1993, de 14 de enero, al hablar de las diferencias establecidas en la LGSS al negar en su momento la condición de beneficiarios a hijos y hermanos que sí se otorgaba a hijas y hermanas, diferencias catalogadas por el tribunal como inconstitucionales²¹⁹. También es llamativa la que podríamos denominar “orfandad impropia” para los hijos que superan la edad general de esta tipología de pensión siempre bajo el cumplimiento de criterios asistenciales y acreditación del cuidado del progenitor difunto.

Se está ante un sistema de cobertura que viene a complementar el diseñado por las pensiones de viudedad y orfandad, en el que, de nuevo, puede hacerse una diferenciación atendiendo a la edad, puesto que es la propia legislación laboral la que impide que determinados beneficiarios tengan posibilidad real de obtención de rentas por sí mismos. El sistema de preferencia entre beneficiarios que cumplan las condiciones establecidas con anterioridad es el siguiente: Nietos y hermanos; Progenitores; Abuelos; Hijos y hermanos mayores de 45 años. Finalmente, la pensión en favor de familiares se extinguirá, en el caso de nietos y hermanos, por las causas establecidas para la pensión de orfandad, mientras que para los ascendientes serán el fallecimiento o contraer matrimonio.

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta este momento, no parece haber dudas sobre el carácter asistencial de la prestación, pues son la situación personal o biológica de los beneficiarios o su capacidad económica los que definen completamente su realidad. Este

²¹⁸ Artículo 176.2 de la LGSS. Como se ha indicado, otras personas que pudieran haber prestado cuidados de larga duración al causante pero que no sean del entorno familiar indicado no son consideradas beneficiarios.

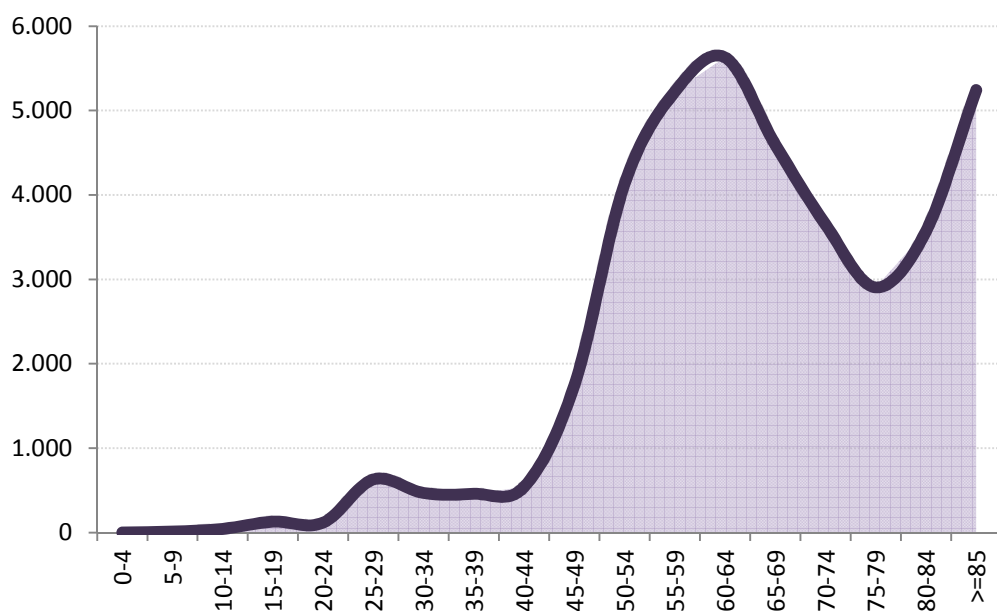
²¹⁹ STC 3/1993: “(...) la atribución exclusivamente a las hijas y hermanas del referido derecho no tiene por objeto la reincorporación efectiva de la mujer al trabajo, ni su emancipación de las tareas domésticas. Por el contrario se trata de una medida meramente compensadora de un estado de necesidad en la que predomina la visión paternalista y la función sustitutiva de la pensión perdida. Es, en suma, una prestación que, tomada en cuenta por el criterio de diferenciación, no otro que el sexo, resulta perturbadora para lograr una igualdad efectiva de la mujer en relación con el varón, en tanto que el privilegio instituido en favor de la misma se revela como una forma encubierta de discriminación que se vuelve contra ella”.

parecer puede también extraerse de las referencias parciales que realiza el Tribunal Constitucional en la Sentencia STC 3/1993 ya citada:

En efecto, aun cuando la norma encuentra fundamento en una superada idea de la función social de la mujer, y bien que obedezca a un propósito de protección, es claro que su finalidad última es remediar la situación de necesidad en que quedan la hermana y la hija que han dependido económicamente del causante cuando fallece éste. A diferencia de lo que ocurre en la pensión de viudedad, la norma atiende aquí en todos los casos a auténticas situaciones de necesidad, dada la incompatibilidad de esta pensión con la percepción de ingresos propios por parte de los beneficiarios.

La mayoría de las pensiones a favor de familiares en vigor a 1 de julio de 2015 tenían como beneficiarias a mujeres (73,66%), mientras que los varones eran el 26,34%, siendo la pensión media de aquéllas en esta fecha un 10,69% superior a la de éstos. Por grupos de edad, en el mismo instante temporal el número de pensiones en favor de familiares se concentra en las edades que han alcanzado los 50 años (aproximadamente el 89,33% del total).

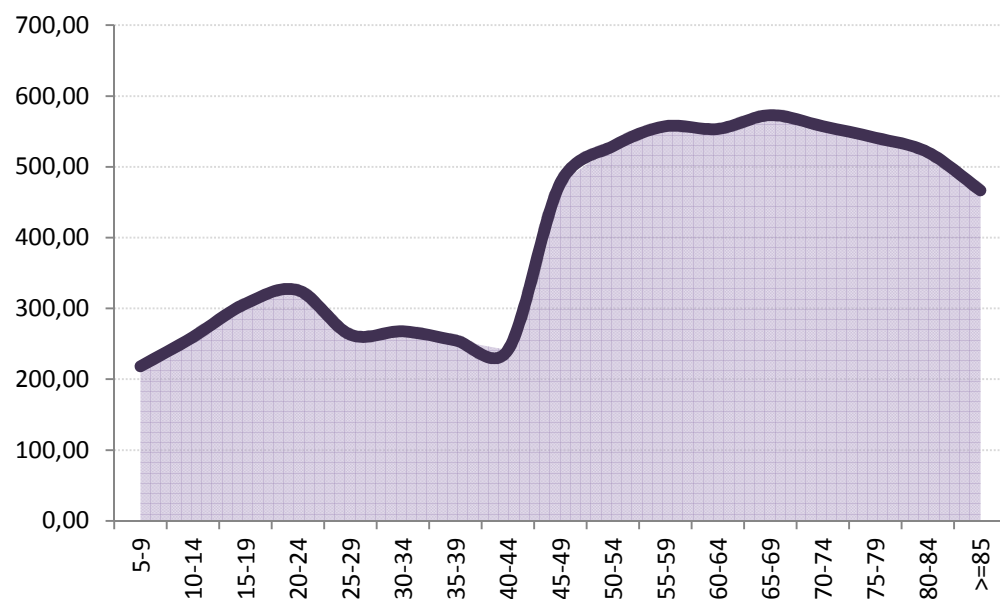
Gráfico 51. Número de pensiones en favor de familiares en vigor por edad del beneficiario



Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Datos a 1 de julio.

Respecto a la cuantía media de las pensiones en vigor a 1 de julio de 2015 por grupos de edad, las mayores pensiones se dan en los tramos de edades superiores a 45 años, si bien existe una amplia variabilidad en todo el espectro de edad.

Gráfico 52. Cuantía media de las pensiones en favor de familiares en vigor por edad del beneficiario

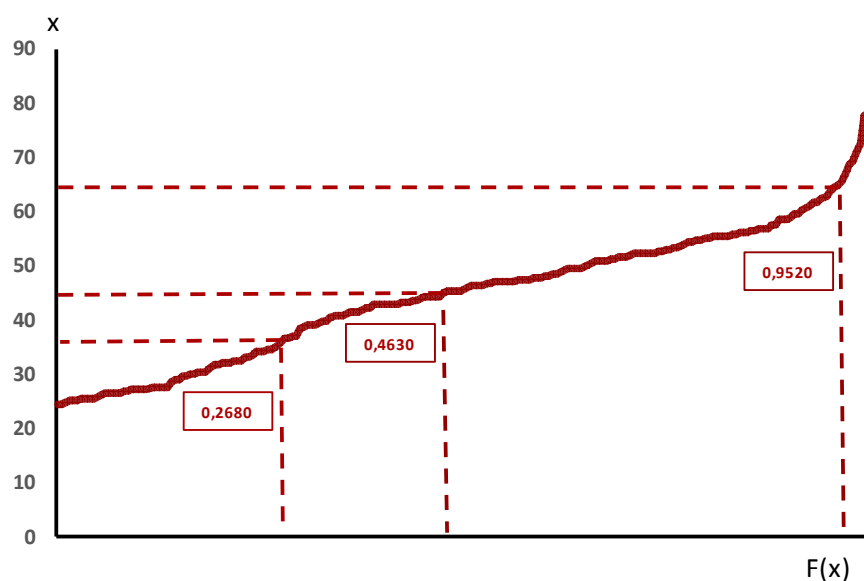


Fuente: Seguridad Social. *Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016*. Datos a 1 de julio.

La cuantía media de la prestación en favor de familiares es superior a la correspondiente a la pensión de orfandad, aun cuando ambas tienen un mismo tipo F_1 aplicable a la base reguladora (20%), debido a la estructura de edades del beneficiario y su relación con el sujeto causante. Puesto que la pensión de orfandad general es temporal hasta una edad del beneficiario y ya hemos visto que la edad media de entrada estimada es de 22,70 años, es esperable que en un buen número de situaciones, sino en la mayoría, el sujeto causante no presente una edad a su fallecimiento muy distante de la del beneficiario (hijo o asimilado) y, por tanto, todavía existiría un hipotético recorrido para mejorar la base reguladora de haber vivido si se acepta que las mayores bases de cotización se alcanzan en las edades altas –algo que a día de hoy no tiene por qué ser exactamente así aunque sí lo ha sido en el pasado-. Por lo tanto, la orfandad no puede recoger todas las posibles mejoras en las bases de cotización que influyen en la cuantía de la base reguladora, algo de lo que sí se aprovecharía una parte de los beneficiarios del favor de familiares.

Según la MCVL-2014 la edad media del beneficiario en el momento de acceso a la prestación en 2014 es de 44,91 años, con una desviación típica de 12,29 años y los cuartiles: $Q_1 = 34,25$ años, $Q_2 = 46,38$ años y $Q_3 = 53,51$ años.

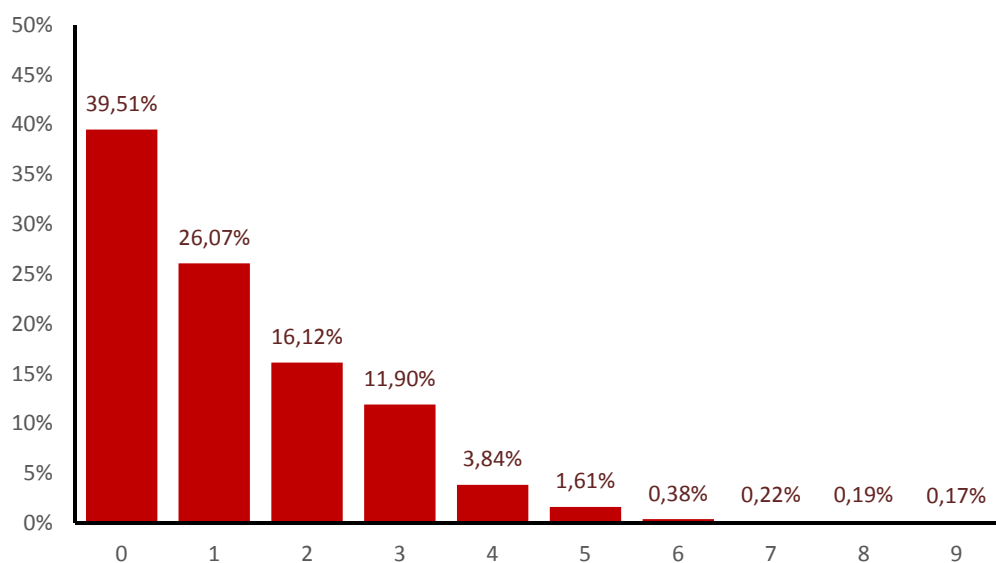
Gráfico 53. Edad estimada del beneficiario a la obtención del favor de familiares



Fuente: elaboración propia con datos de la MCVL-2014. Percentiles para las edades de 35, 45 y 65 años.

Teniendo en cuenta también la estructura de las pensiones en vigor por edad, parece correcto decir que esta prestación actúa en la práctica como una pensión de jubilación en la que el beneficiario es distinto del causante, que predomina sobre la pensión de jubilación no contributiva al ser mayor su importe medio.

Gráfico 54. Estructura familiar o de apoyo de los beneficiarios de favor de familiares. Número de convivientes adicionales declarados en la unidad familiar



Fuente: elaboración propia con datos de la MCVL-2014. Eje de abscisas: número de convivientes adicionales.

El 39,51% de los beneficiarios declaran no convivir con otra persona, mientras que el 26,07% declaran convivencia con una persona. El 24,14% de los convivientes tienen una edad superior a la del beneficiario y el 75,86% una edad inferior. Por ejemplo, de los beneficiarios que conviven con dos personas el 59,23% vive con una persona de mayor edad y con otra de menor edad.

5.2. La cuantía de las prestaciones

La cuantía de la pensión inicial en favor de familiares P_0^f se calcula, de forma general, mediante la aplicación de un porcentaje a una base reguladora en los términos recogidos en [4] y [51]. En este caso el porcentaje F_1 aplicable a la base reguladora es el 20% para cada beneficiario de la pensión²²⁰, con los límites globales generales de las pensiones de muerte y supervivencia (el máximo del 100% o del 118% de la base reguladora, según proceda) y con la prelación de la pensión de orfandad sobre la de familiares. La base reguladora se calcula de idéntica forma que para la pensión de viudedad, con las actualizaciones acaecidas en el propio favor de familiares. Esta cuantía se puede incrementar con la que correspondiera a la pensión de viudedad siempre que no queden beneficiarios de ésta ni hijos con derecho a pensión. Primeramente se incrementaría la pensión para nietos y hermanos y, si tampoco existiesen éstos, pasarían a ser beneficiarios los ascendientes distribuyéndose el incremento por partes iguales entre éstos.

En cuanto a la duración de la prestación, frente a la opción general que es la de una pensión de carácter vitalicio, para los hijos y hermanos que, en la fecha del hecho causante, sean mayores de veintidós años de edad²²¹, solteros o viudos, y reúnan las condiciones de convivencia, dependencia económica los dos años anteriores al fallecimiento, inexistencia de otra pensión, carencia de medios de subsistencia y de familiares con obligación y posibilidad de prestar alimentos que se han expuesto para el caso de la pensión vitalicia, se concederá una prestación temporal en favor de familiares con una duración máxima de 12 mensualidades²²², que se extinguirá por el agotamiento del período máximo de duración establecido o por fallecimiento del beneficiario. De nuevo

²²⁰ Artículo 39 del *Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre*.

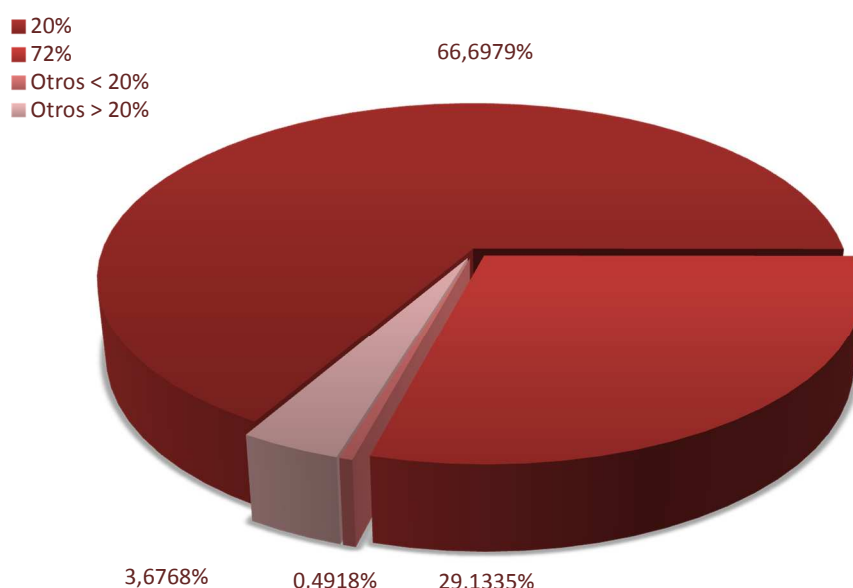
²²¹ En la redacción dada por el artículo quinto del *Real Decreto 1465/2001, de 27 de diciembre*. En la *Orden de 13 de febrero de 1967*, la edad era de 18 años.

²²² Que, según el *Oficio-Circular del Instituto Nacional de la Seguridad Social nº 16/1987, de 31 de marzo*, citado por Rodríguez Iniesta, G. (2009), página 306, se incrementarían en dos mensualidades como pagas extras.

hay que destacar la diferencia que el legislador establece con respecto a otro perceptor de prestaciones temporales de muerte y supervivencia, tal es el viudo, que ante igualdad o mejores condiciones personales socioeconómicas, igualdad de condiciones de acceso y de estructura de cotizaciones por parte del sujeto causante percibe un subsidio temporal durante el doble de tiempo.

A este respecto, si se acude a los datos de la MCVL-2014 se puede observar que, en realidad, el porcentaje de pensiones que se encuentran en un tipo $F_1=20\%$ es el más significativo (66,6979%), mientras que para el tipo del 72% sería del 29,1335%, esto es, buena parte de las pensiones de favor de familiares asumen un porcentaje superior al no existir simultáneamente con sus beneficiarios otros a los que correspondiese viudedad u orfandad.

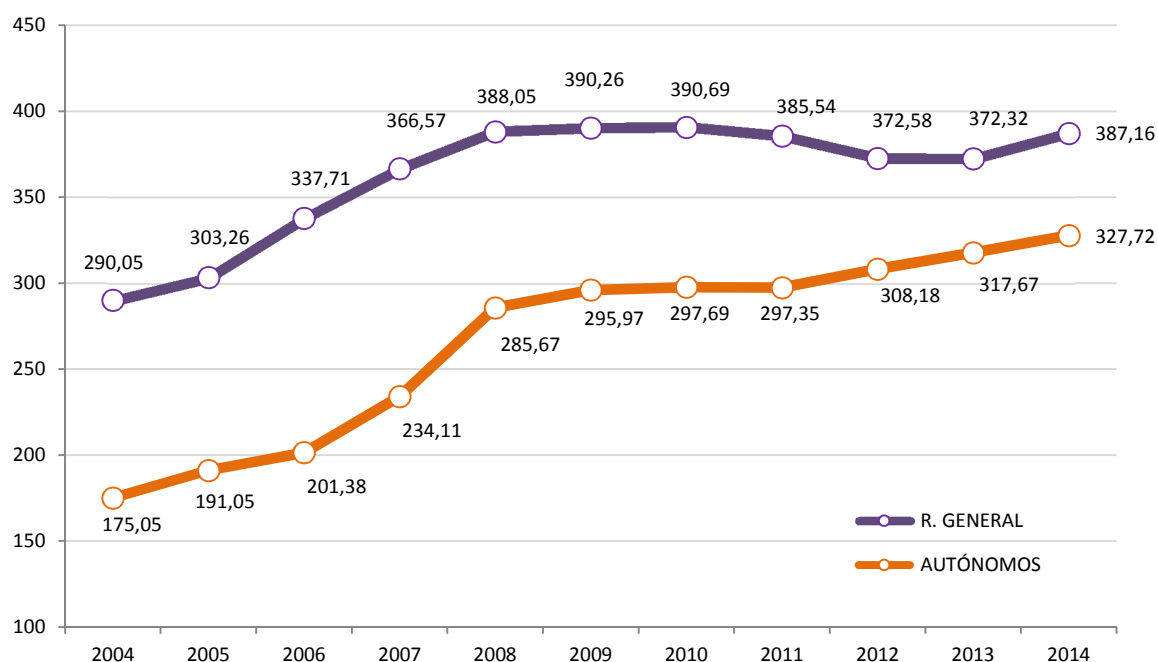
Gráfico 55. Tipo aplicado en origen a la base reguladora en el favor de familiares



Fuente: elaboración propia con datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales 2014. Total muestral.

Por regímenes, aunque en la práctica todavía existe distancia entre la pensión media del Régimen General y la del Régimen de Autónomos, ambos se van acercando en las nuevas altas de un ejercicio. La pensión media de 2014 de las pensiones en favor de familiares en vigor en el Régimen General fue de 519.71€ mensuales, mientras que para los autónomos fue de 427,47€ al mes, cuantías muy alejadas de los 803,41€ mensuales en el Régimen del Carbón o los 877,67€ y 1.010,67€ mensuales por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, respectivamente.

Gráfico 56. Pensión media mensual de las altas en el favor de familiares



Fuente: Seguridad Social. *Anexo al Informe Económico Financiero. Proyecto de Presupuestos 2016.*

La cuantía de las pensiones en favor de familiares se revaloriza cada año según el *Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social (IRP)* y, como en todas las pensiones, el sistema garantiza una cuantía mínima cumpliendo los requisitos adicionales establecidos para ello. El importe mínimo anual se diferencia por grupos, estimándose para el año 2016 las siguientes cuantías por beneficiario: caso general (194,30€ en 14 pagas); si no existe viudo o huérfano pensionista y es un beneficiario con al menos 65 años (469,70€ en 14 pagas); para un solo beneficiario con menos de 65 años (442,50€ en 14 pagas), mientras que también se someten al límite de la cuantía máxima: (14 pagas de 2.567,28€). De existir varios beneficiarios, el mínimo asignado a cada uno se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.011€ anuales (año 2015) entre el número de beneficiarios. Como ya se ha indicado, uno de los requisitos para la concesión de una pensión en favor de familiares es la inexistencia de otra pensión pública, lo que restringe la compatibilidad de esta prestación. Sí es compatible con la viudedad u orfandad derivadas del mismo sujeto causante hacia otros beneficiarios y, según Rodríguez Iniesta, G. (2009), con la asignación por hijo a cargo cuando el pensionista sea nieto o hermano. En cuanto al subsidio temporal en favor de familiares, éste tiene una cuantía igual a la señalada para la pensión de su misma tipología pero durante un plazo temporal de un año. Al no ser estrictamente una pensión, en teoría su cuantía no se vería incrementada por la correspondiente a la viudedad no cubierta y no le serían de aplicación los límites establecidos para pensiones.

5.3. La reforma del favor de familiares desde una perspectiva paramétrica

La pensión en favor de familiares viene a completar un espectro de protección en el entorno familiar del sujeto causante, aun cuando se encuentra supeditado al resto de actuaciones en materia de muerte y supervivencia, especialmente a la orfandad, situada en un escalón superior tanto en el orden de prelación como en la aplicación práctica. Aun cuando el cálculo de la pensión inicial parte de la misma fórmula, el límite máximo general de edad en la percepción de una pensión de orfandad es superior (24 años frente a 22 años) y también lo son los porcentajes aplicables sobre el salario mínimo interprofesional cuando así procede (el 100% en orfandad frente al 75% en favor de familiares). En este entorno, algunas cuestiones que se han tratado al hablar de la pensión de orfandad son perfectamente asimilables en el favor de familiares y, como ya ocurriera con aquélla, las propias características del favor de familiares, su ubicación en el modelo de protección y su vínculo con otras coberturas limitan las posibilidades de reforma desde una perspectiva paramétrica.

Como en casos anteriores, una reforma paramétrica para esta prestación surge de la consideración de la edad del beneficiario para la obtención de la prestación; sin embargo, su propia esencia no contributiva y la heterogeneidad de las características de sus beneficiarios dificulta la aplicación de esta medida, que requiere establecer adicionalmente un límite mínimo L por debajo del cual se mantiene el derecho (la edad legal de acceso al mercado laboral parece una opción razonable, aunque se puede equiparar a la utilizada en la pensión de orfandad). Fijamos aquí el límite mínimo en 26 años, por debajo del cual se concede igualmente la prestación en los mismos términos actuales, y se recurre a la MCVL-2014 para obtener una aproximación al ahorro que puede suponer una medida de este estilo mediante la aplicación de [82]:

Tabla 10. Efecto en la pensión mensual inicial con la incorporación de un límite de edad. Favor de familiares

	L=35	L=45	L=55	L=65
A	15,5533%	25,6814%	57,7543%	73,6594%

Si se observa esta propuesta teniendo en cuenta las tres clases de pensión estudiadas (viudedad, orfandad y favor de familiares), la hipótesis de que conforme avanza la edad aumenta la probabilidad de incapacidad para obtener rentas propias sólo tiene sentido a partir de la edad legal de trabajar (por lo que es susceptible de no ser adaptada en el caso de nietos o hermanos, que son candidatos a ser beneficiarios del favor de familiares), mientras que esta alternativa no significa que todos los beneficiarios que lo

sean en función de su edad no dispongan de recursos propios, ni tampoco que quienes no accedan a la prestación por no alcanzar el límite de edad fijado se encuentren en capacidad real de obtención de recursos. En definitiva, a nuestro juicio existen aquí demasiados interrogantes que sobrepasan los beneficios económicos obtenidos, por muy importantes que éstos sean, por lo que esta alternativa no se encontraría dentro de nuestras prioridades de acción.

Dadas las características actuales del favor de familiares, su reforma pasa inexcusablemente por adecuar la protección y la financiación, esto es, transformar esta prestación en no contributiva pues ésta es sin duda su esencia actual. Debemos recordar aquí que dentro de la pluralidad de beneficiarios existen grupos bien diferenciados: aquellos que no encuentran obstáculos legales para obtener sus propias rentas y aquellos a los que la propia legislación les impide este hecho. Recurriendo a estos segmentos, bien podría separarse la cobertura de nietos y hermanos menores de una edad determinada de la del resto de beneficiarios, teniendo en cuenta que a algunos de estos últimos la protección que fuese necesaria les puede venir a través de otras prestaciones como la pensión de jubilación –en cualquiera de sus modalidades–.

En el reconocimiento de la diferente idiosincrasia de los beneficiarios habría cabida para una prestación contributiva únicamente para nietos y hermanos menores a una edad concreta y el paso del resto de los casos al campo asistencial. Sin embargo, puesto que los vigentes criterios de dependencia económica giran sobre todos los beneficiarios, independientemente de su edad y filiación, sería necesario eliminar los mismos para tales nietos y hermanos si se mantuviesen en el espectro contributivo, algo que directamente incrementaría la cobertura originada desde el sujeto causante (pues prácticamente todos los nietos y hermanos menores de una edad serían susceptibles de cobertura ya que no se espera que realicen una actividad generadora de rentas), si bien la prelación de la pensión de orfandad limitaría en la práctica incrementos de coste relevantes. Esta alternativa permitiría igualar el resto de criterios entre orfandad y favor de familiares contributivo, de tal forma que la diferencia entre ambas únicamente vendría de la prelación establecida en favor de los huérfanos. De cualquier manera, bajo nuestro criterio, de mantenerse los vigentes criterios asistenciales en la prestación lo más razonable y lógico es su paso en bloque al campo no contributivo desde un instante temporal determinado, lo que permite un ahorro para la modalidad contributiva de la Seguridad Social –que no en la misma medida para el presupuesto nacional– por las nuevas altas que se transfieren al sistema asistencial, sin que sea el criterio económico el que orienta esta opción puesto que lo que se busca es la consistencia en su realidad y filosofía.

6. Consideraciones al capítulo III

La heterogeneidad en las características del beneficiario es uno de los estandartes en la definición de las prestaciones de muerte y supervivencia, dificultad añadida para el diseño y desarrollo de propuestas de modificación que indudablemente han de chocar con el actual régimen proteccionista –que no es sinónimo aquí de protector-.

El auxilio por defunción es una prestación anacrónica e ineficiente en la sociedad de nuestro tiempo puesto que no cumple ninguna función protectora ni aporta valor añadido a los beneficiarios, por lo que debe ser inexcusablemente reformado; algunas de las alternativas posibles que aquí se han expuesto incrementan su coste, pero siempre en términos asumibles para el sistema. Desde nuestra perspectiva, la opción de reforma más adecuada es la eliminación del auxilio por defunción o su integración en la esencia de otras coberturas, si bien es de interés el mantenimiento de una prestación que cubra gastos inherentes al tratamiento de los restos mortales a cargo del empresario que infringe las exigencias en materia de salud y riesgos laborales con resultado de muerte para el trabajador.

El sistema actual respecto a la indemnización a tanto alzado no presenta una amplia controversia, si bien se propone que en las contingencias profesionales su importe sea de 3 bases reguladoras por beneficiario (supérstite e hijos), mientras que los requisitos de dependencia económica o necesidad deberían desaparecer para los progenitores y el importe a obtener para ellos debería ser, como máximo, equivalente al de los beneficiarios anteriores; con esta propuesta el ahorro estimado sobre la cobertura actual sería del 40,13%, aunque el apoyo social se incrementaría para las unidades familiares con un mayor número de miembros. Valoramos positivamente el establecimiento de una indemnización a tanto alzado en contingencias comunes, compatible con la eliminación del auxilio por defunción, por un importe mínimo de 1 base reguladora, con un incremento de coste estimado de 130,18 millones de euros al año, si bien esta medida puede favorecer la mitigación de la tensión social de otras reformas adicionales de signo contrario en términos económicos. La indemnización a tanto alzado aceptaría incorporar un régimen de soporte del coste a cargo de la responsabilidad empresarial por incumplimiento de la normativa en materia de riesgos laborales.

La pensión de viudedad es un pilar indiscutible del sistema actual de protección, no en vano su coste estimado es de 21.040,87 millones de euros para 2016 (aproximadamente el 14,93% del presupuesto total del sistema) con 2.369.797 millones de pensiones, pero su diseño genera una indudable incertidumbre que debe ser corregida, en primer lugar,

con el objetivo de respetar sus características contributivas y separar aquellos aspectos que sean de corte asistencial, que deberían ser financiados conforme a su naturaleza. El porcentaje aplicable a la base reguladora de esta pensión no debería ser superior al mínimo correspondiente a la jubilación y debe valorarse la modificación de las reglas de concurrencia de beneficiarios, incluida la perspectiva de su eliminación; las propuestas aquí estudiadas permiten un ajuste de las cuantías a la intensidad del daño en las cercanías del hecho causante, así como la modificación al alza de los requisitos de cotización establecidos para la obtención del derecho en contingencias comunes, por ejemplo, mediante el sistema de funciones lineales que ahora se encuentra vigente para la incapacidad.

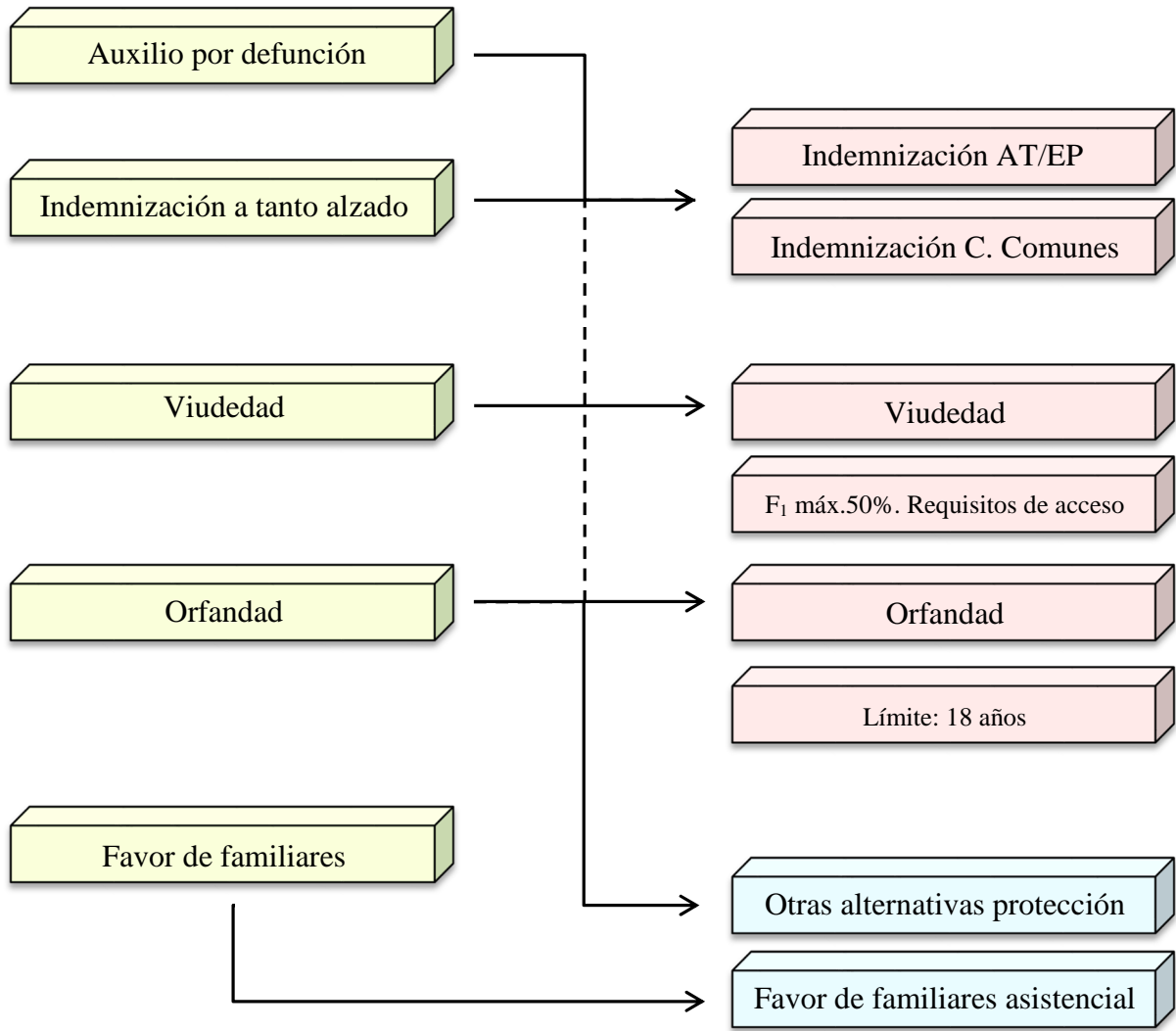
$$F(x) = \begin{cases} x_0 \leq X < x_1 & a_1 \cdot X + b_1 \\ x_1 \leq X < x_2 & a_2 \cdot X + b_2 \\ \dots & \dots \\ \omega > X \geq x_n & a_n \cdot X + b_n \end{cases}, \quad X \in \mathbb{N}^+$$

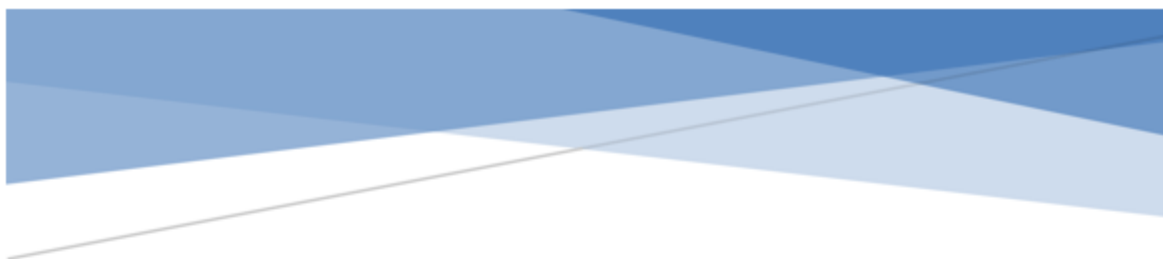
Las prestaciones de orfandad y de favor de familiares tienen un menor recorrido en cuanto a la reforma de sus parámetros, si bien en el primer caso se propone la equiparación de la edad límite de percepción de la pensión para todos los beneficiarios en la edad legal de incorporación al mercado laboral, sin que predominen las condiciones del beneficiario sobre el esfuerzo contributivo realizado. Pasada esta edad, el sistema de protección social general (con sus derivaciones territoriales) sería el encargado de focalizar el esfuerzo de protección adicional allí donde sea necesario y con la intensidad que sea requerida. Como en la viudedad, las coberturas asistenciales, incluido el tratamiento positivo de la discapacidad, deben derivarse hacia la modalidad no contributiva u otros modelos de cobertura. En definitiva, en la orfandad debe primar esta característica frente a otras que pueda presentar el beneficiario.

Por su parte, de no ser reformadas mediante una redefinición y un nuevo diseño acorde a otros objetivos, las prestaciones en favor de familiares deberían reconvertirse íntegramente en prestaciones no contributivas, pues ésta es su verdadera esencia en la actualidad.

De forma general el diseño que aquí se presenta podría ser interpretado como más restrictivo para los beneficiarios, algo que no es cierto en todos los casos si se acepta la dinámica de una mayor intensidad en las cercanía del hecho causante, pero es a la vez más coherente con el mantenimiento de una modalidad contributiva y con una integración razonable en el conjunto de la Seguridad Social.

Cuadro 24. Resumen del escenario alternativo para muerte y supervivencia





CAPÍTULO IV

LA REFORMA ESTRUCTURAL DE LAS PRESTACIONES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA

De lo que se piense en el cielo, caballeros, de una manera u otra estaremos mal informados. Sus mensajes son difíciles de interpretar, pues con frecuencia dicen una cosa y la contraria para dejar a salvo nuestra libertad de elección.

La saga/fuga de J.B. Gonzalo Torrente Ballester.

CAPÍTULO IV. LA REFORMA ESTRUCTURAL DE LAS PRESTACIONES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA

En los capítulos anteriores se han estudiado las prestaciones de muerte y supervivencia y se han evaluado y propuesto distintas alternativas de acción desde una perspectiva eminentemente individual que mantiene los principales pilares de la actual configuración y revisa y/o transforma alguno de los parámetros de referencia. Siguiendo la línea marcada en este trabajo de investigación, en el presente capítulo se expondrán distintas alternativas para la reforma estructural y/o global de las prestaciones de muerte y supervivencia, planteando nuevos paradigmas que afectan a la totalidad de su diseño, estructura o fuentes de financiación. Las posibilidades de actuación son muy diversas, si bien hay que tener en cuenta que la adopción de alguna de ellas implica una redefinición que trasciende de las prestaciones de esta clase y requiere actuaciones en otras coberturas como la jubilación y la incapacidad.

En primer lugar se analiza la situación del denominado *Factor de sostenibilidad* respecto a la muerte y supervivencia, ya que bajo el régimen jurídico vigente no le es aplicable aun cuando no haya en su diseño exención del carácter vitalicio, decisión que se cuestiona desde enfoque un crítico. A continuación se estudian las prestaciones bajo la óptica de los sistemas de aportación definida y acumulación de fondos, reales o nocionales, opciones que no resuelven toda la incertidumbre que afecta a la cobertura que aquí se examina, especialmente allí donde haya una carrera escasa de aportaciones u otras prestaciones hayan sido satisfechas previamente a cargo del fondo.

También se revisa, desde un enfoque actuarial y mediante la aplicación de técnicas actuariales, la sustitución de las coberturas vitalicias por opciones temporales, más acordes con la sostenibilidad del sistema y el equilibrio entre aportaciones y prestaciones, siendo ésta una alternativa que favorece el mantenimiento de la protección en el campo contributivo al contribuir a la solvencia a través de un sensible ahorro de costes medido en términos de valor actual actuarial. Seguidamente se presenta, de forma sucinta, un acercamiento a la cobertura en términos de prestaciones consumidas –es decir, teniendo en cuenta los derechos previos liquidados al sujeto causante – o mediante una configuración más vinculada a la unidad familiar.

Otra posibilidad de acción, de plena actualidad en algunos círculos profesionales y académicos, es el cambio de la modalidad en la que se ubican las prestaciones por muerte y supervivencia, dando pie a que las nuevas altas desde un momento determinado pasen a formar parte, cuando se cumplan los requisitos mínimos que marca

la ley, de las denominadas *pensiones no contributivas*. Con ello se generaría un ahorro para la modalidad contributiva por las nuevas incorporaciones de beneficiarios que anteriormente eran cubiertos este segmento y ahora trasladarían su coste al campo asistencial. Dentro de esta alternativa ha de estimarse adicionalmente la incidencia en el coste vía Índice de Revalorización de las Pensiones y, por su parte, algunas de estas hipotéticas altas –no todas- tendrían derecho a una nueva pensión en el sistema no contributivo, dando lugar a un mayor coste financiado por el Presupuesto General del Estado. Siendo una opción relevante en términos de sostenibilidad, su filosofía es aquí ampliamente cuestionada.

El capítulo concluye con una propuesta de transformación global que tiene su origen de la redefinición de los pilares básicos de financiación de las prestaciones de muerte y supervivencia dentro de la modalidad contributiva, incluyendo un nuevo pilar no contributivo para todos los pensionistas, independientemente de su origen, que soporte una parte del gasto en pensiones. Las fuentes de financiación se mantienen nítidamente separadas y no existen interferencias entre las mismas, pero se facilita que una parte del actual coste contributivo sea cubierto por otras partidas sin que los teóricos derechos de los ciudadanos se vean afectados.

1. EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

1.1. El factor de sostenibilidad en la Seguridad Social española

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, incorporó a la LGSS una disposición adicional, la quincuagésima novena, con el siguiente contenido:

Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes.

Un primer acercamiento a este factor de sostenibilidad se produjo con el informe de un Comité de expertos²²³, emitido con fecha 7 de junio de 2013, donde se proponía el diseño del factor de sostenibilidad a través de dos vías: un *Factor de Revalorización Anual (FRA)* y un *Factor de Equidad Intergeneracional (FEI)*, siendo la expresión de este último:

$$FEI_{x,t+s} = \frac{e_{x,t}}{e_{x,t+s}} = \frac{e_{65,t \in [2014,2019]}}{e_{65,t+s}} \quad [84]$$

Sería finalmente la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, la que cumpliese el mandato de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, mediante la creación de un *Índice de Revalorización de Pensiones, IRP*, (del que ya hemos hablado en el capítulo II) y de un *Factor de Sostenibilidad, FS*²²⁴.

Al igual que el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) que propuso el Comité de expertos, el Factor de Sostenibilidad (FS) se basa en la equidad entre generaciones

²²³ Varios autores (2013): *Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones*.

²²⁴ Sobre estas herramientas véase: Hernández González, D. et al. (2014a, 2014b); Bosch Príncipe, M. et al. (2013), Meneu Gaya, R. et al. (2013) y Devesa Carpio, J.E. et al. (2015). Es de destacar que los principales estudios sobre la materia han sido realizados, hasta el momento, por actuarios.

respecto al importe global de prestaciones percibidas y se aplica únicamente a la pensión inicial de jubilación, si bien se ha fijado su entrada para el año 2019 y se han establecido revisiones quinquenales, siendo su expresión:

$$FS_t = FS_{t-1} \cdot e_{67}^* , FS_{2018} = 1 \quad [85]$$

$$e_{67}^* = \underbrace{\left(\frac{e_{67,2012}}{e_{67,2017}} \right)^{\frac{1}{5}}}_{2019 - 2023} \cdots \underbrace{\left(\frac{e_{67,2017}}{e_{67,2022}} \right)^{\frac{1}{5}}}_{2024 - 2028} \cdots \underbrace{\left(\frac{e_{67,2022}}{e_{67,2027}} \right)^{\frac{1}{5}}}_{2029 - 2033} \quad [86]$$

e_{67}^* : Variación interanual en un período quinquenal de la esperanza de vida a la edad base de 67 años. Tablas de mortalidad de población protegida por la Seguridad Social.

Tal y como exponen Hernández González, D. *et al.* (2014a y 2014b) y siempre que se asuman las mismas hipótesis de mortalidad, en los años correspondientes al extremo superior de cada intervalo quinquenal (2023, 2028, 2033, etc.) el factor de sostenibilidad FS es igual al factor de equidad intergeneracional FEI con un año base fijado en 2012 y con un intervalo de seis años de diferencia respecto al año de cálculo, es decir:

$$FS_{67,t_k} = \frac{e_{67,2012}}{e_{67,t_k-6}} = FEI_{67,t_k-6} , t = 2023 + 5 \cdot k , k = 0,1,2 \dots \quad [87]$$

Mientras se produzcan incrementos en la esperanza de vida, la aplicación del factor de sostenibilidad FS llevará a que las generaciones futuras reciban una pensión inicial inferior a la que les correspondería de no aplicarse tal factor pero, como acertadamente exponen Devesa Carpio, J.E. *et al.* (2010):

La disminución de la pensión inicial de los nuevos jubilados, debido a este ajuste, no hay que interpretarla como una pérdida de derechos sino como una consecuencia del principio de equidad intergeneracional: lo injusto sería no adaptar la pensión a la esperanza de vida ya que ello supondría una discriminación de los actuales jubilados a favor de los futuros.

Así, a pesar de denominarse *factor de sostenibilidad*, el verdadero objetivo del FS no es la propia sostenibilidad sino la equidad, puesto que las consecuencias de su aplicación en un ejercicio K tienen su contrapartida en sentido contrario en aquellos ejercicios futuros en los que el Índice de Revalorización de Pensiones utilice la información de aquel

ejercicio. Sobre la fórmula del IRP y siendo G_k los gastos del ejercicio k-ésimo, un descenso en el importe del gasto en pensiones iniciales de jubilación G_k^{PI} a raíz de la aplicación del factor de sostenibilidad FS lleva a un menor gasto total de seguridad social en ese ejercicio, que a su vez influye en una menor media geométrica de gastos, G_k^G , en un mayor valor del cociente de las medias geométricas de gastos e ingresos en la fórmula del IRP y, por ello, sin perjuicio de la aplicación de los límites correspondientes, en una mayor revalorización teórica de la totalidad de las pensiones del ejercicio a través del propio IRP, esto es, en líneas generales:

$$\nabla FS_k \rightarrow \nabla G_k^{PI} \rightarrow \nabla G_k \rightarrow \nabla G_k^G \rightarrow \Delta \frac{I_k^G}{G_k^G} \rightarrow \Delta IRP_k$$

En la práctica, la aplicación del denominado factor de sostenibilidad FS conlleva la introducción de un nuevo factor F_6 en el cálculo de la pensión inicial, tal que la fórmula general recogida en la expresión [4] pasaría a ser:

$$P_0 = [(F_1 + F_2) \cdot F_3 \cdot (F_4 + F_5)] \cdot F_6 \quad [88]$$

$F_6 = 1$ para pensiones distintas a las de jubilación

$$\frac{\partial P_0}{\partial F_6} = [(F_1 + F_2) \cdot F_3 \cdot (F_4 + F_5)] \geq 0 \quad [89]$$

1.2. El factor de sostenibilidad y las prestaciones de muerte y supervivencia

Según su definición legal, el factor de sostenibilidad FS únicamente se aplicará a la pensión inicial de jubilación, no siendo adaptado a las pensiones por muerte y supervivencia. Esta dinámica ha sido apoyada en el informe del Comité de expertos ya citado, por Devesa Carpio, J.E. (2013)²²⁵, e indirectamente por Meneu Gaya, R. *et al.* (2013). Por el contrario, Hernández González, D. *et al.* (2014a y 2014b) son partidarios de la aplicación del factor de sostenibilidad FS a las pensiones vitalicias de muerte y

²²⁵ Devesa Carpio, J.E. (2013): *Jornada El factor de sostenibilidad de las pensiones: el punto de vista del actuario*. Instituto de Actuarios Españoles. Octubre. Este investigador no es partidario de aplicar el Factor de Sostenibilidad a las de muerte y supervivencia por entender que son contingencias sobrevenidas, situación contraria a la jubilación, que es previsible y donde existen posibilidades de ajustar y planificar la cuantía de la pensión inicial.

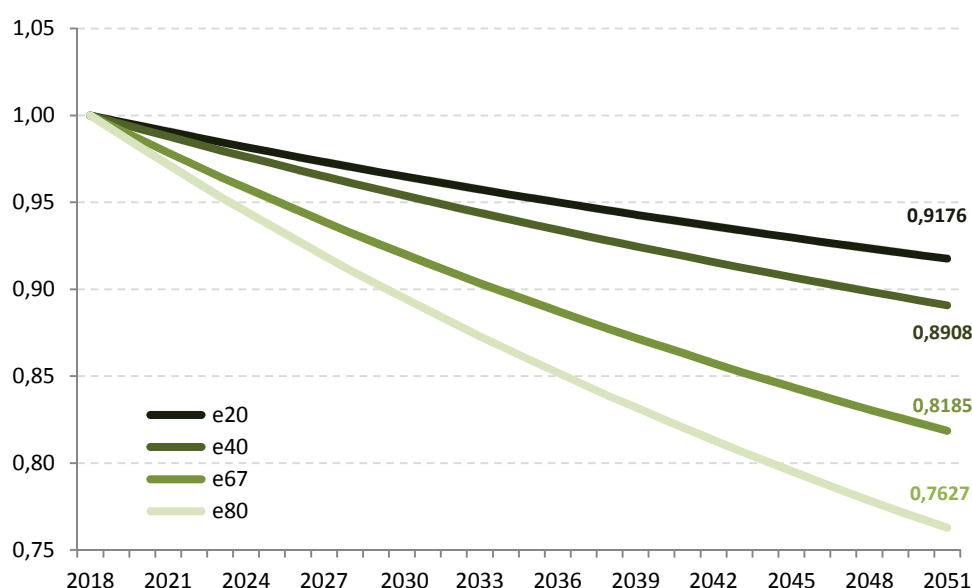
supervivencia, aun cuando es una opción no exenta de problemas prácticos, utilizando para ello las tablas de mortalidad derivadas de cada colectivo.

Sobre la aplicación del factor de sostenibilidad FS a las prestaciones por muerte y supervivencia hay que indicar que la primera cuestión a debate surge de la constitucionalidad de la medida. En efecto, siendo el factor una acción que tiene como objetivo la equidad entre generaciones o en palabras de Hernández González, D. *et. al.* (2011): "la equidad entre beneficiarios que acceden a la prestación mediante hipótesis uniformes y condiciones equivalentes pero en dos momentos del tiempo diferentes", no creemos que exista un argumento sólido para establecer la diferenciación entre perceptores de prestaciones a largo plazo, decisión que favorece una posible interpretación de inconstitucionalidad, aun cuando las fronteras en la materia sean siempre difusas. Puesto que en la realidad actual la probabilidad de supervivencia a una misma edad x es mayor conforme se suceden las generaciones, ante homogeneidad en el resto de condiciones un beneficiario que accede a la pensión general de viudedad en el momento t_r recibirá en términos esperados, valorados en el mismo instante, menores prestaciones totales que un beneficiario que accede en un instante t_s posterior ($t_r < t_s$), habiéndose generado sin embargo el teórico derecho en igualdad de condiciones. No interfiere en esta evaluación que el beneficiario sea persona distinta del sujeto causante, pues lo que interesa aquí es la equidad entre distintos beneficiarios.

En segundo lugar, la cuestión puede verse desde la perspectiva de la determinación de las prestaciones por muerte y supervivencia que entrarían dentro del campo de actuación del factor de sostenibilidad. Parece claro que la naturaleza del actual auxilio por defunción hace que esta prestación no sea aquí tenida en cuenta. Sí parece, sin embargo, que las prestaciones vitalicias (pensión de viudedad y pensión en favor de familiares, así como la orfandad con incapacidad) serían las candidatas a la aplicación del FS. En cuanto a la pensión general de orfandad (no vinculada a la discapacidad), es cierto que se está ante una prestación de carácter temporal, pero según el caso esta temporalidad puede llegar a ser superior a la duración de una pensión de viudedad. El rango de temporalidad es muy amplio, lo que dificulta la solución a adoptar, si bien puede aceptarse que no le sea aplicable el factor de sostenibilidad en base a la relación entre la edad promedio de percepción y las características del beneficiario. El subsidio en favor de familiares, la prestación temporal de viudedad y la indemnización a tanto alzado, que si bien pueden plantearse en equivalencia con una pensión vitalicia, son eminentemente prestaciones de duración limitada o de pago único y no habría de serles aplicado el factor de sostenibilidad.

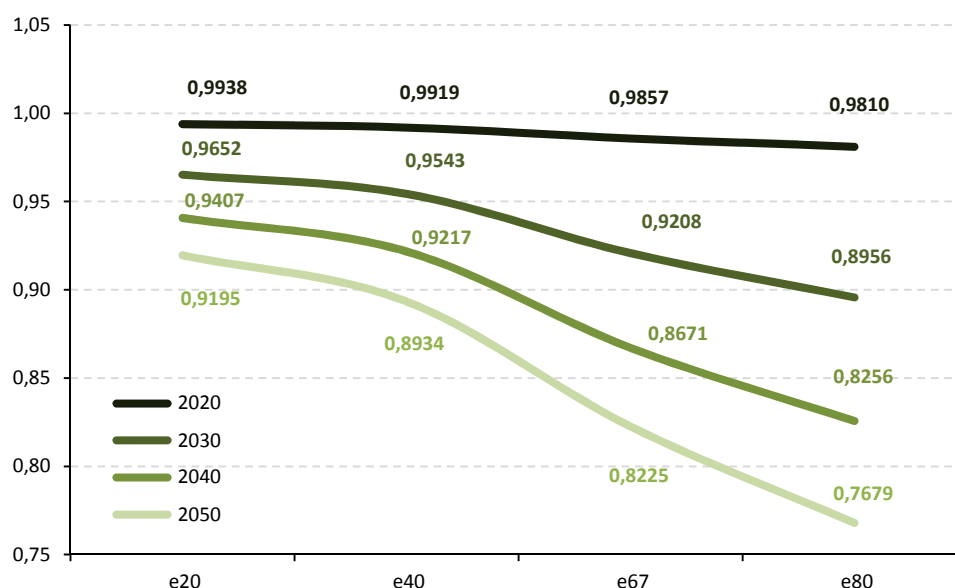
Desde el punto de vista técnico la consideración del factor de sostenibilidad *FS* en las prestaciones de muerte y supervivencia presenta simultáneamente características similares y dispares a las correspondientes a la pensión de jubilación. En efecto, el rango de edades de acceso a la pensión de jubilación es en la práctica reducido, mientras que en el caso de las prestaciones por muerte y supervivencia es mucho más amplio; de hecho, el extremo inferior del intervalo puede comenzar en la edad legal de matrimonio en la viudedad o en la edad de nacimiento en la orfandad. Por otra parte, en la jubilación el extremo superior del intervalo acaba en la edad límite del colectivo, si bien en las prestaciones por muerte y supervivencia existen posibilidades con un límite inferior al indicado. Igualmente, en la jubilación existe una pequeña libertad para el beneficiario en cuanto a la elección de la edad de acceso dentro de un margen conocido, algo que no ocurre en las prestaciones por muerte y supervivencia. Con todo ello, frente al establecimiento de una edad base de 67 años en el caso del factor de sostenibilidad aplicable a la jubilación, una pensión de muerte y supervivencia requiere un espectro más amplio de edades base que se ajusten a las posibles edades de entrada, argumento que incluye sin duda más complejidad en el modelo pero que es perfectamente asumible en la práctica. Desde esta perspectiva, sobre las expresiones [85] y [86] y para dotar de homogeneidad a los datos se recurre a las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística y a cuatro edades de entrada, dando lugar a los resultados numéricos que se encuentran en el Anexo V.

Gráfico 57. Factor de sostenibilidad *FS* por año de aplicación y edad de entrada



Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. *Proyecciones demográficas 2012–2051*.

Gráfico 58. Factor de sostenibilidad por edad de entrada y año de aplicación



Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. *Proyecciones demográficas 2012-2051*.

Este sistema requeriría la determinación del momento de entrada y el año base de la misma (ahora 2018), así como las tablas de mortalidad generacionales a aplicar puesto que las existentes en la Seguridad Social de carácter público son insuficientes. De cualquier forma, la aplicación de un factor de sostenibilidad requerirá en algún momento la adaptación de las tablas de mortalidad usadas a la evolución futura en esta variable, lo que generará cierta incertidumbre en el propio modelo.

1.3. Otros planteamientos basados en la equidad

1.3.1. Las rentas actuariales

Tomando como punto de partida la equivalencia actuarial, una alternativa de cálculo se basa en la utilización de rentas actuariales vitalicias en la expresión [86] en lugar del uso de la esperanza de vida, alternativa que se estudia en Devesa *et al.* (2010) de modo general para la jubilación, en Hernández González, D. *et al.* (2011) y más en concreto para el factor de sostenibilidad en Hernández González, D. *et al.* (2014a). Una posibilidad es la siguiente²²⁶, cuyos resultados detallados se encuentran en el Anexo VI:

²²⁶ En una aplicación de ajuste real al sistema sería adecuada la utilización de rentas actuariales crecientes en progresión geométrica.

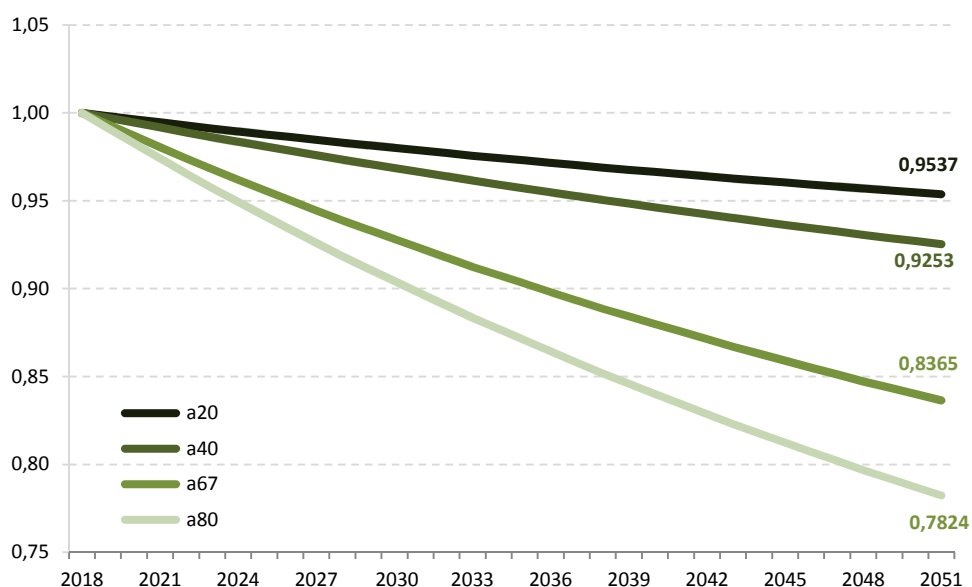
$$e_x^* = \underbrace{\left(\frac{a_{x,2012}^{(*)}}{a_{x,2017}^{(*)}} \right)^{\frac{1}{5}}}_{2019-2023} \dots \underbrace{\left(\frac{a_{x,2017}^{(*)}}{a_{x,2022}^{(*)}} \right)^{\frac{1}{5}}}_{2024-2028} \dots \underbrace{\left(\frac{a_{x,2022}^{(*)}}{a_{x,2027}^{(*)}} \right)^{\frac{1}{5}}}_{2029-2033} \quad [90]$$

$a_x^{(*)}$ Valor actual actuarial de los pagos efectuados al beneficiario en una prestación por contingencias comunes, que se corresponden con $m_1 = 12$ pagos mensuales al año y $m_2 = 2$ pagos semestrales al año, esto es:

$$a_x^{(*)} = \frac{m_1}{(m_1 + m_2)} \cdot a_x^{(m_1)} + \frac{m_2}{(m_1 + m_2)} \cdot a_x^{(m_2)}$$

$a_x^{(m)}$ Valor actual actuarial de una renta inmediata, pospagable, fraccionada en m períodos y vitalicia para una cabeza de edad x .

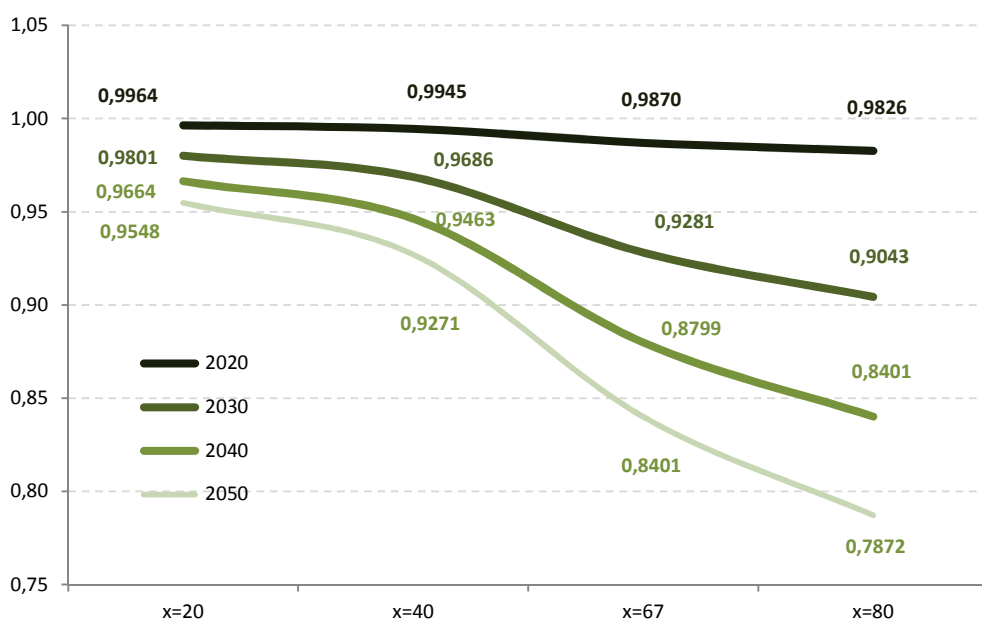
Gráfico 59. Factor de sostenibilidad por año de aplicación y edad de entrada. Rentas actuariales



Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. *Proyecciones demográficas 2012-2051*. Tipo de interés técnico: 2%.

Los resultados obtenidos son similares a los que se habían obtenido con la utilización de la esperanza de vida, aunque con unos valores superiores para la pensión inicial en el supuesto de la utilización de las rentas actuariales que irían directamente en favor de los beneficiarios.

Cuadro 60. Factor de sostenibilidad por edad de entrada y año de aplicación. Rentas actuariales



Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. *Proyecciones demográficas 2012–2051*. Tipo de interés técnico: 2%.

1.3.2. Equidad en los años cotizados

Otra línea de trabajo surge con la utilización en la función de referencia de un equilibrio que tenga en cuenta los años n_s cotizados por el sujeto causante de la prestación, obviando así de forma directa componentes demográficos. Este sistema se adapta a la pensión de jubilación, pero requiere argumentos adicionales para su aplicación a una prestación por muerte y supervivencia, pues es necesario establecer el número de años cotizados que se requieren para la obtención del 100% de la prestación, lo que en este caso requeriría también modificar el requisito vigente en cuanto al plazo para acceder a una prestación de activo por contingencias comunes en situación de alta o asimilado.

Puesto que el espectro de posibles años cotizados es muy amplio, existen puntos en los que existiría incertidumbre ya que los años cotizados pueden ser muy superiores a los ahora establecidos, lo que ocasionaría incrementos de porcentaje aplicable y más gasto, lo que a su vez requeriría imponer un límite máximo en el 100% y, con ello, romper la equidad que se pretendía buscar. Una dinámica de este estilo basada en una función lineal puede verse en Hernández González, D. *et al.* (2011).

2. APORTACIÓN DEFINIDA: CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL Y CUENTAS NOCIONALES

Teniendo en cuenta el sistema financiero-actuarial en el que se ubican, las opciones de diseño respecto a las prestaciones por muerte y supervivencia son variadas. No es objeto de este estudio hacer un análisis exhaustivo de las similitudes y diferencias entre los distintos sistemas financiero-actuariales aplicables a la Seguridad Social (para ello puede verse, por ejemplo, Thullen, P. (1974)); sí interesa, en cambio, dejar constancia de las implicaciones más relevantes en el marco de la protección de esta naturaleza que se derivan de un hipotético cambio completo del sistema vigente. Una primera aproximación a la transformación integral del sistema financiero-actuarial utilizado por la Seguridad Social se manifiesta en el abandono del actual modelo de reparto simple anual, de prestación definida, y la consiguiente adopción de un sistema de capitalización de aportación definida orientado a la obtención de derechos económicos individuales que puedan hacerse líquidos en el momento del fallecimiento del sujeto causante o, también, en la aceptación de un sistema de reparto basado en cuentas nocionales. En teoría, esta transformación puede plantearse para la Seguridad Social en su conjunto o solamente para unas prestaciones concretas, lo que llevaría a un modelo mixto.

2.1. La capitalización individual de aportación definida

Tomando como referencia a Nieto de Alba, U. y J. Vegas Asensio (1993), un sistema de capitalización plantea un equilibrio vitalicio entre el valor actual actuarial de aportaciones y prestaciones, ya sea de forma individual o colectiva. Para Barr, N. y P. Diamond (2010) es un sistema apoyado en el ahorro y “se basa, por tanto, en un método de acumulación de activos financieros, que se intercambian por productos en el futuro (...) cada miembro aporta una parte fija de sus ingresos a una cuenta. Estas contribuciones se utilizan para comprar activos que se acumulan en la cuenta, así como la rentabilidad de esos activos. Cuando la pensión comienza, los activos de la cuenta financian el consumo tras la jubilación a través de una renta vitalicia o alguna otra vía”. A grandes rasgos, un sistema de capitalización de aportación (o contribución) definida se basa en la fijación del sistema de aportaciones y la incertidumbre respecto de las prestaciones, con el apoyo instrumental de un fondo de capitalización individual cuyo valor V_t en cada ejercicio se ajusta a la siguiente expresión:

$$V_t = \sum_{s=1}^t A_s \cdot \prod_{h=s}^t (1 + i_h) - \sum_{s=1}^{t-1} G_s \cdot \prod_{h=s+1}^t (1 + i_h) - G_t \quad [91]$$

A_t Aportaciones prepagables realizadas en cada periodo

G_t Salidas y gastos y pospagables en cada periodo

i_h Interés unitario realmente obtenido en t

La prestación vitalicia para el beneficiario una vez acaecido el hecho causante se obtiene mediante la equivalencia entre el valor del fondo asignado finalmente al beneficiario y el valor actual de una renta actuarial o financiera. La ecuación [91] (y a través de ella el modelo en sí) no se encuentra influida directamente por variables demográficas, si bien la prestación que ha de obtener el beneficiario sí lo estaría si no es percibida en forma de pago único e inmediato, algo que al valor del fondo conjunto como tal le puede ser indiferente si se ha transferido el riesgo a terceros a través de una operación de seguro. De ahí que Argandoña, A. *et al.* (2013) indiquen que: “tanto los sistemas de reparto como los de capitalización están expuestos a los aumentos de la longevidad que aumentan la duración de la jubilación y obligan a retrasar las edades de jubilación y a reducir las cuantías de las pensiones”. Por otra parte, este planteamiento también traslada riesgos al titular de los derechos, quien en el momento en el que realiza sus aportaciones desconoce realmente cuál será la cuantía final de la prestación a la que tendrá derecho en el instante futuro en el que acaecerá la contingencia cubierta y si ésta será suficiente o adecuada según sus expectativas o necesidades.

La transformación total del vigente sistema de reparto en uno de capitalización individual de aportación definida conlleva unas ventajas económico-financieras para la Seguridad Social que se derivan de la transferencia de riesgos hacia los beneficiarios, quienes asumirían la variabilidad en las prestaciones, lo que repercute positiva y directamente en la sostenibilidad del sistema ya que se elimina la presión sobre los ingresos que son necesarios para hacer frente a las nuevas prestaciones presentes y futuras. Las prestaciones dependen en buena medida del esfuerzo contributivo realizado pero también del valor del fondo acumulado y de los activos que lo soportan, si bien con esta alternativa se incide en la eliminación de las inequidades actuales existentes en la relación entre aportaciones y prestaciones derivadas de las condiciones de acceso y de los límites máximos y mínimos anuales de cuantías, que posibilitan prestaciones equivalentes ante aportaciones que no lo son.

Sin embargo, como es generalmente aceptado y ya se indicó en Hernández González, D. (2009), un problema relevante en la aplicación total de la capitalización individual de aportación definida a la Seguridad Social española surge con el hecho de que “los activos tendrían que financiar las prestaciones de los pasivos actuales –vía cotización o por vía impositiva- y posiblemente soportar una cuota adicional para garantizar un mínimo para sus propios derechos según el sistema de capitalización establecido, es decir, existirían altos costes de transición”, siendo otras fuentes de incertidumbre:

1. Una mayor irrelevancia del principio de solidaridad como base de la Seguridad Social.
2. La posibilidad de prestaciones diferentes ante aportaciones equivalentes por el hecho de acceder a las mismas en distintos momentos del tiempo, con la posibilidad incluso de menores beneficios aun habiendo realizado mayores aportaciones, algo problemático en un sistema de carácter obligatorio en el que no existe libertad de adscripción. Sin embargo, este hecho es ya una realidad en la Seguridad Social española actual, pues las distintas generaciones del presente tienen unas condiciones más restrictivas que sus antecesoras en cuanto al acceso a algunas prestaciones habiendo cotizado, sin embargo, por mayores cuantías.
3. La elección entre la gestión pública o privada del sistema de capitalización y la necesidad de definir reglas de transición entre posibles alternativas, tenido en cuenta que la aplicación de un sistema de capitalización individual de aportación definida no obliga a que la gestión del mismo sea de naturaleza privada.
4. El hecho de que la prestación derivada del fondo acumulado V_t pueda ser o no capaz de cubrir un mínimo de las necesidades de un beneficiario de muerte y supervivencia, especialmente en el caso de un sujeto causante fallecido tempranamente en situación laboral activa que hasta ese momento haya realizado aportaciones limitadas. También hay que tener en cuenta las reglas establecidas para las prestaciones derivadas de pasivo y el hecho de que contingencias previas minoran la cuantía del fondo correspondiente.

Por ello, para favorecer la protección a largo plazo se requiere la indisponibilidad de derechos individuales antes del acaecimiento de los hechos cubiertos, sin que quede claro qué ocurriría con otro tipo de prestaciones que ahora cubre el sistema y con el riesgo de que, por la manifestación de riesgos políticos, se intentase cargar al fondo global el coste de contingencias de muy diversa especie.

Una alternativa de acción es completar el modelo capitalizado a través de otro instrumento de cobertura, por ejemplo, un seguro que asuma las diferencias entre la cuantía acumulada y una cuantía mínima establecida, seguro cuyo coste (si es que es posible su contratación) se distribuye entre los cotizantes en caso de obligatoriedad –lo que implica cierto grado de solidaridad-. Por supuesto, nada garantiza que un seguro finalmente pudiera hacer frente a sus compromisos ante la manifestación frecuente y/o intensa de los riesgos cubiertos.

Por otra parte, también se puede establecer que un porcentaje de la cotización se destine de forma separada a la cobertura de los riesgos derivados de muerte y supervivencia, minorando con ello los derechos correspondientes a otras contingencias salvo imposibilidad de aparición de los riesgos citados (por inexistencia de teóricos beneficiarios de un sujeto causante concreto).

5. La transferencia de riesgos que promueve esta alternativa es indudablemente favorable al gestor, no pudiéndose afirmar tajantemente si, finalmente, también lo es para el beneficiario puesto que su rentabilidad se somete al riesgo asumido y a priori no se tiene en cuenta su función de utilidad.
6. La necesidad de un mercado suficiente y eficiente de activos susceptibles de soportar las necesidades de la capitalización individual de aportación definida que a su vez sea reflejo de la economía real, así como la existencia de riesgos no deseados merced a la imposición mediante ley de criterios de inversión ajenos a la eficiencia o la libertad de acción.
7. En palabras de Barr, N. y P. Diamond (2010), en el ahorro voluntario individual “se asume que los individuos están bien informados, no hay distorsiones y son capaces de tomar las decisiones adecuadas. No es cierto”. Esto implica la sensibilidad hacia el traspaso de la gestión, que no tiene garantía alguna de ser más beneficiosa o adecuada que la realizada en la actualidad por el Estado.

2.2. Las cuentas nocionales de aportación definida

Según Vidal Meliá, C. *et al.* (2002), en un sistema de cuentas nocionales de aportación definida: “se establece una analogía entre el sistema de reparto y el de capitalización, mediante la incorporación al sistema de reparto de instrumentos financiero-actuariales utilizados en el sistema de capitalización”; Para Valero, D. *et al.* (2001) se está ante un “plan de ahorro con una rentabilidad fijada exógenamente pero no dependiente de los

rendimientos de mercado". Las cuentas nocionales serían así una alternativa financiada mediante el sistema de reparto que recurre como instrumento de apoyo a un fondo nocional de carácter ficticio constituido con las aportaciones de los legalmente obligados y unos rendimientos, también ficticios, derivados de la capitalización de las aportaciones mediante un tanto nocional. Las prestaciones dependen del valor del fondo nocional en el momento del hecho causante y del factor de conversión que se le aplique a ese valor para transformarlo formalmente en la prestación establecida. En definitiva, desde una perspectiva muy general y partiendo de [91], se plantearía una equivalencia en el instante t , momento de concesión de una prestación P_t a un individuo de edad x , entre la corriente de aportaciones realizadas al fondo nocional y sus rendimientos (netas de los gastos correspondientes) y la corriente de prestaciones en ese instante, tal que:

$$I(\omega, t) = G(\omega, t)$$

$$\sum_{s=1}^t A_s \cdot \prod_{h=s}^t (1 + i_h^n) - \sum_{s=1}^{t-1} G_s \cdot \prod_{h=s+1}^t (1 + i_h^n) - G_t = P_t \quad [92]$$

$$t = x_j - x$$

$$i_h^n \quad \text{Tanto nocional}$$

La prestación puede estar formada por un único pago o por pagos periódicos P'_t , que si se articula mediante una renta actuarial vitalicia, nos llevarían a una expresión del tipo:

$$\sum_{s=1}^t A_s \cdot \prod_{h=s}^t (1 + i_h^n) - \sum_{s=1}^{t-1} G_s \cdot \prod_{h=s+1}^t (1 + i_h^n) - G_t = P'_t \cdot a_x^\alpha \quad [93]$$

$$a_x^\alpha \quad \text{Valor actual actuarial de una renta pospagable, unitaria, vitalicia, inmediata para un individuo de edad } x, \text{ creciente al tanto anual acumulativo } \alpha.$$

o, igualmente, definido un factor de conversión c :

$$P'_t = c \cdot \sum_{s=1}^t A_s \cdot \prod_{h=s}^t (1 + i_h^n) - \sum_{s=1}^{t-1} G_s \cdot \prod_{h=s+1}^t (1 + i_h^n) - G_t \quad [94]$$

$$c = \frac{1}{a_x^\alpha}$$

Respecto a la aplicación general de las cuentas nocionales para el sistema de pensiones español, hay opiniones encontradas. Martínez Noval, L. (2013) no se muestra partidario de su implantación, frente a la sensibilidad positiva del Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas (2013); Argandoña, A. *et al.* (2013) consideran necesaria la “transformación del sistema de reparto en un sistema de aportación definida con cuentas nocionales y un factor de sostenibilidad, complementado por un sistema de capitalización (...) la estabilidad de este sistema de pensiones está indefinidamente garantizada, los riesgos para los pensionistas pueden contrarrestarse con una anticipación razonable, y su multiplicidad de fuentes aumenta la robustez del sistema frente a los riesgos económicos y demográficos locales, y es la reforma que mayores ganancias de bienestar ofrece en el largo plazo”, si bien estos autores no abordan cómo quedaría la estructura de la financiación en su aplicación a modelos distintos ni sus efectos.

A la hora de pensar en la transición hacia un modelo de cuentas nocionales, entre otros factores hay que considerar que el sistema sigue siendo de reparto, con las implicaciones que ello tiene de cara a la sostenibilidad, aunque esta opción tiene una virtud esencial en la incorporación de una mayor equidad actuarial. Por otra parte, las cuentas nocionales no tienen que llevar aparejado obligatoriamente un modelo adicional de capitalización de aportación definida. En cuanto a su aplicación a las prestaciones por muerte y supervivencia, ya Vidal Meliá C. *et al.* (2002) aportaron una orientación sobre esta cuestión: “Las prestaciones distintas de la jubilación, como invalidez, viudedad, orfandad, deben basarse en fórmulas tradicionales”. En efecto, como ya se ha indicado, las cuentas nocionales y las prestaciones basadas en acumulación de fondos, reales o ficticios, no resuelven la incertidumbre en el supuesto de sujetos causantes con trayectorias profesionales cortas –y por tanto escaso bagaje esperado en aportaciones–, o de prestaciones ya satisfechas para sujetos causantes en situación de pasivo que deben reorientarse hacia los beneficiarios de muerte y supervivencia. Además, al estar hablando de prestaciones derivadas, hay que tener en cuenta que la prestación puede requerir para su cálculo argumentos biométricos, los del beneficiario en prestaciones con sujeto causante en situación de activo, pero que presentan una disfunción cuando el fondo nocional ya ha sido convertido con anterioridad en prestación con las características e hipótesis demográficas correspondientes al sujeto causante.

La argumentación en favor de las cuentas nocionales en España se ha circunscrito principalmente a un modelo orientado únicamente a la jubilación; siendo ésta una

posibilidad para la cobertura de esta contingencia, sería necesario articular opciones adicionales que resolviesen la incertidumbre que se plantea para el resto de riesgos, en especial la muerte y supervivencia y la invalidez, pues si el motivo de la sustitución del sistema financiero-actuarial vigente se deriva de una teórica ineficiencia e incapacidad de hacer frente a sus compromisos, no parece que mantener una parte de las prestaciones en el mismo (aquellas que no pasarían al modelo de cuentas nocionales) vaya a resolver de forma inmediata la cuestión a debate por cuanto que los ingresos teóricos también deben reasignarse.

2.3. Las prestaciones por muerte y supervivencia en un sistema de seguridad social de aportación definida

El sistema financiero-actuarial que sirve de sustento a la Seguridad Social puede ser objeto de total transformación, pero no ha de entenderse ello como una opción imprescindible o necesaria habida cuenta de la distinta idiosincrasia de las prestaciones que se otorgan, para las que no siempre hay una única e inequívoca opción o solución satisfactoria. Además, siguiendo a Brown R.L. (2008): "los sistemas de seguridad social no necesitan ser capitalizados. Sólo necesitan ser financiados de un modo sostenible, lo cual es una cuestión bastante diferente". En nuestra opinión esta financiación sostenible debería partir de la consideración de un enfoque actuarial que perciba el sistema a través de la relación entre la corriente de aportaciones y la de prestaciones, conociendo hasta dónde se puede llegar en las segundas en función de la situación esperada de las primeras y de su idiosincrasia y utilizando los recursos que la ciencia actuarial pone a disposición del sistema para un mayor conocimiento de su realidad (herramientas e instrumentos de los que se ha hablado en el capítulo I). Siendo la Seguridad Social como es, un modelo de carácter eminentemente social, su evolución y diseño no deberían ir desacompanados respecto a la evaluación de su verdadera capacidad, no sólo protectora, sino generadora de recursos.

Junto a las fortalezas y debilidades de cada uno de los modelos aquí citados, desde una perspectiva de las prestaciones de muerte y supervivencia un punto de fricción relevante es el de los casos en los que el fondo acumulado, ya sea real o nocional, no es capaz de cumplir con los objetivos que se le presumen al no haberse realizado suficientes aportaciones, incluso por causas ajenas a la voluntad del sujeto causante. En una pensión de jubilación puede esperarse que, a pesar de la variabilidad durante el tiempo teórico de generación de las aportaciones, que puede alcanzar los 50 años, se haya conseguido una acumulación que permita contar con una cuantía en el momento del

hecho causante que cumpla con un mínimo susceptible de ser considerado (o no) como satisfactorio. Sin embargo, este hecho no tiene por qué ocurrir en el caso de prestaciones derivadas en las que el beneficiario es distinto del sujeto causante, donde el suceso que genera el beneficio puede acontecer en un plazo de ocurrencia mayor pero también más cerca del extremo inferior del intervalo temporal, lo que prácticamente imposibilita cualquier capacidad de protección del individuo por parte del sistema.

Así, la sensibilidad hacia la individualización del beneficio y la más que probable socialización de la pérdida²²⁷ que presentan estos modelos de cara a las prestaciones por muerte y supervivencia hacen que seamos ciertamente escépticos sobre su aplicación a todo el sistema. La aplicación parcial a la jubilación, cuyo estudio trasciende de los objetivos de este trabajo, aun cuando sea la opción aplicada en otros países nos genera ciertas dudas en lo que respecta a las coberturas que aquí estudiamos, que mantendrían su estatus y modelo de financiación teórico, que a su vez debería ajustarse al nuevo escenario y posiblemente obligaría a una reforma adicional de la muerte y supervivencia en alguno de los términos que se tratan en este trabajo de investigación.

La cobertura del riesgo de muerte y supervivencia en un sistema más amplio basado aportación definida puede requerir la combinación con alternativas de corte obligatorio como puedan ser los seguros de capital decreciente que completen el valor teórico del fondo o los seguros temporales anuales renovables, opciones no exentas de incertidumbre en su aplicación práctica, tanto en su concepción y diseño, como en su financiación, su gestión y su propia capacidad de acción.

²²⁷ Por la más que probable articulación de un sistema de cobertura mínimo que impida la aparición de situaciones extremas de necesidad debido a la imposibilidad de constitución de un capital mínimo o la pérdida abrupta de su valor en momentos cercanos al hecho causante, pues en otro caso el sistema de seguridad social pierde parte de su razón de ser.

3. RENTAS TEMPORALES Y OTRAS ALTERNATIVAS

3.1. Las prestaciones y las rentas actuariales temporales

Frente a la opción general actual de rentas vitalicias como concreción del derecho que adquiere el beneficiario, una de las posibilidades que se presentan a la hora de rediseñar la muerte y supervivencia es aceptar una estructura de prestaciones de carácter temporal, centrando así la intensidad de la protección en las inmediaciones del hecho causante. Esta propuesta parte de dos consideraciones básicas: la primera tiene que ver con la sostenibilidad, pues no hay duda de que, ante homogeneidad en las cuantías individuales, transformar prestaciones vitalicias en temporales daría lugar a un menor coste para la Seguridad Social; la segunda, con el abandono del paternalismo por parte del actual sistema, teóricamente contributivo, y de sus posibles privilegios para segmentos de población. Bajo este planteamiento se considerarían las contingencias en un período temporal concreto y dentro de un escenario de mayor equilibrio en la relación entre aportaciones y prestaciones; si fuese menester por las características del beneficiario en el momento de la finalización de la prestación, la protección necesaria se completaría con la correspondiente al campo no contributivo en sus distintas alternativas, principalmente –aunque no de forma única- jubilación e incapacidad, o con la otorgada por el nivel de apoyo social que así lo tuviera asumido.

Una de las potenciales virtudes de esta propuesta es que evita la percepción de pensiones vitalicias allí donde existen otros recursos o capacidad para obtenerlos, aunque este hecho no debería ser un obstáculo dentro de una modalidad verdaderamente contributiva o ante una equivalencia entre prestaciones y aportaciones correctamente planteada, siendo mayor la incertidumbre debida a que, en la actualidad, las pensiones vitalicias no se sustentan en una carrera suficiente de cotizaciones, por lo que son soportadas en la práctica con cargo a un tipo de solidaridad desequilibrado sobre el que ya hemos manifestado intensas críticas. Además, mediante un modelo basado en prestaciones temporales se fomenta que, en aquellos supuestos en los que existiese tal posibilidad, el beneficiario pueda seguir buscando su sustento y la cobertura de necesidades a través de su propia capacidad y esfuerzo, que normalmente le llevarán a realizar nuevos ingresos al sistema vía contribuciones. Las rentas temporales pueden plantearse para todos los beneficiarios o también incorporar un criterio de edad y articularse solamente para aquellas edades en las que no existen restricciones objetivas para la obtención de rentas propias, con la posibilidad de dos temporalidades distintas. González Ortega *et al.* (2012) indicaron que el plazo en una opción temporal se podría

mantener hasta que los hijos tengan una determinada edad –que no parecen precisar-, reforzando así la cobertura de las necesidades dentro del núcleo familiar; de acuerdo con lo indicado, una posibilidad para esta edad de referencia es que sea la que corresponde a la edad legal de trabajo.

La pensión de viudedad general y la pensión en favor de familiares se adaptan fácilmente a esta alternativa, mientras que la pensión de orfandad ya es temporal en su configuración general, quedando por valorar qué pasaría con aquella que es vitalicia, aunque conforme a lo que se ha descrito en el capítulo III, epígrafe 4, ésta también sería susceptible de ser convertida en una renta temporal y las coberturas necesarias tras su finalización se articularían mediante otras herramientas de protección. Los actuales subsidios temporales pueden seguir prestándose bajo las mismas condiciones o, para mantener la coherencia estructural del conjunto de prestaciones de muerte y supervivencia, convertirse en una prestación de pago único orientada a compensar el desequilibrio patrimonial en el momento cercano al óbito del sujeto causante.

Como ya hemos expuesto a lo largo de este trabajo parece razonable pensar que, independientemente de las consecuencias emocionales, el mayor quebranto económico para los supervivientes situados en el entorno vital de una persona fallecida se produce en la inmediatez del óbito, especialmente cuando en determinados casos no existe prácticamente tiempo de reacción ante la desventura. Puesto que el hecho causante genera una mayor incertidumbre económica, junto a la limitación del plazo de percepción es factible establecer una estructura de prestaciones en la que, en un período inicial concreto, se obtenga una “prestación reforzada,” lo que a la vez permite incorporar en este montante el espíritu del auxilio por defunción (y la indemnización a tanto alzado en los términos comentados en el capítulo III.2) y facilitar por ello su desaparición como tal. Esta “prestación reforzada” se puede diseñar mediante la incorporación de cuantías adicionales a las ya existentes, con el correspondiente incremento de gasto y la necesidad de analizar la problemática derivada de sus relaciones con otras prestaciones, o ser implantada mediante una equivalencia actuarial en la cual se mantenga el gasto global inicial por prestación a través del valor actual actuarial en el momento del hecho causante, tal y como ya se ha recogido en [70] y [81].

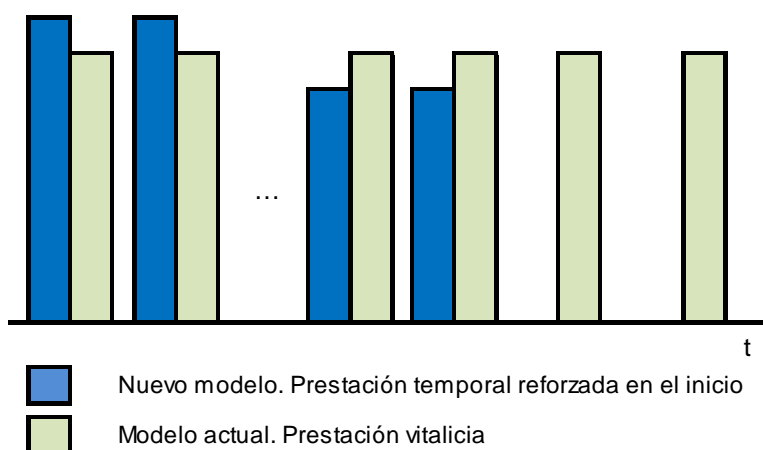
Aquí supondremos la existencia de rentas que crecen en cada ejercicio en progresión geométrica y se parte de una pensión inicial teórica P_0 de carácter anual a percibir de forma temporal y calculada según las reglas establecidas (por ejemplo, por la aplicación de un tipo F_1 a una base reguladora F_4). La expresión general de la equivalencia actuarial sería la siguiente:

$$P_0 \cdot a_{x:n_1+n_2}^q = (1 + \gamma) \cdot C \cdot a_{x:n_1}^q + C \cdot {}_{n_1/}a_{x:n_2}^q \quad [95]$$

C	Prestación anual real a percibir en el ejercicio
q	Razón de la progresión geométrica de la revalorización $q = (1 + IRP), IRP \in (0,25\%, \nabla \Delta IPC + 0,5\%)$
γ	Si procede según el diseño establecido, valor de refuerzo de la prestación en el primer período tal que $\gamma \in (0,1)$
$a_{x:n_1+n_2}^q$	Valor actual actuarial de una renta discreta, inmediata, pospagable, temporal de (n_1+n_2) años, creciente en progresión geométrica de razón q . El período (n_1+n_2) tiene como límite el marcado legalmente para cada prestación, si es el caso, o el nuevo límite superior establecido para éstas
$a_{x:n_1}^q$	Valor actual actuarial de una renta discreta, inmediata, pospagable, temporal n_1 años, creciente en progresión geométrica de razón q
${}_{n_1/}a_{x:n_2}^q$	Valor actual actuarial de una renta discreta, inmediata, pospagable, temporal n_2 años y diferida n_1 años, creciente en progresión geométrica de razón q

La estructura de pagos con esta alternativa se transformaría del siguiente modo:

Gráfico 61. Comparación de la estructura de pagos



Durante un número determinado de períodos se pagarían prestaciones por un importe superior al actual, quedando para el resto del período temporal máximo establecido una prestación inferior a la obtenida por el método vigente, sin que exista realmente diferencia entre el valor actual actuarial de los pagos esperados derivados de ambas alternativas: en términos esperados el importe de la prestación valorada en el mismo instante temporal es equivalente. En todo caso, los complementos a mínimos y los límites de pensiones deben aplicarse antes del cálculo de la equivalencia, mediante la

cual lo único que se hace es distribuir de otra forma los capitales en el tiempo. Desde la perspectiva del modelo actual la prestación reforzada pudiera aparentemente tener un inconveniente en su relación con los límites máximos y mínimos de pensiones. Este conflicto es estrictamente jurídico, puesto que en términos económicos ya se ha dicho que la cuantía percibida por el beneficiario es equivalente. Quizás en algún supuesto las cuantías resultantes de la redistribución de capitales pudieran superar el límite máximo de pensiones fijado P_M o ser inferiores al límite mínimo P_m marcado legalmente; bajo la filosofía actual los pagos realizados por encima de P_M deberían reducirse hasta este nivel, en perjuicio del beneficiario, mientras que los que quedasen por debajo de P_m serían completados hasta las cuantías mínimas, con claro favor para el beneficiario. Independientemente de la probabilidad de acaecimiento de este hecho, debe quedar claro que en esta propuesta es la pensión inicial la que se valora en términos de mínimos y máximos y sobre ella deben girarse los preceptos legales en la materia, quedando al margen el procedimiento de distribución.

Por otra parte, desde una perspectiva metodológica la revalorización de las pensiones públicas tiene efectos desde el comienzo del ejercicio, pero la equivalencia actuarial parte de la fecha de efecto, que puede ocurrir en cualquier momento dentro de dicho ejercicio. En períodos temporales muy pequeños quizás se pueda asumir este desajuste pero, en líneas generales, para conciliar ambos hechos (ocurrencia y revalorización) y facilitar la aplicación práctica en el primer ejercicio de efecto de la prestación, una alternativa sería realizar cierta abstracción del componente actuarial y establecer el cálculo de la equivalencia en el inicio del ejercicio del hecho causante; durante este ejercicio se genera un número de pagos que se satisfacen en las nóminas que quedan pendientes desde la ocurrencia hasta el cierre del año, normalizándose la situación a partir del cierre de este primer período.

De cualquier forma, la alternativa del uso de prestaciones temporales combinadas con rentas actuariales bajo el diseño aquí presentado minora efectivamente el coste de las actuales pensiones contributivas para el sistema, pero durante un período de tiempo ofrece una cobertura superior a la que se derivaría de una hipotética transformación del sistema en prestaciones no contributivas. Por su parte, hace frente a las mayores necesidades que se esperan en el entorno del hecho causante durante los primeros años tras el fallecimiento, no modifica el método de financiación establecido mediante un sistema de reparto anual ni supone la renuncia a la aplicación de la solidaridad.

En lo que respecta concretamente a la pensión de viudedad, entendemos razonable que el período de pagos de mayor protección tenga un límite máximo de 2 años para una renta temporal con un límite conjunto de 10 años. El porcentaje γ , que recoge las diferencias entre los segmentos temporales de percepción, no debería ser muy elevado para evitar transiciones problemáticas, por lo que tomaremos como valor el 10%. Insistimos en que tras la extinción de la renta temporal la cobertura seguiría otorgándose, si procede, según las características personales del beneficiario mediante las pensiones propias, ya sean en su modalidad contributiva –que ya estarían en vigor en ese momento- o en su modalidad no contributiva, bien entendida la compatibilidad de la pensión contributiva propia con la pensión de muerte y supervivencia derivada.

A efectos prácticos de valoración, se parte aquí de la información contenida en la MCVL-2014, se seleccionan las altas de viudedad del ejercicio 2014 y se utiliza el valor del importe mensual total de la prestación desde el que se estima la pensión anual según la naturaleza del hecho causante. Se calcula la edad del beneficiario a la fecha de efecto de la pensión, que se lleva al número entero inferior o superior según dicha edad se encuentre más cerca de cada uno de ellos. Supuesta una estructura de prestaciones pospagables, se calculan las prestaciones vitalicias y las temporales de duración 10 años y se calcula el valor actual actuarial en el origen de cada una de estas corrientes de pagos, teniendo en cuenta que los beneficiarios de una pensión temporal no tendrán diferencias entre ambos valores y que, puesto que la población tiene una edad límite, en las edades altas cercanas al límite poblacional la medida tampoco tendrá incidencia ya que la diferenciación temporal-vitalicio no es productiva. Se han utilizado las tablas de mortalidad de la Seguridad Social (*Orden TAS 4054/2005, de 27 de diciembre*), un tipo de interés técnico del 2% y una revalorización del 0,25%, acorde con el límite mínimo del *IRP* y que es más prudente en el entorno de trabajo puesto que recurre a la perspectiva del ahorro mínimo en la comparación entre el sistema actual y la propuesta de reforma hacia prestaciones temporales. Sea A el ahorro en términos actuariales y medido en el mismo instante temporal que corresponde a las altas de un ejercicio, en este caso el 2014, a causa de la transformación de las pensiones de viudedad vitalicias en pensiones temporales de 10 años de duración, su resultado según las hipótesis empleadas sería:

$$A = 1 - \frac{\sum_x P_0 \cdot (\sum_{k=1}^n (v')^k \cdot {}_k p_x)}{\sum_x P_0 \cdot (\sum_{k=1}^{\omega-x-1} (v')^k \cdot {}_k p_x)} = 0,417640 \quad [96]$$

$$v' = \frac{1}{(1+i)} = q \cdot v \rightarrow i' = \frac{1+i-q}{q}$$

${}_t p_x$ Probabilidad de que una cabeza de edad x sobreviva en $(x+t)$

Según la expresión de A , el ahorro estimado total en términos actuariales sería de un 41,7640% para las nuevas altas de viudedad cada ejercicio, si bien debe considerarse este valor como un mínimo puesto que, dado que la probabilidad de supervivencia a una edad x es creciente conforme se suceden las generaciones, el denominador de [96] también aumentará en número de pagos esperado.

Para ver la situación desde la perspectiva de un individuo concreto, supóngase que una cabeza de edad $x=65$ años en la fecha de efecto de la prestación tiene derecho a percibir una pensión vitalicia anual de 15.919,54€. De acuerdo con las hipótesis actuariales indicadas, el valor actual actuarial de su estructura de prestaciones en ese instante sería de 255.268,24€, mientras que la percepción de esta cuantía durante 10 años da lugar a un valor actual actuarial de 136.143,41€. En el caso de proponer un porcentaje de intensidad $\gamma=10\%$ durante los dos primeros años, por aplicación de [95], tendríamos:

$$C = \frac{P_0 \cdot a_{x:n_1+n_2}^q}{(1+\gamma) \cdot a_{x:n_1}^q + \gamma \cdot a_{x:n_2}^q} = \frac{15.919,54 \cdot a_{65:10}^q}{1,1 \cdot a_{65:2}^q + 0,1 \cdot a_{65:8}^q} = 15.629,02\text{€}$$

Esto es, el beneficiario percibiría durante los dos primeros años 17.191,92€ anuales (1,1 x 15.629,02€), frente a un importe de 15.629,02€ anual los 8 ejercicios siguientes, todos ellos sujetos a la correspondiente revalorización.

Para la orfandad, bajo los mismos supuestos teóricos anteriores, aplicados aquí a los casos vitalicios que ven reconvertidas sus prestaciones en una renta temporal de 10 años de duración, el resultado para A medido en términos de valor actual actuarial sería del 20,4796% para la totalidad de esta clase. Las pensiones de carácter temporal no se verían afectadas por la medida, si bien la incorporación de un horizonte de 10 años para aquellas pensiones que por la aplicación de la edad máxima de percepción superen este límite, disminuiría el ahorro hasta dejarlo en el 11,3849%. En cuanto al favor de familiares, el tamaño muestral, los datos de la duración media de percepción hallados en este trabajo y el hecho de su carácter asistencial hacen que por prudencia obviemos aquí su valoración.

Una última cuestión en este entorno de trabajo viene de la consideración de la prestación ahora vitalicia como una prestación temporal inicial que recupera su condición de vitalicia (en la modalidad contributiva o en la no contributiva) transcurrido un tiempo y en base al cumplimiento de unos requisitos determinados; es decir, una prestación en suspenso durante un plazo determinado. Esta opción de trabajo no es desconocida en otros países y desde una perspectiva teórica tiene cierto sentido, pues compensa el daño inmediato y

mantiene una cobertura pospuesta para aquel momento en el que, generalmente por cuestiones de edad elevada, se presupone que el beneficiario tiene una mayor dificultad para la obtención de rentas propias o, en el caso no contributivo, si finalizada la pensión temporal el beneficiario es acreedor de protección asistencial. No es ésta una alternativa comúnmente utilizada en España, si bien la suspensión de prestaciones tampoco es una novedad. Sin embargo, lo cierto es que en nuestra Seguridad Social existe la protección desde una edad determinada a través de la pensión de jubilación, ya sea en la modalidad contributiva o en la no contributiva, y no hay una justificación técnica relevante para plantear una prestación que venga a cubrir este espacio una vez concluido el período de carencia más allá de la mejora de cuantías que ofrece el campo contributivo –en conjunción con las cuantías mínimas- frente a la modalidad no contributiva.

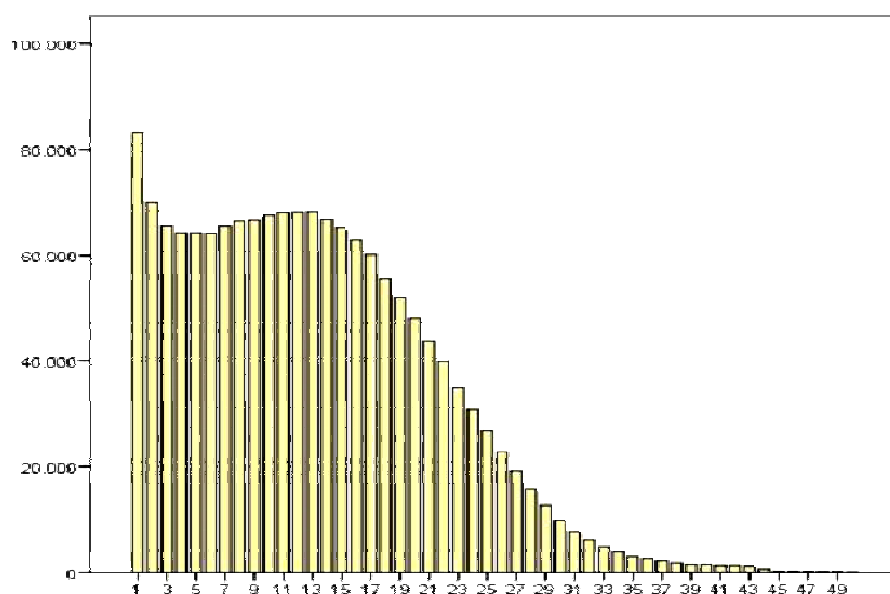
3.2. Las prestaciones consumidas

Esta alternativa de acción se estudió para la pensión de viudedad por Sanabria Borrego, M. y D. Hernández González (2010) y, posteriormente, por Hernández González, D. *et al.* (2011) y se basa en la relación entre una pensión derivada de un sujeto causante y la carrera de cotización de éste, quien, a su vez, era –o podía ser- perceptor de una pensión a cargo de esa misma estructura de ingresos. Así, las prestaciones consumidas serían aquellas que han sido disfrutadas por el sujeto causante previamente al acaecimiento del fallecimiento (principalmente la jubilación) y, por tanto, antes de la generación de beneficios en muerte y supervivencia. La pretensión de esta propuesta es transformar la pensión de viudedad sin que se produzcan sensibles incrementos de coste en la Seguridad Social en su conjunto, articulándose esta opción mediante dos bloques de acción: un primer segmento no contributivo que permitiría alcanzar una cuantía determinada mediante un complemento a mínimos a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y, por otro lado, un segmento contributivo que dependería de la estructura de cotizaciones vinculadas al sujeto causante y de sus prestaciones ya consumidas, cuya financiación corre a cargo de los Presupuestos de la Seguridad Social.

Por lo tanto, es una dinámica basada en la aceptación de una relación entre aportaciones y prestaciones a cargo de éstas y que se orienta principalmente a su aplicación a las pensiones de carácter vitalicio, manteniéndose al margen otras coberturas de naturaleza temporal. La adopción de una propuesta de este estilo acepta la redefinición del tipo general aplicable a las prestaciones afectadas, si bien tampoco es éste un argumento necesario.

Para el grupo de pensionistas de viudedad con el que trabajaron, Sanabria Borrego, M. y D. Hernández González (2010) encontraron un número estimado de años de prestaciones consumidas en situaciones de pasivo aproximadamente igual a 13 (que se incrementaba a 17,14 años si se consideraban como colectivo de partida sólo las altas ocurridas en el período de estudio: junio de 2010 – mayo de 2011). Entre sujeto causante y beneficiario los años consumidos de una pensión resultaban una media de 21,84 años (para la totalidad de las pensiones: causantes en activo y pasivo). El número de pensionistas según el número de años consumidos de prestación se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 62. Número de pensionistas por años de prestación consumida



Fuente: Sanabria Borrego, M. y D. Hernández González (2010). *Número de pensionistas* (ordenadas) y *Años de prestación consumida* (abscisas). Sujetos causantes procedentes de situación de pasivo.

Bajo este modelo la pensión del segmento contributivo se sigue calculando mediante la fórmula conocida [51], si bien se aplica un factor corrector en función de la parte de prestación previamente consumida por el sujeto causante fallecido. Si un individuo que fallece en situación de activo se propone la incorporación de los requisitos de carencia para la enfermedad común exigidos en la prestación de incapacidad permanente, así como el cálculo de la base reguladora de idéntica forma a como se hace en esta prestación. Para un sujeto causante que fallece en situación de pasivo por jubilación se aplica un factor corrector a la pensión inicial en función del número de años en que el causante haya previamente disfrutado de una prestación; en la jubilación anticipada o parcial el número de años de prestaciones consumidas computaría desde el inicio de la misma. Cuando el sujeto causante fallece en situación de pasivo por incapacidad el cómputo puede efectuarse desde el momento en que se adquiriera la edad general

correspondiente a la jubilación, si bien es factible establecer el mismo sistema que el planteado para el caso anterior y comenzar dicho cómputo desde el reconocimiento de la pensión correspondiente.

Al número de años enteros consumidos de prestación se le asigna un porcentaje de reducción sobre la pensión inicial de muerte y supervivencia y para la determinación del porcentaje θ aplicable a la pensión inicial existen distintas posibilidades. Por ejemplo, en Sanabria Borrego, M. y D. Hernández González (2010) se utilizó una expresión directamente aplicable a la base reguladora:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \theta = \frac{\alpha - \omega \cdot \frac{m}{c}}{100} & \theta > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{array} \right. \quad [97]$$

- m Tiempo de prestación efectivamente consumido en años
- c Tiempo efectivamente cotizado en años ($c > 0$)
- α Tipo máximo aplicable a la base reguladora. En general, 52 para viudedad
- ω Coeficiente de reducción. Propuesta basada en un valor de 105

mientras que en Hernández González, D. *et al.* (2011) se utilizó una reducción lineal del tipo aplicable con un máximo del 100%:

$$\theta = \left(1 - \frac{m}{M}\right), \quad M > 0 \quad [98]$$

- m Tiempo de prestación efectivamente consumido en años
- M Tiempo máximo de percepción a efectos del modelo en años

cuya concreción práctica con $M=30$ daba lugar a la siguiente tabla:

Tabla 11. Coeficientes aplicables en un modelo de prestaciones consumidas

Años	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3,33	6,66	10,00	13,23	16,67	20,00	23,33	26,67	30,00	33,33
Años	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	36,67	40,00	43,33	46,67	50,0	53,33	56,67	60,00	63,33	66,67
Años	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	70,00	73,33	76,67	80,00	83,33	86,67	90,00	93,33	96,66	100

Fuente: adaptada de Hernández González, D. *et al.* (2011). Valores para $\frac{m}{M}$. Porcentaje.

Así, en este modelo un sujeto causante que ha percibido 9 años una pensión de jubilación ha consumido un 30% de las prestaciones vinculadas a su cotización, quedando para la viudedad un porcentaje θ del 70%, aplicable a la cuantía inicial de la pensión calculada mediante la fórmula general.

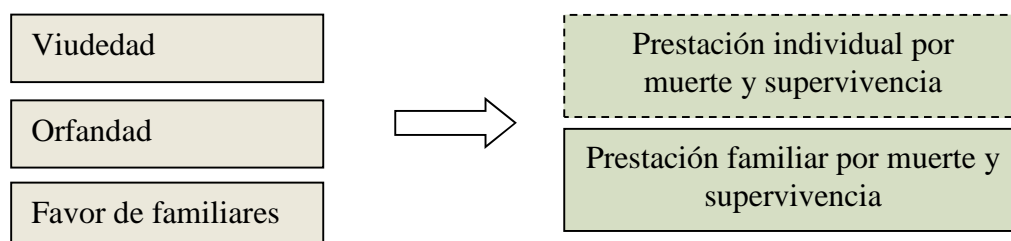
Bajo la aplicación de esta dinámica a los datos de la Seguridad Social utilizados (un único ejercicio) y en base a las altas de la pensión correspondientes, los autores obtuvieron una estimación de ahorro significativa en el modelo contributivo para sujetos causantes en situación de pasivo, el 43,65% de la pensión inicial más revalorizaciones, ahorro compensado en parte por los nuevos importes que se derivaban del modelo no contributivo para una cuantía mínima de 601,40€ por beneficiario, dando lugar a un escenario conjunto para la pensión de viudedad procedente de pasivo con un ahorro del 29,05% de su cuantía en el período anual considerado. A ello se le habría de sumar un ahorro adicional derivado de las reformas propuestas para los supuestos en los que el sujeto causante se encontraba en situación de activo a su fallecimiento (15,4% de la cuantía), con lo que el ahorro estimado total para la pensión de viudedad se estimó en el 26,81% de su cuantía en el período de estudio, dando así cuenta de la existencia de alternativas de acción que permiten mantener la prestación en la modalidad contributiva y fomentar el ahorro del conjunto del sistema.

3.3. Las prestaciones dentro de la unidad familiar

Tal y como se plantea en algunos países de la Unión Europea (véase capítulo II.2.1), las prestaciones de muerte y supervivencia podrían unificarse dentro de la unidad familiar existente tras el fallecimiento del sujeto causante, lo que supondría la concesión de una única prestación que también dependería, a efectos de cuantía, del número de componentes de la familia (y otras variables a considerar, si procede), configuración que en realidad no se encuentra muy alejada de la actual sin olvidar, como ya se ha indicado, que las prestaciones familiares vigentes tienen otra finalidad distinta; según Rodríguez Iniesta, G. (2009): "En las prestaciones de supervivencia se trata de paliar un defecto de rentas. Por el contrario en las de protección a la familia lo que se cubre es el exceso de gastos (...)". Junto a la concreción de argumentos en el plano de la propia Seguridad Social, esta alternativa encuentra cabida en la protección de la familia en los términos del artículo 39 de la Constitución Española al supeditar las contingencias actuales al núcleo familiar manteniendo los beneficiarios, con un espíritu similar al de una pensión no contributiva (en función del número de miembros) pero con importes basados en una modalidad contributiva, pues lo que se produce principalmente es una reordenación

jurídica. La unificación puede combinarse también con una indemnización a tanto alzado o con una prestación temporal para el beneficiario bajo el cumplimiento de unos requisitos mínimos de acceso, combinación simultánea o sucesiva en el tiempo.

Cuadro 25. Unificación de las prestaciones por muerte y supervivencia



A continuación señalamos alguna posibilidad de trabajo en el escenario de prestaciones conjuntas. Por ejemplo, puede proponerse la sustitución total del sistema actual por una prestación familiar conjunta o mantener el vigente –aunque con las modificaciones pertinentes- y combinarlo con una prestación familiar adicional. En la primera alternativa se asignan los porcentajes sobre una base reguladora en función del número de posibles beneficiarios, no como hasta ahora que se realiza primero en función de su naturaleza y con los límites correspondientes según el número; en la segunda alternativa el actual beneficiario de la viudedad sería acreedor de una prestación temporal y de una pensión familiar con un importe distinto a la primera mientras que, para los huérfanos o familiares con derecho a pensión, junto a ésta los beneficiarios serían acreedores de una prestación adicional derivada de la protección familiar. En Hernández González, D. *et al.* (2011) se encuentra una alternativa de estas características:

- Una prestación temporal de viudedad del 65% de la correspondiente base reguladora durante un período de treinta y seis mensualidades para el cónyuge y a partir de ese momento prestaciones a cargo del favor a familiares por el 25% de la base reguladora hasta el fallecimiento.
- Por otra parte, además de la pensión que correspondiese, desde el comienzo un 10% adicional de la base reguladora a repartir entre los huérfanos legales hasta la finalización de aquélla y un 10% adicional de la base reguladora a repartir entre los familiares que cumplan los requisitos establecidos, ya sea con carácter temporal o vitalicio.

Esto es, en su formalización teórica:

$$\text{Viudedad} \quad \alpha_1 \cdot B_r + \alpha_2 \cdot B_r$$

$$\alpha_1 \geq 52\% \geq \alpha_2$$

[99]

$$\text{Orfandad} \quad (20\% + \alpha_3) \cdot B_r$$

$$\text{Familiares} \quad (20\% + \alpha_4) \cdot B_r$$

B_r	Base reguladora
α_1	Tipo aplicable para el cálculo de la pensión para viudedad a conceder durante m meses
α_2	Tipo aplicable para el cálculo de la pensión para viudedad a conceder a partir del mes m
α_3	Tipo aplicable para el cálculo de la pensión adicional familiar para orfandad
α_4	Tipo aplicable para el cálculo de la pensión adicional familiar para familiares

Ojeda Avilés, A. (2008), basándose en el concepto de *überbrückungsfunktion* o 'función transicional' alemana, ya dejaba constancia de alternativas de acción específicas para la pensión de viudedad, por ejemplo, su supresión e integración en otras contingencias (incapacidad, vejez, familia, desempleo o subsidios por carencia de medios) cuando así procediese por cumplirse los requisitos inherentes a éstas. Efectivamente, si la cobertura ya es ofrecida por el sistema parece razonable acudir a ella y no otorgar una adicional que ocupe el mismo espacio de protección, aunque la sensibilidad práctica hacia el mantenimiento de ese mismo espacio de cobertura en dos vertientes distintas se pretendería justificar mediante la existencia de diferentes beneficios monetarios que favorecen a quienes reciben una mayor cuantía ante una situación equivalente de riesgo y de aportaciones realizadas.

4. LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA, ¿ES POSIBLE UN NUEVO PARADIGMA?

4.1. La cobertura no contributiva

En España, el sistema asistencial (también denominado universal) se articula en la Seguridad Social principalmente mediante prestaciones no contributivas y un complemento a mínimos de pensiones, financiados ambos mediante aportaciones del Estado; adicionalmente ya hemos dado cuenta en capítulos anteriores de la existencia de otros argumentos no contributivos que se manifiestan particularmente en las prestaciones de muerte y supervivencia y que se financian, sin embargo, a cargo de la modalidad contributiva. En otra esfera pública complementaria, los beneficios y rentas que se conceden en el ámbito autonómico o local pueden considerarse también instrumentos no contributivos que vienen a concretar el escenario de protección, aunque a cambio del fomento de la desigualdad de los españoles en materia social.

4.1.1. Prestaciones no contributivas y seguridad social

Las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social nacieron en el ordenamiento jurídico español mediante la ya derogada *Ley 26/1990 de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas*, como expresión significativa del principio de solidaridad que consolida los argumentos constitucionales recogidos en el artículo 41 CE, orientándose a personas sin recursos que, como pensionistas del sistema, percibirían de éste una prestación económica así como la posibilidad de disfrutar de derechos en asistencia médico-farmacéutica y servicios sociales. Estas prestaciones, que en la actualidad ya se encuentran recogidas en la LGSS, se pueden agrupar principalmente en los siguientes segmentos:

1. Pensiones no contributivas de invalidez y de jubilación

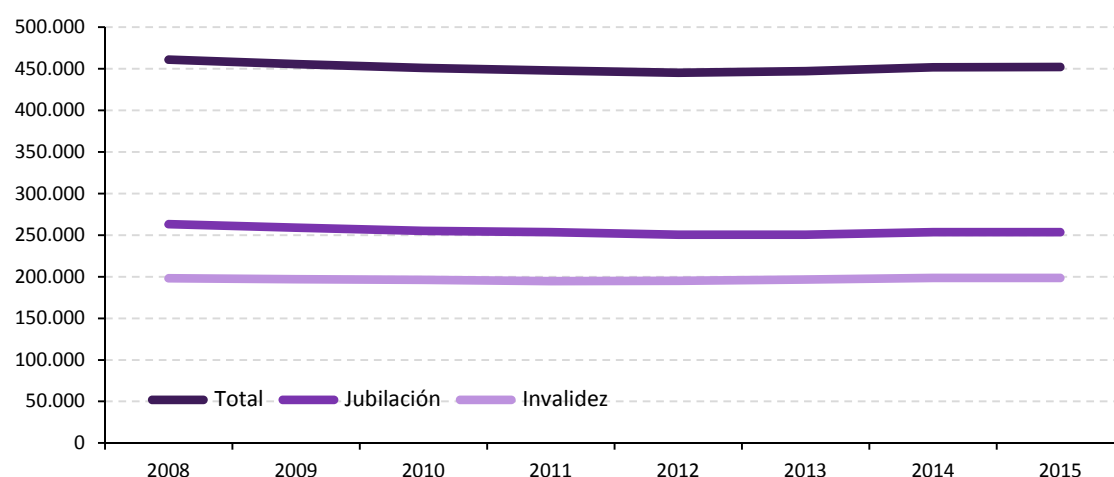
Para el año 2015 su cuantía queda fijada en 5.136,60€ íntegros anuales²²⁸, con un complemento de pensión de 525€ anuales cuando el pensionista acredite carecer de vivienda en propiedad y tener alquilada, como residencia habitual, una vivienda cuyo propietario no tenga con él relación de parentesco hasta tercer grado ni sea cónyuge o persona con la que constituya una unión estable y conviva con análoga relación de

²²⁸ Artículo 17 del *Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre*, y artículo 46 de la *Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015*.

afectividad a la conyugal. En las unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, solo podrá percibir el complemento el titular del contrato de alquiler o, de ser varios, el primero de ellos²²⁹. Por su parte, los pensionistas de invalidez no contributiva cuyo grado de invalidez sea igual o superior al 75% y acrediten necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida percibirán, además, un complemento del 50% de la cuantía anual fijada, dando lugar en 2015 a catorce pagas adicionales de 183,45€ (total anual adicional de 2.568,30€).

El número de pensiones no contributivas se ha mantenido estable en los últimos ejercicios, habiendo disminuido desde el año 2008 hasta agosto de 2015 un 1,9343%, situándose en esta fecha en 451.930. La evolución en el mismo período para las pensiones de invalidez ha sido del 0,3401% (198.557 pensiones en agosto de 2015), mientras que en jubilación ha sido del -3,6458% (253.373 en agosto de 2015).

Gráfico 63. Número pensiones no contributivas. Jubilación e invalidez

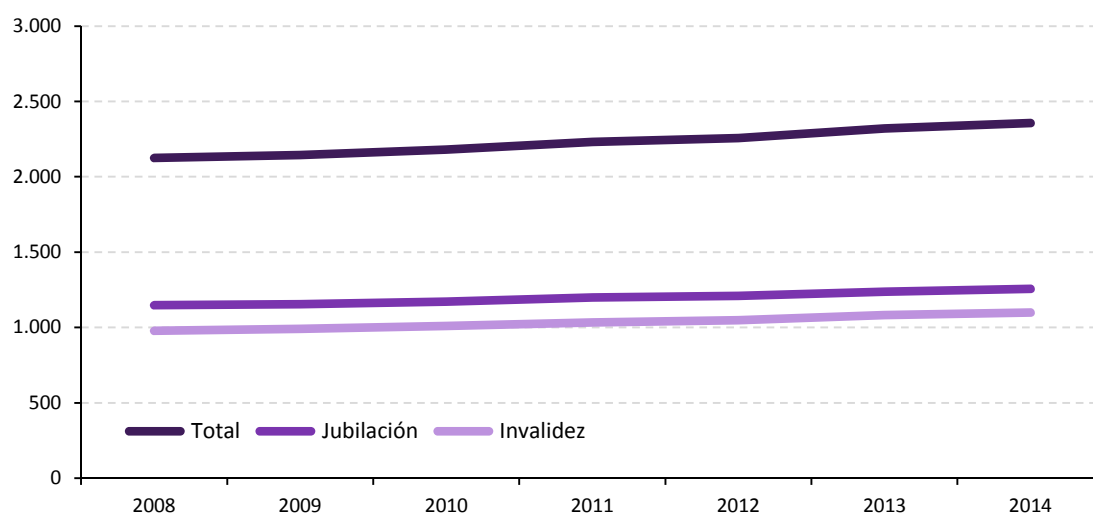


Fuente: elaboración propia con datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Año 2015, estimaciones a 1 de agosto.

El volumen de gasto total en pensiones no contributivas de invalidez y jubilación en el año 2014 fue de 2.354,90 millones de euros, de los cuales aproximadamente 1.255,67 millones correspondieron a la jubilación y 1.099,22 millones a invalidez.

²²⁹ Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, en los términos fijados en el artículo 46.2 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre.

Gráfico 64. Importe de la nómina de pensiones no contributivas. Jubilación e invalidez



Fuente: elaboración propia con datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Millones de euros.

2. Prestaciones familiares. El artículo 181 de la LGSS las define como²³⁰:

- Una prestación en forma de pago único por parto o adopción múltiples. La cuantía depende del número de hijos por cada acción, siendo 4 veces el salario mínimo interprofesional en el caso de 2 hijos, 8 veces el salario mínimo interprofesional en el caso de tres hijos y 12 veces el salario mínimo interprofesional para un número de hijos superior.
- Un pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y madres con discapacidad. Para 2015, la cuantía es de 1.000€.
- Una asignación económica por cada hijo menor de 18 años o mayor de dicha edad y discapacitado, así como por los menores acogidos, en acogimiento familiar, permanente o *preadoptivo*. La cuantía para el año 2015 será de 291€ anuales por hijo o, para un hijo mayor de 18 años y discapacidad, 1.000€ cuando éste tenga un grado de discapacidad al menos del 33%, de 4.402,80€ cuando esté afectado por una discapacidad al menos del 65% y de 6.604,80€ cuando la discapacidad sea al menos del 75% y, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida.

²³⁰ La prestación económica general por nacimiento o adopción de hijo fue suprimida, con fecha de efecto 1 de enero de 2011, por el artículo 7 del *Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público*.

Según se recoge en CES (2014), estas prestaciones familiares: “no parecen estar concebidas como garantía de ingresos mínimos sino más bien como complemento de otros ingresos”.

3. Prestaciones de maternidad no contributiva

La LGSS considera situaciones protegidas, a efectos de la prestación por maternidad, la propia maternidad, la adopción y el acogimiento familiar, durante los períodos de descanso que por tales situaciones se disfruten de acuerdo con el artículo 48.4 del *Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores*, y el artículo 30.3 de la *Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública*. Junto a una alternativa basada en la exigencia de períodos mínimos de cotización (excepto para menores de 21 años), se reserva una opción especial no contributiva (a los efectos del artículo 86 de la LGSS) sin tales requerimientos de cotización en caso de maternidad por parto de las trabajadoras por cuenta ajena, con una prestación del 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) o de la base reguladora correspondiente a incapacidad temporal por contingencias comunes si ésta fuese inferior, durante un período de 42 días naturales a contar desde el parto o 56 días naturales en caso de nacimiento de hijo en una familia numerosa o en la que, con tal motivo, adquiera dicha condición, o en una familia monoparental, o en los supuestos de parto múltiple, o cuando la madre o el hijo estén afectados de discapacidad en un grado igual o superior al 65%.

4. Prestaciones asistenciales por desempleo. Según el artículo 206 de la LGSS estas prestaciones son:

- Un subsidio por desempleo.
- El abono, cuando corresponda, de la cotización a la Seguridad Social correspondiente a la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio por desempleo en los supuestos establecidos en el artículo 218 de la LGSS (que giran alrededor de un criterio de edad: 55 años).
- El derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria y, si procede, a las prestaciones familiares, en las mismas condiciones que los trabajadores incluidos en algún régimen de Seguridad Social.

Este modelo de protección se completa con otro tipo de prestaciones como el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), al que hemos hecho referencia en el capítulo II,

y otras acciones que tienen como objetivo la lucha contra la exclusión social. Según se recoge en CES (2014), dentro de la iniciativa estatal tendríamos, entre otras²³¹: las antiguas pensiones asistenciales (PAS), el subsidio de garantía de ingresos mínimos de la Ley de Integración Social del Minusválido, las ayudas económicas dirigidas a las víctimas de violencia de género (*sic.*), la Renta Activa de Inserción o el Programa de recualificación de personas que agotan la protección por desempleo, mientras que desde la perspectiva de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos se encontrarían: las rentas mínimas de inserción, las prestaciones económicas para personas dependientes y otras prestaciones de distinta naturaleza. Así, por ejemplo, fuera de la Seguridad Social tendríamos el sistema especial de prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad establecido en el artículo 8 del *Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social*. La disposición adicional sexta del *Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre*, fija la cuantía del subsidio de movilidad y compensación de gastos de transporte en 63,10€/mes. Sin embargo, los criterios propuestos en CES (2014) no incluyen en este modelo asistencial las cuantías del sistema de dependencia pues, a su juicio:

No cabe calificar como asistencial una prestación que, por el contrario, se configuró en su día como un derecho subjetivo y universal y que no va encaminada tanto a proporcionar rentas de subsistencia a sus beneficiarios (otrora perceptores en su mayoría de pensiones de jubilación) como a proveer la prestación de servicios de cuidados de larga duración distintos de los que dispensa el propio sistema. Y ello, pese a que se consideren las rentas de las familias a la hora de determinar el alcance o la cuantía de la protección.

En definitiva, un modelo muy complejo y fragmentado tanto en la cobertura como en la gestión²³². Centrándonos en el ámbito de la Seguridad Social, para cumplir su función y

²³¹ González Ortega, S. *et al.* (2012) hablan de *asistencialidad* (*sic.*) en el artículo 97 del Código Civil y la pensión compensatoria, argumento que no es compartido de forma unánime por la comunidad científica, por ejemplo, Fernández Domínguez, J.J. y M.R. Martínez Barroso (2011) indican que la pensión no se destina a situaciones de necesidad, sino a compensar el desequilibrio económico en relación con la posición del otro.

²³² Véase también la disposición adicional decimotercera de la *Ley 27/2011, de 1 de agosto*, mediante la que "Se faculta al Gobierno para reforzar, desde la vertiente no contributiva, las pensiones de los mayores que viven en unidades económicas unipersonales, sin hacer distinciones por razón de la contingencia protegida." y la disposición adicional vigésima primera de la misma ley, en la que se recoge que "El Gobierno, en el plazo de seis meses, realizará los estudios pertinentes que permitan delimitar los umbrales de pobreza, con arreglo a los criterios fijados por la Unión Europea, al objeto de reorientar las políticas públicas dirigidas a su erradicación. Asimismo, en el plazo de un año, el Gobierno aprobará un Proyecto de Ley de reordenación integral de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, con el objetivo de mejorar su cobertura, establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección en orden a colmar

objetivos las prestaciones no contributivas han de tener una cuantía mínima, pero a la vez una limitación máxima para eludir la injusticia social y económica que surge de otorgar irrelevancia al esfuerzo contributivo realizado, situación que además fomenta la sensibilidad hacia la evasión de aportaciones. Para la realización de tales contribuciones es generalmente necesario el desempeño de una actividad profesional que, independientemente de sus beneficios, genera también un indudable sacrificio por parte del trabajador, sometido a riesgos para su persona en su ocupación laboral. Este esfuerzo ha de ser reconocido y no debería ser admisible que exista un trato favorable hacia quien no lo realiza en detrimento del que sí lo hace pues, entre otras cosas, con ello se favorece la competencia por los recursos entre distintos grupos y segmentos de población. Ahora bien, también es cierto que existen diferencias entre las distintas situaciones susceptibles de cobertura mediante la modalidad no contributiva, lo que permite un diseño adaptable según la necesidad estimada, aunque han de existir límites a la dispersión para evitar una fragmentación absoluta del sistema que en realidad no hace más que fomentar el desequilibrio en términos sociales. Adicionalmente, el concepto de necesidad sobre el que se asientan las prestaciones contributivas se diluye cuando éstas se mueven dentro de un entorno de compatibilidad de rentas; es verdad que la necesidad se puede concretar en distintos grados y no tendría que ser primordial llegar a un grado absoluto de indigencia para ser beneficiario de una prestación no contributiva pero, por el contrario, la compatibilidad promueve situaciones de desigualdad con quienes realizan el esfuerzo contributivo y favorece la ineficiencia y la desnaturalización de determinadas prestaciones.

Por todo ello, no es fácil delimitar las fronteras de lo que debe ser realmente un sistema no contributivo, aun cuando actualmente dos son los principales requisitos que la Seguridad Social impone para el acceso al mismo: la residencia y la carencia de suficientes recursos.

A) Residencia en territorio nacional

Esta exigencia se concreta expresamente para las pensiones de invalidez, de jubilación y las prestaciones familiares por hijo o menor a cargo en la residencia legal en territorio español. En el primer caso es necesaria la residencia durante un plazo de cinco años, de los cuales dos han de ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión, mientras que para la jubilación no contributiva se exige que se haya residido durante diez años entre la edad de dieciséis años y la

lagunas de cobertura que se detectan en el sistema". Nada se sabe a fecha de hoy sobre este proyecto de reordenación legislativo.

edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación. En las asignaciones económicas por hijo o menor acogido a cargo, se requiere que los hijos o menores de referencia también residan en territorio español.

B) Carencia de recursos suficientes

De cara a las pensiones de invalidez y jubilación se considera que no existen rentas o ingresos suficientes cuando, en cómputo anual, su suma es inferior al importe anual de la prestación recogida en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si el solicitante convive con otras personas en una misma unidad económica, el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes se cumple cuando la suma de los ingresos de todos los integrantes de la unidad económica es inferior al límite anual de acumulación de recursos L , que se calcula mediante la suma de la pensión y del resultado de multiplicar el 70% de la misma por el número de convivientes menos uno:

$$L = P \cdot [1 + 0,7 \cdot (n - 1)] \quad [100]$$

P Importe anual de la pensión

n Número de convivientes

Si la convivencia en una misma unidad económica se produce entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes en primer grado, el nuevo límite de acumulación de recursos L' será equivalente a dos veces y media el calculado mediante [100]:

$$L' = 2,5 \cdot L \quad [101]$$

Tabla 12. Límites que determinan la carencia de suficientes recursos. Año 2015

	Convivencia con cónyuge o parientes consanguíneos de segundo grado	Convivencia con algún pariente consanguíneo de primer grado
2 convivientes	8.732,22 euros/año	21.830,55 euros/año
3 convivientes	12.327,84 euros/año	30.819,60 euros/año
4 convivientes	15.923,46 euros/año	39.808,65 euros/año
5 convivientes	19.519,08 euros/año	48.797,70 euros/año

Las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impiden el ejercicio de actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo, con las particularidades en la compatibilidad recogidas en el artículo 147 de la *LGSS*. Con ello se da lugar a la desnaturalización de la esencia de una cobertura por invalidez cuya finalidad había sido compensar la imposibilidad constatada de desempeñar una labor profesional generadora de rentas propias.

En las pensiones familiares, excepto para la prestación por parto o adopción múltiples, la carencia de ingresos suficientes supone que no se perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores (en 2015) a 11.547,96€, cuantía que se incrementará en un 15% por cada hijo o menor acogido a cargo, a partir del segundo y éste incluido. En el caso de familias numerosas los límites son 17.380,39€ en los supuestos en que concurren tres hijos a cargo, incrementándose en 2.815,14€ por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido. Para el pago a tanto alzado por nacimiento o adopción y en el supuesto de convivencia del padre y de la madre, si la suma de los ingresos percibidos por ambos supera los límites establecidos no se reconocerá la condición de beneficiario a ninguno de ellos²³³.

Para el desempleo profesional la regla general establece la prohibición de obtención de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias²³⁴.

Junto a los requisitos generales, existe otra serie de exigencias particulares para cada una de las prestaciones existentes conforme a su particular naturaleza, de entre las que aquí citamos:

- a) En la pensión de jubilación el beneficiario tiene que tener al menos una edad de sesenta y cinco años.
- b) En la pensión de invalidez el beneficiario ha de ser mayor de dieciocho años y menor de sesenta y cinco, con un grado de incapacidad o enfermedad crónica de, al menos, el 65%. Ese grado se determinará mediante la aplicación de un baremo en el que computan los factores físicos, psíquicos o sensoriales del teórico

²³³ Para otros criterios al respecto de las prestaciones familiares véanse los artículos 182 a 188 de la *LGSS*.

²³⁴ Artículo 215 de la *LGSS*.

beneficiario, pero también factores sociales complementarios, dando cuenta así de una estructura asistencial intensificada.

- c) Para la prestación por parto o adopción esta situación ha de ocasionar, al menos, la incorporación de dos nuevos miembros a la familia.
- d) Para la prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo en las circunstancias familiares marcadas por la ley, el nacimiento o adopción de un hijo en España; además, ni el padre ni la madre han de tener derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social.
- e) En las prestaciones familiares el sujeto causante no perderá la condición de hijo o de menor acogido a cargo por el hecho de realizar un trabajo lucrativo siempre que continúe viviendo con el beneficiario y que sus ingresos anuales, en concepto de rendimientos del trabajo, no superen el 100% del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.
- f) En el desempleo, además de los requisitos acerca de la carencia de renta, la casuística es bastante más compleja al existir distintas caracterizaciones de los posibles beneficiarios:
 - f1) Quienes figuren inscritos como demandantes de empleo durante un mes sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones²³⁵:

²³⁵ Antes de su derogación por el *Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad*, se incluía a los desempleados mayores de 45 años en la fecha en que hubieran agotado un derecho a prestaciones por desempleo de 720 días de duración, que cumpliesen todos los requisitos genéricos establecidos en el apartado f1), excepto el relativo al período de espera, quienes tendrían derecho a un subsidio especial previo a la solicitud del subsidio por desempleo general siempre que no hubiesen generado derecho a una nueva prestación de nivel contributivo o no tuviesen derecho al subsidio previsto en f3). Sin perjuicio de ello, si se reunían los requisitos genéricos exigidos, los mayores de 45 años para los que se extinguiese la relación laboral siendo trabajadores fijos discontinuos y hubiesen agotado una prestación por desempleo de cualquier duración, aunque con posterioridad a dicho agotamiento y antes de la extinción de la relación laboral hubieran percibido subsidio por desempleo en los períodos de inactividad productiva, tendrían derecho al subsidio siempre que hubieran cotizado como fijos discontinuos un mínimo de 9 años a lo largo de su vida laboral. La disposición transitoria cuarta del *Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio*, mantuvo la aplicación de las prestaciones aquí indicadas para los desempleados mayores de 45 años que hubieran agotado la prestación por desempleo de carácter contributivo de 720 días antes del 15 de julio de 2012.

- Haber agotado la prestación por desempleo y tener responsabilidades familiares o, sin tener éstas, ser mayor de cuarenta y cinco años de edad en la fecha en que se agotó la prestación.
- Ser trabajador español emigrante que ha retornado de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, o con los que no exista convenio sobre protección por desempleo, que acredite haber trabajado al menos doce meses en los últimos seis años en dichos países desde su última salida de España y no tenga derecho a la prestación por desempleo.
- Haber sido liberado de prisión y no tener derecho a la prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a seis meses, con las extensiones que recoge el artículo 215.1.d) de la *LGSS*.
- Haber sido declarado plenamente capaz o inválido en el grado de incapacidad permanente parcial para la profesión habitual como consecuencia de la revisión por mejoría de una situación de invalidez en los distintos grados de incapacidad permanente o de gran invalidez.

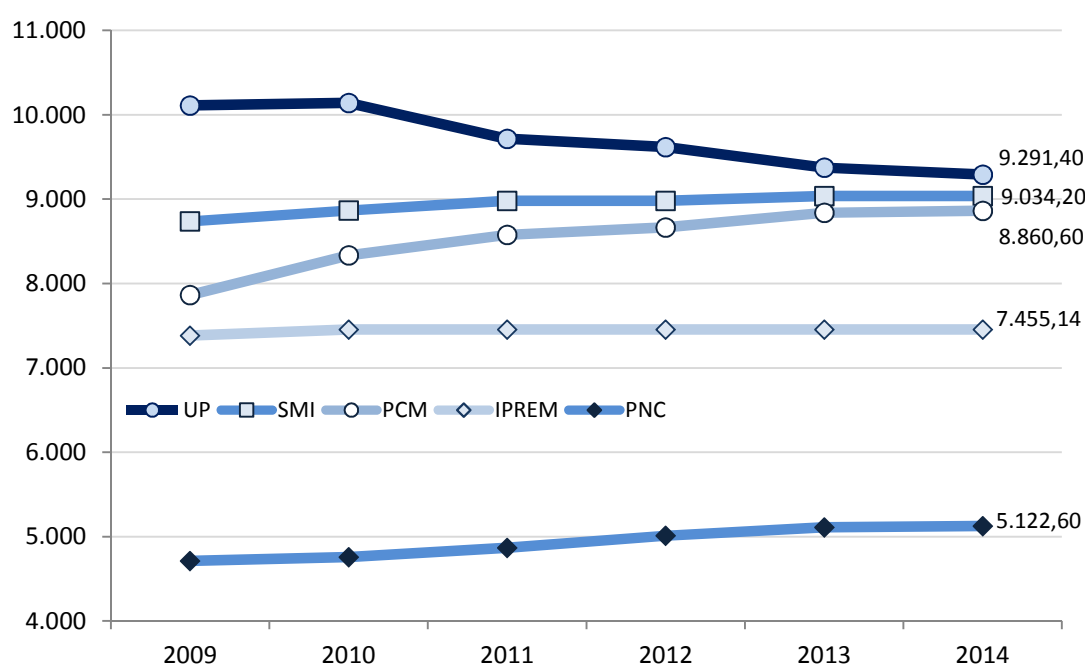
f2) Parados que, cumpliendo los requisitos genéricos del apartado anterior, salvo el relativo al período de espera, se hallen en situación legal de desempleo y no tengan derecho a la prestación contributiva por no haber cubierto el período mínimo de cotización exigido, pero hayan cotizado al menos tres meses si tienen responsabilidades familiares o un mínimo de seis meses en otro caso.

f3) Trabajadores mayores de 55 años que se encuentren en alguno de los supuestos genéricos contemplados en los apartados anteriores, hayan cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en la Seguridad Social. Si se carece de rentas, se tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores incapacitados o menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

En definitiva, el modelo no contributivo es un sistema complejo, con una abrumadora dispersión y una amplia casuística en la que el requisito de carencia de rentas se diluye puesto que el planteamiento utilizado en la práctica se corresponde con un modelo de compatibilidad en el que no debería ser extraño tener en cuenta las palabras de Meil

Landwerlin, G. (2003): "En la compensación del estado de necesidad no resulta coherente la compatibilidad absoluta". De cara a la interpretación de la cobertura global en términos económicos, a continuación se presenta un resumen de la evolución de aspectos significativos en el campo asistencial de carácter estatal. Se puede apreciar que todas las variables expuestas se encuentran por debajo del denominado *umbral de la pobreza*, si bien este umbral tiene unas características en su definición que nos hacen ser críticos en cuanto a su concepción metodológica y a su utilidad como instrumento para la toma de decisiones.

Gráfico 65. Evolución de parámetros de cobertura en el campo asistencial



Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (*Encuesta de Condiciones de Vida*) y de la Seguridad Social (*Proyecto de Presupuestos año 2016*).

UP: Umbral de pobreza para un hogar con una persona. Alquiler imputado. El umbral de pobreza es el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo (escala OCDE modificada).

SMI: Salario Mínimo Interprofesional.

PCM: Pensión contributiva mínima de jubilación para una unidad unipersonal.

IPREM: Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.

PNC: Pensión no contributiva sin complemento por vivienda ni por ayuda por tercera persona.

Aun así, los valores mostrados pueden ser suficientes para acometer de una forma realista y objetiva un estudio sobre las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social que tenga en cuenta sus objetivos, su función y sus cuantías, pero también su incardinación en un modelo de protección más amplio en el que se complementa con otras coberturas de muy distinta índole.

4.1.2. El complemento a mínimos

Los beneficiarios de pensiones contributivas de la Seguridad Social tienen derecho a percibir un complemento para alcanzar las cuantías mínimas establecidas en los Presupuestos Generales del Estado siempre que:

- a) Residan en territorio español.
- b) No perciban rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, o que, percibiéndolos y deducidos en cada caso los que permita la legislación fiscal, no excedan de la cuantía anualmente establecida en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado: 7.098,43€ para el años 2015²³⁶.

Filosóficamente el complemento a mínimos da lugar a una pensión mínima y en teoría cumple una función de lucha contra la exclusión y la pobreza, configurándose como un elemento de carácter asistencial que no tiene en cuenta el esfuerzo contributivo realizado por el sujeto causante. Para Argandoña, A. *et al.* (2013) las pensiones mínimas “garantizan un nivel de vida mínimo para los mayores y son uno de los componentes básicos de los Estados del Bienestar. Pero tienen el inconveniente de que crean desincentivos para el trabajo, porque garantizan un nivel de consumo mínimo con independencia de cuál haya sido el historial laboral de las personas y, por lo tanto, de sus aportaciones a la financiación de las pensiones y de los bienes públicos en general”. Los complementos a mínimos son absorbibles y no consolidables y su importe se encuentra limitado en cada ejercicio por la cuantía establecida para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva²³⁷. La dependencia económica se define mediante la concurrencia de las siguientes circunstancias:

²³⁶ Artículo 45 de la *Ley 36/2014, de 26 de diciembre*. El concepto de las rentas se supedita al contenido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el cómputo al artículo 50 de la *LGSS*. A los únicos efectos del complemento a mínimos se equiparán a *ingresos de trabajo* las pensiones públicas que no estén a cargo de un régimen público básico de previsión social.

²³⁷ Cuando exista cónyuge a cargo del pensionista, el complemento no podrá rebasar la cuantía que correspondería a la pensión no contributiva para las unidades económicas en las que concurren dos beneficiarios con derecho a pensión. De cara al complemento a mínimos se presumirá la convivencia siempre que se conserve el vínculo matrimonial, salvo separación judicial o comprobación en contrario, y se considerará que existe cónyuge a cargo de un pensionista cuando aquél conviva con éste y dependa económicamente de él; si existe convivencia pero no dependencia económica se habla de existencia de cónyuge no a cargo y, en otro caso, de unidad económica unipersonal.

Cuando la pensión de orfandad se incremente en la cuantía de la pensión de viudedad, el límite de la cuantía de los complementos a mínimos sólo quedará referido al de la pensión de viudedad que genera el incremento de la pensión de orfandad.

- a) Que el cónyuge no sea titular de una pensión a cargo de un régimen público básico de previsión social²³⁸.
- b) Que los rendimientos por cualquier naturaleza del pensionista y de su cónyuge resulten inferiores a 8.280,40€ anuales (año 2015).

Si la suma anual de los rendimientos y del importe anual de la pensión a complementar resultase inferior a la suma de 8.280,40€ y de la cuantía anual de la pensión mínima con cónyuge a cargo correspondiente, se reconocerá un complemento igual a la diferencia, distribuido entre el número de mensualidades que corresponda.

Los datos básicos generales de los complementos a mínimos desde el ejercicio 2010 en cuanto a gasto total, aportaciones estatales y número de pensiones con estos complementos, son los que se muestran a continuación²³⁹:

Tabla 13. Datos básicos de los complementos a mínimos (C_m) en España

Año	Cm	Transferencias Corrientes	%Cm / Gasto SS	Nº pensiones
2010	6.997,43	2.706,35	5,50%	2.413.623
2011	7.496,46	2.806,35	6,09%	2.446.687
2012	7.472,36	3.806,35	6,12%	2.495.282
2013	7.532,76	7.895,33	5,89%	2.499.831
2014	7.492,75	7.538,28	5,74%	2.506.629
2015	7.563,02	7.563,02	5,56%	2.490.023

Fuente: *Informe Económico financiero. Proyecto de Presupuestos para el año 2016*. Año 2015, estimaciones. Porcentaje sobre el Gasto total de la Seguridad Social y número de pensiones con complementos a mínimos (a julio de 2015). Nótese que la fuente informa de transferencias corrientes para financiar complementos a mínimos de pensión (*Informe Económico Financiero Cuadro II.4.*) y del gasto en los complementos a mínimos (*Informe Económico Financiero Cuadro IV.42*), con importes divergentes. Millones de euros.

Los pensionistas de gran invalidez que tengan reconocido el complemento destinado a remunerar a la persona que le atiende no resultarán afectados por los límites establecidos.

²³⁸ Incluidas las pensiones reconocidas por otro Estado, los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, ambos previstos en el *Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social*, y también las pensiones asistenciales reguladas en la *Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos Nacionales para la aplicación social del Impuesto y del Ahorro*.

²³⁹ Según la disposición adicional duodécima de la *Ley 27/2011, de 1 de agosto*: "El Gobierno buscará fórmulas que hagan compatibles los objetivos de consolidación y estabilidad presupuestaria con los de plena financiación de las prestaciones no contributivas y universales a cargo de los presupuestos de las Administraciones Públicas, con especial interés en el cumplimiento de los compromisos de financiación mediante impuestos de los complementos a mínimos de pensiones". Tal y como estaba previsto, desde el ejercicio 2013 las aportaciones del Estado financiarían la totalidad de los complementos a mínimos.

4.1.3. Argumentos no contributivos financiados por la modalidad contributiva

A lo largo de este trabajo hemos dado cuenta de distintas situaciones dentro de las prestaciones de muerte y supervivencia en las que, aun cuando la financiación corre a cargo de la modalidad contributiva, existen componentes asistenciales que determinan un modelo híbrido y desnaturalizado, complejo de aceptar sin reservas; en tales situaciones, ya sea en la concesión o en la determinación de la cuantía de la prestación, priman las características de los beneficiarios sobre las características o el esfuerzo contributivo realizado por los sujetos causantes. Frente a los aspectos de corte más contributivo contenidos en la base reguladora, de las exigencias de cotización y de la compatibilidad de rentas, son argumentos de carácter asistencial, por ejemplo, aquellos que se centran en la carencia de recursos del beneficiario o en su situación de dependencia económica del sujeto causante. Para su determinación es habitual establecer reglas de comprobación de este estado o una presunción sobre el mismo atendiendo a otras particularidades como la convivencia, la discapacidad o la edad, en definitiva, argumentos que no tienen relación con el esfuerzo contributivo realizado por el sujeto causante.

De forma sucinta, en el caso particular de las pensiones de viudedad estos componentes no contributivos se manifiestan en los porcentajes especiales aplicables a la base reguladora que la ley establece para algunos riesgos que considera agravados en términos sociales. También existen elementos asistenciales en los criterios de dependencia económica exigidos a las parejas de hecho para el acceso a la pensión. Por su parte, en la pensión de orfandad se encuentra la concesión de distintas duraciones según la discapacidad del beneficiario así como, desde cierta perspectiva, la protección de los hijos aportados a la unión por el supérstite. En cuanto a las pensiones en favor de familiares, no es necesaria una amplia exposición de motivos pues ya se ha visto que el propio artículo 176 de la *LGSS* establece como requisito para la concesión un criterio eminentemente asistencial: la dependencia económica del sujeto causante; en sí mismas, las prestaciones a favor de familiares, independientemente de su duración, son esencialmente asistenciales. Las pensiones de muerte y supervivencia manifiestan así una estructura mixta mediante la que se recurre en ocasiones a una relación de dependencia económica entre sujeto causante y beneficiario, es decir, se alejan del criterio de equidad contributiva que generalmente no tiene en cuenta la existencia de una situación de necesidad económica en el beneficiario ni la inexistencia de rentas propias suficientes tras la muerte del sujeto causante, y que prima la función compensatoria frente a la cobertura de estados de insuficiencia de medios.

En buena lógica la necesidad económica debería tener en cuenta la renta y el patrimonio del beneficiario (no solamente la primera y dentro de ésta no sólo a la generada por el trabajo), pero esto nos llevaría inmediatamente a la cuestión del endeudamiento, que genera necesidades para satisfacer los pagos futuros que cancelen el mismo y que a la muerte del causante pueden subsistir en el entorno familiar. Ahora bien, el endeudamiento tiene un determinado componente voluntario que nace normalmente de una decisión libre del individuo o de la unidad familiar y, por otro lado, existen también opciones de protección contra el riesgo de fallecimiento y sus consecuencias sobre el patrimonio como, por ejemplo, los seguros de fallecimiento ligados al capital pendiente de amortizar en un préstamo hipotecario. El endeudamiento tiene como contrapartida un activo que ha sido disfrutado en algún momento del tiempo, es decir, forma parte de un escenario de derechos y obligaciones que, además, es susceptible de desajuste en su hipotético vínculo con una prestación de seguridad social. Por ello, hay suficientes argumentos para no recurrir al endeudamiento como variable de referencia sin que se tenga en cuenta como contrapartida el activo que le corresponde. La evaluación de la situación de necesidad económica durante la vigencia de la prestación si se acepta tal necesidad como elemento discriminador del derecho a la misma es consistente con los argumentos que se utilizan, valorándose positivamente dentro de esta opción la limitación de la pensión si se supera el umbral de necesidad puesto que en este supuesto tal situación ya no existe.

Por otro lado, la determinación del concepto de renta y/o patrimonio computable es siempre compleja, ya que las posibilidades razonables son múltiples, aunque al final lo cierto es que se presenta un escenario dicotómico en el que el beneficiario está o no está en situación de necesidad a efectos de la Seguridad Social²⁴⁰. En la cuantificación del límite de rentas una de las posibilidades ya la aporta el propio sistema de seguridad social español cuando establece las cuantías de prestaciones no contributivas a percibir en cada ejercicio. Si éste es el límite que plantea el legislador como mínimo asistencial suficiente para casos de necesidad, conceptualmente es una referencia válida para su utilización como límite de rentas en un sistema de compatibilidad de las mismas.

²⁴⁰ Sobre el límite de rentas, en Hernández González, D. (2009): "Prestaciones no contributivas de invalidez: el límite de ingresos y la equivalencia actuarial". *Economía Española y Protección Social*, nº I. se analizan las prestaciones no contributivas y la distribución de los ingresos mediante una renta actuarial para evitar los posibles desajustes derivados de pequeñas cuantías de carácter extraordinario y no recurrente.

4.2. Las prestaciones de muerte y supervivencia en el ámbito asistencial

La redefinición de las pensiones no contributivas, tanto en su filosofía como en sus cuantías, es un debate que siempre permanece abierto. Estas pensiones, sobre las que debería girar la ausencia de recursos como elemento básico e imprescindible, han aceptado las “políticas sociales” en las que otros factores vienen a ganar relevancia en la configuración administrativa y legislativa, donde esa ausencia de recursos va perdiendo peso. Así, equivocadamente en nuestra opinión, se van asimilando otras características del individuo: *sexo, discapacidad, etnia*, etc. como símbolo de necesidad, incluso preeminente sobre las condiciones económicas y los recursos existentes.

Una de las posibles reformas de las prestaciones de muerte y supervivencia es su total traslado hacia la modalidad no contributiva, haciendo que únicamente las personas que se encuentran en las situaciones de teórica necesidad que marque la legislación y a su vez cumplan otros requisitos como la residencia durante un período determinado sean posibles beneficiarios de la misma. Aunque centrados principalmente en la pensión de viudedad, González Ortega, S. *et al.* (2012) indicaban que podría entenderse una prestación de carácter universal o sólo para quienes no pueden alcanzar los requisitos de la modalidad contributiva, mientras que Gorelli Hernández, J. (2005) expuso que “es conveniente una nueva configuración de la prestación en clave de asistencialidad”. En cuanto a la recuperación de la dependencia económica como criterio general de acceso a la pensión, éste ha sido valorado, entre otros, por Kahale Carrillo, T.D. (2011). Finalmente, Valenciano Sal, A. (2011) expuso que: “el objetivo principal del legislador debería ser proporcionar a quien se encuentre en una situación de necesidad real, sea cual sea la contingencia que haya producido esa situación y no, mantener prestaciones/pensiones que fomentan relaciones de dependencia inter-personales y posteriormente, dependencia entre personas y Estado”.

Argumentos de este estilo también han aparecido, como ya hemos visto en el capítulo II, en diferentes acuerdos sociales y renovaciones del Pacto de Toledo. Así, el *Acuerdo sobre medidas en materia de seguridad social, de 13 de julio de 2006*, ya manifestaba que “la pensión de viudedad debe recuperar su carácter de renta de sustitución y reservarse para aquellas situaciones en las que el causahabiente contribuía efectivamente al sostenimiento de los familiares supérstites”. Por su parte, el *Informe de Evaluación y reforma del Pacto de Toledo de 2011* proponía mantener el carácter contributivo de las prestaciones y que cualquier modificación no debería modificar esta naturaleza pero, sorprendentemente, planteaba a la vez medidas basadas en criterios específicos de carácter asistencial: *edad, renta, hijos*, etc., paradoja de la que nacería una propuesta de

aplicación de porcentajes especiales para personas mayores de 65 años en riesgo estimado de pobreza. Más recientemente el planteamiento no contributivo para las pensiones de viudedad ha sido citado incluso en sede parlamentaria dentro del debate de otras iniciativas como el factor de sostenibilidad²⁴¹.

Esta alternativa de transformación hacia la modalidad no contributiva supone la sumisión a dos criterios fundamentales que son los que gravitan a día de hoy sobre la misma: la residencia legal durante un período de tiempo y la carencia de ingresos, con dos argumentos fundamentales de apoyo a esta medida; en primer lugar, el enfoque económico y la incidencia en la sostenibilidad de la Seguridad Social y, en segundo lugar, la eliminación de las múltiples ineficiencias que las prestaciones contributivas de muerte y supervivencia presentan en la actualidad. Este planteamiento no requiere entonces una gran incidencia en los aspectos paramétricos y es eminentemente de carácter estructural.

Una primera cuestión que debe abordarse es cuál debería ser la cuantía de las pensiones de muerte y supervivencia en un modelo no contributivo. En el ejercicio 2015 la cuantía anual general establecida para las pensiones vitalicias de jubilación e invalidez es de 5.136,60€ anuales (366,90€ al mes en 14 pagas), cuantía que el Estado propone como cobertura de las necesidades mínimas en el régimen básico de pensiones públicas²⁴². Pues bien, si las pensiones vitalicias por muerte y supervivencia se considerasen como pensiones no contributivas no hay razón para establecer una cuantía o unas reglas diferentes a las aquí indicadas, eliminando con ello las particularidades actuales existentes en los importes y complementos a mínimos establecidos dentro de la modalidad contributiva. Con ello, las nuevas pensiones, independientemente de las características del beneficiario, tendrían el mismo valor monetario puesto que lo que prima es la dicotomía ya indicada: estar o no en situación de necesidad. Obviamente, con este planteamiento surgirían voces contrarias, pues conlleva menores prestaciones para el beneficiario que las que actualmente se conceden en la modalidad contributiva y, posiblemente, sería criticada incluso por aquellos que defienden esta nueva configuración asistencial de la prestación, pues la inclinación natural de una determinada corriente de pensamiento sería defender la concesión de pensiones no contributivas con cuantías de pensiones contributivas, algo a todas luces fuera de cualquier lógica.

²⁴¹ Serrano Pérez, F. (2013): "Comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo". *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*. X Legislatura, nº 359. 26 de junio.

²⁴² Sin tener en cuenta los posibles complementos por invalidez con dependencia de una tercera persona o por alquiler y teniendo en cuenta la compatibilidad de rentas.

Una segunda cuestión es la diferenciación entre contingencias comunes y profesionales, que bajo la transformación total de la modalidad y la inexistencia de una dualidad de pensiones contributivas y no contributivas no tendría pleno sentido debido a la primacía de la situación de necesidad sobre el origen de la contingencia, a excepción de la cuantía concedida como indemnización a tanto alzado que, de mantener su configuración actual en base a la diferente sensibilidad de la contingencia profesional respecto al ámbito asistencial, exigiría su exoneración en el cómputo de la situación patrimonial del beneficiario. Por otra parte, en cuanto al auxilio por defunción ya se ha indicado en el capítulo III.1, la posibilidad de su transformación hacia la modalidad no contributiva, mientras que los subsidios temporales correspondientes al favor de familiares y la viudedad, aunque pudieran adscribirse a tal modalidad, lo harían mediante una alternativa más difusa conceptualmente por cuanto que el criterio de necesidad se impone como argumento clave y éste se concreta o persiste independientemente de la edad del beneficiario. Estos dos instrumentos pierden así su principal razón de ser.

Por último, la discusión sobre la configuración práctica puede centrarse en dos opciones: pasar en bloque las prestaciones de muerte y supervivencia presentes y futuras hacia la modalidad no contributiva o reubicar únicamente las nuevas altas a partir de una fecha establecida. Desde una perspectiva económica y de sostenibilidad para la Seguridad Social es notable la diferencia entre ambas opciones, pero hay un obstáculo para el traslado de la totalidad de las pensiones vigentes hacia la modalidad no contributiva: los derechos adquiridos. En efecto, las vigentes pensiones contributivas tienen unas cuantías medias superiores a la pensión asistencial y, de cualquier transformación que hiciese que se redujesen los importes que ahora se conceden a los beneficiarios –y en este caso sensiblemente–, serían indudables los conflictos sociales y jurídicos, especialmente constitucionales, no en vano las cuantías se concedieron bajo el cumplimiento de unos requisitos determinados que, más o menos acertados, fueron los que determinaron su valor monetario. Para salvar esta situación se puede proponer la alternativa de transformar la denominación y naturaleza de la pensión, incluso a través de una nueva prestación, manteniendo la cuantía actual de la que disfrutaban los pensionistas, opción no exenta de crítica puesto que disloca la esencia del modelo vigente y mantiene, aunque sea bajo un ardid jurídico, un inexplicable sistema asistencial en el que confluyen prestaciones de cuantías muy dispares que sobrepasarían incluso las otorgadas para otras coberturas en el modelo contributivo, esto es, un sistema de privilegios. Así, esta vía de trabajo consistiría en establecer una nueva caracterización para las pensiones de muerte y supervivencia que ahora se encuentran en la modalidad contributiva, quedando la modalidad no contributiva para las nuevas altas asociadas a estos riesgos, escenario que tiene como objetivo el encaje en cuanto a la salida de estas coberturas fuera del

modelo contributivo, vía de trabajo que funciona, a nuestro juicio, a costa de la racionalidad del conjunto del sistema de protección.

4.3. Valoración e incidencia de la propuesta

Una hipotética transformación de las pensiones contributivas de muerte y supervivencia en pensiones no contributivas tendría importancia en las cuentas económicas de la Seguridad Social, mayor o menor según el modelo escogido, pues supondría una salida de obligaciones desde el sistema que serían asumidas por los presupuestos generales del Estado. De pensar en la transferencia de pensiones en vigor, el importe del coste de las prestaciones por muerte y supervivencia en 2014 habría sido de 22.451,31 millones de euros (incluido el auxilio por defunción y excluida la indemnización a tanto alzado), un 17,20% del gasto total de la Seguridad Social, cantidad nada despreciable dentro de las cuentas del sistema.

Si, como parece más lógico y para evitar problemas de inconstitucionalidad, la aplicación de una estructura asistencial se establece sólo para las nuevas altas desde un ejercicio concreto –por tanto manteniendo los derechos adquiridos de los pensionistas existentes, que siguen en la modalidad contributiva hasta la extinción del colectivo–, será necesario observar la dirección que toman distintos componentes de gasto y para ello se realizará aquí una aproximación a las consecuencias económicas de esta medida. A partir de la información de la propia Seguridad Social española²⁴³, el importe estimado anualizado a cargo de las nuevas altas de pensiones de muerte y supervivencia en el ejercicio 2014, incluido el SOVI, se habría distribuido del siguiente modo: 1.044,45 millones de euros en la viudedad, 122,07 millones de euros en la orfandad y 25,33 millones de euros en el favor de familiares, lo que en total serían 1.191,86 millones de euros en ese ejercicio (un 5,3101% del gasto conjunto en 2014 y un 0,9132% del gasto total del sistema en ese año). Estos importes son totales anuales y no requieren particularizar sobre el momento de entrada o salida dentro del propio ejercicio.

Ahora bien, aceptando aquí que la pensión media mensual informada y publicada incluye todos los conceptos excepto la cuantía proporcional de la paga extra, hay una parte que, cuando procede, corresponde a los complementos a mínimos sufragados a cargo de los

²⁴³ Estimación realizada al aplicar la pensión media mensual de las altas iniciales a su número (Cuadros II.9.4. a II.9.6 del *Anexo al Informe Económico Financiero del Proyecto de Presupuestos 2016*), con 12 pagas para los regímenes de contingencias profesionales y 14 en el resto. Se supone que la pensión media calculada por la Seguridad Social recoge ya el efecto del momento de entrada en el ejercicio.

Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, ya se encuentra fuera de la propia Seguridad Social, por lo que será oportuna su eliminación del montante de coste total estimado con anterioridad. Si para ello se recurre como estimador al producto del número de altas en 2014 con mínimos y el coste medio del complemento en ese ejercicio que facilita la Seguridad Social (que supondremos en 14 pagas), los resultados serían de: 130,20 millones de euros en viudedad, 20,03 millones de euros en orfandad y 3,89 millones de euros en favor de familiares, en total 154,12 millones de euros que, minorando la cuantía total anteriormente calculada, dejan ésta finalmente en 1.037,74 millones de euros. En la transformación a estudio el importe de los complementos a mínimos no tendría razón de ser y supondría un ahorro para los Presupuestos Generales.

Esta cuantía estimada es la primera referencia sobre la que se podría cuantificar el ahorro anual que se produce en la transformación del modelo estudiado en base a las nuevas altas; si bien parece que no es un montante significativo de cara al total de las pensiones de muerte y supervivencia o del presupuesto de la Seguridad Social del año, hay que tener en cuenta que en cada ejercicio futuro ya no se producirían nuevas altas para el sistema y sí continuarán las bajas por salidas del colectivo, lo que permitiría potenciar la capacidad de la Seguridad Social para hacer frente a sus obligaciones y sacar del sistema una parte del riesgo asociado a la esperanza de vida del beneficiario. Además, en un futuro la posibilidad de acceso teórico al mercado de trabajo para toda la población (en cuanto a la ausencia de limitaciones por las características del trabajador: *sexo, discapacidad*, etc.) incidirá en el desarrollo de una carrera laboral propia que fomentará la obtención de prestaciones en el campo contributivo –de mayor o menor cuantía– minorando la dependencia de las que se puedan derivar de terceros, lo que ha de mitigar la aparición de situaciones de extrema necesidad y la concesión de posibles beneficios contributivos por muerte y supervivencia si hay incompatibilidad.

Junto a estos importes, de efecto presupuestario directo, se encuentra la incidencia en el proceso de revalorización puesto que, como hemos visto en el capítulo II, en cada ejercicio el Índice de Revalorización de Pensiones toma como referencia para su cálculo valores de gasto pasado y futuro y las modificaciones que afecten a estos valores se trasladan directamente al importe de dicha revalorización, con los límites legalmente marcados. En este caso, de la salida de gasto del modelo contributivo intuitivamente se esperaría un mayor valor del IRP y, por ello, en algún momento una mayor revalorización de las pensiones que se mantienen en este sistema.

Para realizar una estimación global sobre los efectos de esta propuesta de actuación en la vertiente de la revalorización, de gran complejidad y sujeta a muy diversas fuentes de

incertidumbre, se parte de los datos que ofrece la Seguridad Social respecto al número de altas de prestaciones de muerte y supervivencia en el ejercicio 2014: 129.705 correspondientes a viudedad, 27.930 correspondientes a orfandad y 4.739 correspondientes a favor de familiares (162.374 en total), así como de los datos anuales por coste de pensión anteriormente mencionados. La variación en el número de pensiones y en el coste que en el año 2014 habría surgido del traslado de modalidad de la muerte y supervivencia afectaría directamente al valor del IRP del año 2015 y siguientes, por lo que se requiere un nuevo cálculo con unos datos diferentes para G_{t+1}^* , *media geométrica de la serie de gastos*, $g_{p,t+1}$, *variación media en el número de pensiones*, y $g_{s,t+1}$, *variación promedio de la pensión media debida al efecto sustitución*. Centrándonos principalmente en el IRP para el año 2015, se recurre a los valores utilizados por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social (2015), que denominaremos *valores de base* y que recogen una evolución estimada que requiere ser ahora corregida por la aplicación del nuevo paradigma; por facilidad en las operaciones y para evitar el cálculo de valores recurrentes, se acepta la hipótesis de estabilidad en el valor futuro del coste y, puesto que el IRP trabaja con ingresos y gastos, los complementos a mínimos quedan compensados y no estimamos imprescindible aquí su diferenciación.

En cuanto al número de pensiones no hay duda de que su variación entre el ejercicio X y el ejercicio X+1 –en el que la muerte y supervivencia habría pasado a la modalidad no contributiva– sería negativa. El mismo panorama puede entenderse para el gasto del ejercicio, si bien en la variación de la pensión media por el efecto sustitución, puesto que la pensión media de las pensiones de muerte y supervivencia es inferior a la del conjunto de pensionistas de la Seguridad Social, es esperable que la salida de pensiones del sistema contributivo haga subir el valor promedio que computa en el IRP. Por ejemplo, según el *Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 2016*, la pensión media mensual general del ejercicio 2014 fue de 877,30€ frente a 862,74€ en 2013, siendo la pensión media mensual de viudedad 626,23€, 367,95€ la de orfandad y 511,58€ el favor de familiares. Aunque pudiera ser tentador pensar que para el ejercicio X+1 la evolución de estas variables se plantearía respecto al ejercicio anterior también neto de la muerte y supervivencia, ésta es una opción que no compartimos puesto que en cierta medida falsea las hipótesis de partida.

Con respecto a $g_{p,t+1}$ y su variación, a las pensiones base del sistema en 2014 se le restarían las altas de pensiones de muerte y supervivencia de ese ejercicio, que no habrían tenido lugar si se hubieran hallado en la modalidad no contributiva, pero habría que sumar las bajas del ejercicio que proceden de estas mismas altas, que estarían

supuestamente recogidas en los valores base y que tampoco habrían tenido lugar en el nuevo escenario. Se parte de las altas de pensiones de muerte y supervivencia de 2014 (162.374 unidades) y para estimar las bajas de estas altas acudiremos a la MCVL-2014 y a las pensiones que tienen su entrada en el sistema en 2004, 2005 y 2006 con el fin de ver su duración esperada y la probabilidad de que una de estas nuevas altas salga del sistema en ese mismo año o en cada uno de los ejercicios siguientes. Del promedio de los tres ejercicios se obtiene que el 0,3234% de las altas de un ejercicio sale del sistema en ese mismo año²⁴⁴. Así, el número de pensiones corregido para 2014 pasa de 9.270.983 (datos base) a 9.109.134 (9.270.983-162.374+525) una vez detraídas las observaciones correspondientes a muerte y supervivencia, mientras que para el resto de la serie se propone la misma variación que la original o base: 1,293% anual. Nótese que lo que aquí interesa de cara al *IRP* es la variación interanual en el número de pensiones, no tanto sus valores absolutos, por lo que el planteamiento de partida es aceptable aun cuando desde éste no obtendríamos una estimación adecuada de las pensiones futuras en vigor en el ejercicio en su comparación con los datos de partida.

En cuanto a la corrección de los gastos futuros que forman parte de G_{t+1}^* , podrían utilizarse otros datos ya estimados si bien, al tener que relacionar los importes con unas estimaciones de base previas y buscar valores absolutos, aquí incorporamos inicialmente la información de las bajas estimadas en 2014 (525 unidades) de sus correspondientes altas, que a su vez se distribuirán según el porcentaje poblacional correspondiente a las altas de muerte y supervivencia de ese ejercicio (79,88% viudedad, 17,20% orfandad y 2,92% favor de familiares según los datos presupuestarios de la Seguridad Social) y les será imputado el coste medio mensual poblacional de las bajas en 2014 para 14 pagas. Así 420 bajas de viudedad a un coste medio mensual de las bajas de 559,75€, 90 bajas de orfandad a 528,30€ mensuales y 15 bajas de favor de familiares a un coste medio mensual de 333,48€ dan lugar a una aproximación de cuantía de 4.027.018,80€. Con ello, en el primer ejercicio de referencia, 2014, la no consideración de las altas eliminaría 1.037,74 millones de gasto contributivo, pero se sumarían al total 4,03 millones por el gasto realmente no efectuado (que supone el 0,4523% del coste estimado de las altas) que en los datos de partida se suponen considerados.

²⁴⁴ Sobre esta misma filosofía se obtendrían probabilidades de salida para las pensiones de un ejercicio en cada uno de los años siguientes, información susceptible de ser utilizada para estimar la estructura de las bajas de las nuevas altas es un período determinado u otras variables. Sin embargo, una vez aplicada esta dinámica a los datos muestrales y de base, los resultados finales para el número total estimado de pensiones (netas de muerte y supervivencia en su evolución acumulada) muestran un comportamiento que no es plenamente satisfactorio. Reiteramos la naturaleza muestral de las observaciones de partida, cuya disposición original en la base de datos influye en los resultados obtenidos y hacemos notar también la diferencia del concepto de *salida en el ejercicio de ocurrencia* frente al de *salida en el primer ejercicio desde la ocurrencia*.

Para los ejercicios posteriores a 2014 es necesario eliminar de los datos base el coste de las altas de cada ejercicio y el correspondiente a las altas de ejercicios anteriores que causan baja en ese ejercicio. En primer lugar el coste estimado de las nuevas altas se obtendrá de aplicar a los datos base la relación entre el importe de gasto de las altas de 2014 respecto al total de gasto base en ese ejercicio (0,8195%). Las bajas de cada ejercicio tienen inicialmente una cuantía que se puede relacionar con el importe de las altas en los términos de lo acaecido en 2014 y para los ejercicios posteriores será necesario tener en cuenta el promedio de las bajas de un ejercicio en cada uno aquéllos. La relación entre gastos obtenida inicialmente (0,4523%) es superior al porcentaje de altas que salen del sistema en el ejercicio de efecto (0,3234%), por lo que utilizaremos la relación entre ambas (1,398446) como corrector de la probabilidad de baja de la pensión en cada ejercicio que se obtuvo con la MCVL-2014. El coste de las altas y las bajas se revaloriza con el límite mínimo del *IRP* (0,25% anual). En definitiva, la obtención del gasto corregido de cada ejercicio se obtiene de:

$$G_t^C = G_t^* - G_t^A + G_t^B \quad [102]$$

$$G_t^A = G_t^{AA} + \sum_{s=2014}^{t-1} G_s^{AA} \cdot (1 + \alpha)^{t-s} \quad , \quad G_t^{AA} = G_t^* \cdot \frac{G_{2014}^{AA}}{G_{2014}^*}$$

$$t = 2015 \dots 2020$$

$$G_t^B = G_t^{BB} + \sum_{s=2014}^{t-1} G_s^{AA} \cdot (1 + \alpha)^{t-s} \cdot P_{(t-s)}^* \quad , \quad G_t^{BB} = G_t^{AA} \cdot \frac{G_{2014}^{BB}}{G_{2014}^{AA}}$$

$$t = 2015 \dots 2020$$

$$G_{2014}^A = 1.037.741.962,48\text{€} \quad G_{2014}^B = 4.027.018,80\text{€}$$

$$G_{2014}^* = 126.624.544.200\text{€}$$

G_t^C	Gasto corregido para el ejercicio t-ésimo
G_t^*	Gasto de base para el ejercicio t-ésimo
G_t^{AA}	Coste anual de las altas en el ejercicio t-ésimo
G_t^{BB}	Coste anual en el ejercicio t-ésimo de las bajas de altas del año
α	Revalorización en el ejercicio, constante para todo el horizonte temporal
$P_{(t)}^*$	Probabilidad de que un alta de un ejercicio cause baja en la población en el año t-ésimo

Con respecto al efecto sustitución, para poder estimar la evolución de $g_{s,t+1}$ recurriremos a los datos de la MCVL-2014 y, frente a una opción general del tipo:

$$N_{t+1} \cdot \bar{P}_{t+1} = N_t \cdot \bar{P}_t \cdot (1 + \alpha_{t+1}) - N_{t+1}^B \cdot \bar{P}_{t+1}^B + N_{t+1}^A \cdot \bar{P}_{t+1}^A \quad [103]$$

N_t	Número de pensiones en el ejercicio t
N_{t+1}	Número de pensiones en el ejercicio $t+1$ que estaban en vigor en el año t
N_{t+1}^A	Número de altas de pensiones en el ejercicio $t+1$
N_{t+1}^B	Número de bajas de pensiones en el ejercicio $t+1$
α_{t+1}	Revalorización en el ejercicio $t+1$
\bar{P}_t	Pensión media en el ejercicio t
\bar{P}_{t+1}	Pensión media en el ejercicio $t+1$ de las pensiones que estaban en vigor en t
\bar{P}_{t+1}^A	Pensión media de las altas en el ejercicio $t+1$
\bar{P}_{t+1}^B	Pensión media en $t+1$ de las bajas en ese ejercicio que estaban en vigor en t

puesto que estamos en un entorno atípico con más salidas del colectivo de las esperadas utilizaremos una alternativa más sencilla, aunque también intuitiva, tal que, en el primer año de aplicación:

$$g_{s,2014} = \frac{\left[\bar{P}_{2014}^{SIN\ MYS} / (1 + \alpha_{2014}) \right]}{\bar{P}_{2013}^{TOTAL}} - 1 = 0,159529 \quad [104]$$

$\bar{P}_{2014}^{SIN\ MYS}$ Pensión media muestral en 2014 sin la muerte y supervivencia. Sobre los criterios de ajuste y tratamiento de datos, véase el Anexo II

\bar{P}_{2013} Pensión media muestral del conjunto de observaciones en 2013

Como era de esperar, la influencia de la variación de la pensión media es muy acusada con el traslado de modalidad y, al menos en el primer ejercicio de aplicación, no compensa las mejoras que se obtienen por la evolución de otras variables. Con tales datos, la estimación del valor del IRP para 2015 pasaría del -1,3604% que surge del escenario de base a -2,0107%, por lo que la revalorización real de este año hubiera seguido siendo el límite mínimo: 0,25%. Si, en vez de aplicar la variación obtenida en la pensión media, se utilizase el 1,55% previsto inicialmente en el escenario base, tampoco en el ejercicio 2015 se hubiera alcanzado una revalorización positiva.

Bajo la metodología indicada, la fórmula del IRP para 2015 utilizaría los siguientes valores de base y valores estimados:

Tabla 14. Datos básicos para el cálculo del Índice de revalorización de pensiones

Año	I	G	\hat{G}	N	\hat{N}	S	\hat{S}
2009	117.397	108.792		8.614.876	8.614.876		
2010	116.458	113.646	113.646	8.749.054	8.749.054	1,80%	1,80%
2011	116.119	116.416	116.416	8.871.435	8.871.435	1,80%	1,80%
2012	113.081	119.030	119.030	9.008.348	9.008.348	1,70%	1,70%
2013	113.505	123.340	123.340	9.154.617	9.154.617	1,70%	1,70%
2014	117.021	126.625	125.591	9.270.983	9.109.134	1,72%	15,95%
2015	125.141	131.820	129.736	9.390.837	9.226.896	1,55%	1,55%
2016	130.262	135.950	132.762	9.512.240	9.346.180	1,55%	1,55%
2017	135.593	140.209	135.881	9.635.233	9.467.006	1,55%	1,55%
2018	141.141	144.602	139.093	9.759.817	9.589.394	1,55%	1,55%
2019	146.917	149.132	142.401	9.886.011	9.713.364	1,55%	1,55%
2020	152.928	153.805	145.808	10.013.837	9.838.937	1,55%	1,55%

Fuente: elaboración propia con datos del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social (2015). Ingresos y gastos en millones de euros. Número de pensiones estimado únicamente a efectos de la variación interanual, no comparable con los datos de partida.

I	Ingresos en el ejercicio
G	Gastos iniciales en el ejercicio
N	Número inicial de pensiones en el ejercicio
S	Efecto sustitución inicial en cada ejercicio
\hat{S}	Efecto sustitución sin las nuevas altas de muerte y supervivencia
\hat{N}	Número de pensiones estimadas en el ejercicio a efectos de cálculo de la variación interanual
\hat{G}	Gasto estimado del ejercicio sin incluir el correspondiente a las nuevas altas del ejercicio

Ahora bien, aunque en el primer período (2015) y según las hipótesis empleadas no existiese efecto alguno en el *IRP* por el traslado de las nuevas altas de muerte y supervivencia de 2014 hacia la modalidad no contributiva, lo cierto es que en el transcurrir del tiempo se favorecerá, ante homogeneidad en otras variables, el cambio hacia revalorizaciones superiores que, dentro de los límites marcados, afectarán a todas las pensiones incrementando el gasto en la materia pero favoreciendo los importes a percibir por los beneficiarios. Únicamente a efectos ilustrativos, puesto que las fuentes de incertidumbre de las hipótesis utilizadas son muy amplias, si suponemos que las variables evolucionarán a partir de 2020 conforme a la relación obtenida en las estimaciones entre los años 2020 y 2019, los cálculos del *IRP* indican que, con 2015 como primer año de aplicación, hasta el año 2018 no nos acercaríamos al límite mínimo de revalorización establecido, principalmente por el efecto positivo de los ingresos. Puesto que consideramos que los ingresos base utilizados son verdaderamente optimistas, lo más probable es que la situación fuese todavía más restrictiva que la aquí obtenida. En cualquier caso, sí parece probable que el traslado de las pensiones de muerte y supervivencia contributivas a la modalidad no contributiva tendría un efecto neutro en el resultado del índice en el corto plazo.

Tabla 15. Estimaciones sobre la evolución futura del *IRP*

	I	N	S	I*	G*	Alfa	$\text{Alfa} * (I^* - G^*) / G^*$	IRP
2015	2,470%	1,377%	1,638%	127.307,953	131.596,747	25,00%	-0,815%	-1,3604%
2015 corregido	2,470%	1,217%	2,932%	127.307,953	129.018,613	25,00%	-0,331%	-2,0107%
2016	2,914%	1,183%	2,909%	130.977,044	132.258,812	25,00%	-0,242%	-1,4204%
2017	3,313%	1,160%	2,887%	135.279,916	135.574,996	25,00%	-0,054%	-0,7885%
2018	3,923%	1,130%	2,873%	140.572,884	138.992,509	25,00%	0,284%	0,2037%

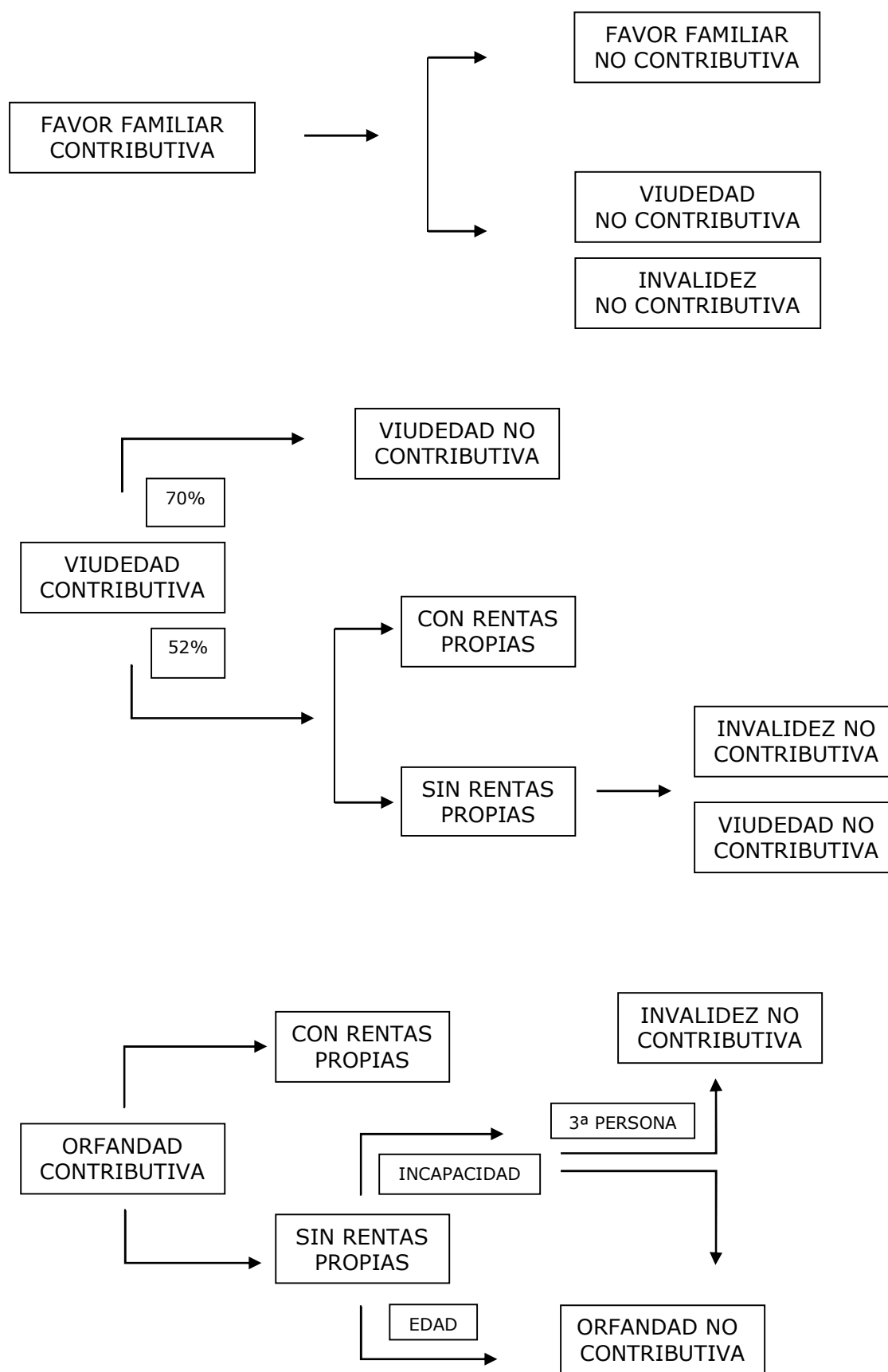
Fuente: elaboración propia con datos del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social (2015).

Por otra parte, para el conjunto del presupuesto del Estado las variaciones de partidas económicas no serían de la magnitud indicada hasta el momento, puesto que deben tenerse en cuenta los nuevos gastos en pensiones que aparecerían dentro del campo no contributivo y, por otra parte, hay una serie de costes de administración que también se trasladarían ante una mayor necesidad de tramitación y control en el ámbito no contributivo (cuya gestión es realizada por las Comunidades Autónomas) frente al actual sistema gestionado por la Seguridad Social.

Así, la última fuente de variación en el traslado hacia una modalidad no contributiva que aquí se valora surge por el incremento de gasto de esta medida, no para el sistema de seguridad social, sino para el presupuesto del Estado por aquellas prestaciones no contributivas que en 2014 hubieran nacido ante el traslado del colectivo: no son altas en el modelo contributivo de la Seguridad Social sino, cuando procede por las circunstancias personales del beneficiario, en la parte no contributiva. Como contrapartida, las partidas destinadas a complementos a mínimos de las altas de ese ejercicio se contemplan como un ahorro para el presupuesto general, pues en este nuevo modelo no habrían tenido lugar.

A continuación se muestra un diseño muy esquemático de la transformación para cada una de las clases tratadas (viudedad, orfandad y favor de familiares), teniendo en cuenta que el auxilio por defunción y la indemnización a tanto alzado se adaptarían a las consideraciones que se hicieron en el capítulo III, es decir, que como medida general se eliminaría el auxilio de defunción –aunque también se ha visto que puede tratarse como una prestación no contributiva- y la indemnización a tanto alzado, ya sea únicamente en el campo profesional o incorporando las contingencias comunes, puede mantener su estatus ante el nuevo paradigma que se estudia en este epígrafe.

Esquema 3. Transformación de modalidad en la muerte y supervivencia



En el favor de familiares, manteniendo la situación actual y conforme a lo que hemos venido indicando hasta ahora, la transferencia de gasto desde las cuentas de la Seguridad Social hacia las del Estado puede considerarse íntegra (tenida en consideración la especial situación de los complementos a mínimos), pues los beneficiarios lo son bajo una situación de ausencia de recursos con dependencia económica del sujeto causante, si bien es cierto que los cambios sociales actuales permiten intuir que no habrá un gran incremento de coste en estas pensiones por la mayor independencia teórica de los miembros originarios de un núcleo familiar; algunos de estos beneficiarios podrían serlo en algún momento de una pensión contributiva o quizás de otra pensión no contributiva, especialmente jubilación.

La pensión no contributiva en el ejercicio 2014 fue de 5.122,60€ anuales (una pensión mensual P_m de 365,90€ en 14 pagas) y las altas del ejercicio en la modalidad contributiva para esta clase de cobertura 4.379 unidades. Si para el ahorro contributivo se partía de un coste conocido e informado por la Administración Pública, sin tener en cuenta el momento de entrada o salida, en este apartado y según la naturaleza de los datos de partida puede trabajarse con una hipótesis de entrada en el modelo no contributivo al inicio del ejercicio o bajo la hipótesis de una distribución uniforme en el año respecto a esta variable, con la que las pensiones en promedio están en vigor durante 6 meses en el primer ejercicio, por lo que se producen 7 pagos mensuales ($\hat{T} = 7$) al incorporar una paga extra; además, una parte de los beneficiarios, por sus características personales, podrían escoger entre una pensión de favor de familiares o una de viudedad o invalidez, eligiendo esta última por su mayor cuantía si existe una discapacidad superior al 75%, algo que no podemos discernir con exactitud de los datos muestrales. Con todo ello, un primer importe mínimo estimado C^F de estas nuevas pensiones para el sistema no contributivo en 2014 (que provendrían del favor de familiares contributivo) se cifraría en:

$$C^F = \hat{N} \cdot P_m \cdot \hat{T} = 4.379 \cdot 365,90\text{€} \cdot 7 = 12.138.000,70\text{€}$$

si se aceptase la hipótesis de entrada en el modelo no contributivo a mitad del primer ejercicio. Para los años siguientes se tendría en cuenta un máximo de 14 pagas para esta generación (lo que supondría el doble de la cantidad estimada), si bien sería necesario incorporar la evolución demográfica del colectivo a través de las probabilidades de supervivencia y fallecimiento.

En la pensión de viudedad, sobre las 129.705 altas en 2014 puede asimilarse primeramente que aquellas prestaciones a las que les correspondería en el modelo

contributivo un porcentaje del 70%, que ya asumimos como de clara raigambre asistencial, serían directamente prestaciones no contributivas, mientras que para la aplicación del porcentaje general del 52% la traslación se produciría únicamente en aquellas pensiones cuyo teórico titular no tuviera recursos suficientes en los términos establecidos legalmente, entendido siempre que se cumple a los efectos que aquí nos interesa el requisito de residencia. En teoría, aquellos nuevos pensionistas de la modalidad asistencial que a la fecha del hecho causante de viudedad tengan una incapacidad susceptible de cobertura mediante el modelo no contributivo o hayan alcanzado la edad correspondiente a la jubilación tendrían derecho a una prestación de su naturaleza sin necesidad de recurrir la pensión no contributiva de viudedad. Sin embargo, en términos de coste y ante homogeneidad de importes la situación es, en general, indiferente porque lo que se produce es una nueva fuente de gasto por cada unidad, independientemente de la cobertura bajo la que se concede, con la excepción de la gran invalidez superior al 75%, donde existe una cuantía adicional para el beneficiario.

De los datos expuestos en el capítulo III.3 se obtiene que el 1,0523% de las altas de viudedad de 2014 serían acreedoras de un porcentaje del 70% y directamente hubieran accedido a una pensión no contributiva. El siguiente paso sería separar aquellas pensiones que bajo un porcentaje del 52% tendrían un hipotético derecho a una pensión no contributiva propia en función de la carencia de otras rentas suficientes. Constatada la escasa utilidad de la MCVL-2014 con este fin, tampoco es interesante acudir a los datos fiscales de versiones anteriores de la MCVL, pues aunque podrían aportar información sobre los recursos del beneficiario hay que tener en cuenta que las pensiones no contributivas no se centran únicamente en el individuo, sino en la unidad familiar. Por otra parte no habría que olvidar que las altas entran en el sistema a lo largo del año y es posible que los rendimientos en el período estén también afectados por su estructura dentro del mismo, siendo probable encontrar una sobrevaloración del coste al comparar una cuantía de rendimientos no anualizada con un importe anual. Ante la dificultad existente podría aceptarse que la ubicación en la clase contributiva o no contributiva sigue una distribución de Bernouilli (p) con máxima varianza ($p=0,5$), aunque intuitivamente y en función de los datos estadísticos obtenidos en el capítulo III no creemos que fuese desacertado pensar en una probabilidad de pasar a la modalidad no contributiva alrededor de $1/3$. Puesto que la opción de trabajar con una Bernouilli (p) para el beneficiario o una Binomial (n, p) para el colectivo parece más prudente ya que reconoce un mayor coste y por ello una menor holgura en el ahorro en términos globales, seguiremos aquí esta posibilidad aun reiterando ciertas dudas sobre la misma.

Con todo ello, para el sistema no contributivo en 2014 el importe C^V de estas nuevas pensiones (que provendrían de la viudedad contributiva, 1.365 del grupo vinculado al porcentaje del 70% y 64.170 del grupo de aplicación del 52% sin recursos propios) se cifraría en:

$$C^V = \hat{N} \cdot P_m \cdot \hat{T} = (1.365 + 64.170) \cdot 365,90\text{€} \cdot 7 = 167.854.795,50\text{€}$$

En cuanto a la orfandad, el esquema es muy similar al ya indicado, aunque hay un nuevo elemento destacable en la percepción de la pensión contributiva hasta una edad determinada, criterio que es más complejo de desplazar hacia la modalidad asistencial, en la que prima el binomio: necesidad/no necesidad frente a la edad biológica. Ya se ha expuesto que la legislación impide la captación de rentas laborales propias hasta una edad determinada, por lo que a priori solamente hasta esta edad es adecuada la percepción no contributiva bajo un argumento objetivo; ir más allá en cuestión de edades siempre va a incorporar un grado de subjetividad problemático. Consideraremos como perceptores de la pensión no contributiva de orfandad a las altas de beneficiarios menores de 26 años que careciesen de recursos económicos. Por otra parte se encuentran las altas de huérfanos con edad superior a 25 años, que se ha de suponer que son beneficiarios de la pensión de orfandad contributiva por ser personas con discapacidad, una parte de los cuales serán perceptores de una pensión no contributiva de invalidez si no poseen ingresos propios; aquellos que alcancen una discapacidad del 75% obtendrían, además, un porcentaje adicional del 50% de la pensión. De los datos obtenidos en el capítulo III.4, estimamos que el 26,5663% de las prestaciones trascienden de la temporalidad. Como en el supuesto anterior, ante la ausencia de información suficiente asumiremos una distribución de Bernouilli ($p=0,5$) en la clasificación, dando lugar al siguiente valor de coste estimado:

$$C^O = \hat{N} \cdot P_m \cdot \hat{T} = (3.710 + 10.255) \cdot 365,90\text{€} \cdot 7 = 35.768.554,50\text{€}$$

Por último, hay que reseñar que otra fuente de incertidumbre adicional en las estimaciones de este apartado (especialmente en orfandad y viudedad) viene del propio diseño de las pensiones no contributivas, puesto que no todas las situaciones se ubicarán en una unidad familiar sin recursos económicos.

Teniendo en cuenta los resultados de las tres clases de prestaciones, una aproximación al coste de la transición estudiado para el sistema no contributivo sería de 215.761.350,70€, aunque insistimos en que este importe está afectado por una alta variabilidad.

En resumen, analizando solamente los datos correspondientes a las altas del ejercicio 2014, el resultado estimado para el conjunto del presupuesto en el primer ejercicio de aplicación sería de un ahorro de 976,10 millones de euros en un año, aproximadamente un 0,7788% del gasto en prestaciones económicas en el ejercicio.

Tabla 16. Resumen de resultados. Traspaso hacia el modelo no contributivo. Año 1

Seguridad Social	Ahorro por las altas que no se generan en el modelo contributivo	+	1.037.741.962,48€
Seguridad Social	Revalorización ejercicio t+1.	=	0
Presupuesto del Estado	Incremento por las nuevas altas no contributivas	-	-215.761.350,70€
Presupuesto del Estado	Ahorro por los complementos a mínimos que se dejan de pagar a la pensión de la modalidad contributiva.	+	154.115.805,34€
TOTAL	Ahorro general		976.096.417,12€

Fuente: elaboración propia con datos de la Seguridad Social, MCVL-2014 y Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social (2015). Euros.

Obviamente, sin perjuicio de la evolución demográfica del colectivo, en el siguiente ejercicio el ahorro global sería mayor puesto que es de naturaleza acumulativa y comprende el correspondiente a las altas de 2015 que se traspasan a la modalidad no contributiva y el de las altas de 2014 que ya no generan gasto en 2015 y así sucesivamente. No hay que perder de vista tampoco que las pensiones de muerte y supervivencia que se mantienen en la modalidad contributiva van saliendo paulatinamente del colectivo por fallecimiento del beneficiario o por cumplimiento de alguno de los requisitos para su extinción. Esta dinámica se mantiene en el tiempo hasta que el índice de revalorización de las pensiones alcance un valor que permita una revalorización superior a la establecida en su límite inferior, limitando con ello los resultados positivos que se obtienen de esta opción.

4.4. La incertidumbre del modelo no contributivo

Visto el contenido del epígrafe anterior, desde una perspectiva exclusivamente centrada en la sostenibilidad no hay duda de la bondad de la transformación de las prestaciones de muerte y supervivencia en pensiones no contributivas, en particular de las nuevas altas desde una fecha determinada. Con este modelo no todos los posibles beneficiarios

amparados bajo la legislación actual percibirían una prestación y solamente lo harían aquellos en quienes se da una situación socioeconómica concreta; la prestación no otorgaría cobertura allí donde existan rentas suficientes pero no se dejarían de atender estados de extrema necesidad. Así, si sólo fuese una cuestión de sostenibilidad de la Seguridad Social, vista además la absoluta trascendencia que tiene este elemento en el presente y futuro del sistema, en un régimen de separación completa de fuentes de financiación el traslado total de la muerte y supervivencia hacia coberturas no contributivas, a pesar de sus más que probables ineficiencias, sería una alternativa indudablemente beneficiosa económicamente, a la que habría que unir como valor añadido su sencillez en la implantación. Además, un punto positivo adicional de este modelo en lo que se refiere al diseño de la Seguridad Social es que favorece la utilización práctica del factor de sostenibilidad *FS* aprobado por la *Ley 23/2013, de 23 de diciembre*, al eliminar algunos de sus puntos controvertidos y, a su vez, descarta una de las trabas para la implantación de otras opciones financiero-actuariales de cara al diseño y financiación de la Seguridad Social contributiva como son la capitalización individual de aportación definida o las cuentas nocionales. Por tanto, será siempre tentador dejarse llevar por la aplicación de una acción de esta naturaleza al observar únicamente sus efectos económicos positivos, aunque desde los cuales no haya que descartar una nueva incertidumbre adicional debida a una mayor posibilidad de excedentes en el sistema que podrían ser usados para mantener o fomentar la ineficiencia en otras áreas de actuación, por ejemplo en la incapacidad. Es decir, no es descartable también una transferencia de la ineficiencia dentro del sistema contributivo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el cambio de la naturaleza y el diseño actuales es radical y requiere un punto de corte temporal a partir del cual unos perfiles de beneficiarios, que en algunos casos perciben prestaciones por importes elevados respecto a la media dentro de la modalidad contributiva, dejan de considerarse como posibles perceptores de prestaciones. Aunque esto es una característica común de cualquier reforma, siempre es difícil explicar que, ante el mismo esfuerzo contributivo, aquello que se ha otorgado en un instante pasado y se ha defendido como una fortaleza del sistema deja de concederse desde un momento concreto, incertidumbre que no se evitará ni siquiera con una propuesta adicional de prestaciones de transición. Idéntica cuestión se plantea en cuanto a las contingencias profesionales o las prestaciones por actos de terrorismo, que son especialmente amparadas por la filosofía del actual sistema y en las que la preeminencia de la naturaleza del hecho causante sería dejada de lado salvo que se plantease el mantenimiento de las contingencias profesionales en la modalidad contributiva y únicamente el traspaso de las contingencias comunes a la modalidad no contributiva. La separación de ambos perfiles ya ocurre en la práctica

atendiendo a la esencia del hecho causante que imposibilita la equiparación (fallecimiento con responsabilidad empresarial) o a la particularidad establecida voluntariamente por el legislador (indemnización a tanto alzado), aunque no con la magnitud que se espera en una medida de la importancia de la que aquí se habla. Por otra parte, esta separación de contingencias según la naturaleza del hecho causante requeriría la adaptación de la prima de accidentes de trabajo.

Desde un punto de vista filosófico la hipotética transformación de las prestaciones de muerte y supervivencia en prestaciones no contributivas es el paradigma que constataría hasta qué punto la Seguridad Social se ha convertido en un sistema ineficiente en su esencia, en un instrumento centrado en el corto plazo y sometido al albur del planteamiento político, un gigante con pies de barro sujeto a múltiples vaivenes ajenos a un modelo de correcto diseño y ejecución. En un instante concreto se ha planteado una cobertura como puntal del sistema, incluso se han incrementado paulatinamente sus importes y fomentado su variación al alza mediante reformas legislativas para que, en un momento inmediatamente posterior, tal cobertura deje de ser relevante dentro del mismo esquema sujeto a contribuciones; lo que antes –correcta o incorrectamente- se defendía intensamente como cobertura irrenunciable de las necesidades inaplazables de las personas, pasa ahora a un segundo plano. Y esto se hace no por motivos sociales, ni por la mejora de la protección o en beneficio de los ciudadanos, sino por razones puramente económicas y de sostenibilidad al abrigo de un cada vez mayor desequilibrio que se ha ido gestando desde hace tiempo ante la esquiva mirada de los núcleos de toma de decisiones. Como resultado, la complacencia y la bondad hacia las generaciones pasadas impondrían nuevas restricciones hacia las generaciones presentes y futuras.

Una cuestión adicional dentro de esta revisión crítica es si es necesaria la protección de las prestaciones de muerte y supervivencia dentro de las contingencias no contributivas, incertidumbre que toma cuerpo especialmente en la esfera de acción del legislador. La decisión es más sencilla para las situaciones en las que el beneficiario se ve imposibilitado legalmente para ejercer una actividad propia. Es más discutible, sin embargo, en prestaciones de carácter vitalicio o allí donde no existe imposibilidad legal de obtención de rentas, ya que en una hipotética modalidad no contributiva ya existe una esfera de protección como mínimo para quienes se encuentran en situación de invalidez y jubilación. En la práctica la prestación no contributiva se orientaría, por ejemplo, a personas viudas en supuesta edad activa y sin invalidez, sin perspectiva de obtención de rentas propias, quizás familias con hijos y sin rentas, si bien núcleos adscritos a este perfil ya están siendo atendidos en otros niveles de protección pública. Surgen entonces múltiples cuestiones adicionales, ¿por qué conceder auxilio a las personas viudas dentro

de la Seguridad Social no contributiva y no a otros colectivos susceptibles de amparo: raza gitana, inmigrantes, personal recluso o ex-recluso o las múltiples personas sin hogar que se encuentran en las calles de las ciudades españolas?¿Por qué es adecuada su protección por la Seguridad Social cuando no lo es la del mayor de dieciocho años cuya imposibilidad de incorporación al mercado laboral no permite siquiera el acceso al sistema?¿Es la viudedad un supuesto susceptible de amparo por sí misma –aunque en unión de otros requisitos socioeconómicos- o, tal y como nosotros defendemos, desde una perspectiva social son los requisitos socioeconómicos los que deben determinar las coberturas no contributivas independientemente de otras características del beneficiario? Como se aprecia, el planteamiento de cambio que aquí se estudia no genera respuestas inmediatas, claras, objetivas y razonables a estas preguntas.

La aplicación práctica de esta alternativa genera también controversia en su relación con el resto de prestaciones contributivas y no contributivas. Es incierta la diferenciación del riesgo objeto de cobertura frente a otras contingencias que se protegen mediante el campo contributivo y están sujetas a períodos de carencia que limitan su obtención y, sobre todo, queda indeterminada cuál es la motivación que permite que una prestación que no en todos los casos se vincula a una situación de especial necesidad pase a formar parte de un elenco de protección total de carácter asistencial: ¿aunque exista una necesidad económica se otorgaría una pensión no contributiva vitalicia de viudedad cuando la jubilación e incapacidad incluyen –ciertas- limitaciones al desempeño de una actividad laboral generadora de rentas, pero no así necesariamente la citada viudedad?

De acuerdo con los datos que se han manejado en este estudio esta opción de trabajo supone una reducción esperada de la cuantía media de la pensión de esta clase que ahora se concede a un beneficiario en el momento de su entrada al sistema, por lo que inmediatamente surgirían voces a favor de un aumento de tal cuantía y del consiguiente incremento de coste global ante la tendencia a satisfacer las demandas de los grupos de presión, además de la discriminación con los beneficiarios de otras pensiones no contributivas que, a buen seguro, no se encuentran en diferente situación de necesidad, pues ésta no depende de la vía de acceso a la prestación sino de las características personales y socioeconómicas de los beneficiarios. Obviamente una solución a este nuevo riesgo de presión de costes al alza sería elevar el importe del resto de prestaciones no contributivas para evitar distorsiones, dinámica expansiva del gasto que además conlleva una ausencia de consideración hacia las cotizaciones realizadas dentro del sistema contributivo puesto que el mayor esfuerzo realizado por los trabajadores genera cada vez menos derechos y su cotización cada vez tendría menos valor.

En otro orden de cosas, tanto el Estado y como las Comunidades Autónomas se encuentran cómodos con la tendencia actual, en la que ciertas situaciones de necesidad vinculadas a las contingencias de muerte y supervivencia no se financian mediante la vía impositiva (como sí sucede en otras prestaciones vitalicias no contributivas) sino que se cargan al modelo contributivo, por lo que la Administración correspondiente puede destinar más recursos con origen en los impuestos para solventar otras cuestiones, combinándose a veces este escenario con un –erróneo- esquema ideológico que defiende el incremento de las pensiones de viudedad hasta su equiparación con las de jubilación bajo el concepto de que aquéllas suponen la fuente de ingresos sustitutivas de éstas.

Para finalizar, si tal y como ocurre en la actualidad es necesario incorporar la esencia no contributiva a la modalidad contributiva es porque el sistema de protección en su conjunto y su diseño no son los adecuados; los recursos no se dedican allí donde hay necesidad y se difuminan en otras partidas de carácter más accesorio con un nuevo acicate para la desigualdad en la fragmentación que el modelo político de España presenta. Quizás, antes que un hipotético traspaso a una modalidad no contributiva de la muerte y supervivencia se requiera una reforma filosófica de esta modalidad (unida a la del conjunto de la Seguridad Social) que gestione las situaciones de necesidad como expresión de los requerimientos constitucionales, que obvie las interferencias derivadas de la estructura territorial y que parta de una cuantía uniforme para los beneficiarios sobre la que determinadas situaciones acepten algún complemento, estableciéndose una nítida separación entre las modalidades de protección y un adecuado reconocimiento del esfuerzo contributivo con relación a su no ejercicio –siendo conocido que las causas de ello son múltiples y no por ello todas cuestionables éticamente-, pues es indiscutible que la contribución se efectúa en un entorno de solidaridad y parte del tesón y trabajo de quienes la realizan.

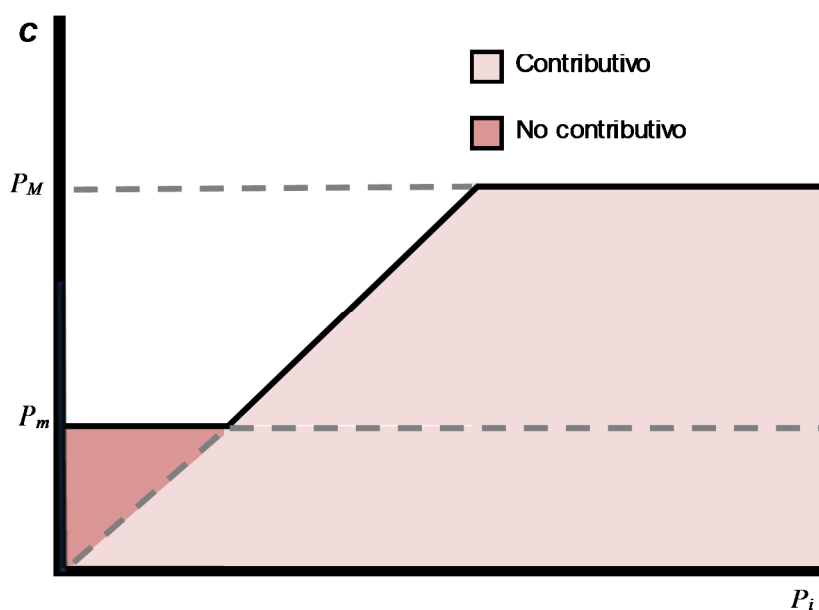
5. LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN

5.1. Las prestaciones de muerte y supervivencia y los modelos de varios pilares

En líneas generales, un sistema de varios pilares trata de establecer una combinación de alternativas de financiación de tal forma que una parte de las prestaciones se adscriba a un modelo mientras que otra parte lo hace en modelos complementarios. Esta situación es la que se da actualmente en la protección total por pensiones en España pues, como ya indicamos en el capítulo I, ésta se articula mediante un sistema básico de seguridad social complementado, en su caso, por un pilar de protección vinculado al marco profesional y por un pilar de protección en el ámbito individual; a su vez, la Seguridad Social se descompone en una modalidad contributiva y una no contributiva que, al menos en teoría, se financian con cargo a diferentes partidas, por lo que este primer pilar tiene a su vez dos segmentos bien diferenciados filosóficamente: aquel que se centra en las denominadas situaciones de necesidad y aquel en el que existe cierta vinculación entre las contribuciones y las prestaciones.

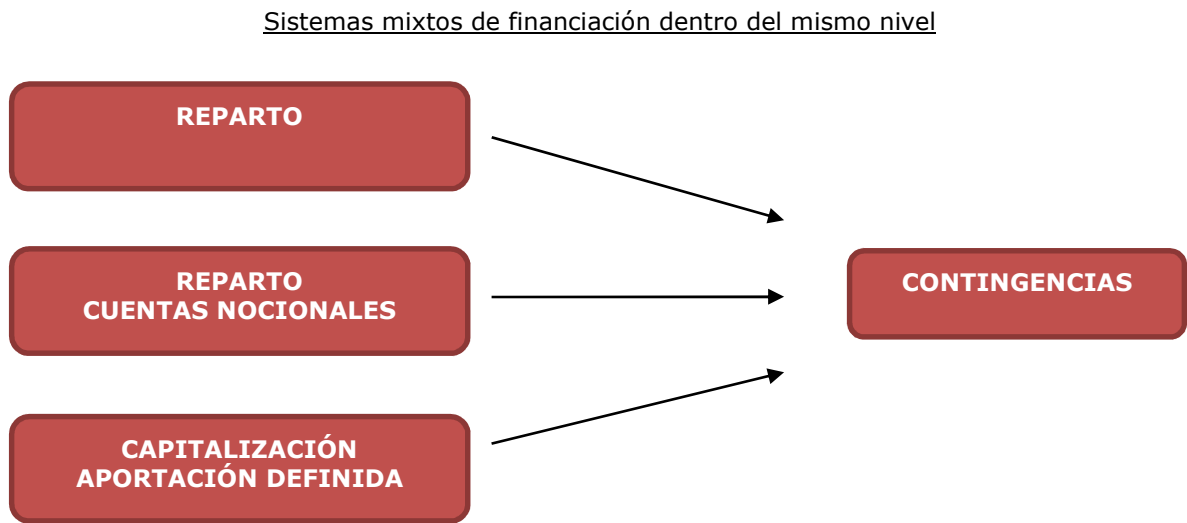
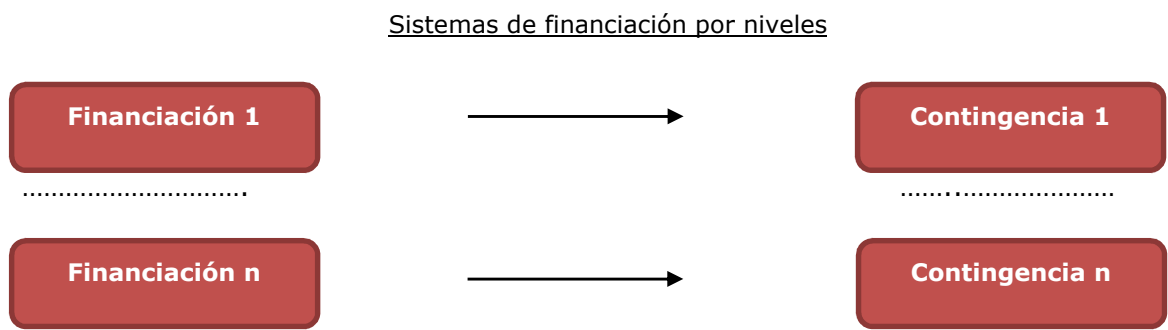
En lo que se refiere al modelo básico de seguridad social, el importe C de una pensión individual P_i se puede representar, una vez definidas las pensiones mínimas P_m y máximas P_M a conceder a los beneficiarios, mediante el siguiente gráfico:

Gráfico 66. Importe C de una pensión en la Seguridad Social. Situación actual



Pues bien, sobre este esquema genérico y dentro de una estructura de cobertura basada en varios niveles o pilares puede proponerse una modificación para cada uno ellos de forma independiente de tal manera que las contingencias se separen y se vinculen a una vía específica de financiación, o bien plantear que dentro de un pilar determinado coexistan modelos de financiación que afecten a todas las prestaciones del mismo.

Cuadro 26. Sistemas de financiación por niveles



Como ya hemos visto en este mismo capítulo, un sistema de capitalización individual de aportación definida único es más complejo para la protección de las actuales contingencias de muerte y supervivencia en dos situaciones concretas: cuando el sujeto causante se encontraba en situación de pasivo al fallecer (y según sean las reglas de transferencia –si es que éstas existen-) y cuando el sujeto causante fallece a edades tempranas, donde el capital acumulado no tendría a priori entidad económica. Si las prestaciones obtenidas en base al montante final no llegan a una cuantía mínima es factible que la cobertura de unas teóricas necesidades corra a cargo del resto de los ciudadanos por articulación de principios legales –y constitucionales- de protección o

mitigación de la pobreza, llegando a la expresión del indeseable efecto consistente en la individualización del beneficio y la socialización de las pérdidas. Por el mismo motivo, tampoco las cuentas nocionales parecen aportar una solución especialmente eficiente para las contingencias de muerte y supervivencia, con lo que su participación en un esquema público de protección es más propia de otras contingencias.

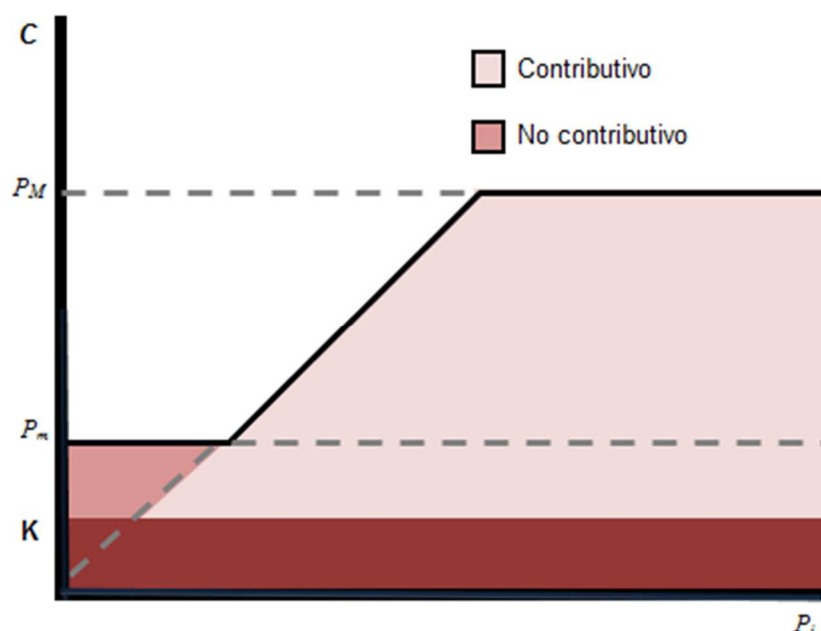
En un planteamiento mixto y desde una perspectiva puramente económica ya se ha anticipado que no hay especiales problemas de sostenibilidad con la parte que correspondería a una hipotética capitalización de aportación definida, pues se transfiere hacia el beneficiario el riesgo de alcanzar un determinado nivel de prestación. Sí se mantiene, sin embargo, la incertidumbre en el equilibrio de las prestaciones que se financiasen bajo el sistema de reparto puro, pues es posible que los ingresos determinados mediante un sistema de "cálculo a priori" fuesen en algún ejercicio inferiores a las necesidades de gasto en el mismo, lo que obligaría a dedicar fondos extraordinarios para su cobertura. Por el contrario, el equilibrio del sistema de reparto puro

se puede proponer como primer objetivo y ser alcanzado mediante un sistema de imputación de ingresos a posteriori, dando lugar como requisito previo a la igualdad entre ingresos y gastos y quedando el teórico remanente de ingresos totales para la financiación de los sistemas alternativos, acción que a su vez es un inconveniente para los futuros perceptores de prestaciones de este último grupo, quienes ven cómo sus cuotas se someten en primer lugar al principio de solidaridad y en detrimento de su esfuerzo contributivo y sus prestaciones futuras.

En cuanto a los modelos estructurados en diferentes niveles con aplicación a España, una alternativa al diseño actual se recoge en Valero, D. *et al.* (2011), quienes proponen una estructura de tres pilares que parece centrarse especialmente en las pensiones de jubilación: un primer nivel con una pensión pública básica financiada mediante impuestos, un segundo pilar constituido mediante un sistema de cuentas nocionales de aportación definida basado en cotizaciones y un tercer segmento de pensiones complementarias ocupacionales financiadas con aportaciones de empleadores, empleados y subvenciones públicas para bajos niveles de renta. Adicionalmente se encuentra la estructura recogida en Hernández González, D. (2011a), que parte de un modelo de tres pilares en el que los K primeros euros de una prestación global anual se financian a cargo de la vía impositiva general y dan lugar a un bloque de protección de carácter independiente, con la existencia de un pilar no contributivo orientado a la cobertura de situaciones de necesidad (o contributivo general si procediese por las características del beneficiario) y, finalmente, un bloque contributivo individual que se encarga del resto de

la prestación global. Aunque aquí nos centremos especialmente en la muerte y supervivencia por la naturaleza de nuestro estudio, este modelo podría traspasarse también hacia el resto de pensiones contributivas.

Gráfico 67. Incorporación de un pilar inicial de K euros por pensión



Fuente: Hernández González, D. (2011a).

La orientación principal de esta medida es la reorganización del sistema de financiación y tiene como valor añadido el establecimiento de menores cargas para la modalidad contributiva por el traslado de una parte del coste hacia el sistema impositivo general a través de un instrumento independiente. El pilar de cuantía K propuesto tiene cierta semejanza con el concepto de *renta básica*²⁴⁵ por cuanto es percibido por igual por todos los beneficiarios de una pensión de la Seguridad Social, independientemente de su clase y de su esfuerzo contributivo, si bien presenta muchas diferencias con aquélla puesto que no se dirige a toda la población ni a cada miembro de la sociedad, sino al individuo que es acreedor de la percepción de una pensión en cumplimiento de unos requisitos legales concretos; no se orienta a personas en situación de necesidad, exclusión social y

²⁴⁵ De la Peña Esteban, J.I. y N. Peña Miguel (2014) recogen los argumentos correspondientes a la renta básica y trabajan con una renta personal básica o "asignación económica sufragada anualmente a cada ciudadano, suficiente para que pueda hacer frente a las necesidades mínimas de supervivencia y acorde a factores tales como la edad, el municipio de residencia, su situación laboral, número de dependientes y la Comunidad Autónoma de residencia". Estos autores cifran la cuantía bruta media individual en 318,37€ mensuales en 12 pagas para toda la población y en 391,22€ mensuales si se abona a los ciudadanos que no son trabajadores activos.

tampoco depende de la renta o patrimonio previos del beneficiario, pero requiere como condición el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser titular de una pensión. Es decir, no es una herramienta universal ni incondicional, pero tampoco es una cuantía discrecional o arbitraria sometida al albur de la situación económica, sino que parte del compromiso de la sociedad en su conjunto con una parte de sus miembros de forma individual; se dirige al ciudadano que cumple los requisitos para ser pensionista en España y, junto a un criterio de raigambre eminentemente social para quienes no han satisfecho un número suficiente de cotizaciones, su justificación filosófica se halla en la propia idiosincrasia de quienes sí las han realizado puesto que previamente han contribuido a la solidaridad que impone la Seguridad Social pero también a la que surge de la vía impositiva, con las que habrá cooperado en mayor o menor medida durante su etapa de trabajador en activo y nada impide que sean ahora principales beneficiarios de la misma. Estos individuos cambian su estatus principal de sustentadores de la solidaridad por el de beneficiarios de la misma.

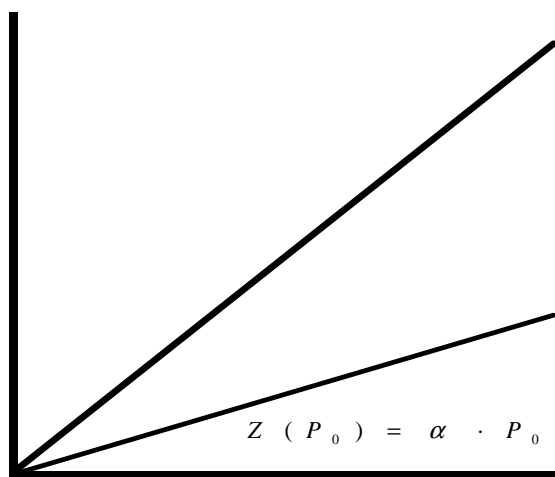
En realidad, el sistema es similar al actual sin más que incorporar un primer pilar que da lugar a una prestación separada, que forma parte del importe global a percibir por el beneficiario pero que no genera un coste adicional porque lo que hace es trasladar su cuantía desde la financiación de la Seguridad Social hacia la financiación del Estado para quienes cumplan los requisitos establecidos para el acceso a una prestación según sea la modalidad de referencia y únicamente desde el momento en que sean beneficiarios de la pensión correspondiente en la misma. Esta dinámica necesita mantener condiciones de acceso para evitar el fraude a costa del esfuerzo impositivo de los ciudadanos y se puede adaptar a diversas prestaciones, aunque su concepción se contempla dentro de un modelo de restricciones y verdadera eficiencia presupuestaria. Además, esta alternativa se ampara bajo la disposición adicional undécima de la *Ley 27/2011, de 1 de agosto*, que recogía que:

Los Ministerios de Trabajo e Inmigración y de Economía y Hacienda (*hoy Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Hacienda y Administraciones Públicas*) y los agentes económicos y sociales, examinarán, en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la conveniencia de establecer posibles escenarios de financiación complementaria de nuestro sistema de Seguridad Social en el medio y largo plazo.

Desde una perspectiva práctica este pilar inicial o básico podría plantearse como un porcentaje determinado de cada prestación o mediante una cuantía fija e igual para todas las prestaciones. En el primer caso tendríamos una función $Z(P_0)$ y un porcentaje

$\alpha \in (0,1)$ que determina la parte de cada pensión inicial P_0 que se sitúa en el nivel básico y la que es cubierta por otros segmentos, tal que $Z(P_0) = \alpha \cdot P_0$.

Gráfico 68. El modelo de distintos pilares con un primer pilar proporcional



En el segundo ejemplo, para una cota K fijada, la función tendría la siguiente expresión $Z(P_0) = K$, $\forall P_0$ y éste es el escenario con el que aquí trabajaremos. El importe del límite K puede determinarse a través del análisis de las restricciones presupuestarias o por métodos estadísticos en función de, por ejemplo, economías de escala y cestas de productos y servicios pero, en nuestra opinión, su valor debe ser igual para todos los beneficiarios y ha de revalorizarse en el tiempo, aun cuando alternativas sobre pilares básicos de este estilo también se pueden valorar según las características personales del beneficiario o su Comunidad Autónoma de residencia (De la Peña Esteban, J.I. y N. Peña Miguel, 2014). Por otra parte, el límite K fomenta la menor dependencia de los resultados del empleo (en un mundo económico donde éste cada vez es menos relevante dentro del conjunto económico) y hace depender la estructura de financiación de la Seguridad Social de una fuente quizás más estable que esta variable (sujeta de por sí a oscilaciones, ciclos y desequilibrios coyunturales o estructurales).

Fijado un importe K igual para todas las pensiones, una primera aproximación al coste de esta medida respecto de las pensiones de muerte y supervivencia parte de la distribución de pensiones por intervalos de coste a julio de 2015, tal que el importe estimado de la nueva prestación en el período t -ésimo se estima en base al número de pensiones N_t^i por cada intervalo i -ésimo, al coste medio \bar{c}_t^i de la pensión en cada intervalo como coste representativo de las pensiones del mismo y al coste K que asume el primer pilar:

$$K_{i,t}^g = \begin{cases} \bar{C}_t^i & \text{Si } K < \bar{C}_t^i \\ K & \text{Si } K \geq \bar{C}_t^i \end{cases} \quad [105]$$

- K Límite del pilar básico de protección.
- $K_{i,t}^g$ Coste asociado a cada unidad de la clase i -ésima en el instante t .
- \bar{C}_t^i Coste medio de la clase i -ésima en el instante t .

que darán lugar al ahorro estimado total en términos relativos A_t :

$$A_t = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (N_t^i \cdot (K_{i,t}^g - K))}{\sum_{i=1}^n (N_t^i \cdot \bar{C}_t^i)} \quad [106]$$

Al establecer como hipótesis un valor fijo para el límite K , el efecto sobre grupos con pensiones medias diferentes (y así lo son la viudedad, la orfandad y el favor de familiares) será desigual para cada uno de ellos, siendo una aproximación al ahorro anual para la modalidad contributiva de la Seguridad Social la que se recoge, para distintos valores de K , en la siguiente tabla:

Tabla 17. Ahorro inicial contributivo estimado en la incorporación de un pilar básico de cuantía K .

K	50	100	200
Viudedad	7,8965%	15,7186%	33,8901%
Orfandad	13,6871%	27,0544%	61,5773%
Favor de familiares	9,8038%	19,3332%	41,9565%
Total	8,3594%	16,6233%	32,9602%

Este porcentaje de ahorro para el modelo contributivo de la Seguridad Social hay que entenderlo como un máximo y requeriría considerar la pensión media utilizada como neta de aportaciones a mínimos; en otro caso, una parte del ahorro no se materializaría porque corresponde al equilibrio de las aportaciones estatales en el juego de los complementos a mínimos y debe valorarse dentro del presupuesto estatal.

En este modelo lo que se produce principalmente es una transferencia de fondos entre fuentes de financiación que se mantienen totalmente separadas e identificadas, pero no se incrementa el coste global de la cobertura contributiva, no se imputa a impuestos generales ningún elemento contributivo ni tampoco existen elementos no contributivos a cargo de la modalidad contributiva. En las pensiones no contributivas la cuantía mínima K

ya está cubierta actualmente por la vía impositiva general, por lo que únicamente se produce un cambio de denominación pero no de coste. Por otra parte, esta vía impositiva ya financia en la actualidad una parte del gasto que correspondería a este primer pilar mediante una parte de los complementos a mínimos. El segmento verdaderamente contributivo de la pensión comienza conceptualmente a partir del límite K (o del complemento a mínimos si éste es superior), con un importe diferente al actual por dicho límite que favorece la mejora de la situación económico-financiera de la modalidad contributiva y del presupuesto de la Seguridad Social al hacerse cargo de menores importes derivados de prestaciones por muerte y supervivencia, siendo un modelo que puede extenderse a otras contingencias pero que separa nítida e inequívocamente las fuentes de financiación y las prestaciones.

Podría argumentarse en su contra la utilidad de su aplicación cuando en el Presupuesto General del Estado el efecto esperado sería tendente a la neutralidad y, en definitiva, lo que habría que hacer es fundir los Presupuestos Generales del Estado con los Presupuestos de la Seguridad Social con el fin de que con la totalidad de los recursos generales se haga frente a los gastos de manera indistinta e independientemente de su naturaleza. En esta medida predomina como objetivo principal la capacidad para soportar con mayor holgura los gastos en materia de seguridad social, aunque en un escenario de alta intensidad del riesgo político como es el caso de España no nos parezca atractiva por cuanto traslada los riesgos de la Seguridad Social al conjunto de la población mientras que ésta se hace cargo de incertidumbre que le es ajena; no se corrigen las ineficiencias del modelo de protección sino que se pueden agravar ya que ante la sensación de existencia de mayores fondos y recursos la tendencia hacia el gasto incontrolado o con escaso sustento técnico es más que probable.

Una justificación filosófica de este pilar es la existencia de servicios y acciones, directas o indirectas, que se realizan a favor de la comunidad por parte del individuo como parte integrante de la misma, con una sensibilidad protectora más amplia de la que se deriva de la Seguridad Social. Podría decirse que es la solidaridad poblacional la que sustituye a una parte de la solidaridad de la Seguridad Social mediante esta propuesta²⁴⁶, si bien el contenido se circunscribe al sistema de pensiones y no va más allá del mismo. No hay nada extraño en que la población general financie con recursos a los pensionistas, de hecho ya lo hace en la actualidad. Sin perder de vista la posible participación en la sociedad presente y futura, el pensionista ha contribuido en el pasado al bienestar

²⁴⁶ Sería más ajustado hablar de solidaridad de los pagadores de impuestos según los desembolsos realizados. Puesto que la propuesta del límite K no es una renta básica ni tiene sus mismos objetivos, no consideramos productivo establecer aquí la comparación entre la población destinataria de ambas posibilidades.

general, no solamente con aportaciones a la Seguridad Social, sino a través de la vía impositiva directa o indirecta. Quienes no lo han hecho –por ejemplo gran parte de los pensionistas de orfandad por impedimento legal- en buena parte lo harán previsiblemente en un plazo próximo o son objetivo de la protección que la sociedad dispensa a las personas en base a la carencia de recursos, quedando para determinadas pensiones de muerte y supervivencia la defensa a cargo del esfuerzo realizado por terceros (aun cuando éste no haya sido equilibrado). En esta línea pudiera ser contemplada como objeción adicional el que, en teoría, personas con menos recursos contribuyesen a una parte de la prestación de las personas con rentas más altas, algo que no debería ser presentado como un anatema en un sistema verdaderamente solidario, si bien para que se dé esa contribución sería primeramente necesario que todas las personas del primer grupo colaborasen con ese soporte mediante su esfuerzo impositivo –lo que no es cierto puesto que no tienen por qué estar obligados a declarar en los impuestos personales-, teniendo en cuenta que, además, contribuirían con menores importes desde la vía impositiva derivada del consumo. Pero lo que es más importante en este sentido es que, según Hernández González, D. *et al.* (2011): “la mayoría de los perceptores de pensiones contributivas lo son, entre otras cosas, por la existencia de cotizaciones previas durante un período determinado y, por tanto, haber desempeñado una actividad profesional anterior que ha ayudado a la financiación del erario público y al diseño, elaboración y ejecución efectiva de prestaciones y servicios de los que se han beneficiado también personas con rentas más bajas”.

Desde el punto de vista económico esta propuesta se justifica en que favorece la sostenibilidad de la modalidad contributiva de la Seguridad Social (y con ella del conjunto del sistema en un modelo presupuestario separado) sin que exista un perjuicio para las cuantías finales de las prestaciones que se conceden a los beneficiarios, que no ven mermados sus derechos y a quienes es de suponer que a priori no les interesa la fuente de las prestaciones sino el importe global de las mismas. Ahora bien, dentro del Presupuesto General del Estado²⁴⁷, para el desarrollo de una iniciativa de este estilo es necesario redefinir la capacidad de la fuente de financiación adicional mediante la vía impositiva u otras fuentes alternativas como la emisión de deuda, si bien seríamos indiscutiblemente más sensibles a la primera opción. No se trataría de incrementar la presión fiscal, pero se haría necesaria la reorientación del presupuesto hacia la eficiencia del gasto y la eliminación de partidas innecesarias o con menos trascendencia que la

²⁴⁷ Según el *Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016*, el total de gastos consolidados es de 436.372,82 millones de euros, de los cuales 274.731,84 pertenecen al Estado, 140.946,40 a la Seguridad Social, 40.574,77 millones a organismos autónomos del Estado y 6.737,70 millones a Agencias y otros organismos, teniendo en cuenta transferencias internas de 26.617,89 millones de euros.

protección social, línea de actuación que no es temporal o esporádica sino que se configura como un pilar de actuación a largo plazo. Puesto que los recursos son limitados es necesario establecer de forma clara e inequívoca el orden de prioridades. Ahora bien, debe dejarse constancia de la dificultad de implantación de esta línea de acción en escenarios económicos recesivos donde el criterio que impera no es el de cobertura de necesidades sociales o el de la exigencia de una disciplina y gestión presupuestaria eficiente, aunque estos dos argumentos deberían tenerse en cuenta independientemente de la valoración o aplicación de esta propuesta de reforma.

Sobre este esquema de trabajo una orientación alternativa pasaría por no integrar el pilar alternativo en el modelo actual, sino establecerlo como un nuevo segmento adicional a éste, dando así pie a la elevación de las prestaciones públicas a los ciudadanos y mejorando su capacidad adquisitiva a cargo de la vía impositiva general (al menos hasta que los precios se reajusten a esa nueva capacidad). Sin embargo, esta opción no ayuda a mejorar la sostenibilidad del sistema contributivo de la Seguridad Social, que seguiría requiriendo reformas adicionales, ni tampoco al equilibrio de los presupuestos generales en momentos de tensión, aunque no hay que perder de vista que la mayor capacidad económica momentánea del beneficiario y el entorno ilusorio que de ello se deriva incentivan el consumo y posibilitan contrarrestar el coste socioeconómico y político de otras reformas adicionales.

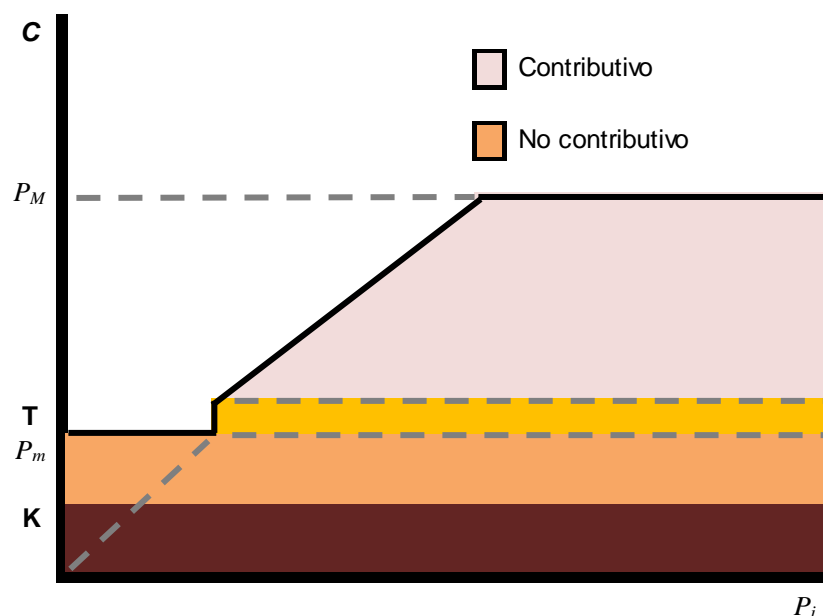
5.2. Una opción práctica dentro de un modelo de varios pilares

Sobre el modelo básico del epígrafe anterior e integrando otras ideas que se han visto en este trabajo, la posibilidad de transformación global del sistema vigente de las prestaciones por muerte y supervivencia acepta la combinación de diferentes pilares basados en distintas idiosincrasias: solidaridad “poblacional”, concepto de necesidad, compensación del daño y equidad contributiva.

En este planteamiento el primer pilar se orienta a dar cuenta de la solidaridad “poblacional” bajo los mismos principios que hemos reflejado en el epígrafe anterior, acompañado de un segundo pilar de carácter no contributivo que se centra en combatir, cuando así procede, las situaciones de pobreza y exclusión social. Podría pensarse en fundir ambos niveles en uno, pero hay que tener en cuenta que el ámbito de actuación del segmento inicial es más amplio que el derivado de la protección no contributiva y, por tanto, es necesario que se encuentren separados. Cuando no procede la cobertura

asistencial, para evitar agravios innecesarios entre modalidades, el segundo pilar es de naturaleza contributiva general.

Grafico 69. Modelo de distintos pilares con un soporte de cuantía K



El pilar adicional T es de carácter contributivo y temporal puesto que se destina específicamente a compensar el daño y el lucro cesante durante un período de tiempo concreto, ya que hemos supuesto que tal perjuicio se diluye conforme se aleja en el tiempo el momento del fallecimiento del causante. Sería una prestación no vitalicia, en forma de pago único o renta temporal (con la asunción de alguno de los presupuestos que hemos seguido en este trabajo de investigación), que puede girar sobre la base reguladora del sujeto causante y es independiente del resto de pilares del modelo. Se dirige específicamente a la compensación de los mayores costes que se originan en la cercanía del fallecimiento del sujeto causante, incluyendo aquí el auxilio por defunción e incluso una hipotética indemnización a tanto alzado para contingencias comunes tal y como se ha contemplado en el capítulo III.

El último segmento es contributivo individual y depende de las aportaciones realizadas a la Seguridad Social. Los dos primeros pilares ya permiten que el beneficiario obtenga una pensión mínima determinada, por lo que la correspondiente a este bloque ha de ser una expresión real de la dimensión contributiva²⁴⁸ y del esfuerzo realizado. Si este pilar parte

²⁴⁸ Sobre este asunto surge el debate acerca de la pensión máxima de la Seguridad Social (mantenimiento o eliminación de las restricciones), que en la actualidad se encuentra constreñida por la existencia de bases de cotización máximas. La pensión máxima soporta la solidaridad desde quienes han realizado mayores ingresos al

de un punto límite (en una alternativa de trabajo en la que no existen los complementos a mínimos al estar contenidos en el segundo pilar), la opción contributiva deberá adaptar la fórmula de la prestación correspondiente; en este enfoque los complementos a mínimos pierden sentido y la cuantía global que en la actualidad se dedica a su cobertura puede ser la base para la financiación parcial o íntegra de la parcela solidaria sustentada con impuestos, lo que permite un mayor ajuste en el tercer pilar pensando siempre en la sostenibilidad global. Las posibilidades de trabajo son muy variadas y se pueden unir a otras acciones de carácter paramétrico ya vistas en este trabajo; como ejemplo práctico supóngase la siguiente matriz de cuantía inicial de las pensiones según los años de cotización N y la base reguladora B_r de un sujeto causante:

N / B_r	800€	1.400€	2.100€
5	$P_{1,1}$	$P_{1,2}$	$P_{1,3}$
15	$P_{2,1}$	$P_{2,1}$	$P_{2,3}$
25	$P_{3,1}$	$P_{3,2}$	$P_{3,3}$

Con la regulación actual, para la pensión inicial de viudedad y por aplicación de la expresión general [4] y del tipo general del 52% a estas bases reguladoras, la cuantía mensual de la misma para los casos $P_{*,1}$ será de 416€, para los perfiles $P_{*,2}$ de 728€ y para los supuestos $P_{*,3}$ de 1.092€; así, es indiferente el tiempo que se ha estado cotizando una vez transcurridas las veinticuatro mensualidades que componen la base reguladora. Para la aplicación a una pensión de orfandad o al favor de familiares se utilizaría un porcentaje general del 20%, es decir, se otorgaría una pensión mensual $P_{*,1}$ de 160€, para los perfiles $P_{*,2}$ de 280€ y para los supuestos $P_{*,3}$ de 420€.

Supóngase ahora un modelo basado en distintos niveles en el que se establece un primer pilar de carácter solidario para todas las pensiones de $K=2.000€$ anuales, un segundo bloque de 3.000€ anuales (no contributivo cuando proceda según las características del beneficiario y contributivo general cuando proceda para evitar el mejor trato en una modalidad que en otra) y, a partir de aquí, un segmento contributivo en base a una expresión que aplique un porcentaje F_I que, como en el resto de las clases de pensiones, tenga en cuenta los años cotizados por el sujeto causante, con un porcentaje mínimo m . Obviamente, aunque aquí por facilidad expositiva se trabaje en años, nada impide el diseño en unidades temporales de distinta duración.

sistema, aun a costa de unos hipotéticos derechos, hacia quienes menores ingresos han efectuado, por lo que su existencia depende de la filosofía que adopta el sistema de protección.

$$F_1 = m + \frac{M - m}{N_M - N_m} \cdot N \quad [107]$$

M: Porcentaje máximo de aplicación a la base reguladora

m: Porcentaje mínimo de aplicación a la base reguladora

N: Número de años cotizados por el sujeto causante

N_M : Número máximo de años cotizados en el cómputo de la pensión

N_m : Número mínimo de años cotizados en el cómputo de la pensión

N_M, N_m, N y M son variables positivas y no nulas tal que $N_M > N_m$ y $M \geq m$, por lo que:

$$\frac{dF_1}{dM} = \frac{N}{(N_M - N_m)} > 0 \quad \frac{dF_1}{dN_M} = -\frac{(M - m) \cdot N}{(N_M - N_m)^2} \leq 0$$

$$\frac{dF_1}{dN_m} = \frac{(M - m) \cdot N}{(N_M - N_m)^2} \geq 0 \quad \frac{dF_1}{dN} = \frac{(M - m)}{(N_M - N_m)} \geq 0$$

$$\frac{dF_1}{dm} = 1 - \frac{N}{(N_M - N_m)} < = > 0$$

El sentido de m es principalmente la separación total del modelo contributivo y del no contributivo, permitiendo el reconocimiento de las diferencias inherentes a ambas modalidades basadas en el esfuerzo realizado por el sujeto causante. Para los siguientes valores: $m=5\%$, $M=40\%$, $N_M=35$ y $N_m=2$, los valores mensuales iniciales de las partidas de carácter contributivo individual son los siguientes:

Tabla 18. Parte contributiva según años cotizados y base reguladora. Viudedad

N / B_r	800€	1.400€	2.100€
5	$P_{1,1} = 82,42€$	$P_{1,2} = 144,24€$	$P_{1,3} = 216,36€$
15	$P_{2,1} = 167,27€$	$P_{2,2} = 292,73€$	$P_{2,3} = 439,09€$
25	$P_{3,1} = 252,12€$	$P_{3,2} = 441,21€$	$P_{3,3} = 661,82€$

que darían lugar a las siguientes pensiones iniciales globales por suma de los conceptos planteados (a excepción de un hipotético beneficio orientado a favorecer la intensidad de la cobertura en las inmediaciones temporales del hecho causante):

Tabla 19. Valor de las pensiones según años cotizados y base reguladora. Viudedad

N / B_r	800€	1.400€	2.100€
$F_1 \cdot B_r$ actual	416,00€	728,00€	1.092,00€
Mínimo absoluto	481,60€	481,60€	481,60€
5	$P_{1,1} = 439,57€$	$P_{1,2} = 501,39€$	$P_{1,3} = 573,51€$
15	$P_{2,1} = 524,42€$	$P_{2,2} = 649,87€$	$P_{2,3} = 796,23€$
25	$P_{3,1} = 609,26€$	$P_{3,2} = 798,35€$	$P_{3,3} = 1.018,96€$

Como se aprecia, los importes iniciales siguen una relación más lógica respecto a las aportaciones verdaderamente realizadas que la que se desprende de la aplicación de la fórmula actual, aunque también se pudiera utilizar ésta. A estas cuantías se le añadiría el importe de compensación por fallecimiento en forma de renta temporal o de cuantía única indemnizatoria si es que dentro del diseño se reconoce el mismo. En definitiva, dentro de un modelo que propugne reconocer el esfuerzo contributivo realizado por el sujeto causante, la solidaridad que refuerza el componente social del sistema debe ser compensada con la incidencia en la equidad en los pilares contributivos, reforzando la relación entre aportaciones y prestaciones²⁴⁹.

En cuanto al procedimiento para las pensiones de orfandad y favor de familiares, aplicando los mismos principios e hipótesis, si bien sobre una base de trabajo que parte de $M = 10\%$ atendiendo a la distinta naturaleza de las prestaciones, tendríamos los siguientes valores iniciales para la parte contributiva individual:

Tabla 20. Parte contributiva según años cotizados y base reguladora. Orfandad y favor de familiares

N / B_r	800€	1.400€	2.100€
5	$P_{1,1} = 46,06€$	$P_{1,2} = 80,61€$	$P_{1,3} = 120,91€$
15	$P_{2,1} = 58,18€$	$P_{2,2} = 101,82€$	$P_{2,3} = 152,73€$
25	$P_{3,1} = 70,30€$	$P_{3,2} = 123,03€$	$P_{3,3} = 184,55€$

²⁴⁹ Ya se ha indicado que la MCVL-2014 no aporta la información suficiente para poder valorar de forma directa y coherente este procedimiento para una población de forma individual. Una posible estimación global con los datos existentes podría partir del período cotizado a efectos de la pensión de jubilación y utilizar un estadístico obtenido a partir de estos datos como estimador medio para la muerte y supervivencia, pero no es ésta una opción fructífera por cuanto la jubilación parte de un número mínimo de años cotizados muy diferente al correspondiente a los requisitos de las prestaciones que aquí se estudian y tampoco sería representativo de los supuestos en los que el fallecimiento del sujeto causante se produce desde una situación de activo.

Los importes correspondientes a la pensión individual global según las hipótesis marcadas son los que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 21. Valor de las pensiones según años cotizados y base reguladora. Orfandad y favor de familiares

N / B_r	800€	1.400€	2.100€
$F_1 \cdot B_r$ actual	160,00€	280,00€	420,00€
Mínimo absoluto	194,30€	194,30€	194,30€
5	$P_{1,1} = 403,21€$	$P_{1,2} = 437,76€$	$P_{1,3} = 478,06€$
15	$P_{2,1} = 415,33€$	$P_{2,2} = 458,97€$	$P_{2,3} = 509,88€$
25	$P_{3,1} = 427,45€$	$P_{3,2} = 480,18€$	$P_{3,3} = 541,70€$

Obviamente, se puede trabajar con diferentes alternativas en las hipótesis y en los importes de los dos primeros pilares, de cuantía fija, para perfilar el modelo con el objetivo de unas mayores cuantías que beneficien a los ciudadanos.

En definitiva, es posible redimensionar el sistema de la Seguridad Social a través de la redefinición de sus segmentos de actuación y su financiación. Entre otros argumentos en su defensa, además de la racionalidad, debe verse que esta línea de trabajo eludiría la toma de decisiones de carácter más drástico, si bien por sí sola no es un dique de contención de los riesgos que gravitan sobre el sistema. Por ello, ante su adopción es obligado reconocer la necesidad de reordenar el modelo de protección y eliminar las múltiples ineficiencias que ahora le afectan, configurando así una tendencia de reforma estructural que se extienda a todos los órdenes del sistema.

6. Consideraciones al Capítulo IV

Las prestaciones de muerte y supervivencia pueden ser estudiadas y rediseñadas desde un enfoque de reformas estructurales que suponen una intensa modificación de la realidad de la cobertura. No es esto, sin embargo, tarea fácil, pues a la esperada resistencia del beneficiario como individuo que espera obtener unos derechos concretos, independientemente de la certidumbre de este hecho, se une la necesidad de dar un giro conceptual al sistema en su conjunto, algo a lo que no existe una amplia sensibilidad en España, no en vano la evolución contemporánea de la muerte y supervivencia se ha basado en “pequeños” ajustes que, sin embargo, han acabado en una amplia falta de cohesión y de racionalidad.

En su diseño actual el factor de sostenibilidad F_s no afecta a las prestaciones de muerte y supervivencia, aun cuando las más importantes de entre ellas son de carácter vitalicio. Si uno de los objetivos fundamentales de este factor es el equilibrio entre generaciones para un mismo importe, es razonable plantear que dicho equilibrio se aplique a todas las prestaciones a largo plazo, aunque esto suponga la necesidad de una adaptación práctica a una idiosincrasia que difiere de la contenida en la jubilación, donde el elenco de edades de entrada del beneficiario es mucho más reducido. A pesar de la mayor dificultad en los presupuestos prácticos y de la previsión sobre los ajustes, la filosofía de la medida y la elusión de una seguridad social *clasista* favorecen la consideración de la aplicación del factor de sostenibilidad a todas las pensiones vitalicias del sistema.

Por otra parte, la transformación del sistema de reparto puro anual y su sustitución, total o parcial, por un modelo de aportación definida es una de las medidas que desde diversos ámbitos académicos y empresariales se valoran positivamente para la Seguridad Social española. Sin embargo, tales alternativas no solucionan por sí solas la incertidumbre que rodea a la protección centrada en la muerte y supervivencia, que se hace más intensa en aquellas situaciones en las que el fondo –capitalizado o notional– no cuenta con un importe suficiente para otorgar una mínima cobertura, ya sea porque una parte de sus recursos ha sido ya liquidada para hacer frente a la concreción de otros riesgos o porque su plazo de constitución ha sido limitado.

De gran interés, tanto desde una perspectiva académica como desde un enfoque práctico, es la modificación de la duración de las vigentes prestaciones haciendo que las pensiones vitalicias pasen a ser temporales, opción de reforma que incide positivamente en la sostenibilidad de la Seguridad Social aunque a costa de los teóricos recursos de los futuros beneficiarios; bajo las hipótesis empleadas en este estudio, el ahorro por cada

nueva generación de esta medida en valor actual actuarial puede estimarse en el 41,7640% para las pensiones de viudedad y en el 20,4796% para las pensiones de orfandad. Por otra parte, este diseño admite la intensificación de la cobertura en las cercanías del hecho causante, dinámica que aquí hemos defendido, y permite la incorporación de herramientas actuariales en la reorganización de la estructura de pagos al aplicar, para la prestación anual como incógnita $-C-$, una expresión del tipo:

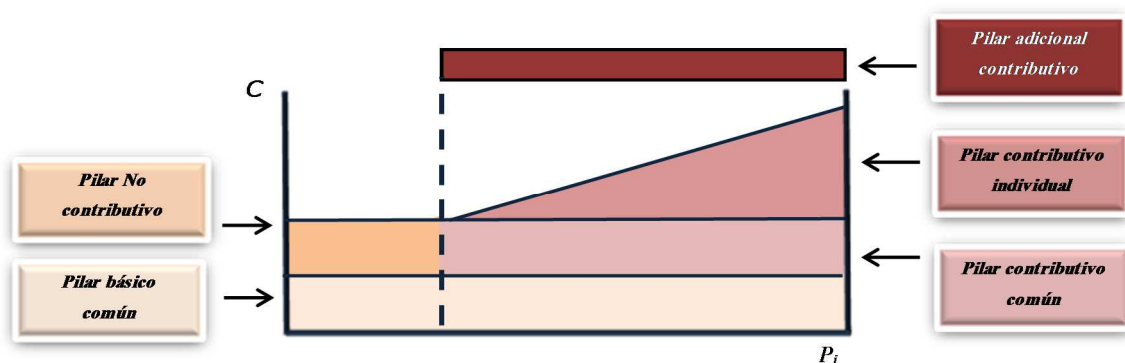
$$P_0 \cdot a_{x:n_1+n_2}^q = (1 + \gamma) \cdot C \cdot a_{x:n_1}^q + C \cdot {}_{n_1}a_{x:n_2}^q$$

Por otra parte, cada vez se habla con más insistencia, especialmente en supuestos debates de carácter técnico, acerca del cambio de modalidad de la muerte y supervivencia desde la opción contributiva a la no contributiva, haciendo con ello que las posibles nuevas altas requieran para su concesión la existencia de requisitos de medios y residencia frente a los ahora existentes acerca del alta y cotización del sujeto causante. Obviamente esta alternativa supone un cambio filosófico muy relevante que restringe el número de nuevos beneficiarios y el coste asociado a las prestaciones, algo muy positivo en términos de sostenibilidad aun cuando se haga mediante la imposición de un nuevo sacrificio a la sociedad. Sin embargo, en nuestra opinión esta opción es el paradigma representativo de cómo la generosidad con las generaciones pasadas restringe los posibles derechos de las generaciones presentes y futuras, pues no hay otro objetivo en ella que la eliminación de costes, siendo notable el giro que se daría a la política general sobre este entramado de apoyo social que hasta hace bien poco se ha centrado únicamente en la mejora de prestaciones. Con las hipótesis empleadas en este estudio de investigación se ha estimado el ahorro de esta alternativa en el primer ejercicio (976,10 millones de euros), sin que el índice de revalorización de las pensiones se vea afectado en el corto plazo por esta acción. Puesto que el ahorro tiene cierto carácter acumulativo ya que en cada ejercicio hay que considerar el derivado de las nuevas incorporaciones en el año pero también el de las correspondientes a ejercicios anteriores afectados por la medida, que ya no generan coste, no hay duda del valor de esta propuesta en términos económicos, pero sí hemos detectado diversos riesgos en términos sociales y filosóficos.

Por último, se ha recogido una alternativa que permite rediseñar las prestaciones al amparo de la redefinición de los pilares de financiación, dando cabida a un nuevo pilar de importe K y carácter solidario para todas las pensiones de la Seguridad Social, que asume alguna de las particularidades de una *renta básica* pero que no se debe confundir con la misma. Esta nueva cobertura mantiene la separación de las fuentes de financiación y permite aliviar los gastos de la modalidad contributiva sin que los intereses

económicos de los beneficiarios sufran modificación alguna, salvo los que se puedan derivar de cambios en la fórmula de cálculo de las pensiones.

Quedando el modelo como se recoge en el gráfico que se muestra a continuación, una transformación de este estilo puede entenderse también positiva dentro de un escenario de reforma conjunto e intenso para todo el sistema.



En definitiva, existen diversas líneas de actuación para una hipotética transformación de la esencia de la muerte y supervivencia para adecuarla a unos objetivos concretos, siendo posible la elección de diversos mecanismos que, de forma independiente o en unión a modificaciones de corte paramétrico, ayuden a perfilar un marco de actuación que haga frente a la manifestación de riesgos de la naturaleza aquí expuesta.



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

-¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí?

-Eso depende mucho de adónde quieras ir –dijo el Gato.

-No me importa mucho adónde... –dijo Alicia.

-Entonces, tampoco importa qué camino sigas –dijo el Gato.

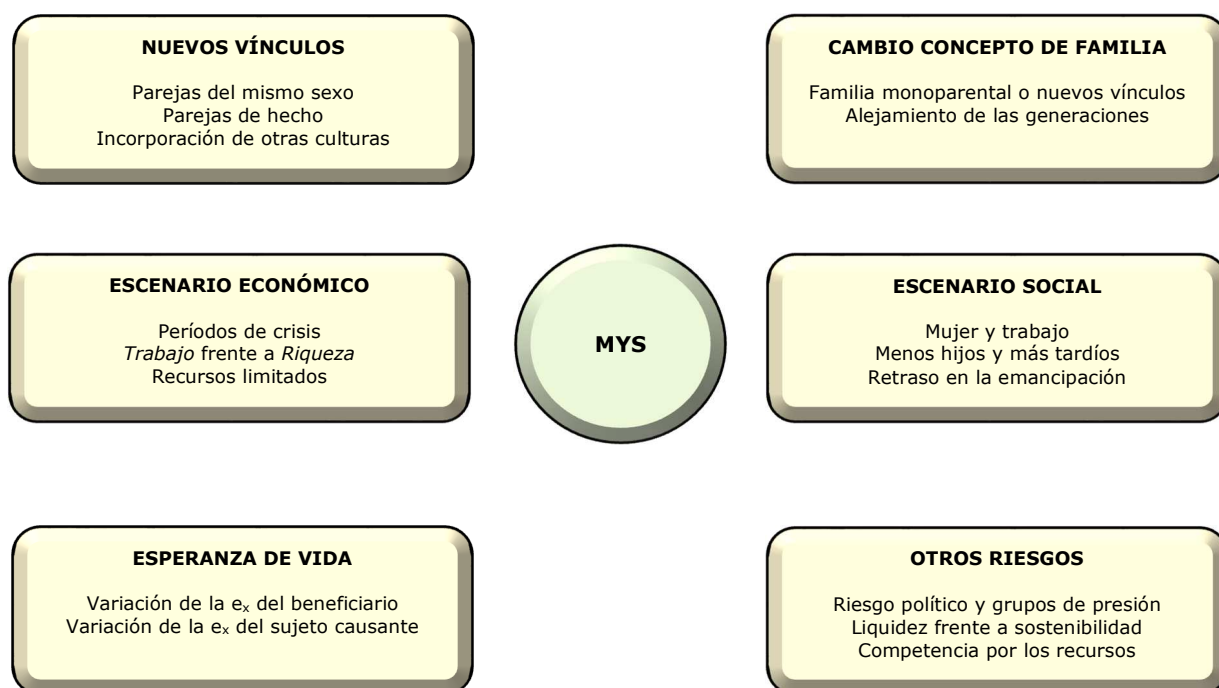
Alicia en el país de las maravillas. Lewis Carroll.

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES

1. CONCLUSIONES FINALES

Las prestaciones de muerte y supervivencia se dirigen a un conjunto muy heterogéneo de beneficiarios que, ante el fallecimiento del sujeto causante, han visto limitados sus recursos disponibles debido a la pérdida de aquellos con los que el difunto contribuía al bienestar común. No son, sin embargo, unas prestaciones que en su concepción actual se dirijan a situaciones de necesidad y, en teoría, se encuadran en la modalidad contributiva de la Seguridad Social, aunque en la práctica son una amalgama de planteamientos contributivos y asistenciales que han desnaturalizado la filosofía de la cobertura y dificultan su caracterización. Así, frente a la consideración de la idiosincrasia del sujeto causante como expresión de la modalidad contributiva, las prestaciones de muerte y supervivencia en España se deslizan hacia el campo no contributivo al dar relevancia a las características de los beneficiarios.

La evolución socioeconómica del país ha ido modificando el escenario en el que se mueven las coberturas a estudio, esperándose una más que probable transformación de la estructura de los beneficiarios en el medio plazo, aunque es difícil conocer la intensidad con la que actuarán las distintas fuentes de incertidumbre.



La materialización de los riesgos que afectan a la Seguridad Social no es sólo cuestión de esta clase de auxilio, sino que menoscaba la seguridad y fortaleza de todo el sistema; tampoco es únicamente un asunto de relevancia de cara a horizontes lejanos: la incertidumbre es ya conocida, la lucha por los recursos es más que previsible y las tensiones a corto plazo, más allá de la liquidez, son una realidad. Por último, la incertidumbre no es sólo de naturaleza económica o demográfica, sino que es también intrínseca al modelo a causa de un ineficiente diseño o debido a la intensidad con la que se presentan los riesgos políticos, no siendo siempre citados éstos en el ámbito académico. De una forma esquemática y tomando la ecuación de equilibrio a largo plazo del sistema de reparto simple (Nieto de Alba, U. y J. Vegas Asensio, 1993), tendríamos:

$$\theta_n = \frac{(F \cdot W_F) \cdot l_{x+r} \cdot (1 + e_{x+r})}{\sum_x^{x+r-1} W_h \cdot l_h}$$

Por ello, dentro de la planificación y la toma de decisiones se ha de considerar la elaboración y utilización de herramientas actuariales que aporten una mayor y más profunda información sobre la realidad de la Seguridad Social. Instrumentos como el balance actuarial, el desequilibrio actuarial, el coste por pensión unitaria o el índice de generosidad, entre otros, facilitarían la transparencia de nuestro modelo de protección y otorgarían una mayor capacidad y conocimiento para poder plantear una seguridad social moderna y adaptada a los numerosos retos a los que tiene que hacer frente.

Son muchas las voces que ante este escenario han planteado la reforma de las prestaciones de muerte y supervivencia, ya sea de forma parcial o total, bajo muy diversos enfoques. En nuestra opinión, el primer aspecto que debe ser tratado sin demora en esta materia es la determinación de los objetivos del modelo de protección en su conjunto y, en particular, de esta clase de prestaciones, para las que debiera haber un propósito claro, inequívoco y concreto hacia el que dirigir un diseño que trate de adaptarse a aquél. Sin esa delimitación de su finalidad, cualquier reforma, por importante que sea, pasará por ser un nuevo remiendo que genere más incertidumbre e ineficiencia al incidir en algún segmento concreto a costa del resto de beneficiarios presentes y

futuros. Por lo tanto, frente a la idiosincrasia actual, es trascendental conocer adónde se quiere llegar para poder decidir el camino a seguir.

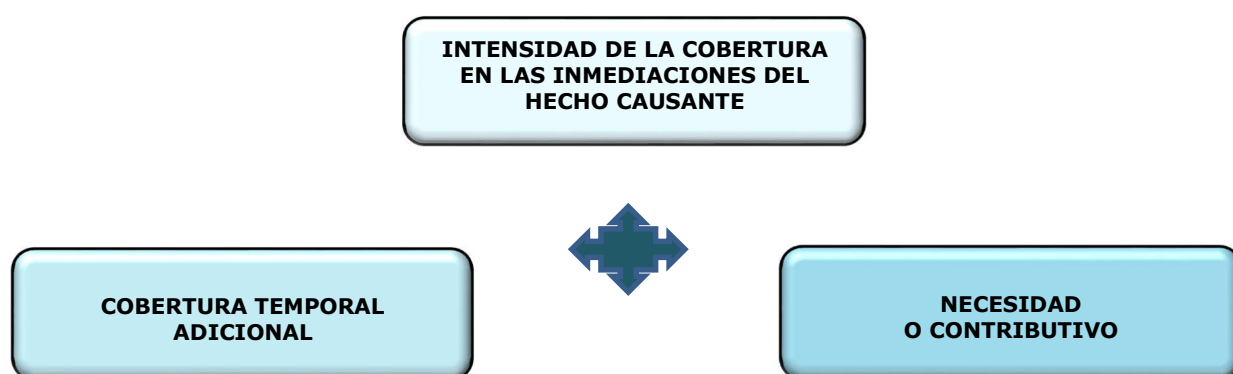
Partiendo de este principio fundamental, la delimitación de los objetivos, y según fuera su esencia y su diseño ideológico vinculado, la reforma de las prestaciones de muerte y supervivencia podría ser una de las transformaciones más importantes de la Seguridad Social española contemporánea al ser una decisión muy relevante en términos económicos y sociales, por lo que será difícil encontrar un espacio común de entendimiento que satisfaga los intereses de los diferentes actores y no requiera sacrificios por su parte. Así, la mitigación de algunos riesgos conllevará inevitablemente la aparición de otros que requerirán una gestión adecuada por parte de los órganos de decisión.

Las directrices que marcan las propuestas de cambio se pueden defender estrictamente desde la óptica de la sostenibilidad del sistema pero, en nuestra opinión, no es éste el único argumento para llevarlas a cabo por cuanto que por sí solo no elimina la ineficiencia existente –solamente la hace más barata en términos económicos- y porque, además, no es un camino a seguir si lo que se consigue es que el posible ahorro en recursos se destine a fomentar otras iniciativas innecesarias o de menor importancia que las correspondientes a los servicios o prestaciones que se limitan o dejan de prestar, pues no hay que olvidar que detrás de un sistema de protección siempre hay personas como destinatarios de la misma. Sea cual sea la situación económico-financiera de la Seguridad Social lo cierto es que, en su diseño actual, las prestaciones de muerte y supervivencia son susceptibles de crítica puesto que presentan un fuerte componente no contributivo en su concepción que, sin embargo, se financia por la vía contributiva; fomentan el desequilibrio entre aportaciones y prestaciones que no se cubre con la solidaridad intergeneracional, presentan un grado de generosidad superior al que resulta de las pensiones generadas a favor de los cotizantes y parece que ni siquiera son capaces de articular un sistema de auxilio totalmente eficaz para los casos más desfavorecidos socialmente.

Determinadas reformas que aquí se proponen se basan principalmente en argumentos actuariales, que trascienden de la aplicación de herramientas vinculadas a esta disciplina y recurren a la búsqueda de una mayor equidad respecto de las contribuciones realizadas como representación de un esfuerzo, que es también solidario, así como a la sensibilidad hacia la sostenibilidad en el largo plazo. Por ello, consideramos irrenunciable establecer una serie de reformas que transformen la idiosincrasia de las vigentes prestaciones ya sea desde un punto de vista paramétrico, ya sea desde un punto de vista estructural.

Este escenario debe partir de la correcta definición de los objetivos de las prestaciones y de la adecuación de la financiación a ellos, para poder posteriormente plantear un diseño que dé soporte a la cobertura del riesgo en base a los principios establecidos. Es fundamental que exista una marcada separación entre las acciones de esencia contributiva frente a las de naturaleza asistencial, que deberán adecuar su filosofía a los requerimientos que para estas contingencias establece la legislación. Si priman las variables vinculadas al sujeto causante las coberturas deben prestarse en la modalidad contributiva; si lo que importa en la esencia de la protección son las características de los beneficiarios, las coberturas deben prestarse en la modalidad contributiva.

Más allá de los planteamientos elementales enunciados hay un espacio de actuación, basado principalmente en reformas de los parámetros de las prestaciones o en la focalización en cada una de ellas de forma individual, que debe ser considerado, ya sea dentro de un proceso de modificaciones más intensas o en ausencia de éstas, por cuanto es importante de cara a dotar a la cobertura de una estructura más razonable que mitigue la actual incidencia negativa en la cohesión del sistema de protección en su conjunto. Filosóficamente el planteamiento general en el que se asienta buena parte del espíritu reformista de este trabajo de investigación parte de proporcionar una cobertura de mayor intensidad en el momento del hecho causante, con una acción temporal adicional dentro del modelo contributivo y, posteriormente, la participación del modelo asistencial para aquellos beneficiarios que, por sus características propias, así lo requieran.



Como soporte de las posibles opciones de reforma, en el presente estudio se han caracterizado las prestaciones de muerte y supervivencia de la Seguridad Social, dando también cuenta de la posibilidad de su evaluación dentro del campo de la teoría del riesgo colectivo y las distribuciones compuestas. Así, un resumen de algunas de las características de las distintas clases de protección es el siguiente:

	VIUDEDAD	ORFANDAD	FAVOR FAMILIAR
Gasto 2014	20.483,51 M.€	1.687,50 M. €	274.10 M.€
Nº Prestaciones 2014	2.356.966	336.331	38.687
Pensión media 2014	626,24€	367,95€	511.88€
% Pensión con mínimo	32,83%	47,49%	55,53%
Edad media entrada	72,53 años	22,70 años	44,91 años
Duración media. Baja	14,99 años	8,83 años	2,59 años
Causante en pasivo	67,84%	39,16%	64,86%

En primer lugar, y desde una óptica individual, el auxilio por defunción debe ser íntegramente reformado, con la propuesta de su desaparición como tal y el apoyo a su integración en un modelo de compensación del daño especialmente en la cercanía del hecho causante. Este hecho es compatible con la creación de una prestación a tanto alzado en contingencias comunes, similar a la existente en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que a su vez debería ser igualmente reformada para igualar las cuantías que se otorgan a los beneficiarios. Esta nueva indemnización a tanto alzado en contingencias comunes es susceptible de ser otorgada por el importe de una base reguladora, quedando para las contingencias profesionales una cuantía superior, por ejemplo, la correspondiente a tres bases reguladoras. En este modelo se aboga por mantener un criterio de responsabilidad empresarial que haga que el fallecimiento genere la obligación de estos pagos a cargo del infractor en materia de riesgos laborales.

Por su parte, el favor de familiares debe plantearse como una prestación verdaderamente contributiva y aceptar un nuevo diseño o, por el contrario, proponerse su traslado íntegro hacia el campo no contributivo puesto que tal es su verdadera naturaleza en el momento actual. En cuanto a la orfandad, aun cuando el escenario de protección vigente no está exento de racionalidad, se aboga por establecer una edad general de límite de percepción equivalente a la de inicio legal de la capacidad de incorporación al mercado laboral, actuando el sistema de protección, que puede trascender de la Seguridad Social, en aquellos supuestos en los que, finalizada la percepción temporal, existan situaciones de necesidad, por ejemplo por determinadas situaciones de discapacidad o para finalización de estudios.

La pensión de viudedad requiere una mayor racionalidad y ha de reconsiderarse cualquier situación de mayor cobertura dentro de la modalidad contributiva al amparo de contextos designados como "de necesidad"; si éstos son susceptibles de apoyo, deberán ser satisfechos con cargo a la fuente de recursos para prestaciones asistenciales. Por otra parte, el tipo aplicable a la base reguladora no debería ser superior al mínimo establecido para pensiones de jubilación y debería dotarse de verdadera relevancia a la carrera de cotización, adecuándose los requisitos de ingresos al sistema que se imputan al sujeto causante con el objetivo de una mayor coherencia del papel que juega la muerte y supervivencia en sus relaciones con otras prestaciones de la misma categoría. Una posibilidad de actuación es la equiparación con los requisitos de cotización para el acceso establecidos en la incapacidad permanente por contingencias comunes mediante una combinación de funciones lineales, tal que las exigencias de aportaciones se abordarían mediante una función del tipo:

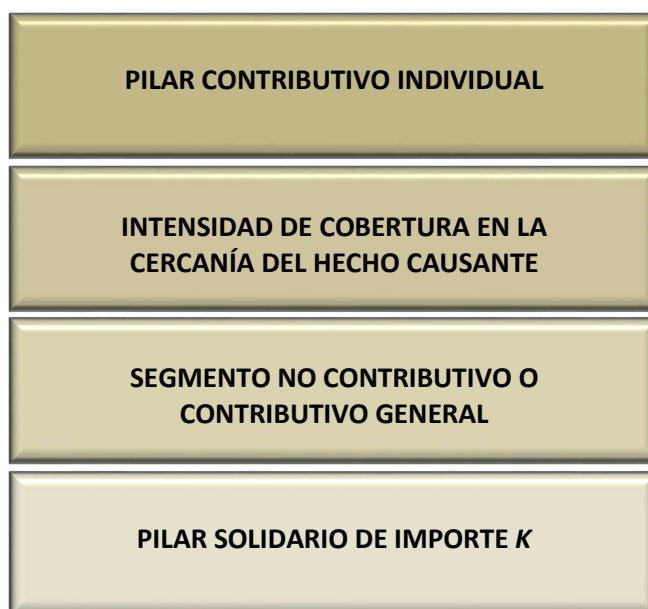
$$F(x) = \begin{cases} x_0 \leq X < x_1 & a_1 \cdot X + b_1 \\ x_1 \leq X < x_2 & a_2 \cdot X + b_2 \\ \dots & \dots \\ \omega > X \geq x_n & a_n \cdot X + b_n \end{cases}, \quad X \in \mathbb{N}^+$$

Junto a las iniciativas de corte más individual, las prestaciones de muerte y supervivencia pueden verse reformadas atendiendo a sus pilares estructurales. Una opción es su incorporación a la modalidad no contributiva, quedando la cobertura únicamente para quienes residan en España y no dispongan de medios de vida suficientes. Puesto que la Seguridad Social como institución autónoma necesita equilibrar sus recursos con sus obligaciones, este planteamiento aboga por transferir riesgos y diferenciar de forma radical hechos y situaciones iguales según el momento de ocurrencia. Esta iniciativa es especialmente atractiva desde una perspectiva eminentemente económico-financiera, por cuanto influye positivamente en la sostenibilidad del sistema en el largo plazo y en la mejora global de la relación entre aportaciones y prestaciones; por ejemplo, en el primer año se ha cuantificado un ahorro estimado de 976,10 millones de euros basado en el traslado de las nuevas altas, pues el de todo el colectivo tiene visos de inconstitucional. Sin embargo, con excepción del actual favor de familiares, esta decisión es muy cuestionable desde un punto de vista filosófico, puesto que no es más que la constatación de que la generosidad con las generaciones del pasado ha sido contraproducente para las generaciones del futuro, mientras que su visión es eminentemente cuantitativa y deja de lado argumentos sociales.

Una alternativa más atractiva desde nuestro punto de vista se basa en la sustitución de las prestaciones de carácter vitalicio por prestaciones temporales, con la posibilidad de incorporar mediante distintas técnicas la intensificación de la protección en las inmediaciones del hecho causante. Bajo un diseño de rentas temporales de 10 años de duración para la viudedad, el ahorro A medido en términos actuariales al inicio del período se cifraría en el 41,7640% para las altas de viudedad de un ejercicio y en el 20,4796% en las altas de orfandad. La utilización de rentas actuariales temporales permitiría también rediseñar la estructura de pagos para una mayor protección tras el fallecimiento del sujeto causante, proponiéndose una temporalidad de 10 años y una protección más intensa durante los dos primeros en base a una equivalencia del tipo:

$$P_0 \cdot a_{x:n_1+n_2}^q = (1 + \gamma) \cdot C \cdot a_{x:n_1}^q + C \cdot {}_{n_1}/a_{x:n_2}^q$$

Por último, las pensiones de muerte y supervivencia se pueden revisar dentro de un modelo de distintos niveles diferente al actual, alcanzando esta propuesta a otras prestaciones como la jubilación o la invalidez. Es por ello factible la incorporación de un pilar inicial de carácter solidario para todas las pensiones, independientemente de su naturaleza, que permita replantear los términos en los que se plasma la solidaridad y, a la vez, favorecer la separación entre los modelos asistencial y contributivo. El diseño general de la propuesta es el que se muestra a continuación:



La nueva estructura mantendría perfectamente separadas las fuentes de financiación y las situaciones a las que otorga protección, fortaleciendo el presupuesto de la modalidad

contributiva de la Seguridad Social por la salida de unas partidas de gasto que pasan a ser financiadas por los Presupuestos Generales del Estado.

Concluimos indicando que las prestaciones de muerte y supervivencia de naturaleza pública no han sido objeto de un profundo estudio y dedicación por parte del mundo académico e investigador, especialmente en sus vertientes socioeconómicas y/o actuariales. A pesar de las dificultades que plantea la falta de información en la materia y de la complejidad en el desarrollo formal de un escenario sujeto a numerosas fuentes de incertidumbre de muy diversa naturaleza, en este trabajo hemos caracterizado estas coberturas y hemos buscado nuevas líneas de investigación desde distintos puntos de vista utilizando, allí donde ha sido posible, argumentos de corte económico y/o actuarial.

Se han presentado alternativas de reforma de la muerte y supervivencia que buscan una mayor racionalidad del espacio de protección y se han recogido opciones de trabajo que fomentan la sostenibilidad de la Seguridad Social, aportando adicionalmente una revisión crítica de algunos supuestos teóricos y de modelos de transformación como el cambio a una modalidad no contributiva.

No nos queda sino esperar que nuestra sociedad evolucione de tal forma que, respetando el compromiso y esfuerzo de los ciudadanos que soportan el modelo social, se apoye también a quienes verdaderamente lo necesitan.

2. BIBLIOGRAFÍA

Alonso Olea, M. (2002): "Sobre la tendencia hacia el carácter asistencial de la protección de la viudedad". *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 39. Págs. 13-19.

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/2002social.htm

Álvarez Jareño, J.A. y P. Muñiz Rodríguez (2010): "Reparametrización de las principales distribuciones de probabilidad en el estudio del número de siniestros debido a las anomalías muestrales en las carteras del seguro de responsabilidad civil de automóviles. Determinación del índice de dispersión". *Anales del Instituto de Actuarios Españoles*, nº 16. Tercera época. Págs. 1-24.

<http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/publicaciones/anales/2010/01-24.pdf>

Argandoña, A.; J. Díaz-Giménez; J. Díaz-Saavedra y B. Álvarez (2013): *El reparto y la capitalización en las pensiones españolas*. Fundación Edad y Vida.

Barr, N. y P. Diamond (2010): *Pension reform: A short guide*. Oxford University Press. Edición en español (2012): *La reforma necesaria. El futuro de las pensiones*. Three Tuns Editions SLNE.

Bosch Príncipe, M.; I. Morillo López; O. Roch Casellas y D. Vilalta de Miguel (2013): "Revalorización de las pensiones españolas del 2012 y 2013: una aplicación implícita del factor de sostenibilidad". *Economía Española y Protección Social*, nº V. Págs. 97-113.

<http://www.eeyps.es/números/v-2013/>

Brimblecombe, S. (2013): "A multivariable definition of adequacy: Challenges and opportunities". *International Social Security Review*, vol. 66, 3-4.

Brown, R.L. (2008): *La financiación óptima de las pensiones de jubilación de la seguridad social y su diseño. Criterios contrapuestos respecto al diseño de las pensiones de la seguridad social y su impacto en la financiación*. Informe Técnico. Asociación Internacional de la Seguridad Social.

Budia Aldana, P.J. (2014): "La escala de porcentajes de la Ley 27/2011: un enfoque actuarial para un nuevo modelo sostenible". *Economía Española y Protección Social*, nº IV. Págs. 199-243.

<http://www.eeyps.es/números/vi-2014/>

Comisión Europea (2015): *Sus derechos de seguridad social*. Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. (Consulta 7 de marzo de 2015).

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=es>

Consejo Económico y Social (2014): "Protección social e ingresos mínimos garantizados". *Cauces. Cuadernos del Consejo Económico y Social*, nº 28. Pág. 55-69.

Daniels, N. (2013): *Intergenerational Equity and the Challenges of an Aging Society*. Conferencia. 10 de diciembre de 2013. Fundación Rafael del Pino.

De la Flor Fernández, M.L. (2008): "La reforma de las prestaciones por muerte y supervivencia ¿una primera fase para su reformulación integral?". *Temas Laborales*, nº 94. Págs. 97-127.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_951_3.pdf

De la Peña Esteban, J.I. y N. Peña Miguel (2014): "Coste de una propuesta de nivel básico de previsión social en España". *Economía Española y Protección Social*, nº VI. Págs. 159-197.

<http://www.eeyps.es/números/vi-2014/>

Devesa Carpio, J.E.; M.M. Devesa Carpio; R. Meneu Gaya; I. Domínguez Fabián; B. Encinas Goenechea y A. Nagore García (2015): *Observatorio sobre el sistema público de pensiones. Distintos estudios*. Grupo de investigación Pensiones y Protección Social.

<http://www.uv.es/pensiones/Factor-de-sostenibilidad.html>

Devesa Carpio, J.E.; M.M. Devesa Carpio, R. Meneu Gaya y A. Nagore García (2010): *La pensión de jubilación: reformulación de la tasa de sustitución para la mejora de la equidad y sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. Resultados basados en la MCVL*. Premios Fipros (2009). Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/FondodeInvestigacio48073/EstudiosFIPROS/Tema1/index.htm

Devesa Carpio, J.E. y M.M. Devesa (2009): *El coste y el desequilibrio financiero-actuarial de los sistemas de reparto. El caso del sistema español*. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. *Working Papers*. WP-EC 2009-09.

Devesa Carpio, M.M. (2007): *El desequilibrio financiero-actuarial del sistema contributivo de pensiones de la Seguridad Social española*. Tesis doctoral. Universidad de Valencia.

Devesa Carpio, J.E.; A. Lejárraga García y C. Vidal Meliá (2002): "El tanto de rendimiento de los sistemas de reparto". *Revista de Economía Aplicada*, nº 30, vol. X. Págs. 109-132.

Elu Terán, A. (2006): "Las primeras pensiones públicas de vejez en España. Un estudio del Retiro Obrero, 1909-1936". *Revista de Historia Industrial*, nº 32. Año XV, 3.

Fernández Domínguez, J.J. y M.R. Martínez Barroso (2011): *Pensiones de viudedad y orfandad. Últimas reformas y cuestiones pendientes*. Colección laboral, nº 199. Tirant Lo Blanch.

Ferrara, C. y G. Ferrara (2014). *The sustainability of pension systems: new indicators*. 30th International Congress of Actuaries. Washington D.C.

García Murcia, J. y M.A. Antonia Castro Argüelles (Dir.) (2008); *La previsión social en España: del Instituto Nacional de Previsión al Instituto Nacional de la Seguridad Social*. Premios Fipros 2007. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

García Viña, J. y M.P. Rivas Vallejo (1996): *Las prestaciones de supervivencia en el sistema de la Seguridad Social*. Cedecs Editorial. Barcelona.

Gete Castrillo, P. (2001): "Compatibilidad en la pensión de viudedad en nuestro sistema de seguridad social. Algunas ideas para un debate necesario". *Foro de Seguridad Social*. Asociación de Técnicos de Seguridad Social. Febrero.
<http://atass.org/foross/03/Foro%20SS%2003.pdf>

Gil Fana, J.A.; A. Heras Martínez y J.L. Vilar Zanón (1999): *Matemática de los seguros de vida*. Editorial Mapfre.

González Ortega, S.; C. Blasco Rasero; M. García Muñoz; M. Arenas Viruez; M.J. Gómez-Millán Herencia; O. García coca; S. de Soto Rioja; C. Carrero Domínguez; S. Barcelón Cobedo; A.M. Moreno Márquez y M. Navas-Parejo Alonso (2012): *Las prestaciones sociales de derecho derivado. Análisis de las prestaciones de viudedad y orfandad y en favor de familiares en el marco de los sistemas europeos de seguridad social*. Premios Fipros 2010. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
<http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/168519.pdf>
<http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/168520.pdf>

Gorelli Hernández, J. (2005): "Seguridad Social y Protección familiar". *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 59. Págs. 35-74.

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/59/Est02.pdf

Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas (2013): *Un sistema de cuentas nocionales para España. Por un sistema de pensiones solidario, sostenible y transparente*. Informe inicial (2011): *Cuentas personales: hacia un sistema de pensiones transparente y sostenible*.

Hernández González, D. y J.E. Devesa Carpio (2015): "El auxilio por defunción en la seguridad social española: pasado, presente y futuro". *Trabajo y Seguridad Social*, nº 388. Julio. Centro de Estudios Financieros.

Hernández González, D.; A. de las Heras Camino y B. Gosálbez Rauli (2014a): *Enfoque actuarial para la implantación del factor de sostenibilidad en el sistema público de pensiones en España: nuevos retos para los sistemas complementarios*. Ayudas a la investigación en seguros y gerencia de riesgos 2012. Fundación Mapfre.

Hernández González, D.; A. de las Heras Camino y B. Gosálbez Rauli (2014b): "The sustainability factor and the Spanish public pension system". *Economía Española y Protección Social*, nº VI. Págs. 119-157.

<http://www.eeyps.es/números/vi-2014/>

Hernández González, D. (2013): "La generosidad como herramienta de información individual de los sistemas de seguridad social". *Anales del Instituto de Actuarios Españoles*. Tercera época, nº 19. Págs. 177-198.

<http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/publicaciones/anales/2013/177-198.pdf>

Hernández González, D.; C.F. Hernández León y M. Sanabria Borrego (2011): *La viudedad del futuro. Estudio y propuestas de reforma global para garantizar su sostenibilidad*. Premios Fipros 2010. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/FondodeInvestigacio48073/EstudiosFIPROS/tema2/index.htm

Hernández González, D. (2011a): *La prestación contributiva de jubilación en la Seguridad Social. La generosidad del sistema y su reforma en base a la transformación de las fuentes de financiación*. In Memoriam. Gregorio González Gómez y Juan Andrés González González. III Congreso Ibérico de Actuarios. Madrid. Julio.

Hernández González, D. (2011b): *La sostenibilidad de la Seguridad Social y los sistemas de financiación*. En *La reforma de las pensiones*. Capítulo 6. Editorial Laborum.

Hernández González, D. (2009): "Los sistemas de reparto puro y de capitalización individual como base de la prestación de jubilación contributiva". *Economía Española y Protección Social*, nº I. Págs. 113-128.

<http://www.eeyps.es/números/i-2009/>

Kahale Carrillo, T.D. (2011): *La reestructuración de la pensión de viudedad a las nuevas situaciones sociales y las nuevas formas de familia y convivencia: propuestas de reforma*. Premios Fipros 2010. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/FondodeInvestigacio48073/EstudiosFIPROS/tema2/index.htm

López Zafra, J.M.; M.B. Gosálbez Raull; S. Pérez Cobo y E. López Díaz (2010): *Problemática de la pensión de viudedad. La protección social de las personas que se han dedicado total o parcialmente a las labores del hogar*. Premios Fipros 2009. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

<http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/144088.pdf>

Martínez Aguado, J. (1992): *La Seguridad Social: elementos, propiedades y relaciones*. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.

<http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/S/2/S2012301.pdf>

Martínez Noval, L. (2013): "El entorno de la secularmente inacabada reforma de la Seguridad Social". *Economía Española y Protección Social*, nº V. Págs. 5-34.

<http://www.eeyps.es/números/v-2013/>

Martínez Noval, L. (2005): *¿Pensiones públicas o privadas?* Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo.

Meil Landwerlin, G. (2003): "La pensión de viudedad en el contexto del cambio familiar". *Arbor*, CLXXVI, 694. Octubre. Págs. 367-397. doi:10.3989/arbor.2003.i694.733.

<http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/733>

Meneu Gaya, R; J.E. Devesa Carpio; M.M. Devesa Carpio; I. Domínguez Fabián; A. Nagore García y B. Encinas Goenechea (2013): "El factor de sostenibilidad: diseños alternativos y valoración financiero-actuarial de sus efectos sobre los parámetros del sistema". *Economía Española y Protección Social*, nº V. Págs. 63-96.

<http://www.eeyps.es/números/v-2013/>

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1986): *Accidentes de trabajo. Pensiones por invalidez permanente o muerte. Normas y tarifas*. Biblioteca de textos legales. Serie Seguridad Social.

Monereo Pérez, J.L. (2013): "La racionalidad jurídica de los sistemas privados de pensiones". En *Público y Privado de la Seguridad Social*. Capítulo XXVIII. Ediciones Laborum. Págs. 383-436.

Moreno Ruiz R.; O. Gómez Pérez-Cacho y E. Trigo Martínez (2005): *Matemática de los seguros de vida*. Editorial Pirámide.

Navarro López, V. (2013): "Las pensiones no están en peligro". En prensa. Diario *El País*. 06/02/2013.

http://elpais.com/elpais/2013/01/30/opinion/1359549279_386516.html

Nieto de Alba, U. y J. Vegas Asensio (1993): *Matemática actuarial*. Editorial Mapfre.

Ojeda Avilés, A. (2008): "Reformulación de la pensión de viudedad". *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Extra Seguridad Social*. Págs. 333-342.

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/ExtraSS-08/default.htm

Ojeda Avilés, A. (2005): "La Seguridad Social y su futuro: ¿Ajuste o reconversión?". *Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración*, nº 59. Págs. 15-33.

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/2005seguridad.htm

Organización Iberoamericana de Seguridad Social y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (2014): *Banco de información de los sistemas de seguridad social iberoamericanos*. <http://www.oiss.org> (Consulta: 7 de marzo de 2015).

Panjer, H.H. y G.E. Willmot (1992): *Insurance risk models*. Society of actuaries.

Ramírez Bendala, M.D. (2013): *El auxilio por defunción: una prestación denostada*. En Chocrón Giráldez, A.M. (coordinadora): *Buenas prácticas jurídico-procesales para reducir el gasto social*. Ed. Laborum. Págs. 69-86.

Rico Letosa, S. y F.J. Magaña Balanza (2000): "Ampliación de los límites de edad para la percepción de pensión de orfandad tras la Ley 24/97 de Consolidación y Racionalización del sistema de Seguridad Social". *Proyecto social: Revista de relaciones laborales*, Nº 8. Págs. 121-134.

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=229763>

Riester, W. (2011). "Reforma alemana de pensiones". *Claridad*. Otoño/Invierno. Cuarta etapa.

<http://portal.ugt.org/claridad/numero22/p71.pdf>

Rodríguez Iniesta, G. (2011): *La pensión de viudedad*. En *La reforma de las pensiones*. Capítulo 30. Editorial Laborum. Págs. 477-539.

Rodríguez Iniesta, G. (2009): *Las prestaciones por muerte y supervivencia: viudedad, orfandad y favor de familiares*. Ediciones Laborum.

Rodríguez Iniesta, G. (2006): *La viudedad en el sistema español de seguridad social*. Ediciones Laborum.

Sáez de Jáuregui Sanz, L.M. (2013): "Dos modelos de sostenibilidad en el sistema de reparto de las pensiones de jubilación de prestación definida". *Economía Española y Protección Social*, nº V. Págs. 263 – 322.

<http://www.eeyps.es/números/v-2013/>

Sampedro Corral, M. (2008): "Modificaciones introducidas por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre en la prestación de muerte y supervivencia". *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 74. Págs. 105-128.

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/74/est05.pdf

Samuelson, P.A. (1958): "An exact consumption-loan model of interest with the social contrivance of money". *The Journal of Political Economy*, vol. 66, issue 6. Págs. 467-482.

Sanabria Borrego, M. y D. Hernández González (2010): "La pensión de viudedad. Reforma desde una perspectiva económica a través de la relación entre obligaciones y derechos consumidos". *Economía Española y Protección Social*, nº II. Págs. 215-238.

<http://www.eeyps.es/números/ii-2010/>

Stiglitz, J.E. (1986): *Economics of the Public Sector*. Edición en español: *La economía del sector público* (1995). 2ª Edición. Antoni Bosch (Ed.).

Thullen, P. (1974): *Técnicas actuariales de la Seguridad Social. Regímenes de las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes*. Colección Informes de la Organización Internacional de Trabajo, nº 43. Edición española (1995): Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Valenciano Sal, A. (2011): "Una imprescindible reforma en el sistema de pensiones: la pensión de viudedad, <su estado de necesidad hacia la dependencia y sus derivados>". *Temas laborales*, nº 109. Págs. 111-140.

Valero, D.; M. Artís; M. Ayuso y J. García (2011): "Una propuesta de reforma del sistema de pensiones español basada en un modelo de contribución definida nocional". *Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa*. Junio. Págs. 91-113.

<http://www.upo.es/RevMetCuant/art.php?id=50>

Varios autores (2013): *Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones y votos particulares emitidos al respecto*. 7 de Junio.

<http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/BA253188-A40C-47C4-9FCC-06D04C65EC26/238803/informesostenibilidadpensiones.pdf>

Varios autores (2009): "Mesa Redonda. Retos del Pacto de Toledo". *Economía Española y Protección Social*, nº I. Págs. 13-25.

<http://www.eeyps.es/números/i-2009/>

Vicente Merino, A.; T. Martínez Aguado; J. Martínez Aguado; M.J. Calderón Milán y J. Puga Fernández (2011): *La calidad de vida de la población pensionista a través del indicador "tasa de sustitución" de los salarios*. Premios Fipros 2010. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

<http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/161478.pdf>

Vicente Merino, A. (2002): "Perspectivas del Estado del bienestar". *Actuarios*, nº 20.

<http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/publicaciones/revista/Revista20/bienestar.htm>

Vicente Palacio, A.; I. Ballester Pastor; G. Gracia Alegría; S. Ruano Albertos (2007): *La pensión de viudedad: Marco jurídico para una nueva realidad social. Cómo reformular la pensión de viudedad de forma que mejor cumpla el carácter de prestación sustitutiva de las rentas perdidas como consecuencia del fallecimiento del causante*. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Premios Fipros (2006).

http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/FondodeInvestigacio48073/EstudiosFIPROS/tema2/index.htm

Vicente Palacio, A. (2010): *La protección de la viudedad en el ámbito de los países miembros de la Unión Europea. Algunas propuestas para la reforma de la protección de la viudedad en España al hilo de la anunciada próxima reforma*. En *El Futuro Europeo de la Protección Social*. Editorial Laborum. Págs. 333-371.

Vidal Meliá, C.; M. García García y M. Regúlez Castillo (2011): *La información global e individual del sistema español de seguridad social: propuestas para su mejora*. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Premios Fipros (2010). Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

<http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/161480.pdf>

Vidal Meliá, C.; J. E. Devesa Carpio y A. Lejárraga García (2002): "Cuentas nocionales de aportación definida: fundamento actuarial y aspectos aplicados". *Anales del Instituto de Actuarios Españoles*, nº 8. Tercera época. Págs. 137-186.

<http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/publicaciones/anales/anales.htm#2002>

Vilar Zanón, J.L. y J. Vegas Asensio (1998): "Estimación de la provisión de estabilización y del recargo técnico sobre primas a partir del ajuste de una distribución de Poisson compuesta para el número de siniestros". *Anales del Instituto de Actuarios Españoles*, nº 4. Tercera época. Págs. 69-91.

<http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/publicaciones/anales/1998/VILAR.pdf>

[*] Todos los enlaces están operativos a 1 de septiembre de 2015

Anexo I. Parámetros en el cálculo de la pensión inicial

Como se ha expuesto en el capítulo I, de forma general la cuantía de la pensión inicial de la Seguridad Social (contingencias comunes) puede partir de la expresión [4]:

$$P_0 = (F_1 + F_2) \cdot F_3 \cdot (F_4 + F_5)$$

Es en la pensión de jubilación donde los coeficientes F_2 y F_3 , que tienen origen en escenarios independientes, toman principalmente sentido, mientras que para la jubilación a la edad general o aquellas prestaciones que dependan de ésta y para pensiones vinculadas a otras contingencias con sujeto causante en situación de activo se tiene que $F_2=0$ y $F_3=1$. También en referencia a la prestación de jubilación, una vez finalizado el período de adaptación transitorio establecido en la *Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social*, la determinación de F_1 según el número de meses cotizados m sería²⁵⁰:

$$F_1 = \begin{cases} m < 180 & 0 \\ m = 180 & 0,5 \\ 181 \leq m \leq 428 & 0,5 + 0,0019 \cdot (m - 180) \\ 429 \leq m < 444 & 0,9712 + 0,0018 \cdot (m - 428) \\ m \geq 444 & 1 \end{cases} \quad [108]$$

Para otras prestaciones F_1 tiene un espectro de valores más reducido que depende de la casuística del sujeto causante o del beneficiario. En la pensión de viudedad el valor general es 0,52 independientemente del tiempo cotizado por el sujeto causante, con algunas excepciones basadas en la situación del beneficiario en las que se llega hasta un valor del 0,7.

En cuanto a los factores F_2 y F_3 , que exclusivamente toman forma en la pensión de jubilación, para una edad de jubilación x_j^g establecida legalmente y una edad de jubilación real x_j , sus valores tienen en cuenta el número n de años completos

²⁵⁰ Véase el artículo 4 de la *Ley 27/2011, de 1 de agosto*, para el período transitorio. Hay que tener en cuenta que, según se recoge en el mismo artículo, de cara a la determinación del tiempo cotizado: "Para el cómputo de los años y meses de cotización se tomarán años y meses completos, sin que se equiparen a un año o un mes las fracciones de los mismos".

cotizados²⁵¹. Para F_2 , por cada año completo cotizado entre x_j^g (cumpliendo todos los requisitos para la jubilación teórica) y x_j , según los años completos cotizados en x_j^g :

$$F_2 = \begin{cases} \begin{matrix} x_j > x_j^g & n < 25 & 0,0200 \cdot (x_j - x_j^g) \\ & 25 \leq n \leq 37 & 0,0275 \cdot (x_j - x_j^g) \\ & n > 37 & 0,0400 \cdot (x_j - x_j^g) \end{matrix} \\ x_j \leq x_j^g & 0 \end{cases} \quad [109]$$

Para F_3 , por cada trimestre o fracción que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación, según los años completos cotizados en x_j :

$$F_3 = \begin{cases} \begin{matrix} x_j < x_j^g & n < 38,5 & 1 - 0,01875 \cdot RD + \left[(x_j^g - x_j) \cdot 4 \right] \\ & 38,5 \leq n < 41,5 & 1 - 0,01750 \cdot RD + \left[(x_j^g - x_j) \cdot 4 \right] \\ & 41,5 \leq n < 44,5 & 1 - 0,01625 \cdot RD + \left[(x_j^g - x_j) \cdot 4 \right] \\ & n \geq 44,5 & 1 - 0,01500 \cdot RD + \left[(x_j^g - x_j) \cdot 4 \right] \end{matrix} & \text{(I)} \\ \\ \begin{matrix} & n < 38,5 & 1 - 0,02000 \cdot RD + \left[(x_j^g - x_j) \cdot 4 \right] \\ & 38,5 \leq n < 41,5 & 1 - 0,01875 \cdot RD + \left[(x_j^g - x_j) \cdot 4 \right] \\ & 41,5 \leq n < 44,5 & 1 - 0,01750 \cdot RD + \left[(x_j^g - x_j) \cdot 4 \right] \\ & n \geq 44,5 & 1 - 0,01625 \cdot RD + \left[(x_j^g - x_j) \cdot 4 \right] \end{matrix} & \text{(II)} \\ x_j \geq x_j^g & 0 \end{cases} \quad [110]$$

FD⁺ Función que aproxima el valor de una fracción al número entero superior

con la particularidad de diferentes valores según la casuística: jubilación anticipada que proviene de una causa ajena a la voluntad del beneficiario (I) o de su propia voluntad (II).

²⁵¹ Véanse el artículo 5 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, y la modificación posterior realizada por el artículo 6 del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, y la disposición transitoria tercera de la LGSS, ya que, entre otros aspectos, como norma general quienes fuesen mutualistas a 1 de enero de 1967 podrían jubilarse voluntariamente con 60 años con un 8% de penalización por cada año o fracción que les falte en el momento del hecho causante respecto a la edad de 65 años.

Anexo II. La Muestra Continua de Vidas Laborales de la Seguridad Social. Tratamiento de las observaciones muestrales

Entre otras fuentes de partida, este trabajo utiliza como base para algunos estudios la *Muestra Continua de Vidas Laborales 2014* (MCVL-2014), que facilita la Seguridad Social²⁵². La MCVL es un instrumento valioso de cara a la transparencia y el análisis de la Seguridad Social, pues ofrece datos reales que pueden ser muy útiles para la plasmación práctica de un corpus teórico o para contrastar hipótesis. Sin embargo, de cara al estudio completo de la Seguridad Social presenta importantes limitaciones, que se entienden de relevancia en lo que respecta a las prestaciones de muerte y supervivencia.

Así, la muestra ofrece datos de cotizantes y beneficiarios de prestaciones que se recogen en sendas bases de datos, pero ambas se obtienen mediante procesos independientes y, por tanto, es posible que cotizantes que sean sujetos causantes de prestaciones y se encuentren en su correspondiente muestra no puedan ligarse con sus beneficiarios pues éstos no se encuentran en la base de prestaciones, mientras que, a su vez, beneficiarios de pensiones de muerte y supervivencia no pueden vincularse a sus sujetos causantes de la base de cotizantes, aun cuando la relación exista, puesto que tales cotizantes no han sido seleccionados en la muestra correspondiente. No existe por tanto la posibilidad de enlazar de forma inequívoca y libre de error la información del sujeto causante y la de sus beneficiarios, pero tampoco la de distintos beneficiarios de prestaciones de muerte y supervivencia relacionados con un mismo sujeto causante, lo que limita enormemente el campo de actuación y en nuestro trabajo de investigación ha impedido emprender diversos análisis. Por otra parte, la base de prestaciones busca la representatividad sobre el conjunto de la población (o pensiones), pero no garantiza la representatividad para cada una de las clases de pensiones tratadas (especialmente cuando tienen diferentes pesos sobre el total), mientras que las prestaciones sobre las que se ofrece información son las denominadas *pensiones*, quedando fuera el auxilio por defunción, la indemnización a tanto alzado y, en teoría, el subsidio del favor de familiares.

El mayor interés de la MCVL-2014 de cara al análisis de las prestaciones de muerte y supervivencia se centra en el campo de la estadística descriptiva pero, puesto que la Seguridad Social ofrece información pública con datos basados en la población (y no en una muestra) para un buen número de variables, incluso este interés queda algo desdibujado. Aun así, puede considerarse también un buen apoyo para estudios muy concretos de distinta naturaleza que requieran un número mínimo de datos como soporte de los argumentos teóricos e hipótesis a contrastar.

²⁵² http://www.seq-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Muestra_Continua_de_Vidas_Laborales/index.htm

Las limitaciones citadas hacen que todos los resultados que se ofrezcan en este trabajo en base a la MCVL-2014 deban ser valorados con las oportunas cautelas, si bien ello no los invalida directamente sino que los reconduce a un escenario susceptible de confirmación o refutación a través de estudios más amplios. Además, otros caminos en la investigación quedan abiertos hasta disponer de un conjunto de datos adecuado a la naturaleza del estudio en cuestión. Finalmente, la petición que el autor ha hecho a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para obtener una base de datos más eficiente de cara a las prestaciones de muerte y supervivencia y su estudio no ha sido atendida por la Administración.

En este trabajo de investigación el principal valor añadido obtenido de la MCVL-2014 se ha centrado en la obtención de datos estadísticos descriptivos e información auxiliar que ha permitido un mayor conocimiento de las prestaciones y de sus beneficiarios así como realizar estimaciones concretas como soporte de análisis más amplios. Dentro del complejo tratamiento previo de datos practicado se han realizado sobre la base de datos de *Prestaciones* (4.496.674 observaciones iniciales y 42 variables) los siguientes ajustes básicos de cara a obtener un conjunto de observaciones sobre el que plantear los análisis allí donde ha sido posible:

1. En primer lugar se han seleccionado las clases de pensión correspondientes a muerte y supervivencia (*viudedad con resolución provisional, viudedad en general, viudedad MUNPAL, orfandad con resolución provisional, orfandad simple, orfandad absoluta y favor de familiares*). El número de observaciones seleccionadas es de 1.358.080.
2. Se han seleccionado aquellas prestaciones que no tienen como característica ser una prestación complementaria, quedando fuera aquellas que corresponden a *ayuda por acción social, complemento de acción social, complemento de acción social ISM, mutualidad de funcionarios, mutualidad de funcionarios del 70 y fondo de la mutualidad de previsión*. La muestra queda así con 1.354.122 observaciones.
3. A continuación se han separado por un lado las observaciones correspondientes a las prestaciones del SOVI y, por otro, las del resto de regímenes. La muestra correspondiente al SOVI tendría 17.636 observaciones, mientras que la muestra correspondiente a prestaciones NO SOVI presenta 1.336.486 observaciones y es la que se ha utilizado en este estudio como base fundamental en el análisis.

4. Desde la base NO SOVI se han eliminado las 452 observaciones de prestaciones que son de carácter provisional o pertenecientes a la viudedad de la MUNPAL. Todo ello da lugar a unas bases de datos parciales de 1.118.993 observaciones que corresponden a 97.437 pensionistas de viudedad, a 191.691 observaciones que corresponden a 21.003 pensionistas de orfandad y 25.350 observaciones que corresponden a 4.357 pensionistas de favor de familiares.
5. Para evitar problemas en la transferencia de datos, en la base de datos de *Personas* se ha eludido incorporar la información sobre el país de nacimiento y el nivel educativo, así como el sexo del décimo conviviente en la tabla *Convivientes*. La base de datos *Personas* consta de 1.178.730 observaciones, mientras que la base de datos de *Convivientes* tiene 1.136.566 observaciones.

Tras la obtención y primera depuración de las bases de datos de partida, en un segundo paso se han realizado otras acciones encaminadas al tratamiento de datos cuando así ha sido necesario:

1. Se ha calculado la edad del individuo a cierre del ejercicio 2014 si vivía a esa fecha o, si procede, a la edad a su fallecimiento (anterior al 1 de enero de 2015). Puesto que el día de nacimiento o fallecimiento no se obtiene de la base de datos se supone que ambos sucesos ocurren en el mismo momento dentro del mes de referencia. La edad en otras fechas de trabajo se obtiene por el mismo método. En aquellos supuestos en los que se utilice la fecha de nacimiento y la muestra no contenga un dato válido, se elimina la observación. Se procede de igual forma cuando sea necesario utilizar el importe de la base reguladora y éste no sea un número positivo mayor que cero o si el tipo aplicable a la base reguladora es nulo. La fecha de alta de una prestación se considera a través de la fecha de efectos económicos (fecha en la que nace el derecho al cobro de la prestación), que puede diferir de la del hecho causante, si bien el criterio administrativo utiliza en sus estadísticas la fecha de alta en nómina, que puede ser posterior.
2. Para el cálculo de las altas de un ejercicio y los análisis que las utilizan como población de referencia, como norma general se han seleccionado las observaciones que tienen este año en la fecha de efectos económicos de la pensión. Para las altas del año 2014 y teniendo en cuenta que se han eliminado las 19 observaciones con fecha de efecto en 2014 pero con el año del dato en 2013 (año natural al que se refieren algunos datos históricos del registro), se han obtenido 6.506 observaciones: 5.220 correspondientes a viudedad, 1.075 correspondientes a orfandad y 207 correspondientes a favor de familiares.

3. De cara al cálculo del número de pensiones, de la naturaleza del origen (activo/pasivo) y de la duración (vitalicia/temporal) se ha acudido a la situación inicial de cada pensión. De cara a clasificación por duración se obvian las 4 observaciones que tienen clasificación de orfandad según la variable *clase de prestación* pero no la tienen según la variable *prestación vitalicia*. Por otra parte, en el cálculo del tipo aplicado a la base de cotización, en la viudedad se selecciona la observación más reciente (para obtener así el tipo más cercano en el tiempo tras los cambios legales habidos), mientras que en la orfandad y el favor de familiares se selecciona el tipo en origen para no incorporar posteriores imputaciones derivadas del porcentaje no distribuido en viudedad.

Respecto a las cuestiones metodológicas seguidas en este trabajo de investigación en relación con el tratamiento de la MCVL-2014, se señalan aquí las principales, aunque a continuación se ha recogido el código de programación básico utilizado:

1. En el capítulo III y respecto a los convivientes se ha calculado su edad teniendo en cuenta que, como norma general, es la correspondiente al cierre del ejercicio 2014, excepto en aquellas pensiones que han salido previamente del sistema, calculándose entonces la edad a esta fecha.
2. En el capítulo III se ofrecen datos sobre la duración media basada en las pensiones en baja. Se omite la duración media del conjunto muestral puesto que obligaría a incorporar los datos de las pensiones de alta muy reciente.
3. En el capítulo III se ha realizado el cálculo de la base reguladora media de las altas de pensiones de 2014. Hay que destacar que en el auxilio por defunción pueden existir beneficiarios que se derivan de un mismo sujeto causante; puesto que no existe posibilidad de determinar y relacionar los beneficiarios de un mismo sujeto causante, es muy probable que algunas bases reguladoras hayan sido incluidas varias veces en la determinación de la media a través de su aparición a través de distintos beneficiarios. En el caso de la indemnización a tanto alzado el efecto no es relevante puesto que la propuesta se basa en una base reguladora para cada individuo, independientemente de su origen.
4. En el capítulo IV se recurre al cálculo de ciertas pensiones medias, para lo cual se anualizan según naturaleza del hecho causante y se eliminan las observaciones del SOVI y aquellas de carácter provisional, complementario o similares. Se han eliminado las observaciones con prestación nula.

Programación de partida para el tratamiento de datos

```
LIBNAME BASE '/folders/myfolders/sasuser.v94/BASE14';
FILENAME PERSONAL '/folders/myfolders/sasuser.v94/BASE14/PERSONAL2014.TXT';
FILENAME PRESTAC '/folders/myfolders/sasuser.v94/BASE14/PRESTACION2014.TXT';
FILENAME CONVIVIR '/folders/myfolders/sasuser.v94/BASE14/CONVIVIR2014.TXT';
```

DATA BASE.CONVIVIR;

Carga de datos

```
INFILE CONVIVIR;
INPUT IDP $ 1-15 F1 17-22 S1 24 F2 26-31 S2 33
F3 35-40 S3 42 F4 44-49 S4 51
F5 53-58 S5 60 F6 62-67 S6 69
F7 71-76 S7 78 F8 80-85 S8 87
F9 89-94 S9 96 F10 98-103;
CONVIVEN=0;
IF F1 NOT IN (0,.) THEN DO;
    CONVIVEN=CONVIVEN+1;
    AF1=ROUND(F1/100); MF1=(F1/100-AF1)*100;
END;
IF F2 NOT IN (0,.) THEN DO;
    CONVIVEN=CONVIVEN+1;
    AF2=ROUND(F2/100); MF2=(F2/100-AF2)*100;
END;
IF F3 NOT IN (0,.) THEN DO;
    CONVIVEN=CONVIVEN+1;
    AF3=ROUND(F3/100); MF3=(F3/100-AF3)*100;
END;
IF F4 NOT IN (0,.) THEN DO;
    CONVIVEN=CONVIVEN+1;
    AF4=ROUND(F4/100); MF4=(F4/100-AF4)*100;
END;
IF F5 NOT IN (0,.) THEN DO;
    CONVIVEN=CONVIVEN+1;
    AF5=ROUND(F5/100); MF5=(F5/100-AF5)*100;
END;
IF F6 NOT IN (0,.) THEN DO;
    CONVIVEN=CONVIVEN+1;
    AF6=ROUND(F6/100); MF6=(F6/100-AF6)*100;
END;
```

```

IF F7 NOT IN (.,0) THEN DO;
    CONVIVEN=CONVIVEN+1;
    AF7=ROUND(F7/100); MF7=(F7/100-AF7)*100;
END;
IF F8 NOT IN (.,0) THEN DO;
    CONVIVEN=CONVIVEN+1;
    AF8=ROUND(F8/100); MF8=(F8/100-AF8)*100;
END;
IF F9 NOT IN (0,.) THEN DO;
    CONVIVEN=CONVIVEN+1;
    AF9=ROUND(F9/100); MF9=(F9/100-AF9)*100;
END;
IF F10 NOT IN (0,.) THEN DO;
    CONVIVEN=CONVIVEN+1;
    AF10=ROUND(F10/100); MF10=(F10/100-AF10)*100;
END;
RUN;

```

DATA BASE.PERSONAL;

```

INFILE PERSONAL;
INPUT IDP $ 1-15 ANNAC 17-22 SEXO 24 NACION $ 26-28 PROVNAC 30-31 PROVNAF 33-34
DOMIC $ 36-40 FECFALL 42-47;
RUN;

```

DATA BASE.PERSONAL2;

```

SET BASE.PERSONAL (DROP=NACION PROVNAC PROVNAF DOMIC);
IF ANNAC NOT IN (.,0) THEN DO;
    ANN=ROUND(ANNAC/100); LABEL ANN='AÑO NACIMIENTO';
    MESN=(ANNAC/100-ANN)*100; LABEL MESN='MES NACIMIENTO';
END;
ELSE DO;
    ANNAC=0; ANN=0; MESN=0;
END;
IF FECFALL NOT IN (.,0) THEN DO;
    ANFALL=ROUND(FECFALL/100);
    LABEL ANFALL='AÑO FALLECIMIENTO';
    MESFALL=(FECFALL/100-ANFALL)*100;
    LABEL MESFALL='MES NACIMIENTO';
END;
ELSE DO;
    FECFALL=0; ANFALL=0; MESFALL=0;
END;
AUX1=0; AUX2=0;

```

```

IF (ANFALL=0) OR (ANFALL=2015) THEN DO;
    AUX1=(2014)-ANN;
    AUX2=(12-MESN);
    EDAD2014=AUX1+(AUX2/12);
    EDADFALL=0;
    EDADREF=EDAD2014;
END;
ELSE DO;
    AUX1=ANFALL-ANN;
    IF MESFALL>MESN THEN AUX2=MESFALL-MESN;
        ELSE AUX2=-1*(MESN-MESFALL);
    EDADFALL=AUX1+(AUX2/12);
    EDAD2014=(2014)-(ANN)+((12-MESN)/12);
    EDADREF=EDADFALL;
END;
EDADCONTROL=EDAD2014-EDADFALL;
IF ANNAC=0 THEN DO;
    EDAD2014=0;EDADREF=0;EDADCONTROL=0;
END;
LABEL EDAD2014='EDAD TEÓRICA A 12-2014'; LABEL EDADREF='EDAD DE REFERENCIA';
LABEL EDADFALL='EDAD TEÓRICA DEL FALLECIMIENTO';
RUN;

```

DATA BASE.PRESTAC;

```

INFILE PRESTAC;
INPUT IDP $ 1-15 ANDATO $ 17-20 PSIK $ 22-42 CLASE $ 44-45
ACPAS $ 47 GRADOIP $ 49 FECMINUS $ 51-58 NORMAT $ 60 CLASEMIN $ 62
REGPRES $ 64-65 FECEFECEC $ 67-72 IMBR 74-80 PORBR 82-86 .2 ANBONISF $ 88-89
NCOTIZ $ 91-92 IMPPEF $ 94-100 IMPREV $ 102-108 IMMIN $ 110-116
IMPCOMPL $ 118-124 IMPTOTAL $ 126-132
SITUAC $ 134-136 FECSITUAC $ 138-143 PUEBLO $ 145-146 TITULARES $ 148-149
PRORRCON 151-155 .2 PRORRDIV 157-161 .2 COEFRED 163-168 .3
TIPOSITJUB $ 170-171 COEFPAR $ 173-177 .2 PVIT $ 179 PAJENA $ 181 IMPEXTRA $ 183-194
IMPIPC $ 196-207 IMPT $ 209-220 ANNACFALL $ 222-225 PENLIM $ 227
COEFRECLM 229-232 .2
COMPATIBLE $ 234 FECHAORDJUB $ 236-241
PERCOTIZADO $ 243-247 PERCOTIZACION $ 249-253 PORCANCOT 255-259 .2
;
RUN;

```


DATA BASE.MYS;

```
SET BASE.PRESTAC (DROP=GRADOIP FECMINUS ANBONISF
NCOTIZ PUEBLO TITULARES COEFRED TIPOSITJUB COEFPAR
COEFRECLM FECHAORDJUB PERCOTIZADO PERCOTIZACION
PORCANCOT);
IF CLASE="30" OR CLASE="31" OR CLASE="32" OR CLASE="40" OR CLASE="41" OR CLASE="42"
OR CLASE="51" OR CLASE="52" OR CLASE="53" OR CLASE="54";
IF CLASE IN ("30","31","32") THEN CLASE1=1;
                ELSE IF CLASE IN ("40","41","42") THEN CLASE1=2;
                ELSE IF CLASE IN ("51","52","53","54") THEN CLASE1=3;
                ELSE CLASE1=4;

REGPRES=REGPRES*1; SITUAC=SITUAC*1;
LABEL CLASE1='CLASE DE PENSIÓN';
RUN;
```

DATA BASE.BASEMYSIN (DROP=PRORRCON PRORRDIV PORBR IMBR);

```
SET BASE.MYS;
IF (REGPRES<30) OR (REGPRES=36) OR (REGPRES=37) OR (REGPRES=75);
PORBR100=(PORBR*1)/100; LABEL PORBR100='TC EN PORCENTAJE';
BR=1*IMBR/100; LABEL BR='BASE REGULADORA';
PRORRATA=(PRORRCON*1)/100; PRORRATADIV=(PRORRDIV*1)/100;
BRPORTC=(IMBR*1)*(PORBR100*1)/100; LABEL BRPORTC='BREGULADORA POR TC';
IF REGPRES IN(36,37) THEN REGIMEN=1; ELSE REGIMEN=2;
LABEL REGIMEN='REGIMEN PROFESIONAL O COMÚN';
ANEFCECEC=ROUND(FECEFECEC/100); LABEL ANEFCECEC='AÑO EFECTO';
MESEFECEC=(FECEFECEC/100-ANEFCECEC)*100; LABEL MESEFECEC='MES EFECTO';
RUN;
```

```
PROC SORT DATA=BASE.PERSONAL2; BY IDP; RUN;
```

```
PROC SORT DATA=BASE.BASEMYSIN; BY IDP; RUN;
```

DATA BASE.BASEMYS (DROP=AUX2E AUX1E AUXB AUXB2);

```
MERGE BASE.BASEMYSIN(in=a) BASE.PERSONAL2 (DROP=AUX1 AUX2);
BY IDP;
IF A;
AUX1E=0; AUX2E=0; ANEFCECEC=ANEFCECEC*1;
    IF ANEFCECEC NOT IN (0,.) THEN DO;
        AUX1E=ANEFCECEC-ANN;
        IF MESEFECEC>MESN THEN AUX2E=MESEFECEC-MESN;
        ELSE AUX2E=-1*(MESN-MESEFECEC);
        EDADFEC=AUX1E+(AUX2E/12);
    END;
ELSE EDADFEC=-1;
```

```

LABEL EDADFEC='EDAD BENEFICIARIO A FECHA EFECTO';
IF SITUAC<100 THEN SITUACION=1; ELSE IF SITUAC<200 THEN SITUACION=2; ELSE
SITUACION=3;
IF SITUACION>1 THEN DO
    ANBAJA=ROUND(FECSITUAC/100); LABEL ANBAJA='AÑO BAJA';
    MESBAJA=(FECSITUAC/100-ANBAJA)*100; LABEL MESBAJA='MES BAJA';
    AUXB=ANBAJA-ANN;
    IF MESBAJA>MESN THEN AUXB2=MESBAJA-MESN;
        ELSE AUXB2=-(MESN-MESBAJA);
    EDADBAJA=AUXB+(AUXB2/12);
END;
ELSE DO;
    ANBAJA=0; MESBAJA=0; EDADBAJA=0; AUXB2=0; AUXB=0;
END;
IF ANNAC=0 THEN EDADBAJA=-1;
LABEL EDADBAJA='EDAD A LA FECHA DE BAJA, SI EXISTE';
RUN;

```

DATA BASE.MYSSINSOVI BASE.MYSSOVI;

```

SET BASE.BASEMYS;
NORMAT=NORMAT*1; IF NORMAT=0 THEN OUTPUT BASE.MYSSINSOVI;
    ELSE OUTPUT BASE.MYSSOVI;
RUN;

```

DATA BASE.FAMILIAR BASE.VIUDEDAD BASE.ORFANDAD BASE.MYSPROVISIONAL;

```

SET BASE.MYSSINSOVI;
IF (CLASE="31") THEN OUTPUT BASE.VIUDEDAD;
    ELSE IF (CLASE="41" OR CLASE="42") THEN OUTPUT BASE.ORFANDAD;
    ELSE IF (CLASE="51" OR CLASE="52" OR CLASE="53" OR CLASE="54")
        THEN OUTPUT BASE.FAMILIAR;
    ELSE OUTPUT BASE.MYSPROVISIONAL;
RUN;

```

```

PROC SORT DATA=BASE.FAMILIAR; BY IDP; RUN;
PROC SORT DATA=BASE.VIUDEDAD; BY IDP; RUN;
PROC SORT DATA=BASE.ORFANDAD; BY IDP; RUN;

```

```

DATA BASE.VIUD;
SET BASE.VIUDEDAD;
BY IDP; IF LAST.IDP; IF CLASE1=1;
RUN;

```

```
DATA BASE.ORF;  
SET BASE.ORFANDAD;  
BY IDP; IF LAST.IDP; IF CLASE1=2;  
RUN;
```

```
DATA BASE.FAM;  
SET BASE.FAMILIAR; BY IDP; IF LAST.IDP; IF CLASE1=3;  
RUN;
```

```
DATA BASE.BENEFICIARIOS;  
SET BASE.VIUD BASE.ORF BASE.FAM;  
RUN;
```

```
PROC SORT DATA=BASE.BENEFICIARIOS;BY ANEFECEC ANBAJA;RUN;  
PROC SORT DATA=BASE.FAMILIAR;BY PSIK ANDATO;RUN;  
PROC SORT DATA=BASE.VIUDEDAD;BY PSIK ANDATO;RUN;  
PROC SORT DATA=BASE.ORFANDAD;BY PSIK ANDATO;RUN;
```

```
DATA CPFAM;  
SET BASE.FAMILIAR;  
BY PSIK ANDATO; IF LAST.PSIK;  
RUN;
```

```
DATA CPVIUD;  
SET BASE.VIUDEDAD;  
BY PSIK; IF LAST.PSIK;  
RUN;
```

```
DATA CPORFAN;  
SET BASE.ORFANDAD;  
BY PSIK; IF LAST.PSIK;  
RUN;
```

```
DATA CPFAM2;  
SET BASE.FAMILIAR;  
BY PSIK; IF FIRST.PSIK;  
RUN;
```

```
DATA CPVIUD2;  
SET BASE.VIUDEDAD;  
BY PSIK; IF FIRST.PSIK;  
RUN;
```

```
DATA CPORFAN2;  
SET BASE.ORFANDAD;  
BY PSIK; IF FIRST.PSIK;  
RUN;
```

```
DATA BASE.PENSIONESIV;  
SET CPVIUD2 CPORFAN2 CPFAM2;  
RUN;
```

```
DATA BASE.PENSIONESUV;  
SET CPVIUD CPORFAN CPFAM;  
RUN;
```

ORIGEN DE LA PRESTACIÓN

Tratamiento de
datos

```
PROC SORT DATA=CPVIUD2; BY ACPAS; RUN;  
PROC SORT DATA=CPORFAN2; BY ACPAS; RUN;  
PROC SORT DATA=CPFAM2; BY ACPAS; RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=CPVIUD2 N;  
BY ACPAS; VAR CLASE1; OUTPUT OUT=APV1;  
RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=CPORFAN2 N;  
BY ACPAS; VAR CLASE1; OUTPUT OUT=APO1;  
RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=CPFAM2 N;  
BY ACPAS; VAR CLASE1; OUTPUT OUT=APF1;  
RUN;
```

DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN

```
PROC SORT DATA=BASE.PENSIONESIV; BY CLASE1 PVIT; RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=BASE.PENSIONESIV N;  
BY CLASE1 PVIT; VAR BR; OUTPUT OUT=TV1;  
RUN;
```

```
DATA ATIPICOS;  
SET BASE.PENSIONESIV; IF CLASE1=2 AND PVIT=0;  
RUN;
```

BASES REGULADORAS

```
DATA BASE.ALTAS2014;  
SET BASE.MYSSINSOVI;  
IF ANEFECEC=2014; IF ANDATO=2014; LABEL CLASE1='TIPO DE PRESTACIÓN';  
RUN;
```

```
DATA ALTAS20142;  
SET BASE.ALTAS2014;  
IF BR>0;  
RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=ALTAS20142 N MEAN;  
VAR BR;  
OUTPUT OUT=ADTV1;  
RUN;
```

```
PROC SORT DATA=ALTAS20142;BY CLASE1;RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=ALTAS20142 N MEAN STD SUM;  
BY CLASE1; VAR BR; OUTPUT OUT=ADTV1;  
RUN;
```

```
DATA ALTAS2014CC ALTAS2014ATEP;  
SET ALTAS20142;  
IF REGPRES IN (36,37) THEN OUTPUT ALTAS2014ATEP;  
ELSE OUTPUT ALTAS2014CC;  
  
IF BR>0;  
RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=ALTAS2014CC N MEAN STD SUM;  
VAR BR; OUTPUT OUT=ADTVCC;  
RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=ALTAS2014CC N MEAN STD SUM;  
BY CLASE1; VAR BR; OUTPUT OUT=ADTVCC2;  
RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=ALTAS2014ATEP N MEAN STD SUM;  
BY CLASE1; VAR BR; OUTPUT OUT=ADTVCC3;  
RUN;
```

EDAD DE ENTRADA

```
DATA    EDADV(KEEP=EDADFEC)    EDADO(KEEP=EDADFEC)    EDADF    (KEEP=EDADFEC)
ATIPICOS(KEEP=EDADFEC);
SET BASE.ALTAS2014;
IF ANNAC NOT IN (0,.) ; IF (EDADFEC >=0) AND (EDADFEC<200);
IF CLASE1=1 THEN OUTPUT EDADV;
        ELSE IF CLASE1=2 THEN OUTPUT EDADO;
        ELSE IF CLASE1=3 THEN OUTPUT EDADF;
        ELSE OUTPUT ATIPICOS;
RUN;
```

TIPOS APLICABLES A LA BASE REGULADORA

```
PROC SORT DATA=CPVIUD; BY PORBR100; RUN;
PROC SORT DATA=CPORFAN2; BY PORBR100; RUN;
PROC SORT DATA=CPFAM2; BY PORBR100; RUN;
```

```
DATA AUX2;
SET CPVIUD;
IF PORBR100 NOT IN (.,0);
RUN;
```

```
DATA AUX3;
SET CPORFAN;
IF PORBR100 NOT IN (.,0);
RUN;
```

```
DATA AUX4;
SET CPFAM;
IF PORBR100 NOT IN (.,0);
RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=aux2 N MEAN STD MEDIAN MODE;
BY PORBR100; VAR BR; OUTPUT OUT=TIPOV (KEEP= PORBR100 _FREQ_);
RUN;
```

```
DATA TIPOV;
SET TIPOV;
BY PORBR100; IF FIRST.PORBR100;
RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=AUX3 N MEAN STD MEDIAN MODE;
BY PORBR100; VAR BR; OUTPUT OUT=TIPOO (KEEP= PORBR100 _FREQ_);
RUN;
PROC SORT DATA=TIPOO;BY PORBR100;RUN;
```

```
DATA TIPOO;
SET TIPOO;
BY PORBR100; IF FIRST.PORBR100;
RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=AUX4 N MEAN STD MEDIAN MODE;
BY PORBR100; VAR BR; OUTPUT OUT=TIPOF (KEEP= PORBR100 _FREQ_);
RUN;
PROC SORT DATA=TIPOF;BY PORBR100;RUN;
```

```
DATA TIPOF;
SET TIPOF; BY PORBR100; IF FIRST.PORBR100;
RUN;
```

CON DATOS DE ALTAS 2014

```
PROC SORT DATA=BASE.ALTAS2014; BY CLASE1 PORBR100; RUN;
```

```
DATA ALTAS20143;
SET BASE.ALTAS2014;
IF PORBR100 NOT IN(.,0);
RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=ALTAS20143 N;
BY CLASE1 PORBR100; VAR BR; OUTPUT OUT=TIPO2014 (KEEP= CLASE1 PORBR100 _FREQ_);
RUN;
```

DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN

```
PROC SORT DATA=BASE.MYSSINSOVI; BY PSIK; RUN;
```

```
DATA EDADV EDADO EDADF RESTO;
SET BASE.MYSSINSOVI (KEEP=IDP PSIK EDADBAJA EDADFEC CLASE ANEFEC EC FECFALL ANNAC);
BY PSIK; IF LAST.PSIK; IF ANNAC>0; IF EDADBAJA=0 OR EDADBAJA>0;
IF EDADFEC NOT IN (.,0);
IF EDADBAJA>0 THEN VALORENEDAD=EDADBAJA-EDADFEC; ELSE VALORENEDAD=-1;
IF VALORENEDAD<0 THEN OUTPUT RESTO; IF VALORENEDAD>-1;
```

```

IF (CLASE="31") THEN OUTPUT EDADV;
      ELSE IF (CLASE="41" OR CLASE="42") THEN OUTPUT EDADO;
      ELSE IF (CLASE="51" OR CLASE="52" OR CLASE="53" OR CLASE="54")
            THEN OUTPUT EDADF;

```

```

RUN;

```

```

PROC MEANS DATA=EDADV N MEAN STD MEDIAN;
VAR VALORENEDAD; OUTPUT OUT=EDADV1;
RUN;

```

```

PROC MEANS DATA=EDADO N MEAN STD MEDIAN;
VAR VALORENEDAD; OUTPUT OUT=EDADVO;
RUN;

```

```

PROC MEANS DATA=EDADF N MEAN STD MEDIAN;
VAR VALORENEDAD; OUTPUT OUT=EDADVF;
RUN;

```

ESTRUCTURA UNIDAD FAMILIAR O DE APOYO

```

PROC SORT DATA=BASE.CONVIVIR; BY IDP; RUN;
PROC SORT DATA=BASE.BENEFICIARIOS; BY IDP; RUN;

```

```

DATA UNO (DROP=S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 AUXF AUXF3);
MERGE BASE.BENEFICIARIOS (IN=A KEEP=IDP EDAD2014 EDADBAJA ANN MESN CLASE1 ANBAJA
MESBAJA EDADCONTROL EDADREF) BASE.CONVIVIR;
BY IDP; IF A; IF ANN IN (.,0) THEN DELETE; IF CONVIVEN=. THEN CONVIVEN=0;
IF AF1 NOT IN (.,0) THEN DO
      AUXF=(2014)-AF1; AUXF3=(12-MF1); EDADF1=AUXF+(AUXF3/12);
      END;
      ELSE EDADF1=-1;
IF AF2 NOT IN (.,0) THEN DO
      AUXF=(2014)-AF2; AUXF3=(12-MF2); EDADF2=AUXF+(AUXF3/12);
      END;
      ELSE EDADF2=-1;
IF AF3 NOT IN (.,0) THEN DO
      AUXF=(2014)-AF3; AUXF3=(12-MF3); EDADF3=AUXF+(AUXF3/12);
      END;
      ELSE EDADF3=-1;
IF AF4 NOT IN (.,0) THEN DO
      AUXF=(2014)-AF4; AUXF3=(12-MF4); EDADF4=AUXF+(AUXF3/12);
      END;
      ELSE EDADF4=-1;

```



```

IF AF5 NOT IN (.,0) THEN DO
    AUXF=(2014)-AF5; AUXF3=(12-MF5); EDADF5=AUXF+(AUXF3/12);
    END;
    ELSE EDADF5=-1;
IF AF6 NOT IN (.,0) THEN DO
    AUXF=(2014)-AF6; AUXF3=(12-MF6); EDADF6=AUXF+(AUXF3/12);
    END;
    ELSE EDADF6=-1;
IF AF7 NOT IN (.,0) THEN DO
    AUXF=(2014)-AF7; AUXF3=(12-MF7); EDADF7=AUXF+(AUXF3/12);
    END;
    ELSE EDADF7=-1;
IF AF8 NOT IN (.,0) THEN DO
    AUXF=(2014)-AF8; AUXF3=(12-MF8); EDADF8=AUXF+(AUXF3/12);
    END;
    ELSE EDADF8=-1;
IF AF9 NOT IN (.,0) THEN DO
    AUXF=(2014)-AF9; AUXF3=(12-MF9); EDADF9=AUXF+(AUXF3/12);
    END;
    ELSE EDADF9=-1;
IF AF10 NOT IN (.,0) THEN DO
    AUXF=(2014)-AF10; AUXF3=(12-MF10); EDADF10=AUXF+(AUXF3/12);
    END;
    ELSE EDADF10=-1;
RUN;

DATA B;
SET UNO;
BY IDP; IF FIRST.IDP; IF EDADBAJA>0 THEN MODIF=(EDAD2014-EDADBAJA);ELSE MODIF=0;
RUN;

DATA BV (KEEP=IDP CLASE1 CONVIVEN2 NMAYORES NMENORES EDADREF)
    BO (KEEP=IDP CLASE1 CONVIVEN2 NMAYORES NMENORES EDADREF)
    BF (KEEP=IDP CLASE1 CONVIVEN2 NMAYORES NMENORES EDADREF);
SET B;
IF ANN IN (0,.) THEN DELETE; IF CONVIVEN NOT EQ 0 THEN CONVIVEN2=CONVIVEN-1; ELSE
CONVIVEN2=0; NMAYORES=0; NMENORES=0;
IF EDADF2 NOT EQ (-1) THEN DO;
    EDADF2=EDADREF-MODIF;
    IF EDADF2>EDADREF THEN NMAYORES=NMAYORES+1;
    ELSE NMENORES=NMENORES+1;
    END;
IF EDADF3 NOT EQ (-1) THEN DO;

```

```

        EDADF3=EDADF3-MODIF;
        IF EDADF3>EDADREF THEN NMAYORES=NMAYORES+1;
                                ELSE NMENORES=NMENORES+1;
    END;
IF EDADF4 NOT EQ (-1) THEN DO;
        EDADF4=EDADF4-MODIF;
        IF EDADF4>EDADREF THEN NMAYORES=NMAYORES+1;
                                ELSE NMENORES=NMENORES+1;
    END;
IF EDADF5 NOT EQ (-1) THEN DO;
        EDADF5=EDADF5-MODIF;
        IF EDADF5>EDADREF THEN NMAYORES=NMAYORES+1;
                                ELSE NMENORES=NMENORES+1;
    END;
IF EDADF6 NOT EQ (-1) THEN DO;
        EDADF6=EDADF6-MODIF;
        IF EDADF6>EDADREF THEN NMAYORES=NMAYORES+1;
                                ELSE NMENORES=NMENORES+1;
    END;
IF EDADF7 NOT EQ (-1) THEN DO;
        EDADF7=EDADF7-MODIF;
        IF EDADF7>EDADREF THEN NMAYORES=NMAYORES+1;
                                ELSE NMENORES=NMENORES+1;
    END;
IF EDADF8 NOT EQ (-1) THEN DO;
        EDADF8=EDADF8-MODIF;
        IF EDADF8>EDADREF THEN NMAYORES=NMAYORES+1;
                                ELSE NMENORES=NMENORES+1;
    END;
IF EDADF9 NOT EQ (-1) THEN DO;
        EDADF9=EDADF9-MODIF;
        IF EDADF9>EDADREF THEN NMAYORES=NMAYORES+1;
                                ELSE NMENORES=NMENORES+1;
    END;
IF EDADF10 NOT EQ (-1) THEN DO;
        EDADF10=EDADF10-MODIF;
        IF EDADF10>EDADREF THEN NMAYORES=NMAYORES+1;
                                ELSE NMENORES=NMENORES+1;
    END;
IF CLASE1=1 THEN OUTPUT BV;
    ELSE IF CLASE1=2 THEN OUTPUT BO;
        ELSE IF CLASE1=3 THEN OUTPUT BF;
RUN;

```

```
PROC SORT DATA=BV; BY CONVIVEN2 NMAYORES NMENORES; RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=BV N;  
BY CONVIVEN2 NMAYORES NMENORES; VAR CLASE1; OUTPUT OUT=CONVIVEN1;  
RUN;
```

```
DATA CONVIUD(KEEP=CONVIVEN2 NMAYORES NMENORES CLASE1);  
SET CONVIVEN1; IF _STAT_="N";  
RUN;  
PROC SORT DATA=BO; BY CONVIVEN2 NMAYORES NMENORES; RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=BO N;  
BY CONVIVEN2 NMAYORES NMENORES; VAR CLASE1; OUTPUT OUT=CONVIVEN2;  
RUN;
```

```
DATA CONORF(KEEP=CONVIVEN2 NMAYORES NMENORES CLASE1);  
SET CONVIVEN2; IF _STAT_="N";  
RUN;
```

```
PROC SORT DATA=BF; BY CONVIVEN2 NMAYORES NMENORES; RUN;  
PROC MEANS DATA=BF N;  
BY CONVIVEN2 NMAYORES NMENORES; VAR CLASE1; OUTPUT OUT=CONVIVEN3;  
RUN;
```

```
DATA CONFAV (KEEP=CONVIVEN2 NMAYORES NMENORES CLASE1);  
SET CONVIVEN3; IF _STAT_="N";  
RUN;
```

LÍMITE DE EDAD

```
DATA LIMITEV (DROP=ANEFCECEC);  
SET BASE.VIUDEDAD (KEEP=IDP ANDATO IMPPEF IMPREV IMMIN IMPCOMPL IMPTOTAL PORBR100  
BR EDAD2014 ANEFCECEC); IF ANEFCECEC=2014; IF ANDATO=2014; IF BR>0;  
TBR=PORBR100*BR;  
IF EDAD2014<35 THEN L1=1;  
    ELSE IF EDAD2014<45 THEN L1=2;  
        ELSE IF EDAD2014<55 THEN L1=3;  
            ELSE IF EDAD2014<65 THEN L1=4;  
                ELSE L1=5;  
PM=IMPPEF/100;  
RUN;  
  
PROC SORT DATA=LIMITEV; BY L1; RUN;
```

```
PROC MEANS DATA=LIMITEV SUM;
BY L1; VAR PM; OUTPUT OUT=AUXLV;
RUN;
```

```
DATA LIMITEO (DROP=ANEFEC);
SET BASE.ORFANDAD (KEEP=IDP ANDATO IMPPEF IMPREV IMMIN IMPCOMPL IMPTOTAL
PORBR100 BR EDAD2014 ANEFEC EDADFEC);
IF ANEFEC=2014; IF ANDATO=2014; IF BR>0;
IF (EDADFEC>26) OR EDADFEC=26;
TBR=PORBR100*BR/100;
IF EDAD2014<35 THEN L1=1;
      ELSE IF EDAD2014<45 THEN L1=2;
            ELSE IF EDAD2014<55 THEN L1=3;
                  ELSE IF EDAD2014<65 THEN L1=4;
                        ELSE L1=5;
PM=IMPPEF/100;
RUN;
```

```
PROC SORT DATA=LIMITEO; BY L1; RUN;
PROC MEANS DATA=LIMITEO SUM;
BY L1; VAR PM; OUTPUT OUT=AUXLO;
RUN;
```

```
DATA LIMITEF (DROP=ANEFEC);
SET BASE.FAMILIAR (KEEP=IDP IMPPEF IMPREV IMMIN IMPCOMPL IMPTOTAL PORBR100 ANDATO
BR EDAD2014 ANEFEC);
IF ANEFEC=2014; IF ANDATO=2014; IF BR>0;
IF (EDAD2014>26) OR EDAD2014=26;
TBR=PORBR100*BR/100;
IF EDAD2014<35 THEN L1=1;
      ELSE IF EDAD2014<45 THEN L1=2;
            ELSE IF EDAD2014<55 THEN L1=3;
                  ELSE IF EDAD2014<65 THEN L1=4;
                        ELSE L1=5;
PM=IMPPEF/100;
RUN;
```

```
PROC SORT DATA=LIMITEF; BY L1; RUN;
PROC MEANS DATA=LIMITEF SUM;
BY L1; VAR PM; OUTPUT OUT=AUXLF;
RUN;
```

```
PROC SORT DATA=BASE.ALTAS2014; BY PSIK; RUN;
```

```

DATA ELE;
SET BASE.ALTAS2014;
BY PSIK; IF LAST.PSIK;
RUN;

PROC SORT DATA=ELE; BY IDP;RUN;
DATA ELEV ELEO ELEF;
SET ELE (KEEP=IDP CLASE1 REGIMEN EDADFEC PORBR100 BR
PRORRATA PRORRATADIV IMPPEF IMPREV IMMIN IMPCOMPL IMPTOTAL);
IF CLASE1=1 THEN OUTPUT ELEV;
      ELSE IF CLASE1=2 THEN OUTPUT ELEO;
      ELSE IF CLASE1=3 THEN OUTPUT ELEF;
RUN;

```

[*] Para la equivalencia y relación de las variables empleadas, utilícese la *Guía del Contenido* y estructura elaborada por la Seguridad Social para los datos del año 2014.

[http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Muestra Continua de Vidas Laborales/index.htm](http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Muestra_Continua_de_Vidas_Laborales/index.htm)

Anexo III. Tipos de cambio

Moneda	Tipo de cambio	Fuente
Lev Búlgaro	1,9558	Banco Central Europeo. 20/04/2015
Corona checa	27,479	""
Corona danesa	7,4516	""
Libra esterlina	0,7255	""
Forinto húngaro	303,86	""
Zloty polaco	4,1272	""
Leu rumano	4,4327	""
Corona sueca	9,3006	""
Franco suizo	1,0552	""
Corona noruega	8,7125	""
Kuna croata	7,6405	""
Real brasileño	3,5220	""
Peso Mexicano	16,2650	""
Peso argentino	9,8045	Banco de España y FMI. Febrero de 2015
Boliviano de Bolivia	7,843	""
Peso colombiano	2.752,6	""
Peso chileno	708,25	""
Peso dominicano	54,620	""
Quetzal guatemalteco	8,673	""
Córdoba nicaragüense	32,734	""
Guaraní paraguayo	5,524	""
Nuevo Sol peruano	3,4928	""
Peso uruguayo	27,891	""
Nuevo Bolívar venezolano	7,1323	""
Peso cubano	1,0880	Banco Central de Cuba. 01/04/2015
Colon salvadoreño [**]	8,75	Banco Central de Reserva de El Salvador
Balboa panameño [***]	1,00	Banco Central de Reserva de El Salvador

[*] República Dominicana y Nicaragua, diciembre de 2014. Perú y Paraguay, enero de 2015.

[**] La Ley de Integración Monetaria de El Salvador permitió el uso del dólar estadounidense como moneda legal en el país. El Colon tiene un tipo fijo respecto al dólar estadounidense de 8,75 colones por dólar, moneda desde la que aquí se realiza el cambio.

[***] En Panamá no hay Banco Central. El cambio se realiza desde el dólar estadounidense con los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador 01-04-2015.

De cara a la interpretación de las cuantías de las prestaciones debe evaluarse el efecto de la inflación.

Anexo IV. Capitales coste para varios beneficiarios

En el cálculo de los capitales coste o capitales de cobertura para varios beneficiarios, siempre con los límites establecidos sobre la base reguladora según cada clase de pensión y tenidas en cuenta las normas de cálculo de la pensión, las equivalencias actuariales generales tomarían w como la edad límite de percepción marcada por ley, y como la edad del supérstite, z la edad del huérfano y h la edad de otros familiares con derecho a pensión, para un tipo de interés técnico i y unas tablas de mortalidad dadas que se adaptan a las características del beneficiario.

P^y	Pensión de viudedad. Como norma general, el 52% de la base reguladora. Al ser la base reguladora igual para todos los términos en el lado derecho de cada igualdad, puede ser sacada como factor común y trabajarse con los factores F_1 correspondientes
P^t	Pensión de otro beneficiario. Como norma general, el 20% de la base reguladora
P^r	Pensión en caso de ser reversible la pensión de viudedad en otros beneficiarios. Por ejemplo, el 72% de la base reguladora en caso de reversión de la viudedad hacia un único huérfano en el supuesto general, tal que: $P^r = P^y + P^t$
P^k	Bajo determinadas hipótesis de distribución, pensión residual a partir del tercer beneficiario (inferior al 20% de la base reguladora de aceptarse la no igualdad de cuantías bajo la aplicación de un criterio administrativo)
w	Edad límite de percepción de las prestaciones temporales
q	Coeficiente de la progresión geométrica

Dos beneficiarios

1. Supérstite de edad (y). Descendiente con invalidez y edad (z)

$$C^c = \left(P^y \cdot {}^q a_y^{(m)} \right) - \left(P^y \cdot {}^q a_{y:z}^{(m)} \right) + \left(P^r \cdot {}^q a_z^{(m)} \right) \quad [111]$$

2. Supérstite de edad (y). Descendiente sin invalidez y edad (z)

$$C^c = \left(P^y \cdot {}^q a_y^{(m)} \right) - \left(P^y \cdot {}^q a_{y:z:\overline{w-z}}^{(m)} \right) + \left(P^r \cdot {}^q a_{z:\overline{w-z}}^{(m)} \right) \quad [112]$$

3. Supérstite de edad (y). Ascendiente de edad (h)

$$C^c = \left(P^y \cdot {}^q a_y^{(m)} \right) - \left(P^y \cdot {}^q a_{y:h}^{(m)} \right) + \left(P^r \cdot {}^q a_h^{(m)} \right) \quad [113]$$

4. Dos descendientes con invalidez de edades (z_1, z_2) , $z_1 \leq z_2$

$$C^c = \left(P^r \cdot {}^q a_{z_1}^{(m)} \right) + \left(P^r \cdot {}^q a_{z_2}^{(m)} \right) - \left(P^y \cdot {}^q a_{z_1:z_2}^{(m)} \right) \quad [114]$$

5. Dos descendientes sin invalidez de edades (z_1, z_2) , $z_1 \leq z_2 \leq w$

$$C^c = \left(P^r \cdot {}^q a_{z_1: \overline{w-z_1}}^{(m)} \right) + \left(P^r \cdot {}^q a_{z_2: \overline{w-z_2}}^{(m)} \right) - \left(P^y \cdot {}^q a_{z_1:z_2: \overline{w-z_2}}^{(m)} \right) \quad [115]$$

6. Dos ascendientes de edades (h_1, h_2) , $h_1 \leq h_2$

$$C^c = \left(P^r \cdot {}^q a_{h_1}^{(m)} \right) + \left(P^r \cdot {}^q a_{h_2}^{(m)} \right) - \left(P^y \cdot {}^q a_{h_1:h_2}^{(m)} \right) \quad [116]$$

7. Un descendiente no inválido de edad (z_1) y un descendiente inválido de edad (z_2)

$$C^c = \left(P^r \cdot {}^q a_{z_1: \overline{w-z_1}}^{(m)} \right) + \left(P^r \cdot {}^q a_{z_2}^{(m)} \right) - \left(P^y \cdot {}^q a_{z_1:z_2: \overline{w-z_1}}^{(m)} \right) \quad [117]$$

Más de dos beneficiarios

1. Supérstite de edad (y) . Dos descendiente inválidos de edades (z_1, z_2) , $z_1 \leq z_2$

$$C^c = \left(P^y \cdot {}^q a_y^{(m)} \right) + \left(P^y \cdot {}^q a_{z_1}^{(m)} \right) - \left(P^y \cdot {}^q a_{y:z_1}^{(m)} \right) + \left(P^k \cdot {}^q a_{z_1}^{(m)} \right) + \left(P^k \cdot {}^q a_{z_2}^{(m)} \right) \quad [118]$$

2. Supérstite de edad (y) . Dos descendiente sin invalidez de edades (z_1, z_2) , $z_1 \leq z_2 \leq w$

$$C^c = \left(P^y \cdot {}^q a_{y: \overline{w-z_1}}^{(m)} \right) + \left(P^y \cdot {}^q a_{z_1: \overline{w-z_1}}^{(m)} \right) + \left(P^t \cdot {}^q a_{z_1: \overline{w-z_1}}^{(m)} \right) + \left(P^t \cdot {}^q a_{z_2: \overline{w-z_2}}^{(m)} \right) \quad [119]$$

3. Tres descendiente sin invalidez $(z_1, z_2, z_3), z_1 \leq z_2 \leq z_3$

$$C^c = \left(P^r \cdot {}^q a_{z_1: \overline{w-z_1}}^{(m)} \right) + \left(P^r \cdot {}^q a_{z_2: \overline{w-z_2}}^{(m)} \right) + \left(P^k \cdot {}^q a_{z_3: \overline{w-z_3}}^{(m)} \right) - \left(P^y \cdot {}^q a_{z_1: z_2: \overline{w-z_2}}^{(m)} \right) \quad [120]$$

4. Supérstite y más de dos descendientes sin invalidez $(z_1, z_2, z_3), z_1 \leq z_2 \leq z_3 \leq w$

$$C^c = \left(P^y \cdot {}^q a_{\overline{w-z_1}}^{(m)} \right) + \left(P^y \cdot {}^{w-z_1}_y {}^q a_y^{(m)} \right) + \left(P^t \cdot {}^q a_{z_1: \overline{w-z_1}}^{(m)} \right) + \left(P^t \cdot {}^q a_{z_2: \overline{w-z_2}}^{(m)} \right) + \left(P^k \cdot {}^q a_{z_3: \overline{w-z_3}}^{(m)} \right) \quad [121]$$

Anexo V. Factor de sostenibilidad según la edad de entrada. Esperanza de vida

	e20	e40	e67	e80
2018	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
2019	0,996904	0,995961	0,992826	0,990473
2020	0,993817	0,991938	0,985703	0,981037
2021	0,990739	0,987932	0,978632	0,971691
2022	0,987672	0,983941	0,971611	0,962434
2023	0,984613	0,979967	0,964641	0,953265
2024	0,981764	0,976206	0,958136	0,944673
2025	0,978923	0,972459	0,951675	0,936159
2026	0,976091	0,968726	0,945258	0,927721
2027	0,973266	0,965008	0,938883	0,919359
2028	0,970450	0,961304	0,932552	0,911073
2029	0,967817	0,957802	0,926647	0,903310
2030	0,965192	0,954313	0,920778	0,895612
2031	0,962574	0,950836	0,914947	0,887980
2032	0,959963	0,947372	0,909153	0,880413
2033	0,957359	0,943921	0,903395	0,872911
2034	0,954919	0,940661	0,898026	0,865882
2035	0,952486	0,937413	0,892689	0,858910
2036	0,950058	0,934175	0,887384	0,851994
2037	0,947637	0,930949	0,882110	0,845134
2038	0,945222	0,927734	0,876867	0,838329
2039	0,942955	0,924700	0,871980	0,831953
2040	0,940694	0,921676	0,867119	0,825626
2041	0,938438	0,918662	0,862286	0,819347
2042	0,936187	0,915657	0,857480	0,813116
2043	0,933942	0,912663	0,852700	0,806932
2044	0,931832	0,909839	0,848245	0,801138
2045	0,929727	0,907024	0,843812	0,795386
2046	0,927627	0,904218	0,839403	0,789675
2047	0,925531	0,901420	0,835017	0,784005
2048	0,923441	0,898631	0,830654	0,778375
2049	0,921474	0,896004	0,826587	0,773100
2050	0,919512	0,893383	0,822540	0,767862
2051	0,917554	0,890771	0,818513	0,762658

Tablas de mortalidad: Instituto Nacional de Estadística. *Proyecciones demográficas 2012-2051*. Tipo de interés técnico: 2%.

Anexo VI. Factor de sostenibilidad según la edad de entrada. Rentas actuariales

	$a_{20}^{(*)}$	$a_{40}^{(*)}$	$a_{67}^{(*)}$	$a_{80}^{(*)}$
2018	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
2019	0,998213	0,997228	0,993483	0,991282
2020	0,996429	0,994463	0,987009	0,982641
2021	0,994649	0,991706	0,980577	0,974075
2022	0,992871	0,988956	0,974187	0,965583
2023	0,991097	0,986214	0,967838	0,957166
2024	0,989477	0,983639	0,961953	0,949301
2025	0,987860	0,981070	0,956103	0,941501
2026	0,986245	0,978508	0,950289	0,933765
2027	0,984634	0,975952	0,944510	0,926093
2028	0,983024	0,973404	0,938766	0,918484
2029	0,981547	0,971011	0,933443	0,911375
2030	0,980071	0,968624	0,928150	0,904322
2031	0,978598	0,966243	0,922887	0,897323
2032	0,977127	0,963868	0,917654	0,890378
2033	0,975658	0,961499	0,912450	0,883487
2034	0,974303	0,959276	0,907629	0,877050
2035	0,972950	0,957059	0,902833	0,870661
2036	0,971599	0,954847	0,898062	0,864317
2037	0,970249	0,952640	0,893317	0,858020
2038	0,968902	0,950437	0,888596	0,851769
2039	0,967654	0,948373	0,884223	0,845930
2040	0,966408	0,946313	0,879871	0,840131
2041	0,965164	0,944258	0,875541	0,834372
2042	0,963921	0,942207	0,871232	0,828653
2043	0,962680	0,940161	0,866945	0,822973
2044	0,961528	0,938244	0,862973	0,817667
2045	0,960378	0,936330	0,859019	0,812396
2046	0,959228	0,934421	0,855084	0,807159
2047	0,958081	0,932516	0,851166	0,801955
2048	0,956934	0,930614	0,847267	0,796786
2049	0,955868	0,928834	0,843655	0,791957
2050	0,954803	0,927057	0,840058	0,787158
2051	0,953739	0,925284	0,836477	0,782387

Tablas de mortalidad: Instituto Nacional de Estadística. *Proyecciones demográficas 2012-2051*. Tipo de interés técnico: 2%.

Sobre esta alternativa se pueden considerar opciones más sencillas utilizando rentas actuariales fraccionadas de período $m = 12$ o rentas actuariales fraccionadas de período $m = 14$, que dan valores superiores en cuanto al factor de sostenibilidad. Las variaciones promedio sobre el resultado aquí presentado son poco significativas y, así, en el primer caso, para las edades de 20, 40, 67 y 80 años son, respectivamente: (0,00213%; 0,00426%; 0,01782%; 0,04428%), mientras que para el segundo: (0,00256%; 0,00511%; 0,02138%; 0,05310%).